

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**Territorios indígenas fragmentados y Estado Nación Venezuela. El
(des)balance histórico de un conflicto**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Betty del Valle Cañas Ordóñez

Director

Vladimir Aguilar Castro

Madrid, 2017

© Betty del Valle Cañas Ordóñez, 2015



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID



FUNDACIÓN
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
JOSÉ ORTEGA Y GASSET

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
ORTEGA Y GASSET

Programa de Doctorado

DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES

***“Territorios Indígenas Fragmentados y Estado Nación Venezuela. El
(des)balance histórico de un conflicto”***

Doctoranda
Betty del Valle Cañas Ordóñez

Director de la Tesis
Dr. Vladimir Aguilar Castro
(Universidad de Los Andes – Mérida, Venezuela)

Madrid, 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset

“Territorios Indígenas Fragmentados y Estado Nación Venezuela. El (des)balance histórico de un conflicto”

Tesis presentada por la Abogada, DEA en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y *Magister Scientiae* en Ciencias Políticas, doña Betty del Valle Cañas Ordóñez, para la obtención del grado de Doctor en Derecho. Elaborada bajo la dirección del Doctor don Vladimir Aguilar Castro, profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Madrid, marzo de 2015

*A mis padres y a Luis Leopoldo, por hacerme beneficiaria
del más grande amor.*

*A Otilio Santos y Freddy Menares, porque admiro y
acompañó su lucha: adiwä.*

Agradecimientos

Quiero agradecer en primer lugar a mis padres, por siempre caminar conmigo, por apoyarme, por creer en mí de manera incondicional y por poner mi educación por encima de su comodidad.

A Luis Leopoldo, no sólo por ser mi fuente inagotable de amor, sino por ser un guía y maestro. Has sido una gran inspiración y un excelente ejemplo a seguir. Tu apoyo ha sido trascendental en la culminación de este *plan de vida* que inició en el 2007 en Madrid, pasó por la selva venezolana y hoy termina en San José de Costa Rica.

Debo referirme con especial distinción al profesor Vladimir Aguilar, quien primero me motivó con su ejemplo intachable a emprender el camino del Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, para después invitarme a andar por uno de los caminos más bonitos que se pueden transitar como abogado y como ser humano: el de la justicia y la dignidad. Gracias por la solidaridad, por tantas enseñanzas, por la amistad, pero sobre todo por la paciencia, comprensión y exigencia como tutor.

También debo agradecer a mi amiga Linda Bustillos, por la oportunidad de trabajar juntas en la Venezuela incluyente e intercultural que queremos ver algún día. De igual manera debo mencionar a Alma, Alfonso y David, quienes hicieron de mi estancia en Madrid una experiencia inolvidable. No puedo dejar de agradecer a Marbella, Danella, Luis Felipe, Eduardo y Daniel por ser motivo para vivir y motor para continuar; y a Miriam y Homero, por entender mis ausencias y por el amor que me han dado.

Con especial respeto agradezco a las comunidades indígenas Coromoto Cuao, Caño Grulla y Wayúuma'ana, por permitirnos escuchar sus exigencias para luego canalizarlas por vías como esta. Igualmente agradezco al Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, en particular al Programa Doctoral de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, por todo el apoyo recibido.

Acrónimos

AGNU	Asamblea General de Naciones Unidas
AN	Asamblea Nacional de Venezuela
ANC	Asamblea Nacional Constituyente
CDH	Comisión de Derechos Humanos
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CRBV	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
DDHH	Derechos Humanos
DI	Derecho Internacional
DPPI	Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas
ECOSOC	Consejo Económico y Social
EMN	Empresas Multinacionales
LOPCI	Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
MPPI	Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
OEA	Organización de Estados Americanos
OIPUS	Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONU	Organización de Naciones Unidas

Índice General

ABSTRACT	12
INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO I. TERRITORIOS INDÍGENAS FRAGMENTADOS Y ESTADO NACIÓN. CONCEPTOS Y ANTECEDENTES	33
1.1. Trabajos previos	34
1.2. Antecedentes históricos	53
1.2.1. El movimiento indígena internacional	53
1.2.2. Los avances en el derecho internacional	58
1.3. Dimensiones teóricas del tema	65
1.3.1. Teoría del Estado moderno	66
1.3.2. El Estado Nación Venezuela	70
1.3.3. Los pueblos indígenas en el Estado nación	73
1.3.4. Los pueblos indígenas, ¿ciudadanos del mundo?	80
1.3.5. Los pueblos indígenas y el Estado nación en América Latina: una reflexión sobre la negación	82
1.3.6. Pueblos Indígenas y Estado nación Venezuela	83
1.3.7. Teoría sobre los territorios indígenas	86
1.3.8. Tierras y territorios. Anverso y reverso de la cuestión	88
1.3.9. El territorio indígena como derecho colectivo	89
1.4. Alcances concretos del tema	93
1.4.1. El contexto venezolano: una nueva realidad social, política y jurídica	93
1.4.2. El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas en Venezuela	96
1.4.3. Marco jurídico indígena en relación al territorio de Venezuela	98
1.4.4. La demarcación como garantía de la propiedad colectiva del territorio indígena	99
1.4.5. Autodemarcación, el surgimiento de una política pública “bottom-up”	102
CAPÍTULO II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO <i>RES NULLIUS</i>.	104
2.1. Roma	104
2.2. Edad Media	107
2.3. De la Reconquista a la Conquista	112
2.3.1. Las Bulas Alejandrinas	112

2.3.2. El Tratado de Tordesillas	124
2.3.3. Aplicación de la doctrina: el indio como vasallo	126
2.3.4. Venezuela, tierra de gracia	134
2.4. Westfalia, un nuevo orden de proceder	140
2.5. Estado-nación Venezuela: una periodización	142
2.5.1. Índice constitucional	142
2.3. Conclusiones	150
CAPÍTULO III. <i>RES NULLIUS</i> Y LA COMPLEJIDAD DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS EN VENEZUELA.	153
3.2. Ocupación de territorios indígenas en Venezuela, a propósito de la <i>res nullius</i>	166
3.2.1. Conflictos por la ocupación	170
3.2.2. Efectos de la ocupación: explotación de los recursos	174
3.3. <i>Res nullius</i> y la violencia como política	193
3.3.1. El Estado y la violencia como política	197
3.3.2. Efectos de la violencia: el racismo	203
3.3.3. Efectos de la violencia: la vergüenza étnica	210
3.3.4. Efectos de la violencia: la agresión	211
3.4. Desplazamiento y fragmentación: identidades en conflicto	217
3.4.1. Derechos humanos e interculturalidad: conciencia social frente al conflicto	221
3.5. Conclusiones	226
CAPÍTULO IV. ENTRE LA SOBERANÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN: <i>RES NULLIUS</i> Y SUS REPERCUSIONES EN LAS FORMAS DE VIDA INDÍGENA EN VENEZUELA.	229
4.1. Soberanía vs. demarcación.	232
4.1.1. Sobre la soberanía: aspectos generales	232
4.1.2. Soberanía territorial como competencia del Estado	234
4.1.3. La soberanía estatal frente a la promoción de nuevos valores	236
4.1.4. La vigencia del derecho: soberanía y globalización	241
4.1.5. Del título a la soberanía territorial a los límites de la summa potestas	245
4.1.6. Sobre demarcación: aspectos generales	248
4.1.7. Derechos territoriales indígenas en Venezuela: demarcación y fragmentación	250
4.2. Libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Fragmentación del Estado?	255
4.2.1. La libre determinación y el buen gobierno	255
4.2.2. La libre determinación de los pueblos indígenas: un concepto del DI	259
4.2.3. La libre determinación de los pueblos indígenas en la DPPI	263

4.2.4. La libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho al autogobierno	265
4.2.5. La libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho al desarrollo propio	268
4.2.6. La libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la identidad cultural	271
4.2.7. La libre determinación de los pueblos indígenas y su derecho al territorio	276
4.2.8. La libre determinación de los pueblos indígenas y su derecho a ser consultados	277
4.2.9. La libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho al propio derecho	284
4.2.10. La libre determinación de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico venezolano	289
4.3. La subordinación como efecto de la transculturación en Venezuela	292
4.3.1. La subordinación y el desplazamiento	296
4.3.2. Subordinación indígena en la Venezuela del Siglo XXI	300
4.4. Conclusiones	315
CAPITULO V EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA EL PUEBLO UWÖTTUJA: VALORACIÓN DE UNA PROPUESTA	318
5.1. Testimonios previos	320
5.1.1. Exposición de motivos	324
5.1.2. Antecedentes históricos	325
5.1.3. Experiencias referenciales	326
5.1.4. Protagonistas de la propuesta	326
5.1.5. Usos y estrategias de acuerdo al derecho consuetudinario	330
5.2. Los beneficiarios del Régimen Especial de Protección	333
5.3. Fundamentación de la propuesta: el plan de vida del Pueblo Uwöttuja	335
5.4. Bases jurídicas para un Régimen Especial de Protección en Venezuela	336
5.4. Valoración de la propuesta	337
5.5. Conclusiones	340
CONCLUSIONES	343
APÉNDICE	351
1. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas	351
2. Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas	411

3. Propuesta de Régimen Especial de Administración	419
4. Características Antropológicas y Lingüísticas de los Pueblos Indígenas de Venezuela	430
BIBLIOGRAFÍA	460

Tablas y Figuras

Tabla 1. Evolución de la cuestión indígena en el seno de Naciones Unidas.	60
Tabla 2. Garantías de control en el seno de Naciones Unidas.	63
Tabla 3. Evolución de la cuestión indígena en el Sistema Interamericano.	63
Tabla 4. Derechos reconocidos y su relación con el territorio.	97
Tabla 5. Unificación de los criterios para la demarcación territorial.	101
Tabla 6. Índice de decretos, leyes y documentos relevantes a la cuestión indígena en Venezuela, desde 1810.	150
Tabla 7. Órganos del Estado y políticas indígenas.	162
Tabla 8. Planes sociales y políticas indígenas.	164
Tabla 9. Violencia en el Caura.	200
Tabla 10. Esquema didáctico de los DDHH.	224
Tabla 11. Algunos datos demográficos sobre la población indígena en Venezuela.	253
Tabla 12. Legislación y alcance del derecho indígena en Venezuela.	254
Tabla 13. Cuadro de las situaciones en las que se exige el consentimiento previo libre e informado.	282
Figura 1. Ubicación geográfica de los principales pueblos indígenas de Venezuela.	16
Figura 2. Localización geográfica de los territorios del pueblo Uwöttuja en la cuenca del Río Sipapo, Estado Amazonas, Venezuela.	25
Figura 3. Marco jurídico indígena relativo al territorio.	98
Figura 4. Divisiones territoriales de acuerdo al Tratado de Tordesillas.	125
Figura 5. Efectos de la ocupación.	188
Figura 6. Efectos de la violencia sobre territorios considerados <i>res nullius</i> .	218
Figura 7. El consentimiento libre, previo e informado.	279
Figura 8. <i>Res nullius</i> , soberanía y transculturización.	292
Figura 9. Distribución de los pueblos indígenas en el territorio venezolano, de acuerdo al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.	430
Figura 10. Distribución geográfica de los distintos grupos lingüísticos indígenas en el territorio venezolano.	431

Abstract

Fragmented Indigenous Territories and the Venezuelan Nation-state: The Historical (Im)balance of a Conflict

The question of indigenous peoples has gained strength in the international arena since the late 20th century, moving away from the relatively marginal position that it traditionally held. Coinciding with the 500th anniversary of Columbus' arrival in the Americas, a whole variety of indigenous social movements has risen to prominence, providing a wide platform for the political organization of the continent's original inhabitants. These events have led to the recognition of a series of national, region-wide and universal rights, the most important being those expressed in the International Labour Organization Convention No. 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Among the many rights afforded to indigenous peoples, the right to land, understood as the set of property and possession rights exercised by a people over the territories that they have traditionally occupied or used, is featured prominently. The importance of the right to land derives from the fact that it is a necessary condition for the materialization of other rights including, in addition to the collective rights that indigenous peoples are entitled to as protected groups, the rights afforded to the individual members of indigenous communities as citizens of a given nation.

To the indigenous peoples, the significance of land extends beyond its economic value, being associated with a wide variety of cultural, political and spiritual aspects central to their ways of life. Therefore, without properly established land rights, it is not possible for the indigenous peoples to fully exercise some of their rights including, but not limited to, the rights to self-determination, freedom of religious practice and cultural and linguistic identity and education.

In the particular case of Venezuela, on which this work is centered, the recognition of indigenous rights was remarkably timid throughout the 19th and 20th centuries, roughly corresponding to the period between national independence and the foundation of the Fifth Republic. The Constitution of 1999 recognizes a wide assortment of rights to the indigenous peoples by virtue of being the original inhabitants of the nation. Above all, Article 119 of the Constitution recognizes the existence of the indigenous peoples of Venezuela, their modes of social, political and economic organization, their culture and customs, their languages and religions and, naturally, their native right to the collective property of the lands that they have ancestrally and traditionally occupied. Simultaneously, Article 119 establishes that the executive branch of the Venezuelan government must work in tandem with each indigenous community to demarcate and institute the borders of their territories, as a prerequisite to fully guarantee their land rights.

Even though some of the indigenous rights recognized by the Constitution of 1999 and subsequently approved laws have been realized –most notably, the establishment of reserved seats for indigenous representatives in the National Assembly and the creation of a Ministry for Indigenous Peoples– the process by which the land rights of Venezuela’s many indigenous peoples were to be materialized has practically stagnated. This stagnation has been accompanied by an evident increase in dependence on state assistance, which threatens the cultural integrity and autonomy of indigenous communities.

This work seeks to establish a direct relationship between the historical application of the Roman law principle known as *res nullius* (lit: “no one’s property”) and the stagnation of the demarcation processes concerning indigenous territories in contemporary Venezuela. During the Colonial period, the aforementioned principle was one of the primary legal elements invoked to justify the possession and occupation of American territories in favor of the Spanish and Portuguese crowns, notwithstanding the fact that their native inhabitants were already occupying and using them. By way of a

detailed analysis of the applications of the *res nullius* principle throughout Venezuelan history, the arguments presented by opponents of indigenous land rights prior to and during the Constitutional Assembly of 1999, and the actions –or lack thereof– of the executive branch of the Venezuelan government, this work argues that, in spite of the legal instruments established both nationally and internationally, the Venezuelan Nation-state maintains, in practice, a “no one’s property” approach to the indigenous territories, freely arranging for their occupation and use for economic activities.

Taking into account the paramount importance of indigenous land rights, this work presents a detailed description of the effects that the absence of policies leading to the full realization of land rights has had on the indigenous ways of life and the extent to which the autonomy of indigenous communities and their rights to self-determination have been diminished, both before and after the Constitution of 1999 was adopted. This description makes special emphasis on the processes of territorial fragmentation, forced migration, acculturation, environmental damage and political violence.

The final contribution of this work is the analysis of an existing proposal for a special administration and environmental protection regime for the Uwöttuja People. The Uwöttuja (also spelled Wothuha and Wöt^hihä), commonly known as the Piaroa, are an indigenous people with a population of approximately 14,000 who reside in the Venezuelan State of Amazonas—more precisely, in the Middle Orinoco area near the banks of the Sipapo river. The proposal, presented by Universidad de Los Andes Task Force on Indigenous Issues (GTAI–*Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas*), of which the author is a member, aims to “unlock” the demarcation problem by directly involving the communities in the establishment of their own territorial borders, combined with the issuance of collective land titles to guarantee property rights, environmental protection and the right to free, prior and informed consent.

The aim of the analysis mentioned above is to offer an assessment of the feasibility of the proposal, together with an *a priori* evaluation of its effectiveness with respect to the integrity and correct demarcation of the lands belonging to the community

and its inhabitants' autonomy in defining the manner in which their lands are to be used. In addition to the legal and documentary analysis, the entirety of the proposal is examined in light of the statements and interviews obtained during several visits to the Coromoto Cuao and Caño Grulla communities in the State of Amazonas and the Wayúu'mana community in the State of Zulia, with the purpose of confirming that the proposal offers an appropriate approach to the needs of the inhabitants.



Figura 1. Ubicación geográfica de los principales pueblos indígenas de Venezuela.
Fuente: elaboración propia.

Introducción

“El asunto ahora es reabrir el compromiso de todos los que estamos aquí,
porque al fin estamos interesados en defender derechos colectivos,
independientemente de las condiciones sociales, religiosas y partidistas.
Venezuela necesita un esfuerzo común porque sólo así podrá dar respuesta
a la defensa del territorio”
– Guillermo Arana, hermano Uwöttuja

Desde finales del siglo pasado la cuestión indígena¹ ha sido parte importante del debate internacional, logrando espacios jurídicos y políticos a nivel universal, regional y nacional. Es cierto que diversos expertos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, han trabajado por los derechos humanos de los pueblos indígenas y han llevado a cabo un trabajo de acompañamiento importante ante instancias nacionales e internacionales buscando reconocimiento de derechos. Sin embargo, también es cierto que, desde hace algunos años, el movimiento social indígena ha emergido con objetivos políticos, sociales y culturales propios.

Sobre el movimiento social indígena es necesario resaltar que, por una parte, se caracteriza por ser diverso y heterogéneo, teniendo distintas formas de organización y liderazgo, asociadas a las diferentes tradiciones políticas y realidades nacionales y culturales de cada Estado; y, por la otra, comparte un origen común en el desbalance histórico del conflicto por la tierra², aprovechando los cambios positivos que acontecen

¹ Para efectos de esta tesis tomaremos la definición propuesta en el Convenio 169 de la Organización

² El Convenio 169 de la OIT en su artículo 14 establece: 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán

en la comunidad internacional y las ventajas surgidas de su capacidad organizativa y de expansión.

Hasta ahora, el gran logro de la lucha reivindicatoria ha sido el conjunto de derechos reconocidos a los pueblos indígenas, siendo el más importante para efectos de esta investigación, el reconocimiento al derecho de tierras, territorios y recursos, ya que a partir de este derecho se garantiza el patrimonio cultural, los usos y costumbres, las autoridades tradicionales, el idioma, el orgullo de la identidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la diferencia, la educación bilingüe intercultural y la integración; y sin él, se da paso a la ocupación de los territorios indígenas, a los desplazamientos, a la violencia política y a procesos en contra de los pueblos indígenas a favor del Estado y de terceros interesados.

En la actualidad, los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido según lo dispuesto en el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –en adelante DPPI– (2007). Por su parte, los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios según lo consagra el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT (1989).

Teniendo en cuenta que la cuestión indígena es un tema que se ubica entre lo internacional³ y lo nacional, éste estudio se dirigirá a la realidad interna de la cuestión indígena en Venezuela, país que desde el año 1998 ha sido objeto de profundos cambios políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales; como por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente –en adelante ANC- que elaboró la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –en adelante CRBV- en el año 1999. La nueva

instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

³ No se puede hacer un estudio sobre los derechos de los pueblos indígenas como algo aislado, siempre hay que contemplarlo desde los Derechos Humanos.

Constitución propone el fin supremo de refundar la República para establecer “una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley”⁴. La aprobación definitiva de los derechos de los pueblos indígenas se enmarcó en el capítulo VIII de la nueva Carta Magna, clasificando el tránsito de la cuestión indígena en Venezuela en tres periodos: previo al reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución –lucha reivindicatoria–, durante la inserción de los derechos indígenas en la Constitución –reconocimiento de derechos– y posterior a la aprobación del nuevo texto constitucional –espera de la materialización del derecho reconocido–.

Así pues, por primera vez en la historia republicana de Venezuela, la Constitución de 1999 reconoció los derechos que ancestralmente les corresponden a los pueblos indígenas, como habitantes originarios de Venezuela. La importancia fundamental de la consagración constitucional radica en que, no sólo se definen derechos indígenas de manera amplia, sino que se confirma a los pueblos indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos. Se trata del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidades culturales y sociales propias, diferenciadas del resto de la población venezolana.

Vale destacar que el artículo 119 de la CRBV⁵, reconoce de forma expresa el derecho originario a la propiedad colectiva de las tierras que los pueblos indígenas ocupan ancestral y tradicionalmente, es decir, que lo considera un derecho que tiene su origen en la relación *ab origine* de los pueblos indígenas con sus tierras desde mucho

⁴ Véase: Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

⁵ Art. 119: El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

antes de la formación del Estado⁶. Se entiende que no se reconoce el derecho de propiedad sobre las tierras como algo derivado, sino más bien como algo relativo a los antepasados de origen remoto y auténtico. Dicho de otra manera, se consagra, reconoce y respalda la situación jurídica de ocupación ancestral para desarrollar la vida de los pueblos indígenas, frente al modelo de ocupación violenta existente desde la época de la colonización hasta la configuración actual del Estado, modelo que ha derivado en la fragmentación sistemática de los territorios indígenas.

Ahora bien, a pesar de los derechos reconocidos y consagrados en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, en el caso venezolano, se observa poca correspondencia entre lo jurídico y lo político. Por tanto, la trascendencia de ésta investigación radica primero, en la falta de materialización de los derechos reconocidos que permitiría la erradicación definitiva de la desigualdad y la discriminación; segundo, en la identificación del principio romano *res nullius*⁷ como el elemento jurídico principal que ha permitido los procesos de ocupación, desplazamiento y violencia política en los territorios indígenas; y, tercero, en la alternativa de estudiar un régimen de administración especial que se propone como solución al estancamiento del proceso de demarcación⁸.

⁶ Los pueblos han antecedido a los Estados. Por tanto, la exigencia de respeto y ejercicio de los derechos humanos es un asunto de la sociedad y una obligación de los Estados.

⁷ Lit. “Cosa de nadie”. Según Bonfante (1965) la ocupación consiste en apoderarse del objeto, o sea, en la toma de posesión de una cosa que no pertenece a nadie, *res nullius*, con intención de hacerla propia. Este señorío de hecho o *possetio*, como entienden esta palabra los romanos; es reconocido por la ley como señorío jurídico, ya que precisamente por ser la cosa *nullius*, no se perjudica a nadie. La ocupación es el tipo de los modos de derecho natural. Distínganse varias especies de *res nullius*, y, según estas, varias especies de ocupación. Cfr. BONFANTE, PEDRO (1965): Instituciones de Derecho Romano, Ed. Instituto Editorial Reus, Madrid, págs. 256 y 257.

⁸ La demarcación es un proceso de fijación de límites sobre un territorio determinado. En el Simposio Internacional por la Demarcación de Territorios Indígenas y su relación con la adopción del Convenio 169 de la OIT. Experiencias Internacionales, Estrategias Nacionales y mecanismos para su puesta en práctica, Rivero (2013) explicó que en el caso de Venezuela, la demarcación de los pueblos indígenas significa la materialización del reconocimiento de pluriculturalidad y multiétnia que se hizo en la CRBV (1999), debido a que a través de la demarcación de los territorios indígenas se garantiza la continuidad cultural de los pueblos por el uso y manejo de los territorios.

Para concluir, es necesario señalar que algunos estudiosos⁹ consideran agotado el tema de la *res nullius* en los territorios indígenas. Sin embargo, la pertinencia del tema de tesis elegido radica en que, estudiando cuidadosamente la aplicación histórica del principio *res nullius*, se puede llegar al núcleo de las contradicciones y tensiones en cuanto a la fragmentación de los territorios de los pueblos indígenas en el Estado Nación Venezuela y así comprender la naturaleza del desbalance histórico producto del conflicto por la tierra.

Estado actual del tema

El 12 de octubre de 1992 se cumplieron 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Lo que parecía ser una celebración en toda Hispanoamérica, se convirtió en una oportunidad para que millones de personas a lo largo y ancho del continente hicieran oír sus reclamos. Estas personas se autodenominaban indígenas “y para sorpresa de muchos aún formaban parte de la realidad latinoamericana”¹⁰.

La cuestión indígena volvió a la agenda internacional gracias a la participación de expertos, organizaciones internacionales y organizaciones de base –como, por ejemplo, el movimiento social indígena– y, debido a su amplio contenido, constituye uno de los principales temas de discusión en el debate actual. Debate que había quedado inacabado a pesar de que la población indígena en la región es de aproximadamente cincuenta millones¹¹ distribuidos en 522 pueblos¹² que hacen vida en los distintos Estados-Nación.

Es importante resaltar que, a pesar del número que representan, los pueblos indígenas siguen viviendo en las condiciones de pobreza y discriminación heredadas de la

⁹ Consideración hecha por el Centro de Políticas Públicas Indígenas de Chile.

¹⁰ HARGUINDEGUY, JUAN (2010): Un largo camino hacia el reconocimiento de derechos indígenas. Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas, *Universitat Pompeu Fabra*. Barcelona, pág. 4.

¹¹ Datos tomados del *CIA World Factbook* para cada país Hispanoamericano.

¹² Cfr. http://www.unicef.org/lac/pueblos_indigenas.pdf

Colonia. Para entender esta situación y desarrollar la presente investigación, se llevará a cabo una revisión de la normativa jurídica que se utilizó, específicamente en Venezuela, para el tratamiento del “indio” en la etapa colonial y que se utiliza hoy en la republicana para las comunidades y pueblos indígenas.

El territorio que se conoce hoy como República Bolivariana de Venezuela es el resultado de un proceso de conformación territorial particularmente complejo, no solamente por la reconfiguración del Estado a partir de 1999, sino por las unidades territoriales hispanas del siglo XVI que permanecieron indefinidas por el retraso de la conquista en amplias áreas geográficas de la actual Venezuela¹³. Cuando se hace referencia al periodo prehispánico o al colonial, se abusa del término “Venezuela” al hablar de territorios que ni siquiera eran llamados así; esto se explica en el hecho de que la unidad territorial integrada finalmente tuvo ese nombre, y por tanto, se ha entendido que ese debe ser el término correcto en la descripción del proceso evolutivo del Estado-Nación. La república que existe hoy, es un caso en gran parte dispar de los procesos similares de las otras repúblicas iberoamericanas, puesto que ninguna de las unidades continentales fue tan afectada por la acción exterior de las colonias adversas a España, en ninguna se tradujeron los hechos políticos de Europa en forma tan manifiesta, y en ninguna otra parte se impuso la necesidad de delimitaciones territoriales en cuatro frentes diferentes gobernados por hechos interpretados con filosofías jurídicas desiguales.

En los diferentes procesos políticos y sociales de la Colonia para tomar posesión de los territorios se les consideró *res nullius* a pesar de ya estar habitados por los “indios” y, para justificar su conquista y evitar disputas con otras potencias europeas, los Reyes Católicos acudieron al Papa Alejandro VI para que a través de bulas papales se les concedieran derechos sobre dichos territorios. Adicionalmente, los actos jurídicos papales intentaban resolver cuestiones políticas que afectaban directamente la situación jurídica

¹³ DONIS, MANUEL (2001): El territorio de Venezuela. Documentos para su estudio. Ed. Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, pág. 17.

de los “indios”, quienes por su condición de infieles¹⁴ carecían de personalidad jurídica y podían ser sometidos a la autoridad y poder de la Corona¹⁵.

A partir del establecimiento del nuevo Estado-Nación, Venezuela como un todo que integra población, gobierno y territorio a inicios del siglo XIX, se empezaron a emitir medidas para asimilar a los indígenas a la nueva república como ciudadanos y propietarios privados, devolviéndoles parte de sus tierras en forma individual¹⁶. Ya en 1830 se comenzaron a emitir leyes relativas a los pueblos indígenas¹⁷, actividad

¹⁴ Adjetivo fuerte y descalificativo de la época. Idólatra. Según Martínez (2011), en la Colonia, apelando a la ley natural se escondía un eurocentrismo racista que postulaba al hombre europeo, blanco, católico, civilizado, como el hombre verdadero. Y aquellos otros, como los “indios”, que no entraban en este canon eran considerados bárbaros, infieles, irracionales y siervos naturales. Así establece una desigualdad radical entre hombres y sub-hombres que sirve como justificante de la guerra colonial.

¹⁵ GARCÍA-GALLO, ALFONSO (1987): Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho Indiano. Ed. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, pág. 496.

¹⁶ La Constitución de 1811 expresa lo siguiente: Art. 200 – Como la parte de ciudadanos que hasta hoy se han denominado Indios, no han conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la Monarquía Española dictó a su favor, porque los encargados del gobierno en estos países tenían olvidada su ejecución; y como las bases del sistema de gobierno que en esta Constitución ha adoptado Venezuela, no son otras que la de la justicia y la igualdad, encarga muy particularmente a los Gobiernos provinciales, que así como han de aplicar sus fatigas y cuidados para conseguir la ilustración de todos los habitantes del Estado, proporcionarles escuelas, academias y colegios en donde aprendan todos los que quieran los principios de Religión, de la sana moral, de la política, de las ciencias y artes útiles y necesarias para el sostenimiento y prosperidad de los pueblos, procuren por todos los medios posibles atraer a los referidos ciudadanos naturales a estas casa de ilustración y enseñanza, hacerles comprender la íntima unión que tiene con todos los demás ciudadanos, las consideraciones que como aquellos merecen del Gobierno y los derechos de que gozan por el solo hecho de ser hombres iguales a todos los de su especie, a fin de conseguir por este medio sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha mantenido el antiguo estado de cosas y que no permanezcan por más tiempo aislados y aun temerosos de tratar a los demás hombres; prohibiendo desde ahora que puedan aplicarse involuntariamente a prestar sus servicios a Tenientes o Curas de sus parroquias, ni a otra persona alguna y permitiéndoles el reparto en propiedad de las tierras que les estaban concedidas y de que están en posesión, para que a proporción entre los padres de familia de cada pueblo, las dividan y dispongan de ellas como verdaderos señores, según los términos y reglamentos que formen los Gobiernos provinciales.

¹⁷ En el año 1836, tomando en cuenta que la distribución de los resguardos no se ha llevado a cabo, se decreta lo siguiente:

Artículo 1: Las Diputaciones provinciales dictarán las resoluciones convenientes para que en el término más breve posible se distribuyan los resguardos de tierras entre los indígenas, teniendo presente en su ejecución las reglas contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 2: Antes de verificar el reparto se separarán de doce a veinte fanegadas de tierra en el área de la respectiva población, según sea ella, las cuales serán destinadas para aumentar la misma población. Dentro de este espacio deberá darse a los indígenas que no tengan casa, lugar capaz para edificarla.

Artículo 3: Las tierras sobrantes de cada comunidad se dividirán en partes igual valor: una acrecerá los fondos municipales a concurrir con su producto a sostener la escuela parroquial y los gastos de medida y repartimiento; y la otra se distribuirá entre los indígenas proporcionalmente (...)

legislativa que no fue muy diferente en el siglo XX. Con la última refundación de la República a través de la CRBV de 1999 y demás avances legislativos en la cuestión indígena, hoy se siguen evidenciando procesos de ocupación de los territorios indígenas, como si fueran susceptibles de apropiación, es decir, cosa de nadie. El Estado-Nación Venezuela sigue sin entender las necesidades que motivaron a las comunidades indígenas a la exigencia de su territorio, fundamentadas en las condiciones necesarias que deben existir para garantizar sus formas de vida. Es por ello que, el país sigue teniendo pendientes los siguientes retos: 1. Entender el derecho al territorio como necesario para el desarrollo y garantía de las formas de vida de los pueblos indígenas; 2. Determinar en condiciones de igualdad el derecho reconocido y diferenciado en el artículo 119 de la CRBV; 3. Lograr efectivos procesos de demarcación que fortalezcan y no fragmenten la seguridad territorial de los pueblos y comunidades indígenas, y, en consecuencia, de la propia nación; 4. Llevar a cabo la demarcación como un proceso que se realice “desde abajo”, es decir, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 5. Comenzar a reconocer los procesos de autodemarcación que ya han iniciado los propios pueblos y comunidades indígenas del país; 6. Propiciar mesas de diálogo en los territorios donde la estrategia de demarcación así lo demande; 7. Lograr una institucionalidad que impulse la materialización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que, como se ha dicho antes, dependen del derecho principal que es el territorio.

Profundizando en el concepto romano de *res nullius*, y la fragmentación de los territorios indígenas que el Estado-Nación Venezuela históricamente ha conseguido con su aplicación, se hace un estudio crítico de las consecuencias propias de estos procesos de ocupación y se plantea al final de este trabajo, un régimen de administración especial en respuesta al estancado proceso de demarcación y como una alternativa para que el país pueda cumplir con los retos que se enumeraban en el párrafo anterior, al menos, con los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo y Orinoco Medio del estado Amazonas. El Régimen de Administración Especial beneficiará principalmente al Pueblo Uwöttuja¹⁸, que en Venezuela se conoce más como Piaroa de la Cuenca del Sipapo.

¹⁸ El pueblo Uwöttuja o *Piaroa* es un pueblo binacional y en Colombia se le conoce como pueblo *dearuwa* y *wotuja*. Se encuentra ubicado en los estados Amazonas y Bolívar de Venezuela, en la ribera derecha del



Figura 2. Localización geográfica de los territorios del pueblo Uwöttuja en la cuenca del Río Sipapo, Estado Amazonas, Venezuela.
Fuente: elaboración propia.

Un régimen especial de protección puede hacer posible el reto democrático y social que tiene Venezuela. Sería un hecho histórico que se lograra pronunciar la palabra democracia intercultural desde lo indígena, con herramientas que tienen sentido en el espíritu democratizador, basado en el reconocimiento del otro, en el fortalecimiento de identidades y en la apropiación de pertenencias. El régimen de administración especial en definitiva, significa o materializa, un trabajo colectivo, devolviéndoles a los indígenas la

Orinoco medio. Viven generalmente en pequeñas comunidades con no más de cien individuos, separadas entre ellas por caminos de tierra o por el río. Tradicionalmente, vivían en una casa comunal, donde las diferentes familias estaban emparentadas. En la actualidad, aunque continúa existiendo la casa comunal, las aldeas están formadas por casas principalmente unifamiliares. Su vida espiritual gira en torno a espíritus y héroes, siendo *Wahari* el dios creador que define tanto el origen del pueblo como las relaciones con la naturaleza. En la Figura 2 se muestra la ubicación geográfica de los territorios pertenecientes al pueblo Uwöttuja con respecto al Estado Amazonas y el territorio nacional.

incidencia que tuvieron en el proceso constituyente y entendiéndola como un elemento para los espacios de cambio de la cultura y sociedad venezolana.

Preguntas de Partida

Las siguientes preguntas de partida han surgido de la observación de distintitos procesos jurídicos, políticos y sociales intervinientes en el tema de tesis elegido.

1. ¿Fue la aplicación del principio *res nullius* determinante en la fragmentación de los territorios indígenas y de la expansión del Estado Nación en Venezuela?
2. ¿Es el principio *res nullius* aplicado históricamente a los territorios indígenas en Venezuela, el origen del lento reconocimiento de los derechos territoriales?, ¿Cuáles son los elementos recurrentes de la aplicación histórica del principio *res nullius*?
3. ¿Es el desmembramiento de los territorios indígenas producto del resurgimiento del principio *res nullius* en el actual Estado-Nación Venezuela?
4. ¿Cuáles son los elementos comunes entre la configuración inicial del Estado-Nación Venezuela y su configuración actual que demuestran que los territorios indígenas siguen siendo *res nullius*?
5. ¿La aplicación de la *res nullius* es lo que no permite que haya demarcación en Venezuela?, ¿Cuáles son los motivos por los cuales la demarcación sigue siendo un asunto pendiente?
6. Frente a los avances jurídicos y letargos políticos: ¿un régimen de administración especial podría coadyuvar a resolver el problema de la demarcación y estimular así la autogestión de los pueblos indígenas?

Objetivos

El objetivo general de este trabajo es demostrar que el Estado-Nación ha legitimado a través de sus políticas públicas la aplicación del principio *res nullius* para la fragmentación de los territorios indígenas en Venezuela.

Los objetivos específicos son:

1. Analizar la evolución histórica del principio *res nullius* en Venezuela estableciendo su relación consustancial con la fragmentación de los territorios indígenas.
2. Determinar la relación existente entre los conceptos *res nullius*, territorio, ocupación, desplazamiento y violencia política para comprender la complejidad de los territorios indígenas en Venezuela.
3. Estudiar las repercusiones que ha tenido la aplicación del principio *res nullius*, y la falta de procesos de demarcación efectivos en materia de desplazamientos y deterioro en las formas de vida indígena en Venezuela.
4. Analizar la propuesta de régimen de administración especial para el Pueblo Uwöttuja como una solución al estancamiento del proceso de demarcación.

Hipótesis

Este trabajo busca establecer que, si la ocupación y fragmentación de los territorios indígenas en Venezuela son producto de la aplicación histórica del principio *res nullius* como modo de adquisición de la propiedad en la configuración del Estado Nación, entonces es posible identificar al mencionado principio como el elemento jurídico principal que en la actualidad ha permitido los procesos de desplazamiento y violencia política en los territorios indígenas.

Adicionalmente, se manejarán las siguientes hipótesis accesorias o sub-hipótesis:

1. El Estado Nación Venezuela no ha cesado de aplicar el principio *res nullius* para justificar la ocupación y fragmentación de los territorios indígenas, bajo el argumento de la protección de la soberanía e integridad territorial de la nación.
2. La planificación y posterior emprendimiento de un régimen de administración especial significaría un mejoramiento en el problema de la demarcación, tomando como ejemplo el Pueblo Uwöttuja de la Cuenca del Sipapo en el Estado Amazonas.

Presupuestos epistemológicos

1. Relación del DI de los DDHH con los Pueblos y Comunidades Indígenas en Venezuela: partiendo de que el DI se encuentra en constante cambio, pretendemos estudiar la realidad del ordenamiento jurídico sin abstraerlo del contexto social y cultural en el que se desenvuelve, ya que como se trata de una investigación enfocada en los derechos humanos de los pueblos indígenas hemos buscado una manera integral y coherente para responder a los cuestionamientos que hacen autores como Rovetta (2008)¹⁹ cuando preguntan: ¿hay derechos?, ¿se puede intentar conocerlos?, ¿cabe teorizar sobre ellos?. Por lo anterior se ha hecho necesario enmarcar nuestra investigación en el modelo francés de los DDHH ya que desde aquí apostamos por una sociedad más justa, analizando cómo a través de la aplicación del derecho reconocido a los pueblos indígenas desde el DI se puede lograr la materialización de la transformación social, particularmente en Venezuela con los cambios jurídicos internos, contribuyendo a la desaparición del desbalance histórico del conflicto por la tierra y por tanto, al fortalecimiento de la democracia. Así, iremos valorando la relación entre el DI con los pueblos indígenas de Venezuela en una especie de diálogo y *feedback*.
2. El análisis crítico: tomamos como fundamento lo planteado por Habermas (1984) sobre que el interés propio de las ciencias humanas, se define específicamente como un interés emancipador del hombre a través de la crítica²⁰. En virtud de lo anterior, el presente trabajo se desarrolla desde un análisis crítico que observa al DI como un conjunto de normas que regula la vida de la comunidad internacional, que se van modificando de acuerdo a los sujetos y actores del DI.
3. Nuestras premisas morales: reconocemos a lo largo de nuestro trabajo la altísima importancia de la conquista de principios y valores como la igualdad, la diferencia, la diversidad y la solidaridad como premisas morales y sociales

¹⁹ V. Rovetta, F. (2009): El descubrimiento de los derechos humanos, Ed. IEPALA, Madrid.

²⁰ Cfr. Habermas, J. (1984): Ciencia y técnica como “ideología”, Ed. Tecnos, Madrid.

suficientes no sólo para buscar un enfoque intercultural del DI de los DDHH, sino también para intentar un concepto de identidad del Estado Nación Venezuela desde una perspectiva más amplia e inclusiva.

Método

Tratándose de una investigación crítica, inter y transdisciplinaria, no se ha considerado prudente enmarcar el análisis en una sola propuesta metodológica. En consecuencia, se hizo una articulación entre las distintas disciplinas de interés para hacer una propuesta coherente y en sintonía con la investigación en sí misma. En este sentido, hemos planteado una estrategia de investigación en tres dimensiones. La primera dimensión es la teórica: a través del análisis de los puntos más controversiales que se dan en los movimientos sociales que generan políticas públicas capaces de influir o no en la realidad concreta, permite observar el contexto social, cultural, histórico y actual para, más adelante, determinar si es factible la aplicación del derecho reconocido a nivel internacional y nacional en las distintas realidades de los pueblos indígenas en Venezuela. En segundo lugar se ubica la base analítica que permite de una parte, caracterizar en detalle cómo ha evolucionado a través del tiempo el principio *res nullius* y cómo se inserta en el ámbito nacional e institucional frente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela, lo que ha servido para comprender los distintos conflictos que se producen en los territorios indígenas del país, y, en tercer lugar, el análisis etnográfico, a partir del trabajo de campo realizado en las comunidades indígenas Coromoto Cuao, Wayuuma'ana y Caño Grulla en Marzo de 2012, Junio de 2012 y Julio de 2012, respectivamente. En estas visitas se llevaron a cabo reuniones y entrevistas con integrantes y líderes de las comunidades, con el fin de observar la relación entre los pueblos y sus territorios, la relación entre los pueblos y el Estado, la comprensión que los indígenas tienen del alcance de sus derechos reconocidos y el progreso de la materialización de las políticas públicas relevantes a los territorios indígenas.

Por tanto, los métodos de investigación y análisis utilizados han respondido a las dimensiones planteadas, por lo cual el trabajo, atendiendo a varias áreas del saber, -DIP,

DI de los DDHH, Relaciones Internacionales, Historia y Ciencias Políticas- se ha enmarcado en una metodología deductiva-inductiva. La metodología deductiva ha consistido en la derivación de conceptos y enunciados; en particular, se ha seguido un enfoque cualitativo teniendo como herramienta fundamental el análisis documental de doctrina e instrumentos de carácter internacional, nacional e institucional relacionados con el tema de estudio que constituyen las fuentes de documentación a las que se ha recurrido. Además de las fuentes primarias, se han tomado en cuenta los estudios especializados en la disciplina de los DDHH de los pueblos indígenas, algunas conferencias que expertos del área han dictado y apuntes históricos referidos al tema en Venezuela. En segundo lugar, la metodología inductiva ha permitido la obtención de datos mediante la observación.

En este sentido, nos hemos trazado una hoja de ruta que intenta: 1) La definición del principio *res nullius* a partir de un análisis socio histórico; 2) El estudio de la aplicación del principio *res nullius* en Venezuela bajo la óptica jurídica, política y social, haciendo un recorrido desde la colonia hasta las últimas resoluciones de tipo constitucional y legal; 3) El seguimiento a los conflictos que se generan de la realidad estudiada a través de un método dialéctico, y 4) La compilación de testimonios como evidencia empírica usando, como guía general, el método humano expuesto y defendido por Edgar Morín²¹, que complementa los métodos anteriores y que se fundamenta en concebir inseparablemente la unidad y la diversidad humana.

Evidencias antropológicas

En la elaboración de este trabajo de investigación hemos querido utilizar los argumentos que justifican los derechos de los pueblos indígenas planteados por Oliva (2012)²²:

²¹ Morín, E. (2001): *La méthode: L'humanité de l'humanité. L'identité humaine*, Ed. Du Seuil, París, p. 287.

²² OLIVA, J. DANIEL (2012): Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos. Fundamentos, contextos formativos y normas de Derecho Internacional, Ed. Universidad Carlos III de Madrid y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid.

1. El ser humano es un animal cultural.
2. No existe una única cultura humana: la Diversidad Cultural como patrimonio común y característica general de la Humanidad.
3. Las culturas de los pueblos indígenas constituyen un todo integrado que van variando a lo largo del tiempo.
4. No existen culturas inferiores o superiores, ricas o pobres, avanzadas o retrasadas.
5. Varios modelos sociopolíticos han intentado a lo largo de la historia gestionar la diversidad cultural representada por los pueblos indígenas.
6. Las culturas indígenas contienen elementos de emancipación, liberación y mejora de la calidad de vida para los individuos indígenas y para toda la humanidad.
7. Algunas prácticas culturales de los pueblos indígenas atentan contra la dignidad de las personas indígenas. Hacia el equilibrio necesario: respeto a la dignidad de la persona y pervivencia sociocultural.

Plan de trabajo

Para lograr lo anteriormente expuesto, éste trabajo se ha estructurado conforme a los objetivos propuestos en cinco capítulos, los cuales se reseñan a continuación.

El primer capítulo está referido a la conceptualización del objeto de estudio y los elementos de análisis que surgen de las distintas dimensiones teóricas y acciones concretas.

En el segundo capítulo se comienza con un análisis de la evolución histórica del principio *res nullius* en Venezuela, para luego revisar la reforma agraria de 1960 que dio oportunidad a ocupaciones legítimas e ilegítimas en territorios indígenas.

En el tercer capítulo se determina la relación existente entre los conceptos *res nullius*, territorio, ocupación, desplazamiento y violencia política.

En el cuarto capítulo se presentan varios argumentos sobre las repercusiones que ha tenido la aplicación del principio *res nullius* y la falta de procesos de demarcación de territorios indígenas en Venezuela.

El quinto capítulo describe y analiza el régimen de administración especial para el Pueblo Uwöttuja que se propone como una solución al estancamiento del proceso de demarcación en los territorios indígenas, analizado en el desarrollo del trabajo.

Finalmente, se presenta el cuerpo de conclusiones y se deja abierto el debate en torno a la cuestión indígena en Venezuela.

Marco Institucional

Este trabajo de investigación ha sido posible en gran parte por el apoyo institucional que se ha recibido de:

- Pueblo Uwottuja (Piaroa).
- Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual (G3Pi), de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Federación de Estudiantes Indígenas de la Universidad de Los Andes (FEIULA), de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Red Jurídica Amazónica (RAMA).
- Organización socio-ambiental no gubernamental Wataniba de la Amazonía venezolana.

Capítulo I.

Territorios Indígenas Fragmentados y Estado Nación. Conceptos y Antecedentes

Hernando Chindoy, un inga colombiano, dijo en un debate abierto en la Universidad Carlos III de Madrid sobre los derechos de los pueblos indígenas lo siguiente: “en nuestro territorio no queremos vivir como exiliados de nuestra propia casa”, y, un representante de los pueblos indígenas de *Mato Grosso do Sul* agregó: “mi gente, principalmente los *Guarani Kaiowá*, están sometidos a un proceso vil de etnocidio y exterminio al mando de los representantes del agro negocio y el Estado”.

Como se ha dicho antes, en las últimas décadas la cuestión indígena ha cobrado una importancia especial en los ámbitos jurídicos y políticos tanto a nivel global como local. La protección de los pueblos indígenas, como portadores y reproductores de una relación especial con la tierra distinta a la de la sociedad dominante, se ha reflejado en la creación de un régimen jurídico moderno, siendo los instrumentos internacionales más importantes y conocidos, el Convenio 169 de la OIT (1989) y la DPPI (2007). Al mismo tiempo, en el ámbito local los Estados, motivados por distintas razones y en medio de diversos contextos, han reaccionado de forma positiva haciendo reformas importantes en sus ordenamientos jurídicos internos para cumplir con las exigencias derivadas del DI; ejemplo de ello, es lo que ocurrió en los países andinos durante los años noventa con la consagración constitucional de un régimen jurídico especial para los pueblos indígenas²³.

No obstante, el desarrollo de la cuestión indígena aún sigue en crecimiento, se encuentra dentro de un contexto en el que han aparecido nuevos actores tanto a nivel internacional como a nivel nacional, lo que ha hecho que los pueblos indígenas se encuentren hoy frente a nuevos escenarios en la búsqueda de la materialización de sus derechos. El tema de los territorios indígenas, su fragmentación y el Estado Nación, por

²³ Nicaragua y Guatemala en 1986, Colombia en 1991, Bolivia en 1994, Perú en 1993, Ecuador en 1998 y Venezuela en 1999.

ser parte de los conceptos a considerar en la búsqueda de la materialización del derecho territorial, ha motivado el desarrollo de ésta investigación, ya que desde nuestra perspectiva, el territorio es el derecho “madre” de los demás derechos reconocidos y representa el punto más controversial en la discusión que actualmente existe sobre los derechos de los pueblos indígenas.

1.1. Trabajos previos

Para realizar la conceptualización del objeto de estudio, se han seleccionado trabajos previos y antecedentes históricos que sirven como punto de partida e hilo conductor en la investigación.

Aguilar y Bustillos (2012)²⁴ contextualizan el “Caso Venezuela” en una publicación de la Red Jurídica Amazónica en la que explican los autores cómo en Venezuela los pueblos indígenas, “desde la época de la colonización, han resistido las consecuencias de los procesos de aculturación perdiendo en algunos casos, elementos propios de su cultura como la lengua, la religión y su mitología sobre el territorio. Sin embargo, en otros casos, y como consecuencia de la injerencia externa, estos pueblos han perdido sus territorios, y con ello, la relación cultural que estos tenían con el mismo”. En vista de la reforma constitucional de 1999, el Estado-Nación Venezuela desarrolló una política pública para hacer efectivo el derecho al territorio: la demarcación. Tomando en cuenta el contenido de ésta publicación y subrayando que la CRBV (1999) tiene dieciséis años en vigencia y que la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas fue aprobada en 2001, se puede afirmar en palabras de Aguilar y Bustillos que “la demarcación actualmente es un proceso tardío que no cumple con el objetivo para el cual fue pensado”, que no es otro más que la materialización de los derechos territoriales. Por otra parte, en vez de salvaguardar las formas de vida de los pueblos indígenas, la demarcación, tal cual se está planteando ahora desde la

²⁴ Aguilar, V. y Bustillos, L.: “Caso Venezuela” en El Derecho al Territorio y al Autogobierno Territorial de los Pueblos Indígenas de la Región Amazónica de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (RAMA), Ed. 1ª, 2012, págs. 138-169.

institucionalidad del Estado-Nación venezolano, fomenta la fragmentación del territorio indígena, obligando al asistencialismo y aceptación de la injerencia político, social, cultural y económica del Estado y de terceros interesados sobre los territorios indígenas. Importantísimo es el cuestionamiento y el inmediato análisis detallado que los autores hacen al preguntar: “¿por qué el derecho al territorio es un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas de Venezuela?”

1. Porque los derechos colectivos sólo pueden hacerse efectivos a través de los derechos territoriales que se materializan con la demarcación.
2. En el caso de Venezuela, la autodemarcación es ejercida por los propios sujetos de derechos (pueblos y comunidades indígenas).
3. En este sentido, los DDHH de los pueblos y comunidades indígenas se hacen efectivos en un territorio donde puedan ejercerlos.
4. Para el caso de la DPPI (2007) ratificada por Venezuela en el año 2007, ella representa el principal instrumento jurídico internacional que reconoce y garantiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas, constituyendo el principal techo del marco jurídico indígena internacional.
5. Teniendo en cuenta que la Declaración reconoce la libre determinación como la reparación de lo que históricamente ha sido negado, la misma establece la salvaguarda de las tierras y territorios indígenas a través de medidas especiales, siendo que la tierra es propiedad de los pueblos y comunidades indígenas en ese carácter de ancestralidad, también es claro que se necesita una acción jurídica que materialice el principio de libre determinación, consagrado no solo en la DPPI (2007), sino también en otros instrumentos jurídicos internacionales y nacionales aprobados y ratificados por Venezuela.
6. Esta acción jurídica se materializa a través de la demarcación/autodemarcación según sea el caso, y se expresa a través de los títulos de propiedad colectiva sobre los territorios.”

Cabedo (2012)²⁵ hace un estudio analítico de uno de los derechos que forman parte de la libre determinación indígena: el derecho a su propio Derecho. Explica Cabedo que el derecho consuetudinario indígena “puede ser analizado desde una perspectiva antropológica, sociológica, histórica y, por supuesto jurídica.”. Esto debido a que la realidad indígena de América Latina ha sido históricamente silenciada en las constituciones de la región, intentando desde el principio lograr una sociedad homogénea que contrasta claramente con la propia realidad social y cultural. El libro aborda cómo desde la configuración de los nuevos Estados Nación a finales del siglo XIX, América Latina adoptó el modelo del Estado Nación Europeo y por qué las constituciones que empezaban a surgir partían del principio de igualdad formal. Evidentemente el libro también reconoce los cambios constitucionales que se han hecho en favor de los pueblos indígenas, aunque afirma que “el derecho a la diferencia que representan los pueblos indígenas, incorporado al más alto nivel normativo, no se contrapone al principio de igualdad. Al contrario, la igualdad para que sea real y efectiva no puede basarse en la uniformidad, sino en el respeto a la diferencia, a la diversidad”. Asimismo el autor plantea que el pluralismo étnico y cultural a través de los derechos colectivos como el territorio, es “un fenómeno reciente que se proyectará, desarrollará y potenciará en este siglo XXI, a través del reconocimiento de los derechos indígenas que está estrechamente vinculado con los procesos de democratización de América Latina”. Así, Vicente Cabedo expone punto por punto el pluralismo jurídico, el derecho consuetudinario indígena, los sistemas jurídicos indígenas versus los sistemas jurídicos estatales, la vigencia actual del derecho indígena y el reconocimiento constitucional del derecho y la jurisdicción indígena. Todo lo anterior soportado en la premisa de que “la integración solamente se puede lograr, por un lado, reconociendo a los pueblos indígenas su identidad y todo lo que la misma representa, y, por otro, en cuanto a ciudadanos del Estado del cual forman parte, reconociendo su derecho de participación en la conformación de la voluntad nacional.”

²⁵ CABEDO, VICENTE (2012): Pluralismo jurídico y pueblos indígenas, Ed. Icaria, Barcelona.

Clavero (2012)²⁶ propone que “los Estados ya no son lo que se han creído ni la sociedad internacional lo que los mismos Estados se han figurado”, esto a consecuencia de los cambios que han ocurrido en la comunidad internacional a raíz de la emergencia de nuevos valores y actores. De igual manera Clavero afirma que “los derechos se consideran la clave que conecta y articula constitucionalismo, especialmente desde un nivel global”, y más adelante cuestiona si frente a esa realidad cambiante “¿no estamos concentrándonos demasiado en los derechos de forma que no se nos puede escapar la perspectiva más o menos constitucional de conjunto, una perspectiva que no puede prescindir de los poderes menos que más constitucionales?” Más adelante afirma Clavero que parte del cambio de la comunidad internacional se debe a la visibilización de lo indígena en la agenda internacional, ya que en virtud de ella “se ha desarrollado una presencia creciente de organizaciones indígenas ante los foros internacionales e incluso dentro de ellos” y que uno de los temas que más se ha dado a conocer es el problema que tienen los pueblos indígenas en cuanto a su patrimonio cultural tangible e intangible que desde nuestra perspectiva depende fundamentalmente del derecho al territorio pues es desde allí que se fortalece la identidad cultural y por tanto su patrimonio. Es importante esta obra para nuestra investigación porque entre otras cosas plantea cómo influyen las empresas transnacionales y la globalización en los cambios de la sociedad de la que por supuesto forman parte los pueblos indígenas.

El trabajo de Oliva (2012)²⁷ ha sido sumamente útil para contextualizar la cuestión indígena desde el DI. Oliva ha escrito un libro que desde la primera página aborda la investigación indígena con un lenguaje sencillo pero netamente jurídico, que hace posible dimensionar perfectamente todos los elementos que giran en torno a la cuestión indígena. La tercera y cuarta parte de la obra han tenido relevancia para nuestra investigación debido a que es en ellas donde se expone la fundamentación de los derechos de los pueblos indígenas y el proceso de internacionalización de sus derechos en cuanto a los contextos formativos y la dimensión histórica y sociojurídica. En esta última

²⁶ CLAVERO, BARTOLOME (2012): *¿Globalización del Constitucionalismo? Transnacionalidad de empresas entre poderes y derechos por tiempos postcoloniales (1974-2011)*, Ed. Milano-Dott. A. Giuffrè Editore, Roma.

²⁷ Op. Cit. pág 30.

parte, se abordan los derechos indígenas en el contexto interamericano, tema que indudablemente involucra a Venezuela con los alcances y retos del tema en la región.

La obra de Aparicio (2011)²⁸ ha sido de importante utilidad para la presente investigación, debido a que ella presenta el derecho a los recursos naturales y al territorio contemplando todos los elementos que se interrelacionan para explicar el derecho, y los inconvenientes que evitan su materialización. Los capítulos que hablan de los pueblos indígenas y el constitucionalismo como fuente de la igualdad multicultural para el diálogo entre iguales, de la necesidad de la descolonización, de la emergencia e impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina, del derecho a la libre determinación del desarrollo, de la territorialidad y gobernanza territorial como aplicación práctica del derecho indígena a la libre determinación y especialmente el de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Venezuela escrito por Luis Bello, han sido estudiados cuidadosamente. En el capítulo IX que trata sobre Venezuela, Bello expone como “la Constitución de 1999 establece uno de los catálogos más amplios y extensos de derechos indígenas en América Latina y hace un reconocimiento bastante avanzado, desarrollando las principales exigencias de los propios pueblos y organizaciones indígenas; incluyendo no solo los aspectos materiales de su vida, sino también la mayoría de los rasgos esenciales constitutivos de su existencia y especificidad cultural”. De igual manera, Bello aborda la obligación constitucional que tiene el Estado a demarcar el hábitat y las tierras indígenas partiendo de lo que él denomina “demarcación participativa” que da cuenta de que la demarcación “debe ser hecha por el gobierno nacional con la participación directa de los pueblos indígenas y sus organizaciones y debe ser realizada sobre la totalidad del espacio ocupado”.

El trabajo de Bello (2011)²⁹ es de gran relevancia para nuestra investigación, pues está orientado a exponer detalladamente los derechos que a partir de la CRBV (1999) se

²⁸ AA.VV.: Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina, Aparicio, M. (ed.), Ed. Icaria, Barcelona, 2011

²⁹ AA.VV.: El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural. Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas de Venezuela (1999-2010), Ed. IGWIA, Copenhague, 2011

reconocieron en favor de los pueblos indígenas. Así, acompañado por autores como Standfort Zent, Aimé Tillet y Vladimir Aguilar, entre otros; aborda temas como la historia de la autodemarcación territorial Hoti en su décimo aniversario, la implementación del derecho a la salud integral de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la medicina tradicional y la protección del derecho a la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas; importantes para el desarrollo de este trabajo pues consideramos que el derecho al territorio es el derecho “madre” del cual depende la materialización de los demás derechos indígenas y hasta que el Estado Nación no cumpla con su obligación de demarcar y titular, los derechos reconocidos no cumplirán con el espíritu de la ANC con el que fueron incorporados en el nuevo texto constitucional y por tanto no podrán satisfacer las expectativas que tienen los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.

Aguilar y Bustillos (2011)³⁰ después de realizar un trabajo jurídico y de campo hacen una publicación enfocada según Aguilar en “poner de relieve varios aspectos que coinciden con el actual momento por el cual atraviesa la causa indígena en Venezuela”, por lo que en un inicio se plantea la detención de Sabino Romero Izarra, cacique Yukpa de la comunidad de Chaktapa, a quien en palabras de Aguilar “el poder blanco ha negado su jurisdicción natural indígena en un juicio amañado y montado por la fuerza del Estado venezolano”; que “las tierras indígenas durante siglos han sido objeto de expoliación y expropiación por parte de terceros, incluyendo al Estado Venezolano”; que la detención del cacique Sabino Romero “refleja el fracaso de la demarcación en Venezuela llevado a cabo por órganos (in) competentes”; que existe “un conjunto de derechos colectivos reconocidos por vez primera en la historia constitucional de nuestro país, pero que un funcionariado burócrata no ha sabido traducir de manera clara y sencilla en lenguaje jurídico y mucho menos político”; que el estancamiento de la demarcación en Venezuela “ha tenido como consecuencia la división del movimiento indígena venezolano”; y que la demarcación de tierras indígenas en Venezuela se encuentra “en una encrucijada: la de crear condiciones para que de manera original y creativa, se avance en Venezuela

³⁰ AA.VV.: Plan de vida de la comunidad indígena Yukpa de Chaktapa en la Sierra de Perijá de Venezuela, Aguilar, V. y Bustillos, L. (compiladores), Ed. Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones, Mérida, 2011

conforme a la Constitución en la materialización de derechos territoriales indígenas reconocidos mediante su ejercicio por parte de los sujetos de derecho, o la peligrosa deriva de un secuestro de las demandas históricas indígenas por un puñado de burócratas alojados en el Estado”. El plan de vida para la Comunidad de Chaktapa engloba la construcción de la etn-cartografía, la elaboración de las políticas públicas interculturales, el desarrollo económico, las propuestas para vivienda, el fortalecimiento de la organización política y la educación intercultural. Este trabajo de Aguilar y Bustillos ha sido de gran ayuda en la contextualización del tema territorial indígena en Venezuela y de interés particular para el desarrollo del último capítulo de esta investigación.

Torrecuadrada (2010)³¹ aborda la cuestión indígena nacional desde el DI y la reforma constitucional de 1999, analizando detalladamente los derechos reconocidos y explicando cómo desde la “revolución” se ha concebido el “movimiento indígena socialista”, “la comuna indígena” y una serie de políticas públicas para los indígenas, diseñadas sin pensar en lo indígena. Aunque el libro contiene un temario interesante, para ésta investigación es muy importante el inciso “B” del capítulo III: “Los derechos indígenas sobre la tierra”. En este sentido, se toma la discusión que inicia Torrecuadrada sobre el problema de los pueblos indígenas con sus territorios desde el proceso de conquista, la consideración *terra nullius*, el sometimiento a la Corona, las bulas *inter caetera*, el uso de la fuerza y la violencia; para luego afirmar que, con la pérdida de las tierras ancestrales, se ocasionó un daño moral añadido que era el de no poder transmitirlo a las generaciones siguientes; imposibilitando así la continuidad de la cultura y de las organizaciones políticas y sociales. En la actualidad, la devolución de los territorios a los pueblos indígenas se contempla desde lo internacional (los progresos dentro y fuera de las organizaciones internacionales se estudian más adelante) hasta lo nacional (a partir de la CRBV y demás cuerpo legislativo) con su fundamento principal en la conservación de los pueblos indígenas y sus formas de vida. También es relevante a efectos de ésta investigación, lo planteado por la autora en cuanto a la triple división referida a los problemas de la tierra, a saber: el reconocimiento del derecho de propiedad y posesión

³¹ TORRECUADRADA, SOLEDAD (2010): “Los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela”. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, págs. 90-124.

sobre sus tierras ancestrales; el reconocimiento sobre los recursos que se encuentren en ellas, y, la reivindicación indígena acerca del reconocimiento como derecho al respeto, a la integridad y conservación de su hábitat natural. Sobre esto se profundizará más adelante.

En los trabajos compilados por Álvarez, Oliva y Zúñiga (2009)³² se abordan detallada y exhaustivamente todas las variables de la DPPI (2007) con apreciaciones muy acertadas de la cuestión indígena a nivel general y de América Latina a nivel particular. En el tercer capítulo de ésta obra, titulado “Cuando la fuerza irresistible mueve al objeto inamovible: aspectos controvertidos en la negociación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” y escrito por Isabell Kempf, se explica a detalle como finalmente la AGNU el 13 de septiembre de 2007 aprobó un instrumento que tenía veinte años de negociaciones cuyo objetivo es la protección de más de 370 millones de personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas a nivel mundial. Puntualiza Kempf en que la propiedad de la tierra, el acceso a los recursos naturales, el respeto a sus culturas y su derecho a la libre determinación, son los puntos más importantes de la DPPI (2007), y por tanto los que más dificultad presentaron en la negociación y posterior aprobación. Como es sabido, la DPPI (2007) no tiene carácter vinculante, no obstante, representa según Kempf “un instrumento dinámico en las normas internacionales que ayuda a proteger a los pueblos indígenas contra la discriminación y marginalización y las injusticias históricas sufridas por ellos”. Nos ha parecido importante lo que la autora explica en cuanto al uso y monitoreo de la Declaración, al decir que la misma ha sido utilizada desde antes de ser aprobada por Estados como Venezuela y que ahora que ya está aprobada debe ser utilizada como una herramienta para el dialogo entre los pueblos indígenas y los gobiernos y en virtud de ello, “que sirva de base para la elaboración de políticas públicas y leyes necesarias para la realización de los derechos incluidos en ella”. Por su parte, el noveno capítulo, titulado “La Declaración como instrumento para la convivencia intercultural y la cohesión social” y presentado por Nieves Zúñiga, nos ha sido de utilidad debido a que en él se señala que la participación de los pueblos indígenas

³² AA.VV.: Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural sostenible, Álvarez, N., Oliva, J. y Zúñiga, N. (Eds.), Ed. Catarata, Madrid, 2009.

con los Estados en la negociación de la DPPI (2007) significa un avance a través del dialogo y la interacción, “en el reconocimiento de los pueblos indígenas como interlocutores políticos y como miembros participantes de la comunidad nacional” y que el reto actual es trasladar el dialogo logrado en esos espacios de negociación a la realidad interna de cada Estado Nación con la finalidad de una plena construcción social. A pesar de lo positivo de la negociación, Zúñiga también muestra que la resistencia a entender la libre determinación indígena por parte de los Estados se basa “en conceder a estos pueblos derechos de propiedad y control de tierras y recursos que podrían entorpecer los planes de explotación de recursos y de construcción de infraestructuras de empresas multinacionales o gobiernos, o las dudas respecto a que los pueblos indígenas tengan derechos “especiales”, percibiendo éstos como derechos añadidos y que, por tanto, los demás no tienen”. De igual manera fue de interés el sexto capítulo, titulado “La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: exigencias y retos para una cooperación política” y escrito por Asier Martínez, orientado al análisis de los vínculos que existen entre la DPPI (2007) y la cooperación tanto a nivel bilateral como multilateral. En este sentido plantea los procesos culturales indígenas ante el reto de las políticas multiculturales diciendo que las dificultades que plantean los procesos culturales indígenas “son fruto de la incapacidad de una de las partes del proceso para asumir la perspectiva de la otra, sin proceder por vía asimilativa”, y los problemas específicos de las políticas públicas y de cooperación en relación con los pueblos indígenas. Finalmente, el duodécimo capítulo, “La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sus implicaciones para América Latina” bajo la autoría de José Aylwin, ha sido de interés porque se propone detalladamente que las implicaciones de la DPPI (2007) para América Latina son aún inciertas a pesar de que en la región “habitan cerca de cincuenta millones de indígenas que representan poco menos que un 10 por ciento de la población regional.” Sin embargo, aclara el autor que luego de ser aprobada, la DPPI (2007) ha sido motivo de demostraciones de la voluntad política de diversos Estados a ceñirse a las disposiciones del documento.

Ariza (2009)³³ ha realizado diversas investigaciones sobre derecho indígena contextualizado en la realidad colombiana. Aunque no se aborda nada relativo a Venezuela expresamente, ha sido un trabajo útil porque en él se hace toda una descripción de la identidad indígena desde los procesos de conquista y colonia, pasando por el proceso independentista –que aunque el libro no lo dice, es sabido que fue un proceso compartido por las dos repúblicas- hasta la actual configuración del Estado Nación Colombia. Debido a que hace un esbozo de los modelos que se aplicaron sobre tierras indígenas desde la colonia como el resguardo, este libro ha sido utilizado como uno de los fundamentos doctrinarios del capítulo II de nuestra investigación.

La innovadora y amplia obra de Chirif y Hierro (2007)³⁴ presenta un examen de la situación en la que se encuentran los territorios indígenas en Amazonas hoy día. El trabajo hace un balance de lo que se ha logrado hasta ahora con la lucha territorial, pero también sobre lo que al parecer no ha funcionado del todo. Aborda los problemas que siguen existiendo en el contexto del indígena amazónico, problemas que, atentan contra la viabilidad de los pueblos indígenas y de sus formas de vida. La revisión de éste trabajo fue significativa para la investigación ya que los autores hacen a lo largo del libro señalamientos muy importantes con respecto al territorio; en primer lugar, reafirman que “el indígena y su territorio son uno solo, lo que deberían entender los involucrados en todos los procesos que tengan que ver con territorios indígenas”; en segundo lugar, muestran cómo la lucha reivindicatoria por el territorio “ha dado grandes pasos en los países amazónicos debido al reconocimiento del derecho al territorio y las posteriores titulaciones de tierras”; en tercer lugar, y frente a los logros obtenidos, “no todas las tierras indígenas han sido demarcadas ni tituladas, lo que exige que el movimiento social indígena y todos los demás factores que han intervenido e intervienen en la cuestión, sigan trabajando para que, lo conseguido hasta ahora, no se quede sólo en acuerdos y en papel”; en cuarto lugar, el libro trata la injerencia del Estado en los territorios indígenas desde lo jurídico, político, económico y social, en el entendido que “los pueblos

³³ ARIZA, LIBARDO (2009): *Derecho, saber e identidad indígena*, Siglo del hombre, Bogotá.

³⁴ AA.VV.: *Marcando Territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía*, 1ª ed., Chirif, A. y García, P. Ed. IWGIA, 2007.

indígenas para poder obtener garantías sobre el derecho reconocido, han tenido que adaptarse a las nociones de territorio que manejan y entienden los distintos Estados Nación, acercándose más a un proceso de transculturización que al de una integración bien entendida”. Lo más importante es que en vista de los señalamientos anteriores, los autores concluyen que “los territorios indígenas siguen existiendo como unidades fragmentadas, lo que afecta directamente sus formas de vida”, ya que, en muchos casos, “han estado obligados a desarrollar actividades consideradas productivas por el Estado”, las cuales “desencadenan problemas ambientales en sus territorios, afectando principalmente sus comunidades y recursos”.

Aguilar y Bustillos (2007)³⁵ abordan la cuestión de las políticas públicas para los pueblos y comunidades indígenas, en el que se explica cómo la creación del MPPI se puede ver en un principio como una oportunidad para “hacer avanzar una agenda indígena en los tiempos que se avecinan”. Sin embargo, Aguilar plantea que intentar cumplir y saldar con la deuda histórica que se tiene con los pueblos y comunidades indígenas desde la institucionalidad “puede ser una debilidad si se pretende asumir que la cuestión indígena sólo sea pensada “desde arriba”. Por las experiencias de las organizaciones indígenas del continente, lo indígena es importante que sea pensado *desde arriba*, pero es fundamentalmente que sea accionado *desde abajo*”. En este sentido, los autores explican cómo en un trabajo en conjunto el MPPI “deberá ser el espacio para el cabildeo y la concertación indígena y de esta forma el terreno para implementar la transversalidad de las políticas basadas en la diversidad cultural”, y la base indígena “debe ser donde se definan y ejerzan los derechos indígenas como una forma de política pública de abajo hacia arriba fundamentada en la diversidad cultural”. Este libro ha sido importante debido a que lo largo de nuestra investigación se resalta la necesidad del entendimiento por parte del Estado de las características iguales y diferentes que tienen los pueblos indígenas para que las políticas públicas que se diseñen en su atención, no sean políticas aisladas, sino más bien den cuenta de la concretización de la interculturalidad democrática y eso solo es posible en un trabajo conjunto con políticas

³⁵ AA.VV.: Transversalización de la política (pública) para pueblos indígenas. Hacia una definición del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, Aguilar, V. y Bustillos, L., Ed. Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones, Mérida, 2007.

públicas construidas por las dos partes involucradas. La transversalización de las políticas públicas para pueblos indígenas obligaría al Estado a dejar malas prácticas con las que se legitima la aplicación de principios como *res nullius*, con las que el Estado permite actuaciones indiscriminadas sobre los territorios indígenas y sus recursos.

Paz, Valbuena, Leal y Alarcón (2007)³⁶ hacen un análisis histórico de la relación de los indígenas de Venezuela con la tierra, desde las dos primeras décadas del siglo XIX hasta el actual poblamiento del territorio goajiro en el estado Zulia. Es un libro interesante y oportuno para ésta investigación, ya que ayuda a reconocer las dinámicas territoriales como elemento clave en la comprensión de la cultura del ámbito que hoy define a Venezuela, donde cada constituyente étnico ha tenido una relación histórica con los demás, haciendo del intercambio cultural una pieza clave de lo cotidiano. Esta obra significa una coincidencia para las distintas disciplinas que intervienen en el estudio de las tierras y las distintas situaciones que rodean la demarcación territorial en la Venezuela de hoy; en ese sentido, obtiene valor como punto de partida en el debate por el reconocimiento de la tierra como elemento protagonista de la vida de los pueblos indígenas. Además, se concentran en él distintas visiones relacionadas con el tema de tesis elegido, pero con un discurso enfocado específicamente hacia la lucha de los pueblos indígenas del estado Zulia; ejemplo de eso, es el planteamiento que hace Portillo³⁷ enlazando el despojo territorial, el asesinato y la expoliación infligida sobre los pueblos Yukpa y Bari en la Sierra de Perijá con las determinantes del Estado, que a su modo de ver, movilizan los intereses de transnacionales con planes de desarrollo que son altamente peligrosos para la conservación de la vida de los pueblos indígenas y sus recursos. Una de las conclusiones a la que llega la obra versa sobre la exigencia de que el proceso de demarcación termine positivamente y que los indígenas finalmente puedan tener garantías plenas sobre sus territorios y hábitats.

³⁶ AA.VV.: Pueblos Indígenas, Territorios y Demarcación, 1ª ed., Paz, C., Valbuena, C., Leal, M. y Alarcón, J. (Dirs.) Ed. CENDIC, Maracaibo, 2007, págs. 17-36 y 85-108.

³⁷ Lusbi Portillo desarrolla el apartado seis de la primera parte del libro: “Demarcación de tierras indígenas en Venezuela”.

Uzcátegui (2007)³⁸ comenta que “desde el primer contacto, los pueblos indígenas fueron tratados de manera distinta a los colonizadores y esa diferencia fue el factor determinante en su historia hasta hoy. En el transcurrir del tiempo, esto fue llevado a cabo fusionando a la Iglesia Católica en un principio con el Gobierno y los grandes señores”. La intención de éste artículo es dejar claro cómo a través de las políticas públicas que se implementaron entre el periodo de 1836 a 1959 se buscaba integrar a los indígenas en las dinámicas económicas utilizando a los misioneros, conjuntamente con las personas que manejaban el poder económico, para alcanzar las metas económicas planteadas. Señala Uzcátegui cómo hubo –y hay– “una injerencia total del sistema nacional en las formas de vida indígena, en sus usos y costumbres ancestrales.” ¿Por qué es importante este artículo para la investigación?, Porque definitivamente llama a una revisión y reflexión sobre por qué y cómo esa injerencia colonial, en vez de desaparecer, sólo ha vivido procesos de mutación y está presente incluso hoy día en la realidad indígena venezolana a pesar de la moderna y considerada Constitución Nacional y todo un ordenamiento jurídico dictado a favor de los pueblos indígenas venezolanos, lo cual tiene su raíz en la falta de materialización de los derechos reconocidos.

Caballero (2007)³⁹ escribe un artículo en el que analiza desde un enfoque histórico-jurídico, las distintas políticas territoriales que ha establecido el Estado venezolano en general, y, las establecidas en los procesos de demarcación territorial indígena en particular. Hace un esbozo del problema institucional y técnico (burocracia) que rodea la demarcación frente a un cuerpo jurídico bastante amplio. Se comparte lo señalado por Caballero con respecto a la importancia de los avances del siglo XX para los pueblos indígena de América Latina, ya que “significan el fortalecimiento del movimiento social indígena, la participación directa de representantes indígenas en distintos espacios públicos, el deseo de volver a ser indígena por parte de comunidades que habían perdido su identidad étnica y cultural, y, la materialización de instrumentos jurídicos de carácter internacional y nacional dictados en su favor”. De igual manera, se

³⁸ UZCATEGUI, FERNANDO: “Análisis de la evolución de las políticas públicas en comunidades indígenas venezolanas”, en Revista Venezolana de Ciencia Política, núm. 30, 2007, págs. 121-142.

³⁹ CABALLERO, HORTENSIA: “La demarcación de tierras indígenas en Venezuela”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, núm. 3, 2007, págs. 189-208.

apoya la crítica a la falta de correlación que hay entre lo reconocido y las políticas implementadas por el Estado hacia los pueblos que hacen vida en el territorio nacional. Este artículo fue complementario con respecto al libro sobre políticas públicas de Aguilar y Bustillos antes mencionado.

Agredo (2006)⁴⁰ analiza cuál ha sido el proceso de pérdida del territorio como resultado de las medidas tomadas “desde arriba”, bien sea en la colonia o en la realidad actual. Las imposiciones del Estado, “las circunstancias económicas, los cambios políticos, la influencia cultural de terceros, el narcotráfico y el conflicto armado”, han logrado, según el autor, que “los colombianos se alejen de sus propias raíces”. Más adelante explica que “el origen está en los pueblos indígenas y en el arraigo que ellos tienen con sus territorios, que por supuesto, va más allá de la concepción material occidental”. En este sentido, Agredo explica, que los principios de los pueblos indígenas “están basados en el pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, el cielo y el infierno, la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, inherentes al ser, lo espiritual y lo material”. Por tanto, para los indígenas lo natural no es el concepto occidental de límites y de espacio regulado, debido a que es un proceso que los fragmenta individual y colectivamente, los limita, los obliga a hablar de propiedad o de posesión y esto ha existido desde la colonia hasta ahora, lo que ha cambiado es la configuración de las políticas públicas. Este artículo aunque no aborda el tema venezolano, nos ha servido para argumentar que los Estados Nación han venido dándole legitimidad a la ocupación de los territorios indígenas a través de sus decisiones e imposiciones, generalmente considerando las tierras como cosa de nadie, obviando que los pueblos indígenas son los verdaderos dueños de las tierras desde tiempos inmemoriales.

Velázquez Hernández (2006)⁴¹ propone un análisis sobre la historia política local y regional a partir de la siguiente premisa: “la lucha por la tierra sirve para la comprensión de las dinámicas y tensiones internas de la sociedad local”. En este sentido,

⁴⁰ AGREDO, GUSTAVO: “El Territorio y su significado para los Pueblos Indígenas” en Revista Luna Azul, núm. 23, 2006, págs. 28-32

⁴¹ VELÁZQUEZ, EMILIA (2006): Territorios fragmentados. Estado y comunidad indígena en el Istmo veracruzano. Ed. CIESAS. México D.F., pág. 241.

la autora hace una reflexión sobre la constante reconstrucción de las comunidades indígenas de Veracruz, México; que estando en medio de múltiples conflictos como la desamortización de tierras comunales en el siglo XIX, la lucha revolucionaria del siglo XX, la actividad de los grupos políticos después de la revolución, el proceso de reforma agraria, los proyectos de colonización y finalmente el petróleo y todos los cambios económicos que han ocurrido en el Estado; “aún siguen resistiendo”. Deja ver por ejemplo, en el capítulo 5, que la lucha por la tierra “siempre significará defender al territorio como la fuente de su cultura y comportamiento social, como el principal componente étnico”. Ha sido importante para ésta investigación la revisión de la obra debido a que hay una coincidencia argumental entre lo que ella propone y lo nosotros pretendemos demostrar que es que el territorio es el tema de conflicto entre el derecho reconocido y la voluntad política para materializarlo, ya que a través de la tierra las comunidades indígenas podrían demandar más autonomía y eso es algo a lo que los Estados todavía le temen, no están preparados para enfrentarlo o sencillamente se interpone ante sus intereses o los de algún tercero.

El trabajo comparativo de Roulet y Navarro (2005)⁴², centrado en Argentina y Estados Unidos, abarca lo jurídico y sus consecuencias políticas en lo relativo “al tratamiento de los indígenas desde su condición de soberanos externos hasta la de rebeldes internos”. Comprueban a través de una serie de premisas que los “salvajes” pasaron a ser “hordas” o “bandas criminalizadas” en los nuevos Estados, sin una organización importante o visible. Estudia cómo la reforma constitucional de Argentina es sólo un paso para “la eliminación de la antigua forma de proceder contra el indígena a partir del reconocimiento étnico y cultural de los pueblos indígenas de ese Estado-Nación”. Ha sido pertinente este artículo debido a que afirma que el problema de la soberanía original de los pueblos indígenas en América contó con instrumentos jurídicos unilaterales que les privaron de sus territorios y de su organización social, cultural y política, y, considerando que el problema sigue existiendo hoy, reflexiona sobre una solución que debe trascender del plano jurídico, tomando estrategias políticas y sociales

⁴² AA.VV.: La deshumanización por la palabra, el sometimiento por la ley. Paralelismos discursivos sobre la cuestión indígena en los Estados Unidos y el cono sur, siglos XVIII-XIX, en Cuicuilco, núm. 34, 2005.

para reconocer la condición perdurable de pueblos, con un conjunto común de derechos reconocidos como lo son el territorio, los recursos, la libre determinación, entre otros. Hay sintonía con los autores cuando ellos plantean que “para avanzar en propuestas en cuanto a la cuestión indígena, es necesario hacer un análisis histórico y crítico de los procesos ideológicos y políticos con los que los Estados Nación han considerado a los pueblos indígenas”; esto, para intentar superar el desbalance histórico que hay con respecto a las tierras y los demás derechos, desbalance que, ha estado plagado de prejuicios, de consideraciones sobre cosas de nadie, de un discurso vacío, de desplazamientos forzosos, de asimilación de culturas y de promesas incumplidas.

Aparicio (2005)⁴³ presenta una compilación detallada sobre los avances que se han dado desde el DI y el derecho interno de los Estados a favor de los pueblos indígenas. Han sido importantes para nuestra investigación el primer capítulo escrito por Bartolomé Clavero en el que se abordan las novedades constitucionales en Ecuador, Venezuela, México y Bolivia; el tercer capítulo que bajo la autoría de J. Daniel Oliva da a entender la fundamentación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el ordenamiento internacional; el cuarto capítulo en el que Luis Rodríguez-Piñero explica cómo desde los trabajos realizados en el seno de la OIT se ha avanzado con respecto a los pueblos indígenas desde el DI en el paso del colonialismo al multiculturalismo; el quinto capítulo sobre pueblos indígenas y recursos naturales bajo el sistema interamericano de protección de DDHH escrito por Mikel Berraondo; y, fundamentalmente el último capítulo escrito por Marco Aparicio que habla sobre los pueblos indígenas y la formación de los Estados Nación en América Latina.

Bello (2005)⁴⁴ contextualiza la cuestión indígena venezolana inmediatamente después de que el catálogo de derechos indígenas fuera incorporado a la nueva Constitución Nacional. Luis Bello explica cuál era la normativa para los pueblos indígenas en Venezuela antes de 1999, cómo fue el proceso anterior a la ANC, cuántos son los derechos reconocidos para los pueblos y comunidades indígenas a partir de la

⁴³ AA.VV.: Caminos hacia el reconocimiento. Pueblos indígenas, derechos y pluralismo, Aparicio, M. (coord.), Ed. *Universitat de Girona*, Girona, 2005

⁴⁴ Op. Cit. Pág. 36

CRBV (1999), dónde más en el ordenamiento jurídico venezolano se pueden ubicar derechos en favor de los pueblos indígenas, cómo han sido las sentencias del TSJ como principal órgano jurisdiccional del país con respecto a los indígenas y cuáles son los mecanismos existentes para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas dentro y fuera de Venezuela. Aunque el libro es del año 2005 la mayoría de sus premisas están vigentes hoy, de hecho hay una coincidencia entre sus planteamientos y nuestros argumentos en cuanto a la importancia que tiene la tierra para el desarrollo de todos los demás derechos reconocidos y en lo relativo a la obligación que tiene el Estado venezolano desde 1999 a demarcar los territorios indígenas, algo que como se verá a lo largo de este trabajo está todavía pendiente.

Aguilar (2003)⁴⁵ presenta la cuestión indígena como desafío de las relaciones internacionales actuales y logra determinar las tensiones y conflictos que se generan en el ámbito interno con la inclusión de los temas controversiales ligados a la cuestión indígena. Asimismo hace un estudio de las principales transformaciones ocurridas en Venezuela a partir de los cambios políticos y jurídico-constitucionales de 1999, y un análisis de la forma en la que los llamados temas controversiales han sido incorporados en las proposiciones y formulaciones de políticas y normas en el ámbito doméstico. Este trabajo de investigación ha sido muy importante para el desarrollo de nuestro trabajo fundamentalmente por la serie de afirmaciones con las que el autor va concluyendo su investigación. Dice Aguilar que “la acción desplegada por los pueblos indígenas, ha convertido el reivindicativismo indígena en un asunto político a partir de la internalización de la problemática internacional”, y que en el caso particular de Venezuela, “los cambios ocurridos en el país luego de 1999, han generado un conjunto de contradicciones que el sistema social no ha terminado de digerir ni de integrar”. Además indica que en Venezuela el ordenamiento jurídico que en favor de los pueblos indígenas se ha desarrollado y la actitud del gobierno con su política dan cuenta de que “la cuestión indígena seguirá jugando un rol fundamental, en la instrumentación de un discurso y de una estrategia gubernamental que sirvió también de bandera para las transformaciones

⁴⁵ AGUILAR, VLADIMIR (2003): “Entre resistencia y disidencia. La cuestión indígena como desafío de las relaciones internacionales actuales, tensiones y conflictos en Venezuela”. Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Ginebra, Ginebra.

que en algún tiempo se anunciaron en el país, y que produjo una ruptura con la manera en que hasta ese momento se venía asumiendo el tema indígena”. Finalmente se pregunta Aguilar si los derechos de los pueblos indígenas sólo se quedarán en un reconocimiento constitucional, es una pregunta que compartimos y sobre la cual haremos algunas consideraciones en esta investigación.

La Relatora Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Erica-Irene Daes (2004), presenta el informe titulado “*Prevention of Discrimination and Protection of Indigenous Peoples*”⁴⁶. De relevancia para ésta investigación es el contenido del apartado III “*Nature and Scope of the Right of Indigenous Peoples to own, Use, Control, and Manage their Lands, Territories, and Resources*” debido a que el análisis que hace la Relatora Especial y las posteriores recomendaciones son de vital importancia para el capítulo cinco de éste trabajo.

García (2001)⁴⁷ expone la importancia que tiene la identidad diferenciada a partir de las demandas de la identidad basadas en el derecho a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente adecuado. Asimismo el autor se refiere al derecho y los sujetos colectivos e inmediatamente aborda la relación que hay entre los Estados y los pueblos como sujetos de derecho. Ha sido de utilidad para nuestra investigación el epígrafe dedicado especialmente a los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos.

La Relatora Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Erica-Irene Daes (2001) presenta el informe: “*Prevention of Discrimination and Protection of Indigenous Peoples and Minorities*”⁴⁸. Este informe también resulta relevante porque el contenido del apartado VI, titulado “*Fundamental Guiding Principles*

⁴⁶ Cfr. E/CN.4/Sub.2/2004/30.

⁴⁷ GARCÍA, ANDRÉS (2001): Materiales para una reflexión sobre los derechos colectivos, Dykinson, Madrid.

⁴⁸ Cfr. E/CN.4/Sub.2/2001/21.

Regarding Indigenous People's Lands, Territories and Resources” desarrolla una serie de principios y recomendaciones aplicables a los pueblos indígenas y sus tierras.

Perla Zusman (1999)⁴⁹, profesora del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, explica que el territorio Patagónico es “una de las áreas de América Meridional de más tarde ocupación por parte de la Corona Hispánica”. En efecto, “los antecedentes de su reconocimiento se ubican en el siglo XVI, por un lado, motivado por la existencia de la *Terra Australis* y por el otro, por la necesidad de hallar una nueva forma de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. En la Patagonia como en el resto del continente, al llegar el conquistador, los territorios se consideraban *res nullius*, sin tener importancia alguna la presencia de los indígenas que allí habitaban, aun cuando subsiguientes exploraciones identificaran ámbitos de influencia de las diferentes nacionalidades”⁵⁰. Así mismo, mientras “la tierra pasaba a ser de la Corona, el indígena era valorado por lo que podía ofrecerle al colonizador: conocimiento del lugar, de la población que lo habitaba, de comunicación con otras áreas, entre otras cosas”. Además, Zusman también explica cómo el indígena era visto “como un riesgo político ante otras potencias que quisieran penetrar en la región”, por lo cual en los proyectos territoriales coloniales los indígenas “aparecían como sujetos a ser cooptados para poder asegurar la dominación colonial sobre los pretendidos ámbitos geográficos”. La lectura de éste artículo contribuye al fortalecimiento de las preguntas de partida para la investigación, ya que no sólo en Venezuela, sino en todo el continente dictaminar que el territorio conquistado era *res nullius* dejó a los indígenas totalmente despojados, fueron las mismas políticas de la corona, el mismo proceder jurídico que pareciera reconfigurarse en la actualidad desde distintas políticas y lineamientos de los diferentes Estados Nación.

⁴⁹ ZUSMAN, PERLA: “¿Terra Australis-“*Res Nullius*”? El avance de la frontera colonial hispánica en la Patagonia (1778-1784)” en Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 45 (34), 1999.

⁵⁰ Descripción de la Costa Meridional Patagónica de Antonio Viedma, Buenos Aires, 10 de Diciembre de 1783.

1.2. Antecedentes históricos

1.2.1. *El movimiento indígena internacional*

El movimiento indígena internacional tiene su antecedente más lejano en 1921 cuando el Jefe Cayuga Deskaheh acudió a la Sociedad de las Naciones como representante de las Seis Naciones de los Iroqueses. En el tiempo que pasó en Ginebra intentando lograr el reconocimiento de la Sociedad de las Naciones algunas delegaciones consideraron seriamente su causa, pero finalmente la Sociedad no escuchó su caso⁵¹. En 1924 Maorí T.W. Ratana asiste también a Ginebra para protestar por el incumplimiento del Tratado Waitangi-Nueva Zelanda de 1840, también sin mucho éxito. No obstante, desde hace aproximadamente cuarenta años, los indígenas del mundo han tomado en sus propias manos la lucha por la reivindicación de sus derechos; esa lucha se ha denominado “movimiento indígena internacional” y emergió con objetivos políticos, sociales y culturales propios. Este movimiento se caracteriza por ser diverso y heterogéneo, pero más allá de la diversidad, hay elementos que identifican y fortalecen al movimiento indígena permitiendo que se le dé un tratamiento especial. El primer elemento –y para ésta investigación el más importante- es el discurso ecologista; es decir, la especial relación de los pueblos indígenas con la tierra. Los indígenas se perciben a sí mismos integrados con el entorno natural, de allí la suma importancia de los derechos territoriales⁵², pues con el reconocimiento del derecho al territorio se garantizan todos los demás derechos reconocidos. El segundo elemento es la apuesta por un modelo de desarrollo distinto del modelo homogeneizador de inspiración occidental, promoviendo como alternativa el etnodesarrollo, el autodesarrollo, el desarrollo con identidad y el buen vivir. En tercer lugar, es notable que el movimiento indígena se plantea como una reconceptualización casi post moderna, una crítica a las fuentes de la modernidad, a la influencia de la Ilustración, resaltando que fue precisamente a partir del discurso ilustrado

⁵¹ Cfr. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/unpfii brochure_es.pdf

⁵² Cuando se habla de derechos territoriales, los indígenas no están pensando en apoderarse de los recursos, sino más bien de su relación con la tierra desde su cosmovisión, con el entorno natural. El movimiento indígena internacional se ha presentado como protector del medio ambiente; conforman, junto a los ecologistas y científicos, el colectivo que está luchando por la protección del medio ambiente.

que se igualó a todos⁵³, lo que ha hecho que los indígenas hayan cuestionado la validez de conceptos como: Estado, derecho, justicia y democracia. El cuarto elemento se refiere a la refundación de los Estados, la lucha por la conformación de Estados que se reconozcan en su diversidad, aspirando el establecimiento de Estados multiétnicos y pluriculturales, en los que se puedan poner en marcha planes de autonomía para los territorios de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales y que tengan su base principal en nuevas constituciones⁵⁴ o en reformas de las ya existentes. Finalmente, el quinto elemento es el derecho a la libre determinación de los pueblos⁵⁵, entendiendo éste como la capacidad de los pueblos de decidir libremente su futuro desde un punto de vista político, económico, social y cultural.

Hay que hacer notar que antes de la aparición consolidada del movimiento indígena internacional, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas se orientaba hacia la temática nacional e internacional en torno a una práctica burocrática ajena a la materialización de los derechos humanos. En la actualidad, se está desarrollando el cuarto proceso en materia de especificación de DDHH, encontrando agrupados los derechos de las minorías, de las mujeres, de los niños, de los trabajadores inmigrantes, de las personas con discapacidad y de los pueblos indígenas⁵⁶; diferentes colectivos específicos que por

⁵³ En la Ilustración se matizaron los dos espacios del ser humano: el público y el privado y, en ese sentido, se estableció que la religión estaba en el privado, en el escenario de la conciencia. Por tanto, la religión es una experiencia personal, que vive en el individuo y que nada tiene que ver con la vida política. Ahora se ha determinado que la religión no puede ser el elemento principal para la interpretación del mundo, la cosmovisión es una concepción laica, no guiada. La secularización para algunos autores es la autonomía y emancipación de todas las realidades de cualquier tutela religiosa, es decir, que no se rige ni por leyes ni por criterios que trasciendan esa realidad. De alguna manera esta teoría es heredera de aquello que dice que las luces de la Ilustración aumentan las tinieblas de la religión y los pueblos.

⁵⁴ Caso de Venezuela a partir de la Constitución de 1999.

⁵⁵ En una conferencia en la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Oliva consideró al derecho de la libre determinación de los pueblos como la raíz principal de todos los demás derechos indígenas. (Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Getafe, mayo de 2013).

⁵⁶ Derechos de tercera generación. Bustamante define a los llamados “derechos de la solidaridad” como una generación de derechos motivados por “la acción de determinados colectivos que reclaman legítimos derechos. Se comienzan a configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos discriminados grupos de edad, minorías étnicas o religiosas, países del Tercer Mundo, que se ven afectados por alguna de las múltiples manifestaciones que cobra la discriminación económico social. (...) estos derechos han ido cobrando un papel cada vez más importante, y gracias a ellos se ha

encontrarse en una situación especial, merecen una protección diferenciada. A los indígenas se les conceden derechos no sólo por su vulnerabilidad, sino porque se les reconoció que son descendientes de los ocupantes originarios de unos territorios que fueron sometidos a un fuerte proceso de colonización. Asimismo, Girardi (1998) afirma que “el discurso del movimiento indígena internacional que tanta importancia está adquiriendo en la lucha por sus derechos diferenciados se nutre de elementos comunes que aparecen englobados en una propuesta de carácter panindigenista que conformaría un pensamiento emergente a partir del cual los pueblos indígenas se identifican como sujetos de cambio”⁵⁷.

Hay algunos momentos y elementos históricos del movimiento social indígena que merecen ser mencionados. El primer elemento importante es que ya para 1940 se dio la Reunión de Pátzcuaro con la presencia de los administradores públicos de lo indígena y se creó el Instituto Indigenista Interamericano. Años más tarde fue muy significativo el contenido del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala (1966)⁵⁸. Luego las Reuniones de Barbados (1971 y 1977) descritas por Cerrón-Palomino (2006)⁵⁹ como “memorables reuniones en las que grupos de indígenas organizados, líderes y promotores sociales, así como intelectuales de orientación neoindigenista, recusadores de las políticas asimilacionistas tradicionales, elaboraron un programa de acciones prácticas conducentes a la reivindicación política, sociocultural y lingüística de los pueblos sometidos a diversas

desarrollado concepto de diálogo Norte Sur, el respeto y la conservación de la diversidad cultural, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural de la humanidad, etc.” V. BUSTAMANTE, JAVIER. “La Sociedad de la Información. Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica”, en Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, núm. 1, 2001, versión electrónica. Disponible en: <http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm>

⁵⁷ GIRARDI, GIULIO (1998): Desde su propia palabra. Los indígenas, sujetos de un pensamiento emergente, Ed. Abya Yala, Quito

⁵⁸ El punto 5 del Acuerdo da cuenta del inicio de un lenguaje multicultural cuando señala: “5. El reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de una nación de unidad nacional multiétnica, pluricultural y multilingüe. El respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, es la base de una nueva convivencia que refleje la diversidad de su nación.”

⁵⁹ CERRÓN-PALOMINO, RODOLFO: “Para qué sirve la lingüística histórica al hablante de una lengua oprimida” en Pueblos Indígenas y Educación, núm. 59, 2006, pág. 23.

modalidades de colonialismo interno”; significaron un punto de partida importante para lo alcanzado hasta hoy. Asimismo la Declaración de Pátzcuaro termina de definir la agenda internacional del movimiento indígena que comienza a expandirse por todas las regiones, especialmente por América Latina. De igual manera, el Primer Parlamento Indio Americano del Cono Sur, reunido en San Bernardino, Paraguay, del 8 al 14 de octubre de 1974, es un antecedente histórico para los congresos y reuniones del mundo indígena⁶⁰ que se dieron posteriormente. Un año más tarde se creó el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas en la reunión de Port Alberni en Canadá, que según Oliva (2005)⁶¹ se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos económicos, culturales y políticos de los pueblos indígenas.

Tres años más tarde, en 1977 Panamá “vio nacer el I Congreso Internacional de América Central”⁶² que contó con la asistencia de delegados de los distintos países centroamericanos⁶³ y cuyo resultado final fue la creación del Consejo Regional de los Pueblos Indígenas de América Central. El mismo año se celebró en el Palacio de las Naciones de Ginebra, la Conferencia Internacional de Organizaciones no Gubernamentales sobre Discriminación contra las Poblaciones Indígenas en las Américas, que significó un encuentro importante entre los pueblos indígenas y las organizaciones internacionales, cuya relación actualmente sigue en crecimiento. En el año 1980 se dio el I Congreso de Movimientos Indios en América del Sur en Ollantaytambo, Cuzco, Perú, este Congreso tuvo la particularidad de haber durado casi un mes y uno de sus resultados fue la creación del Consejo Indio de América del Sur. Importante también fue la Conferencia Internacional de Organizaciones no Gubernamentales sobre los pueblos autóctonos y la tierra que se celebró en Ginebra, específicamente en la Sede de las Naciones Unidas en septiembre de 1981 con motivo del

⁶⁰ V. ABAD, LUISA (2003): Etnocidio y Resistencia en la Amazonía Peruana, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pág. 207.

⁶¹ V. OLIVA, J. DANIEL (2005): La cooperación internacional con los pueblos indígenas: desarrollo y derechos humanos, Ed. Cideal, Madrid.

⁶² VELASCO, SAUL (2003): El movimiento indígena y la autonomía en México, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., pág. 68

⁶³ Asistieron delegados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Decenio contra el Racismo y la Discriminación Racial⁶⁴. También en 1981 se dio la Conferencia de San José sobre Etnodesarrollo y se puso en marcha el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en la ONU.

En 1987 empieza la preparación del proyecto de Declaración (logro del Grupo de Trabajo). No se puede dejar de mencionar la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE del año 1988⁶⁵; la Declaración de Quito, la creación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, la configuración de la Confederación de Organizaciones Indígenas Panandinas de Ecuador, los movimientos de los aimaras y quechuas en Bolivia, la emergencia organizativa de los mapuches en Chile, las celebraciones del encuentro entre dos mundos y el Movimiento: 500 años de resistencia indígena, negra y popular, la irrupción del movimiento zapatista y el discurso elaborado por el subcomandante Marcos que todavía resuena en los rincones de México, el Premio Nobel a Rigoberta Menchu, la llegada a la Vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas en Bolivia con el Movimiento Katarista, la Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y la Declaración Carioca, la Creación del Fondo Indígena, el proceso de consulta de la CIDH sobre la Declaración Americana en 1992, los Acuerdos de San Andrés con la internacionalización de la cuestión indígena de municipios autónomos, y los cambios constitucionales que se han presentado en países como Bolivia, Ecuador, México y Venezuela. En este siglo XXI los alcances más relevantes han sido el caso Awas Tingni, la instalación del Relator Especial de la ONU, la llegada de Evo Morales como presidente de Bolivia, la aprobación de la DPPI (2007) y la creación del Mecanismo de Expertos de la ONU.

⁶⁴ La reunión contó con la participación de 130 delegados provenientes de todo el mundo. EL trabajo estuvo estructurado en cuatro comisiones que se encargaron de analizar: el derecho de la propiedad en los pueblos autóctonos y la tenencia de la tierra, la filosofía autóctona y la tierra, las empresas transnacionales y sus efectos sobre los recursos y las tierras de los pueblos autóctonos y el impacto del arsenal nuclear en la tierra y la vida de los pueblos indígenas.

⁶⁵ El 28 de mayo de 1990, 170 indígenas ocuparon la iglesia de Santo Domingo en Quito. Lograron paralizar el país a través del bloque de carreteras, el secuestro de hacendados y oficiales del ejército, quienes se convirtieron en rehenes del movimiento indígena emergente denominado CONAIE. Las principales ciudades del país, entre las que por supuesto se encuentra Quito, fueron tomadas por centenares de indígenas que marcharon desde el campo durante casi dos meses con la intención de reivindicar sus derechos y dignidad. El movimiento indígena ecuatoriano dio cuenta de una excelente organización, creatividad y buen manejo de los medios de comunicación. El movimiento del *Inti Raymi* ha sido sin duda significa un acontecimiento memorable.

1.2.2. Los avances en el derecho internacional

Según la Resolución 48/141 de la AGNU “la promoción y la protección de todos los derechos humanos es una de las prioridades de la comunidad internacional”⁶⁶. Si el DI contemporáneo regula y protege un catálogo de derechos y libertades que todos los individuos pueden hacer valer frente a los Estados, significa que el DI ha evolucionado notoriamente. No obstante, tanto el reconocimiento como la institucionalidad y materialización de los derechos dependen según González (2002) de dos grupos de normas: las contenidas en diversos instrumentos de carácter internacional y las normas internas, de ordinario incluidas en las Constituciones estatales⁶⁷.

Pero antes de abordar el avance normativo que se ha dado en torno a los pueblos indígenas desde el DI, es necesario detenerse en algunos datos históricos. A pesar de que desde el siglo XVII en adelante la doctrina se caracterizará por el desinterés hacia los derechos de los pueblos indígenas⁶⁸, el trabajo iniciado por Francisco de Vitoria⁶⁹ seguirá teniendo continuidad en estudiosos que profundizarán sus postulados y los de sus discípulos de la Escuela de Salamanca.

El trabajo posterior de diversos internacionalistas en materia de pueblos indígenas se fue dejando a un lado conforme fue pasando el tiempo y la conquista y la colonia empezaron a percibirse como momentos históricos muy lejanos y nada más. En este

⁶⁶ A/RES/48/141 del 7 de enero de 1994.

⁶⁷ GONZÁLEZ CAMPOS, J.: “La interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en materia de Derechos Humanos”, en *El Derecho Internacional en los albores del siglo XXI. Homenaje al profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa*, MARIÑO MENÉNDEZ, F., (ed.), Trotta, Madrid, 2002, pág. 333.

⁶⁸ TORRECUADRADA, SOLEDAD (2001): *Los pueblos indígenas en el orden internacional*, Ed. Dykinson, Madrid, pág. 21.

⁶⁹ Fraile dominico español, escritor y catedrático de la Escuela de Salamanca, quien se destacó por sus ideas y contribuciones al DI basadas en el pensamiento humanista. Es considerado por muchos, el padre del DI. Uno de los grandes estudiosos fue sin duda Hugo Grocio quien a en su obra desarrolla el pensamiento de Vitoria desde una propuesta secularizada del derecho natural.

sentido, toda la polémica que había existido en cuanto a los derechos de los indígenas tanto en la conquista como en la colonia se fue desdibujando en los desarrollos del DI como derecho de Estados que en su mayoría mantenían políticas asimilacionistas y de colonización. Teniendo en cuenta esta situación, cabe preguntarse ¿cómo y cuándo aparece la cuestión indígena como problemática de las relaciones internacionales? Se puede señalar que ha tenido varios momentos.

- a. El primero, fue en 1492, cuando las potencias europeas e imperios coloniales del momento reconocieron a los “indios” como sujetos de DI a través de tratados celebrados entre ambas partes.
- b. El segundo, en el contexto de lo anterior, al convertirse los pueblos indígenas en los herederos de un viejo principio que tiene sus orígenes a finales del siglo XIX (Congreso de Berlín de 1885), y que siendo asimilado inicialmente a las reivindicaciones de las minorías en Europa (principio de las nacionalidades), recogido por los países colonizados en el ámbito de la descolonización (década de los años 60), y que hoy es parte de las principales exigencias de los pueblos del mundo en general y de los indígenas en particular: el principio de la libre determinación de los pueblos⁷⁰.
- c. Tercero, mediante la autonomía que han venido adquiriendo los pueblos indígenas como nuevos actores en el ámbito internacional en general y de las Naciones Unidas en particular.
- d. Cuarto, en el contexto de la evolución de las organizaciones internacionales de carácter universal (Sociedad de Naciones y Naciones Unidas) y de las de carácter regional. Se puede evidenciar la mencionada evolución en los siguientes cuadros.

	Fecha
Creación de la Subcomisión para la Prevención de Discriminaciones y la Protección a Minorías, como órgano subsidiario de la CDH, para ocuparse entre otras cosas de hacer recomendaciones a la CDH sobre temas relacionados con la prevención de todo tipo de discriminaciones y la protección de minorías raciales,	1947

⁷⁰ Ponencia: La configuración de la cuestión indígena en el marco de la agenda global. Los pueblos indígenas y las relaciones internacionales de hoy, presentada por Vladimir Aguilar en el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, Universidad de Los Andes, Mérida, 2004.

nacionales, religiosas y lingüísticas	
Declaración Universal de Derechos Humanos	1948
Adopción de la Resolución 275 (III) en la AGNU en la que se recomienda al ECOSOC, que en colaboración con otros organismos de Naciones Unidas y con el Instituto Indigenista Interamericano, contando con la asistencia y respaldo del Secretario General, promoviera estudios sobre la situación de las poblaciones indígenas que vivían en contextos de subdesarrollo	1949
Adopción de la Resolución 313 (V) en la AGNU en la que se reafirma la importancia de la elevación del nivel de vida de las poblaciones indígenas	1950
Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo	1957
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	1966
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1966
Conferencia Mundial contra el Racismo en la que se aborda la situación de las poblaciones indígenas como una de las situaciones preocupantes del mundo y se les considera oficialmente sujetos vulnerables de discriminación	1973
Informe Martínez Cobo contentivo de afirmaciones fundamentales sobre la situación de las poblaciones indígenas y sus recomendaciones marcan la nueva agenda indígena de Naciones Unidas	1981-1984
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo	1989
Convenio sobre la Diversidad Biológica	1992
Decenio Internacional proclamado por la Asamblea General	1994
Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas	2000
Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	2001
Segundo Decenio Internacional proclamado por la Asamblea General	2004
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	2007
Consejo de Derechos Humanos	2007
Examen Periódico Universal	2007
Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	2007

Tabla 1. Evolución de la cuestión indígena en el seno de Naciones Unidas.
Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar algunas observaciones sobre el Convenio 169 de la OIT (1989) y de la DPPI (2007). El Convenio ha tenido aplicabilidad en tribunales nacionales como norma de derecho interno⁷¹, ha sido tomado por la OEA como fuente de los derechos territoriales⁷² y ha tenido un papel influyente en la reconfiguración

⁷¹ Véase: Sentencia de la Corte Suprema de Chile en el caso de la Machi Francisca Linconao, (2009).

⁷² Cfr. Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (2009) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09.

constitucional de América Latina⁷³. Por su parte, la DPPI (2007) ha sido el producto de un largo proceso de negociación entre los distintos Estados y los pueblos indígenas. A pesar de que la DPPI (2007) ha sido ovacionada desde su aprobación, expertos como el Relator Especial James Anaya (2009) han dicho que “la Declaración no debería existir o, más bien, no tendría por qué existir. La Declaración existe debido a que se cometieron violaciones masivas de los derechos humanos a través de la historia y siguen percibiéndose los efectos sistémicos de estas violaciones. El propósito de la Declaración es eliminar desigualdades que no deberían existir. El objetivo final es que la Declaración algún día sea irrelevante”⁷⁴. En todo caso, consideramos que la DPPI (2007) ha sido un gran paso en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial.

La DPPI (2007) recoge derechos ya reconocidos por otros instrumentos vinculantes, establece normas de derecho consuetudinario y los derechos que contiene son directamente aplicables por los tribunales nacionales e internacionales, por tanto, tiene aplicación jurídica e inclusive es básica para trazar estrategias ante las distintas instancias judiciales. No obstante, uno de los artículos más controversiales de la DPPI (2007) ha sido el artículo 42 y las implicaciones que de él se desprenden. Sin duda la DPPI (2007) es un documento extraordinario pero lamentablemente no lo es en su valor jurídico si se le compara con otros instrumentos internacionales de DDHH. Como es sabido, las Declaraciones no tienen el mismo valor jurídico que tienen los tratados de DDHH formalmente ratificados por los distintos Estados. Sin embargo, Rodríguez-Piñero (2009) sugiere que “la estrategia para hacer valer el efecto jurídico de instrumentos de estas características radica precisamente en distanciarse de la discusión en torno al valor jurídico de las normas, para colocarse en otro nivel.” En este sentido, propone el uso de *mainstreaming* y *operationalization* ya que como afirma el mencionado autor “es en este sentido que debe interpretarse la referencia a la promoción y “plena aplicación” de la Declaración en su artículo 42, tarea que incumbe de forma conjunta a los Estados, los

⁷³ Ejemplo de ello es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

⁷⁴ ANAYA, J.: “Por qué no debería existir una Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas” en Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural sostenible, Álvarez, N., Oliva, J. y Zúñiga, N. (Eds.), Catarata, Madrid, 2009, pág. 37.

órganos y las agencias especializadas de Naciones Unidas y, por supuesto, al Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas”⁷⁵.

Así, con sus 24 párrafos iniciales y sus 46 artículos, se apega a los derechos de igualdad y libre determinación y declara a las “personas y a los pueblos indígenas” como “iguales a todas las demás personas y pueblos”⁷⁶ y, en ese sentido, la DPPI (2007) deja claro que, al igual que todos los demás pueblos, “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación”⁷⁷. De esa manera, la DPPI (2007) establece los derechos colectivos de los pueblos indígenas en relación con la cultura, el desarrollo, la educación, los servicios sociales y por supuesto los territorios.

En conclusión, la DPPI (2007) está basada en DDHH universales, es un instrumento de DDHH aplicado única y exclusivamente a los pueblos indígenas. Está claro que no se trata de la creación de nuevos derechos, pero sí de la presentación de nuevas normas basadas en DDHH universales. La DPPI (2007) es un instrumento de reparación, que promueve pasos afirmativos de los Estados para reparar las condiciones de opresión que históricamente han vivido los pueblos indígenas. Por tanto, el instrumento apuesta por una convivencia pacífica, en pie de igualdad.

Comité de Derechos Humanos. Se ha pronunciado sobre los derechos de los pueblos indígenas incluso antes de que la DPPI (2007) fuera aprobada.
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es el responsable de monitorear el cumplimiento del Convenio Internacional sobre todas las formas de Discriminación Racial adoptado por la AGNU en 1965. El mencionado instrumento forma parte del <i>ius cogens</i> internacional y tiene implicaciones directas sobre los pueblos indígenas.
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT

⁷⁵ RODRÍGUEZ-PIÑERO, L.: “La “implementación” de la Declaración: las implicaciones del artículo 42” en Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural sostenible, Álvarez, N., Oliva, J. y Zúñiga, N. (Eds.), Catarata, Madrid, 2009, págs. 75 y 76.

⁷⁶ Art. 2: “Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.”

⁷⁷ Art. 3: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.”

Consejo de DDHH a través del examen periódico universal incluye los temas relacionados con los pueblos indígenas.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Comité de los Derechos del Niño
Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares

Tabla 2. Garantías de control en el seno de Naciones Unidas.
Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, con respecto al *soft law* (Dictámenes y Recomendaciones del sistema de Naciones Unidas), debe quedar claro que a pesar de que no son jurídicamente vinculantes, tienen valor político y moral lo que se traduce en una obligación indirecta, además ayudan a definir el contenido de los derechos y sirven para la interpretación de derechos reconocidos.

	Fecha
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	1948
Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1960
Convención Americana sobre Derechos Humanos	1969
Corte Interamericana de Derechos Humanos	1979
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1988

Tabla 3. Evolución de la cuestión indígena en el Sistema Interamericano.
Fuente: elaboración propia.

El continente Americano ha logrado ser beneficiario de un desarrollo importante en la promoción y protección de los DDHH desde que está en existencia el sistema interamericano, hace ya más de cincuenta años. Con la adopción de la Carta de la OEA en 1948, los Estados Americanos incluyeron en sus agendas las obligaciones con la democracia y los DDHH. Por ello, también en 1948 se adoptó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que ha sido el primer documento relevante en materia de DDHH del mundo y en la parte introductoria de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), los Estados dejan claro que la protección de los DDHH debe ser la guía para la evolución de los pueblos del continente. Además, la

Declaración nace con un alto nivel moral⁷⁸, reconoce y determina los DDHH, significando la primera piedra sobre la que se construiría todo el sistema interamericano de protección de los DDHH. También son importantes el Pacto de San José (1967) y el Protocolo de San Salvador (1988), ya que en el primero se contempla el derecho de propiedad que, aunque se trata a nivel individual, la Corte IDH lo ha sabido interpretar a favor de los pueblos indígenas, reconociendo la propiedad colectiva, lo cual ha servido para apoyar a los pueblos indígenas a través de sus sentencias⁷⁹. Y, en el segundo, se recogen derechos económicos, sociales y culturales.

Con la creación de la CIDH en 1959 empezó a evaluarse la situación de los DDHH en los Estados de la región. De igual manera comenzó a desarrollarse “una importante labor debido al compromiso de sus primeros integrantes que, paso a paso, lograron expandir las facultades de dicho órgano hasta incluir no sólo la emisión de recomendaciones sino también la realización de visitas *in loco*, la elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos, el procesamiento de peticiones individuales, entre otros”⁸⁰

Para finalizar este apartado consideramos conveniente hacer mención de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, aprobada el 26 de julio de 2002 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. La Carta se adopta como “instrumento que contiene principios generales, normas, ámbitos y mecanismos que garantizan la observancia, respeto, promoción y defensa de dichos derechos, en la subregión”, significando que “el carácter vinculante de esta Carta será decidido por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en el momento oportuno”⁸¹. Por

⁷⁸ Luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-10/89 establece que tiene efectos jurídicos y que por tanto crea obligaciones para los Estados.

⁷⁹ Se puede verificar en el contenido de la sentencia con en el caso *Awas Tingni vs. Nicaragua* del 2001 en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf.

⁸⁰ CEJIL (2012): Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Ed. Folio Uno S.A., Buenos Aires, págs. 21-27.

⁸¹ Cfr. Comunidad Andina. Documentos oficiales, disponible en: <http://www.comunidadandina.org>

su objetivo central, la Carta busca fortalecer el estado de derecho y mejorar la administración de justicia; promover una cultura de paz mediante el diálogo, la tolerancia y la concertación, como instrumentos generadores de consensos sociales; afianzar el derecho al desarrollo y fortalecer las instituciones para la defensa y promoción de los DDHH en los países miembros, en particular, las Defensorías del Pueblo.

Como se puede observar la Carta Andina es simplemente un eco de los derechos que ya se han reconocido en otros instrumentos jurídicos de carácter internacional de la ONU y de la OEA, sin embargo, logra ser novedosa –recordando que se aprobó años antes de la DPPI (2007)- al incluir en sus disposiciones, algunas específicas dirigidas a los DDHH de los pueblos indígenas, tal y como lo establece entre los artículos 32 y 41. Ahora bien, lo que cabe destacar es que estos artículos mencionados contienen una detallada mención de la diversidad e identidad de los pueblos y comunidades de los países andinos y el derecho de estos grupos a la protección y desarrollo de sus identidades ancestrales.

A esta parte, podemos concluir sobre que por vía de hecho y de derecho, los pueblos indígenas actualmente son reconocidos como nuevos actores internacionales y sujetos de derecho; que la aprobación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales en favor de los pueblos y comunidades indígenas es un paso notable, y que los Estados siguen temerosos al contraponer los derechos reconocidos de libre determinación y territorio a la soberanía e integración territorial.

1.3. Dimensiones teóricas del tema

Las dimensiones o alcances del problema están determinadas por dos perspectivas fundamentales: la dimensión teórica y la acción concreta. La dimensión teórica refiere a la herramienta que tiene por objeto dilucidar los elementos y aspectos esenciales en torno al tema de estudio, relativos al Estado desde su concepción moderna, a los territorios indígenas, a la adquisición de la propiedad a partir de la *res nullius* y a la ordenación del territorio.

1.3.1. Teoría del Estado moderno

El inicio westfaliano. “Habrá una paz cristiana y universal y una amistad sincera, auténtica y perpetua entre todos y cada uno. Que esta paz y amistad sea observada y cultivada con tal sinceridad y celo, que cada parte se esforzará en procurar el beneficio, honor y ventaja del otro”⁸². La paz de Westfalia significa en la historia la configuración del sistema internacional actual ya que con la finalización de las guerras entre las potencias europeas pudo ser posible el concepto de Estados Nación que existe hoy, cuyos fundamentos son el territorio, la población y un sistema de gobierno.

Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau y Kelsen; cinco maneras de entender al Estado. Dentro de los grandes aportes de éstos intelectuales se encuentran las distintas maneras en las que explicaron la necesidad de la existencia del Estado.

Bodin (1529-1596), en “Los seis libros de la República”⁸³ manifiesta que la *souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République*, siendo soberano quien tiene el poder de decisión, quien da las leyes sin recibirlas de otro, es decir, quien no está sujeto a las leyes escritas sino más bien a la ley divina o natural. A lo que añade Bodin: “si decimos que tiene poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos”.

Hobbes (1588-1679), en *Leviatán*⁸⁴, plantea su idea de Estado absoluto y material, en el que la base del sistema político no está en el pueblo sino en el Estado. Descarta totalmente la importancia del hombre como centro del factor social, más bien, plantea que es el Estado, como “soberano”, el que debe detentar todo el poder de decisión y

⁸² Cfr. Tratado de Westfalia, 1648.

⁸³ BODIN, JEAN (1590): Los seis libros de la República. Ed. TECNOS, (2006).

⁸⁴ HOBBS, THOMAS (1651): Leviathan. Ed. SHAPIRO, I. Yale University Press, (2010).

representación; y, por tanto, es el que debe asumir la responsabilidad por las acciones que realice. Para Hobbes, el hombre por su estado natural, vive en conflicto permanente “de todos contra todos”, teniendo cada quien derecho a hacer lo que sea necesario para preservar su vida; ese es su punto de partida al considerar al Estado como una necesidad para evitar tales circunstancias. Un Estado entonces, soberano y absoluto al que se le debe la obligación de obedecer.

Locke (1632-1704), considerado el padre del liberalismo moderno, entiende al Estado desde perspectivas diametralmente opuestas a las de Hobbes. La primera diferencia importante radica en que para Locke, los derechos del individuo si son importantes, es decir, no concibe al Estado como único protagonista del sistema político. La segunda diferencia radica en que, en vez de considerar el estado natural desde una lucha de “todos contra todos” que necesita un poder rector absoluto, propone un contrato social a través del cual los individuos le otorguen poder de representación y orden al Estado para la toma de decisiones en las controversias que puedan presentarse. Por tanto, si son los individuos los que otorgan un poder al Estado, significa que la soberanía emana del pueblo.

Rousseau (1712-1778), ve al Estado desde una concepción más amplia. Para él, el Estado sólo es posible partiendo de un contrato social, lo que descarta el principio de la libertad natural que manejaba Hobbes. Ratifica lo expuesto por Locke con respecto a la soberanía del pueblo, pero va más allá al decir que el poder del pueblo no debe tener limitación alguna. Plantea a la soberanía como un derecho intransferible e indivisible y se extiende en cuanto a que el contrato o pacto social de los individuos con el Estado debe estar regulado por normas de conducta que en ningún caso pueden ser injustas.

Kelsen (1881-1973), establece al Estado como una organización en la cual los órganos deben ejercer poderes y competencias sometidos a los límites establecidos por la ley. Hans Kelsen propone el Estado de derecho, como un todo normado en el que los individuos puedan desarrollarse dentro de los límites de la ley en un contexto de garantías

y seguridad jurídica en el que no haya abuso por parte del factor político ni de ningún otro factor.

El Estado Nación. Generalidades. Toro (2004), establece que el Estado es una forma de asociación permanente de seres humanos de naturaleza institucional, con asiento en un territorio determinado, considerado como propio, dotado de un poder político organizado y centralizado, y titular de deberes y derechos jurídico-internacionales. El Estado como sujeto de DI está caracterizado por ser territorial, institucional, permanente con capacidad jurídica o de goce plena y activo. Es territorial en el sentido de que no puede existir sin un territorio que le sirva de asiento y de ámbito material donde ejerza, con exclusividad, sus poderes jurídicos y políticos; es institucional en el sentido de que no constituye un simple agregado inorgánico y circunstancial de seres humanos con fines o propósitos particulares y accidentales, sino una asociación histórica y permanente de seres humanos políticamente organizados que persiguen determinados fines o propósitos generales; es permanente en el sentido de que constituye el producto de un conjunto de seres humanos organizados conscientemente, con perspectivas de duración indefinida; asume implícitamente la representación internacional de los intereses de la mayoría, es decir del pueblo; tiene capacidad jurídica o de goce porque es el único sujeto de Derecho Internacional Público titular de todos los derechos y deberes jurídico-internacionales posibles; por último, es activo en el sentido de que no es sólo destinatario de las normas jurídicas internacionales, sino creador constante de normas de Derecho Internacional Público⁸⁵.

Por su parte, Pastor (2008), afirma que “en la sociedad internacional el Estado se comporta fundamentalmente como un ente de poder y desde la aparición de la sociedad internacional moderna al poder del Estado se le ha designado con el calificativo de soberano”⁸⁶. Sin embargo, Carrillo (1976) afirma que “gracias a la experiencia y a la

⁸⁵ TORO, FERMIN (2004): Derecho Internacional Público. Ed. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, pág. 494.

⁸⁶ PASTOR, JOSÉ (2008): Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Ed. Tecnos, Madrid, pág. 281.

Ciencia Política hoy se sabe lo que de engañoso tiene la imagen del Estado como prototipo de sociedad perfecta, en cuyo seno reine el imperio de la ley; por el contrario, un análisis en profundidad pone de relieve que en el Estado el uso privativo de la violencia no está ausente, que la autonomía de decisión de los gobernantes es a menudo puramente formal y que, tras la apariencia de la institucionalización jerarquizada, se desarrolla una áspera lucha entre los poderes económicos, los grupos y partidos políticos, los sindicatos y los grupos de presión.”⁸⁷

Bruni (2004) plantea que “el Estado nació para imponer y salvaguardar el orden social, para definir las reglas de convivencia y hacer posible la relación pacífica entre los miembros de la comunidad, para convertir en la práctica el deber moral de tolerancia y respeto d todos frente a todos en obligaciones jurídicas exigibles, de acatamiento obligatorio”⁸⁸. En efecto, somos de la opinión de que a pesar de los muchos incumplimientos que hay en cuanto al espíritu rector de la conducta de los Estados, lo que sigue justificando hoy su existencia por paradójico que parezca, es precisamente la obligación de proteger a sus ciudadanos por igual, de hacer valer su autoridad –sin abusar- para que los derechos de todos sean respetados por todos.

Con respecto a la relación entre Estados y pueblos, Remiro (2007) asegura que “es ambivalente, hecha de síntesis y antítesis, como la que guarda en el plano de los principios, la libre determinación con la soberanía, y ha rebasado con mucho el ámbito de la descolonización. Hay grupos humanos dentro del Estado que, autoidentificándose como pueblo diferenciado, reclaman para sí una subjetividad internacional que potencialmente podría conducirlos a la realización de un destino separado. La superación, por otra parte, de los derechos humanos como una competencia reservada de los Estados y la contemplación de su respeto como la culminación de la libre determinación de su población, ha remozado las teorías acerca de su legitimidad”⁸⁹

⁸⁷ CARRILLO, JUAN (1976): Soberanía del Estado y Derecho Internacional, Ed. Tecnos, Madrid, pág. 41.

⁸⁸ BRUNI, M.: “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Soberanía de los Estados” en Lesa Humanidad, Fundación Venezuela Positiva, Caracas, 2004, pág. 123.

⁸⁹ REMIRO, ANTONIO (2007): Derecho Internacional, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 95.

Sobre los nuevos actores que han emergido en la comunidad internacional como “competencia” del Estado, Pérez-Prat (2007)⁹⁰ señala que las empresas transnacionales son quienes a través de una inversión directa en el exterior controlan y dirige filiales de países diferentes a aquel en el que tiene su sede. Por tanto, se entiende que una empresa transnacional es una unidad económica, con una dirección y un control único de una estructura distinta. En este sentido, las transnacionales han alcanzado diferentes formas en el ámbito internacional, pudiendo ser producto de alianzas contractuales y grupos corporativos⁹¹.

1.3.2. El Estado Nación Venezuela

Desde lo jurídico. De acuerdo al artículo 2 de la CRBV (1999), Venezuela “se constituye como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la CRBV (1999), “el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes” que en la Constitución se consagran. Después, en los artículos 4 y 5, la CRBV (1999) establece en primer lugar que la República Bolivariana de Venezuela es un “Estado federal descentralizado que se rige por los principios de

⁹⁰ Clase dictada por Don Luis Pérez-Prat en el Programa de DEA y Doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, diciembre de 2007.

⁹¹ Afirma Pérez-Prat que en la ONU se habla de 60.000 transnacionales, con cerca de 80.000 filiales. Si se hicieran unidades de economía, de las primeras 100, 51 serían multinacionales, incluidos los Estados. Así, General Motors supera a Dinamarca y Toyota a Portugal, inclusive, 200 transnacionales de primera tienen mayor estabilidad económica que todos los países, excluyendo por supuesto al G-8.

integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y responsabilidad”. En segundo lugar, que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce a través de la Constitución y la ley e indirectamente a través del voto y los órganos del Poder Público”.

Según el artículo 10 de la CRBV (1999), “el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”. En lo relativo a la población, según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, la población es de aproximadamente treinta y tres millones⁹². Con respecto al sistema de gobierno, el artículo 6 de la CRBV (1999) indica que “el gobierno de la República es y será siempre democrático, participativo, electivo descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos irrevocables”.

Es importante también resaltar el contenido del artículo 21 en el Título III de los Deberes, DDHH y garantías:

“Art. 21: Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.”

⁹² Cfr. Instituto Nacional de Estadísticas, consulta hecha en Febrero de 2012. Disponible en: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=9

En relación a lo expuesto, se puede observar que el poder constituyente representado en la ANC elaboró la nueva Constitución ejerciendo un poder único, originario e incondicionado. Su labor ha tenido un impacto en la república a través del rompimiento con el régimen anterior, materializando la máxima expresión de la soberanía. Uno de los resultados de la CRBV (1999) ha sido la igualdad ante la ley, naciendo contra la división de ciudadanos por estamentos, extendiéndose en respeto a la igualdad y rechazando cualquier discriminación en razón del género, la raza o la etnia.

El régimen constitucional venezolano ha evolucionado estableciendo el principio democrático como un principio básico que desemboca en la soberanía popular y haciendo el reconocimiento efectivo de los DDHH para todas y todos los venezolanos sin ningún tipo de distinción racial, sexual o cultural; por tanto, la normatividad de la Constitución pasa a ser plenamente jurídica y se impone –en un principio- a todos los poderes, incluyendo al legislador.

Desde lo político y social. Dejando a un lado lo establecido constitucionalmente, históricamente Venezuela ha sido, en palabras de Barroso (2004), un *melting pot*, de culturas, razas, colores, religiones, idiomas, gustos e intereses. Afirma el autor que “los muchos intentos de diferenciación progresiva, de carácter simétrico intentados por gobernantes autoritarios, terminaron en persecuciones y maltratos del contrario, con dolor y subdesarrollo para todos. Y los intentos de diferenciación complementaria, disfrazados de una democracia a intervalos y por entrega, también estuvieron orientados hacia la exclusión y el maltrato del otro que no era del mismo partido. Lo que nos ha quedado es la radicalización de una crisis de procesos y estructuras con un deterioro progresivo de ideas y relaciones que parecieran no encontrar salida sino a través de la violencia.”⁹³. Ahora bien, con respecto a la sociedad venezolana, -más allá de toda la contextualización política mundialmente conocida-, los venezolanos comparten con los demás latinoamericanos la heterogeneidad. La mayor parte de la población actual de Venezuela, cercana a los treinta millones de habitantes, es el producto de aproximadamente veinte

⁹³ BARROSO, M.: “Eschimogénesis y la cultura del maltrato” en *Lesas Humanidad*, Fundación Venezuela Positiva, Caracas, 2004, pág. 108.

generaciones de mezcla entre europeos, indígenas americanos y africanos con proporciones de mezcla que varían entre las distintas regiones del país⁹⁴.

1.3.3. Los pueblos indígenas en el Estado nación

Cuando las potencias coloniales establecieron las fronteras de los territorios que estaban bajo su administración, no se preocuparon por lo que sucedería con las personas que allí habitaban originalmente, fragmentando en la mayoría de los casos, su componente étnico, cultural y territorial. Pastor (2008) indica que “en la actualidad, los Estados, conocedores de la importancia extraordinaria del principio de la estabilidad e intangibilidad de las fronteras, han aceptado las que las potencias coloniales demarcaron desde un principio”⁹⁵. El reconocimiento de pueblos indígenas dentro de los Estados Nación ha sido un proceso en transformación, como lo explica Remiro (2007), cuando dice que “en el orden interno se pasó de la asimilación forzosa de los individuos, a un proteccionismo paternalista y, de ahí al reconocimiento de existencia y de identidad”⁹⁶. El reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de los Estados-Nación ha generado un amplio debate sobre los territorios que les corresponden, la administración de los recursos que allí se encuentran, el límite del derecho a la libre determinación de los pueblos, la articulación de la educación bilingüe e intercultural, la participación política, entre otras cosas. Pero, ¿quién es indígena?, ¿qué son los Pueblos Indígenas? Clavero (2005) propone que “los pueblos, naciones o comunidades indígenas constituyen grupos culturalmente diferenciados, enclavados dentro de sociedades producto del imperialismo, la conquista y la colonización. Agrega que son indígenas porque tienen vínculos ancestrales con las tierras en las que viven, o en las que desearían vivir, de manera mucho más profunda que otros sectores de la población que viven en esas mismas tierras, o junto a estas; y, que son pueblos en la medida en que constituyen comunidades diferenciadas

⁹⁴ RODRIGUEZ-LARRALDE, A.: “Frecuencia génica y porcentaje de mezcla en diferentes áreas geográficas de Venezuela, de acuerdo a los grupos Rh y ABO” en *Interciencia*, vol. 26, núm. 1, 2001, págs. 8-12.

⁹⁵ Op. cit. pág. 64.

⁹⁶ Op. cit. pág. 65.

con una continuidad de existencia e identidad que los vincula con las comunidades de su pasado ancestral”⁹⁷. Además de éstas definiciones de Clavero se proponen otras. En primera, se han tomado las definiciones de indígenas y pueblos indígenas en el ámbito internacional planteadas por la Organización de Naciones Unidas a través de la Organización Internacional del Trabajo y del Informe Martínez Cobo; en segunda, una definición de pueblos indígenas desde la doctrina señalada por Torrecuadrada, y en tercera, una definición de los pueblos indígenas desde los propios pueblos indígenas.

- a. Indígenas: De acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo los indígenas son los descendientes de la población autóctona que moraba en un determinado país en la época de la colonización o conquista, llevadas a cabo por algunos de los antepasados de los grupos no autóctonos que, en la actualidad, detentan el poder político y económico; en general, los descendientes de esa población autóctona tienden a vivir de conformidad con las instituciones sociales, económicas y culturales anteriores a la colonización o a la conquista (...) en lugar de incorporarse a la cultura de la nación a que pertenecen. Remiro afirma que “los indígenas son beneficiarios, a título individual, de derechos humanos, como cualesquiera otras personas físicas y allí donde, como ocurre en América Latina, son numerosos, es frecuente que se concrete en ellos el objeto de procedimientos, informes y decisiones de mecanismos internacionales de protección”⁹⁸. Se puede agregar la definición hecha en Venezuela por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005) en su artículo 3, literal 3:

“Indígena: Es toda persona descendiente de un pueblo indígena, que habita en el espacio geográfico señalado en el numeral 1 del presente artículo, y que mantiene la identidad cultural, social y económica de su pueblo o comunidad, se reconoce a sí misma como tal y es reconocida por su pueblo y comunidad, aunque adopte elementos de otras culturas”.

⁹⁷ CLAVERO, B.: “Introducción” en Los pueblos indígenas en el derecho internacional, ANAYA, J., Trotta, Madrid, 2005, pág. 24.

⁹⁸ Op. cit. pág. 15.

- b. Definición de pueblos indígenas planteada por la Organización Internacional del Trabajo según el Convenio 107 (1957). Antes de pasar a las definiciones propuestas por la OIT hace falta un poco de historia. ¿Por qué fue la OIT la primera en dar una definición sobre los pueblos indígenas? El período entre guerras y fundamentalmente luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, la OIT empezó a intervenir en el trabajo indígena sentando las bases para la categoría “indígena” que existe hoy en el DI. Así, incorporada al Tratado de Paz de Versalles (1919), la Constitución de la OIT definió ampliamente los fines de la organización en búsqueda de la “justicia social”. Sin embargo, aunque no condena la práctica del colonialismo, incluye en el artículo 35 la regulación de la aplicación de los convenios internacionales a las “colonias, protectorados y posesiones que no gozan de autogobierno pleno, dependiendo de las circunstancias locales”⁹⁹. Este artículo sirvió para que la OIT empezara a articular una competencia específica que atendiera el ámbito denominado “trabajo indígena”. Con las directrices de la Sociedad de Naciones, hablar de la protección del trabajo indígena, era algo todavía impensable. En este sentido, la protección recaía de manera más general sobre la “familia de naciones civilizadas” respecto a las condiciones de trabajo de las poblaciones denominadas “indígenas”. En un principio la OIT empezó a trabajar el tema indígena desde la doctrina de la tutela con la que empezó la redacción de un conjunto de normas internacionales con el fin de regular la explotación de los trabajadores pertenecientes a las poblaciones indígenas, sometidas a distintos controles políticos que derivaban en trabajos forzosos, malos tratos, abusos, sanciones penales por incumplimiento de contrato, entre otras cosas. En virtud de ello, la OIT empezó a hacer estudios especializados relacionados con el trabajo indígena, con lo cual se decidió crear un Comité de Expertos en Trabajo Indígena en 1926¹⁰⁰. El primer instrumento importante fue el Convenio sobre Trabajo Forzoso de 1930¹⁰¹. A pesar de ello, todavía no había claridad en torno al término

⁹⁹ Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, Parte XIII del Tratado de Paz entre las Potencias Aliadas y las Potencias Asociadas, Versalles, 28 de junio de 1919.

¹⁰⁰ Consejo de Administración de la OIT. 32ª sesión en Ginebra, 1925- Sobre el establecimiento y actividades del Comité de Expertos en Trabajo Indígena.

¹⁰¹ Convenio de la OIT relativa al Trabajo Forzoso y Obligatorio, Número 29, adoptado en la 14ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 28 de junio de 1930.

“indígena”, problema que empezó a solucionarse conforme se fue incrementando la presión mundial sobre el colonialismo. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la OIT se dedicó no sólo al estudio de la práctica colonial sino a luchar contra ese modelo por estar en oposición evidente a los principios de igualdad y dignidad humana consagrados en el texto de la Carta de la Organización. Años más tarde con el inicio de los procesos de descolonización en Asia y África motivados en el principio de la libre determinación, los territorios coloniales aceptaron la independencia sobre la base del principio *rebus sic stantibus* con lo cual el elemento tomado en cuenta con respecto a los nuevos Estados independientes, fueron las fronteras y no los pueblos. Rodríguez-Piñero (2005) explica que la Doctrina del Agua Azul¹⁰² “excluyó a los enclaves de población indígena al interior de los estados independientes de la aplicación del principio o derecho de autodeterminación; y la construcción de los nuevos estados postcoloniales cristalizó el objetivo de la integración como principio rector del “buen gobierno” al interno de los estados”¹⁰³. Como resultado de esto la concepción estatocéntrica se fortaleció excluyendo cualquier movimiento que pudiera poner en riesgo el concepto de soberanía lo que por supuesto aislaba a los pueblos indígenas de cualquier aspiración de subjetividad en el DI. Ahora bien, la OIT por supuesto es una organización intergubernamental, lo que quiere decir que sus miembros son Estados soberanos, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que a través de sus funciones normativas y sus mecanismos de persuasión intente una mayor humanización de las condiciones de trabajo en todo el mundo. Es por ello que tomando en cuenta las condiciones de trabajo de los indígenas, la OIT empezó a convertirse en uno de los pilares fundamentales para la emergencia del DI de los pueblos indígenas que conocemos hoy.

En el Convenio 107 (1957) la OIT establece:

¹⁰²La Doctrina del Agua Azul o Agua Salada consideraba en el marco de la descolonización, que el principio de la libre determinación sólo podría invocarse desde territorios separados geográficamente de los territorios metropolitanos.

¹⁰³RODRÍGUEZ-PIÑERO, L.: “La OIT y los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional: del Colonialismo al Multiculturalismo” en Caminos hacia el reconocimiento, Wilhelmi, M. (coord.), Universitat de Girona, Girona, 2005, pág. 111

“Artículo 1. El presente Convenio se aplica: (a) a los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, cuyas condiciones sociales y económicas correspondan a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; (b) a los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, consideradas indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época que con las instituciones de la nación a que pertenecen (...)”

Esta definición no especifica la diferencia entre pueblos indígenas tribales o semitribales y deja por fuera el elemento de la autoidentificación. El contenido del Convenio 107 en general, no sería tomado en cuenta durante mucho debido a su contenido asimilacionista y su descredito de las culturas indígenas.

- c. Definición de pueblos indígenas planteada por la Organización Internacional del Trabajo según el Convenio 169 (1989):

“Artículo 1.

1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.”

Esta definición muestra algunos avances ya que incorpora una distinción entre pueblos indígenas y pueblos tribales, descarta la clasificación de pueblos semitribales,

señala a los pueblos indígenas como los que pertenecen a un país en época de conquista, pero, no excluye a los que se encuentran en el establecimiento de fronteras estatales y agrega el elemento de la autoidentificación o conciencia de grupo. Aunque novedosa, la definición del Convenio 169 sigue siendo muy ambigua, lo cual representa un problema para la aplicabilidad de derechos indígenas, quedando demostrado esto en el numeral tercero del antes mencionado artículo 1 cuando plantea que:

“3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.”

Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT es un reflejo del nuevo consenso internacional sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en un contexto que cada vez responde más al concepto de multiculturalidad. A este punto hay que aclarar que el Convenio 169 no se puede entender simplemente desde la lectura de su contenido, hay que comprender que un instrumento normativo como él surge de las acciones que se habían venido desarrollando en la comunidad internacional. Indudablemente el peso moral que tienen las normas de derechos indígenas existentes hoy en el DI, derivan directamente de la construcción socio-jurídica enmarcada en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración Universal de DDHH. Por tanto, no son normas independientes que surgen casualmente, responden a la evolución de una serie de principios y valores que afortunadamente siguen creciendo.

- d. Definición de pueblos indígenas planteada por el Relator Especial José Martínez Cobo. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, principal órgano subsidiario de la CDH de Naciones Unidas, recomendó en 1970 se hiciera un estudio sobre el problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas; para lo cual nombró como Relator Especial a José Martínez Cobo en 1971. El informe final del estudio se presentó en distintos momentos entre 1981 y 1984 y es contentivo de una nueva caracterización de los pueblos indígenas, a

saber: “Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales”¹⁰⁴.

Las características sobresalientes de ésta definición de Naciones Unidas son las siguientes: primero, señala a los pueblos indígenas como comunidades, pueblos y naciones que tienen continuidad histórica antes, durante y después de la colonización; segundo, identifica a los pueblos indígenas como sectores no dominantes de la sociedad lo que implica que deben ser reconocidos con sus características propias y diferenciadas del resto de la población; tercero, les confiere su identidad étnica contextualizada en un territorio que deben preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones, y, finalmente, reconoce sus modos de vida.

- e. Definición de pueblos indígenas desde la doctrina. Según Torrecuadrada (2001), “se consideran pueblos indígenas sólo a los grupos humanos descendientes de los que fueron objeto de conquista por los europeos, quedando al margen de este concepto aquellos cuya discriminación no traía causa de la colonización o la conquista europea, sino de los grupos dominantes dentro de la frontera del Estado en el que se encontraban radicados”¹⁰⁵.
- f. Definición de pueblos indígenas desde los propios pueblos indígenas. El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, sugiere la siguiente definición de los pueblos indígenas en la que destacan aspectos como la especialidad de su circunstancia diferenciada y particularidad cultural:

¹⁰⁴ E/CN.4/Sub.2/1986/7.

¹⁰⁵ Op. cit. pág. 35.

“(…) grupos poblacionales como los nuestros que desde tiempo inmemorial, habitamos las tierras en que vivimos, conscientes de poseer una personalidad propia, con tradiciones sociales y medios de expresión vinculados al país heredado de nuestros antepasados, con un idioma propio y con características esenciales y únicas que nos dotan de la firme convicción de pertenecer a un pueblo, con nuestra propia identidad, y que así nos deben considerar los demás”

Otra definición interesante es la que desarrolla el Consejo Indio de Sudamérica, aunque esta muestra más el rasgo de subordinación a la que históricamente han sido sometidos los pueblos indígenas. A saber:

“Los pueblos indios somos descendientes de los primeros pobladores de este continente: tenemos una historia común, una personalidad étnica propia, una concepción cósmica de la vida y, como herederos de una cultura milenaria, al cabo de casi quinientos años de separación, estamos nuevamente unidos para vanguardizar nuestra liberación total del colonialismo occidental.”¹⁰⁶

1.3.4. Los pueblos indígenas, ¿ciudadanos del mundo?

La DPPI (2007) ha sido el resultado de diálogos desgastantes y de un intenso proceso de negociación. Hoy, representa un paso adelante en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas y forma parte del cuerpo de protección de DDHH que se ha venido estructurando en la ONU desde hace 67 años. En el pasado siglo XX, los pueblos indígenas fueron reconocidos constitucional y legislativamente en muchos países, con lo cual ha habido una emergencia de países multiculturales y pluriétnicos, en los cuales se respeta y promueve el derecho diferenciado, se preparan programas pilotos de educación intercultural bilingüe y permanente, se demarcan y titulan territorios y se protege el patrimonio cultural. Sin embargo, aún hay rasgos

¹⁰⁶ Para un análisis mayor de las definiciones aportadas desde los propios pueblos indígenas, V. ORDÓÑEZ, J.: “Conceptualizaciones jurídicas en el Derecho Internacional Público moderno y la Sociología del Derecho: indio, pueblo y minorías”. Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1041/4.pdf>

notables de las actuaciones racistas y desiguales que históricamente fueron despojando a los pueblos indígenas de sus derechos fundamentales, su cultura, su religión y su tierra. Por tanto, no ha bastado sólo el reconocimiento normativo, todavía hay una brecha entre la teoría y la praxis que necesita ser atendida impostergablemente. Frente a esto, las protestas indígenas no deberían ser sorpresivas ni tomadas como algo aislado; es natural que las organizaciones indígenas se sientan decepcionadas y hasta frustradas al ver que los derechos reconocidos en vez de materializarse, se dispersan. La respuesta de los gobiernos ha sido como explica Stavenhagen (2009) “usar la fuerza para romper las protestas indígenas, los líderes son frecuentemente encarcelados y acusados de actividades criminales, se invoca la seguridad nacional y se implementa una legislación antiterrorista, que algunos gobiernos tienen la propensión de usar contra los activistas indígenas.”¹⁰⁷

A finales del siglo XX, algunas organizaciones indígenas lograron enviar delegaciones a Ginebra para exponer ante los mecanismos de protección de DDHH de la ONU sus preocupaciones y demandas. Ese fue el inicio de la DPPI (2007) que conocemos hoy y el comienzo de la actuación de los pueblos indígenas en la comunidad internacional. Ahora bien, en el estudio de sobre la personalidad jurídica de los pueblos indígenas hay dos temas claves a favor de los pueblos indígenas pero que siguen causando temor en los Estados Nación. El primero es el relativo a las violaciones de DDHH y la preocupación del Estado radica en las posibilidades de ser demandado ante una Corte Internacional por prejuicios causados a algún pueblo o comunidad según sea el caso. El segundo, es el tema de la libre determinación de los pueblos indígenas que va estrechamente ligado con la demarcación territorial y frente al cual los Estados Nación han levantado una campaña discursiva de protección de la soberanía para evitar la fragmentación territorial.

Esto deja ver que aún no hay entendimiento en los gobiernos de los Estados del verdadero contenido de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas. La

¹⁰⁷ STAVENHAGEN, R.: “Los pueblos indígenas como nuevos ciudadanos del mundo” en Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural sostenible, Álvarez, N., Oliva, J. y Zúñiga, N. (Eds.), Catarata, Madrid, 2009, pág. 21

demarcación territorial indígena como elemento fundamental para la libre determinación y la prevención de violaciones de DDHH es una obligación del Estado que no solo beneficia a los pueblos indígenas sino que además fortalece los sistemas democráticos. Este tema lo abordaremos con mayor profundidad en el capítulo IV.

1.3.5. Los pueblos indígenas y el Estado nación en América Latina: una reflexión sobre la negación

Para poder hablar hoy de los derechos indígenas hay una serie de cuestionamientos previos: ¿para qué sirven estos derechos?, ¿cuál papel o función tienen los derechos occidentales?, ¿qué posibilidades hay de avanzar en la reivindicación de derechos indígenas? En este sentido hay que analizar con anterioridad el concepto de los derechos desde una perspectiva hegemónica y contra hegemónica a partir de las cuales aparece el concepto de los derechos colectivos y de allí los derechos de los pueblos indígenas. A partir de la creación de los Estados Nación en América Latina a través de los procesos independentistas, se instauró una perspectiva mono étnica o si se quiere mono cultural bajo la construcción de las pautas de la cultura liberal occidental. La igualdad formal como elemento nuclear de esa estructura, hace que los indígenas “no existan”, debido a que los individuos que conforman el Estado son ciudadanos sin ningún tipo de diferenciación cultural.¹⁰⁸

Para la estructura del Estado era indiferente la diferenciación cultural, más bien tendía a eliminarse cualquier distancia a través de políticas igualitarias y de asimilación. La pauta formal en el siglo XIX fue la de la negación o la invisibilización de lo indígena, los Estados negaban la existencia de sujetos colectivos y por tanto las poblaciones indígenas no podían tener ningún tipo de relevancia jurídica, más allá de pocos derechos que empezaban a reconocerse en su favor. El estado negaba la diferencia cultural porque

¹⁰⁸ En la colonia hubo un modelo segregacionista, separación de la población en lo que se llamó pueblos indios y pueblos españoles, contando cada uno de ellos con su sistema de normas. Había, como premisa, la ideología de la inferioridad natural de los indios con lo cual se desarrolló el derecho indiano paternalista.

pretendía construir una ciudadanía homogénea y así cumplir también con el proyecto económico incipiente capitalista que se había empezado a desarrollar en Europa y que por tanto tenía que replicarse en América Latina¹⁰⁹.

Con la igualdad formal desde el siglo XIX empezaron a reproducirse los vínculos de subordinación material. Por tanto, es a partir del mencionado siglo que los procesos de asimilación cobraron más fuerza a través del mecanismo económico, educativo, el servicio militar, entre otros. El nuevo Estado Nación se construye, se expande territorialmente y se realiza mediante una negación jurídica de lo indígena con la aplicación del principio *res nullius* y mediante los mecanismos de asimilación. Así es posible observar cómo la expansión del territorio del Estado se hizo partiendo de la invisibilización, declarando las tierras como cosa de nadie, ahora bien, ¿en la actualidad es posible un resurgimiento del principio *res nullius*?; ¿está en la práctica una renovación del concepto? En una primera aproximación podríamos decir que la desamortización, la mercantilización y el cambio de régimen de los territorios del Estado —lo que era de la Iglesia ahora es del Estado—, ha generado cambios evidentes, sin embargo, lo que en un principio fue considerado *res nullius*, pareciera seguir siendo *res nullius*, lo demás cambió de titular. Desde finales del siglo XX los Estados Nación de América Latina han hecho el reconocimiento constitucional, convirtiéndose algunos en Estados pluralistas, cambiando el principio de igualdad al derecho a la diferencia e invitando al respeto por la cultura de los pueblos indígenas.

1.3.6. Pueblos Indígenas y Estado nación Venezuela

Akawayo, amorúa, añú, arawak, arutani, ayamán, baniva, baré, barí, caquetío, cumanagoto, chaima, e'ñepá, gayón, guanano, hoti, inga, japreria, jirajara, jivi, kari'ña, kubo, kuiva, kurripako, mako, makushi, ñengatú, pemon, piapoko, píritu, puinave, pumé, sáliva, sánema, sapé, timoto-cuica, waikerí, wanai, wapishana, warao, warekena, wayuu, uwöttuja, yanomami, yavarana, ye'kuana y yukpa. Venezuela es un país multicultural

¹⁰⁹ Los denominados “refritos” de idearios políticos, sociales y económicos han acompañado a América Latina desde el principio.

que reconoce y garantiza la existencia de sus pueblos y comunidades indígenas. El último Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadística (2011)¹¹⁰, indica que 725.128 venezolanos son indígenas, es decir, que representan el 2.2% de la población. En las diferentes Constituciones del país, anteriores a la de 1999 –en la que se reconoció plena y constitucionalmente la multiculturalidad venezolana, obligándose el Estado a garantizar la existencia de los pueblos y comunidades indígenas que complementan la venezolanidad-, se hacía referencia a los indígenas de una manera muy general, usando enfoques como la asimilación, la tutela y protección y la integración, con lo que sus derechos quedaban limitados. En este sentido, según Bello (2005) “la cuestión indígena, fue regulada desde la época republicana y hasta la época contemporánea, a través de una serie de decretos, resoluciones, y reglamentos destinados a la “protección”, “civilización”, “reducción” e “integración” de los indígenas a la vida nacional”¹¹¹; sin embargo, algunas Constituciones establecieron –aunque de una forma muy general- algunos principios para proteger a los indígenas y reconocer ciertos derechos particulares¹¹².

La CRBV (1999) reconoció por primera vez el carácter multiétnico y pluricultural del país, incluye un capítulo dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y ha favorecido la participación de representantes indígenas en espacios de poder de elección popular. Años después del reconocimiento constitucional, el legislador venezolano define a los pueblos indígenas en el artículo 3, numeral 1 de la LOPCI (2005) de la siguiente manera:

“1. Pueblos Indígenas: Son grupos humanos descendientes de los pueblos originarios que habitan en el espacio geográfico que corresponde al territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República

¹¹⁰ La información completa del Censo Nacional del año 2011 se encuentra en:
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=9

¹¹¹ Op. cit. pág. 34.

¹¹² Arts. 200 y 201 de la Constitución de 1811, art. 4 de la Constitución de 1858, art. 43 de la Constitución de 1864, art. 43 de la Constitución de 1874, art. 43 de la Constitución de 1881, art. 34 de la Constitución de 1901, art.80 de la Constitución de 1909, art. 58 de la Constitución de 1925, art. 72 de la Constitución de 1947, art. 77 de la Constitución de 1961.

Bolivariana de Venezuela y las leyes, que se reconocen a sí mismos como tales, por tener uno o algunos de los siguientes elementos: identidades étnicas, tierras, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y, sistemas de justicia propios, que los distinguen de otros sectores de la sociedad nacional y que están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras”.

Seguidamente, el legislador define a las comunidades indígenas en el artículo 3, numeral 2 de la LOPCI (2005) diciendo que:

“2. Comunidades Indígenas: Son grupos humanos formados por familias indígenas asociadas entre sí, pertenecientes a uno o más pueblos indígenas, que están ubicadas en un determinado espacio geográfico y organizados según las pautas culturales propias de cada pueblo, con o sin modificaciones provenientes de otras culturas”.

La LOPCI presenta definiciones novedosas en el contexto venezolano. No sólo define a los pueblos indígenas como los que desde el origen han habitado el territorio nacional, sino que además, reconoce coherentemente con la CRBV (1999), la autoidentificación de lo indígena desde la identidad étnica, su relación con la tierras, sus instituciones propias, su sistema de justicia y su organización comunitaria; como elemento diferenciador con el resto de la sociedad venezolana.

Por otra parte, desde el Poder Ejecutivo, los pueblos indígenas de Venezuela cuentan con un MPPI creado según su misión institucional, como órgano rector de políticas públicas gubernamentales para el ámbito indígena que facilite e impulse el fortalecimiento de la ancestral comunal indígena, como vía para la difusión de políticas creadas de forma colectiva desde la base, con fuerza para dar respuestas en corto y mediano plazo a las necesidades más urgidas de las comunidades con el objeto de fortalecer los pueblos originarios¹¹³. De igual manera, en el Poder Legislativo de Venezuela hay representación indígena e inclusive una Comisión Permanente de Pueblos Indígenas¹¹⁴ ante la Asamblea Nacional.

¹¹³ Cfr. <http://www.minpi.gob.ve/minpi/es/quienes-somos/mision-y-vision>

¹¹⁴ Véase: <http://www.asambleanacional.gob.ve/comision/id/10#diputados>

Finalizando éste apartado, se recuerda la afirmación que hace Torrecuadrada (2010)¹¹⁵ con respecto a que “se ha avanzado en la situación de los pueblos indígenas en Venezuela”, pero aún queda mucho por hacer; y es que frente a los importantes logros obtenidos, el avance en la implementación de las normas ha sido limitado, y los resultados, en la práctica ambiguos, debido a las dificultades de los funcionarios públicos para crear políticas con enfoque intercultural¹¹⁶.

1.3.7. Teoría sobre los territorios indígenas

Se abordarán cuatro nociones sobre lo que es y significa el territorio indígena.

a. El territorio indígena, desde una aproximación cosmológica. Jean Baudrillard y Edgar Morín (2003) lo explican de la siguiente manera:

- La conciencia de una ciudadanía común que hace de los pueblos indígenas ciudadanos de lo que Morín llama tierra-patria.
- La palabra “patria” evoca lo masculino y la paternidad, y la palabra “tierra” significa la dimensión femenina y materna.
- En la idea de patria existe una instancia materna de amor recíproco y una paterna que indica autoridad.
- En este sentido, la tierra es madre porque la humanidad proviene de una evolución biológica¹¹⁷.

b. El territorio indígena desde una aproximación histórica.

¹¹⁵ Op. cit. pág. 53.

¹¹⁶ AA.VV.: El Mundo Indígena 2011, Wessendorft, K. (Dir.), Ed. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Copenhague, 2011, pág. 133.

¹¹⁷ AA.VV.: La violencia en el mundo. Boudrillard, J. y Morin, E. Ed. Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2003, pág. 48.

- La consideración clásica es la que establece que una nación puede ser definida objetivamente de acuerdo con características elementales como el territorio.
- Sin embargo, cada vez se hace más evidente que ni los llamados métodos objetivos (lengua, raza, historia) ni los subjetivos ofrecen una definición de la nación, del concepto de “pueblo”, que fuera aceptada por todas las posibles partes implicadas en la determinación del sujeto del supuesto derecho de autodeterminación¹¹⁸.
- Este hecho obliga a que el principio de la libre determinación de los pueblos indígenas sea canalizado a través de la materialización de los derechos indígenas sobre el territorio.

c. El territorio indígena desde una aproximación del Derecho Internacional.

- El principio de la libre determinación de los pueblos fue concebido en un primer momento como un principio de las minorías que existieron en Europa a lo largo del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, desde 1885 con el Congreso de Berlín, hasta 1945 luego de la Segunda Guerra Mundial, pasando por 1914 y los Catorce Puntos de Wilson y finalmente 1919 con el Tratado de Versalles. En este lapso de tiempo el principio se basaba en que el Estado reconocía los derechos de las minorías en el contexto del Estado Nación incluyendo los derechos territoriales.
- Desde 1945 y específicamente durante el proceso de descolonización hubo una especie de “secuestro” del principio por parte de los Estados. A diferencia de la etapa anterior, los Estados reconocían los derechos de las minorías excluyendo los derechos territoriales.
- Luego del Informe Martínez Cobo, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en 1982 aprueba el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, volviendo así, a la consideración inicial del principio de libre

¹¹⁸ RUIZ, SEGUNDO (1998): La teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos. Ed. CEP, Madrid, pág. 57

determinación de los pueblos. En este sentido, se reconocen los derechos territoriales en el marco del ejercicio autónomo de los derechos internos de cada Estado Nación.

d. El territorio indígena como una discusión que aún no concluye.

- La noción de derechos territoriales indígenas es más amplia que la de política pública en tanto se asuma que el derecho al territorio sólo es posible a través de la materialización del derecho reconocido a través de políticas públicas.
- Las políticas públicas en tanto que requisito *sine quo non* es un instrumento para la definición y materialización de los derechos territoriales indígenas.
- Los derechos territoriales son la expresión concreta del principio a la libre determinación de los pueblos.

1.3.8. Tierras y territorios. Anverso y reverso de la cuestión

Aunque a simple vista estos conceptos pueden significar lo mismo, la Organización Internacional del Trabajo los ha diferenciado de la siguiente manera:

Tierras Indígenas: El artículo 13.2 de la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala que las tierras indígenas son propias de una o más comunidades indígenas. En Venezuela, la LOPCI (2005) las define en su artículo 3, numeral 4 como: “aquellas en las cuales los pueblos y comunidades indígenas de manera individual o colectiva ejercen sus derechos originarios y han desarrollado tradicional y ancestralmente su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política. Comprenden los espacios terrestres, las áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, asentamientos, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos y otras áreas que hayan ocupado ancestral o tradicionalmente y que son necesarias para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida”. Además, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) en el artículo 2, numeral 2 propone como tierras indígenas “aquellos espacios físicos y geográficos determinados,

ocupados tradicional y ancestralmente de manera compartida por una o más comunidades indígenas de uno o más pueblos indígenas”.

Territorios Indígenas: el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo define los territorios indígenas diciendo que incluyen la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Según la LOPCI (2005) en su artículo 3, numeral 5 el hábitat indígena: “es el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y socioculturales, que constituyen el entorno en el cual los pueblos y comunidades indígenas se desenvuelven y permiten el desarrollo de sus formas tradicionales de vida. Comprende el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna y en general todos aquellos recursos materiales e inmateriales necesarios para garantizar la vida y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

1.3.9. El territorio indígena como derecho colectivo

En relación con la titularidad de los derechos de los pueblos indígenas y de los individuos que los integran, hay que distinguir entre una titularidad individual genérica¹¹⁹, una titularidad individual específica¹²⁰ y una titularidad colectiva. Andrés García (2001) aborda la última titularidad definiendo los derechos colectivos como “derechos de naturaleza colectiva que no son derechos de los individuos, sino del grupo social que conforman esos individuos, y al cual pertenecen, por encima incluso de esos mismos individuos. Porque el grupo social no es la mera suma de los individuos que lo componen, sino algo más; y, a ese algo más es que se refiere el derecho”¹²¹. Por su parte Raz (1986), propone que “los derechos colectivos son colectivos e individuales; colectivos, porque el interés individual de alguien no es razón suficiente para justificar la

¹¹⁹ Según el Registro del estado actual del Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los DDHH y libertades, reconocidos en la Carta de la ONU, la Carta de la OEA y el DI de los DDHH.

¹²⁰ Este tipo de titularidad está referida al catálogo de derechos especiales que se han reconocido a favor de grupos vulnerables como niños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, ancianos.

¹²¹ Op. cit., pág. 46.

imposición de un deber correlativo, e individuales, porque sirven a los derechos de los seres humanos individualmente considerados¹²².

El territorio como derecho colectivo de los pueblos indígenas es un elemento esencial para analizar el contexto de la cuestión indígena en general y alcances democráticos dentro de cada Estado Nación en lo particular. Así, Bello (2005) nos recuerda que en Venezuela, “las tierras indígenas son un derecho originario de propiedad colectiva que tiene como características especiales, el ser una propiedad originaria, indivisa y con limitaciones a la libre disposición en el sentido de que la Constitución establece que no puede ser enajenada, no es susceptible de prescripción adquisitiva por parte de terceros, no puede ser embargada por órganos jurisdiccionales, ni transferida legalmente”¹²³. Asimismo, en Venezuela la propiedad colectiva indígena se encuentra establecida en el artículo 3, numeral 12 de la LOPCI (2005) en el cual se señala que “es el derecho de cada pueblo y comunidad indígena de usar, gozar, disfrutar y administrar un bien material o inmaterial, cuya titularidad pertenece de forma absoluta e indivisible a todos y cada uno de sus miembros, a los fines de preservar y desarrollar la integridad física y cultural de las presentes y futuras generaciones”. Se entiende de ésta definición que el territorio como bien material e inmaterial (elemento mitológico) es objeto de propiedad colectiva.

Territorio indígena: ¿por qué y para qué? “Soy el portavoz del Consejo de las Seis Naciones, la Sociedad de las Naciones más antigua que existe. Fue fundada por Hiawatha. Es una Sociedad que sigue viva y que intenta defender lo mejor posible el derecho de los iroqueses a vivir con sus propias leyes en los pequeños países que les han dejado a adorar al Gran Espíritu a su manera y a disfrutar de derechos tan suyos como los del hombre blanco”¹²⁴. ¿Por qué los pueblos indígenas reclaman sus territorios? La territorialidad indígena posee elementos objetivos y subjetivos. Los elementos

¹²² RAZ, JOSEPH (1986): The morality of freedom. Ed. Clarendon Press. Oxford, págs. 208.

¹²³ Op. cit. pág 34.

¹²⁴ Extracto del último discurso de Deskaheh del libro “Llamados básicos de la conciencia”.

objetivos¹²⁵ están señalados en la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) en su artículo 2, numeral 1, el cual dice: “hábitat indígena es la totalidad del espacio ocupado y utilizado por los pueblos y comunidades indígenas en el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política; que comprende las áreas de cultivo, caza, pesca fluvial y marítima, recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales, caños y vías fluviales, lugares sagrados e históricos y otras necesarias para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida”. En primer lugar, la ocupación se refiere a la presencia física de las comunidades indígenas en determinado territorio y a la conexión sociocultural que tienen con el mismo; en segundo lugar, el uso tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el territorio para garantizar sus modos de vida; la valoración se relaciona directamente con los lugares sagrados y el significado que ellos tienen.

El elemento subjetivo es el sentido de pertenencia y este está estipulado en la LOPCI (2005), a saber:

“Artículo 42. Vencido el lapso de la presentación de los alegatos y defensas, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, conjuntamente con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas involucrados, realizarán los estudios técnicos, socioculturales, físicos, jurídicos, y elaborará el informe de demarcación en un lapso de sesenta días continuos prorrogable por el mismo lapso, el cual contendrá los siguientes aspectos: 1. Situación cultural de los pueblos y comunidades indígenas: información detallada relativa al pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas de pertenencia; identificación, datos históricos, lingüísticos, socio-antropológicos, mapa mental y censo poblacional de la comunidad o grupo de comunidades indígenas involucrados (...) De igual manera, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2007) en el art. 25 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”.

¹²⁵ Son elementos objetivos porque son medibles geográfica y cartográficamente.

En este punto, se puede afirmar que en el territorio es el único lugar en el que se pueden garantizar las formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas, las lenguas, el patrimonio cultural, sus organizaciones políticas, su jurisdicción indígena, sus usos y costumbres ancestrales; sin el territorio se corre el riesgo de que los pueblos que hasta ahora han resistido, desaparezcan.

Ahora bien, ¿para qué exigen el territorio? En los territorios, las comunidades indígenas hacen su vida cotidiana, sus actividades socioculturales, políticas y económicas, quieren el territorio para garantizar a las generaciones futuras lo que ancestralmente les corresponde. Las comunidades indígenas, al menos en Venezuela, han venido desarrollando levantamientos de planes de vida para acudir a la institucionalidad del Estado y demostrarle para qué quieren la demarcación. Un plan de vida es una forma de ordenación de territorio, pero desde lo indígena, desde su cosmovisión, usos, costumbres y necesidades. Un proceso a través del cual se fortalecen los usos ancestrales del territorio que permiten garantizar las formas de vida.

Régimen de Administración Especial en Venezuela, ¿qué es y dónde puede aplicarse? Un régimen de administración especial es una forma de ordenación del territorio con la que se pretende regular las actividades económicas, sociales, políticas y culturales de un territorio determinado, en virtud de lograr una armonía entre la población, la optimización de la explotación de los recursos naturales y la protección del ambiente como objetivos del desarrollo integral¹²⁶. La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (2007) en su artículo 15 establece que constituyen áreas bajo régimen de administración especial, las áreas del territorio nacional que se encuentran sometidas a un régimen especial de manejo conforme a leyes especiales. Es de interés para éste trabajo el contenido del artículo 16, que en sus numerales 4 y 9, considera áreas susceptibles de régimen de administración especial, primero: los sitios de Patrimonio Histórico-Cultural o Arqueológicos, compuestos por aquellas edificaciones y monumentos de relevante interés nacional, así como las áreas circundantes que constituyan el conjunto histórico artístico y arqueológico correspondiente; y, segundo, las Reservas de Biósfera,

¹²⁶ Cfr. Art. 2 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983).

compuestas por aquellas zonas en la que se combinan la presencia de biomasa naturales que deben ser preservadas por su alto valor científico y biológico con la existencia de poblaciones locales caracterizadas por modos de vida en lo económico, social y cultural, que configuran un especial sistema de relaciones hombre-espacio.

1.4. Alcances concretos del tema

Este trabajo ha requerido un marco conceptual que hiciera posible visualizar los postulados propuestos y también ha necesitado una serie de herramientas de análisis que permitan abordar el problema planteado. En este apartado se revisará cómo las teorías anteriormente expuestas se relacionan entre sí, produciendo efectos jurídicos inmediatos sobre los territorios indígenas y el Estado Nación Venezuela.

1.4.1. El contexto venezolano: una nueva realidad social, política y jurídica

En Venezuela, al igual que en otros países de América Latina, el movimiento indígena ha emergido progresivamente y con diferentes niveles de exigencias frente al Estado. En la década de los 70 se inició la experiencia de la educación intercultural bilingüe, a finales de los años 80 comenzó a crecer un movimiento indígena nacional, especialmente con la celebración del Primer Congreso Nacional Indígena de Venezuela (1989) y la creación del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE)¹²⁷, como instancia principal de reivindicación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el país. En los años 90 surgió una serie de organizaciones indígenas regionales como la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA)¹²⁸ y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ), entre otras, con la finalidad de asumir la defensa y promoción de los derechos indígenas en cada uno de los

¹²⁷ Véase: <http://www.conive.org/>

¹²⁸ Fundada en 1993 para defender los derechos de 19 grupos indígenas que viven en el Amazonas y que a pesar de representar el porcentaje más alto de población indígena del país están políticamente marginados. Véase: <http://www.coica.org>

estados. Se crearon nuevas áreas bajo régimen de administración especial para la defensa de los territorios indígenas y de los lugares sagrados. Podemos observar cómo durante las últimas décadas del siglo XX, las organizaciones comunitarias de base, las organizaciones regionales y la organización nacional fueron adquiriendo diferentes niveles de conocimiento sobre sus derechos y eso los llevó en 1999 a participar activamente en el proceso constituyente que concluyó con el reconocimiento constitucional de sus derechos.

A partir de los cambios constitucionales y sociales de 1999 se ha ido construyendo la base para elaborar estrategias democráticas en favor de la participación popular en general y de la participación popular indígena en particular. Es por ello que, para que el Estado pueda cumplir con los derechos reconocidos en la CRBV (1999) son necesarias las siguientes prácticas:

- La participación popular debe surgir y operar desde las bases. Para que la democracia participativa pueda lograr sus objetivos transformadores de estructuras, debe producirse desde las organizaciones de base. Ya René de León (1988)¹²⁹ lo planteaba al decir que “la práctica democrática se convierte rápidamente en un hábito. Adquirido como actitud de vida, permitirá también, en una segunda instancia, que la participación en las organizaciones funcionales se convierta también en democrática: ya la base aleccionada no admitirá más líderes dictatoriales y adoptará actitudes críticas frente a la comunidad más amplia”.
- La participación popular debe ser consciente. Cada uno de los individuos que hacen parte del proceso debe ser absolutamente consciente de su propia responsabilidad y de la del grupo al que pertenece. Ello requiere naturalmente un proceso de formación intensa y permanente que permita a la base comprender la magnitud de su responsabilidad. Vladimir Aguilar en la comunidad Wayuuma’ana en la Sierra de Perijá lo explicaba a los indígenas diciendo: “si tiene que haber un compromiso, trabajar un poco en el sentido del trabajo que se realiza desde las bases, el plan de vida

¹²⁹ DE LEÓN, R.: “Concepción ideológica de la participación popular” en América Latina y África en la perspectiva comunitaria, Ponencias de las VI Jornadas Internacionales sobre Pensamiento Comunitario, Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Los Andes, Mérida, 1988, pág. 95.

es un compromiso y por eso es que tenemos que continuar el trabajo ahora para llevarnos la mayor parte de los insumos que nos permitan al menos prefigurar algunas cosas que no son otra cosa que lo que ustedes ya han realizado”.

- La participación popular debe ser eficiente. Es indispensable que conlleve un grado, cada vez más avanzado, de capacitación técnica. Los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela han ido entendiendo esto de la manera correcta. En la comunidad Wayúuma’ana, por ejemplo, se han organizado con una radio comunitaria en la que permiten hacer llegar las dudas y exigencias de los hermanos wayuu que habitan la Sierra de Perijá a toda la colectividad, además, a través de la radio se comunican y se enteran de las distintas actividades y movilizaciones que en pro de su lucha se realizan. Otro ejemplo puede ser el de la Federación Estudiantil Indígena de la Universidad de Los Andes (FEIULA), que ha surgido sin fines políticos sino plenamente organizativos. Estos jóvenes han articulado una serie estatutos para coordinar de la mejor manera su estancia en la Universidad de Los Andes como nuevo hábitat y territorio. Un tercer ejemplo es el del grupo de estudiantes Uwöttuja de la FEIULA que ha logrado hacerse un espacio en una radio comunitaria en la que los domingos producen un programa a través del cual informan a sus compañeros estudiantes indígenas y criollos sobre sus distintas actividades.
- La participación popular debe vivirse democráticamente. No basta “ser” democrático. Es necesario que la organización lo sea también, desde el punto de vista estructural. Ello requiere una estructuración que partiendo de la base, se proyecte a nivel nacional. En este sentido, hay que resaltar que desde la organización democrática, los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela llegaron a la ANC con todas sus propuestas, que para llegar a la ANC con sus propuestas tuvieron una serie de reuniones y consensos a nivel nacional; por tanto, las dificultades a las que se enfrentan hoy en cuanto a la materialización de sus derechos no pueden fragmentarlos. Deben mantenerse fuertes desde las bases para que a través de la participación ciudadana sea posible lograr el ejercicio pleno de los derechos reconocidos.

1.4.2. El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas en Venezuela

Carlos Ayala, profesor de derecho constitucional de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la nueva constitución venezolana contiene un *corpus iuris* relativo a los derechos humanos en general y a los derechos indígenas en particular, que en términos generales constituyen normas modélicas en el derecho comparado¹³⁰. La CRBV (1999) reconoce derechos específicos y colectivos de los pueblos indígenas haciendo un rompimiento con el modelo de asimilación que se había dispuesto en las antiguas constituciones. La Constitución de 1999 establece uno de los catálogos más amplios y extensos de derechos indígenas en América Latina y hace un reconocimiento bastante avanzado, desarrollando las principales exigencias de los pueblos y organizaciones indígenas; incluyendo no sólo los aspectos materiales de su vida; sino también la mayoría de los rasgos esenciales constitutivos de su existencia y especificidad cultural¹³¹.

Es importante resaltar nuevamente que uno de los aspectos más relevantes del reconocimiento es que se identifica a los pueblos indígenas como sujetos de derecho a manera individual y colectiva, con identidades sociales y culturales propias, distintas al resto de la población venezolana. Por supuesto que los pueblos indígenas al ser ciudadanos venezolanos gozan de los mismos derechos individuales y colectivos que tienen los demás venezolanos, pero, es lo relativo a su condición cultural y social, la que convierte al reconocimiento en una herramienta para la diversidad y sus derechos especiales deben ser garantizados y exigidos.

¹³⁰ AYALA, C.: “Prólogo” en Los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de Venezuela de 1999, COLMENARES, R. Ed. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2001, pág. 28.

¹³¹ BELLO, L.: “Los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Venezuela. Reconocimiento jurídico, Situación y perspectivas” en Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina, APARICIO, M. (ed), Icaria, Barcelona, 2011, págs. 269-270.

Artículo	Relación con el Derecho al Territorio
120. Consulta	<p>“El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e igualmente está sujeta a previa información y consulta (...)”</p> <p>Este derecho sólo puede materializarse en el territorio, por eso la importancia de la demarcación.</p>
121. Educación intercultural bilingüe	<p>“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados de culto (...) tienen derecho a una educación propia y aun régimen educativo de carácter intercultural bilingüe”</p> <p>No puede haber identidad étnica, cultura ni educación intercultural bilingüe sin territorio.</p>
122. Salud	<p>“Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá la medicina tradicional y las terapias complementarias”</p> <p>En el territorio es donde crecen las hierbas que son utilizadas para su práctica medicinal y en el territorio es donde se encuentran los lugares sagrados donde se llevan a cabo sus rituales.</p>
123. Autogestión territorial	<p>“Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezca sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sostenible”</p> <p>Con la demarcación se pueden fortalecer las actividades de autogestión, lo que contribuye a la eliminación de la práctica del asistencialismo. Una vez más, estas actividades de autogestión y demás prácticas sólo son posibles en el territorio.</p>
124. Propiedad intelectual	<p>“Se garantiza y protege la propiedad colectiva de los conocimientos, tecnología e innovaciones de los pueblos indígenas”</p> <p>El patrimonio cultural y todo lo que de él se desprenda sólo puede existir desde el territorio.</p>
126. Cláusula de salvaguarda	<p>Los pueblos indígenas forman parte del Estado Nación y por ninguna causa deben separarse. Esta disposición constitucional fue producto de los debates constituyentes en los que algunos sectores conservadores del país, se opusieron al término “pueblos indígenas” puesto que promovía el desmembramiento del pueblo venezolano, creando una especie de “balcanización” del Estado Nación.</p>

Tabla 4. Derechos reconocidos y su relación con el territorio.
Fuente: Aguilar y Bustillos (2012). Modificaciones propias.

1.4.3. Marco jurídico indígena en relación al territorio de Venezuela

El contenido del derecho al territorio en Venezuela contiene desde el deslinde territorial de los pueblos y comunidades indígenas, hasta la autogestión que puedan lograr dichos pueblos a partir del fortalecimiento de sus formas específicas de vida. En cumplimiento con la disposición transitoria de la CRBV (1999) que establece: “la Asamblea Nacional en un lapso de dos años, legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos indígenas (...)” el poder legislativo venezolano ha sancionado leyes orgánicas y especiales contentivas de derechos de los pueblos indígenas en distintas áreas. Con un desarrollo jurídico desde la Constitución hasta las leyes especiales, la jerarquía del marco jurídico en torno a los derechos territoriales en Venezuela se estructura del modo ilustrado en la Figura 3.

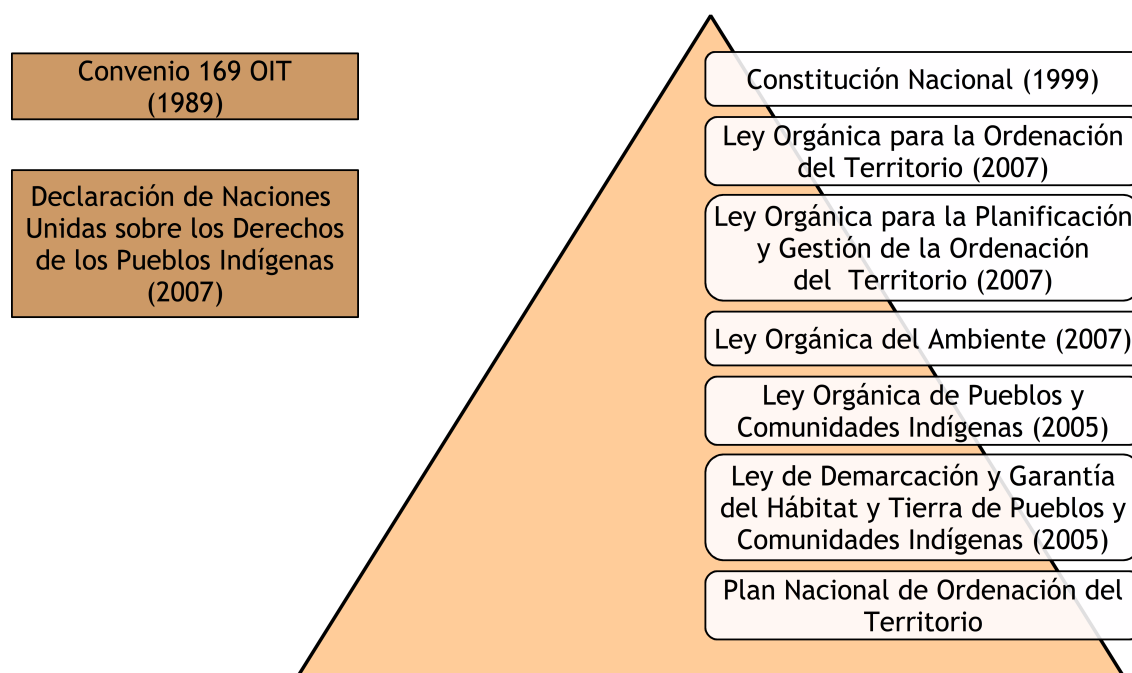


Figura 3. Marco jurídico indígena relativo al territorio.
Fuente: elaboración propia.

1.4.4. La demarcación como garantía de la propiedad colectiva del territorio indígena

Los derechos humanos resuenan como la más noble creación de la filosofía y de la teoría jurídica y como la mejor muestra de que las aspiraciones universales y la modernidad tuvieron que aguardar la llegada de la cultura posmoderna global para recibir su muy merecido reconocimiento¹³². Una de las reivindicaciones fundamentales de los pueblos indígenas a lo largo de su historia ha sido la relativa a sus territorios, y, ahora estando reconocidos, han sido normados tanto en el Derecho Internacional como en el derecho nacional. En Venezuela se ha desarrollado todo un ordenamiento jurídico interno en concordancia con lo establecido en instrumentos jurídicos internacionales y en la CRBV (1999); pero, para el ejercicio del derecho al territorio es imprescindible realizar con carácter previo la demarcación territorial¹³³. En Venezuela la responsabilidad en materia de demarcación recae sobre el Ejecutivo Nacional, que a través del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente, su Secretaría Técnica Ejecutiva y sus comisiones nacionales y regionales; trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los pueblos y comunidades indígenas, como órgano consultivo interministerial; se encarga de llevar a cabo el proceso de demarcación. El planteamiento inicial para el proceso de demarcación se detuvo debido a que la Comisión tenía un procedimiento decisorio complicado en lo que se refería al umbral mínimo exigido para la adopción de decisiones. En este sentido, la LOPCI (2005) amplía el alcance de la Comisión convirtiéndola en el órgano sobre el cual se edifica ahora el proceso de demarcación, respaldada por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. La LOPCI (2005) significó un gran avance al unificar el proceso de demarcación territorial. En la siguiente tabla se pueden observar las disposiciones de la ley.

¹³² DOUZINAS, COSTAS (2008): El fin de los derechos humanos. Ed. LEGIS, Antioquia, pág. 1.

¹³³ TORRECUADRADA, S. (2010) Op. Cit. Pág. 100.

Artículos LOPCI	Contenido
Art. 33 De la participación de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas	“Las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas y las organizaciones indígenas participarán en la planificación y ejecución de las actividades de demarcación a los fines de facilitar entre otros aspectos, el levantamiento topográfico y cartográfico del hábitat y tierras indígenas a demarcar. En el proceso de demarcación se le dará especial importancia a los conocimientos ancestrales y tradicionales aportados por los ancianos y ancianas indígenas sobre la ocupación del hábitat y tierras”
Art. 34 De las instancias de la Demarcación	“El procedimiento de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas estará a cargo del Ejecutivo Nacional por órgano del ministerio competente según lo previsto en la ley que rige la materia. La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas y las comisiones regionales de demarcación o, los entes que a tales fines sean creados, actuarán por órgano del ministerio con competencia en esta materia, de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias”
Art. 35 De los recursos	“El Ejecutivo Nacional, a través de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dispondrá de los recursos humanos, económicos, científicos y tecnológicos necesarios para la demarcación del hábitat y tierras indígenas. El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar debe prestar todo su apoyo científico, tecnológico y logístico en el proceso de demarcación del hábitat y tierras indígenas”
Art. 36 De la información	“La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas y las comisiones regionales, requerirán de los órganos del Poder Público Nacional, estatal y municipal, toda la información que dispongan sobre los pueblos y comunidades indígenas que guarden relación con el proceso de demarcación”
Art. 37 De la subsanación	“La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas y las comisiones regionales, podrán en cualquier momento subsanar las faltas o vicios de índole administrativo que puedan surgir durante el procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas, de lo que deberán ser notificados los interesados”
Art. 38 Del inicio del procedimiento	“El procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas se iniciará de oficio o a solicitud del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas, directamente o a través de sus organizaciones indígenas

	<p>previstas en esta Ley. Corresponde a las comisiones regionales de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas el inicio del procedimiento, la apertura y sustanciación del respectivo expediente. Cuando el procedimiento de demarcación se inicie a solicitud de parte interesada, en forma oral o escrita, se requerirá la siguiente información: 1. Identificación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas de pertenencia. 2. Identificación de las autoridades legítimas o representantes del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas o de sus organizaciones indígenas. 3. Población estimada. 4. Ubicación geográfica, indicando en forma práctica los linderos aproximados del hábitat y tierras solicitadas, así como otra información geográfica, expresando si son compartidos con otros pueblos y comunidades indígenas. 5. Documentos de cualquier naturaleza sobre el hábitat y tierras indígenas a demarcar, si los hubiere. 6. Proyecto de demarcación o autodemarcación del hábitat y tierras indígenas, si lo hubiere. 7. Existencia de terceros no indígenas dentro del hábitat y tierras indígenas. 8. La dirección donde se harán las notificaciones y la firma del o los solicitantes. 9. Cualquiera otra información necesaria para la demarcación. Si la solicitud es presentada en forma oral, se levantará un acta al efecto. En cualquiera de los casos, se dará constancia del recibo de la petición. Cuando el procedimiento se inicia de oficio, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas ordenará la apertura del expediente y librára las boletas de notificación correspondiente. En todo lo demás se regirá conforme al procedimiento de solicitud de parte”</p>
--	---

Tabla 5. Unificación de los criterios para la demarcación territorial.

Fuente: Aguilar y Bustillos (2012), Modificaciones propias.

De acuerdo a lo anterior, el proceso de demarcación se lleva a cabo en cuatro pasos; el inicio del procedimiento, la recolección de información para construir el expediente, cierre del procedimiento y finalmente la titulación colectiva. Al concluirse el lapso para la discusión del expediente de demarcación, la Comisión Nacional dentro de los cinco días hábiles siguientes debe pronunciarse mediante un dictamen de demarcación y titulación¹³⁴.

¹³⁴ El título de propiedad deberá ser entregado por la Procuraduría General de la República en máximo 30 días hábiles.

En este punto, luego de enumerar el procedimiento y sabiendo que la LOPCI está vigente desde el año 2005; es necesario aclarar que en el año 2011 se promulgó un Decreto Presidencial¹³⁵ que le cedió la competencia de la demarcación de los territorios indígenas al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; y, luego a través de una reforma parcial del Decreto¹³⁶, a la Vicepresidencia de la República. Producto de ésta situación de contradicción jurídica, las comisiones que antes habían sido creadas por el Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente para llevar a cabo el proceso de demarcación no están operativas. Hasta el momento no hay una regulación nueva, por tanto el proceso de demarcación se encuentra estancado.

1.4.5. Autodemarcación, el surgimiento de una política pública “bottom-up”

“Nuestra tierra está rodeada de muchos significados y muchas formas en las que estamos viviendo. Estas selvas, montañas, ríos, rocas son las almas en las que vivimos, es el corazón de nuestra comunidad. Es el punto principal, el alma viva, si este corazón se muere, todos moriremos. Todo lo que nuestro Dios creador del mundo nos regaló este corazón de las selva a nosotros, no queremos entregarlos a otras gentes que no tengan nuestra propia sangre desde nuestros padres ancestrales. No queremos regalar nada de este corazón de las selvas, está prohibido que personas ajenas toquen o lleven cosas fuera de esta comunidad (...)”¹³⁷

Las dificultades por alcanzar la titularidad territorial en Venezuela, están subsumidas en un abanico de limitantes y serias diferencias estructurales¹³⁸, ejemplo de

¹³⁵ Cfr. Decreto Presidencial Núm. 7.855 del 26/11/2010, Gaceta Oficial Núm. 39.624.

¹³⁶ V. Reforma Parcial al Decreto Presidencial 7.855.

¹³⁷ Fragmento del documento comunitario suscrito por los Hotĩ de Kayamá, Municipio Cedeño, estado Bolívar y firmado el 29 de abril de 2010 por los representantes electos para la Demarcación Territorial de Nĩ Hotĩ Ne-Jwabekĩ jkyo, iniciada en septiembre de 2010.

¹³⁸ STANFORD, E.: “Un largo y sinuoso camino: breve historia de la Autodemarcación Territorial Jodĩ en su décimo aniversario” en El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural. Políticas Públicas y

ello es el cambio permanente de los procedimientos para la demarcación, la limitación financiera para asistir a las comunidades indígenas en sus demarcaciones y los esfuerzos por imponer un modelo único de demarcación entre grupos cultural y ambientalmente diversos. Esas dificultades han llevado a los pueblos indígenas a encontrar su propia forma de demarcar: la autodemarcación.

Primero hay que decir que no existe en DI un desarrollo del concepto. Pese a ello, la autodemarcación es entendida como un proceso de deslinde llevado a cabo por los propios sujetos de derecho (los pueblos indígenas) y que es validado por el Estado, siguiendo la misma normativa de la demarcación¹³⁹. La autodemarcación se sustenta en los planes de vida¹⁴⁰ como herramienta jurídica y política para que los sujetos de derecho puedan materializar el derecho reconocido. En este sentido, el plan de vida es un instrumento de planificación a futuro para resguardar la cultura indígena como poblaciones culturalmente diferenciadas¹⁴¹.

A través de las matrices sobre las que se construye un plan de vida para la autodemarcación, es posible construir políticas públicas interculturales de aplicabilidad sobre el territorio donde se construyen; junto a las matrices, la etnocartografía territorial es fundamental para los planes de vida, ya que es a partir de esa herramienta que las comunidades indígenas indican cuáles son los usos que tienen sobre el territorio a través de mapas mentales.

Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010). BELLO, L. (ed), IWGIA, Copenhague, 2011, pág. 97.

¹³⁹ Cartilla de Derechos Territoriales Indígenas en Venezuela, GTAI y CEPESAL.

¹⁴⁰ El plan de vida es una política pública intercultural desde los territorios indígenas con el objeto de fortalecer su identidad territorial y cultural.

¹⁴¹ Entre los ejemplos de procesos de autodemarcación que se han dado en Venezuela se puede mencionar el proceso de autodemarcación del pueblo indígena Timote, el cual se soportó en los antecedentes jurídicos del Resguardo de Timotes y en el derecho consuetudinario derivado de la continuidad en el asentamiento de la población como comunidad indígena autorreconocida, en las áreas de aquel antiguo resguardo. Andrés Puig sostiene que, en la actualidad, la autodemarcación es un hecho obligatorio para lograr la asignación del espacio geográfico que ha sido su hábitat según lo expresa la LOPCI.

Capítulo II.

Origen y evolución del principio *res nullius*.

En el transcurso de la historia de la civilización occidental, una de las principales preocupaciones del hombre ha sido definir la propiedad. Ha habido un proceso largo y complicado para conceptualizarla y dotarla de garantías a través de una regulación normativa. Lo que se conoce hoy como propiedad, no necesariamente es lo mismo de lo que era en la época de Roma –sobre todo tomando en cuenta los distintos procesos jurídicos y políticos que tiene su historia–; pero sí tiene una raíz común y por tanto, una serie de elementos favorables y desfavorables a su alrededor. Al día de hoy, la propiedad es entendida como el poder jurídico ejercido por una persona en forma directa e inmediata sobre una cosa, que le permite su aprovechamiento total¹⁴², sin más limitaciones que las impuestas por la ley.

Ahora bien, el objeto del derecho a la propiedad establece que la cosa debe ser útil y susceptible de ocupación, pero, ¿qué sucede cuando se quiere lograr la propiedad sobre algo que ya es de alguien más?, ¿qué ocurre cuando una persona o un grupo de personas con un derecho para ser ejercitado *erga omnes* es obligado directa o indirectamente a dejar su poderío sobre la *res* contentiva de su derecho?, ¿es legal apropiarse de un derecho que naturalmente corresponde a otros? Estas y otras interrogantes se irán respondiendo a lo largo del capítulo a partir de un análisis del origen y evolución del principio *res nullius* como modo de adquisición de la propiedad, particularmente en lo relacionado con los territorios indígenas en Venezuela.

2.1. Roma

¹⁴² DOMINGUEZ, JOSÉ: Derecho civil. Parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez. Ed. Porrúa, México D.F., pág. 323

La propiedad es el goce pleno y absoluto sobre una cosa; y, los beneficios que otorga a su titular de acuerdo al derecho romano, son: *ius utendi*, *ius fruendi* y *ius abutendi*. Por *usus* se entiende el derecho de servirse de la cosa conforme a su naturaleza o destino, *fructus* el derecho a percibir los productos, sean reales o frutos en general; *abusus*, consiste en la facultad de transformar, enajenar y aún destruir la cosa.

La *propietas*¹⁴³, entendida desde la percepción romana, es absoluta, porque todas las facultades del titular que no están taxativamente prohibidas, quedan indeterminadas e infinitas; es perpetua, ya que no se extingue por el no ejercicio, ni lleva en sí una causal de extinción; es exclusiva, debido a que no se concibe una simultánea titularidad de dos o más sujetos sobre una misma cosa, ya que de lo contrario, se hablaría del condominio, basado en la coexistencia de varios derechos de propiedad de distintos sujetos, pero sobre partes alícuotas o ideales de una cosa¹⁴⁴.

En vista de las distintas circunstancias que pueden rodear un hecho jurídico, el derecho romano especificó dos modos para adquirir la propiedad: el modo originario y el modo derivativo¹⁴⁵. Para ésta investigación es importante referirse a uno de los modos originarios de adquirir la propiedad, la ocupación¹⁴⁶.

El derecho romano estableció el principio jurídico *res nullius* o cosa de nadie, para permitir que una persona adquiriera la propiedad a través de la posesión de una cosa que aparentemente no tenía dueño y que podía encontrarse fuera del alcance de la ley

¹⁴³ Término romano que acentúa la pertenencia absoluta y exclusiva de la cosa que es objeto de este derecho al titular del mismo.

¹⁴⁴ LOPEZ, SAMANTHA (2012): Derecho Romano I. Ed. Red Tercer Milenio, Tlalneplantla, pág. 161.

¹⁴⁵ AA.VV.: Tendencias actuales del Derecho Constitucional: Homenaje a Jesús María Casal Montbrun, 1ª ed., Casal, J., Arismendi, A. y Carrillo, C. (Coord.), Ed. Texto C.A., Caracas, 2007, pág. 448.

¹⁴⁶ Los otros modos eran: Accesión, se producía cuando una cosa se adhería a otra y ambas formaban una sola cosa, lo que significaba que el propietario de una de ellas, se hacía propietario de todo. Adjudicación, proceso que convertía la propiedad indivisa en propiedad separada. *Litis Aestimatio*, proceso judicial clásico del derecho romano para la reivindicación de una cosa.

civil romana¹⁴⁷. La *res nullius* por abarcar las cosas que eran susceptibles de apropiación dentro o fuera del territorio, ya sea por romanos o por extranjeros, configuraba el derecho positivo con las formas de adquisición reconocidas por la “razón natural” y el *Ius Gentium*¹⁴⁸. El jurista romano Gayo¹⁴⁹ propuso *quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur*, es decir, por razón natural lo que es de nadie se concede al ocupante. La *occupatio* era por tanto, la adquisición originaria de la propiedad mediante la posesión de la *res nullius*, pero, ¿sobre qué recaía el principio *res nullius* en Roma? Eran fundamentalmente dos las cosas que podían ser consideradas como tal: las que nunca habían sido del dominio de nadie y las que eran libremente abandonadas por sus dueños, es decir, las *res derelictae*. Un momento histórico importante en la aplicación del principio *res nullius* fue el siglo IV, cuando a través de las Constituciones Imperiales¹⁵⁰ se permitía que los denominados *agri deserti*¹⁵¹ -abandonados por sus dueños debido a estar expuestos a la invasión de los bárbaros-podían ser ocupados por cualquiera para que los cuidara y cultivara, transformándose la posesión en propiedad luego de transcurridos dos años sin que el dueño las reivindicase.

Ahora bien, cuando antes se dijo que fundamentalmente eran dos las cosas que podían ser consideradas *res nullius*, se dejaba la posibilidad para hablar de la ocupación como modo de adquirir la propiedad según el *Ius Gentium*. En el derecho de gentes la ocupación era importante debido a que los romanos podían hacerse propietarios de tesoros ocultos o adquirir nuevos territorios por causa de guerra, debido a que consideraban al enemigo *alieni iuris* y por tanto, ellos y sus bienes eran objeto de ocupación. Esta circunstancia de guerra también ocasionaba que el nuevo propietario territorial, se convirtiera en autoridad política del territorio ocupado.

¹⁴⁷ ABDO, C.: “La Cuestión de la Jurisdicción en la Teoría Política de la Modernidad Temprana” en *Direito, Estado e Sociedade*, núm. 44, 2014, pág. 18.

¹⁴⁸ Id.

¹⁴⁹ El trabajo del jurisconsulto Gayo fue base para la compilación jurídica de Justiniano.

¹⁵⁰ V. *Novellae Constitutiones*.

¹⁵¹ Lit. “Tierras ubicadas en los confines del Imperio”.

En todo caso, para adquirir la propiedad a través del modo originario de la ocupación, debía darse el concurso de tres elementos fundamentales. Primero, la idoneidad en la cosa para ser adquirida de tal modo. Aunque en el derecho romano clásico¹⁵² no se pueda establecer la diferencia entre *res nullius* y la cosa que puede ser apropiable, el derecho romano postclásico¹⁵³ fue afirmando, que la *res nullius* es susceptible de apropiación por el primero que la ocupare. Segundo, la aprehensión de la cosa. Al principio, el elemento material de la ocupación, era entendido de una manera rígida con la que se exigía la efectiva y real posesión de la cosa objeto de ocupación. Sin embargo, tiempo después, se admitió que el ocupante podía adquirir la cosa sólo para tenerla dentro de su esfera de acción¹⁵⁴ sin ser necesaria la posesión. Tercero, la intención de retenerla para sí. Para el derecho romano era irrelevante si el sujeto que poseía la cosa entendía que el efecto jurídico de hacerlo le otorgaba la propiedad; lo que se consideraba verdaderamente importante, era la intención de adquirir la cosa.

2.2. Edad Media

El sistema político-económico predominante en Europa después de la caída del Imperio Romano Occidental fue el feudalismo. Ganshof (1996) lo define diciendo que es “un conjunto de instituciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio por parte de un hombre libre, llamado “vasallo”, hacia un hombre libre llamado “señor”, y, obligaciones de protección y sostenimiento por parte del “señor” respecto del “vasallo”, dándose el caso de que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión, por parte del señor al vasallo, de un bien llamado feudo”¹⁵⁵.

¹⁵² Del 130 a.C. al 230 d.C.

¹⁵³ Del 230 d.C. al 527 d.C.

¹⁵⁴ ORTEGA, ANTONIO (1999): Derecho Privado Romano. SA Promotora Cultural Malagueña, Málaga, págs. 327-329.

¹⁵⁵ V. *Feudalism* de François Ganshof (1996).

Aldunate, E. y Cordero, E. (2008)¹⁵⁶ dicen que “el Feudalismo es una forma de organización política basada en la regulación de relaciones personales a través de instrumentos contractuales. Un hombre libre se encomienda a la protección de otro, comprometiendo para con él su lealtad y su servicio, y recibiendo de éste un beneficio, ya fuese un cargo, ya un territorio, al que posteriormente se conocerá de manera generalizada como feudo. El protector se convierte así en señor del protegido, que recibe el nombre de vasallo. Existe, al menos en teoría, un deber de lealtad y asistencia recíproca”. Se desprende de estas dos definiciones que el feudalismo era una forma de organización económica, enmarcada en la regulación de una relación recíproca entre un señor dueño de tierras, y, un campesino, que podía ser un hombre libre, un vasallo o un siervo; que terminaba adscrito a la tierra que debía cultivar y obligado con el señor en la lealtad, el servicio y en la entrega de beneficios económicos.

Así lo afirma Estepa (2010) cuando plantea que desde una perspectiva restringida del feudalismo se entiende que fue un modelo relacionado exclusivamente con los grupos dominantes, en el que “se reconoce la existencia de un fenómeno como el homenaje servil, aun siendo una imitación de las prácticas aristocráticas; por otra parte, cuando se habla de los vasallos, de la aparición del término (ya en época merovingia), de la evolución y extensión del mismo, nos hallamos con grupos sociales que van desde campesinos guerreros hasta señores con señoríos jurisdiccionales que establecen lazos feudovasalláticos entre sí, por no hablar de los condes respecto al príncipe o el rey, en una fase más madura del régimen feudal”¹⁵⁷.

La concepción del feudalismo en el materialismo histórico, considera el feudalismo un “modo de producción”, diferenciado del esclavismo y del capitalismo, caracterizado por el trabajo campesino como la principal base económica, de la cual era extraído el plusproducto en beneficio de una clase aristocrática propietaria de la tierra; a

¹⁵⁶ ALDUNATE, E. y CORDERO, E.: “Historia del pensamiento jurídico” en Revista de estudios histórico-jurídicos, núm. 30, 2008, págs. 345-385.

¹⁵⁷ ESTEPA, C.: “Notas sobre el Feudalismo Castellano en el marco historiográfico general” en Estudios sobre señorío y feudalismo. Homenaje a Julio Valderón, SARASA, E. y SERRANO, E. (eds.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, pág. 80.

diferencia del capitalismo el productor campesino disponía de los medios para sustentarse, en lugar de recibir un salario. En este sentido, la exigencia del tributo o la prestación de trabajo estaban sujetas a una normativa jurídica que existía para legitimarlas. Esta situación se sustentaba en las relaciones a las que estaba constreñido el campesinado que, tal y como lo señala Wickham, “sería un error por nuestra parte olvidar que todos los sistemas políticos, sociales y culturales del Medioevo estuvieron basados en la coerción sobre los campesinos, que representaban en muchos lugares el 90% y más de la población”¹⁵⁸.

Con lo anterior, no es complicado entender que las relaciones entre los hombres en el feudalismo están estrechamente vinculadas a la tierra, pues es precisamente la tierra la base principal de riqueza y beneficios sobre personas y sobre rentas. Había por un lado, un señor propietario de la tierra del que dependían otras personas con distintos derechos sobre la tierra; y por el otro, un dominio o un poder jerárquico entre hombres y tierras expresado en las distintas formas de participación feudal.

Pese a la notable relación de subordinación y la fragmentación del poder, el latifundio fue tomando cada vez más fuerza, independientemente de que la productividad de la tierra no fuera muy alta, ya que el sistema feudal le permitía al señor y a los campesinos cubrir sus necesidades. De esta manera, el antiguo modelo económico del Imperio Romano que estaba centrado en las ciudades y distribuido por el Mediterráneo, fue sustituido por la autosuficiencia del modelo latifundista.

Con la autosuficiencia de los latifundios, éstos se fueron organizando de manera política y jurídica, lo que les permitió sobrevivir a la caída del Imperio Romano Occidental. Tras el colapso estructural y funcional del Imperio, sucedieron las grandes invasiones a Europa; cuestión que no modificó el modelo feudal de la Península Ibérica. En este sentido, tomaremos lo planteado por Estepa (2010) para abordar el feudalismo castellano considerando lo siguiente:

¹⁵⁸ V. WICKHAM, CHRIS. “*Le forme del Feudalesimo*”, en *Il Feudalesimo nell’Alto Medioevo*. CISAM, Spoleto, 2000, págs. 15-46.

1. Lo público, el Estado antiguo, la mutación feudal y la cronología de la feudalización. En el esquema mutacionista se defiende la idea del básico mantenimiento del Estado antiguo, con su capacidad de exacción sobre los hombres libres, es decir de una fiscalidad, la cual con el tiempo se fue privatizando. Abordar el tema de lo público puede ser complicado tomando el contexto castellano en el que lo público y lo privado en muchas ocasiones se confundía, sin embargo los defensores de utilizar el término de “público” aluden especialmente a lo “fiscal” y es el tema tributario lo que debe interesarnos en este análisis. El impuesto de Roma, se heredó en Castilla en forma de renta y la renta significó por mucho una de las maneras en las que un hombre o un grupo de hombres ejercían un dominio sobre otros hombres en una relación de dependencia y subordinación.
2. La formación de los señoríos y la nobleza. Desde el inicio del feudalismo en Castilla en el siglo X, comenzó la configuración del poder señorial. Así la emergencia de los poderes locales sirvió de enlace en el control de las comunidades por los condes de Castilla. Tal configuración del poder señorial coincide con la formación de la nobleza. Ahora bien, los señores y los nobles no eran el mismo grupo social, la diferencia radicaba precisamente en la tenencia de la tierra ya que los bienes de la nobleza castellana por lo general no eran feudos sino heredades.
3. Feudos, vasallos e instituciones feudovasalláticas. La formación del feudalismo en Castilla es del siglo X, lo que hubo antes sólo eran aproximaciones, pues el concepto de feudalismo de la sociedad castellana comenzó operativamente cerca del año 1000. En la formación del feudalismo la propiedad dominical pudo extenderse desde un previo control señorial sobre la comunidad, algo que podría identificarse con un dominio señorial¹⁵⁹. El término vasallo se dio en Castilla desde el siglo XI y a pesar de que se le dio uso al término en distintos contextos, lo importante es que siempre la relación con el vasallo era la de dependencia que éste tenía bien del Rey, del noble o del señor.
4. El poder regio y las relaciones feudales.

¹⁵⁹ Sobre esto puede verse: ESTEPA, C.: “Poder y propiedad feudales en el período astur. Las mandaciones de los Flaínez en la Montaña leonesa”, en *Miscellània en Homenatge al P. Agustí Altisent*, 1991, págs. 285-327

En relación con lo anterior, Martín (2002) afirma que “la eclosión del feudalismo y su consolidación en Castilla trajo consigo la adaptación de los territorios a las nuevas condiciones sociales. El auge del poder aristocrático rentista, la formación de una estructura feudal de poder central y la integración de las comunidades en el señorío fueron elementos que afectaron el contenido de los territorios”¹⁶⁰. Sin embargo, con la llegada de los musulmanes y su ocupación, se instaló en la Península una nueva autoridad política, con una concepción distinta de la sociedad y de la economía, fundamentalmente por el tema religioso. Al empezar a materializarse los cambios jurídicos, políticos y sociales, los musulmanes comenzaron a buscar territorios para la llegada de grupos que era necesario asentar; hecho que produjo un rompimiento en el esquema latifundista, en vista de la ocupación por parte de otro sobre los dominios del señor feudal.

Durante la historia de la ocupación musulmana, los territorios bajo su dominación fueron una realidad cambiante debido a los constantes conflictos por la propiedad de la tierra; sin embargo, hubo sectores en los que no se dio penetración de la nueva autoridad política musulmana, lo que permitió que se estableciera una autoridad semejante al latifundio que había existido en épocas anteriores. En este sentido, los monarcas astur-leoneses y sus sucesores en León, Portugal y Castilla, llevaron a cabo la Reconquista; y, a medida que ésta avanzaba, iban donando grandes propiedades territoriales a la Iglesia y a otros señores; territorios que, al vencer al ocupante musulmán, eran declarados *res nullius* y por tanto susceptibles de ocupación.

Por tanto es indudable que las transformaciones que se dieron en Castilla entre los siglos XI y XV significaron la creación de un modelo que luego se replicaría, quizás con algunas modificaciones, en los territorios que la Corona al considerarlos *res nullius* iba dominando a través de los procesos de Reconquista y Conquista. En Castilla todo fue evolucionando pero el poder ejercido por pocos y la mentalidad de servicio sostenida por muchos, son elementos fundamentales para entender a la sociedad feudal en general y a

¹⁶⁰ MARTÍN, I.: “Territorios, poder feudal y comunidades en la Castilla septentrional (siglos XI-XIV)” en *Edad Media, Revista de Historia*, núm. 5, 2002, págs. 217-263.

Castilla en particular. Esos elementos no sólo definen a la Castilla feudal, dan una aproximación a lo que luego sucedió en América y que se sigue reflejando hoy en algunas realidades socio-políticas latinoamericanas.

2.3. De la Reconquista a la Conquista

En su crónica “Historia General de las Indias”, Francisco López de Gómara resume la coyuntura histórica: “Comenzaron las conquistas de indios acabada la de los moros, para que siempre guerrearán españoles contra infieles”. Con la toma de Granada el 2 de enero de 1492, se finaliza una guerra de setecientos años contra la invasión musulmana. Luego de terminada la guerra, el Rey Fernando vuelve a atender su problema en Aragón: la expansión mediterránea. Francisco Herrera Luque aborda este acontecimiento histórico diciendo: “Castilla, libre de un horizonte guerrero, se queda con las armas en la mano, sin saber qué hacer con ellas. En ese momento aparece América como una redención o una posibilidad. Por eso es fundamental para la comprensión del Nuevo Mundo y de los conquistadores, conocer la relación de ellos con la guerra de la Reconquista (...) la Reconquista para los guerreros de España fue sin duda la época dorada y fecunda de su existir”¹⁶¹.

2.3.1. Las Bulas Alejandrinas

La exploración del Océano Atlántico ocasionó disputas entre el Reino de Portugal y el Reino de Castilla, las cuales intentaron resolverse a través del Tratado de Alcáçobas en 1479 que posteriormente fue ratificado por los Reyes de Castilla en Toledo al año siguiente¹⁶². Este documento estableció un acuerdo diplomático entre el Reino de Castilla

¹⁶¹ HERRERA, FRANCISCO (1969): Viajeros de Indias, Ed. Santillana S.A., Caracas, pág. 129.

¹⁶² V. El trabajo realizado por VARELA, J. (1994) en la Universidad de Valladolid, titulado “El Tratado de Tordesillas en la política Atlántica Castellana”.

y el Reino de Portugal para alcanzar la concordia entre ellos; quedando determinado que los Reyes de Castilla (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón) renunciaban al trono de Portugal, y, a su vez, el Rey de Portugal (Alfonso V de Portugal) renunciaba al trono de Castilla. De igual manera, el Tratado dividía las zonas de exploración en el Océano Atlántico entre los dos Reinos para evitar nuevos conflictos posteriores; en este sentido, el Tratado otorgaba al Reino de Portugal la exclusividad y el control pleno de navegación en el Océano por la ruta de la costa africana¹⁶³.

Con la noticia de los hallazgos de Cristóbal Colón, el Rey Juan II de Portugal (hijo del Rey Alfonso V), expuso públicamente que las tierras descubiertas al otro lado del Océano pertenecían a Portugal, solicitando de forma inmediata ante la autoridad del Papa Alejandro VI, el reconocimiento de sus derechos sobre los nuevos territorios. En vista de esto, los Reyes de Castilla buscaron resolver la situación fundamentando jurídicamente el derecho de Castilla a la ocupación sobre los territorios descubiertos y los que estuvieran por descubrir¹⁶⁴. Bien que los Reyes Católicos considerasen insuficiente el título de ocupación, o que les pareciere suficiente y buscaran un derecho de exclusividad, acudieron al Papa Alejandro VI para que basándose en los acuerdos firmados en el Tratado de Alcaçobas-Toledo (1479), reconociera por medio de Bulas Papales el derecho sobre los descubrimientos de las Indias¹⁶⁵. Además, los Reyes de Castilla solicitaron al Papa que marcara un meridiano de demarcación sobre el Océano, en lugar del paralelo de Canarias, con el fin de delimitar el espacio donde cada uno de los Reinos pudiera actuar.

La atribución de territorios por decisión pontificia fue un procedimiento utilizado en los siglos XV y XVI, en la época de los grandes descubrimientos, al mostrarse los primeros movimientos de expansión europea fuera de las fronteras conocidas y significa uno de los medios más antiguos para determinar los derechos de los reinos

¹⁶³ AA.VV.: *Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América*, Verlinden, C. y Pérez-Embid, F., Ed. RIALP, Alcalá, 2006, pág. 36.

¹⁶⁴ Así se describe en la publicación titulada “El Papa Alejandro VI expide a los Reyes Católicos la Bula de la Donación” en la Memoria Política de México de Carmona-Dávila.
Véase: <http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/5/04051493.html>

¹⁶⁵ Castilla estaba repitiendo el mismo proceso que en el pasado había llevado a cabo el Reino de Portugal.

conquistadores. Hay que recordar la importancia política que tenía en la época la Santa Sede y en virtud de ella, estaba justificado el actuar jurídico del Soberano Pontífice en relación con las coronas cristianas.

En vista de la circunstancia, el Papa Alejandro VI intentó resolver el conflicto a través de un conjunto de documentos pontificios, denominados Bulas Alejandrinas, que otorgaban al Reino de Castilla el derecho de conquista sobre América y el deber de evangelizarla. No es el objeto de ésta investigación, estudiar todos los elementos de éstos complejos e históricos documentos, lo que se pretende es analizar y resaltar algunos aspectos de su contenido, tomando fundamentalmente la autorización que se da para la ocupación a través de la autoridad del Papa¹⁶⁶.

La primera Bula Alejandrina fue la *Inter Caetera*, fechada el tres de mayo de 1493; a través de la cual el Papa agradece a los Reyes de Castilla el “voto de confianza”¹⁶⁷ para resolver el conflicto, y establece que dona las tierras descubiertas a los Reyes de Castilla y León.

“(…) con pleno conocimiento y haciendo uso de la plenitud de la potestad apostólica y con la autoridad de Dios omnipotente que detentamos en la tierra y que fue concedida al bienaventurado Pedro y como Vicario de Jesucristo, a tenor de las presentes, os donamos concedemos y asignamos perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias; y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y deputamos señores de las mismas con plena, libre

¹⁶⁶ Ya durante los siglos XIV y XV se había hecho la aplicación de este sistema en los rescriptos y bulas de los papas Clemente VI, Martín V y Nicolás V, que habían atribuido a España las Islas Canarias y a Portugal la costa occidental de África.

¹⁶⁷ REMESEIRO, A.: "Bula Inter-Caetera de Alejandro VI (1493) y las consecuencias político administrativas del descubrimiento de América por parte de Colón en 1492". En: Colección Galeatus. Archivo de la Frontera, 2004.
Disponible en: <http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2011/08/GAL012.pdf>

y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción (...)”. (Fragmento de la Bula *Inter Caetera*, 1493)

Analizando el contenido del documento y tomando en cuenta las dos etapas históricas anteriores, el Papa Alejandro VI decide esta Bula *Inter Caetera* en base al principio de *res nullius*, por tanto dona a los Reyes de Castilla todas las tierras descubiertas y por descubrir que no pertenezcan a ningún príncipe cristiano y que por tanto fueran susceptibles de ocupación. Ahora bien, las tierras no eran de cristianos, pero “se sabía por los hallazgos de Colón que habían seres ferinos, desnudos y cubiertos de pelo, que habitaban en cuevas o en las ramas de los árboles en las espesuras aisladas de bosques umbríos. Gente con un vivir precario, cazadores o pescadores, sin leyes, ni propiedad, ni forma alguna de organización social o gobierno”¹⁶⁸; por tanto, considerados “salvajes” e “infieles”, condición que los privaba de ser sujetos de derecho y por tanto no podían tener la propiedad de la tierra descubierta.

La segunda Bula llamada *Eximiae Devotionis*, fechada también el tres de mayo de 1493, otorga al Reino de Castilla, en los territorios descubiertos, los mismos privilegios que a Portugal en los suyos; es decir, que a través de ésta segunda Bula, el Papa Alejandro VI reafirmó las concesiones que había hecho en la Bula anterior.

“(…)Y para que la realización de un negocio de tanta importancia que se os ha encomendado por la liberalidad de la gracia apostólica, la asumáis más libre y decididamente, por propia decisión, no a instancia vuestra o de otros que por vos Nos hayan dado la petición, sino por nuestra mera liberalidad y a ciencia cierta y con la plenitud de la potestad apostólica: todas y cada una de las tierras e islas ya citadas, así las desconocidas como las hasta ahora descubiertas por vuestros enviados y las que se descubran en adelante, que bajo el dominio de otros señores cristianos no estén constituidas en el tiempo presente; por la autoridad de Dios omnipotente concedida a San Pedro y del Vicariato de Jesucristo que ejercemos en la tierra, con todos los dominios de las mismas, con ciudades, fortalezas, lugares y villas y los derechos y jurisdicciones y todas sus pertenencias, a vos y vuestros herederos los reyes de Castilla y León, perpetuamente, por la autoridad apostólica, a tenor de la presente, donamos, concedemos y

¹⁶⁸ PERERA, MIGUEL (2000): Oro y hambre Guayana siglo XVI. Antropología Histórica y cronología cultural de un malentendido 1498-1597, Ed. Soc. Eclayre Rodríguez, Caracas, pág. 21.

asignamos y a vos y vuestros herederos mencionados investimos de ellas; y de ellas señores con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción, os hacemos, constituimos y diputamos; decretando, no obstante, que por semejante donación, constitución, asignación e investidura nuestra, a ningún príncipe cristiano pueda entenderse que se le quita o deba quitar el derecho adquirido (...)” (Fragmento de la Bula *Eximiae Devotionis*, 1493).

La tercera Bula también denominada *Inter Caetera*, fue firmada el cuatro de mayo de 1493 y por medio de ella, el Papa Alejandro VI, dona a los Reyes de Castilla las tierras descubiertas o por descubrir; vuelve a insistir en la obligación que tiene Castilla de evangelizar a los habitantes del nuevo mundo, para lo que exige se envíen “hombres probos temerosos de Dios” con la finalidad de que adoctrinen a los “indios” en la fe católica, pero lo más importante es que el Papa hace una nueva división en cuanto a las exploraciones oceánicas, debido a ésta última decisión del Papa, la segunda Bula *Inter Caetera* también es conocida como la Bula de donación-demarcación.

“Y para que más libre y valerosamente aceptéis el encargo de tan fundamental empresa, concedido liberalmente por la Gracia Apostólica “motu proprio”, y no a instancia vuestra ni de otro que Nos lo haya sobre esto pedido por vosotros, sino por nuestra mera liberalidad, de ciencia cierta y con la plenitud de nuestra potestad apostólica, por la autoridad de Dios Omnipotente concedida a Nos en San Pedro, y del Vicario de Jesucristo que representamos en la tierra, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores los Reyes de Castilla y León, para siempre según el tenor de las presentes, donamos, concedemos y asignamos, todas las islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar hacia el Occidente y Mediodía, fabricando y construyendo una línea del Polo Ártico que es el Septentrión, hasta el polo Antártico que es el Mediodía, ora se hayan hallado islas y tierras firmes, ora se hayan de encontrar hacia la India o hacia otra cualquiera parte, la cual línea diste de las islas que vulgarmente llaman Azores Cabo Verde cien leguas hacia el Occidente y mediodía, así que todas sus islas y tierra firme halladas y que hallaren, descubiertas y que se descubrieren desde la dicha línea hacia el Occidente y mediodía que por otro Rey cristiano no fuesen actualmente poseídas hasta el día del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo próximo pasado del cual comienza el año presente de mil cuatrocientos y noventa y tres, cuando fueron por vuestros mensajeros y capitanes halladas algunas de las dichas islas con todos los dominios de las mismas, con ciudades, fortalezas, lugares y villas, derechos, jurisdicciones y todas sus pertenencias (...) Y severamente prohibimos a cualquiera personas, sean de cualquier dignidad incluso la imperial y la real, estado, grado, orden o

condición, bajo pena de excomunión *latae sententiae*, en la cual incurran por el mismo hecho si lo contrario hicieren, que no pretendan ir a las islas y tierras firmes, hallada y que se hallaren, descubiertas y por descubrir, hacia el Occidente y mediodía, fabricando y construyendo una línea desde el Polo Ártico al Antártico, ya sean tierras firmes e islas halladas y que se hubieren de hallar hacia la India o hacia cualquiera otra parte, la cual línea diste de cualquiera de las islas que vulgarmente llaman las Azores y Cabo Verde cien leguas hacia el Occidente y Mediodía como queda dicho, para grangear mercaderías o por cualquier causa, sin especial licencia vuestra y de vuestros herederos y sucesores. Y porque también algunos Reyes de Portugal descubrieron y adquirieron en las regiones de África, Guinea y Mina de Oro otras islas, igualmente por apostólica concesión hecha a ellos, y les fueron concedidas por la Sede Apostólica diversos privilegios, gracias, libertades, inmunidades exenciones e indultos, Nos os concedemos a vosotros y a vuestros herederos y sucesores mencionados, que en las islas y tierras descubiertas por vosotros y que se descubrieren del mismo modo podáis y debáis poseer y gozar libre y lícitamente de todas y cada una de las gracias, privilegios, exenciones, libertades, facultades inmunidades e indultos, pues queremos que se encuentre expresado e incluido suficientemente en las presentes, como si estuviese aquí transcrito palabra por palabra, para que sea como si a vosotros citados herederos y sucesores hubiesen sido especialmente concedidos. Así pues con igual motu, autoridad, ciencia y plenitud de Potestad Apostólica y como especial donación graciosa concedemos todo ellos en todo y por todo, a vosotros y a vuestros indicados herederos y sucesores, con la misma extensión y amplitud. (Fragmento de la Segunda Bula *Inter Caetera*, 1493)

En este sentido, el Papa atribuyó, en bloque a Portugal las tierras situadas al Este (África y Asia), y a Castilla las del lado de Occidente (América y parte oriental del Pacífico). Los Estados excluidos del reparto (Francia, Inglaterra y Países Bajos) vieron con disgusto la decisión pontificia y se negaron a reconocer sus efectos, a pesar de la amenaza de excomunión formada en la propia bula contra los soberanos que no la aceptaran¹⁶⁹.

El cuarto documento fue la Bula *Piis Fidelium* del veinticinco de junio de 1493. Esta Bula otorgaba al eclesiástico aragonés Fray Bernal Boil, funciones y poderes de legado Papal en relación con el nuevo viaje que debía emprender hacía las nuevas Indias

¹⁶⁹ Sobre esto puede verse MANDELLI, H.: “Valor de las bulas papales como título justificativo del dominio de las Indias” en Revista Jurídica Dominicana, núm-44-45, 1953, págs. 145-154.

Cristóbal Colón¹⁷⁰. En este sentido, le concedía al Fray amplias facultades espirituales, lo que ocasionó que los Reyes de Castilla tiempo después lo enviaran a encabezar la evangelización en el Nuevo Mundo.

El quinto y último documento fue firmado bajo el nombre Bula *Duddum Siquidem* el veintiséis de septiembre de 1493. El contenido de ésta última Bula amplía la concesión de la primera *Inter Caetera*, señalando que serán para el Reino de Castilla las tierras que hubiera hacia la India.

“Nos, deseoso también de proseguir en vuestro favor graciosamente, con iguales motu, conocimiento y plenitud de poder, de igual modo ampliamos la donación, concesión, asignación y las dichas Letras con todas y cada una de las cláusulas en ellas contenidas por el tenor de las presentes a todas y cada una de las islas y tierras firme halladas y por hallar, descubiertas o por descubrir que estén, o fuesen o apareciesen a los que navegan o marchan hacia occidente y aun el mediodía, bien se hallen tanto en las regiones occidentales como en las orientales y existan en la India, en todo y por todo el tiempo y como si en las citadas letras se hiciese de ellas plena y expresa mención, a vuestros citados herederos y sucesores sobredichos materialmente y por vuestra propia autoridad o por otro u otros y perteanmente las retengáis contro todo aquel que a ellos se oponga, prohibiendo rigurosamente bajo pena de excomunió*latae sententiae* a cualesquiera, sea cualesquiera su dignidad, estado, grado, orden o condición aun cuando presuman de cualquier modo ir o enviar bajo apariencia algunas sus gentes a navegar, a pescar o a buscar islas o tierras firmes a las dichas regiones sin expreso y especial permiso vuestro o de vuestros ya citados herederos y sucesores”. (Fragmento de la Bula *Duddum Siquidem*, 1493)

Sobre el contenido de los documentos pontificios y su validez ha habido una amplia y larga discusión. Es interesante comparar algunos argumentos planteados por autores como A. Marta¹⁷¹, con los que posteriormente expuso García Gallo¹⁷². Con los

¹⁷⁰ AA.VV.: Introducción a la historia moderna, Martínez, E., Giménez, E., Armillas, J. y Maqueda, C., Ed. ITSMO, Madrid, 2000, págs. 93 y 94.

¹⁷¹ V. De Iurisdictione.

¹⁷² V. GARCIA-GALLO, A.: “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias” en Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 27-28, 1957-1958, págs. 461-830.

primeros, se afirmaba que la donación contenida en las Bulas Alejandrinas era una concepción en feudo y que los Reyes de Castilla, dueños de aquellas tierras por derecho de conquista y de ocupación, las enfeudaban a la Santa Sede. Luego, autores como Staedler¹⁷³ y Höffner¹⁷⁴ retomaron la discusión planteando que lo establecido en las Bulas Papales tenía carácter feudal, entre otras cosas porque la palabra investidura que aparece en la primera *Inter Caetera* es un término feudal y que éste modelo se perfila claramente en la segunda *Inter Caetera*, ya que el pago que se desprende de esa relación de jerarquía era compensado con la obligación de evangelizar que tenía el Reino de Castilla y, en cambio, la Santa Sede protegía al enfeudado amenazando con excomulgar a quien se atreviere a llegar a las tierras de Indias sin autorización de Castilla.

Posteriormente, García Gallo propone que el Papa Alejandro VI interviene en el proceso no para donar tierras, sino más bien para confirmar un derecho que la Santa Sede consideraba legítimo y por tanto, interviene en virtud de su autoridad y potestad apostólica, basándose en la doctrina de que los “infieles” eran *alieni iuris*. En otras palabras, el Papa Alejandro VI a través de sus documentos no donaba territorio, confirmaba un hecho que consideraba jurídicamente válido.

Teniendo en cuenta las mencionadas posturas frente a las Bulas Alejandrinas, es oportuno decir que la conclusión a la que ha llegado nuestro análisis sobre el contenido de las mismas, es que por una parte, el Reino de Castilla al llegar a las Indias, dio por hecho que ese territorio estaba bajo su dominio al ver que quienes habitaban allí eran “infieles” y por tanto no tenían derechos. Es decir, consideraron las tierras de Indias *res nullius* y procedieron a su ocupación. Los Reyes buscaron la autoridad del Papa no para establecer una relación feudal, sino más bien para tener a su favor una decisión emitida por la máxima autoridad espiritual de la época, cuyo criterio era prácticamente incuestionable. Ahora bien, más adelante se revisarán los modos políticos, jurídicos y

¹⁷³ V. Die Donatio Alexandrina.

¹⁷⁴ V. La ética colonial española.

económicos que se implantaron en Indias para verificar si corresponden o no, al menos en algunos elementos, al sistema feudal.

Cabe destacar que, no obstante la autoridad conferida por los documentos pontificios, la cuestión de la legitimidad de la ocupación de las Indias continuaría en discusión durante buena parte del Siglo XVI, como se observa en las *Relectio de Indis*¹⁷⁵ de Francisco de Vitoria, en las cuáles el abate confirma y complementa la teoría del dominio y su origen, al tiempo que trata temas relevantes del derecho internacional público de hoy, mediante las relaciones internacionales que surgieron del encuentro de los dos mundos. De Vitoria soluciona la cuestión del dominio lícito español sobre el Nuevo Mundo¹⁷⁶ fundamentado básicamente en su teoría del *dominium*. De igual manera, de Vitoria presenta las formas de adquisición y pérdida del dominio, distinguiéndolas en “títulos no legítimos” o argumentos jurídicos inválidos¹⁷⁷, por un lado, y por el otro “títulos legítimos” o argumentos válidos¹⁷⁸, los cuales se presentan a continuación:

Títulos no legítimos:

1. Dominio del Emperador y del Papa. En este titulo se comprende el *dominium* como la potestad existente sobre cosas y personas, y lo descarta porque frente al primero, rechaza la validez de su dominio universal, incluyendo el Nuevo Mundo, por carecer de fundamento en el derecho natural, divino y humano. Con respecto al segundo, de Vitoria rechaza el dominio civil y temporal del Papa sobre todo el orbe, también por carecer de fundamento en el derecho natural, divino y humano, aceptando solamente su potestad espiritual sobre las cosas espirituales de todos los cristianos, incluyendo los indios fieles convertidos. En este sentido, su potestad no llega hasta los indios no

¹⁷⁵ De Vitoria, F. (1529): *Relectio de Indis*. Edición crítica bilingüe por L. Pereña y J.M. Pérez Préndes, CHP-CSIC, Madrid. (1967)

¹⁷⁶ La *Relectio de Indis* parte fundamentalmente de si es lícito o no bautizar a los hijos de los infieles.

¹⁷⁷ ROCA, C. (1993): “De las bulas alejandrinas al nuevo orden político americano” en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, núm. 5, 1993, págs. 329-369.

¹⁷⁸ De Vitoria, F. (1529): (*Relectio de Indis*) Relecciones sobre los Indios y el Derecho de Guerra. Ed. Colección Austral, Madrid, pág. 54. (1978)

conversos, a quienes no se les debe obligar a aceptar este título de dominio, ni se les debe hacer guerra o despojarlos de sus bienes y territorios por el rechazo del mismo.

2. Título del descubrimiento o *ius inventionis*. Vigente dentro del derecho de gentes de la época, que no sólo exigía para su validez el acto de posesión efectiva del territorio, sino que éste fuera *res nullius* y por ello susceptible de ocupación. Sin embargo, de Vitoria descarta que este título sea una forma válida de adquisición del dominio, considerando que las tierras ocupadas no eran *res nullius*.
3. Alegar la infidelidad a la religión cristiana. El “pecado de infidelidad” se daba al rechazar la conversión a la fe cristiana después de la predicación y la exhortación.
4. Denunciar los pecados mortales de los indígenas. Al incumplir las obligaciones religiosas de escuchar la predicación y conocer la fe, así como llevar una vida digna y diligente, de acuerdo a la ley natural. Este título y el anterior son rechazados por de Vitoria debido a que las consecuencias de esa “infidelidad” y de los “pecados mortales” son más de carácter religioso que jurídico.
5. Denunciar los pecados mortales violadores de la ley natural. Este título estrechamente vinculado con los dos anteriores, también es rechazado por de Vitoria quien plantea que la carencia de potestad espiritual sobre ellos no le permite hacer guerra a los pecadores, ni puede por consiguiente confiscar sus tierras ni darlas a otros príncipes. Además, no tienen por qué acatar la sentencia del Papa quienes no sean cristianos, pues que por ningún otro título puede el Papa condenar o castigar, si no es por el de ser Vicario de Cristo, por lo que queda claro que este título no es procedente.
6. La elección voluntaria. El sexto título inválido es entendido por de Vitoria como un derecho válido en lo que respecta al traspaso del dominio, pero lo considera inviable en el encuentro de los dos mundos porque este derecho exige la inexistencia de vicios de la voluntad, lo que no era posible debido a que en la elección estaban presentes el miedo y la ignorancia.
7. Considerar el territorio como una donación especial de Dios. De Vitoria explica que este argumento se basaba en que “Dios condenó a los bárbaros a la perdición con motivo de sus abominaciones y que los entregó a los españoles”, por tanto, invalida este título diciendo: “dejando de lado el pecado de la infidelidad, hay entre algunos cristianos mayores pecados en las costumbres que entre estos bárbaros”.

Luego que de Vitoria desarrollara los títulos ilegítimos, entendió que el dominio sobre el Nuevo Mundo no puede ser fundamentado nada más en las formas originarias de ocupación o en el título del descubrimiento, ni en la elección voluntaria, por tanto se enfocó en un planteamiento teórico más complejo de derechos que permitan el dominio.

Títulos legítimos:

1. Sociedad y comunicación natural. El *naturalis societatis et communicationis*, conocido comúnmente como *ius communicationis*, es especialmente pertinente para el problema central de nuestro estudio y significa el primer argumento o título legítimo de importancia cardinal en el sistema teórico vitoriano, no sólo por ser el primer título que el autor propone como válido para la pérdida del dominio del amerindio y su adquisición por el español, sino sobre todo, por estar fundamentado principalmente en la doctrina de los bienes comunes¹⁷⁹. Etimológicamente, “sociedad y comunicación natural” contiene el término “comunicación” que proviene del latín *communis* que significa “común”, y de su forma verbal *communicare* que significa poner en común o compartir algo¹⁸⁰, lo que señala una acción social. Para Francisco de Vitoria la sociedad y comunicación natural es un principio fundamental del *ius gentium* natural en virtud del cual debe organizarse el *totus orbis*, y del cual derivan otros principios fundamentales como la amistad, reciprocidad, solidaridad, comunicación o participación de los bienes que uno posee. Ahora bien, es necesario precisar que se trata de un principio de derecho natural y en este sentido es válido para todos, sin reparar en nacionalidad o cultura, y que es necesario para la humanidad, debido a que exige la sociabilidad natural del hombre y el compartir de los bienes comunes. En este sentido los derechos que derivan de este principio tienen carácter imperativo justificando acciones como la intervención o la guerra justa en caso de no acatamiento, por tanto, sus consecuencias inmediatas son plenamente jurídicas y punibles. A este respecto, de Vitoria sugiere que se debe intentar un arreglo pacífico de las diferencias

¹⁷⁹ AÑAÑOZ, M. (2013): “La doctrina de los bienes comunes de Francisco de Vitoria como fundamentación del dominio en el Nuevo Mundo” en *Persona y Derecho*, vol. 68, 2013, págs. 103-137.

¹⁸⁰ *Ibidem*.

y si éste no fuera posible, sería lícito defenderse y hacer todo lo que sea conveniente para su seguridad, respondiendo a la fuerza con la fuerza¹⁸¹. Los derechos derivados son el *ius peregrinandi et degendi*, el *ius negotiandi* y el derecho de comunicación y participación de bienes comunes. Aunque los tres son importantes prestaremos atención especial a los argumentos planteados por de Vitoria sobre el *ius communicationis*, debido a que está estrechamente vinculado con la doctrina iusnaturalista de los bienes comunes de la teoría del dominio. La importancia del derecho de comunicación es tal que autores como Auat (2003) sostienen que los demás títulos legítimos aducidos por de Vitoria como posible justificación de la presencia de España en América están todos basados en *ius communicationis* entendido como derecho natural de todos los pueblos¹⁸², por tanto, apoyarse en el valor de la comunicación para plantear desde allí la comprensión del poder, significa una alternativa frente al problema de la irrupción de los pueblos nuevos en la conciencia internacional¹⁸³.

Para terminar con este título es necesario decir que el *naturalis societatis et communicationis* contempla la doctrina de los bienes comunes, que aunque proviene de un solo modelo teórico de dominio, recoge diversas influencias. Por otro lado, los derechos que se desprenden de él, están fundamentados en instituciones del *ius gentium*. La cuestión ética que necesitaría un examen mayor tal y como lo plantea Añaños (2013), es conoer si los derechos y libertades se encuentran en contradicción con los presupuestos fundamentales de la guerra justa, de su teoría del dominio, del *ius gentium*, de la teoría de la justicia y de principios éticos en general válidos en su tiempo¹⁸⁴.

2. La libertad de propagación del Cristianismo o el derecho de evangelización para la conversión a la fe cristiana, que según de Vitoria tiene una fundamentación que radica

¹⁸¹ Rodríguez, M. (1993): Doctrina colonial de Francisco de Vitoria o Derecho de Paz y Guerra. Ed. Librería Cervantes, Segovia, pág. 70

¹⁸² AA.VV.: Crítica de la razón conquistadora: Vitoria y la transmodernidad, Michelini, Wester, Ortiz, Chiappe, Cid (Eds.), Ed. ICALE, Río Cuarto, 2003

¹⁸³ Pérez, A. (1992): La polémica sobre el Nuevo Mundo. Los clásicos españoles de la Filosofía del Derecho. Ed. Trotta, Madrid, cap. IV.

¹⁸⁴ Op. Cit. 121

en el derecho divino positivo y en principios de fraternidad y corrección fraterna. En este sentido se tiene la evangelización no sólo como un derecho sino también como una obligación, de carácter imperativo, exigible incluso en contra de la voluntad del indio, produciendo injuria que podría terminar en guerra justa.

3. La protección y defensa de quienes acepten el Cristianismo.
4. La necesidad de procurar gobernantes cristianos en virtud de que no se impida profesar la religión. Junto con el título anterior, contiene derechos de intervención religiosa con la finalidad de conservar el cristianismo.
5. La tiranía y los crímenes contra la condición humana o el derecho de intervención de humanidad y guerra justa en defensa de terceros inocentes.
6. La legitimidad de la libre aceptación, la cesión territorial y la sumisión voluntaria. Este título otorga al indio converso el derecho de elegir a príncipes cristianos cuando constituyen la mayoría de la población, a lo que de Vitoria llamó “verdadera y libre elección”.
7. Acuerdos de amistad, cooperación y defensa o derecho de intervención de los españoles en defensa de terceros aliados y pueblos amigos de los españoles que libran la guerra justa con otros indios.
8. El estado de subdesarrollo tanto político como cultural o derecho de tutela de los españoles debido a la incapacidad del indio a gobernarse a si mismos.

2.3.2. El Tratado de Tordesillas

El precedente inmediato al Tratado de Tordesillas, fue el Tratado de Alcaçobas suscrito en 1479 y ratificado por Castilla en Toledo en 1480. Las Bulas Alejandrinas finalmente no solucionaron los conflictos que existían entre el Reino de Castilla y el Reino de Portugal desde antes del primer viaje de Cristóbal Colón. El problema subsistió debido a que la Segunda Bula *Inter Caetera* proponía una nueva línea demarcatoria que no resultaba fácil ni práctica para el Reino de Portugal, por tanto, éste no aceptó la división hecha por el Papa.

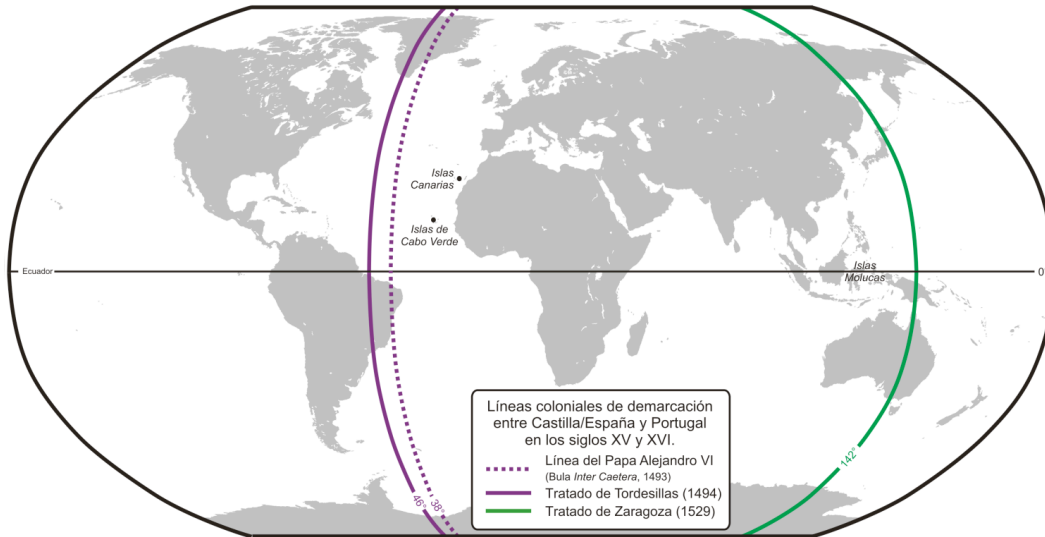


Figura 4. Divisiones territoriales de acuerdo al Tratado de Tordesillas.

Fuente: Wikimedia Commons.

La insistencia del Rey Juan II de Portugal consiguió que se convocara a representantes de los dos Reinos a Tordesillas, Castilla, en junio de 1494 para negociar un nuevo acuerdo para las partes, esta vez sin intermediación del Papa. Los dos Reinos querían repartir el espacio que todavía no se había conquistado, Portugal buscaba un reparto equilibrado que contemplara los intereses de ambas partes y en este sentido se estableció lo siguiente: en primer lugar, se fijó el meridiano de partición del Océano Atlántico a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que corresponde a $46^{\circ} 37'$ longitud oeste¹⁸⁵, sin hacer referencia a las Azores, lo que significaba que Castilla tendría el dominio hemisférico occidental y Portugal el oriental. En segundo lugar, las partes se obligaron a realizar exploraciones y ocupaciones sólo en el hemisferio que les correspondía de acuerdo al contenido del Tratado.

Los efectos jurídicos de este Tratado se pueden evaluar hoy como positivos, pero también como negativos. Positivos, en vista de que sin duda, el Tratado de Tordesillas interfirió directamente con lo que es hoy América Latina, es la raíz jurídica más fuerte de su historia jurídica y política. Negativos, porque fue precisamente el Tratado de Tordesillas el que reafirmó el poderío de los Reinos de Castilla y Portugal para ocupar las

¹⁸⁵ V. <http://www.abc.es/internacional/20130914/abci-tratado-tordesillas-201309132226.html>

tierras descubiertas y, por tanto, despojar a los indígenas de su tierra originaria y todo su acervo cultural.

2.3.3. Aplicación de la doctrina: el indio como vasallo

El hallazgo de las nuevas tierras y las riquezas provenientes de ellas llevaron a España a ocupar el papel hegemónico que tuvo. Durante las primeras décadas, los españoles desplegaron en América los mismos principios de la Edad Media consolidados por siglos de luchas contra árabes y piratas. Derechos reconocidos como la justa guerra y conquista dieron base legitimadora a la dominación hispana¹⁸⁶. En muchos aspectos, las formas de ocupación territorial en América no fueron otra cosa que el reflejo de la evolución de la propiedad en el viejo derecho castellano. En Castilla, las conquistas territoriales y repoblaciones, desde finales del Siglo XI a finales del XIII, contribuyeron a la formación inicial de nuevos tipos de gran propiedad en todas las regiones afectadas por la guerra mientras que, entre el Duero y el Sistema Central, destacaron los dominios otorgados a las sedes episcopales e iglesias catedrales que se encargaron de incrementar sus posesiones por medio de compras y donaciones, mientras que en Extremadura y en La Mancha proliferaron extensos señoríos solariegos y jurisdiccionales de las órdenes militares, favorecidos por la relativa escasez de repoblaciones que perturbaba el orden latifundista¹⁸⁷. El señorío, que desde el Siglo XIII significó dominio o mando sobre alguna cosa, para posteriormente extenderse en el Siglo XIV también al "territorio perteneciente al señor", se configuró como el concepto de propiedad en el lenguaje jurídico de la época¹⁸⁸.

¹⁸⁶ Op. cit. pág. 113.

¹⁸⁷ V.V. A.A. (1981): Los Trastámara y la Unidad Española, 1369-1517. Vol. 5. Ediciones Rialp SA, 1981.

¹⁸⁸ En las Partidas, se entiende el señorío como "poder que ome ha en su cosa de fazer della, o en ella lo que quisiere, segund Dios e segund fuero" (Ley 1, Título XXVIII, Partida 3).

Para el tiempo en que se descubrió América, el concepto de señorío, especialmente si se refería al que ejercían los reyes y emperadores, había comenzado a transitar al de soberanía, pero, por distintas circunstancias, en las Indias el señorío otorgado por las Bulas Alejandrinas a los Reyes Católicos y a sus sucesores, implicó un conjunto de facultades que influyeron de manera decisiva en la conformación del régimen de la propiedad de la tierra. Con las Bulas Alejandrinas como sustento de los llamados “justos títulos” de Castilla sobre los territorios americanos y a la muerte de los Reyes Católicos, los nuevos territorios quedaron unidos a la corona de Castilla¹⁸⁹. Al poco tiempo de la donación se iniciaron sistemáticamente las tareas de descubrimiento, conquista y colonización, lo que se realizó a través de capitulaciones otorgadas a los españoles para llevar a cabo la empresa conquistadora¹⁹⁰.

En América, tenemos que, a través de misioneros o conquistadores, se llevaba a cabo el sometimiento de los indígenas. Militantes de un mismo bando y partes de una misma tradición, los misioneros se ocuparon de las diferencias culturales para suprimirlas; y los conquistadores de levantar toda una estructura administrativa y política para el nuevo mundo. La estrategia estuvo centrada en incrementar la población útil de la América española, a través de tres aspectos: el económico, el educativo y el antropológico¹⁹¹. Para lograr esto, se propuso la figura de un Intendente que tuviera a su cargo el gobierno económico, teniendo instrucciones y facultades para enseñar a los “indios” y transformarlos a la agricultura y las artes.

Una vez se ocupaba el territorio empezaba a ponerse en marcha un proyecto de poblamiento urbano. En este sentido, los colonizadores iban levantando pueblos y

¹⁸⁹ “Y porque es nuestra voluntad, y lo hemos prometido y jurado, que siempre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas. Y mandamos que en ningún tiempo puedan ser separadas de nuestra real corona de Castilla, desunidas ni divididas en todo o en parte, ni sus ciudades, villas ni poblaciones” (Emperador Carlos en Barcelona, 14 de Septiembre de 1519).

¹⁹⁰ GONZÁLEZ, MARIA: “Del señorío del rey a la propiedad originaria de la nación” en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. 5, 1993, págs. 129-150.

¹⁹¹ UGALDE, L. (2000): El tesoro de los indios. ¿Cómo hacerlos más útiles a la economía española?, Ed. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, pág. 39.

ciudades para su vivienda, actividades comerciales y sistema de gobierno. Si bien uno de los objetivos de la Colonia era la implantación de los modos de producción feudal en la América, las circunstancias socio-culturales de la Conquista obligaron a la modificación de instituciones feudales existentes y a la creación de nuevas instituciones. De este modo se puede ver como, por ejemplo, a pesar de que Cristobal Colón obtuviera en 1498 licencia del Rey para fundar mayorazgo¹⁹², esta institución tan fundamental en Castilla¹⁹³ tuvo un modo de implementación distinto y un nivel de adopción menor en las Indias¹⁹⁴. Por otra parte, para los pobladores originales, se establecieron instituciones como el mestizaje y resguardo, la encomienda y las misiones.

Según Ariza (2009), el mestizaje es “considerado uno de los principales factores que incidieron en la política legislativa diseñada para los indígenas”¹⁹⁵. El mestizaje fue transitando lentamente a lo largo del camino que llevaba del pueblo de “indios” a la habitación del encomendero para lograr finalmente “la virtual destrucción del indio como ente étnico y cultural”¹⁹⁶. No obstante, autores como Jaramillo (1997) describen al proceso de mestizaje como “un elemento favorable a la fundación de los Estado-Nación en la medida en que crea las condiciones para el surgimiento de un proyecto estatal asentado sobre una sociedad menos diferenciada racialmente”¹⁹⁷. El mestizaje y resguardo nace como medida proteccionista de la Corona sobre los “indios” que habitaban el territorio descubierto. Esta medida proteccionista fue una respuesta a los

¹⁹² Cristóbal Colón. Textos y documentos completos. Relaciones de viajes, cartas y memoriales, edición prólogo y notas de Consuelo Varela. Alianza Editorial, Madrid, 1982, págs. 192-201.

¹⁹³ V. CLAVERO, B. (1974): Mayorazgo y propiedad feudal en Castilla 1369-1836. Siglo XXI Editores, Madrid, págs. 21-22.

¹⁹⁴ RANGEL, EGILDA: “El mayorazgo de Sartenejas en la Venezuela colonial 1740-1858” en Historia y Memoria, núm 6, 2013. pp. 17-39.

¹⁹⁵ ARIZA, L. (2009): Derecho, saber e identidad indígena, Ed. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, pág. 151.

¹⁹⁶ FRIEDE, J.: “De la encomienda indiana a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 4, págs. 35-61.

¹⁹⁷ JARAMILLO, J.: “Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo XVIII”, en Travesías por la Historia, JARAMILLO, J. (dir.), Imprenta Nacional, Bogotá, 1997, págs. 115-139.

maltratos y explotación que se habían llevado a cabo desde el primer contacto por parte de Cristóbal Colón y los demás conquistadores. Los indígenas podían abandonar voluntariamente sus resguardos al considerar que la permanencia en el pueblo de “indios” y la posición jurídica que de ahí se derivaba les resultaba más agravante que el hecho de emplearse en las haciendas¹⁹⁸. El abandono del resguardo contribuía a la fragmentación de la identidad indígena de la época. Friede (1969) plantea que no sería arriesgado suponer que los “indios” que abandonaban sus escuálidos resguardos y se establecían en los pueblos de vecinos, aunque tributasen al principio, se diluían entre estos vecinos en una o dos generaciones, quedando libres de tributos. En este sentido, la raza como tal, había cesado de jugar un papel en la definición de lo que era “indio”, ahora, era su situación social y su complejo cultural lo que le distinguía del blanco.

Autores como Liévano, I. (1966)¹⁹⁹, han dicho que la encomienda “estaba constituida por grandes extensiones territoriales, delimitadas previamente por las autoridades coloniales, dentro de las cuales eran congregadas diversas comunidades aborígenes con el propósito de que organizaran su propia vida económica y social y produjeran los bienes necesarios tanto para su consumo, como para cumplir con las tasas tributarias que al momento de hacer las concentraciones fijara el visitador”²⁰⁰. Otros autores como Rodríguez, E. (1971), han señalado que la encomienda es “un derecho concedido por merced real a los beneméritos de Indias para recibir y cobrar para sí tributos de los “indios” que se les encomendasen por su vida y la de un heredero, con rango de cuidar de los “indios” en lo espiritual y temporal y defender las provincias donde fueren encomendados”²⁰¹. Ariza (2009) señala que la encomienda es “una institución político-económica que cumple varias funciones: producción económica,

¹⁹⁹ Cfr. LIÉVANO, I. (1966): *Grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia*, Ed. Tercer Mundo, Bogotá.

²⁰⁰ El establecimiento de la encomienda, ocasionaba una visita por parte de funcionarios reales llamados “visitadores” que determinaban el número de tributarios, las extensiones de territorios ocupados y la índole de su actividad productiva.

²⁰¹ RODRÍGUEZ, E. (1971): *Los Dominicos y las encomiendas de Indios de la Isla Española*, Ed. Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, págs. 25 y 26.

legitimación política, control directo sobre el sometido. Teniendo en cuenta que, por una parte, los españoles eran reacios a los trabajos físicos, y que, por la otra, los indígenas no podían ser convertidos en esclavos ni enajenaban voluntariamente su fuerza laboral a los conquistadores, se decidió superar el problema otorgando a perpetuidad, una gran porción de terreno al encomendero junto con los servicios de los indígenas que vivían allí. En este primer momento, la encomienda consistía en la asignación de un grupo de indígenas para que trabajaran gratis a favor del encomendero, quien se obligaba a protegerlos y evangelizarlos”²⁰². Esta institución fue objeto de poderosos ataques dominicos, de intentos fallidos de abolición y reforma, pero se erigió como el pilar económico y político que sostendría la empresa colonial hasta finales del siglo XVIII²⁰³. Luego, en un segundo momento, la adaptación de la encomienda a las necesidades de la Colonia, buscaba construir a los indígenas como sujetos de los que se pudiera extraer fuerza de trabajo, pues en ese momento la riqueza no consistía en ser dueños de campos o minas, sino en el número de indígenas que se disponía para hacerles trabajar y explotarlos²⁰⁴.

Sin embargo, hay que aclarar que esta institución no tuvo origen en el proceso de Conquista, sino que más bien constituyó una adaptación de la política fundamental de repoblación empleada por Castilla durante la Reconquista para organizar el acceso a la mano de obra e impulsar el desarrollo económico²⁰⁵. Ahora bien, si bien es cierto que la encomienda consistió en el repartimiento de grupos de “indios” en tierras en las cuales podían realizar sus cultivos sin tener que depender del encomendero, también es cierto que su relación con el conquistador estaba claramente definida por la imposición de un tributo que representaba el usufructo obtenido por la Corona a través del encomendero.

²⁰² El 20 de diciembre de 1503, después de la declaración de que el indio era libre, se expidió una Real Cédula que obligaba a que el encomendero le pagara al indígena un jornal.

²⁰³ Op. cit. pág 121.

²⁰⁴ OSUNA, A: “Ética y política en las Leyes de Indias del siglo XVI” en *Anuario de Filosofía del Derecho*, VIII, 1991, págs. 77-102 .

²⁰⁵ V. MARTÍNEZ, JULIO (1998): “Historia del Derecho Indiano. Las Fuentes y las Instituciones políticoadministrativas”, Ed. Zigurat, Cáceres.

A fin de asegurar su funcionamiento, cada resguardo quedaba a cargo de un funcionario oficial: el corregidor de “indios” o el intendente, quien era el encargado, junto con el cacique, de organizar la producción y comercializar el excedente, así como de hacer cumplir en los resguardos bajo su jurisdicción, las tasas tributarias fijadas y distribuir lo recolectado entre los diversos sectores beneficiarios del mismo: el Rey, el encomendero, la Iglesia, las autoridades coloniales, y, por supuesto, el propio corregidor²⁰⁶.

De tal manera, la encomienda, al abrir nuevas posibilidades, proporcionando mano de obra gratuita para explotar la minería y la agricultura, se convierte en la vía inmediata para obtener fortuna. En este periodo comienza, también, una etapa de conquistas que tienen como base de operaciones La Española²⁰⁷ primero y Cuba más tarde. En 1508, Ponce de León conquista Puerto Rico; Juan de Esquivel desembarca en Jamaica y Diego de Nicuesa en Castilla del Oro en 1509; Diego de Velázquez comienza la campaña de Cuba en 1511. En 1513, Vasco Nuñez de Balboa atraviesa el istmo de Panamá hasta el Pacífico, y Ponce de León explora la Florida; en 1517 Hernández de Córdoba llega a Yucatán, y en 1519, Hernán Cortes penetra en México. Desde las islas, el conquistador español llegaba a Tierra Firme, donde entraría en contacto con los grandes imperios americanos²⁰⁸.

Aunque las encomiendas estaban dándole grandes frutos a la Corona, sus devastadoras consecuencias sobre la población indígena, levantaron resistencias en muchos religiosos y pronto los dominicos levantarían su voz de protesta. El primero en lanzar públicamente críticas contra los encomenderos fue Fray Antonio de Montesinos en 1511. Bartolomé de las Casas rescató una versión de su alegato en “Historia de las Indias”:

²⁰⁶ BOHÓRQUEZ, C.: “Resguardos Indígenas y Derechos Humanos” en *Nuestro Sur. Historia, Memoria y Patrimonio*, núm. 2, 2011, pág. 11.

²⁰⁷ Hoy Haití y República Dominicana.

²⁰⁸ DE LAS CASAS, B. (1552): *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, Ed. Orbis, S.A. (1986), Barcelona, pág. 12.

“¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y cognozcan a su Dios y criador, sean bautizados, oigan misa, guarden fiestas y domingos? Estos ¿no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos?” (Fragmento del Sermón de Fray Montesinos en 1511)

La estrategia de Montesinos de ir desde el principio directamente al fondo de la cuestión y plantearla en torno al reconocimiento de la naturaleza humana de los indígenas con todas las consecuencias que de ello se derivan fue un acierto. Por eso, aunque su intención inmediata fue denunciar unos abusos y pedir su remedio, sus palabras tuvieron una gran trascendencia y suscitaron en toda su amplitud la polifacética controversia de Indias²⁰⁹. La Junta de Burgos, convocada por el Rey Fernando en 1512, examina los derechos de la Corona a someter a los indígenas para su evangelización. Las Leyes de Burgos²¹⁰ finalmente promulgadas el veintisiete de diciembre de 1512, se conciben como un primer paso a favor de los indígenas, ya que en ellas se reconoce el derecho a la libertad y al trato humanitario, pero se insiste en un necesario sometimiento para su educación, dada la “natural pereza y tendencia al vicio”²¹¹, lo que se traducía en que la encomienda seguía activa en las directrices de la Corona.

Aun así, lo novedoso de las Leyes de Burgos es que significaron el primer cuerpo general legislativo que se redactó para las Indias. Constitutivo de treinta y cinco leyes, regimentaba los “indios”, sus condiciones personales de vida y trabajo, sus derechos y los límites a su utilización como mano de obra; protegía al indio a partir del reconocimiento de su condición como hombre libre y titular de derechos humanos básicos. A grandes

²⁰⁹ SÁNCHEZ, R.: “Las Leyes de Burgos de 1512 y la Doctrina Jurídica de la Conquista” en Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 28, 2012, pág. 13.

²¹⁰ En su denominación original: “Ordenanzas Reales para el buen regimiento y tratamiento de los Yndios”.

²¹¹ Op. cit. pág. 125.

rasgos, las Leyes de Burgos²¹² abordaban temas como la evangelización del “indio”, las obligaciones de los españoles en relación con el trabajo de los “indios” encomendados y las obligaciones de los “indios” en relación a su trabajo que no era voluntario desde 1503.

Como se mencionó anteriormente, Francisco de Vitoria contrastaba varios “títulos” o argumentos ilegítimos, utilizados previamente para justificar la Conquista, con una serie de títulos legítimos de corte humanista que aspiraba el clérigo sirvieran de base para la presencia europea en América. Entre estos títulos, menciona Vitoria el derecho al libre movimiento y a la inmigración pacífica, la propagación de la religión cristiana, la apostasía de los indígenas, el derecho del Papa a otorgarles a los conversos un príncipe cristiano, la elección voluntaria de los indígenas y la alianza estratégica entre estos y los españoles²¹³.

Las misiones tuvieron un papel fundamental en la conquista del Nuevo Mundo. El apoyo que la jerarquía eclesiástica le había dado a los Reinos de Castilla y Portugal debía ser retribuido en la evangelización de los “salvajes” que habitaban las nuevas tierras. Es así como los misioneros empezaron a llegar a América y fueron formando poblados de indígenas, organizados y administrados por los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Las crónicas misioneras han provocado en diferentes épocas entusiasmo y fascinación²¹⁴; los Jesuitas utilizaron un método diferente a la violencia y esclavitud, logrando un acercamiento pacífico para propagar la fe cristiana entre los “indios” paganos, proceso durante el cual aprendieron sus lenguas y poco a poco fueron organizándose en pequeñas comunidades para llevar a cabo la obligación de evangelizar.

El trabajo de los misioneros sirvió –entre otras cosas- para ayudar a los Reinos ocupantes en cuanto al conocimiento geográfico, particularmente en el tema relativo a la

²¹² Es importante señalar que las Leyes de Burgos indicaban que los “indios” debían ceder a los encomenderos la mayor parte de sus tierras, reservando para sí, únicamente, media fanegada por cabeza.

²¹³ Op. cit. pág. 118.

²¹⁴ AA.VV.: Un reino en la frontera: las misiones Jesuitas en la América Colonial, 1ª ed., Marzal, M. y Negro, S., Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000, pág. 1.

delimitación de los territorios repartidos entre Castilla y Portugal. Los Jesuitas lograron cierta autonomía tanto de la Corona como de la sociedad colonial, estableciéndose de manera generalizada en todo el territorio. Evidentemente hubo fuertes críticas por parte de grupos clericales adversos con respecto a sus formas de evangelizar y el trato que daban a los “indios”, lo que ocasionó una campaña difamatoria en su contra que terminó con la expulsión de los Jesuitas de los territorios de la Corona Española en 1767²¹⁵, la supresión de la orden en 1773²¹⁶ y con la dispersión de las pequeñas comunidades indígenas que habían organizado.

2.3.4. *Venezuela, tierra de gracia*

Francisco López de Gómara, en su “Historia General de las Indias”, nos ofrece esta elocuente descripción:

“Todo lo que hay del Cabo de la Vela al Golfo de Paria lo descubrió Cristobal Colón en el año 1498. Caen en esta costa Venezuela, Curiana, Chirivichi y Cumaná, y otros muchos ríos y puertos (...) Se la llamó Venezuela porque está edificada dentro del agua sobre una peña llana y en un lago que llaman Maracaibo, y los españoles, de Nuestra Señora; son las mujeres más gentiles que sus vecinas, se pintan pecho y brazos, van desnudas, y se cubren con un hilo; les da vergüenza si no lo llevan, y si alguno se lo quita, las injuria. Las doncellas se conocen en el color y tamaño del cordel, y llevarlo así es señal certísima de virginidad; en el Cabo de la Vela llevan por la horcajadura una cinta de algodón no más ancha que un jerne; en Tarare usan sayas hasta los pies con capillas; están tejidas en una pieza, pues no llevan costura ninguna; ellos en general meten lo suyo en canutillos, y los enoptos atan la capilla para cubrir la cabeza. Hay muchos sodomíticos a los que no les falta ser del todo mujer, sino tetas y parir; adoran a ídolos, pintan al diablo como le hablan y ven, también se pintan todos ellos el cuerpo, y el que vence, prende o mata al otro, ora sea en guerra, ora en desafío, con tal de que no sea a traición, se pintan un brazo la primera vez, la otra el pecho, y la tercera con un verdugón de los ojos a las orejas, y esto es señal de nobleza. Sus armas son flechas con hierba, lanzas de veinticinco palmos, cuchillos de caña,

²¹⁵ Orden dictada por Carlos III en 1767.

²¹⁶ El Papa Clemente XIV suprime la Orden en 1773 y el Papa Pío VII la restituye en 1814.

porras, hondas, adargas muy grandes de corteza y cuero. Los sacerdotes son médicos; preguntan al enfermo si cree que lo pueden ellos sanar, pasan la mano por el dolor, yaga o postema, chupan con una paja; si no sana, echan la culpa al paciente o a los dioses (como hacen todos los médicos). Lloran de noche al señor que muere; el llanto consiste en cantar sus proezas: lo tuestan, lo muelen, y echado en vino, se lo beben, y esto es gran honra; en Zompachí entierran a los señores con mucho oro, piedras y perlas, y sobre la sepultura hincan cuatro palos en cuadro, lo emparamentan, y cuelgan allí dentro armas, plumajes y muchas cosas de comer y beber. ”

Refieren los cronistas castellanos que, cuando los parias desde las costas occidentales del golfo de este nombre saludaron en 1498 las carabelas de Colón, las vírgenes indianas de bello porte y agraciadas formas, aparecieron delante de los descubridores llevando en el cuello y en los brazos hermosas sartas de perlas. Interrogados por Colón los primeros indios que subieron a bordo respecto del yacimiento de las perlas, indicaron que venían de una isla situada al norte de Paria, donde existían ricos ostiales²¹⁷.

Desde la llegada de Colón a Cubagua, el interés por las perlas se hizo popular entre los demás conquistadores, lo que abrió el comercio entre Venezuela y los mercados europeos. Cubagua fue la primera feria de la riqueza indígena, la primera colonia desde la cual el conquistador debía despoblar a Venezuela, el gran mercado de esclavos que abre la historia de la conquista española en la porción sur del continente²¹⁸.

En Venezuela así como en la mayoría de los países de América Latina, el ordenamiento jurídico colonial reconocía algunos derechos a los habitantes indígenas en virtud de ser los ocupantes originarios de los territorios. La Corona, con el objeto de eliminar los maltratos, abusos, vejaciones e injusticias, dictó en las Leyes de Indias el reglamento de la existencia de las comunidades y resguardos indígenas, figura jurídica con capacidad para poseer, usar y administrar, mediante una modalidad específica de

²¹⁷ ROJAS, A. (2005): Orígenes venezolanos, Ed. CEC, SA, Caracas, pág. 19.

²¹⁸ Op. Cit. Pág. 22.

posesión colectiva o en comunidad, las zonas de terrenos que les eran asignadas en nombre del rey de España y que recibían la denominación de “resguardos”. La comunidad indígena era pues una entelequia, que poseía los bienes comunes, y cuyos integrantes solo podrían usar los bienes de la comunidad, sin poder alegar derechos individuales de propiedad o posesión sobre los mismos, ni exigir su división o partición²¹⁹.

Se puede señalar, que el proceso en Venezuela fue el mismo que en los demás territorios: llevar a cabo la imposición de una cultura distinta, acabar con los “vicios de los indios”, pacificar y civilizar. Se han tomado fragmentos de dos documentos que pueden ser interesantes en este punto:

1. Documento de Asiento y Capitulación de Fray Bartolomé de las Casas (1520):

“Por quanto vos, Bartolomé de las Casas, clérigo, por servicio de Dios, Nuestro Señor, e abmentación de su santísima fee católica, e por me servir e acrecentar mis rrentas e patrimonio rreal vos ofrecistes e proferistes que en la Tierra Firme de las Indias del mar Océano, que se cuenta desde la provincia de Paria inclusive hasta la provincia de Santa Marta exclusive, por la costa de la mar e corriendo por cuerda derecha ambos a dos límites hasta dar a la otra costa del sur, haríades e efeturíades e cunpliéredes las cosas siguientes en esta manera: Primeramente que con ayuda de Nuestro Señor e de su gloriosa madre estaríades dentro en la dicha Tierra Firme e límites susodichos desde el día de la echa deste asiento asta uno año primero siguiente que con la dicha ayuda e con vuestra industria e trabajo e diligencia e a vuestra cosa misión, sin que nos al presente aiamos de poner nipongamos cossa alguna, aseguraréis e allanaréis todos los indios e gente que ay o oviere en la dicha Tierra Firme dentro de los dichos límites declarados, e que en la tierra e límites susodichos dentro de dos años primeros siguientes, que se cuenten desde el día que avéis destar en la dicha Tierra Firme, daréis diez mill indios allanados, seguros, tributarios e sujetos e obidienteos a la corona real de nuestros reinos de Castilla (...) veréis por vista de ojos e experimentaréis por vuestra mesma persona los rrios e arroyos e logares que oviere en toda la tierra e limites que tengan oro, e dónde ai minas, e quáles son más rricas, e de qué quillates e fineza es el oro que tienen, e quáanto podrá sacar dellas un onbre cada día, qué es el oro e muestra de cada rrio, con toda la relación que dicho es, la

²¹⁹ BURGOS, J.: “Estudio Jurídico sobre Comunidades Indígenas” en Boletín de la Biblioteca de los Tribunales del Distrito Federal, núm. 16, 1966, pág. 7.

enbiaréis cierta e verdadera, sin encobrir cosa alguna, donde quiera que yo estoviere, lo más brevemente que pudiéredes a los nuestros oficiales que residen en la ciudad de Sevilla en la casa de la contratación de las Indias (...) el dicho Bartolomé de las Casas, trataréis bien e beninamente e con mansedumbre a todos los indios de la dicha tierra, e que no les haréis mal ni daño, ni desaguisado alguno en sus personas e bienes, ni les tomaréis ni consentiréis tomar sus mantenimientos e cosas que tovieron. E proveéreis en quanto a vos sea posible, de los traer en conocimiento e lumbre de nuestra santa fee católica, e a que estén domésticos e traten e conversen con cristianos (...)” (Fragmento del Documento de Asiento y Capitulación de Fray Bartolomé de las Casas, 1520).

Esta Real Cédula otorgada al Fray Bartolomé de las Casas en 1520, significó el final de los intentos de llevar en el oriente venezolano una evangelización y poblamiento sin ningún tipo de armas y de manera pacífica. La orden real fracasó, el experimento de evangelización, llegó a juntar el intento de establecer factorías en la costa para la extracción de perlas y proyectar económicamente la vida interna del territorio protegido²²⁰.

2. Documento del Asiento y Capitulación que se tomó con Antonio Sedeño, para la pacificación y población de la Isla de La Trinidad:

“La Reina.

Por quanto vos Antonio Sedeño contador de la ysla de San Juan nos hesistes rrelación que los indios de la isla de la Trynidad que esta frontero a la boca del Dragon son caribes como es notorio y gente que comen carne humana e tienen otros rritos en malos usos y vicios hasta agora rrepunantes a las cosas de nuestra sancta fee catolica e a la obediencia e vasallaje que nos deven que por tales an sido declarados y pronunciados por esclavos de todos los que los quisieren tomar y que por ser gente velicosa malos usos cierta e sin saber si en ella ay oro o otras cosas de que podamos ser servidos e vos con el deseo que theneys de servir del emperador mi señor e mio e al con dadibas e buenas obras de los pacificar e traer al conoscimiento e vasallaje que nos deven en que recibir la doctrina cristiana les haréis sus yglesias (...) con mas voluntad los dichos yndios vengán a la administración de los españoles y por que este paresce que es camino para mas respeto con la conversación dellos vengán en conoscimiento de la nuestra fee catolica y por que vos y los dichos españoles sereis aprovechados vos damos licencia e facultad para que

²²⁰ Op. cit., pág. 19.

venidos los dichos yndios de paz e contratación para que vos y las personas que tuvierdes en la dicha fortaleza y los demás que vos quisierdes contrateys con los yndios de la dicha ysla como ombres libres como lo son y rrescatar con ellos todo el oro y plata y perlas preciosas e perlas e joyas e otros metales (...)” (Fragmento del Documento de Asiento y Capitulación que se tomó con Antonio Sedeño para la pacificación de Trinidad, 1530).”

Esta capitulación fue otorgada para pacificar y poblar la isla de Trinidad que estaba ocupada por los caribes, quienes entorpecían la penetración hispana en toda la región oriental del territorio.

Ahora bien, para poder ordenar la evolución de la política colonial en Venezuela, es necesario distinguir las cinco etapas entre los siglos XVI y el XIX que propone Perera (2000):

1. La etapa épico-mítica, a partir de prefiguraciones simbólicas, vigencia y derrumbe. Primeros contactos comerciales, de “rescate” y armadas esclavistas. Penetraciones exploradoras “doradistas”, enfrentamientos y puniciones.
2. La etapa de consolidación del establecimiento español, procesos colonizadores, alianzas políticas militares entre indígenas y europeos. Campañas periódicas de ataques a asentamientos españoles.
3. La etapa de expansión misionera, en la que hubo proliferación de los asentamientos misioneros, refundaciones, desplazamientos, epidemias, disminución y dispersión poblacional. La estrategia de cambio social implícita en la acción misionera con los procesos de: reducir, sedentarizar, civilizar y evangelizar tuvo una amplia difusión territorial.
4. La etapa de dominación territorial española, que produjo enfrentamientos entre la Corona y el clero misionero. Presencia y hegemonía laica, creación de pueblos españoles y mixtos por funcionarios del Rey.
5. Y finalmente, la etapa de organización moderna del espacio y fin colonial, con la imposición definitiva de los criterios laicos en materia administrativa y de ordenación del espacio, modernización del gobierno y de la economía.

Recogiendo lo analizado hasta ahora, sigue quedando una interrogante, después de denunciar los abusos llevados a cabo por el conquistador en el Nuevo Mundo y de las Leyes de Burgos de 1512 promulgadas en respuesta a ellas; ¿de quién era finalmente la propiedad de la tierra? Una vez legitimada a través de la autoridad del Papa Alejandro VI la propiedad real sobre las tierras de América, comenzó el conflicto acerca de la propiedad particular de la misma: entre la corona y los conquistadores, entre los mismos conquistadores y entre éstos y los “indios”²²¹.

Para Bohórquez (2011), el conflicto de mayores consecuencias se presentó entre los conquistadores y los “indios” y se derivaba fundamentalmente del hecho de que la noción de propiedad individual de la tierra implantada por los españoles y que hacía de ésta un objetivo de transacción, se oponía totalmente a la concepción que los indígenas tenían sobre la misma. Para éstos, el derecho de posesión de la tierra era inseparable de la estructura social misma de la comunidad e inconcebible fuera de ésta, por lo que el vínculo tierra-hombre no podía entenderse sino en función del usufructo colectivo²²².

Durante los primeros treinta años de la conquista y colonización, la Corona llevó a cabo en el Nuevo Mundo un proceso de ocupación enmarcado perfectamente en las prácticas permitidas por el derecho canónico y el derecho de gentes y no fue sino hasta 1525 que se prohibió “tomar de lo que fuere particular de los indios y sin hacerles más daño del que fuere menester para defensa de los pobladores y para que la población no se estorbe”²²³. Así las cosas, puede entenderse que a pesar de la figura aparentemente proteccionista de las leyes de la época, los indígenas no obtuvieron grandes ganancias en cuanto a la propiedad de sus tierras ancestrales, en el sentido de que lo que se consideraba

²²¹ BOHÓRQUEZ, C.: “Resguardos Indígenas y Derechos Humanos” en *Nuestro Sur. Historia, Memoria y Patrimonio*. Op. Cit. Pág. 17.

²²² Id.

²²³ DE CAPDEQUI, JOSÉ (1946): *El régimen de la tierra en la América Española durante el periodo colonial*, Editorial Montalvo, Ciudad Trujillo, 1946, pág. 99.

propiedad indígena era una directriz colonial que poco tenía que ver con la realidad cultural indígena, lo que trajo consigo despojo de tierras y dificultad de resistencia por parte de las comunidades indígenas.

2.4. Westfalia, un nuevo orden de proceder

La paz de Westfalia, producto de los Tratados de Münster y Osnabrück en 1648, significó el inicio de un nuevo orden internacional en el cual el sistema europeo de los Estados-Nación iba a ser regulado en lo sucesivo según una serie de acuerdos políticos forjados a mediados del siglo XVII y aceptados por las principales potencias²²⁴ europeas²²⁵. El acuerdo de paz logró apartar el modelo de una monarquía universal Habsburgo y confirmó el carácter del Imperio como una confederación laxa de unidades independientes, que procurarían resolver sus diferencias mediante una serie de elaborados procedimientos constitucionales sin recurrir a la guerra²²⁶.

En efecto, la Paz de Westfalia contempló el nacimiento del nuevo Estado, la solución de las guerras que habían tenido a Europa sumida en la discordia y sobretodo el alumbramiento de un nuevo orden internacional, conocido hoy bajo el nombre de comunidad internacional como sistema de Estados, basado en la pluralidad limitada entre éstos y el equilibrio de poder entre ellos, orden autorregulado basado en el *pacta sunt servanda*²²⁷ o en el recurso alternativo a la guerra²²⁸. Además, en Westfalia se estableció el principio de la integridad territorial como fundamento de la existencia de los Estados,

²²⁴ Fueron parte del Tratado: los Reinos de España, Francia y Suecia, las Provincias Unidas y los Príncipes del Sacro Imperio Romano-Germánico.

²²⁵ ELLIOT, J.: “Europa después de la Paz de Westfalia” en Revista Pedralbes, núm. 19, 1999, pág. 131.

²²⁶ Id.

²²⁷ Lit. Los pactos deben ser cumplidos.

²²⁸ MONTORBIO, M. (2008): Salir del callejón del gato. La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza mundial, Ed. Icaria, Barcelona, pág. 84.

punto muy importante, ya que para la época, estaba la concepción feudal de que los territorios y los pueblos eran patrimonio hereditario.

Por tanto, el imperio de la ley remplazaba la anarquía, y, las nuevas garantías de libertad religiosa para las minorías, daban punto y final a la falta de tolerancia y proceder discriminante del pasado de Europa. En ese momento, la comunidad internacional entendida como una comunidad de naciones civilizadas, irá desarrollando Derecho Internacional apoyado en instituciones comunes, más allá de las cuales siguen situándose los bárbaros a los que civilizar o la *res nullius* de tierras descubiertas o por descubrir, misión en cuya realización, se irá extendiendo por la transformación hacia fuera de los Estados europeos en Imperios, manteniendo hacia dentro, el equilibrio entre éstos como principio fundamental de funcionamiento del sistema y mantenimiento de la inestable paz global²²⁹.

Con respecto a los territorios, el artículo V del Tratado de Paz establece que la navegación y tráfico de las Indias Orientales y Occidentales será mantenida según y en conformidad de las concesiones hechas sobre eso o las que se hicieren en adelante. Deja claro el tratado que los que ya estaban poseyendo seguirían haciéndolo, teniendo para su uso y goce lo que se había conquistado. Ahora bien, mediante el Tratado de Münster, Holanda obtuvo su independencia de España y quedó en posesión de sus Colonias en Guayana: Esequibo, Demerara y Berbice, lo que desde luego ocasionó que España reconociera las posesiones de Holanda en su antiguo territorio, y, a su vez que Holanda reconociera que España había tenido el derecho anterior al territorio por haberlo poseído primero. Las delimitaciones del territorio de Holanda no fueron claramente establecidas en ese momento, pero se sabía que se limitaban a los territorios de España, por tanto, no quedaba tierra de nadie.

²²⁹ Id.

2.5. Estado-nación Venezuela: una periodización

La intención de éste apartado es hacer una periodización de los pasos que se han dado en cuanto a legislación territorial indígena en Venezuela desde el inicio de su historia republicana. A diferencia de otras nacientes repúblicas, Venezuela no revocó los derechos que la Corona le había concedido a los indígenas, al contrario a partir de 1810, aunque con timidez, empezó a tomarse más en cuenta el tema indígena por parte del grupo libertador y poco a poco empezó a tener incidencia en el trabajo del legislador.

La periodización se dividirá en dos partes. Primero, se abordará lo que corresponde a la evolución constitucional, para después revisar lo que fueron decretos y leyes correspondientes al tema.

2.5.1. Índice constitucional

1811. Es de interés para éste trabajo lo establecido en el artículo 200 del cuerpo constitucional. “Art. 200: Como la parte de ciudadanos que hasta hoy se han denominado Indios, no han conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la Monarquía Española dictó a su favor, porque los encargados del gobierno en estos países tenían olvidada su ejecución; y como las bases del sistema de gobierno que en esta Constitución ha adoptado Venezuela, no son otras que la de la justicia y la igualdad, encarga muy particularmente a los Gobiernos provinciales, que así como han de aplicar sus fatigas y cuidados para conseguir la ilustración de todos los habitantes del Estado, proporcionarles escuelas, academias y colegios en donde aprendan todos los que quieran los principios de Religión, de la sana moral, de la política, de las ciencias y artes útiles y necesarias para el sostenimiento y prosperidad de los pueblos, procuren por todos los medios posibles atraer a los referidos ciudadanos naturales a estas casa de ilustración y enseñanza, hacerles comprender la íntima unión que tiene con todos los demás ciudadanos, las consideraciones que como aquellos merecen del Gobierno y los derechos de que gozan por el solo hecho de ser hombres iguales a todos los de su especie, a fin de conseguir por

este medio sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha mantenido el antiguo estado de cosas y que no permanezcan por más tiempo aislados y aun temerosos de tratar a los demás hombres; prohibiendo desde ahora que puedan aplicarse involuntariamente a prestar sus servicios a Tenientes o Curas de sus parroquias, ni a otra persona alguna y **permitiéndoles el reparto en propiedad de las tierras que les estaban concedidas y de que están en posesión, para que a proporción entre los padres de familia de cada pueblo, las dividan y dispongan de ellas como verdaderos señores**²³⁰, según los términos y reglamentos que formen los Gobiernos provinciales”²³¹.

1858: Se considera importante el contenido del Art. 4: “Los territorios despoblados que se destinen a colonias, **y los ocupados por tribus indígenas, podrán ser separados de las provincias** a que permanezcan por los Congresos constitucionales y regidos por las leyes especiales”.

1864: De interés el artículo 43 en el que ésta Constitución regula los territorios que se encontraban en situaciones especiales, “Art. 43: La Legislatura Nacional tiene las atribuciones siguientes: (...) 22. Establecer con la denominación de territorios el régimen especial con que deben existir temporalmente **regiones despobladas o habitadas por indígenas no civilizados: tales territorios dependerán inmediatamente del Ejecutivo de la Nación.**

1874: El mismo artículo 43 de la Constitución anterior es levemente modificado en ésta de la siguiente manera, “Art. 43: La Legislatura Nacional tiene las atribuciones siguientes: (...) 22. Establecer con denominación de territorios el régimen especial con que deben existir temporalmente regiones despobladas, o habitadas por indígenas no civilizados: tales territorios dependerán inmediatamente del Ejecutivo Nacional”.

1881: Nuevamente el artículo 43 de las dos Constituciones anteriores es modificado.

²³⁰ Las negrillas en éste y los demás artículos son propias y no del documento original.

²³¹ Es importante señalar que ni en el Acta del 19 de abril de 1810 ni en la Declaración de la Independencia del 5 de julio de 1811 hacen referencia a los indígenas.

“Art. 43: La Legislatura Nacional tiene las atribuciones siguientes: (...) 22. Establecer, con la denominación de Territorios, el régimen especial con que deben existir **regiones despobladas de indígenas no reducidos o civilizados**. Tales territorios dependerán inmediatamente del Ejecutivo de la Unión”.

1901: De resaltar el contenido del artículo 34, el cual dictaba que: “El Distrito Federal y los Territorios (...) elegirán también sus diputados (...) **no se computarán en la base de la población los indígenas que viven en estado salvaje**”.

1909: Este texto constitucional sigue hablando de la necesidad de civilizar a los indígenas. “Art. 80: Son atribuciones del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: (...) 18. Prohibir la entrada al territorio de la República, de los extranjeros dedicados especialmente al servicio de cualquier culto o religión, cualquiera que sea el orden o la jerarquía de que se hallen investidos. **Sin embargo, el gobierno podrá contratar la venida de misioneros, que se establecerán precisamente en los puntos de la República donde hay indígenas que civilizar**”.

1925: La nueva Constitución deja de hablar de indígenas en estado salvaje. “Art. 58: El Distrito Federal y los Territorios Federales (...) elegirán también sus Diputados (...) **no se computarán en la base de población los indígenas no reducidos**.”

1947: Esta Constitución tiene varios cambios importantes. Primero, cambia la denominación de indígenas a indios y población indígena y se establece que lo relativo a los indios se regirá por ley especial; así lo establece el Art. 72: “**Corresponde al Estado procurar la incorporación del indio a la vida nacional. Una legislación especial determinará lo relacionado con esta materia, teniendo en cuenta las características culturales y las condiciones económicas de la población indígena**”. El esquema entonces era la asimilación gradual del indígena a la cultura nacional convirtiéndolo en campesino, al que sólo se le permitía conservar aquellas manifestaciones culturales que no obstaculizaran su integración cultural y el mestizaje biológico. No había una conciencia directa y una acción oficial responsable de la cuestión indígena, debido a que el gobierno había delegado principalmente a las misiones sus obligaciones con los

indígenas, lo que hacía persistir el modelo de la encomienda en algunas áreas indígenas.²³²

1961: Si bien se ha venido observando los cambios que, aunque leves se iban produciendo en las distintas constituciones de Venezuela, la de 1961 significó un cambio importante para el país, aunque en el tema indígena haya sido un verdadero retroceso. El texto constitucional de 1961 reconocía una serie de derechos individuales para proteger “por igual” a todos los ciudadanos venezolanos. Se puede ver en el artículo 77, a saber: “El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. **La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación**”. Con la Constitución de 1961 se limita la actividad de las misiones y se reorganiza la política oficial indigenista, no obstante, estas reorganizaciones eran de carácter burocrático-administrativo y económico pero no de reorientación en la directriz ideológica de la política indigenista, ya que esta política seguía siendo la misma, la asimilación.

1999: Ya se ha expuesto ampliamente en el Capítulo II de éste trabajo de investigación, pero no está de más volver a comentar que en 1999 se dio por primera vez un reconocimiento específico, amplio e integral de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, a través de un capítulo entero dedicado a ellos.

2.5.2. Índice de Decretos, Leyes y Documentos

La siguiente tabla muestra, en orden cronológico, el conjunto de leyes, decretos y otros documentos establecidos durante la historia republicana de Venezuela, concernientes a la cuestión de los territorios.

Ley o Decreto	Artículo/Comentario
Decreto del 27 de abril de 1810	La Junta Suprema de Caracas lanza una proclama en la que suprime el tributo indígena.

²³² Cfr. Informe sobre la situación indígena en Venezuela, preparado en ocasión del VIII Congreso Indigenista Interamericano en 1980

Decreto Real del 13 de marzo de 1811	En nombre del Rey de España se exime de la obligatoriedad del tributo indígena.
Decreto de Simón Bolívar de 1820	Establece el Libertador: “se devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos según sus títulos, cualquiera sea el que aleguen para poseerlas los actuales poseedores” ²³³ .
Ley sobre Extinción de los Tributos de los Indígenas, Distribución de sus Resguardos y Exenciones que se les conceden (Octubre, 1821)	De carácter proteccionista, garantizaba algunos derechos colectivos a los indígenas sobre sus tierras ²³⁴ y se eximía a los indígenas del pago del tributo al que estaban obligados en el resguardo.
Ley sobre Repartimiento de los Resguardos Indígenas (Abril, 1836)	Su artículo 1 establece que las diputaciones provinciales dictarán las resoluciones que convengan para distribuir los resguardos de tierras entre los indígenas. Ratificando lo señalado por la Ley de 1821.
Ley sobre Resguardos Indígenas (Abril, 1838)	Deroga las anteriores y dispuso que los indígenas procederían a la división de sus propios resguardos, añadiendo que deben formarse para ser adjudicados un número de lotes igual al número de familias existentes en cada comunidad.
Ley sobre Reducción, Civilización y Resguardos Indígenas (1882)	Esta Ley estableció una excepción sobre el reconocimiento de nuevas comunidades indígenas, es decir, sólo reconoce a las que ya se conocen en Amazonas, Alto Orinoco y la Guajira y siguen administrados por el Ejecutivo Federal.
Ley sobre Reducción, Civilización y Resguardos Indígenas (1884)	Deroga la ley de 1836 e incorpora en su artículo 4 que las comunidades indígenas continuarían como dueños de sus respectivos resguardos y que procederían a su división como propiedades, dentro del término improrrogable de dos años.
Ley sobre Reducción, Civilización y Resguardos Indígenas (Mayo, 1885)	Ratifica la extinción de las comunidades indígenas como entidades jurídicas.
Sentencia de la Alta Corte Federal (1896)	La sentencia resolvió: “Nunca propiedad más legítima y más conforme a los preceptos del derecho natural y derecho positivo, como la que correspondía a los indios en el territorio que ocupaban, al tiempo de la conquista (...)”

²³³ Cfr. Artículo 1º del Decreto del Libertador Simón Bolívar, dictado en Cúcuta en fecha 20 de mayo de 1820.

²³⁴ Véase: “Cuerpo de Leyes de la República de Colombia que comprende todas las Leyes, Decretos y Resoluciones dictados por sus Congresos desde el de 1821 hasta el último de 1827”.

Ley sobre Resguardos Indígenas (Abril, 1904)	<p>De interés los tres primeros artículos de la Ley.</p> <p>Artículo 1. Los terrenos de los Resguardos de Indígenas, que aún se conserven en comunidad, se adjudicarán a sus actuales poseedores por los límites que tienen entre sí reconocidos, en las partes que se hallan respectivamente ocupando. Artículo 2. Para adquirir el título definitivo de la propiedad que la presente Ley concede, deben los actuales poseedores ocurrir a la Oficina de Registro del Distrito donde estén ubicados los terrenos, a hacer protocolar la escritura o documento que legitime su posesión, con inserción de esta Ley (...)</p> <p>Artículo 3. Pasan a formar parte del dominio y propiedad de la Nación los terrenos de las comunidades de Indígenas, ya extinguidas y aquellos cuya posesión o propiedad no pueda justificarse con títulos auténticos o supletorios.</p>
Ley de Tierras Baldías y Ejidos (Agosto, 1909)	Se ratifica lo expuesto en la Ley de 1904, en cuanto a considerar inexistentes a las comunidades indígenas, pero señaló un uso distinto para las tierras de los resguardos, aplicable solamente en el caso de que los indígenas miembros de la comunidad en cuestión hubieran desaparecido.
Ley de Tierras Baldías y Ejidos (1910)	El artículo 4, numeral tercero dispone que se incorporaban a los terrenos ejidos, las tierras que correspondían a los resguardos de las comunidades extintas cuyos poseedores no hubieran seguido lo dispuesto en la Ley de 1904.
Ley de Tierras Baldías y Ejidos (1919)	Estableció que serían declarados ejidos los resguardos de las extinguidas comunidades indígenas.
Ley de Tierras Baldías y Ejidos (Septiembre, 1936)	Agrega ésta ley los derechos adquiridos por prescripción en su artículo 3, numeral tercero: “Son terrenos Ejidos: 3. Los resguardos de las extinguidas comunidades indígenas. Respecto a estos terrenos se respetarán los derechos adquiridos individualmente por los poseedores de fracciones determinadas de acuerdo a la Ley de 8 de abril de 1904 y los derechos adquiridos por prescripción”
Ley de Reforma Agraria (Marzo, 1960) ²³⁵	La democracia aprueba la Ley de Reforma Agraria en la que se reconoce a las comunidades indígenas el

²³⁵ Esta ley considera al indígena como objeto y sujeto de la reforma, igualándolo al campesinado de la nación. Sin embargo, en los primeros diez años de vigencia de la ley no se materializan grandes acciones hacia el sector indígena del país. Esta situación probablemente ocurrió, debido a que ya existía la Comisión Indigenista Nacional que se encargaba de estudiar, planear, orientar, aplicar, y desarrollar

	<p>derecho agrario al uso y goce de las tierras que ocupaban, pero no se reconocía expresamente un derecho de propiedad sobre la tierra. Por una parte, el artículo 2, literal d establecía lo siguiente: “En atención a los fines indicados, esta ley garantiza (...) garantiza y reconoce a la población indígena que de hecho guarde el estado comunal o de familia extensiva, sin menoscabo del derecho que les corresponde como venezolanos, de acuerdo con los partes anteriores, el derecho de disfrutar de las tierras, bosques y aguas que ocupen o les pertenezcan en los lugares donde habitualmente moran sin perjuicio de su incorporación a la vida nacional conforme a ésta y otras leyes”</p> <p>Por otra parte, el artículo 89 indicaba que “El Instituto Agrario Nacional de acuerdo con el Ministerio de Justicia velará porque las reubicaciones de comunidades o familias extensivas de la población indígena, cuando fuere procedente se lleven a cabo conforme a las disposiciones de la presente ley que les sean aplicables”</p> <p>De igual manera, el artículo 161 numeral tercero hacía referencia a la restitución de tierras a las comunidades indígenas y el artículo 167 numeral cuarto al catastro.</p>
Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios (Agosto, 1982)	Art. 31: “El Procurador Agrario Nacional, oída la opinión del Consejo de la Procuraduría Agraria, nombrará los Procuradores Agrarios, quienes actuarán en representación de los beneficiarios de la Reforma Agraria, a título gratuito, de las comunidades indígenas y de los pequeños productores pesqueros, ante los juzgados,

la política indígena oficial. Lo cierto es que el legislador, desde una visión integracionista, reconoció algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupaban, de lo que se desprendía que el indígena podía usar, gozar y disfrutar las tierras que ocupaba, pero carecía de un título de propiedad sobre ella. No obstante, hay que resaltar que mientras se reconocía como indígenas sólo las tierras cultivadas, se dejaba abierta la oportunidad para ocupaciones sobre las no cultivadas por ser consideradas *res nullius*, repitiendo prácticamente el sistema colonian. De igual manera, la ley consolidó formas de explotación económica de las tierras que por una parte se distanciaba bastante de la visión indígena y por la otra daba espacio a enfrentamientos violentos. Otro punto clave en este análisis es el hecho de la efectividad de la aplicación de la ley, quizás no tanto por su contenido, sino más bien por las políticas públicas igualitarias que acompañaron el proceso. Ultimadamente, no es posible igualar al indígena con el campesinado venezolano, puesto que se descarta la relación hombre-tierra particular de los modos de vida indígenas, y se abre la puerta a la apropiación de tierras no cultivadas por parte del Estado.

	<p>dependencias, instituciones y demás órganos del poder público, o ante los particulares en los casos necesarios, en las materias relacionadas con la legislación agraria nacional”</p> <p>Art. 32: “Se crea el Consejo de la Procuraduría Agraria, que estará integrado por el Procurador Agrario Nacional, quien los presidirá y por dos representantes designados por el Instituto Agrario Nacional y la Federación Campesina de Venezuela, respectivamente. El Consejo de la Procuraduría Agraria tendrá las siguientes atribuciones (...) programar la asistencia jurídica de los sujetos beneficiarios de la Reforma Agraria, a título gratuito, de las comunidades indígenas y pequeños productores pesqueros”</p> <p>Art. 35: “Los Procuradores Agrarios son representantes legales, de pleno derecho, de las comunidades indígenas señaladas en la Ley de Reforma Agraria; por ello, los jueces al admitir demandas contra estas comunidades ordenarán la notificación al Procurador competente y oficiarán al Procurador Agrario Nacional. El acto de contestación de la demanda no podrá realizarse sin la presencia del Procurador notificado, o del que en su defecto designare el Procurador Agrario Nacional. En todo caso, el juez podrá tomar las previsiones contempladas en el Artículo 21 de la presente ley”</p>
Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo	Se puede ver a detalle en el Capítulo II de ésta investigación.
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo	Se puede ver a detalle en el Capítulo II de ésta investigación.
Ley de Turismo (Diciembre de 1992)	Esta Ley se encuentra derogada pero en su artículo 59 disponía que: “en todo lo relacionado con las zonas habitadas por comunidades y grupos étnicos indígenas, esta Ley se aplicará en concordancia con el Régimen de Excepción Constitucional y demás disposiciones aplicables”. Luego, en el artículo 60 señalaba que: “se prohíbe autorizar cualquier proyecto, programación o desarrollo turístico que perturbe y vulnere la arquitectura y el paisaje tradicional, la vida de las comunidades indígenas, la soberanía nacional, la imagen del país, el respeto a

	los ciudadanos, o que deterioren el ambiente o agredan la fauna y la flora”.
--	--

Tabla 6. Índice de decretos, leyes y documentos relevantes a la cuestión indígena en Venezuela, desde 1810.
Fuente: elaboración propia

2.3. Conclusiones

Como se ha podido observar, el principio *res nullius* adquirió una importancia innegable en el escenario jurídico, político y social en relación con las comunidades indígenas y sus tierras desde la conquista. Lo que se entendía en Roma como modo originario de adquirir la propiedad, fue lo que se aplicó desde el primer contacto en las tierras americanas. Había intención de poseer y por tanto se materializaba la ocupación.

Esto se explica observando en primer lugar, a la Iglesia Católica como institución sobreviviente a la caída del Imperio Romano Occidental y por tanto multiplicadora de muchos de sus preceptos y prácticas jurídicas. En segundo lugar, el contexto histórico marcado por los conflictos territoriales en Europa, situación que motivó a los Reyes de Castilla a buscar la autoridad de Roma no sólo para establecer una relación feudal sobre los territorios del Nuevo Mundo, sino también para tener a su favor una decisión emitida por la máxima autoridad espiritual de la época, cuyo criterio era prácticamente incuestionable.

Este modo de proceder trajo como consecuencia el Tratado de Tordesillas, el cual significó la repartición de un mundo que ni siquiera se conocía, se entregaron tierras que aún no se habían descubierto ya que fueron consideradas *res nullius* desde antes de conocerlas.

A pesar de que la Reina Isabel de Castilla hubiera solicitado en varias oportunidades un buen trato para los “indios”, el proceso de conquista avanzaba rápidamente y sin grandes consideraciones, a través de la ocupación de un territorio *res nullius*.

Asimismo, las figuras del resguardo o la encomienda en teoría, se aplicaron como una medida proteccionista al indígena; pero lo cierto es, que en la práctica era un modelo feudal en el cual los indígenas debían pagar un tributo impuesto por el conquistador por vivir y trabajar una tierra que ancestralmente les pertenecía. El establecimiento de resguardos y encomiendas facilitó la concentración de tierras indígenas en manos de los españoles, ya que si bien es cierto no recibían un título de propiedad plenamente dicho, terminaban apropiándose de las tierras que tenían bajo su dominio a través de la ocupación.

En relación a las misiones de la Iglesia Católica y particularmente al trabajo llevado a cabo por la Compañía de Jesús, hay que resaltar la intención de “evangelización pacífica” que tuvieron desde su llegada a América. Aun así, la evangelización *per se*, significa un rompimiento cultural de lo indígena, una injerencia en la forma de vivir de los habitantes originarios del continente, una directriz etnocéntrica e igualitaria que podía materializarse debido a dos circunstancias: primero, si los indígenas seguían siendo infieles no podían ser sujetos de derecho, por tanto la evangelización y bautismo era esencial para lograr una mejor calidad de vida; segundo, debido a que la tierra ahora era del conquistador vivían en los límites impuestos por el resguardo, la encomienda o las misiones, lo que hacía fácil el proceso evangelizador.

Con los acuerdos de Westfalia y la reconfiguración del Estado Nación se logró una clara delimitación territorial en el continente europeo, lo que en consecuencia llevó a una delimitación similar en el continente americano. En lo que respecta a Venezuela, se estableció, aunque en forma general, el límite entre el dominio español y el dominio holandés, dejando claro que entre uno y otro no existía *res nullius*.

En la Venezuela republicana se empezó un proceso lento y tímido de reconocimiento de algunos derechos de los pueblos indígenas, lo negativo, es que a través de los textos constitucionales, leyes y decretos se planteaba una protección cuyo único objetivo era la asimilación de los “salvajes” al grupo social dominante. La promulgación de un régimen legal a favor de los indígenas venezolanos, como resultado de las

demandas nacionales e internacionales del movimiento indígena social con respecto al carácter multicultural que tienen la mayoría de los Estados de América Latina, era algo que todavía tardaba en llegar. Sobre esto, las observaciones de Bartolomé Clavero²³⁶ son relevantes, pues ponen en evidencia que el constitucionalismo y la fundación de las nacientes repúblicas de América no implicarían una mejoría inmediata ni evidente en las condiciones de los indígenas.

En todo caso, la historia de los indígenas desde la conquista puede ser calificada de muchas maneras. Sin embargo, más allá de los calificativos que cada quien disponga otorgarle, es importante resaltar que el desbalance histórico del conflicto entre la sociedad criolla y la *ab origen* se ha canalizado desde el principio a través del DI, ya que basándose en él, se han justificado las medidas y prácticas aplicadas en la Conquista, colonización, dominación y asimilación.

En vista de todo lo anterior, se puede deducir que el principio *res nullius* sigue vigente en la práctica relativa a los pueblos y comunidades indígenas. El Estado-Nación, en este caso Venezuela, ha justificado la ocupación de tierras indígenas desde normas y políticas internas. A pesar de esta situación, hay que recordar la existencia de un contexto internacional favorable para las demandas de los pueblos indígenas, en el que la protección de la biodiversidad y la valorización de la cultura ancestral ocupan un lugar muy importante. La reconstrucción de las fronteras étnicas toma indudablemente en cuenta el territorio como un elemento clave del desarrollo y bienestar de la población. El aumento de políticas públicas de calidad aseguraría el cumplimiento de los derechos indígenas reconocidos.

²³⁶ Clavero muestra como, para autores como John Locke y Adam Smith, la cuestión americana era una preocupación principal. Partiendo de una concepción individualista del derecho, ambos concluyen que la propiedad en el Nuevo Mundo es producida a través del uso que se le da, siendo que por mera ocupación no es posible que exista propiedad: “(...) si no hay cultivo y cosecha, ni la ocupación efectiva sirve para generar derecho (...) este continente de América, aunque esté poblado, puede todavía considerarse vacante, a disposición del primer colono que llegue y se establezca. El aborigen que no se atenga a estos conceptos, a tal cultura, no tiene ningún derecho”. Véase: CLAVERO, B. (1994): *Derecho indígena y cultura constitucional en América, Siglo XXI, México*, págs. 21-27.

Capítulo III.

***Res nullius* y la complejidad de los territorios indígenas en Venezuela.**

En las conclusiones del capítulo anterior se mencionaba la importancia del DI en torno a la cuestión indígena, pues a través de él las potencias europeas que llevaron el proceso de conquista, aplicaron derecho, legislaron y desarrollaron las normas y doctrinas aplicadas en el sometimiento de los aborígenes. En la actualidad, la relación existente entre los Estados y los pueblos indígenas a través del DI tiene una de sus expresiones más concretas en los tratados que se han celebrado entre ambos, en los que los Estados les han dado el reconocimiento como sujetos de derecho con sus deberes y obligaciones.

Los Estados-Nación latinoamericanos, específicamente Venezuela, han pasado por distintos procesos políticos, económicos y sociales, lo que lleva a los siguientes cuestionamientos: ¿el desarrollo jurídico en favor de los indígenas tiene aplicación plena?, ¿se respeta el derecho reconocido al territorio? Desde que se inició éste trabajo de investigación, se ha intentado dejar claro que para los pueblos indígenas el núcleo de su conflicto con el Estado es el territorio. El territorio como se aborda en el capítulo I de éste documento, es un espacio político y económico que también incluye elementos culturales y de identidad aportados por los individuos que viven en él.

Los territorios indígenas de Venezuela han tenido una historia compleja que inició con la ocupación de la conquista y que se ha mantenido en el tiempo a pesar de los cambios políticos y sociales que ha vivido el país. La ocupación sobre territorios *res nullius*, ha traído consigo una serie de consecuencias negativas o desfavorables para los pueblos y comunidades indígenas, que en muchos casos han estado obligados a adoptar estrategias de resistencia para poder sobrevivir a procesos de desplazamiento y fragmentación.

En el año 1999, en Venezuela lograron configurarse las demandas del movimiento social indígena con las directrices que señalaba el DI, logrando en la ANC una de las Constituciones más modernas de la región; que ponía finalmente al multiculturalismo como parte esencial del contrato social. El propósito era hacer un cambio de la venezolanidad desde el texto constitucional, para lo que evidentemente se necesitaría una nueva institucionalidad dispuesta y capacitada para activar y sustentar al nuevo modelo de democracia participativa y protagónica, y por tanto, atender a todos los ciudadanos con celeridad en sus necesidades y exigencias.

No obstante, se ha observado que a pesar de los avances jurídicos, siguen habiendo letargos políticos. Hay una discrepancia notable entre lo que establece el ordenamiento jurídico nacional y lo que sucede en la realidad de las comunidades indígenas de Venezuela. Esto se explica en que la intención de la reforma constitucional y la realidad posterior han quedado enmarcadas en el contexto de la compleja realidad social, política, económica y cultural que envuelve a la república.

Es urgente que las instituciones se fortalezcan y diseñen políticas públicas concretas y orientadas a atender las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas, en cumplimiento con sus responsabilidades dentro del aparato del Estado. Las reformas jurídicas no son viables si hay debilidad en las instituciones encargadas de materializarlas; ya que, esas debilidades son las que permiten que terceros e intermediarios intervengan en los territorios en detrimento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

Por otro lado, está el factor económico y los intereses del Estado Nación. Venezuela ha apostado estos últimos años por programas de integración latinoamericana que la han comprometido en megaproyectos con Brasil y Colombia²³⁷. Lo que significa

²³⁷ Con Brasil se pueden mencionar: Acta de compromiso entre Corpoelec y Andrade Gutiérrez para construcción e instalación de nuevas plantas de generación eléctrica; Proyecto del segundo desarrollo Doradas-Camburito del complejo hidroeléctrico Uribante Caparo con la corporación eléctrica y la

que pese a los esfuerzos del movimiento social indígena, el modelo extractivista lejos de desaparecer, ha renovado el interés por las tierras indígenas y sus recursos²³⁸.

Con los megaproyectos latinoamericanos y con los demás acuerdos internacionales que ha firmado Venezuela sobre explotación de recursos en el país²³⁹, los

constructora Queiroz Galvão de Brasil, Convenio entre Corpoelec y la empresa Güe de Brasil para desarrollar proyectos de generación eléctrica; Convenio para el suministro de Nafta entre Petróleos de Venezuela (PSVSA) y Brasquen, entre otros. Con Colombia: Carta de compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia para el Desarrollo del Proyecto Binacional Oleoducto Venezuela-Colombia. El objetivo es desarrollar de manera conjunta el diseño, ejecución y puesta en marcha de un proyecto de transporte de crudo mediante la construcción de un oleoducto desde la Faja Petrolífera del Orinoco de la República Bolivariana de Venezuela hasta el Puerto de Tumaco en el Pacífico occidental de la República de Colombia; Carta compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería, de la República Bolivariana de Venezuela, y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia, para la extensión del gasoducto Antonio Ricaurte hacia la República de Panamá y Ecuador. Este convenio tiene como función desarrollar de manera conjunta entre ambos gobiernos un cronograma de trabajo con Ecuador y Panamá que permita compartir las visualizaciones para la extensión de la red de gasoductos de Colombia y Venezuela hacia territorios de Panamá y Ecuador, para de esta manera suministrar gas hacia estos países con una visión a largo plazo y de integración regional; Convenio de intercambio de energía eléctrica entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Instituto de Planificación y Promoción y Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (IPSE). Este promueve establecer los términos generales y compromiso para el financiamiento y ejecución de la ingeniería, procura, construcción, inspección, pruebas y puestas en cooperación en la interconexión entre San Fernando de Atabapo y Puerto Inídira; entre otros. Para más detalles véase: <http://blog.chavez.org.ve/temas/noticias/acuerdos-venezuela-brasil/#.VP-I3PmG9uk>, <http://globovision.com/brasil-y-venezuela-un-creciente-intercambio-en-la-ultima-decada/>, <http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/acuerdos-suscritos-entre-republicas-venezuela-y-brasil/>

²³⁸ José Quinteros, vocero de la Organización Intercultural Autónoma Wainjirawa ha dicho que el Gobierno Bolivariano de Hugo Chávez dio reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, lo que fue un gran paso. Sin embargo, aún deben luchar contra la imposición de proyectos extractivos que no atienden a sus formas de concebir a la naturaleza. Véase: <http://radio.uchile.cl/2013/06/27/dirigentes-latinoamericanos-advierten-peligroso-avance-de-mega-proyectos-extractivos>

²³⁹ Venezuela ha firmado Convenios con Rusia, Bielorrusia y China. Entre los acuerdos firmados con Rusia se pueden mencionar los siguientes: Carta de intención para que Rusia tenga participación en cuatro yacimientos de la Faja Petrolífera del Orinoco. El objetivo de este documento es explorar y exportar hidrocarburos. Venezuela tendrá un 60 por ciento de participación (el Presidente Putin entregó al Presidente Chávez 600 millones de dólares por participar en la explotación de la faja del Orinoco); Se acordó construir la empresa mixta Petro – Miranda para explotar el yacimiento Junín 6 y desarrollar infraestructura petrolera en la Faja Petrolífera del Orinoco. Con Bielorrusia: Petróleos de Venezuela (Pdvs) y Belorusneft (estatal petrolera bielorrusa) han suscrito acuerdos para concretar en territorio venezolano proyectos de gasificación, exploración y explotación de campos maduros ubicados en el oriente y occidente del país, así como la creación de una empresa mixta venezolana-bielorrusa en la Faja Petrolífera del Orinoco. Venezuela y China firmaron un convenio sobre tramo C del Fondo de financiamiento conjunto chino-venezolano; un Memorándum de entendimiento para la creación de una empresa mixta para desarrollo del tramo Junín I y un Memorándum de entendimiento para el desarrollo

nuevos pobladores que llegan por las actividades económicas, empiezan a tomar decisiones sobre el uso de los recursos y el manejo de las tierras. Lo que deja ver claramente que el Estado no pone límites y los que llegan tienen la percepción de que están en territorios *res nullius*, que no hay ninguna autoridad y que por tanto son libres en decisión y actuación.

Además, está el factor político. Se han desplazado a las autoridades tradicionales por nuevos liderazgos políticos que responden a intereses de la política nacional –independientemente de cuál de los dos lados de la polarización venezolana se encuentren-, separándose abiertamente de lo que es y significa la lucha y el movimiento social indígena, olvidándose de las necesidades de sus comunidades.

Desde 1999 la sociedad venezolana ha sido orientada fundamentalmente en dos direcciones opuestas: la del gobierno y la de la oposición. Esta circunstancia ha permeado en todos los sectores, dejando ver a Venezuela dividida en dos sectores aparentemente irreconciliables, lo que produce entre otras que no haya un diálogo verdadero ni consensos a largo plazo.

Habiendo planteado a grandes rasgos la complejidad del contexto de los territorios indígenas de Venezuela, se hará una revisión de la relación del principio *res nullius* con elementos que son parte del escenario objeto de estudio.

La democracia basada en la participación ciudadana, la representación política y los controles interinstitucionales, es una pieza fundamental para evitar que el poder sea

del proyecto mapa minero de Venezuela y el impulso de las minas y cristinas. Puede encontrarse información adicional en:

- <http://www.avn.info.ve/print/14759>
- <http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/Rusia-y-Venezuela-sellon-pacto-para-explotacion-de-la-Faja-Petrolifera-del-Orinoco/>
- <http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/2619/193.PDF>
- <http://www.olabolivariana.org.ve/noticias/gobierno-recupero-faja-petrolifera-del-orinoco/>
- <http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/07/21/venezuela-y-china-firman-38-nuevos-acuerdos-en-areas-economica-y-social-fotos-video-6199.html>

arbitrario. La institucionalidad permite definir las reglas puntuales para organizar, ejercer y controlar el poder y así atender eficientemente las demandas de todos los individuos en un ambiente de equidad y celeridad.

Para que las sociedades puedan ser democráticas son necesarios determinados valores, derechos y actitudes que faciliten el nivel de convivencia. Los valores mínimos exigibles para considerar a una institucionalidad como democrática deben ser la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad; principios que a su vez producen mayores niveles de apoyo y tolerancia.

Navarrete (2004) asegura que “fortalecer la democracia, el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos requiere desde el Estado políticas y acciones de orden social y económico, que posibiliten a los ciudadanos resolver sus necesidades básicas y transformar situaciones de iniquidad, violencia, impunidad y corrupción. Igualmente, son necesarias políticas y acciones educativas, no solo para la escuela, sino también para la sociedad en su conjunto y especial los medios de comunicación y la familia”²⁴⁰. En este sentido, el papel que cumple la democracia en la reivindicación y materialización de derechos de los pueblos indígenas, se hace necesaria la implantación de planes y programas estructurados desde las políticas públicas de las distintas instituciones con el fin de hacer realidad el proceso intercultural prometido desde 1999.

En cuanto a los cuestionamientos sobre cómo hacer institucionalidad para todos los ciudadanos desde el deber de garantizar el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia, es decir, desde un entendimiento democrático e intercultural, planteamos en un intento de síntesis y sin voluntad de excluir otros factores, un resumen de cinco alternativas, que desde nuestra óptica pudieran ser las principales claves de éxito en la interculturalidad desde las instituciones del Estado.

²⁴⁰ NAVARRETE, J.: “Derechos Humanos y Democracia: desafíos de hoy y de siempre” en *Les a Humanidad*, Fundación Venezuela Positiva, Caracas, 2004, pág. 379.

- a. Instituciones que investigan. El Estado no puede generar una política pública dispersa, sin bases; para que una política pública pueda ser efectiva y democrática, debe fundamentarse en una investigación de calidad. La importancia de este primer punto radica en que para comprender la elaboración, definición y posterior aplicación de una política pública determinada, es necesario saber de dónde surgió la necesidad y qué elementos existen en el contexto del grupo de personas que serán atendidas por esa acción del Estado. Lamentablemente, todavía hay funcionarios –en Venezuela y en todas partes- que consideran a la cuestión indígena como algo aislado, como un capricho de pocos. Es un error pensar que las exigencias de calidad no son necesarias en los procesos de interculturalidad o de atención a grupos culturalmente diferenciados. Sólo en la medida en que los programas o las políticas públicas sean consecuencia de un trabajo exhaustivo de previa preparación en investigación, la institución logrará resultados positivos. Si la institucionalidad no investiga para actuar diligentemente, no cumpliría ninguna función relevante, se quedaría en la mera divulgación de derechos, no en la materialización de los mismos.
- b. Institucionalidad que se asocia. Aguilar y Bustillos (2007) señalan que “la formulación de una política depende de cómo se mire el contexto social, sin embargo, cada caso particular amerita de simples preguntas generales como: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Para qué?” Una vez que como decíamos antes, la institución haya investigado y tenga clara su hoja de ruta, es muy posible que requiera de la asistencia de expertos para responder a las necesidades de la sociedad de la mejor manera posible. Asociarse con individuos que estén fuera de las instituciones no debe ser visto nunca como una debilidad gubernamental; al contrario, debe tomarse como una acción responsable en favor de la ciudadanía.
- c. Institucionalidad que maneja bien los recursos. Es probable que parezca evidente, pero, en muchos casos las asignaciones presupuestarias quedan muy por arriba o muy por debajo de las necesidades. Una institucionalidad que verdaderamente está comprometida con atender de la mejor manera a las personas que cuentan con su trabajo, debe saber administrar y ejecutar su presupuesto de la mejor manera. Por supuesto no se trata de generar dependencia. Al contrario, en el caso indígena y el MPPI por ejemplo, sería una buena iniciativa que desde el órgano se motivara a las

comunidades indígenas en planes de desarrollo económico basados en el buen vivir y todos los elementos culturales según sea el caso. En este caso concreto el MPPI fungiría como apoyo en el inicio del proceso y apoyaría con sus recursos el determinado proyecto.

- d. Institucionalidad que está en redes sociales y entiende el poder del *marketing* 2.0 En el escenario actual en el que se desenvuelven las relaciones de los seres humanos se han roto los límites tradicionales, estando pues en medio del mundo globalizado, donde todas y todos nos encontramos a la distancia de un *click*. Para la institucionalidad moderna es necesario estar *on line* y lograr atender incluso por esa vía, las necesidades o consultas de los ciudadanos. Ahora bien, las redes sociales no deben ser usadas desde la institucionalidad para publicidad partidista, debe cumplir con el fin informativo y en el caso de los pueblos indígenas, el internet y las redes sociales son vías que ofrecen infinitas posibilidades de acción y de educa-acción sobre la sociedad criolla o no indígena. Es una manera diferente de enseñar a todos los ciudadanos los beneficios de la interculturalidad y de lo positivo que es tener un país con características multiculturales donde todas y todos somos parte de una historia común.
- e. Institucionalidad que usa la diferencia como elemento para competir. Si el desarrollo de una política pública logra hacerse en términos de calidad, la institución adquirirá prestigio, seriedad y coherencia. Dejará de tener planes dispersos para ser reconocida como un referente de lo jurídico y lo político.

Con relación a lo anterior, el Estado será responsable de los procesos de interculturalidad en la medida en la que desarrolle o no políticas públicas de excelencia para materializarla. Corresponde al Estado poner la experiencia intercultural en un amplio proceso de participación -como una opción inclusiva- con una fundamentación amplia y no sólo específica del asunto, con estimación de costos y de alternativas de financiamiento, con factores para una evaluación costo beneficio social, con beneficio social prioritario, con consistencia interna agregada, con oportunidad política, con un lugar en la secuencia de medidas pertinentes, con claridad de objetivos, con funcionalidad de los instrumentos y con indicadores reales. En definitiva, debe buscarse una profunda democratización de la institucionalidad del Estado, ya que para lograr su promesa

democrática, solidaria y justa con los pueblos indígenas necesita ser mucho más horizontal. Esta horizontalidad debe ser entendida desde la adaptación necesaria de los procesos y estrategias de las políticas públicas para permitir una participación efectiva de los pueblos indígenas, para que sus aspiraciones, culturas y características sean plenamente respetadas y fortalecidas desde acciones interculturales.

Las normas de DDHH que contiene la Declaración Universal de DDHH (1948), el Convenio 169 (1989), la DPPI (2007) y otros instrumentos internacionales sobre DDHH y el reconocimiento de derechos existente en la CRBV (1999) y en la LOPCI (2005) y otros instrumentos y reglamentos de carácter nacional, deben materializarse a través de la transversalización de las políticas públicas mediante del desarrollo de principios de diversidad cultural y diálogo intercultural.

En este sentido, el objeto de este apartado es examinar las principales acciones de varios de los organismos del Estado-Nación Venezuela, que tienen competencia directa en materia indígena y en las políticas públicas dirigidas a materializar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la CRBV (1999).

Examinaremos entonces desde los valores y actitudes relacionados con los derechos reconocidos en la CRBV (1999) sabiendo que tienen su fundamentación entre otras cosas en los DDHH y subrayando que privar a los pueblos indígenas de ellos equivaldría a negarles su propia condición y dignidad.

Órgano	Política/Comentario
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación	Existía desde antes de la CRBV (1999) y siguió trabajando después de ella, fundamentalmente en el área educativa y social, bajo la autoridad del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. También la Dirección de Asuntos Indígenas empezó a implementar acciones en lo relativo a las actividades pedagógicas para lograr construir planes de educación intercultural bilingüe. El trabajo realizado con los pueblos Pemón, Ye'kuana y Warao fue todo un éxito. De igual manera prestó atención especial a los Yanomami. En el año 2001 la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes fue dividida, creándose la

	Dirección de Educación Indígena ²⁴¹ .
Comisión Presidencial para la Atención de los Pueblos Indígenas	En el año 2001 fue publicado en Gaceta Oficial Número 319.227, el Decreto Número 1.393 que crea la Comisión Presidencial para la Atención de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de atender los principales problemas de los pueblos y comunidades indígenas del país a través de la formulación de políticas públicas hacia ese sector de la población. Sin embargo, la Comisión no tuvo ningún impacto en términos de diseño de políticas públicas. Fue disuelta en el año 2003.
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	La LOPCI (2005) en su artículo 142 establece lo relativo al ente ejecutor de la política indígena del país y la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No obstante, a pesar de su creación en el año 2005, nunca ha sido puesto en funcionamiento por parte del Gobierno Nacional, por lo que en la práctica carece de existencia oficial y funcional.
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas	Creado en diciembre del año 2006, publicado en la Gaceta Oficial Número 5.836 del año 2007, sustituye a la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación, como órgano encargado de la policía indigenista de Venezuela. El nuevo ministerio fue creado a pesar de lo dispuesto en la LOPCI (2005) que establecía al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para llevar a cabo esas funciones. Es de destacar que en la organización del Ministerio hay ocho vice-ministerios organizados por regiones geográficas. El Ministerio ha establecido las siguientes políticas para su desarrollo institucional: 1. Ejercer la rectoría y coordinación de las políticas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas del país. 2. Establecer los mecanismos para el establecimiento de un sistema de defensa y dignificación de los pueblos y comunidades indígenas del país y de sus conocimientos tradicionales. 3. Promover mecanismos para impulsar el proceso de formación e instrucción intercultural multilingüe y bilingüe de los pueblos y comunidades indígenas. 4. Establecer con la participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas, las normas relativas a la conducta ética en investigaciones y prácticas científicas, sanitarias, medicinales, sociales, económicas y ambientales a desarrollarse en el hábitat de tierras indígenas conforme a las leyes que rigen la materia. 5. Promover el ejercicio del derecho de consulta del poder popular indígena, sus organizaciones, en los asuntos locales o comunales que puedan afectarles directa o indirectamente. 6. Incentivar la participación de las mujeres indígenas en sus pueblos y comunidades indígenas y en la vida pública nacional e

²⁴¹ Puede ampliarse la información en el sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Educación: http://www.me.gob.ve/noticias_zonas/contenido.php?id_seccion=16&id_contenido=8&modo=2

	<p>internacional. 7. Promover una respuesta a la demanda histórica de los Pueblos Indígenas a través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas²⁴².</p> <p>Entendiendo que el Ministerio debe asumir funciones ejecutando políticas públicas desde los pueblos indígenas, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes destaca que: “El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas debe tener como objetivo lograr la aplicación de la o las política (s) pública (s) hacia los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela, con la realización de dos procesos simultáneos. Uno, específicamente relacionado con la transversalización de la política, y otro, con el fortalecimiento del Ministerio como institución del Gobierno, que esté en capacidad de promover y de dar seguimiento a una nueva política definida desde una agenda indígena en armonía con un plan de desarrollo integral y sustentable (...) el Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas es una necesidad institucional, pero también sobre todo una necesidad para articular las demandas de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela”²⁴³.</p>
Defensoría del Pueblo	<p>Lo relativo a la Defensoría del Pueblo está regulado a partir del artículo 280 de la Constitución. Es de interés que en el artículo 281, numeral 8 se establece como una atribución específica a la Defensoría: “velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección”²⁴⁴.</p>
Defensa Pública Nacional	<p>A partir de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, publicada en Gaceta Oficial Número 39.021 en el año 2008, existe la figura del defensor público indígena, para que en el ejercicio de las funciones que le son propias, asuma la representación y defensa pública de los pueblos indígenas en las diferentes instancias administrativas y judiciales²⁴⁵.</p>

Tabla 7. Órganos del Estado y políticas indígenas.

Fuente: elaboración propia.

²⁴² Se puede ampliar la información en el sitio web del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas: <http://www.minpi.gob.ve/minpi/>

²⁴³ Op. cit. pág. 39.

²⁴⁴ Se puede ampliar la información en el sitio web de la Defensoría del Pueblo: <http://www.defensoria.gob.ve/dp/>

²⁴⁵ Se puede ampliar la información en el sitio web de la Defensa Pública: <http://www.defensapublica.gob.ve/>

Plan	Comentario
Plan Casiquiare 2000	Este plan estuvo coordinado y ejecutado por la Guardia Nacional en los Municipios Alto Orinoco y Río Negro del estado Amazonas en los años 2000 y 2001. En este plan se invirtieron elevados recursos presupuestarios, mediante una política de corte asistencialista. No tuvo permanencia en el tiempo, ni impactos estructurales frente a los graves problemas que se viven en la zona ²⁴⁶ .
Plan Niayoba (Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Ministerio del Poder Popular para la Salud)	Se formuló y empezó a ejecutarse en los años 2009 y 2010. Su rango de acción fue la zona de Parima y estuvo destinado a atender las deficiencias nutricionales de las comunidades Yanomami. Sigue activo aunque su impacto ha sido notablemente reducido ²⁴⁷ .
Misión Guaicaipuro	Creada a través del Decreto Presidencial 3.040 del año 2004 fue adscrita –en un primer momento– al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Luego, en el año 2005 pasa a formar parte del Ministerio de Participación y Desarrollo Social, y, ahora, desde el 2007 está adscrita al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene como misión coordinar, promover, articular y viabilizar las políticas, planes, programas y proyectos del gobierno bolivariano con la finalidad de operativizar y acelerar su ejecución en las comunidades, comunas y ciudades conjuntamente con los consejos comunales y organizaciones propias de los indígenas de la patria, que contribuyan a saldar la deuda histórica empeñada en el proceso de construcción revolucionaria de la gran nación libre y soberana. Con respecto a su visión, la misión, se presenta como el ente ejecutor de las políticas y proyectos hacia los pueblos indígenas mediante la inclusión activa y protagónica en el proceso de transformación socialista de la nación y garante del cumplimiento de los derechos que la Constitución Bolivariana y demás leyes que reconocen a los pueblos y comunidades indígenas, al definir a la sociedad venezolana como socialista, pluriétnica y multicultural ²⁴⁸ .

²⁴⁶ El Diario de circulación nacional “El Universal” se refiere al Plan Casiquiare 2000: http://www.eluniversal.com/1999/11/15/pol_art_15122AA

²⁴⁷ El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y las Tierras hace referencia a este plan: http://mlegislativo.webfaccional.com/media/rendicion_de_cuentas/memoria_y_cuenta_agricultura_y_tie_ras_tomos_I_y_II_2010_1.pdf

²⁴⁸ Véase información más detallada sobre la Misión Guaicaipuro en: <http://www.minpi.gob.ve/minpi/es/mision-guaicaipuro>

Plan de Defensa, Desarrollo y Consolidación de la Sierra de Perijá (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación)	Fue aprobado en octubre de 2008, presentado a los medios como un plan integral del Gobierno Nacional para atender las necesidades del pueblo Yukpa en la Sierra de Perijá, a partir de los conflictos ocasionados por el desacuerdo de las comunidades a la propuesta de demarcación de sus tierras hecha por la Comisión Nacional de Demarcación. El plan manejaba un amplio presupuesto para ser utilizado en la mejora de vías rurales de penetración, la educación, la salud, la seguridad, demarcación de tierras y el desarrollo de la producción socialista ²⁴⁹ .
--	---

Tabla 8. Planes sociales y políticas indígenas.

Fuente: elaboración propia.

Sabiendo por un lado, que la República Bolivariana de Venezuela se ha consagrado constitucionalmente bajo un modelo de democracia participativa, en la que los ciudadanos tienen una mayor intervención en la toma de decisiones; y, por el otro, que las políticas públicas son diseñadas para adaptarse a un contexto social acrecentando su equilibrio y bienestar, las tablas anteriores merecen varios comentarios.

Primero, hay que señalar que de la revisión documental para poder desarrollar este punto del trabajo, se puede evidenciar que hay experiencias positivas en cuanto a la gestión pública dedicada a las comunidades y pueblos indígenas de Venezuela. Con la nueva Constitución, los primeros años de la democracia participativa se enfocaron en diseñar en el seno de varios organismos y entes del Estado, políticas públicas dirigidas a la materialización del contenido del capítulo VIII de la CRBV (1999).

En segundo lugar, hay que resaltar que también ha habido situaciones inadecuadas, negligencia y omisiones que dejan ver que como en reiteradas oportunidades ha afirmado Vladimir Aguilar: “no siempre el tiempo del derecho es el tiempo de las instituciones”; el gran ejemplo de esto, es lo que sucedió con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que a pesar de estar creado a través de una Ley Orgánica, nunca se puso en marcha y se quedó en una especie de “limbo jurídico”.

²⁴⁹ Diario de circulación nacional “El Nacional”. 13 de octubre de 2008.

Además, es necesario señalar que a pesar de haber sido creado un Ministerio para los Pueblos Indígenas, –del que se tenían altas expectativas en cuanto que el Ministerio *per se* podría haber significado un espacio idóneo para la construcción de políticas públicas interculturales–; las políticas públicas que implementa están caracterizadas por altos niveles de asistencialismo, sin un diseño enfocado en mejorar los problemas sociales de la estructura indígena. Al contrario, son políticas públicas marcadas de contenido político²⁵⁰, a través de las cuales se propone un “nuevo modelo indígena” que deja a un lado el indigenismo, que penetra “legalmente” en las comunidades indígenas a través de planes y misiones sociales con las cuales se desplaza a las autoridades tradicionales, a los usos y costumbres ancestrales y a sus formas de organización política y social²⁵¹.

El Ministerio, en cuanto que institución del Estado, debería impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades lógicas que tienen las comunidades y pueblos indígenas del país, dándole oportunidad participativa y protagónica a ellos como sujetos de derechos, para que sus exigencias puedan ser atendidas a través de una voluntad política comprometida. Sería oportuno que el Ministerio se apoyara también en expertos del tema, para hacer un trabajo en conjunto y así atender correcta y convenientemente las exigencias de los pueblos indígenas.

Los demás ministerios también deben mejorar su acción a través de una coordinación interinstitucional con la que se pueda tener un mayor impacto en la

²⁵⁰ Esto es notable en las declaraciones oficiales del Ministerio, en el discurso de la Ministra y las acciones que desarrolla el organismo.

²⁵¹ Este comentario está basado en el contenido del artículo 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece:
“Artículo 8 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacional mente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio (...)”.

ejecución de políticas públicas especialmente dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.

3.2. Ocupación de territorios indígenas en Venezuela, a propósito de la *res nullius*

El proceso histórico de ocupación de los territorios indígenas en la actual República Bolivariana de Venezuela comenzó el dos de agosto de 1498 con el tercer viaje de Cristóbal Colón, y actualmente, en la segunda década del siglo XXI, no ha concluido. La ocupación, como señala el Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos, es y ha sido siempre un proceso histórico de colonización²⁵².

La garantía de la seguridad territorial indígena es una obligación reconocida por el Estado venezolano a través del artículo 119 de la CRBV (1999)²⁵³ y del desarrollo jurídico interno sancionado a favor de los pueblos y comunidades indígenas. De igual manera, Venezuela suscribió el Convenio 169 de la OIT (1989) en el cual se reconoce la autonomía territorial indígena y la garantía efectiva de su protección²⁵⁴. Por ello, la

²⁵² Así se afirma en:

http://www.observatori.org/mostrar.php?id=51&files_id=38&tipus=articulos&lng=cas

²⁵³ El artículo 119 de la CRBV (1999) establece: “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley”.

²⁵⁴ El Convenio 169 (1989) señala que: “Artículo 14 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.

obligación inmediata del Estado-Nación es garantizar la demarcación territorial para los pueblos y comunidades indígenas.

Por tanto, el proceso de demarcación debe ajustarse completamente al contexto socio histórico y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, tomando en cuenta las realidades geográficas, ecológicas y poblacionales; entendiendo entonces en ese contexto la relación que ellos como sujetos de derecho individual y colectivo, tienen con sus territorios. Los indígenas, indiscutiblemente deben tener una participación protagónica en el proceso de demarcación, lo que pone de aviso que la demarcación no debe ser un proceso arbitrario y unilateral por parte del Estado. Una vez estando la demarcación validada por los pueblos y comunidades indígenas por una parte, y por el Estado por la otra, se procede al otorgamiento de títulos de propiedad colectiva según lo dispone la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas²⁵⁵.

Paralelo a esto, el Estado venezolano garantiza la seguridad territorial para los pueblos indígenas en la medida en la que se obliga a impedir intervenciones que lesionen su integridad cultural, social y económica y cualquier proyecto a desarrollarse en el territorio estará sujeto a la consulta previa e informada a las comunidades que corresponda²⁵⁶.

Frente a esto, es necesario hacer un contraste con respecto a lo que el Estado Nación no hace todavía. Reconocer la existencia y los derechos de los pueblos indígenas en la CRBV (1999) y promocionar la cultura indígena ha sido un gran paso, sin embargo,

²⁵⁵ El artículo 12 de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas establece: “Una vez conformado el expediente del Hábitat y Tierra de cada pueblo o comunidad indígena, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales lo remitirá a la Procuraduría General de la República a los fines de expedición del título de propiedad colectiva. Expedido el título correspondiente los interesados deberán inscribirlo ante la oficina municipal de Catastro respectivo de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional”

²⁵⁶ Esto se consagra en el artículo 120 de la CRBV (1999), a saber: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y la Ley”

los programas sociales en los que han sido “incluidos” contrastan con el sentido de la promesa democrática a demarcar territorios. En Venezuela no hay hasta el momento ningún territorio étnico jurídicamente reconocido a pesar de existir varios proyectos de demarcación que cumplen con todos los requisitos de la ley²⁵⁷. Entre los años 2005, 2006, 2007 y 2012 el Presidente Chávez llevó a cabo un proceso de titulación sobre territorios indígenas que ha sido criticado y negado por expertos del área como Lusbi Portillo Coordinador General de la Organización Social y Ecológica *Homo et Natura* y Vladimir Aguilar miembro del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, quien mediante el artículo “Sombras chinescas en los títulos de propiedad colectiva sobre los hábitats y tierras indígenas en Venezuela” señala que: “Los supuestos títulos de propiedad colectiva otorgados recientemente por el Ejecutivo Nacional sobre los hábitats y tierras indígenas en Venezuela constituyen una nueva afrenta a los pueblos y comunidades indígenas del país. Son títulos donde la propiedad colectiva, en el mejor de los casos, es compartida, pues siguen teniendo el mismo componente de los títulos anteriores: el reconocimiento de intereses (derechos según el título otorgado) a terceros. Se trata de títulos donde no hay propiedad colectiva pues se comparten derechos (intereses decimos nosotros) con terceros que, como ya lo hemos advertido, en el “mejor” de los casos constituyen derechos indígenas amenazados (...)”²⁵⁸

En relación con la ocupación de los territorios y la falta de demarcación en los territorios indígenas de Venezuela, la CIDH en su informe de 2009 sobre la situación de los DDHH en Venezuela²⁵⁹, notó con “extrema preocupación” que, según un informe de la Defensoría del Pueblo, nueve niños del pueblo Warao entre los 6 y 11 años de edad habían muerto en el año 2007 como resultado de su deterioro nutricional y la falta de agua potable. La CIDH expresó que en su criterio, “la precaria situación de salud y alimentación que afectó a esta comunidad no está necesariamente desvinculada de la falta

²⁵⁷ Lo que se ha hecho ha sido entrega de algunas tierras reducidas que hacen alusión más bien al modelo de la Reforma Agraria.

²⁵⁸ Artículo que se puso en circulación en febrero del año 2012.

²⁵⁹ Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009

de demarcación de las tierras ancestrales indígenas (...)”²⁶⁰. De esta manera, tomando en cuenta que el acceso de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y el uso de los recursos que allí se encuentran se relacionan con el alimento y el agua potable, notó la CIDH que “al no haberse hecho efectivo en Venezuela el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, se ha colocado a sus miembros en una situación de desprotección extrema, que ha implicado ya la muerte de varios de sus miembros por causas que habrían podido evitarse con alimentación adecuada y asistencia médica oportuna”²⁶¹. Finalmente concluye la CIDH diciendo que el Estado “debe adoptar medidas urgentes para garantizarles su acceso a la tierra y a los recursos naturales de los que dependen, para poder prevenir así que se sigan afectando otros de sus derechos, tales como su derecho a la salud y su derecho a la vida”²⁶².

Ante las omisiones del Estado, se han ocasionado distintos conflictos territoriales en los que se han violado abiertamente los DDHH de los pueblos y comunidades indígenas. Los conflictos que se encuentran hoy sobre el territorio están enlazados en las relaciones que existen actualmente entre los pueblos y comunidades indígenas, el Estado y otros actores externos. Estos conflictos según Gutiérrez (2006), pueden desglosarse en tres tipos:

- 1) Invasión y Desalojo (directo o indirecto) de los territorios y tierras indígenas: invasiones por colonos, terratenientes, dueños de fundos, hatos y haciendas, promovidas o toleradas por el mismo Estado.
- 2) La explotación de recursos por terceros: utilización sin autorización previa, de los recursos de los territorios indígenas, considerados “tierras de nadie” por los terceros.
- 3) Asignación de usos especiales por parte del Estado (lo que supone también la indefensión jurídica y administrativa frente a iniciativas de ordenación territorial); Ejecución de Proyectos públicos de Desarrollo (explotaciones mineras, petroleras, forestales, industriales y agroindustriales); Expropiaciones y confiscaciones realizadas

²⁶⁰ Doc. OEA/Ser.L/V/II Doc. 54 párr. 1078

²⁶¹ Doc. OEA/Ser.L/V/II Doc. 54 párr. 1079

²⁶² Doc. OEA/Ser.L/V/II Doc. 54 párr. 1080

por el Estado a través de las Áreas Naturales Protegidas (ANAPRO's o ABRAE's); Adjudicaciones de Tierras a campesinos para fines Agroalimentarios (Prendas o Cartas agrarias, “Fundos Zamoranos”), etc²⁶³.

En relación con las comunidades indígenas desposeídas de sus territorios y vulnerables, la Corte IDH estableció que el Estado tiene la obligación de:

1. Adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso efectivo de las comunidades a los territorios que les pertenecen;
2. Esforzarse por garantizar a los miembros de estas comunidades acceso a condiciones de vida dignas, mediante la provisión inmediata de los bienes y servicios que requieren en los campos de alimentación, agua, vivienda digna, salud y educación;
3. Adoptar medidas cautelares provisionales para proteger sus territorios ancestrales de cualquier acto que implique una pérdida de su valor mientras se lleva a cabo su restitución; y
4. Procurar el acceso de los miembros de las comunidades a la justicia, en tanto víctimas de serias violaciones de sus DDHH²⁶⁴.

3.2.1. Conflictos por la ocupación

En el siglo XX las tierras consideradas *res nullius* pasaron a ser territorios del Estado. En la medida en la que Venezuela ha ido construyendo su componente étnico e intercultural, fomentando valores como la identidad y la pertenencia, han ido quedando espacios en blanco que dan oportunidad para que el concepto de la “venezolanidad integrada” sea todavía muy pobre. Esos espacios en blanco tienen un origen único en el proceso de conquista y posterior colonización, ya que lo que se fue planteando como nación se iba circunscribiendo a factores comunes como la lengua o la religión, porque, ¿qué elementos substanciales diferencian a Venezuela de Colombia, por ejemplo? Ese

²⁶³ GUTIERREZ, E. (2006) “Inseguridad Territorial Indígena”, Fundación Escuela de Gerencia Social, Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Caracas, pág. 9.

²⁶⁴ Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya v. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 163.

espacio blanco en torno a la definición de la nacionalidad plena ha sido una herencia colonial que sin duda ha recaído con fuerza en los territorios de los pueblos indígenas pendientes de titulación, que siguen siendo del Estado y por tanto siguen siendo considerados *res nullius*.

Conquistadores y colonos después del primer contacto, colonos del siglo XXI, aventureros, garimpeiros, trabajadores, ganaderos, campesinos y fuerzas del Estado, entran en conflicto constantemente con la población aborígen ya que ésta significa un obstáculo en el proceso de ocupación de tierras *res nullius*, de tierras del Estado, espacios blancos, vacíos de nacionalidad y pertenencia.

Como se ha dicho en el capítulo II la encomienda fue una de las formas de organización territorial en la colonia, y, aunque pareciera que son formas eliminadas y superadas, la realidad es que algunos elementos que originaron la encomienda, están presentes en la Venezuela de hoy. Hay que recordar que desde la colonia si las tierras no habían sido concedidas, privaba el régimen general de titularidad real respecto de “los valdíos, suelos y tierras que no estuviesen concedidos por los reyes”²⁶⁵.

Hay que recordar que en el siglo XIX las nuevas repúblicas establecieron el otorgamiento de títulos baldíos, que, en el caso venezolano se hizo a través de la Ley de Tierras Baldías del Estado de Venezuela adoptada trece años después de que se constituyera, conforme a la Constitución de 1830, como Estado separado de la República de Colombia²⁶⁶. Los títulos dieron origen a ocupaciones de grandes extensiones de terreno, la invasión y el desalojo colaboraron al crecimiento de los terratenientes, latifundios, hatos y haciendas.

²⁶⁵ Así lo dispuso la Real Cédula de 1º de noviembre de 1591, con normas provenientes del viejo derecho castellano que en cuanto a su aplicación en América fue recogido en la Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias publicadas por Carlos III en 1680.

²⁶⁶ Se explica ampliamente en:
<http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea3/Content/1,%202,%2063.%20El%20r%C3%A9gimen%20de%20las%20tierras%20bald%C3%ADas%20y%20el%20derecho%20de%20propiedad%20privada.doc%29.pdf>

Con respecto a los recursos naturales del país hay otra discusión. Venezuela pasó de ser un país exportador de café para convertirse en una nación exportadora de petróleo y de explotación minera desde la aparición de Zumaque y Barroso en el Lago de Maracaibo a principios del siglo XX. En ese momento, la inversión extranjera comenzó a llegar al país, lo que ocasionó que empezara a entregarse en concesión más territorio para exploraciones y trabajos²⁶⁷.

En la actualidad, los pueblos y comunidades indígenas enfrentan una serie de obstáculos importantes para lograr el goce y disfrute de sus derechos a la propiedad y posesión de los territorios y al control de sus recursos. Estos obstáculos han sido ocasionados por las acciones y las omisiones del Estado venezolano, sobre tierras que están tomadas en cuenta para la explotación de recursos o que están en manos de propietarios adjudicados por el mismo Estado en épocas anteriores. No obstante, los pueblos indígenas tienen derecho a que se les proteja de conflictos con terceros por el derecho a la tierra²⁶⁸, la CIDH ha sido clara al explicar que cuando surgen conflictos, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a obtener protección y reparación a través de procedimientos adecuados y efectivos; a que se les garantice el goce efectivo de su derecho a la propiedad; a que se investigue efectivamente y se sancione a los responsables de dichos ataques; y a que se establezcan mecanismos especiales rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos sobre el dominio de sus tierras²⁶⁹.

²⁶⁷ *La Royal Dutch Shell* y la *Creole Petroleum Corporation*, por ejemplo.

²⁶⁸ CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137 – Recomendación 2.

²⁶⁹ En el mismo Informe de 2009 que hemos venido citando, la CIDH advirtió que “Los pueblos indígenas tienen derecho a que la titulación de sus tierras sea efectiva, es decir, que les permita gozar en la realidad de la propiedad de sus territorios ancestrales” pero diez años antes en un Informe de la CIDH sobre los DDHH en Colombia ya había señalado: “Como manifestación específica de esta garantía, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de “interferencia de personas que procuren mantener o tomar el control de esos territorios mediante violencia o por cualquier otro medio, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas”. V. CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, párrs. 21-27 y Recomendación 3.

Asimismo en el citado Informe de la CIDH de 2009 se hizo referencia al caso del pueblo Yukpa en la Sierra de Perijá. Considera la CIDH que debido a la falta de titulación efectiva y al retardo de la demarcación de las tierras, se han generado conflictos violentos entre varias comunidades Yukpa y ganaderos de la zona y que en el contexto de dichos conflictos, personas y comunidades Yukpa habían sufrido hostigamiento constante verbal y físico para expulsarlos de las tierras que habían venido recuperando. Se alegó que en algunos casos se habría contado con la Guardia Nacional para los ataques contra los Yukpa y que otros conflictos estaban sucediendo con terceros interesados en la explotación del carbón, situación que se había incrementado debido a la falta de demarcación y titulación. Así, coherentemente la CIDH expuso que el problema era el de “la falta de implementación de las normas constitucionales y legales internas que consagran los derechos territoriales de los pueblos indígenas, por tanto, la CIDH llamó al Estado a “adoptar las medidas necesarias para dar vigencia inmediata a las normas constitucionales e internacionales que consagran este derecho de los pueblos indígenas”²⁷⁰. De igual manera la CIDH recomendó al Estado venezolano lo siguiente:

1. Adoptar medidas urgentes para dar cumplimiento a la obligación del Estado de demarcar y delimitar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas venezolanos, estableciendo procedimientos adecuados y efectivos para tales actos, así como también para titular efectivamente las tierras a favor de los pueblos correspondientes²⁷¹.
2. Adoptar las medidas para prevenir los conflictos generados por la falta de demarcación de la tierra y proteger a la población de estos hechos²⁷².
3. Establecer mecanismos especiales rápidos y eficaces para solucionar los conflictos existentes sobre el dominio de las tierras, con miras a garantizar y dar certeza jurídica a las comunidades indígenas respecto del dominio de sus propiedades²⁷³.

²⁷⁰ CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1062.

²⁷¹ Párr. 1137 – Recomendación 1

²⁷² Párr. 1137 – Recomendación 2

²⁷³ Párr. 1137 – Recomendación 3

4. Investigar efectivamente los hechos de violencia suscitados a raíz de la falta de demarcación de las tierras ancestrales indígenas en Venezuela y sancionar debidamente a los responsables²⁷⁴.

En este sentido, los pueblos indígenas tienen derecho a que su territorio sea reservado para ellos, sin que haya presencia de terceros en sus territorios. El Estado tiene la obligación de prevenir la invasión o colonización del pueblo indígena por parte de otras personas y realizar las gestiones necesarias para reubicar a aquellos habitantes no indígenas que se encuentren asentados allí. La CIDH ha trabajado bastante el tema, al punto que ha clasificado las invasiones ilegales de pobladores no indígenas como “amenazas, usurpaciones y reducciones a los derechos a la propiedad y posesión efectiva del territorio por los pueblos indígenas y que el Estado está en la obligación de controlar y prevenir”²⁷⁵. Por otro lado el Convenio 169 (1989) establece en su artículo 18: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.”

3.2.2. Efectos de la ocupación: explotación de los recursos

En una reunión de la Red Jurídica Amazónica celebrada en Mérida, Venezuela, el experto Luis Bello (2012) expuso una serie de circunstancias y conflictos que padecen los pueblos y comunidades indígenas como resultado de la ocupación de sus territorios y explotación de sus recursos. En primer lugar, afirmó que “el gobierno nacionaliza la explotación minera, sobre todo en el estado Bolívar, donde el Estado y el gobierno se reservan la explotación del oro, los diamantes y demás riquezas naturales”. Agregó que “el Presidente Chávez ha insistido en la promoción del arco minero vinculándolo al desarrollo del país y que este arco minero propuesto permite que la explotación del petróleo vaya

²⁷⁴ Párr. 1137 – Recomendación 4.

²⁷⁵ CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de 1997, Capítulo VI, párrs. 33, 40.

acompañada por la explotación del subsuelo”²⁷⁶. En segundo lugar, abordó el tema de “la explotación ilegal de coltán y el plan del gobierno para controlarlo, que no procede de otra forma sino a través de la ocupación del territorio”²⁷⁷. Lo grave, es que todos éstos minerales mencionados se encuentran en territorios indígenas muy bien definidos. En tercer lugar, denuncia que “se han perpetrado lesiones físicas y psicológicas graves en contra del pueblo Yanomami por parte de los mineros ilegales, y que frente a esa situación el gobierno ha permanecido inactivo”²⁷⁸, con lo que se ha permitido que continúe la violencia por parte de los garimpeiros y que haya aumentado enfermedades de importancia como el paludismo”. Además, sobre los Yanomami advierte que “se está dando la ocupación del hábitat de los pueblos indígenas, incluyendo el de los grupos que se encuentran en aislamiento relativo, como es el caso de los Yanomami quienes están siendo objeto de invasión y sufriendo la presión constante por amenazas de explotación de recursos”. Finalmente, habla de “los daños ambientales y alerta que los daños a la selva son verdaderamente dramáticos, que el uso de las máquinas chupadoras está causando

²⁷⁶ En 2011 se aprobó la Ley que reserva al Estado la explotación del oro y, en ese marco, se anunció una alianza entre Petróleos de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana para desarrollar la actividad, pero esta semana se informó que será la industria petrolera, a través de la nueva Corporación Venezolana de Minería, la que se encargará de las operaciones.

²⁷⁷ En ese sentido, en octubre de 2009, el presidente de la República, Hugo Chávez, emitió un Decreto en el cual reservaba el uso exclusivo de este mineral para el Estado venezolano y encomendó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el resguardo de las zonas donde existen los yacimientos, a fin de erradicar la explotación ilegal.

²⁷⁸ En 2012 a través de una carta abierta los yanomamis manifiestan que: “La situación es muy grave en la frontera de Brasil con Venezuela, donde se han instalado campamentos mineros ilegales que producen violencia, epidemias, destrucción de nuestras tierras y contaminación de los ríos (...) No es posible tener buena salud si no tenemos nuestro territorio protegido”. Agregan: “También es importante comprender que para nuestra buena salud y la protección de nuestras tierras se necesitan acciones articuladas de los dos gobiernos que incluyan la participación de las organizaciones indígenas”. La carta expresa su gran preocupación ante la intención de ambos gobiernos de abrir el territorio de los yanomamis y de otras tribus a la minería a gran escala: “Exigimos que nos consulten sobre estos proyectos y manifestamos que estamos en contra porque amenazan nuestra vida”. Los participantes del encuentro recordaron la masacre de 16 yanomamis perpetrada por un grupo de buscadores de oro en Haximú, hace veinte años. Representantes de las organizaciones yanomamis Horonami y Hutukara advirtieron de que esto podría repetirse nuevamente si ambos gobiernos no adoptan medidas adecuadas para detener la invasión de los buscadores de oro. Puede ampliarse la información en: <http://www.survival.es>

estragos en el suelo y en los árboles, dando como resultado un número elevado de hectáreas destruidas en la selva alta”²⁷⁹.

Ahora bien, esta situación no es reciente, comentamos un caso. Hace más de una década las comunidades del pueblo Pemón se manifestaron contundentemente contra el Tendido Eléctrico al Sur de Venezuela. El proyecto fue ratificado por el presidente Chávez en una contraria acción a los derechos reconocidos en la CRBV (1999). La oposición de los pemones al proyecto, radica en que éste representa una forma de desarrollo ajena a la cultura indígena que hace vida en el Parque Nacional Canaima y en la Reserva Forestal Imataca, regiones por las que se pretende instalar el Tendido Eléctrico. El 17 de marzo del año 2000 el presidente Chávez visitó la comunidad de San José, Municipio Sifontes, estado Bolívar, con la finalidad de que los pueblos indígenas suscribieran un documento aceptando el Tendido Eléctrico. Sin embargo, la respuesta fue negativa y según alegó José Luis González, presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar (FIB): “los miembros del Ejecutivo no enviaron con antelación el documento a los indígenas, cuya tradicional organización política y social confiere un total respeto a las consultas con las bases de las comunidades, hasta llegar a una decisión por consenso”²⁸⁰.

A partir de ese momento se creó una Comisión a cargo del Vicepresidente de la República, que en aquel momento era Isaías Rodríguez, quien tenía como objeto lograr

²⁷⁹ Esto puede evidenciarse con el Comunicado de la Coordinadora de organizaciones indígenas de Amazonas (COIAM) sobre la minería ilegal en el municipio Atabapo en el cual se denuncia que durante el año (2013-2014) se ha observado un incremento de la minería ilegal en el cauce del río Atabapo, mediante la utilización de embarcaciones con máquinas chupadoras provenientes de Colombia, que utilizan métodos de dragado de las aguas del río para la extracción de oro en aguas internacionales. El resultado de esta actividad ha sido una evidente contaminación de las aguas prístinas del río Atabapo por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y la capital del Municipio, San Fernando de Atabapo (...) Por su parte, en toda la zona del Parque Nacional Yapacana y bajo río Ventuari, continúan las actividades de extracción ilegal de oro y otros minerales, en su mayoría realizadas por ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia y Brasil, causando graves daños ambientales como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, alteración del curso de los ríos y contaminación por mercurio, y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. Puede verse el Comunicado entero en: <http://ddhhamazonas.blogspot.com/>

²⁸⁰ Diario de circulación nacional “El Nacional” del 5 de abril del año 2000, pág. C-2.

un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas a favor del Tendido Eléctrico²⁸¹. En busca de ello se redactó el documento “Puntos de entendimiento entre el Ejecutivo Nacional y las Comunidades Indígenas del Estado Bolívar para la prosecución de la obra de Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica al Sureste de Venezuela”²⁸². Sin embargo, el entendimiento no fue algo sencillo, las comunidades indígenas mantenían su negativa al proyecto y emprendieron una serie de acciones públicas entre las cuales resalta un viaje que hicieron a Caracas, capital de la República, sesenta miembros del pueblo pemón en representación de las comunidades de Vista Alegre, Warpata, Kumarakapay, San Juan de Kamoirán, San Rafael de Kamoirán y Santa Cruz de Mapaurí, los días 17, 18 y 19 de mayo del año 2000, para presentar ante el Instituto Nacional de Parques, la Defensoría del Pueblo y la Cancillería General de la República un documento en el que expresaban los motivos por los que rechazaban el proyecto. Un fragmento del documento decía:

“Impide la vida cotidiana del Pueblo Pemón que se desenvuelve a todo lo largo de la Gran Sabana.

Limita nuestro libre desplazamiento y la visibilidad de los hermosos paisajes de nuestro territorio.

Viola lugares sagrados tradicionalmente respetados y custodiados por nuestro Pueblo.

Viola nuestros derechos como Pueblos originarios que habitamos ancestralmente este territorio mucho antes de llamarse Venezuela.

Para nadie es un secreto que una corriente de alta tensión por encima de nuestras comunidades tendrá un efecto negativo en la salud y bienestar de la familia Pemón.

Este sistema de transmisión eléctrica impide la visibilidad del paisaje no solo por la presencia de grandes torres y postes que no son parte de la naturaleza, sino también como consecuencia de la deforestación, erosión y sedimentación de los ríos.

Todo esto trae como consecuencia la pérdida del hábitat de animales y plantas y de los bosques de la Gran Sabana.

²⁸¹ V. Boletín No 78: Semana del 18 al 31 de agosto de 2001 de PROVEA.

²⁸² V. http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/00_derechos_de_los_pueblos_indios.pdf

Un cableado de alta tensión por encima de los bosques, será una amenaza para el crecimiento de los árboles, para el libre vuelo de las aves y el paso de mamíferos”²⁸³

Otra acción del pueblo pemón fue el Recurso de Amparo. Ya en 1998 la antigua Corte Suprema de Justicia les había declarado inadmisibile un Recurso de Amparo introducido contra el Tendido Eléctrico el 22 de octubre de 1998; por tal motivo, decidieron intentar nuevamente el 18 de mayo del año 2000 con el actual Tribunal Supremo de Justicia un nuevo Recurso de Amparo en el que se solicitaba: “se dicte mandamiento de amparo constitucional a favor de todos los pueblos indígenas ancestralmente ocupantes de la Selva Imataca y de la Gran Sabana, quienes somos víctimas de la violación de nuestros derechos constitucionales previstos en los artículos 119, 121 y 123 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el Amparo Constitucional²⁸⁴.

Quince años después, en cuanto a la parte jurídica, la consulta previa, libre e informada en Venezuela sigue teniendo problemas estructurales²⁸⁵. Ahora bien, la explotación de los recursos no sólo se da por actuaciones del Estado, las EMN también tienen un campo de acción importante y determinado.

²⁸³ V. Caciques y Comunidades de Cruz de Mapaurí, Kumarakapay, Warpatá, San Antonio y San Juan de Kamorián, Agua Fría y Vista Alegre: El tendido eléctrico hacia Brasil amenaza la sobrevivencia del Pueblo Indígena Pemón, habitante ancestral de la Gran Sabana. Gran Sabana, estado Bolívar, 29 de abril de 2000.

²⁸⁴ http://www.tsj.gob.ve/noticias_detalle?codigo=10205

²⁸⁵ Bartolomé Clavero indica que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que obliga a los Estados a celebrar consultas con estos pueblos en función de razones especiales que atañen solo a los pueblos indígenas y tribales ya que está vinculada con el derecho a la identidad y la integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y costumbres, el derecho al territorio y los recursos y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Conferencia del Profesor Bartolomé Clavero en el Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Sevilla, 14 de junio de 2013.

Las multinacionales se han convertido en lo que Pío XI llamó en 1931 “el imperialismo internacional del dinero”²⁸⁶. Según Duran (2000) la empresa multinacional “es un agente que favorece y dinamiza el crecimiento económico; es creadora neta de comercio, explica una parte significativa de la producción mundial y es una institución relevante en la generación y transferencia de tecnología y en los movimientos de capitales”²⁸⁷. Una visión diametralmente opuesta es la que ofrece Olaso (1988) cuando señala que “las multinacionales no han ayudado a desarrollar la tecnología local ni la capacidad creativa de los pueblos donde se establecen. Las inversiones que han hecho no han ayudado al crecimiento económico de los pueblos pobres. Al contrario: han planificado y llevado a cabo el saqueo de inmensos recursos naturales, han distorsionado procesos de integración (...), han agudizado las desigualdades sociales y han consolidado el poder de las privilegiadas oligarquías internas”²⁸⁸.

Somos de la opinión de que las EMN pueden ser una oportunidad para Estados y pueblos en la medida en la que su comportamiento esté adecuado a derecho y cumpla por tanto con el deber ser de las cosas que en el caso de los pueblos indígenas requiere el respeto de los DDHH y el respeto a sus derechos especialmente reconocidos. Sin embargo, independientemente de la opinión que se tenga de las EMN, cabe preguntarse si el DI ha ido desarrollando alguna normativa para las empresas en relación con los derechos de los pueblos indígenas, en caso de que sí, qué tratamiento dan esas normas a los pueblos indígenas, ¿objeto de protección o sujeto de derecho?, en caso de que no, ¿cuáles son los impedimentos para reglar las EMN?

- Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales: “En los decenios de 1960 y 1970, las actividades de las empresas multinacionales (EMN) fueron objeto de grandes debates. A raíz de ellos, se desplegaron esfuerzos para establecer instrumentos

²⁸⁶ Cfr. Pío XI, *Quadragesimo anno*

²⁸⁷ DURAN, JUAN (2000): *Estrategia y economía de la empresa multinacional*, Ed. Pirámide, Madrid

²⁸⁸ OLASO, L.: “El bien común universal” en *América Latina y África en la perspectiva comunitaria*, Ponencias de las VI Jornadas Internacionales sobre Pensamiento Comunitario, Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Los Andes, Mérida, 1988, pág. 73.

internacionales destinados a reglamentar la conducta de las EMN y a fijar las condiciones que han de regir las relaciones de las EMN con los países huéspedes, sobre todo en el mundo en desarrollo”. De esta manera comienza la introducción de esta Declaración de 1977²⁸⁹. Fue elaborada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, aprobada a finales de noviembre de 1977 y mantiene desde entonces sus propios mecanismos de supervisión y actualización²⁹⁰. Lo interesante de esta Declaración es que es “Tripartita” debido al encuentro que se da entre las tres partes que constituyen la OIT, la gubernamental, la empresarial y la sindical. Sobre pueblos indígenas no se decía nada en el texto original de 1977 y pese a que la OIT se ha ocupado de la cuestión indígena desde años atrás, aún en las enmiendas de 2006 no se ha agregado nada al respecto. No obstante, se podría partir de la premisa de que como se trata de un acuerdo aprobado en la OIT, las empresas y los sindicatos deben tener algún tipo de obligación con el Convenio 169 (1989), pero en DI y las relaciones internacionales la dinámica no funciona así. Clavero (2012) señala que “estamos ante duplicidades características del sistema internacional en el seno de la constelación hoy constituida por las NNUU, por esta organización sustancialmente intergubernamental, esto es entre Estados. Pese a la peculiaridad de ser una agencia tripartita, la OIT ha adoptado la óptica de las instituciones en exclusiva intergubernamentales, en cuya virtud se entiende que son tan sólo los Estados quienes se comprometen en el ámbito internacional y que es a través de los mismos y por los mismos como debe comprometerse a otras entidades”²⁹¹. Frente a esto, la preocupación recae no en que la EMN pueda llegar a opacar la actividad del Estado, sino en que por una parte, la EMN no tenga claras sus responsabilidades empresariales, y por la otra, que no preste atención a los derechos que deben respetarse desde las actividades de la empresa.

²⁸⁹ La Declaración ha tenido enmiendas en 2000 y 2006. Puede verse el texto completo en: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/normativeinstrument/kd00121es.pdf>

²⁹⁰ Así se explica en: <http://www.ilo.org/empent/units/multinacional-enterprises/lang--es/index.htm>

²⁹¹ Op. cit. pág 175.

- Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos: la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, adscrita a la Comisión de Derechos Humanos, en el año 2003 elaboró un conjunto de normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas en la esfera de los DDHH como parte del compromiso adquirido en la “prevención de discriminaciones y protección a minorías” y con el fin de promocionar los DDHH. Teniendo en cuenta las normas enunciadas en la Declaración tripartita de principios sobre las EMN y la política social y la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT, se proclaman las normas de responsabilidad empresarial. Lamentablemente, los Estados se opusieron a que el documento llegara hasta la AGNU para ser aprobada como una norma internacional de DDHH. Quizás se explica en que en primera instancia las normas estipulaban: “Los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos consagrados en la legislación internacional y nacional, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, incluso velando por que las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respeten los derechos humanos. Dentro de sus respectivas esferas de actividad e influencia, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos consagrados en el derecho internacional y en la legislación nacional, incluidos los derechos e intereses de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar”²⁹². Otra normativa que pudo ocasionar que los Estados no quisieran hacer llegar el tema a la AGNU puede ser la relativa a la soberanía y los DDHH: “10. Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales observarán y respetarán las normas aplicables del derecho internacional, las leyes y los reglamentos nacionales, así como las prácticas administrativas, el estado de derecho, el interés público, los objetivos de desarrollo, las políticas sociales, económicas y culturales, incluidas la transparencia, la responsabilidad y la prohibición de la corrupción, y la autoridad de los países en los que realizan sus actividades. 11. Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales no ofrecerán, prometerán, darán, aceptarán, condonarán, aprovecharán a

²⁹² Contenido del apartado “A. Obligaciones generales, numeral 1”

sabiendas ni pedirán ningún soborno u otra ventaja indebida. Tampoco podrá pedirseles ni esperar que ofrezcan ningún soborno u otra ventaja indebida a ningún gobierno, funcionario público, candidato a un puesto electivo, miembro de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad, o cualquier otra persona u organización. Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales se abstendrán de realizar cualquier actividad que apoye, solicite o aliente a los Estados o a cualesquiera otras entidades a que violen los derechos humanos. Además procurarán que los bienes y servicios que prestan no se utilicen para violar los derechos humanos. 12. Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respetarán los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos, y contribuirán a que se ejerzan, en particular los derechos al desarrollo, a una alimentación, una salud y una vivienda adecuadas, a la educación, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de opinión y expresión, y se abstendrán de todo acto que impida el ejercicio de esos derechos”²⁹³. Para explicarlo brevemente, estas normas buscaban el respeto de los DDHH de todos los que pueden verse afectados por las actividades de las EMN con los Estados, entre los que naturalmente se encuentran los pueblos indígenas. Las empresas tienen responsabilidades de respeto y obligación de cumplimiento con los DDHH y los Estados son los garantes de que esas responsabilidades se cumplan.

- Los Diez Principios del Pacto Mundial: en el año 2000 la ONU lanza el *Global Compact* respondiendo a la preocupación de los efectos del desbordamiento de los Estados por las empresas transnacionales en relación con los DDHH²⁹⁴. En el texto no hay nada relativo a los pueblos indígenas, no obstante, el principio octavo pudiera ser útil en la cuestión indígena ya que establece: “las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental”, esto dependiendo de que los principios se puedan traducir en políticas en las que las empresas tengan un actuar medioambientalmente responsable. Por supuesto que a primera vista se podría entender que los pueblos indígenas estarían protegidos por los primeros dos principios:

²⁹³ Contenido del apartado “E. Respeto de la soberanía nacional y de los derechos humanos, numerales 10, 11 y 12”.

²⁹⁴ V. <http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html>

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia” y “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”. No obstante, explica Clavero (2012) que “lo de *universalización* se entiende en estos medios de intereses corporativos como excluyentes de garantías no universales de derechos universales, como las que precisan los pueblos, las comunidades y las personas indígenas. Y esos *deben* se formulan siempre en este contexto bajo la clave de la *voluntariedad*, lo que basta para privar ya de entrada a los *derechos humanos*, a todos ellos, de su rango y de su vigor en cuanto que tales”. Por tanto como afirma el Representante Especial Ruggie (2007) el *soft law* se colaciona a favor de dicha voluntariedad no vinculante²⁹⁵.

- Principios Rectores sobre las Empresas y los DDHH: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, remediar y respetar”: Los principios están divididos en tres secciones, la primera es la relativa al deber del Estado de proteger los DDHH; la segunda es sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los DDHH; y la tercera, aborda el acceso a los mecanismos de reparación. Este Informe presentado por el Representante Especial Ruggie en 2011 menciona a penas a los pueblos indígenas ubicándolos dentro de los sectores vulnerables de la sociedad, reduciéndolos a objeto de protección, no tratándolos como sujetos de derecho a pesar de la existencia previa de la DPPI (2007).
- El Convenio 169 (1989): Como ya lo hemos dicho antes, la OIT a través de su Convenio 169 ha ido manteniendo en el tiempo un enorme valor en lo que corresponde a las relaciones del Estado con los pueblos indígenas y tribales. El Convenio no es propiamente un Tratado de DDHH, pero si lo es sobre derechos de los pueblos indígenas ya que compromete a los Estados en unos determinados procedimientos para garantizar los derechos que el propio Convenio establece. Por tanto, es a raíz del Convenio 169 (1989) que los Estados quedan obligados a llevar a cabo el procedimiento de consulta y el de participación a los pueblos indígenas cada vez que quiera hacer alguna actividad que comprometa alguno de sus derechos territoriales.

²⁹⁵ RUGGIE, J.: “*Bussines and Human Rights: The Evolving International Agenda*” en *American Journal of International Law*, núm. 101-4, págs. 819-840.

Ahora bien, en este apartado estamos hablando de las EMN, ¿qué sucede con ellas?, ¿el Convenio también norma al respecto? Efectivamente, el Convenio 169 (1989) también inserta una serie de directrices para las relaciones de las EMN con los pueblos indígenas y en este sentido el artículo 6 establece:

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

De igual manera, el artículo 7 señala:

“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios

deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”²⁹⁶

- A pesar de que el Convenio 169 (1989) ha intentado proteger en gran medida los derechos de los pueblos indígenas dando especial atención al asunto del consentimiento previo, libre e informado, hay una interrogante más. ¿Qué sucede cuando un Estado se ha reservado constitucionalmente el derecho sobre los recursos? Para el caso venezolano²⁹⁷ o para cualquier otro Estado que se haya reservado este derecho a través de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT es muy claro al decir que “en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos (...)” procede el procedimiento de consulta para intentar llegar a un acuerdo.
- DPPI (2007): La Declaración de la ONU ha seguido los mismos principios de la OIT en el Convenio 169 y ha potenciado tanto los derechos de los pueblos indígenas como los mecanismos de garantía. Así en cuanto a los DDHH de los pueblos indígenas en general y de consulta y participación en particular, la DPPI (2007) establece en su artículo 10: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una

²⁹⁶ Diversas conferencias internacionales han reafirmado estos derechos de un modo u otro, en especial la Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro, 1992) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002). El Banco Mundial está adoptando una nueva política operacional que establece la necesidad de que las poblaciones indígenas participen en los proyectos de desarrollo que puedan afectarles, y el Banco Interamericano de Desarrollo ha establecido directrices similares para sus propias actividades. Asimismo, varios Estados han aprobado legislación en el mismo sentido.

²⁹⁷ La CRBV (1999) dispone en su artículo 12: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público”. Asimismo, la LOPCI (2005) establece: “Artículo 54. El aprovechamiento por parte del Estado de los recursos naturales propiedad de la Nación en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, está sujeto a la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas involucrados, la cual debe ser suficientemente informada, fundamentada y libremente expresada por dichos pueblos y comunidades indígenas, conforme al procedimiento de consulta establecido en la presente Ley. En la ejecución de estas actividades deberán establecerse las medidas necesarias para evitar su impacto sociocultural y ambiental, así como garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y el bienestar sobre los pueblos y comunidades indígenas y sus tierras.”

indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”; el artículo 11 en su numeral segundo señala: “Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”; en este mismo orden de ideas el artículo 19 dispone: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Asimismo en el artículo 28 la DDPI (2007) plantea el derecho a la reparación por territorios que han sido ocupados sin un consentimiento previo, libre e informado. Además de los artículos mencionados anteriormente, consideramos que hay tres más de vital importancia ya que se refieren a las garantías de protección. En este sentido, el artículo 29 numeral segundo establece que: “Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”; por su parte el artículo 38 dicta: “Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración” y finalmente el artículo 42 señala: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia”.

Podemos concluir que el Convenio 169 (1989) ha cumplido y sigue cumpliendo un deber fundamental en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, inclusive ante grupos poderosos como las EMN que buscan la explotación de los recursos ubicados en territorios indígenas. Por su parte la DDPI (2007) tiene un valor normativo, es decir, que no es meramente programática sino que obliga a todos los agentes que tienen alguna relación con los pueblos indígenas, sus organizaciones y los individuos que se identifican

o relacionan con los pueblos indígenas. Esto debido a que por ser una Declaración de DDHH es mucho más que una Declaración cualquiera, es una norma de nuevo tipo que vincula a los Estados, a la ONU y a todos los demás agentes. Sería interesante y por demás oportuno que se aprobara algún sistema normativo basado en la DPPI (2007) para reglamentar exclusivamente la relación entre las EMN y los pueblos indígenas, ya que éstas representan uno de los problemas más importantes que hoy afectan a sus formas de vida. Por su parte, los pueblos indígenas seguirán oponiéndose a los abusos del Estado y de las EMN; ya que detrás de sus luchas reivindicatorias y de exigencia de materialización de derechos, se encuentra su decisión de defender sus recursos naturales, que significan el sustento de su vida y una garantía para su futuro como pueblos.

En el nuevo escenario financiero mundial la Amazonía ha estado tomada muy en cuenta con la idea globalizadora de los megaproyectos. En el caso de Brasil por ejemplo, se puede observar su vertiginosa expansión en la economía, incluyendo el *boom* de *commodities*, el transporte de productos para mercados asiáticos y los descubrimientos de grandes yacimientos de petróleo bajo el mar. En el caso que nos ocupa, hay que señalar que según un Informe de la Organización no Gubernamental Laboratorios de Paz, Venezuela es el país de América Latina con mayores reservas de petróleo y gas. Además cuenta con otros recursos energéticos y minerales como carbón, aluminio, hierro, bauxita, fosfato, cobre, coltán, oro y diamantes. La importancia de la exportación de estos recursos es vital para la economía del país²⁹⁸. Por ejemplo, para el año 2015, los ingresos por concepto de venta de petróleo representarían el 16,7% del total del presupuesto nacional²⁹⁹.

²⁹⁸ Se puede ampliar la información en:

<http://laboratoriosdepaz.org/wp-content/uploads/2014/10/extractivismoVzla.pdf>

²⁹⁹ El presupuesto nacional de Venezuela para el 2015 se puede consultar en:

<http://www.sibci.gob.ve/2014/10/presupuesto-nacional-para-2015-alcanza-bs-741-708-millones/>

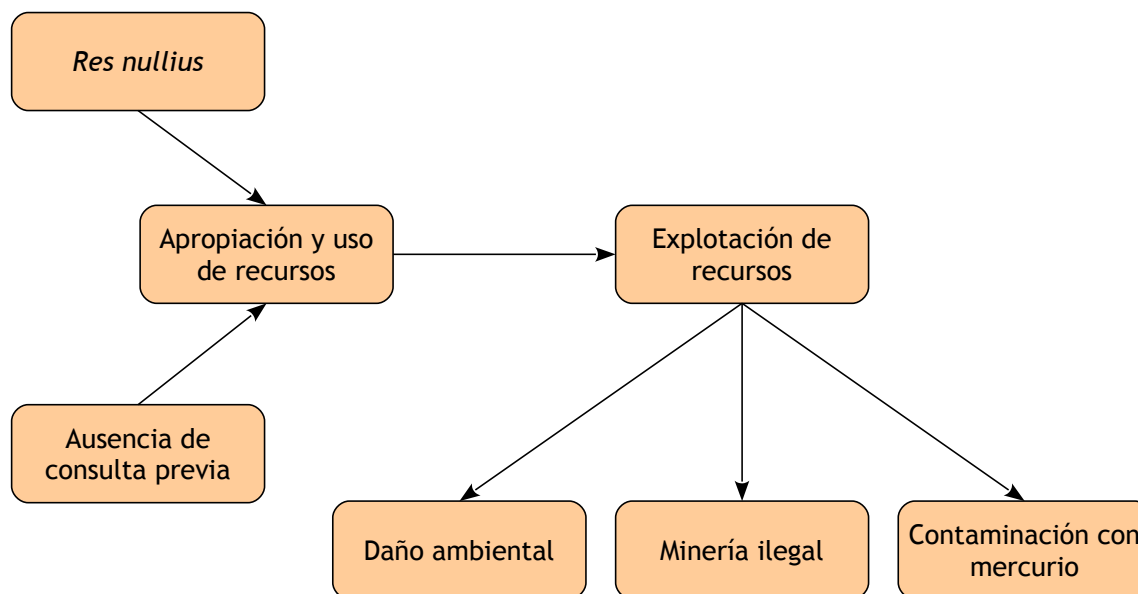


Figura 5. Efectos de la ocupación.
Fuente: elaboración propia.

Como un deseo político, el Estado venezolano se ha comprometido en una integración latinoamericana que se materializa en distintos megaproyectos con Brasil y Colombia. La palabra “megaproyecto” no aparece aceptada por la Real Academia Española, sin embargo, su constante uso en los temas de desarrollo económico ha sugerido que debe entenderse como un modelo de rentabilidad basado en la extracción de recursos del suelo³⁰⁰. Según Paul Little (2012) la ideología del “mega” se ha dado porque hay una fase de expansión de empresas nacionales para tornarlas internacionales; entonces, se construyen tres o cuatro empresas y al mismo tiempo ganan y crecen³⁰¹. En este sentido, Little (2012) expone algunos aspectos de los megaproyectos en la Amazonía, a saber:

- Los Acuerdos Binacionales son el marco político mayor.
- La infraestructura es el principal “facilitador” para todas las demás actividades de desarrollo económico. Es por ello que los Estados Nacionales utilizan la

³⁰⁰ Apreciación de www.derechos.org.ve

³⁰¹ Ponencia del Experto Paul A. Little en una Reunión de la Red Jurídica Amazónica, RAMA, La Paz, 28 de noviembre de 2012.

infraestructura como balizamiento del desarrollo nacional. Además, hay que tener en cuenta que la minería depende de obras de infraestructura.

- Dependen del sector de transporte. Por tanto serán pensadas obras como carreteras, vías fluviales, ferrocarriles, puertos, y las políticas públicas de transporte tienen en general la expansión de la matriz vigente.
- Uno de sus pilares es el sector de la energía eléctrica, y en cuanto a las obras, están pensadas grandes hidroeléctricas y líneas de transmisión, desarrollando políticas públicas de rápida expansión para satisfacer demandas.
- La financiación se da a través de fuentes públicas.

De acuerdo con lo anterior los problemas actuales a los que se enfrentan los pueblos indígenas en Venezuela, están marcados por los nuevos rumbos que el imperialismo capital ha tomado, para pasar a una nueva etapa económica que los analistas han denominado “acumulación por desposesión”³⁰². Así lo afirma López (2011): “una vertiente importante del capital se está enfocando a despojar los pueblos de sus riquezas naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y los saberes ancestrales y conocimientos asociados a su uso común están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada y por lo mismo en mercancía, lo que representa un nuevo colonialismo, más rapaz que el sufrido por los pueblos indígenas de América Latina durante los siglos XV a XIX. Los pueblos lo saben. Por eso lo resisten y luchan por liberarse de él”³⁰³. Esto se puede comprobar en Venezuela cuando se observa que según el informe mencionado *ut supra* y presentado ante la ONU³⁰⁴, la extracción petrolera de Venezuela enmarcada en el “Plan de la Patria 2013-2019”³⁰⁵ y la explotación de nuevos

³⁰² Véase al respecto HARVEY, DAVID (2004): El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, Ed. Clacso, Buenos Aires.

³⁰³ LÓPEZ, F.: “Pueblos indígenas y megaproyectos en México: ñas nuevas rutas del despojo” en Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina, APARICIO, M. (ed.), Icaria, Barcelona, 2011, pág. 181.

³⁰⁵ El plan puede leerse completo en:
<http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/>

yacimientos petroleros a través de la conformación de empresas mixtas no están cumpliendo los requisitos establecidos en la CRBV (1999)³⁰⁶ y por tanto se está poniendo el interés capital antes que la salvaguarda de los DDHH de los pueblos y comunidades indígenas. Lo mismo pasa con el coltán en Río Parguaza³⁰⁷ y con el carbón en la Sierra de Perijá³⁰⁸.

Es de resaltar que entre los objetivos del plan se encuentra duplicar la cantidad de petróleo y gas comercializada, hasta llegar para el año 2019 a los 6 MMBD en el caso del petróleo (artículo 3.1.1.1) y 11.9 MMPCD para el gas (artículo 3.1.1.2).

³⁰⁶ El artículo 120 constitucional establece: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

Y el artículo 129 dice que:

“ Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural”.

³⁰⁷ El coltán para los venezolanos era algo desconocido hasta que el presidente Chávez el 15 de octubre de 2009 anunció: "Ahora apareció un mineral estratégico que se llama coltán y hemos tomado la zona militarmente porque se lo estaban llevando para Colombia de contrabando". Justo en Parguaza -en el estado Bolívar, piedemonte del macizo guayanés- se ven los primeros indicios de la fiebre del coltán. Ese mercadeo a las sombras es también transnacional. Si el mineral se extrae en Venezuela, pronto traspasa las fronteras que en esta zona suelen coincidir con accidentes naturales. Entre Venezuela y Colombia ese accidente es el cauce del río Orinoco. En su cuenca, en medio de la selva, hay más arroyos que carreteras. A los “buhoneros del coltán” sólo les toma 15 minutos de navegación en lancha para llevar la mercancía a buen puerto. A través de El Burro y Puerto Páez, los mercaderes cruzan el Orinoco hasta alcanzar Puerto Carreño, en Colombia. Más al Sur pero en el mismo estado Amazonas, otra ruta predilecta conecta a San Fernando de Atabapo en Venezuela con Puerto Inírida en Colombia. V. <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120304/buhoneros-del-coltan>. Además del contrabando y la minería ilegal, otro problema que se presenta con casos como el coltán son las dimensiones geopolíticas. Por ejemplo, en 2011 José Salamat Khan quien para entonces era ministro para Industrias Básicas y Minería declaró: "Hemos decidido trabajar con los hermanos iraníes en la exploración de minas". Sin embargo, desde el año 2009 Irán coopera con Venezuela en la realización de estudios de suelos minerales para elaborar el mapa minero venezolano.

³⁰⁸ El 30 de septiembre de 2009 Sociedad Homo et Natura publicó en su artículo “Territorios indígenas, minería y mega infraestructuras” que “Ante tantos acuerdos firmados durante estos 10 años, de nuevo Gobierno Nacional retoma con fuerza los Ejes de Integración propuestos por la IIRSA para dinamizar los compromisos energéticos y mineros contraídos. (...) Gran parte de estas megas infraestructuras en construcción sirven en Venezuela, como en casi todos los países pobres de América del Sur y Centro América, para agilizar en el tiempo el traslado de productos extractivos mineros y energéticos, o para contar con las plantas necesarias de procesamiento minero energético para así abaratar costos por mano de obra y traslado (...) Venezuela necesita abrir la mina de carbón Socuy para en el 2018 aumentar a un 300% la producción de acero para honrar compromisos con China, por ejemplo. (...) Otorgar la Comisión Nacional de Demarcación de Tierra estructurada por 10 Ministerios las tierras autodemarcadas por los pueblos indígenas Yukpa y Bari, y los espacios de vida defendidos por las comunidades Wayuu del Socuy, significa atentar contra el Eje de Desarrollo Occidental tramo final del Eje de Integración Andino de la IIRSA, es más para entregar estas tierras a los pueblos indígenas debería el Gobierno Nacional eliminar primero las concesiones mineras entregadas a capitales mineros y a Corpozulia en estos mismos espacios de tierras originales indígenas”.

Pero más allá del problema del megaproyecto en sí mismo por su ambición y poderío económico, hay que contemplar sus efectos como el riesgo mayor o más peligroso. Little (2012) plantea los impactos de la siguiente manera:

- Los modelos extractivos crean una nueva categoría de derecho: “derechos del inversionista”.
- En cuanto a la extracción de recursos no renovables por grandes empresas nacionales e internacionales se observa:
 - Continuación del modelo vigente de desarrollo.
 - Exportación de materias primas.
 - Matriz energética basada en combustibles fósiles.
 - La industria minera necesita grandes cantidades de agua y energía.
 - En el sector de hidrocarburos es evidente:
 - La rápida expansión de las concesiones en toda la cuenca amazónica.
 - La presencia de empresas canadienses, australianas, chinas y estadounidenses.
 - La postura negativa de algunas empresas frente a la salvaguarda ambiental.
- Financiación por fuentes privadas. Si el Estado decide no aportar más capital, no importa, las empresas consiguen nuevos financistas, de acuerdo a la nueva estrategia de los bancos nacionales de desarrollo y la nueva práctica de inversiones post-crisis.
- En cuanto a la parte socio ambiental:
 - Cambio radical en el modo de adaptación a la floresta.
 - Reorganización territorial de la Amazonía.
 - Conectividad fluvial (ríos), conectividad terrestre (carreteras).
 - Pérdida de la función hidrológica.
 - Deforestación: contribución al efecto estufa o invernadero.
- Etnocidio, destrucción de los modos de vida de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
- Pérdida de la biodiversidad.
- Aumento de los problemas sociales.
- Aumento de catástrofes socio ambientales.

En relación a esta detallada explicación de los impactos de los megaproyectos, es importante resaltar que el mismo informe de Laboratorio de Paz que mencionábamos al principio, señala que otro de los efectos de los megaproyectos (para este estudio el más importante) es la lesión al derecho territorial de los pueblos indígenas, ya que la expansión de la economía extractivista ha detenido la demarcación territorial y posterior entrega de los títulos colectivos de los territorios indígenas.

La actividad extractivista de Venezuela en los territorios indígenas afecta a las comunidades indígenas, pero además promueve expropiaciones y adjudicaciones posteriores a campesinos para poner en marcha planes de agronegocio que arrasan con bosques y selvas, lo que ocasiona un rompimiento cultural para los pueblos indígenas por un lado y por el otro, fragmentación y desplazamientos. En lo relativo a la explotación minera hay una distinción importante. Primero, está la minería en zonas protegidas. Señala el Informe de Laboratorios de Paz que mujeres pemonas de la Gran Sabana, estado Bolívar han denunciado que desde el año 2010 hay minería en el Parque Nacional Canaima declarado como zona protegida en 1991 y como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Denuncian las indígenas que los mineros contratan a indígenas pemones para que realicen las perforaciones en territorios indígenas, aumentando la deserción escolar, alcoholismo, abandono de actividades tradicionales, enfermedades y otros padecimientos como consecuencia de la progresiva incorporación de indígenas a la extracción de minerales. Pero esto no es nuevo ni reciente, para el año 2007, antes de un proceso electoral, se inició un nuevo movimiento minero hacia la zona del Caura. Desde el principio, las comunidades indígenas a través de la organización *Kuyujani*, dieron la voz de alerta, y conforme fueron pasando los días, la situación empeoró debido a la poca o casi nula respuesta del Estado. La situación llegó a su punto más grave cuando llegaron aproximadamente mil quinientos mineros, lo que produjo inmediatamente presión continua de las comunidades indígenas, de la comunidad científica, de las instituciones gubernamentales como la Fiscalía y el Ministerio del Ambiente, lo que consiguió una intervención militar en febrero de 2008. Desde el inicio de la operación militar pasó aproximadamente un mes, durante el cual se fueron

desalojando poco a poco a los mineros apoyados por la organización indígena, la cual prestó motores, curiaras y baquianos. Durante el desalojo fueron llegando a Maripa mineros de diferentes partes, la tensión de nuevo empezó a incrementarse, iniciando nuevamente las amenazas hacia los indígenas³⁰⁹.

Segundo, está la minería ilegal por parte de “buscadores de oro”, garimpeiros y guerrilla. La coordinadora de organizaciones indígenas de la Amazonía venezolana (COIAM) ha denunciado que “garimpeiros” ilegales provenientes de Brasil, junto a grupos irregulares de la guerrilla colombiana, practican la minería ilegal destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán. *Survival International*, calcula que hasta 4.000 mineros ilegales –o garimpeiros– actúan en la zona.

En definitiva, las políticas extractivistas del Estado venezolano en cuanto a la explotación minera, petrolera, forestal, industrial y agroindustrial, se ven reflejadas en una serie de acciones contradictorias con los créditos y garantías que el mismo Estado ha otorgado a los pueblos y comunidades indígenas. Estas políticas económicas no sólo afectan la calidad de vida de los indígenas, sino también van en contra de toda la configuración social, política y económica de los pueblos, se explotan los recursos de sus territorios y las ganancias siempre quedan por fuera. Además, del daño ambiental, los pueblos indígenas se fragmentan, desplazándose y dispersándose lo que sin duda disminuye la actividad de las bases.

3.3. *Res nullius* y la violencia como política

La finalidad última de todo sistema jurídico –interno o internacional- es garantizar la seguridad de los sujetos de derecho a que se aplica. Cuando se trata de territorios

³⁰⁹ SILVA, N.: “El espacio salvaje de la República y el territorio soberano de los indígenas. Conflictividad social y minería en el Caura” en *Territorios, identidades y violencias*, SEGOVIA, Y. y NATES, B. (dirs.), Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, 2011, págs. 395 y 396.

indígenas y su protección hay que detenerse en tres aspectos: la lucha reivindicatoria del derecho, el reconocimiento del derecho a la tierra y la materialización del derecho que involucra directamente a las instituciones del Estado. Como se ha venido planteando, en Venezuela se dio la lucha reivindicatoria, se reconocieron los derechos y se creó todo un aparato institucional para cumplir el derecho reconocido.

Al haber problemas para la materialización del derecho por la debilidad de las instituciones, los pueblos y comunidades indígenas quedan al descubierto frente amenazas tan fuertes como la minería, la tala, la pesca indiscriminada, el abuso de sus recursos y los demás efectos de la ocupación de sus tierras. La cuestión indígena se relaciona con la cuestión nacional de dos maneras diferentes; por una parte, la ciudadanía es una condición de pertenencia que está definida por el Estado, de lo que se desprende que la conexión que pueda llegar a tener la ciudadanía indígena con la ciudadanía no indígena dependerá de la manera en la que las instituciones del Estado incorporen la variable étnica³¹⁰. Por otra parte, el debate también estará impregnado por la relación cultural que hay entre lo indígena y lo nacional, lo que definitivamente es positivo ya que en virtud de las distintas posturas y propuestas se puede construir una ciudadanía diferenciada en un Estado intercultural.

La promesa de la democracia sólo puede cumplirse cuando los sectores populares ganan acceso a una serie de derechos en diferentes terrenos. En este sentido, si el Estado reconoce un derecho pero después no lo materializa, o si un gobernante promete garantías en un discurso pero después no las cumple; un individuo o un grupo de personas tienen derecho a mostrar su frustración manifestando pacíficamente para llamar la atención de quien prometió algo y no cumplió o al Estado que reconoció un derecho y después no dio las condiciones para ejercerlo. La violencia como respuesta a esas manifestaciones puede darse en el territorio o fuera de él. Cuando aparece la violencia y más específicamente la

³¹⁰ AA.VV.: La lucha por los derechos indígenas en América Latina, Grey, N. y Zamosc, L. (eds.), Ed. Abya-Yala, Quito, 2005, pág. 18.

violencia política³¹¹, se concluye que no hay posibilidad de diálogo y entendimiento, no hay intención de solucionar el conflicto. De acuerdo con lo anterior, al hablar de violencia sobre grupos estamos hablando de violencia colectiva y eso inevitablemente nos lleva a hablar de la contienda política, en la que las personas se plantean procesos reivindicatorios que pueden ser discontinuos, continuos, públicos y colectivos. Por supuesto que no todas las contiendas políticas generan violencia, el problema radica en aprender a definir cuándo la contienda da un giro hacia la violencia y por qué.

Para empezar es necesario entrar en el terreno de la contienda política reconociendo que hay casos en los que los gobiernos se involucran demasiado en las reivindicaciones sociales. En la práctica se puede observar que cuando un gobierno es débil institucionalmente y populista, la violencia suele aumentar entre las poblaciones sometidas a la jurisdicción de dicho gobierno, y, cuando un gobierno es fuerte y democrático la violencia suele disminuir. Plantea Tilly (2007) que “políticos y especialistas en filosofía política suelen ser partidarios de un gobierno fuerte y bueno como defensa contra la victimización por medio de la violencia. Pero todos los gobiernos se reservan el control de ciertos medios concentrados de violencia en forma de armas, tropas, guardias y prisiones. La mayoría de los gobiernos utilizan ampliamente todos esos medios para mantener lo que los gobernantes definen como orden público”³¹². Es precisamente el mantenimiento del orden público lo que puede motivar la violencia política, pues a ningún gobierno –incluso el más democrático– le gusta que le reclamen los incumplimientos ni que le pongan trabas a sus planes de desarrollo.

Ahora bien, hay que saber cuándo se trata de violencia política y cuando simplemente es fuerza del Estado. Para poder explicar las interacciones violentas, la distinción entre fuerza (legítima) y violencia (ilegítima) hay tres objeciones “insuperables” planteadas por Tilly (2007):

³¹¹ Se entiende por violencia política aquella ejercida como medio de lucha político social con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también, para destruir o reprimir a un grupo humano por su afinidad social, política, gremial, racial, ideológico o cultural, esté o no organizado. Cfr. VILLA, WILLIAM (2004): *Violencia Política contra los Pueblos Indígenas en Colombia (1974-2004)*, Ed. IWGIA, Bogotá, pág. 14.

³¹² TILLY, CHARLES (2007): *Violencia colectiva*, Ed. Hacer, Barcelona, págs. 25 y 26.

1. Los límites precisos de la fuerza legítima siguen siendo objeto de fuertes disputas en todos los sistemas políticos. En el curso mismo de las manifestaciones inicialmente pacíficas que cobran un carácter violento, manifestantes y policías casi siempre ponen en cuestión la frontera entre la utilización legítima e ilegítima de los medios de coerción.
2. En la experiencia práctica, lo que tenemos es un largo continuo que va desde (1) las acciones gubernamentales debidamente permitidas cuya adecuación al caso todo el mundo acepta, pasando por (2) los actos de negligencia en el cumplimiento del deber por parte de los agente del gobierno, hasta (3) los daños infligidos con el apoyo secreto o la instigación de algún sector del gobierno.
3. En tercer lugar gran parte de la violencia colectiva presente en episodios a los que nos referimos como disturbios, rebeliones o revoluciones involucra directamente a agentes del gobierno como causantes u objetos de daños. Sin incluir las muertes provocadas o sufridas por la policía y el ejército, no habría modo de explicar la variación en la mortalidad de los distintos tipos de enfrentamientos colectivos.

Con esto no estamos dando por hecho que siempre la violencia es generada por funcionarios negligentes, lo que se intenta definir es por qué y cómo el Estado reacciona frente a los procesos reivindicatorios y de protesta. Viendo que hay casos en los que la respuesta es la violencia sería oportuno decir que cuando procede del Estado ésta puede evitarse o aminorarse si los Estados Nación –incluso los más democráticos³¹³–, empiezan a enfrentar lo que Ferrajoli (1999) ha denominado “crisis profunda y creciente del derecho”, que se manifiesta en diversas formas y en múltiples planos. La crisis del derecho, según el mencionado autor tiene tres aspectos; al primero le llama “crisis de la legalidad”, del valor vinculante asociado a las reglas por los titulares de los poderes públicos. Se expresa en la ausencia o en la ineficacia de los controles, y, por tanto en la variada y llamativa fenomenología de la ilegalidad del poder. El segundo aspecto, es la

³¹³ Los modelos democráticos albergan menor cantidad de violencia política que los no democráticos. La ampliación de la participación política y ciudadana, la extensión y la igualación de los derechos políticos, la posibilidad del diálogo y el reconocimiento de unos frente a otros evitan las disputas que generan los escenarios violentos.

“inadecuación estructural de las formas del Estado de derecho a las funciones del Estado benefactor” o *Welfare State*, agravada por la acentuación de su carácter selectivo y desigual que deriva de la crisis del Estado social. Finalmente, el tercer aspecto está ligado a “la crisis del Estado nacional” y se manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la alteración de fuentes y por consiguiente, en un debilitamiento del constitucionalismo³¹⁴.

Frente a la crisis del derecho no atendido pareciera imponerse la violencia. Esta acción resulta de impedir que otros logren sus cometidos o de imponerles que hagan aquello que no desean. “La violencia es siempre el resultado de un ejercicio del poder cuyo fin es impedir que alguien logre establecer un *status quo* diferente a aquel que desea imponer el que ejerce la violencia”³¹⁵.

3.3.1. *El Estado y la violencia como política*

El uso de la agresión tiene siempre el mismo resultado: la violencia, afectar al otro y eventualmente someterlo. Mansutti (2011) sostiene que “la violencia cumple fines modeladores, por ejemplo, las figuras de la autoridad someten a quienes los admiran a violencia comedida, frecuentemente simbólica, cuyo fin es acercar su perfil actitudinal al ideal civilizatorio de que ellos son portadores. Estas son formas de violencia legitimadas porque hacen viable la reproducción social tal como ella es deseada por los miembros de esa sociedad”³¹⁶.

En sociedades en las cuales las funciones sociales alternativas son escasas, las formas de violencia socializadora están altamente relacionadas con los modos de vida

³¹⁴ FERRAJOLI, LUIGI (1999): *Derechos y garantías. La ley del más débil*, Ed. Trotta, Madrid, pág. 15.

³¹⁵ MANSUTTI, A.: “Estado, violencia institucional y territorios étnicos o de cómo hacer para no hacer nada” en *Territorios, identidades y violencias*, SEGOVIA, Y. y NATES, B. (dirs.), Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, 2011, pág. 367.

³¹⁶ Id.

arquetípicos de esa sociedad³¹⁷. A medida que las funciones sociales se van multiplicando, la gestión de las relaciones sociopolíticas en el seno de la sociedad va exigiendo la aparición de estructuras políticas más sofisticadas.

El Estado, gracias a sus aparatos ideológicos y jurídico-políticos, se convierte en una estructura modeladora de ideales sociales y de ciudadanos. Desde las instituciones, los Estados Nación promueven las teorías de seguridad nacional orientadas a la defensa de la población propia, del territorio propio, de la soberanía propia, que por lo general no admiten modalidades de organización social diferentes a la del ideal civilizatorio promovido por el propio Estado³¹⁸.

El Estado a través de sus instituciones, entes y organismos va demarcando los campos de pensamiento y acción. “Cuando la modelación no funciona y sectores o individuos se comportan fuera de la norma legítima, entonces el Estado acude a modalidades coercitivas cada vez más violentas a fin de lograr por las malas lo que no se logra por las buenas”³¹⁹.

Venezuela es un Estado que actualmente opera aquellos derechos que le permiten hacer dependientes a los indígenas mientras que desconoce aquellos que promueven su autonomía. A pesar del extenso reconocimiento de derechos que hemos repetido en este trabajo y que están consagrados en la CRBV (1999), los procesos de demarcación siguen detenidos. Las debilidades en la estructura del Estado han generado acciones rápidas pero no mantenidas en el tiempo por parte del gobierno. Ya en el 2004 empezaba a hablarse de que el gobierno estaba en mora con la entrega de tierras, por tanto la Comisión Nacional de Demarcación entregó los primeros expedientes de tierras indígenas a ser reconocidas,

³¹⁷ Id.

³¹⁸ Id.

³¹⁹ Id.

los cuales versaban sobre siete comunidades Kariñas y Waraos ubicadas al norte del Orinoco. Al entregar las tierras³²⁰, el Presidente Chávez advierte:

“(…) no me pida nadie que yo le entregue título de propiedad sobre extensiones infinitas de territorio, sobre la mitad del estado Bolívar por ejemplo, (…) nadie, nadie se confunda; porque hasta ahí no vamos a llegar, primero que nada la unidad nacional, la unidad territorial, la unidad de un pueblo, que nadie se confunda o nadie se deje confundir (…)”
(Fragmento de uno de los discursos del Presidente Hugo Chávez en 2005)

La ineffectividad de la demarcación es el atributo más visible del Estado que se niega al reconocimiento de los derechos estratégicos de los indígenas, pero no el único. Paralelamente a esa práctica, se encuentra la del Estado que se siente por encima de sus ciudadanos a pesar de que las leyes establecen la obligatoriedad de hacer consultas previas, libres e informadas. Esto se relaciona con los efectos de la ocupación, ya que ninguno de los megaproyectos ha sido consultado con las comunidades indígenas afectadas³²¹.

Si se requiere otro ejemplo de violencia, se ha evidenciado el ejercicio de la misma durante los procesos de penetración en el Caura. Los indígenas del Caura, desde Nichare hasta las cabeceras, han demarcado su territorio y hasta la penetración minera de 2006 mantenían un estricto control sobre ese espacio impidiendo el tránsito de personas foráneas a la zona sin la debida autorización por parte del Gobierno o sin permiso de la organización indígena *Kuyujani*. Es decir, que “los indígenas de la Cuenca del Caura estaban llevando a cabo acciones que podrían considerarse soberanas mientras el Estado venezolano tiene una presencia institucional débil”³²². A pesar de que los indígenas ye'kwana intentaron resguardar esos espacios, hubo procesos de violencia que se pueden visualizar en la siguiente tabla.

³²⁰ Pequeñas extensiones rodeadas de tierras de criollos.

³²¹ V. los casos del tendido eléctrico Venezuela-Brasil, el gasoducto Transguajiro, la base militar en La Esmeralda y el gasoducto Transamazónico.

³²² SILVA, N. Op. Cit. pág. 402.

Hecho	Victimario	Víctima
Falta de otorgamiento de títulos de tierra habiendo cumplido todos los requisitos de ley	Estado	Comunidades indígenas locales
Entrada forzosa de mineros a la mina	Mineros	Comunidades indígenas locales
Protestas callejeras, saqueos y quema de casas	Mineros	Indígenas en Maripa, funcionarios de la Alcaldía y ambientalistas
Discurso acusatorio y racista	Mineros y habitantes criollos	Líderes indígenas
Intento de homicidio y asesinato	Lugareños criollos	Jóvenes indígenas
Predisponer a los mineros contra los indígenas	Militares	Comunidades indígenas
Decomiso de oro en 2006	Militares	Mineros
Desconfianza acerca de la no minería indígena	Indígenas y criollos	Comunidades indígenas
Desesperanza y desosiego	Estado	Comunidades indígenas, ambientalistas y científicos que trabajan en el Caura

Tabla 9. Violencia en el Caura.
Fuente: Silva (2011), modificaciones propias.

Como se puede observar, la violencia en su mayoría proviene de los mineros sin control y de las instituciones del Estado. Cuando un territorio se considera *res nullius*, la ocupación es inevitable y junto a la ocupación la violencia. En este caso y en los demás territorios indígenas, la falta de institucionalidad comprometida a materializar el derecho al territorio da oportunidad a que la violencia crezca, la cual se manifiesta en racismo, actividades delictivas y agresiones físicas. Ahora bien, sabiendo qué es la violencia política y dónde se genera, ¿qué sucede en el DI?, ¿no hay ninguna normativa al respecto?, ¿qué dispone el ordenamiento jurídico venezolano? frente a la violencia política, ¿*hominis nullius*?

El Convenio 169 (1989) en su artículo 3 numeral segundo establece: “No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”; y más adelante en el artículo 12 dispone: “Los pueblos

interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

La DPPI (2007) en su artículo 7 hace referencia a la protección de sus derechos más fundamentales: “Art. 7: 1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. 2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo”; luego en el artículo 22 numeral segundo establece: “Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación”; el artículo 30.1 hace referencia expresa a la injerencia militar: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”;

La CRBV (1999) en su Título III de los Derechos Humanos y Garantías y de los deberes contiene tres artículos importantes. El artículo 19: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”; el artículo 30: “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer

efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados” y el artículo 31: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.

La LOPCI (2005) en su artículo 1 dispone: “El Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal, así como las demás leyes de la República, para asegurar su participación activa en la vida de la Nación venezolana, la preservación de sus culturas, el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen posibles”.

Para finalizar podemos afirmar que frente a la violencia política no hay consideración *hominis nullius*, hay personas y grupos protegidos desde sus derechos más fundamentales. Tan es así que desde el DI se han venido desarrollando los “derechos humanos de las víctimas”. Esto es algo relativamente reciente; las víctimas –tanto en los ordenamientos jurídicos internos como en los internacionales- no eran sujeto de derecho, más bien tenían una parcela lateral, porque la principal la tenía el victimario, es decir, el Estado o el Fiscal que actúa en su nombre. En este sentido, los derechos son construcciones jurídicas frente al Estado y su primera función es poner límite al poder. Los Estados no sólo tienen la obligación de evitar que sus agentes y funcionarios violen los DDHH sino que además están obligados a garantizar que otros que no sean Estados cometan esas violaciones. La obligación de hacer se viola con un no hacer.

3.3.2. Efectos de la violencia: el racismo

“El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de expansión, conquista, colonización y dominación y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia”³²³.

El racismo amplio o etnocéntrico separa a un grupo de otro y considera que ambos están constituidos por esencias hereditarias distintas que hacen de “los otros”, seres inadmisibles y amenazadores. El racismo por tanto, lleva a procesos de segregación, asimilación, discriminación o exterminio. “Del eurocentrismo surgido a partir de la expansión de Europa por el mundo, las características heredables de los sujetos, sirvieron al colonizador europeo para explicar las diferencias culturales habidas entre él y “los demás” que habían hallado en la Conquista de América y por tanto para legitimar la organización social jerarquizada que se dio después del encuentro de los dos mundos”. Explica Salcedo (2011) que de ese modo el grupo de los blancos o europeos quedó ubicado como de mayor jerarquía social, en este caso socioracial, y los otros pueblos, aborígenes americanos, aborígenes africanos y mestizos, dentro de los distintos grupos de las clases inferiores en razón de su condición de no blancos o no europeos. Por tanto, su aspecto físico los clasificó y eso legitimó las formas de organización impuestas por el europeo sobre todos los demás desde la Conquista.

Esta clasificación convirtió a los no blancos en seres distintos, bárbaros y salvajes que debían estar bajo el control social. En consecuencia “se consideraba desviado a quien fuera física y culturalmente diferente al europeo, de donde se pasó a su identificación con quien pudiera violar la norma, afectar la tradición, exhibir “otros” valores. Entonces debía ser mantenido en orden, mantenido en ciertas tareas y en ciertas funciones, ser

³²³ Rigoberta Menchú Tum, Dirigente indígena guatemalteca, laureada con el Premio Nobel de la Paz, en el simposio: “El problema del racismo en el umbral del siglo XXI”.

constreñido a ciertos lugares, tanto físicos como culturales, y ser reprimido finalmente.”³²⁴

El multiculturalismo consagrado hoy en la CRBV (1999) es el contraste del discurso nacionalista que acompañó a Venezuela en el siglo XX. En el pasado reciente, el mestizaje ocupaba el lugar de honor al ser representado como el origen de la nacionalidad venezolana. El indígena era reconocido como un componente del proceso histórico de mestización; proceso que a su vez consumía las identidades en su desenvolvimiento y que había prácticamente acabado con los pueblos indígenas³²⁵. Mansutti (2006) aborda el tema diciendo que “la valoración del mestizaje enraizó en el espíritu del pueblo venezolano contemporáneo; en el sentido de que, el individuo ideal de la venezolanidad es aquel que es mestizo. Pudiendo decir que ser mestizo es la manera de ser ario en Venezuela, es el ideal racial a punto que centró el orgullo identitario en el hibridismo y restringió la posibilidad de desplazarse entre varias identidades raciales”³²⁶.

Entonces se entiende que el mestizaje es una historia que empieza y termina en si misma cuando hay quienes afirman que la mezcla ha sido total; un elemento que servía de base para las políticas públicas de asimilación que llevaba a cabo el Estado venezolano antes de 1999; políticas que “integrarían” a los indígenas a los modelos de vida

³²⁴ SALCEDO, J.: “Raza, estigma y delincuencia en la conformación del Nuevo Mundo” en Territorios, Identidades y Violencias, SEGOVIA, Y. y NATES, B. (compiladoras), Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, 2011, pág. 174.

³²⁵ KELLY, J.: “Políticas indigenistas y “anti-mestizaje” indígena en Venezuela” en El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural. Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010), Bello, L. (ed.), IWGIA, Copenhague, 2011, pág. 369.

³²⁶ MANSUTTI, A.: “La demarcación de territorios indígenas en Venezuela: algunas condiciones de funcionamiento y el rol de los antropólogos” en Antropológica, núm. 105-106, pág. 17. Al respecto también puede verse el discurso dado por Luis Alfonso Dávila como canciller de la República ante Conferencia Mundial contra del Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas Conexas de Intolerancia en el año 2001 en el que afirmó “Venezuela es una sociedad multi étnica y pluricultural, resultado de la fusión de etno culturas e idiosincrasias muy diversas, en cuya formación tomaron parte y se amalgamaron las tres razas primigenias de América, como lo fueron la india, la negra y la blanca, y de la inmigración proveniente de todas las naciones del mundo entero durante varios siglos. Los venezolanos estamos orgullosos de este mestizaje.” Disponible en: <http://www.un.org/WCAR/statements/venezuelaS.htm>

económica, política, social y cultural de la población dominante del país³²⁷. Frente a esto el Estado debe generar políticas de educa-acción no sólo en favor de los indígenas sino de todos los venezolanos, no basta con que la Constitución diga que el país es multicultural, esa realidad hay que llenarla de contenido haciendo entender a todas y todos, el valor supremo de la justicia y de la igualdad, para poder erradicar malas prácticas como la discriminación racial.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1969, entrada en vigor) define la discriminación racial diciendo: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” Por su parte la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial (2011) señala que el racismo es: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.”

Bajo cualquiera de las dos definiciones jurídicas y cualesquiera incluidas en la doctrina, lo cierto es que el racismo sigue existiendo y hay que eliminarlo. A nivel internacional y nacional hay espacios e instrumentos jurídicos creados para combatir el racismo, los mencionamos a continuación.

- La Carta de Naciones Unidas (1945): Establece en su preámbulo: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad

³²⁷ Nuevamente se hace referencia a la Reforma Agraria de 1960 y a las misiones católicas y de otras iglesias.

sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad (...).” Lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones de la Carta y de los valores y principios que ella contiene, no ha conseguido cambiar el mundo. Muchas son las injusticias que persisten, entre esas el racismo.

- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): El instrumento jurídico universal sobre DDHH establece:
 - Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
 - Artículo 2: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...)”
 - Artículo 5 afirma: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”
 - Artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”
- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD): la AGNU adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, cuestión que favorece a los pueblos indígenas. La Convención está supervisada por el CERD y todos los Estados Parte están obligados a entregar informes periódicos para la revisión de la implementación de derechos. En relación con Venezuela, el 30 de agosto de 2013 el CERD publicó las Observaciones finales sobre los informes periódicos 19º a 21º de la República Bolivariana de Venezuela,

aprobadas por el Comité en su 83º período de sesiones³²⁸. En el informe, el CERD “felicitó al Estado venezolano por: La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005); La Ley de Idiomas Indígenas (2008); La Ley de Artesanos y Artesanas Indígenas (2009); Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009); La Ley Orgánica contra la Discriminación Racial (2011); La creación del Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas (2007).” Sin embargo, el Comité advierte que “según información brindada por el Estado parte, del ingreso obtenido durante el período entre 1999 y 2012, el 62,5 por ciento es destinado a la inversión social, sin embargo lamenta que no cuenta con información sobre el porcentaje específico del presupuesto destinado a la elaboración e implementación de medidas de inclusión social de pueblos indígenas y afrodescendientes en los ámbitos de educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación”; por tanto el Comité **insta**³²⁹ al Estado parte “para que tome en cuenta los resultados del décimo cuarto Censo de Población y Vivienda realizado en el 2011 en el desarrollo de sus políticas inclusivas y programas de desarrollo social, que elabore indicadores que le permitan tener una mejor visión sobre la situación en que viven las comunidades indígenas y la población afrodescendiente, así como métodos de medición de resultados que permitan evaluar la sostenibilidad, alcance e impacto de sus políticas. El Comité solicita al Estado parte que incorpore dicha información en su próximo informe y proporcione información sobre el porcentaje de su presupuesto anual destinado a la implementación de programas dirigidos a comunidades indígenas y población afrodescendiente”. El informe dedica un apartado entero al pueblo Yanomami en el que señala que **“urge al Estado parte para que intensifique la protección que brinda a los pueblos indígenas que se encuentran establecidos en la región amazónica y le recomienda que lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos de violencia que se dan contra los miembros del pueblo Yanomami por parte de mineros ilegales”**³³⁰.

³²⁸ Cfr. CERD/C/VEN/CO/19-21.

³²⁹ Resaltado nuestro.

³³⁰ Resaltado nuestro.

El Comité insta al Estado parte para que tenga en cuenta las Directrices de Protección para los pueblos en aislamiento y en contacto inicial en la región amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, adoptadas como resultado de las consultas realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. De igual manera el informe hace referencia al pueblo Yukpa en el apartado siguiente diciendo: **“El Comité expresa gran preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en la Sierra de Perijá, en los que ha habido enfrentamientos entre indígenas y ocupantes de las tierras de esta zona. El Comité lamenta que mediante tales hechos se ha atentado contra la vida e integridad física de miembros del pueblo Yukpa, entre los cuales destaca el homicidio del Cacique Sabino Romero y otros miembros de su familia y del referido pueblo y que tales hechos sean consecuencia de la falta de demarcación de la tierra”**³³¹.

- Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica 2001: La ONU celebró una Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en Sudáfrica. La Conferencia insistió en los pasos que deben ser llevados adelante para erradicar el racismo. En la Conferencia de Sudáfrica, la Delegación venezolana en su discurso dijo entre otras cosas lo siguiente: “Sra. Presidenta, acudimos a esta Conferencia porque Venezuela quiere hacer oír su voz ratificando su tradicional e histórica posición y compromiso de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y cualquier otra forma de intolerancia que se pueda dar en el mundo. También porque deseamos el éxito de la Conferencia, en cuyos trabajos preparatorios hemos contribuido para promover entendimientos y facilitar la búsqueda de posiciones convergentes (...) Ya no se trata de prevenir la guerra entre ejércitos, con tanques y aviones, con fusiles y bombas; Aquí se trata de

³³¹ Resaltado nuestro. Recordemos que Venezuela por ser parte a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial está obligada tomar, “cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”.

una guerra sórdida que se da en el día a día de nuestro tiempo, en el interior de muchas de nuestras sociedades, en los medios de comunicación muchas veces. Se trata, señores, de ganarle la guerra a la segregación de minorías que no tienen absolutamente ninguna culpa de su situación. Es la pobreza, es la concentración inescrupulosa de riqueza en muy pocas manos (...)”³³².

- CRBV (1999): Otorga a los DDHH rango constitucional y en virtud de ello desarrolla el Título III de los Derechos Humanos, garantías y de los deberes en el que aborda ampliamente los principios contra la discriminación. (Fundamentalmente el artículo 19 ya citado).
- Ley Orgánica contra la Discriminación Racial (2011): Aunque ha sido una excelente iniciativa de la Asamblea Nacional de Venezuela sancionar una Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, somos de la opinión que a la ley le faltaron algunos ajustes jurídicos importantes. Por ejemplo el artículo 37 define el delito racial diciendo que: “El o la que mediante acción u omisión distinga o excluya a una o varias personas, en razón de su origen étnico, origen nacional o rasgos del fenotipo, con el objeto de anular o menoscabar el goce o ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, será penado o penada con prisión de uno a tres años. El o la que cometa el delito de discriminación racial cumplirá entre doscientas y seiscientas horas de servicio social comunitario.” Sin embargo, la CIDH en el informe respectivo a Venezuela del año 2009 señaló su preocupación ante la definición de discriminación racial contenida en el artículo 10 de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial y ante la tipificación del delito de discriminación racial del artículo 37 de la referida ley, ya que tales disposiciones legales no contienen todos los elementos de la definición de discriminación racial establecida en la Convención” El informe recomendó algunas modificaciones, habrá que esperar las actuaciones de la Asamblea Nacional al respecto.

Finalmente podemos decir que pese a los esfuerzos de la comunidad internacional por cumplir con los DDHH independientemente de la raza, el sexo, la lengua o la

³³² Cfr. <http://www.un.org/WCAR/statements/venezuelaS.htm>

religión, no se ha logrado subsanar el problema de la discriminación racial. El racismo persiste, los conflictos étnicos y culturales siguen desencadenando violencia en muchas partes del mundo. En Venezuela con la CRBV (1999) y los instrumentos jurídicos internacionales de los que el Estado es parte, el racismo sigue siendo una realidad. Los pueblos indígenas son uno de los sectores más fuertemente discriminados, en este sentido, la no demarcación de territorios, la ocupación de los mismos, la violencia que se desarrolla por la ambición de explotar los recursos que se encuentran en los territorios indígenas, la pobreza, la fragmentación y el desplazamiento, son espacios para el racismo. Por esto y muchas cosas más, la demarcación es una tarea impostergable.

3.3.3. Efectos de la violencia: la vergüenza étnica

Otro de los efectos de la violencia es la vergüenza étnica, que no es otra cosa que la vergüenza de pertenecer a un grupo de determinadas características raciales y culturales. La vergüenza étnica es resultado de los parámetros raciales y de la discriminación. Es un efecto tan grave de la violencia que por un lado permite los procesos de transculturización por “querer ser” algo distinto que va junto al “querer dejar de” pertenecer a una cultura o a un grupo particular. Y por el otro, favorece a la desintegración de las organizaciones de base, que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas son importantísimas para los procesos reivindicatorios y para el futuro de los pueblos en cuanto a la permanencia y resguardo de las formas de vida.

Con la vergüenza étnica se dejan de hablar las lenguas indígenas, se empiezan a practicar formas de vida distinta. Ese es uno de los grandes riesgos de la movilización indígena y de los desplazamientos. En Venezuela, más específicamente en la Universidad de Los Andes se está estudiando la propuesta de un programa piloto de educación permanente e intercultural para atender a los estudiantes indígenas de nuevo ingreso. La finalidad del programa piloto es colaborar en la transformación de una realidad existente de modo que los estudiantes indígenas de nuevo ingreso de la Universidad de Los Andes puedan mejorar su situación a partir del reconocimiento y acreditación de sus

competencias y saberes, asegurando la posibilidad futura de expandir las mismas, contribuyendo así a su progreso y al de su entorno.

El programa pretende erradicar elementos negativos como la vergüenza étnica a partir de tres bloques temáticos: 1. Identidad personal y colectiva *in group*: en el que se hace una evaluación de ¿cómo somos y de dónde venimos? valorando elementos como el reencuentro consigo mismo y el reencuentro con los otros, la comunicación como articuladora de los procesos sociales, la comunicación y sus manifestaciones culturales, la identidad y diversidad y la identidad colectiva. 2. Identidad personal y colectiva *out group*: haciendo énfasis en la tolerancia, cooperación e interdependencia. 3. Líderes y liderazgo: con el que se busca promover el liderazgo indígena desde sus propias culturas con la idea de que en el futuro puedan representar con excelencia los intereses de sus pueblos y comunidades. Como se decía antes, esto es sólo una propuesta y en un rango delimitado. Sin embargo, iniciativas como esta son necesarias en todo el país.

Si se logra superar la vergüenza étnica en Venezuela, las organizaciones de base se harían más fuertes y las nuevas generaciones podrían seguir adelante sin problema con las luchas históricas de los pueblos y comunidades indígenas sin temor a ningún tipo de violencia.

3.3.4. Efectos de la violencia: la agresión

“No más violencia contra los hermanos Yukpa y los Pueblos Indígenas de Venezuela”. ¡Demarcación de Territorios Continuos sin Terceros ya!”³³³.

La violencia se manifiesta también a través de las agresiones físicas, maltrato, lesiones e inclusive homicidios. Cuando en 1993 dieciséis indígenas fueron asesinados después de que los “buscadores de oro” atacaran la comunidad Yanomami de Haximú,

³³³ V. Comunicado de la Universidad Indígena de Venezuela (UIV) denunciando el asesinato de dos indígenas Yukpa de la Sierra del Perijá y exigiendo la inmediata demarcación de las tierras indígenas en territorios continuos (no en parcelas o “islas”) y sin terceros (no-indígenas) dentro. 19 de abril de 2012

hubo un escándalo social y mediático con el que se consiguió que posteriormente, varios mineros fueran condenados por homicidio³³⁴. La violencia como política del Estado y de terceros sigue presente en los territorios indígenas veintidós años después. Sólo por citar un caso, los constantes conflictos en la Sierra de Perijá en el estado Zulia por el carbón y las tierras, han dejado indígenas privados de libertad, heridos e inclusive muertos.

Lastimosamente el Estado no ha desarrollado políticas serias de seguridad en los territorios indígenas, por tanto, las empresas privadas, las empresas del Estado, la presencia de terceros por Convenios Internacionales, la expansión del latifundio, la guerrilla y los garimpeiros, siguen siendo hoy una amenaza a la seguridad de las comunidades y pueblos indígenas, siguen ocupando forzosamente los territorios, como si fueran *res nullius* o tierra de nadie.

El nombre de Sabino Romero ha quedado en la historia de la lucha indígena venezolana por dos cosas fundamentales: su entrega digna a la lucha por la tierra y la violencia de la que fue víctima hasta su muerte. Sabino Romero era el Cacique de la comunidad Chaktapa del pueblo Yukpa en la Sierra de Perijá del estado Zulia. El pueblo Yukpa habita en la frontera colombo-venezolana y debido a diferencias dialectales se han identificado en varios grupos: Irapa, Parirí, Wasama, Rionegrinos y Macoita³³⁵.

Aunque Sabino Romero empezó a ser conocido en el país por un ataque violento perpetrado por funcionarios de la Guardia Nacional en el que resultaron muertos los Yukpa Felipe Romero, Carmen Romero y José Vicente Romero en 1995, la historia del conflicto por la tierra y los peligros ante los distintos tipos de violencia que empezaron a desarrollarse en la Sierra, tiene un origen mucho más lejano.

³³⁴ Se puede ampliar la información en: <http://www.survival.es/articulos/3301-haximu-supervivientes>

³³⁵ V. Informe socio antropológico del pueblo Yukpa presentado por la Universidad del Zulia para el caso de Sabino Romero.
Disponible en: <http://www.elpueblosoberano.net/2011/01/informe-socio-antropologico-del-pueblo-yukpa-para-el-caso-de-sabino-alexander-olegario/>

A partir de 1534 con la llegada del colonizador a la Sierra de Perijá, la historia del pueblo Yukpa empezó a verse amenazada con la ocupación de sus territorios, ya que como todos los demás pueblos indígenas, su vida como pueblo depende precisamente de su territorio. Los Yukpa empezaron a luchar por sus tierras desde el primer contacto histórico con las tropas de Ambrosio Alfínger³³⁶, lo que trajo enfrentamientos violentos entre los colonizadores y los indígenas por lo cual éstos últimos tuvieron que reubicarse en la Sierra de Perijá, hasta que hubo mediación por parte de los misioneros capuchinos³³⁷.

A partir de ese momento y hasta un poco después de la mitad del siglo XVIII, los indígenas empezaron a establecerse por grupos en las misiones en el oeste de las tierras bajas del lago de Maracaibo³³⁸. La violencia regresó a causa de los territorios que se iban perdiendo por la ganadería, ya no se contaba tanto con el apoyo de los misioneros debido a su salida de las colonias por la guerra de independencia, por tanto, a los Yukpa no les quedó otra alternativa que refugiarse en la Sierra³³⁹.

El contacto violento de los Yukpa con la sociedad criolla se dio de forma generalizada durante los siglos XIX y XX, sin embargo, con la fundación de la Misión de los Ángeles del Tokuko en 1945 por los misioneros Capuchinos, los indígenas se sintieron apoyados en la lucha por los territorios. De igual manera empezó a darse el

³³⁶ Alfínger, luego de estar en la isla de La Española desde 1526 obtiene el cargo de gobernador y capitán general de la recién creada Provincia de Venezuela, a donde llegó en marzo de . Se instaló Santa Ana de Coro, única posesión europea en más de 2000 km de costa venezolana, donde no vivía ninguna población considerable de nativos. La escasa mano de obra le hace dudar en su intención de internarse en el continente, pero los rumores sobre El Dorado y sus fabulosas riquezas le impulsan al fin a abandonar la ciudad, acompañado de 200 alemanes y españoles, así como de cerca de mil esclavos. Su recorrido le llevó a fundar la villa de Neu-Nürnberg, que se toma como origen de la ciudad de Maracaibo, y a explorar el lago del mismo nombre en el transcurso de ese año. V. CHAPMAN, WALKER (1967): *The Golden dream: seekers of El Dorado*, Ed. Bobbs-Merril Co., Indianapolis.

³³⁸ V. Schmidt, B. y Schröder, I. (2001): *Antropology of violence and conflict*, Ed. Routledge, Londres. También vease AA.VV: *Fossil Fuels, Oil Companies, and Indigenous Peoples. Strategies of multinational oil companies, states, and ethnic minorities. Impact on environment, livelihoods, and cultural change*, Haller, Bloöchlínger, John, Marthaler y Ziegler (eds.), Ed. Lit, Zurich, 2007.

³³⁹ V. JARAMILLO, O.: “Yuko-Yukpa” en *Introducción a la Colombia Amerindia*, Instituto Colombiano de Antropología, Ed. Presencia, Bogotá, 1987.

agrupamiento de distintas poblaciones cerca de la Misión en busca de accesos a los programas sociales y servicios públicos³⁴⁰.

De esa reubicación en las misiones empezó a hacerse común el calificativo de “motilones mansos” y “motilones bravos”³⁴¹. Es probable que por esos calificativos hasta el día de hoy, los indígenas Yukpa sean considerados pueblos violentos, delincuentes y destructivos. De hecho el Informe socio antropológico del pueblo Yukpa para el caso de Sabino Romero señala que “en la actualidad las noticias expresadas por los medios de comunicación masiva tienden a calificar a los miembros del pueblo Yukpa como seres violentos y conflictivos, injustamente se les atribuyen con frecuencia actos delictivos, invasiones, robos, destrucción de la propiedad privada, entre otros”³⁴².

No obstante, es necesario aclarar que los Yukpa tampoco son un pueblo dócil y fácil de dominar, pero eso no los hace delincuentes y violentos. El comportamiento de los Yukpa ha sido juzgado desde una estructura monocultural, donde lo distinto es mal visto. Como todos los demás pueblos indígenas de Venezuela, y nos atrevemos a afirmar que como todos los pueblos indígenas de América, el proceder de los Yukpa ha estado en la periferia social de unas relaciones absolutamente asimétricas producto del desbalance histórico del conflicto por la tierra.

Ya a finales del siglo XX, el 2 de febrero de 1995 para ser exactos, la Guardia Nacional de Venezuela arremetió contra un grupo de indígenas Yukpa, acto del cual resultaron muertos los Yukpa Felipe Romero, Carmen Romero y José Vicente Romero. La “Masacre de Kasmera” como se conoce el hecho, fue producto de unas denuncias que

³⁴⁰ Véase las Monografías Misionales de sus Internados Indígenas en los veinticinco años de su fundación. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/88883447/Los-Angeles-Del-Tucuco-1945-1970#scribd>

³⁴¹ A nivel generalizado la categorización de “motilones mansos” y “motilones bravos” parte de una confusión que hizo pensar que los Yukpa eran un pueblo difícil y violento. Esta confusión acerca de los motilones la tuvieron los autores hasta mediados del siglo XX cuando descubrieron que los motilones bravos –que también estaban en Mérida, donde resistieron al colonizador hasta el siglo XVIII– son los Barí, de la lengua Chibcha y que actualmente están en la Sierra de Perijá. Los Yukpa eran los motilones mansos. Véase: AA.VV: El patrimonio eclesiástico venezolano. Pasado y futuro Tomo III, Porras, B., Duque, A., Suárez, N., Morales, R. (eds.), Ed. Publicaciones UCAB, Caracas, 2006.

había hecho una familia ganadera de la zona sobre un presunto robo de ganado³⁴³ a lo que la Guardia Nacional respondió violentamente y sin investigar.

Desde el año 2001 hasta el 2009 hubo intento de homicidios contra el Cacique Sabino Romero y su familia, una campaña fuerte de descrédito en su contra en particular y en contra de los Yukpa en general. Hubo problemas con los ganaderos y con funcionarios del gobierno por los derechos sobre el territorio. Finalmente el 14 de octubre de 2009 Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero son detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en acción conjunta con el Ministerio Público. El 29 de marzo de 2010 los abogados defensores de Sabino Romero introdujeron un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el que se solicitaba entre otras cosas la atribución de la jurisdicción indígena. La parte final del documento presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia dice: “Basta de continuar nuestras etnias sufrir la marginalidad y discriminación racial, basta de estar sometidos a saqueos, humillaciones y ser relegados a condiciones inhumanas como está sucediendo en estos momentos con el derecho al debido proceso y violación de los derechos humanos de Sabino Romero y Alexander Fernández por encontrarse arrestados en condiciones inaceptables, basta de falsas demarcaciones de tierras (...)”³⁴⁴.

El 29 de julio de 2010 el CEPESAL y el GTAI se pronunciaron ante la injusta detención de los Caciques Yukpa Sabino Romero, Olegario Romero y el indígena Wayuu Alexander Fernández. La comunicación expone seriamente que: “resulta inconcebible e inaudito, fuera de todo cálculo legislativo constituyente, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en materia de derechos indígenas, se esté desmembrando por la incompetencia de los órganos administrativos de justicia en el país. Que a cuatro meses y medio de haber sido introducido un Recurso de Amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte de los abogados defensores de los

³⁴³ Cfr. <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/cronologia-violenta-del-caso-sabino-romero.aspx>

³⁴⁴ Puede leerse completo el Recurso de Amparo en: <http://www.elpueblosoberano.net/2010/04/8474/>

indígenas, resulta insólito que este órgano en vez de avocarse a sentar jurisprudencia echando a andar los derechos indígenas reconocidos, decida a través de la Sala Penal la radicación del juicio del Estado Zulia al Estado Trujillo”³⁴⁵. Efectivamente, el Tribunal Supremo de Justicia no había aprobado el cambio de jurisdicción penal ordinaria a jurisdicción especial indígena, lo que hizo fue un cambio de jurisdicción del juicio lo que resultó en crecimiento de la tensión entre el pueblo indígena Yukpa y el poder judicial venezolano.

El 4 de agosto de ese mismo año el pueblo Yukpa hizo circular una carta abierta buscando recolectar firmas hasta que la mencionada carta llegara al Presidente Chávez. La carta entre otras cosas denuncia lo siguiente: “Sabino permanece preso en el cuartel militar de Fuerte Macoa en la población de Machiques de Perijá, recibe una sola comida al día, agua no potable y sólo puede ser visitado por las mujeres de su familia a las que los soldados del mencionado fuerte, someten a vejaciones y violaciones de su dignidad que, a pesar de ser denunciadas ante los entes del Estado (Fiscalía del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el propio Tribunal de la causa) nunca han merecido una respuesta”³⁴⁶. Desde la carta se hacía de conocimiento público que los Yukpa estaban decididos a “plantarse” frente al edificio del Tribunal Supremo de Justicia hasta lograr que el órgano se manifestara de manera definitiva.

Luego de una lucha incansable que incluyó la huelga de hambre del hermano jesuita José María Korta³⁴⁷, se logró lo que se pretendía y el juicio se hizo bajo jurisdicción indígena en el Tokuko. Después de la decisión indígena Sabino Romero se dedicó a hacer visitas a los demás pueblos indígenas de Venezuela. En la mitad de su gira estuvo en Caracas donde en una entrevista que le hicieron en aporrea tv desde la Casa Amerindia, manifestó que en su visita a los demás pueblos indígenas, específicamente en el estado Bolívar, le preguntaron cómo había sido su lucha, su respuesta dio oportunidad

³⁴⁵ Comunicado que se puso en circulación el 29 de julio de 2010.

³⁴⁶ “Suscribe aquí la carta por Sabino” Puede leerse la carta completa en:
<http://www.elpueblosoberano.net/2010/08/suscribe-aqui-la-carta-por-sabino/>

³⁴⁷ Sobre la huelga de hambre del hermano Korta V.
http://www.eluniversal.com/2010/10/23/pol_ava_pueblo-pemon-se-soli_23A4643651

para tener un intercambio sobre las debilidades y divisiones que hay en las bases del movimiento social indígena venezolano. Dice Sabino en la entrevista que cuando los indígenas del estado Bolívar preguntaron si debían seguir luchando su respuesta fue: “sí, vamos a seguir luchando porque este es el tiempo para terminar con nuestra lucha, tenemos que llegar hasta donde queremos”. La periodista de *aporrea tv*, preguntó: “¿qué es lo que ustedes están necesitando?”, Sabino respondió: “primero, la demarcación de territorios, pago de bienhechurías de terratenientes (...) nosotros los Yukpa estamos pensando profundamente primero, el territorio porque queremos vivir libres en nuestro territorio sin muerte, sin sangre derramada en nuestro territorio; queremos resolver toda esta problemática muy profunda, por ejemplo, los blancos que se retiren de nuestro territorio”.

Finalmente, Sabino es asesinado el 3 de marzo de 2013. El secretario de gobierno del estado Zulia informó: “aproximadamente a las 7:00 de la noche de este domingo fue asesinado el cacique yukpa Sabino Romero, en la carretera de El Tukuko, parroquia Libertad, municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia.” Durante las investigaciones se supo que Sabino Romero fue asesinado por dos encapuchados, a bordo de motos, quienes interceptaron la unidad donde se trasladaba el dirigente indígena y le efectuaron “una ráfaga de tiros”³⁴⁸. Del hecho también resultó herida la esposa del Cacique. Han pasado dos años y no se ha demarcado el territorio en Perijá, el hostigamiento a los pueblos Yukpa, Bari y Wayuu no ha cesado. La violencia política, ganadera y guerrillera sigue en el área. El derecho reconocido sigue sin poder ser ejercido.

3.4. Desplazamiento y fragmentación: identidades en conflicto

“Perder nuestra tierra es perdernos nosotros (...) Irnos es dar un paso más hacia la muerte”³⁴⁹.

³⁴⁸ Cfr. Diario de circulación nacional “El Universal” de 4 de marzo de 2013

³⁴⁹ Afirmación de un indígena Siona en una entrevista para ACNUR Colombia, disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Los_indigenas_y_el_de_splazamiento_forzoso_en_Colombia.pdf?view=1

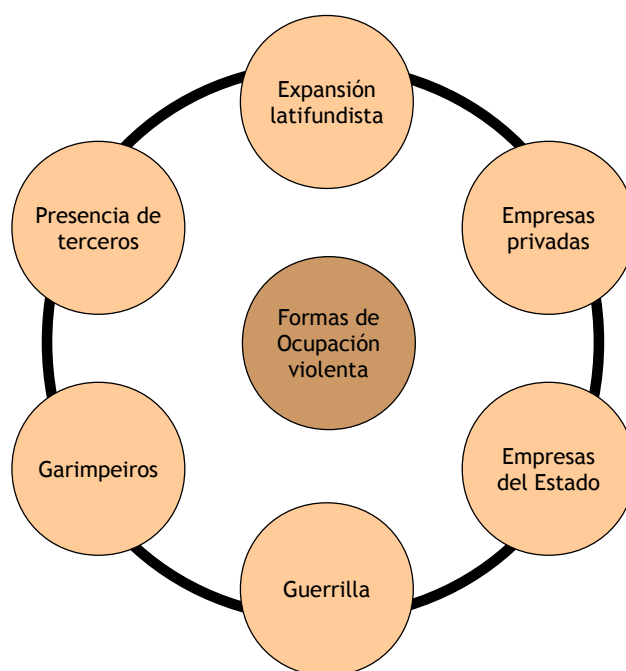


Figura 6. Efectos de la violencia sobre territorios considerados *res nullius*.
Fuente: elaboración propia.

En Venezuela, la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no puede ser entendida como algo efímero o pasajero, fruto de coyunturas políticas o partidistas. Esta lucha debe ser entendida desde la profundidad de sus razones, como dice Aparicio (2009) “el significado político y jurídico de las reivindicaciones de los pueblos indígenas es de largo alcance pues incide directamente en las bases de la construcción del edificio liberal, esto es, la tríada Estado-nación-derecho”³⁵⁰. El concepto de territorio es imprescindible para entender y definir la idea que tienen los pueblos indígenas de la autonomía, este es uno de los aspectos centrales del debate sobre la libre determinación. Los indígenas reclaman no sólo el reconocimiento de sus territorios, sino también la garantía jurídica de poder mantener y preservar en ellos, sus sistemas de

³⁵⁰ APARICIO, M.: “Los pueblos indígenas y el derecho: los límites del reconocimiento jurídico de la multiculturalidad en América Latina “en Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural sostenible, Álvarez, N., Oliva, J. y Zúñiga, N. (Eds.), Catarata, Madrid, 2009, pág. 193.

autoridad, sus costumbres, idiomas, cultura y su futuro como pueblos, es decir, su autonomía, su libre determinación³⁵¹.

Solís (2003) sostiene que “las fronteras nacionales de los Estados latinoamericanos, surgidas con la independencia, dividieron pueblos, haciendo que porciones de los mismos pasaran a formar parte de países diferentes. Este hecho, si bien no rompió completamente los lazos ancestrales, si introdujo nuevos tipos de relaciones y sujeciones, en respuesta al contacto con nuevas sociedades ajenas a la experiencia milenaria de los pueblos americanos”. Las fronteras, a la par que condicionaban separaciones cada vez mayores, generaban identidades en conflicto, la mayor parte de las veces con consecuencias negativas para la vida y el futuro de los pueblos involucrados³⁵².

La fragmentación hace que los pueblos cada vez sean más débiles no solamente en términos cuantitativos, sino también con respecto a la vitalidad cultural o a la identidad de grupo, lo que por supuesto hace inviable la materialización del derecho al territorio y a la libre determinación de los pueblos. Un punto en el cual las fronteras representan un factor crítico es en el aspecto a la identidad de los pueblos. Primero, la frontera ha dividido identidades étnicas imponiendo la construcción de una nueva identidad nacional –ya se abordó el tema de la nacionalidad venezolana y sus espacios blancos-; segundo, debilitó identidades étnicas sólidas de comunidades que tienen una organización ancestral; tercero, la nueva identidad nacional impuesta genera roces y conflictos con el resto de la población y entre esas relaciones conflictivas se va dando un mayor conflicto que es el de la identidad.

En Venezuela están prohibidos los traslados forzosos y por tanto también está prohibida la reubicación, salvo que el desplazamiento esté justificado en catástrofes

³⁵¹ Así lo dice RAMIREZ, J. (2001): ¿Por qué está reprobada la reforma? Documento electrónico disponible en: <http://www.Jornada.UNAM.Mx/2001/may01/010513/mas-derechos.html>

³⁵² SOLÍS, G. (2003): “Pueblos y lenguas de fronteras”, Ed. Serie Coediciones, Lima, pág. 9.

naturales o emergencias de salud³⁵³. Desde la perspectiva de los DDHH esto es más que lógico debido a que como afirma Torrecuadrada (2010) “el mantenimiento de la población indígena en su territorio, cuando de esa permanencia derive un riesgo para su salud, pondría el peligro el derecho a la vida”³⁵⁴. La OEA también ha entendido la necesidad de proteger a los pueblos indígenas del desplazamiento forzado de sus territorios por causa de violencia con lo cual ha estipulado que si un pueblo indígena debe dejar su territorio por manifestaciones de violencia, el Estado debe brindarles una atención especial. En este sentido la Corte IDH ha establecido que “el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, les puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural (...), genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”³⁵⁵, por lo cual es indispensable que los Estados adopten medidas específicas de protección³⁵⁶ considerando las particularidades propias de los pueblos indígenas, así como su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres para prevenir y revertir los efectos de dicha situación”³⁵⁷.

³⁵³ La LOPCI (2005) en su Título II dispone: “Capítulo VII: De los traslados De los traslados de los pueblos y comunidades indígenas. Artículo 60. Cuando por razones de catástrofe natural o emergencia de salud uno o varios pueblos y comunidades indígenas, o uno o varios de sus integrantes deban ser trasladados de un área a otra, siempre dentro de su hábitat y tierras, se requerirá el consentimiento de las comunidades o personas afectadas. En estos casos y por vía de excepción, el consentimiento podrá ser otorgado sin necesidad de cumplir con el procedimiento de consulta previsto en la presente Ley. En todo caso la reubicación se hará en áreas de similares condiciones a la de origen, que atiendan a las necesidades y expectativas de los afectados, siempre mediante procedimientos que garanticen el respeto de sus derechos colectivos e individuales. Queda a salvo el derecho a los afectados y las afectadas a regresar a los lugares de origen una vez que hayan cesado las causas que motivaron su traslado. De las invasiones o perturbaciones en el hábitat y tierras indígenas Artículo 61. En casos de invasión, ocupación ilegal o perturbaciones del hábitat y tierras indígenas por terceros, los pueblos y comunidades indígenas ejercerán las acciones que consagran las leyes sobre la materia, a los fines de la restitución de sus tierras y el cese inmediato de la perturbación. El Estado, a través del ente ejecutor, velará y garantizará la protección y resguardo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre su hábitat y tierras.”.

³⁵⁴ Op. cit. pág. 95.

³⁵⁵ Auto 004/009 emitido el 26 de enero de 2009, Corte Constitucional de Colombia, parte 4, pág. 11. Disponible en: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6981.pdf>

³⁵⁶ Véase Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998, Principio 9.

³⁵⁷ Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, Serie C. No. 212, párr. 147.

Anteriormente se hablaba de la violencia que se da tras la ocupación de un territorio considerado *res nullius*, y se dijo que el racismo y la vergüenza étnica son efectos de esa violencia, pues bien, el desplazamiento y la fragmentación aumentan el racismo de la sociedad occidental hacia el indígena y además, en el conflicto de identidad del individuo se termina sintiendo vergüenza étnica y por tanto un rechazo a lo que le es propio y natural. Sin embargo, a pesar de la falta de ejercicio de los derechos reconocidos, no hay que olvidar que la CRBV (1999) sigue siendo una oportunidad para el tratamiento especial que busca la superación del desbalance histórico, por tanto, la CRBV (1999) sigue significando hoy la hoja de ruta para la concreción de medidas correctoras de situaciones de exclusión o subordinación social.

En este sentido, la conservación de la diversidad étnica y la interculturalidad desde la CRBV (1999), puede fortalecerse a partir de la conciencia de identidades supranacionales basadas en la identidad étnica³⁵⁸. El Estado Nación debe lograr la restauración de las antiguas unidades étnicas pero en sus territorios, lo que requerirá de una formación intercultural adecuada y voluntad política para ir reconstruyendo los lazos perdidos siendo cuidadosos de no tentar a quienes al hablar de demarcación de territorios y fortalecimiento de identidades, invocan la expresión de los peligros contra la seguridad nacional y la soberanía del Estado.

3.4.1. Derechos humanos e interculturalidad: conciencia social frente al conflicto

Para lograr una aproximación a los DDHH hay que detenerse primero en el concepto de dignidad humana por ser la característica imprescindible que hace a cada persona un ser irrepetible que merece respeto y reconocimiento por parte de toda la sociedad y del Estado Nación. La dignidad humana es la cualidad que hace que todos los seres humanos nazcan “libres e iguales en dignidad y derechos”³⁵⁹. Según Carlos Eroles

³⁵⁸ Op. Cit. Pág. 10

³⁵⁹ Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

(2008) cuatro son las corrientes que han abordado el problema clave de la fundamentación de los DDHH, a saber:

- a. Las concepciones iusnaturalistas: consideran los DDHH como inherentes a la naturaleza humana y como tales ante la sociedad y el Estado.
- b. Posiciones fenoménicas: que niegan la necesidad de establecer un fundamento de los DDHH.
- c. Posiciones historicistas: sostienen que los DDHH son fruto de un largo proceso evolutivo surgido de la lucha de los pueblos y el aporte de diversas corrientes de pensamiento que apuntan a garantizar las libertades y la satisfacción de las necesidades humanas. Por tanto, para esta perspectiva, los derechos son variables y relativos debido a que van cambiando de acuerdo con las condiciones socio-políticas y socio-culturales.
- d. Posiciones éticas: sustenta los DDHH a partir de los valores que constituyen un presupuesto moral para las normas jurídicas positivas.³⁶⁰

Para poder abordar el tema de la conciencia social frente al conflicto de la identidad hay que entender la dignidad humana y su importancia, y prestar atención a los tres grandes principios que orientan los DDHH: “los DDHH son universales”, “los DDHH son indivisibles”, “los DDHH son inalienables”. Los DDHH están en todas las áreas de nuestra existencia, por tanto están íntimamente relacionados con nuestra identidad cultural y los elementos que la conforman, y a su vez está relacionada con los derechos fundamentales de los demás que debemos respetar. Según Oliva (2012), “la diversidad cultural comporta libertad de pensamiento y acción independientes, propicia libertad de decisión sin imposición, libertad para ser distinto. Como es bien sabido los regímenes totalitarios, las dictaduras, los imperialismos se caracterizan por exaltar la homogeneidad, las formas únicas, la formación no diferenciada, crear ciudadanos uniformados, dependientes, acríticos, sometidos por las normas establecidas por la

³⁶⁰ Cfr. EROLES, C.: Los derechos del niño son derechos humanos” en Políticas Públicas de Infancia. Una mirada desde los derechos, Eroles, C., Fazzio, A., Scandizzo, G., Espacio, Buenos Aires, 2008, pág. 12

cultura dominante”³⁶¹. De esta manera lo ha reflejado la UNESCO en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural: “la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes de desarrollo, entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso, a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”³⁶².

Pareciera que algunos Estados pretendieran que los DDHH fueran algo disperso, es decir, los reconocen como un cuerpo jurídico universal y de gran rango, sin embargo, en su protección y respeto parecieran diluirse. Desde nuestra opinión, los DDHH deben verse como un cuerpo completo y compacto de derechos y garantías que nos corresponden a todos los seres humanos por el hecho de serlo y además requieren de un abordaje interdisciplinario para poder conseguir una plena efectividad y ejercicio de los derechos por parte de todos sus beneficiarios sin ningún tipo de distinción.

Esferas	Derechos y valores	Vulneraciones
Personal	Derecho a la vida. Derecho a la integridad física. Derechos civiles. Derecho a la identidad.	Muerte ilegítima, desaparición, tortura, violencia. Manipulación, sustitución de identidad.
Pública (socio-política)	Derechos políticos. Pluralismo. Democracia. Ejercicio del poder. Participación política. Resolución pacífica de conflictos.	Inaccesibilidad a la ciudadanía. Dictadura/Autoritarismo. Corrupción. Dependencia/pasividad. Confrontación agresiva.
Pública (socio-económica)	Plena vigencia de los derechos sociales.	Marginación, nuevos pobres. Exclusión social. Necesidades básicas insatisfechas. Injusticia social.
Publica (comunitaria)	Desarrollo humano. Ciudadanía integral.	Necesidades reales insatisfechas.

³⁶¹ Op. cit. pág 51.

³⁶² La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural está disponible en:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf>

Familiar	DDHH específicos: niñez, adolescencia, ancianidad. Personas con necesidades especiales. Igualdad y diálogo.	Situaciones problemáticas, que afectan a los sujetos en la vida familiar y social. Desigualdad y maltrato.
Cultural-Educativa	Educación para la paz, el desarrollo y la participación. Identidades culturales.	Discriminación, interrupción de programas y servicios. Invisibilidad de sectores y etnias.
Perspectiva de género	Coparticipación conyugal. Solidaridad. Intergeneracional. Igualdad.	Machismo, abuso de poder. Desigualdad, Violencia familiar.
Religiosa	Libertad de cultos, pluralismo. Diálogo interreligioso.	Paternalismo. Fundamentalismo religioso.
Psico-social	Actitudes en el conjunto social. Favorables a la integración. Cultura de los DDHH.	Actitudes discriminatorias, intolerancia, xenofobia, elitismo.

Tabla 10. Esquema didáctico de los DDHH.
Fuente: Eroles (2008), con modificaciones propias.

En relación con la tabla anterior es bueno recordar que los DDHH a la identidad cultural, la libertad de cultos, el desarrollo humano y la ciudadanía integral de los pueblos y comunidades indígenas han estado desde hace mucho en tela de juicio. Sin embargo; en el transcurso del siglo XX se desarrolló el modelo de integración³⁶³ y desde finales de dicha centuria se ha logrado el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural³⁶⁴.

La CRBV (1999) reconoce el pluralismo étnico y cultural de Venezuela y con ese reconocimiento se ha producido un cambio en el principio de igualdad, puesto que la tal mitificada igualdad ante la ley deja de tener su fundamento en la uniformidad, entendiéndose que ésta, para que sea efectiva, sólo es posible reconociendo el derecho a

³⁶³ Los modelos de asimilación y de integración pueden ir en una sola etapa que se corresponde con la formación y consolidación del Estado Nación. Los dos modelos se enmarcan en un contexto de predominio de la sociedad hegemónica.

³⁶⁴ Op. cit. pág. 31.

la diferencia. Gómez (2000)³⁶⁵ señala que se trata de que “en circunstancias similares se aplique la misma norma, pero eso no indica que no deban o no puedan existir normas que regulen derechos diferentes en atención a la pluriculturalidad”. En este sentido, Izko (1993)³⁶⁶ entiende que “el derecho a la diferencia no debe presentarse como una oposición frontal, sino que ha de ser activado y reconocido como parte de los derechos a la igualdad”.

El cambio de concepción de la igualdad está íntimamente relacionado con la idea misma de la democracia. López (1994) sugiere que “la democracia para los indígenas significa el reconocimiento jurídico de un Estado Nación pluriétnico, pluricultural y multilingüístico y redefinir la relación entre los grupos, culturas y lenguas que lo integran, a fin de establecer una igualdad de valor entre ellos”.

Por tanto, como dice Fernández (2000), “el respeto a la diversidad es uno de los valores básicos de este siglo y es el sentido último de la democracia pluralista”. Es decir, si los Estados-Nación asumen con responsabilidad la crisis del derecho a la que se están enfrentando los sistemas políticos latinoamericanos, se puede consolidar un sistema democrático pleno, capaz de garantizar a través de su institucionalidad, la materialización de los derechos humanos para todos, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas; lo que traería como consecuencia inmediata un fortalecimiento de las identidades étnicas nacionales, generando un espacio de encuentro para la interculturalidad. Vale destacar que si la igualdad, la diferencia y la interculturalidad están bien definidos en un marco jurídico donde los Derechos Humanos están visibilizados para todos, las malas prácticas como el genocidio y la discriminación irán desapareciendo.

³⁶⁵ Así lo plantea Gómez, M. (2000) en “Lo que debe usted saber de la iniciativa de la COCOPA”, Alertanet en derecho y sociedad.

³⁶⁶ IZKO, X.: “Etnopolítica y costumbre en los Andes bolivianos” en Derecho, pueblos indígenas y reforma del Estado, Abya Yala, 1993, págs. 183-206.

3.5. Conclusiones

Res nullius debe comprenderse como un principio que desde la antigüedad ha sido parte del derecho natural, lo que invita a analizarlo primero, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, y segundo, desde las políticas públicas desarrolladas por el Estado Venezolano.

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y las demás oficinas ministeriales relacionadas con los pueblos indígenas, ejecutan actividades de carácter asistencialista e ideológico, por lo que deberían diseñar y materializar políticas públicas que representen la diversidad cultural indígena para poder atender oportunamente las necesidades de las comunidades indígenas del país.

La agresión y la violencia tienen muchas manifestaciones. Cuando el Estado venezolano y su gobierno bajo una autodenominación revolucionaria y bolivariana, invierte grandes cantidades de dinero en integrar a las comunidades indígenas a la revolución y los objetivos del plan de la patria, evitando crear las condiciones para crecer la autonomía indígena en sus territorios ancestrales a través de sus usos y costumbres; se las está disminuyendo en beneficio del factor político. Pareciera que en el fondo es un etnocidio en el que se usa la violencia del Estado para integrar a los pueblos indígenas a la sociedad nacional y assimilarlos.

Los territorios indígenas y sus recursos naturales, no son para los indígenas un instrumento para el desarrollo, ni algo de lo que puede disponerse sin control, tampoco como un mero recurso económico. El territorio es el referente principal asociado a los fundamentos culturales que hacen posible la vida del pueblo o de la comunidad indígena. En este sentido, no puede estar desvinculado el principio *res nullius* del concepto de territorio en tanto que éste último culturalmente representa un factor de identidad.

El fortalecimiento de la interculturalidad, del encuentro con el otro, puede hacer posible la promesa democrática de la igualdad y la diferencia. Si los ciudadanos y fundamentalmente las instituciones del Estado entendieran ampliamente la interculturalidad y la diversidad existente en Venezuela, la ocupación, y por tanto la violencia y los desplazamientos, se reducirían notablemente. Es urgente una concientización nacional hacia una cultura que es diferente y propia a la vez, diferente en la medida de que está representada y sigue viva por los pueblos indígenas que resisten, y propia, entendiendo que lo indígena también es venezolano y por tanto merece respeto.

El principio *res nullius* responde a formas de ocupación y posesión ilegal donde está presente la violencia estatal a través de mecanismos coercitivos para el desplazamiento. En otras palabras la imposición del fuerte frente al débil.

La explotación indiscriminada de los recursos naturales produce contaminación del agua, destrucción de hábitats indígenas, agresiones ecológicas en bosques y llanuras, violencia, enfermedades, colapso de servicios y desplazamiento de las comunidades indígenas.

En cuanto a la ocupación y el desplazamiento se entiende que son procesos dados cuando un grupo social determinado se ve obligado a trasladarse de un lugar a otro afectando su modo de vida, produciendo claramente una fragmentación social, política y cultural.

En el caso venezolano, con todo el ordenamiento jurídico a favor de los indígenas y con la existencia de todo un aparato burocrático indigenista, no se puede controlar circunstancias como la minería ilegal. Se ha llegado a la conclusión de que hay factores que determinan la respuesta. Primero, la corrupción reflejada en las actuaciones de los cuerpos de seguridad; segundo, la ineficiencia de las instituciones del Estado para atacar el problema; tercero, los constantes procesos electorales en Venezuela que han hecho que por la intención del gobierno y de la oposición por captar el voto indígena, se haya generado un discurso de promesas evitando la toma de decisiones claras y concretas

sobre el tema, y, finalmente, la pobreza que contribuye a la apertura minera. Finalmente, la violencia política prevalece como el uso premeditado de la fuerza siempre bajo una motivación interesada.

Capítulo IV.

Entre la soberanía y la libre determinación: *res nullius* y sus repercusiones en las formas de vida indígena en Venezuela.

El reconocimiento de la cuestión indígena en Venezuela ha sido motivo de múltiples debates desde la ANC de 1999. Los pueblos indígenas de Venezuela, después de un largo proceso de organización y consenso, entregaron sus propuestas al Presidente de la Asamblea Luis Miquilena el siete de septiembre de 1999 en el Palacio Legislativo. El mismo día presentaron a Noelí Pocaterrea (wayuu), Guillermo Guevara (jivi) y José Luis González (pemón) como “los portavoces legítimos de los dolores y las esperanzas de los indígenas”³⁶⁷, al ser sus representantes en la ANC y por tanto los responsables de hacer escuchar los problemas, exigencias y expectativas que se tenían de la nueva Constitución y en definitiva de la nueva refundación de la República. Las propuestas fueron novedosas y amplias, abarcaban temas como el referido a que el Estado Nación debía reconocerlos como pueblos, tomando en cuenta todos los elementos históricos, sociales y culturales que eso significa; lo que en consecuencia traía una propuesta más importante: la del reconocimiento de Venezuela como un país multiétnico y pluricultural. Otros temas incluidos en las propuestas indígenas eran territorio, autonomía e identidad cultural; lo que se explica en que por un lado, como ya se ha visto, los pueblos indígenas tienen una relación especial con el territorio que habitan, en el que es posible desarrollar sus formas de vida, sus organizaciones sociales, económicas y culturales; y, por el otro, la autonomía, que es necesaria para administrar sus territorios y sus recursos en concordancia con su propia identidad cultural, entendiendo el dialogo permanente que debe existir con el Estado Nación para actuar a derecho de acuerdo con la Constitución y demás leyes de la República.

³⁶⁷ GARCÍA, J.: “Los Pueblos Indígenas y la Constituyente” en SIC, núm. 619, 1999, pág. 392

Además, los pueblos indígenas exigían la propiedad colectiva de sus tierras, la educación intercultural bilingüe, el respeto y reconocimiento por su medicina ancestral, el reconocimiento a sus autoridades legítimas y la posible doble nacionalidad para los pueblos fragmentados por las fronteras nacionales. Ahora bien, una vez que se presentó la propuesta indígena frente a la plenaria de la ANC, empezó un debate – en nuestra opinión inacabado – sobre los derechos indígenas y la oposición a sus exigencias. Uno de los constituyentes más vocales en su oposición a la propuesta de los indígenas fue Jorge Olavarría³⁶⁸, quien dejó clara su postura con respecto a la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, a través de las declaraciones que daba a los medios de comunicación en las cuales afirmaba “que el capítulo VIII de la Constitución se había hecho desestimando las calificadas opiniones que advirtieron que con ello, el Estado venezolano, sin razón, justicia o necesidad alguna otorgaba a los pueblos indígenas que habitan territorio venezolano, derechos que hacen posible su ejercicio al derecho a la libre determinación, abriendo las puertas a su independencia como Estados soberanos (...) A partir de allí las etnias venezolanas solo les falta invocar su derecho a la libre determinación, diseñar una bandera, escribir un himno, demarcar su territorio si es que ya no lo está, crear un gobierno y escribirle una carta al Secretario General de las Naciones Unidas pidiendo su admisión como Estado independiente (...) Los venezolanos somos ahora de dos clases: los indios y todos los demás (...) A los indios que apenas llegan al 1,4% de la población se les ha reconocido la propiedad cuasi soberana de más de 50% de todo el territorio nacional (...) La secesión de Estados soberanos será una posible consecuencia (...)”³⁶⁹. Así, pues, analizando el argumento de Olavarría, se advierte que el elemento clave de su preocupación es la posibilidad del reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas y la dimensión y alcance de su contenido³⁷⁰.

³⁶⁸ Olavarría fue Embajador de Venezuela, Diputado en el Congreso y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.

³⁶⁹ Cfr. Con el diario de circulación nacional “El Universal” del primero de noviembre de 1999, cuerpo 1, pág. 2.

³⁷⁰ El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas está consagrado en el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) el cual establece lo siguiente: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultura.”

Remiro (2007) ha dicho que “hasta ahora ningún representante de grupos indígenas ha reivindicado formalmente un derecho de separación del Estado. Todo lo contrario, han entendido que la libre determinación de los indígenas asume su vertiente interna, que se concreta en el autogobierno (con una doble expresión: territorial y personal) dentro del Estado cuya integridad territorial ha de ser respetada.”³⁷¹ No obstante, la CRBV (1999) menciona en cinco oportunidades a la libre determinación, pero ninguna de las veces la contextualiza en el tema que nos interesa³⁷², por tanto las declaraciones de Olavarria estaban fundamentadas en una preocupación sobre algo que no se había establecido expresamente en el texto constitucional³⁷³.

Por ende, parece que desde 1999 hasta la actualidad, el problema más importante con respecto a la cuestión indígena en Venezuela está entre el temor que se tiene a “perder soberanía” con la demarcación de los territorios indígenas, y, a “la fragmentación del Estado” si se materializa el derecho a la libre determinación. Es así como con la reconfiguración de la *res nullius* para evitar demarcación y autonomía, se ha repercutido indiscutiblemente en las formas de vida indígena a través de procesos como la transculturación y la subordinación.

³⁷² Esto se verifica al ver que en el preámbulo afirma que la refundación de la República tiene entre otros objetivos promover el impulso y la consolidación de “la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos”; luego, entre los derechos irrenunciables del país se encuentra “la autodeterminación nacional”; después se establece que quienes cuentan con esta nacionalidad están obligados a “honrar y defender (...) la autodeterminación y los intereses de la Nación”; y, finalmente, en lo relativo a las relaciones internacionales, la Constitución establece que éstas se rigen, entre otros, por la libre determinación. La Delegación venezolana ante la OEA en la Sesión Especial del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2002 sobre este asunto explicó que: “la Constitución Bolivariana consagra los derechos a la libre determinación en ocho artículos, pero que los representantes indígenas no han reivindicado tal derecho sino más bien el derecho al libre desenvolvimiento”. Reafirmó que en el país, se reconoce el término pueblo, la propiedad colectiva y el libre desenvolvimiento a su administración y gestión y prometió presentar por escrito la posición del país en relación con la libre determinación. En ese sentido, promovió dos posibles vías: o bien la libre determinación en el ámbito interno o bien el libre desenvolvimiento.” Cfr. Actas de la Sesión Especial del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

³⁷³ No obstante en el DI es clara la diferencia entre la reivindicación de libre determinación por parte de los pueblos indígenas y de la autodeterminación por parte de los Estados.

4.1. Soberanía vs. demarcación.

4.1.1. Sobre la soberanía: aspectos generales

Etimológicamente soberanía significa lo que está por encima o sobre todas las cosas; del latín *super*: sobre y el latín *omnia*: todo, lo que significa que al menos en este primer acercamiento, la soberanía es el poder sobre todos los demás poderes. Abordar el tema de la soberanía no es algo sencillo, ya que el término responde a la teoría del Estado y se vincula directamente con el fortalecimiento del derecho constitucional. Con la evolución del término “soberanía”, ha aparecido el Estado soberano como independiente y supremo. En primer lugar, es independiente debido a que se encuentra en igualdad de condiciones con respecto a los demás Estados, y, en segundo lugar, es supremo ya que su poder es ejercido sobre los individuos que hacen vida dentro de sus fronteras estatales.

La soberanía, según Coloma (1976), es “una prerrogativa del Estado moderno, en cuanto éste es sociedad política perfecta. Tiene una doble manifestación: hacia dentro o respecto a los individuos y grupos intermedios que integran el Estado en cuestión (soberanía interna); hacia fuera o respecto de los demás Estados soberanos (soberanía externa).” En el aspecto interno del Estado Nación Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 5 de la CRBV (1999), la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público, entendiendo que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Por tanto, la soberanía le atribuye al Poder Público la potestad suprema de coordinación de los poderes intermedios y de los intereses particulares en vistas a la consecución del bien común, para lo cual goza de la potestad legislativa, coactiva y punitiva.³⁷⁴ En cuanto al aspecto externo, la soberanía confiere al Estado una personalidad jurídica, que le sitúa en plan de igualdad respecto a los demás Estados, fundamentando entre otras cosas el

³⁷⁴ COLOMA, J. (1976): *Léxico de política*, Ed. Laia, Barcelona, pág. 171

principio de no intervención, según el cual ningún Estado puede entrometerse en los asuntos internos de otro³⁷⁵.

Entonces la soberanía comprende una serie de competencias reguladas que el DI ha atribuido históricamente al Estado Nación y que éste las ejercita en independencia e igualdad con respecto a los demás Estados. La doble manifestación de la soberanía, hacia dentro y hacia fuera, permite la coexistencia de los Estados cada uno con sus propias características políticas, sociales, económicas y culturales; produciendo la necesidad de normas que regulen la distribución de competencias entre ellos. De las dos manifestaciones de la soberanía, la primera que encontró un reflejo teórico fue la soberanía hacia fuera, o soberanía externa, ya que según autores como Ferrajoli (1999) los historiadores del DI piensan que sus primeras formulaciones se remontan, junto con el nacimiento del DI moderno y conectan su origen a una exigencia eminentemente práctica como era la de ofrecer un fundamento jurídico a la conquista del Nuevo Mundo en los tiempos inmediatamente posteriores al descubrimiento³⁷⁶.

Allan Brewer Carías (2000) establece una reformulación del concepto de soberanía con el objetivo de asegurarla en el marco de la comunidad internacional diciendo que “la soberanía fue la que permitió al Estado ser Estado y, además, luego el republicanismo. Con las revoluciones del siglo XVIII la soberanía pasó de un monarca absolutista al pueblo o a la Nación en los términos de la Revolución Francesa,

³⁷⁵ El Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de Naciones Unidas establece que: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.” A través de éste artículo, Naciones Unidas insta a todos sus Estados Miembros a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. De igual manera, en el mismo artículo, (2.7) Naciones Unidas establece que: “ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII” El principio de no intervención es en otras palabras, el derecho de los Estados de dirigir sus asuntos internos sin intervención extranjera, lo que es reconocido por los Estados como un principio válido y obligatorio en sus relaciones internacionales.

³⁷⁶ FERRAJOLI, L. (1999): *Derechos y garantías; la ley del más débil*. Trotta, Madrid, 1999, 180 pp.

comenzando a ejercérsela mediante representantes. De allí la idea de la democracia representativa como régimen político.”³⁷⁷

La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados a través del Informe adoptado en diciembre de 2001³⁷⁸, indica que “la soberanía es algo más que un principio funcional de las relaciones internacionales. Para muchos Estados y pueblos supone además un reconocimiento de su igual valía y dignidad, una protección de su identidad singular y su libertad nacional y una afirmación de su derecho a configurar y determinar su propio destino. Por ello, el principio de la igualdad soberana de todos los Estados establecido en el derecho internacional constituye uno de los pilares de la Carta de las Naciones Unidas”.

En la actualidad, el Estado venezolano, soberano, con territorio, población y gobierno, reacciona frente a reivindicaciones territoriales, debido a que no ha entendido el por qué y el para qué los pueblos y comunidades indígenas exigen sus territorios. En el caso venezolano, subrayando que la soberanía reside en el pueblo, los indígenas pueden ser escuchados en sus exigencias y el Poder Público debe dedicarse a diseñar políticas públicas para poder llevar, entre otras cosas, procesos de demarcación con la participación de los pueblos y comunidades indígenas y cumplir, por tanto, con lo establecido en la Constitución y la Ley. Así, la paz puede lograrse mediante el derecho, en la medida en la que la soberanía, representada en el Poder Público, otorgue garantías jurisdiccionales contra las violaciones de DDHH en el interior del Estado Nación.

4.1.2. Soberanía territorial como competencia del Estado

Las competencias otorgadas por el DI a los Estados, tienen una división tripartita referida a las dimensiones territorial, marítima y aérea. Sin embargo, para interés de

³⁷⁷ BREWER, A.: “América Latina: retos para la Constitución del siglo XXI” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2000, Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer, 2000, p. 14

³⁷⁸ Puede consultarse en versión electrónica en la siguiente dirección:
<http://www.iciss.gc.ca/pdf/Rapport-de-la-Comision.pdf>

nuestro estudio, se tomará específicamente a la territorialidad como competencia del Estado. Dentro de la competencia territorial, el gobierno del Estado autoriza y desarrolla el tratamiento que debe dar a todos los individuos que hacen vida dentro de sus fronteras, a través de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial³⁷⁹.

Es en el territorio desde donde se afirma que la soberanía es plena, exclusiva e inviolable. Remiro (2007) afirma que la soberanía territorial es plena debido a que las competencias del Estado permanecen indeterminadas por materia y cada cual es libre de fijar su alcance. Por su parte, Pastor (2008) indica que la función de la soberanía territorial es permitir al Estado el cumplimiento de sus funciones y como estas consisten en asegurar la satisfacción de los intereses de una comunidad determinada, se entiende que la soberanía es plena y que los límites a la misma no se presumen³⁸⁰. Es exclusiva, porque el Estado monopoliza, en principio, todos los poderes, lo que implica la inviolabilidad de las fronteras y la obligación para los demás Estados de abstenerse a ejercer el poder en esos espacios, con la excepción lógica y natural de que el Estado haya dado su consentimiento dentro de los límites que permite el DI. Así, no se admite el ejercicio de competencias territoriales de un Estado sobre el territorio de otro, a lo que hay que añadir la obligación que tienen los Estados de no utilizar su territorio para fines contrarios a los derechos de otros Estados. En esta misma dirección afirma la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía a través del Informe del 2001 que “Todo Estado soberano está capacitado por el derecho internacional para ejercer una jurisdicción exclusiva y total dentro de sus fronteras territoriales y los demás Estados tienen el deber de no intervenir en los asuntos internos de otro Estado soberano. Si no cumplen con ese deber, el Estado afectado tendrá a su vez derecho a defender su integridad territorial y su independencia política.”

³⁷⁹ En el caso venezolano se tratan dos poderes adicionales: electoral y ciudadano.

³⁸⁰ La Corte Internacional de Justicia en el caso de Derecho de Asilo entre Colombia y Perú (1950) hace referencia al ejercicio de las funciones del Estado en la p. 274: “*In the case of extradition, the refugee is within the territory of the State of refuge. A decision with regard to extradition implies only the normal exercise of the territorial sovereignty. The refugee is outside the territory of the State where the offence was committed, and a decision to grant him asylum in no way derogates from the sovereignty of that State.*” Puede verse el documento entero en: <http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf>

Ahora bien, no puede entenderse que la soberanía tiene un poder ilimitado por el hecho de ser plena, exclusiva e inviolable, es por ello que el DI ha puesto límites que, aunque dependen del ejercicio mismo de la soberanía, obligan al Estado a cumplir con las normas del derecho consuetudinario y con las normas de DI imperativo como las que están relacionadas con la promoción y protección de los DDHH³⁸¹, así, queda claro que la soberanía del Estado tiene limitaciones en cuanto al tratamiento que debe dar a las personas que habitan su territorio.

La soberanía como competencia territorial del Estado y sus límites en cuanto a las normas imperativas de DI y las garantías constitucionales; en el caso de Venezuela debe hacerse un llamado de alerta, debido a que la sociedad nacional sigue siendo testigo de la militarización y de la actividad de terceros en los territorios indígenas, muchas veces sin explicación y en todos los casos sin consulta. Con esta práctica se ignoran los derechos reconocidos a favor de los pueblos indígenas en instrumentos jurídicos internacionales y los consagrados en el texto constitucional de la propia República, dejando de lado que las relaciones entre los efectivos militares –especialmente de la Guardia Nacional–, los terceros interesados y los pueblos indígenas se caracterizan por ser conflictivas y en ocasiones violentas, lo que produce resultados separados del derecho y por tanto injustos.

4.1.3. La soberanía estatal frente a la promoción de nuevos valores

El concepto de soberanía estatal establecido y definido en la comunidad internacional, con su carácter imperativo y los principios que dependen directamente de él como son la organización política, económica y social, la integridad territorial y la no intervención en los asuntos de terceros Estados, como afirma Riquelme (2005), se ha visto comprometido en los últimos años en su operatividad como resultado de la ascendencia de otros principios, muy particularmente el de la libre determinación de los

³⁸¹ La imperatividad de los DDHH es inherente a la naturaleza misma de los DDHH, debido a que ese catálogo normativo, es la expresión positiva de la dignidad que intrínsecamente le corresponde a cada individuo; motivo por el cual los Estados están obligados a respetarlos y garantizarlos.

pueblos³⁸². Autores como M. Paz Andrés lo han señalado como un principio “que se identifica con la libertad y por ello levanta pasiones que intuitivamente se vinculan por quienes lo esgrimen con el derecho internacional donde pretenden encontrar legitimidad a sus pretensiones”³⁸³. Al mencionar “libre determinación de los pueblos” inmediatamente se recuerdan las reivindicaciones de algunas minorías étnicas o nacionales de Europa que invocaron el derecho de secesión para ejercer su libre determinación cuando finalizó la Guerra Fría.

El caso es que, independientemente de que se trate de la libre determinación de los pueblos en el caso de las minorías nacionales de Europa, o que se trate más bien de la libre determinación de los pueblos indígenas, lo que se intenta verificar es si desde el DI se ha modificado el concepto de soberanía frente al valor de la libre determinación, a través de argumentos jurídicos, o si se han dado respuestas contextualizadas desde lo político. Con respecto al temor de que los pueblos (coloniales) invoquen el derecho de secesión, es importante decir que en el DI, éste ni se reconoce, ni se prohíbe, a los pueblos en lo concerniente a la libre determinación³⁸⁴. Así lo establece el artículo 1 en su numeral 1º común a los Pactos Internacionales de 1966 de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, cuando dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”; igualmente, la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional de 1970³⁸⁵ sostiene que “En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre

³⁸² RIQUELME, R. (2005): *Derecho Internacional. Entre un orden global y fragmentado*, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, pág. 159. También puede verse Remiro, A.: “Desvertebración del Derecho Internacional en la sociedad internacional globalizada” en *Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional* (CEBDI), vol. V, 2001, pp. 45-381.

³⁸³ ANDRÉS, P.: “La libre determinación de los pueblos en la nueva sociedad internacional” en *Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional*, Aranzadi, Pamplona, vol. I, 1998, pp. 113 y ss.

³⁸⁴ Es importante subrayar que quienes han invocado el derecho de secesión en contiendas políticas para satisfacción de sus propios intereses, lo han hecho para apoyarse en el DI siguiendo los elementos genéricos con los que se ha mostrado el principio de libre determinación en los distintos instrumentos internacionales.

³⁸⁵ Cfr. Doc. A/RES/2625 (XXV)

determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.”³⁸⁶

Veinte años después, con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 y el documento internacional resultante de la misma: *Vienna Declaration and Programme of Action* adoptado el 25 de junio de 1993, se esclarecía un poco más lo relacionado a la libre determinación de los pueblos y el derecho de secesión, cuando en su apartado I numeral 2º establecía:

“2. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status, and freely pursue their economic, social and cultural development.

*Taking into account the particular situation of peoples under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, the World Conference on Human Rights recognizes the right of peoples to take any legitimate action, in accordance with the Charter of the United Nations, to realize their inalienable right of self-determination. **The World Conference on Human Rights considers the denial of the right of self-determination as a violation of human rights and underlines the importance of the effective realization of this right.***

*In accordance with the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in accordance with the Charter of the United Nations, this shall not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples and thus possessed of a Government representing the whole people belonging to the territory without distinction of any kind.”*³⁸⁷

³⁸⁶ La Carta de Naciones Unidas en su artículo 1, numeral 2º establece: Los propósitos de las Naciones Unidas son: 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.

³⁸⁷ Resaltado nuestro. La Declaración puede leerse completa en:
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>

Con el mismo espíritu, la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas, adoptada por la AGNU el 24 de octubre de 1995, en el segmento dedicado a la Paz, manifiesta: “Seguir reafirmando el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, teniendo en cuenta la situación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras, y **reconociendo el derecho de los pueblos a tomar medidas legítimas, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminadas a realizar su derecho inalienable a la libre determinación. Nada de lo anterior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna**”³⁸⁸.

Frente al contenido de los documentos internacionales mencionados hay que hacer varios comentarios. Es cierto que la comunidad internacional y, en este caso particular, la ONU ha manifestado su interés en el reconocimiento y respeto por parte de los distintos Estados a la libre determinación de los pueblos; sin embargo, pareciera que, en protección de la soberanía e integridad territorial de los Estados, ha mencionado y amparado el derecho a desarrollar y ejercer la libertad cultural, religiosa y lingüística³⁸⁹,

³⁸⁸ Resaltado nuestro. Cfr. Doc. A/RES/50/6.

³⁸⁹ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

Art. 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Art. 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Art. 27: En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás

pero no ha tenido el mismo tratamiento con el derecho de los pueblos a su propia condición política, económica y social, lo cual es comprensible, considerando que los Pactos de 1966 tenían como propósito evitar secesiones de Estados a través de la libre determinación de los pueblos. Asimismo, la Declaración de derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, adoptada por la AGNU en 1992³⁹⁰, a pesar de mostrar tímidamente la colectividad de los derechos de las minorías³⁹¹, aclara rápidamente en el artículo 8 numeral 4 que: “Ninguna de las disposiciones de la presente declaración podrá ser interpretada como si permitiese cualquier actividad contraria a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, incluyendo/incluida la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados”.

Se puede concluir en este punto que, aunque la comunidad internacional reconoce y aprueba el principio de la libre determinación de los pueblos, sigue considerando al Estado en su integridad territorial como el sujeto principal al que hay que proteger de secesiones y por tanto la soberanía sigue siendo un elemento protagonista en la actividad de los Estados en la comunidad internacional. Sin embargo, no hay una prohibición expresa a que dentro de cada ordenamiento jurídico interno de los Estados se permita un tipo de organización distinta en atención a los pueblos que hacen vida en ellos, en este caso, las disposiciones aplicables no dependerán del DI sino más bien de la Constitución y demás leyes según sea el caso.

miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

³⁹⁰ Doc. A/RES/47/135.

³⁹¹ Art. 3.1: 1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se enuncian en la presente Declaración, individualmente así como en comunidad con los demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna.

4.1.4. La vigencia del derecho: soberanía y globalización

Es sabido que el derecho es el conjunto de normas que regulan la vida del hombre en sociedad. Celso en el siglo I d.C. afirmaba *ius est ars boni et aequi*³⁹², Ulpiano en el siglo II d.C sostenía los *tria precepta iuris*³⁹³. De Roma a nuestros días muchas cosas han cambiado, sin embargo, el derecho sigue siendo creación del hombre en tanto que está llamado a vivir en sociedad; por tanto, puede afirmarse que el derecho significa todavía la máxima expresión de la convivencia social.

El derecho según Nucete (2007), es producto de la condición humana y está intrínseco en ella porque responde a una necesidad natural. Así, resulta siempre instrumento del débil, de aquel que requiere protección para enfrentar fuerzas superiores, que pueden ser las de un hombre o las de un grupo institucionalizado³⁹⁴. Sólo cuando sus fines son cambiados, puede ser el instrumento del más fuerte, sirviendo de fundamento al opresor. Pero entonces no es derecho, en tal caso, es sólo corrupción de la ley³⁹⁵.

A medida que el derecho fue perfeccionándose, se impuso a las naciones y dentro de cada sociedad a todos sus integrantes, incluso a quienes ejercían la autoridad y por ende al mismo Estado, porque la voluntad del gobernante está también sujeta en la norma, como se estableció en el Digesto *quod principi placuit, leges habet vigorem*. En la actualidad, el derecho sigue vigente en la comunidad internacional ya que ha hecho posible la solución pacífica de algunas controversias entre los Estados y ha desarrollado todo un orden normativo que contempla gran número de temas de interés entre los Estados y entre sus sociedades y otros actores que han ido emergiendo en el contexto del DI.

³⁹² Lit. El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo.

³⁹³ Lit. Vivir honestamente, no hacer daño al prójimo y dar a cada uno lo suyo.

³⁹⁴ NUCETE, J. (2007): La lección aprendida. Vigencia del Derecho, Ed. Publicaciones Vicerrectorado Académico, Mérida, pág. 17.

³⁹⁵ V. *Summa Theologica* de Santo Tomás de Aquino.

Sin embargo, en estos tiempos pueden surgir dudas sobre la vigencia de los postulados del DI y del derecho interno, al estar dándose hoy dinámicas de cambio en la sociedad mundial, particularmente la globalización. El proceso de globalización está directamente relacionado con la creciente interdependencia como transformación en la sociedad internacional³⁹⁶. Zali Laïdi (1998) define a la globalización como un movimiento planetario en que las sociedades renegocian su relación con el espacio y el tiempo por medio de concatenaciones que ponen en acción una proximidad planetaria bajo su forma territorial y temporal³⁹⁷. Es por ello que la globalización como fenómeno de distintas dimensiones pudiera poner en duda la vigencia del derecho en cuanto a la soberanía estatal, ya que la globalización, según Celestino del Arenal (2001), se expresa “a través de la intensificación, inmediatez e interdependencia de las interacciones políticas, económicas, científico-técnicas, sociales y culturales transfronterizas, entre los distintos actores, estatales y transnacionales, afectando de forma desigual a los diferentes subsistemas internacionales, regiones y actores, provocando interdependencias y dependencias crecientes de todo tipo y conformando una sociedad mundial nueva”.

Asimismo, la globalización, a través del desarrollo tecnológico ha hecho que las fronteras ya no sean un impedimento ante nuevas oportunidades sociales y culturales. Así lo entiende la OIT cuando adopta en junio del año 2008 la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa³⁹⁸, en la que entendiendo que la globalización es un proceso “caracterizado por la difusión de nuevas tecnologías, los

³⁹⁶ La creciente interdependencia que se ha generado en las relaciones internacionales a todos los niveles y en todos los ámbitos, presenta importantes novedades que la hace distinta a cualquier dinámica que haya existido antes. La noción de interdependencia es compleja, pues tiene que ver con una mutua dependencia, en la que se reparten los costos entre los actores involucrados, reduciéndose la autonomía de los mismos. No obstante, lo anterior no impide que de la interdependencia no pueda derivarse también beneficios para las partes. Así, cuando los beneficios sean mayor a los costos, la interdependencia favorece a la cooperación. Véase: DEL ARENAL, C. (2001): La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto para la teoría y para la política. Vitoria-Gasteiz, 2002, págs 17-86.

Véase también: KEOHANE, R: “The Demand for International Regimes” en *International Organization*, Vol. 36, núm. 2, Spring 1982, págs. 325-355.

³⁹⁷ V. LAÏDI, Z. (1998): *A world without meaning: the crisis of meaning in international politics*. Psychology Press.

flujos de ideas, el intercambio de bienes y servicios, el incremento de los flujos de capital y financieros, la internacionalización del mundo de los negocios y de sus procesos y del diálogo, así como de la circulación de personas, especialmente de trabajadoras y trabajadores, está modificando profundamente el mundo del trabajo”; propone una serie de directrices a seguir por empresas públicas y privadas con la intención de que los trabajadores y trabajadoras tengan mejor preparación en cuanto a sus competencias y habilidades y en ese sentido las herramientas de trabajo sean más calificadas con la intención última de repartir los logros de la globalización de una manera más justa entre los trabajadores a nivel mundial. No obstante, a pesar de los esfuerzos, la globalización no ha podido intervenir en la erradicación de los conflictos y divisiones entre los Estados, los pueblos y los seres humanos³⁹⁹. De igual manera, la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción adoptado por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995) considera que “la globalización abre nuevas oportunidades para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo de la economía mundial, particularmente en los países en desarrollo (...) Al mismo tiempo, el rápido proceso de cambio y ajuste se ha visto acompañado de un aumento de la pobreza, el desempleo y la desintegración social (...)”⁴⁰⁰

Por tanto, hay tres afirmaciones que hacer. Primero, la globalización no ha ido en menoscabo de la vigencia del derecho interno o internacional, al contrario, ha hecho posible que los Estados convivan en una “aldea global” más moderna y más inmediata; segundo, indudablemente la globalización ha contribuido positivamente en cuanto a las comunicaciones entre los Estados y fundamentalmente entre las personas de todo el mundo, sin embargo, la globalización también ha ido dejando secuelas en los sectores menos favorecidos, el compromiso de los Estados en cuanto a eso debe estar dirigido a planificar mejor sus estrategias y proteger a los más vulnerables; tercero, a pesar de las interdependencias y dependencias, la soberanía territorial de los Estados todavía es ejercida en un espacio determinado con fronteras como límites al otro Estado y este concepto no es susceptible de modificaciones arbitrarias, al menos no por ahora.

³⁹⁹ Op. cit. pág 163.

⁴⁰⁰ Doc. A/CONF.166/9.

Pero, en un intento de que la discusión del punto salga un poco de lo estrictamente jurídico vale plantearse desde la historia y la filosofía política lo siguiente: ¿es la globalización un proceso de reciente data?, en todo caso, ¿son sus aspectos negativos algo nuevo e inesperado? autores como Dussel (2001) sostienen que muchos de los momentos del sistema que hoy se globaliza tienen antigua historia⁴⁰¹. Explica el autor que la “invasión” inesperada sobre las culturas amerindias, dieron a la periférica Europa una “ventaja comparativa” sobre la China, desplegando “la primera Modernidad” humanista e imperial por España (desde la unidad de la nación hispánica en torno a Castilla y Aragón en 1476), con su puerto de Sevilla como centro económico más importante, marcando un precedente único e histórico a través del capitalismo mercantil bajo la hegemonía española y después holandesa⁴⁰². Lo anterior se puede explicar -tal y como lo plantea Dussel (2001)- desde la “negación del otro” de la siguiente manera:

- a. La irracionalidad de la violencia como origen. El Sistema-Mundo moderno se expande desde el siglo XV siempre a través de una violencia inicial constitutiva de la relación entre sistemas, culturas, naciones, personas. La Europa moderna, desde la invasión de Amerindia en 1492 nunca inició el proceso de inclusión de la otra cultura. “Conquistó” siempre y únicamente a través de las armas.
- b. La explotación económica como estructura. El dominio despótico sobre los cuerpos de los nuevos siervos coloniales, era estructurado en la simple extracción, robo o posesión ilícita de todas las riquezas explotables que la dominación militar permitía. Como lo vimos anteriormente, a los indios se les llevaba al sistema de la encomienda sin salario alguno, al trabajo de la tierra y las minas, en un sistema de explotación frente a un mercado de metales y productos tropicales que estaba en pleno crecimiento.
- c. La dominación política metropolitana. Explotación económica estructural, dominación militar, y muy especialmente “domesticación” cultural.
- d. Hegemonía cultural del Sistema-Mundo. Desde el siglo XV comienza la penetración cultural en las culturas ajenas a Europa.

⁴⁰¹ DUSSEL, E. (2001): *La otra modernidad. Hacia una Filosofía Política Crítica*, Ed. Desclée de Brower, Bilbao.

⁴⁰² *Íbidem*.

- e. La paradoja de la “exclusión” en la globalización. Después de 500 años de instalación, desarrollo y culminación global del Sistema-Mundo, dos grandes límites absolutos se ciernen sobre toda su estructura. Primeramente, la destrucción ecológica, irreversible proceso no-intencional y efecto de una devastadora, tecnología producto de un criterio de elección a corto plazo: el aumento de la tasa de ganancia. En segundo lugar, el empobrecimiento de la mayoría de la población.

4.1.5. Del título a la soberanía territorial a los límites de la summa potestas

Como se ha visto hasta ahora, los Estados cuentan con un reconocimiento del DI para ejercer sus competencias en un territorio determinado. Jurídicamente hablando puede afirmarse que los Estados cuentan con un “título” para poder ejercer su soberanía territorial. Esto es importante, entre otras cosas, puesto que el título puede resolver altercados que ocurran entre un Estado y otro sobre límites fronterizos, pérdida de territorio, etc. En este sentido, el título afirma los derechos y las obligaciones de quien lo ostenta, y calma las pretensiones territoriales del otro Estado interesado.

Hay que tener claro que el título es el resultado de los modos de adquirirlo, es decir, de los procesos jurídicos que el DI ha reconocido como capaces y suficientes para la creación de un título a la soberanía territorial. En el capítulo II se pudo evidenciar cómo la obtención del título de soberanía con respecto a los territorios de América tiene su origen en la Conquista a través de la ocupación con el uso del principio romano *res nullius*. El DI de la época entendió que la adquisición al título de la soberanía territorial podía hacerse mediante la consideración de que un territorio no estaba sujeto a la autoridad de un tercer Estado o de un príncipe cristiano y por tanto podía desplegarse sobre él la ocupación y una posterior organización política, económica y social.

El caso es que, en la actualidad, medios como “la conquista” no son considerados válidos por el DI, pues el concepto incluye inmediatamente el uso de la fuerza que está prohibido expresamente por la Carta de Naciones Unidas, específicamente en el artículo 2.4, antes mencionado. Hoy, no se puede considerar a un determinado territorio *res*

nullius y, en virtud de ello, sólo se permite la ocupación como modo de adquisición de la soberanía, cuando se trata de tierras sin dueño y que no estén habitadas, pues la omisión de éste último aspecto, iría en detrimento del derecho a la libre determinación.

Frente a los cambios en la adquisición de soberanía en el DI, ¿qué sucede con la soberanía hacia dentro?, ¿puede el Estado considerar que parte de su territorio tiene la categoría de *res nullius* y actuar en consecuencia?, ¿es válido que la autoridad política del Estado ocupe o tome decisiones sobre territorios en los que habitan pueblos culturalmente diferenciados como los indígenas? En Venezuela la soberanía es un derecho irrenunciable de la Nación según lo establecido en el artículo 1 de la CRBV (1999); pero ¿hasta dónde puede llegarse alegando la protección de la soberanía?, ¿cuáles son los límites a la *summa potestas*?

Ya se decía anteriormente que los límites a la soberanía emanan de las normas imperativas de DI y de las propias garantías constitucionales. La soberanía del Estado no puede entenderse como libertad jurídica o política absoluta, al contrario, debe comprendérsele limitada por instrumentos como la Carta de Naciones Unidas y otros de DI. En este sentido, en el caso de los DDHH, la soberanía del Estado queda limitada y condicionada en cuanto al trato que debe darle a las personas y pueblos que se encuentran bajo su jurisdicción.

Efectivamente, el artículo 103 de la Carta establece lo siguiente: “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.” A través de este artículo la ONU hace referencia a uno de los principios fundamentales de la organización: el estímulo del respeto a los DDHH y a las libertades fundamentales de

todos sin ningún tipo de distinción; en concordancia con lo que la misma Carta señala en los artículos 55 y 56⁴⁰³.

En vista de lo anterior, en el caso que nos ocupa, la *summa potestas* queda limitada en primer lugar con los Tratados de DDHH que los Estados en ejercicio de su voluntad han aceptado y ratificado, asumiendo las obligaciones jurídicas internacionales que de ellos se desprenden, como por ejemplo, el compromiso relativo a su promoción y protección. En segundo lugar, la protección de la soberanía a través de la autoridad pública de un Estado no puede violar los instrumentos generales de DDHH, así como tampoco los instrumentos de DDHH de carácter especial, como son los relativos a los pueblos indígenas. Tal es el caso de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)⁴⁰⁴ que establece en su artículo 6: “Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación”. Asimismo, el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial de la ONU a través de la Recomendación General XXIII de 1997⁴⁰⁵, exhorta a los Estados Partes en su numeral 5º a que: “reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar,

⁴⁰³ Art. 55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:

- a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
- b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
- c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

Art. 56: Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55.

⁴⁰⁴ Doc. A/RES/2106(XX).

⁴⁰⁵ Doc. A/52/18.

controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios.”⁴⁰⁶

Brevemente podemos insistir por ahora, en que la soberanía estatal no es ilimitada; está regulada por normas de DI y de derecho interno y en ningún caso podrá oponerse frente a los individuos o frente a los pueblos en menoscabo de sus derechos fundamentales. Es responsabilidad de cada Estado Nación velar por el correcto proceder de sus funcionarios públicos e investigar y sancionar cuando estos infrinjan las normas establecidas. En Venezuela, es urgente que sean atendidas algunas irregularidades de la *summa potestas*, para que algunos procedimientos, como los concernientes a los pueblos y comunidades indígenas, puedan llevarse desde la justicia y el deber ser de las cosas. Es necesario para el país como un todo y para los pueblos indígenas como parte de ese todo nacional, que la impunidad cese, las violaciones a los DDHH se han convertido en parte de lo cotidiano, lo que llena de frustración a las víctimas fundamentalmente al ver que los órganos receptores de denuncias no hacen correctamente su trabajo y que luego los organismos judiciales no cumplen con elementos importantes como la celeridad del proceso.

4.1.6. Sobre demarcación: aspectos generales

Una de las reivindicaciones fundamentales de los pueblos indígenas a lo largo de su historia ha sido la lucha por la tierra. La demarcación es el principal mecanismo de garantía del derecho de propiedad territorial indígena, es obligación de los Estados la adopción de las medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un

⁴⁰⁶ U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev.7

mecanismo efectivo de delimitación y demarcación en búsqueda de materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Así lo ha entendido la CIDH dedicando un apartado de las Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos exclusivamente a la Delimitación y demarcación del territorio ancestral. Indica la CIDH que la demarcación de las tierras indígenas debe realizarse sin retardos y los Estados deben abstenerse de obrar en forma negligente o arbitraria frente a las solicitudes de demarcación territorial de las comunidades indígenas. Además, la CIDH explica claramente que los territorios indígenas debido a las características específicas de la propiedad colectiva, no pueden demarcarse siguiendo los mismos métodos usados para la titulación de la propiedad agraria o de otros sectores de la sociedad. Si un Estado reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas pero no planifica en un tiempo razonable una metodología acorde con la condición especial de la propiedad colectiva en cuanto que elemento cultural, no será suficiente y el Estado estaría faltando a su obligación de hacer. Por otro lado, la ONU a través de la DPPI (2007) establece en su artículo 27: “Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.” Esta disposición de la Declaración es cónsona con el artículo 14.2 del Convenio 169 (1989) que manifiesta: “2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.” En Venezuela la demarcación se ha entendido desde la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) como el proceso necesario para garantizar los derechos originarios de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus hábitat y tierras, el cual debe llevarse a cabo consultando y dando participación a los pueblos y comunidades indígenas y tomando en cuenta las realidades ecológicas, geográficas, toponímicas, poblacionales, sociales,

culturales, religiosas, políticas e históricas de los territorios. Como dijimos, se ha entendido, se ha convertido en derecho positivo, pero no existe todavía en la praxis.

4.1.7. Derechos territoriales indígenas en Venezuela: demarcación y fragmentación

En Venezuela, una vez reconocidos los derechos sobre los territorios que ancestralmente ocupan los pueblos indígenas, es imprescindible la realización previa de la demarcación del territorio para poder materializar dicho derecho⁴⁰⁷. Un elemento positivo en el país fue la aprobación de la Ley de Demarcación y Garantía de los Hábitats y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2001) que, como se pudo observar en el capítulo II, vio detenido su planteamiento inicial para el proceso de demarcación debido a que la CND sugería un procedimiento decisorio complicado. En vista de esto, la LOPCI (2005) amplía el alcance de la CND convirtiéndola en el órgano sobre el cual se edificaría entonces el proceso de demarcación con el apoyo del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. De esta manera, es en la LOPCI (2005) donde se encuentra establecido el proceso de demarcación para tierras indígenas en Venezuela, el cual, según la Ley se lleva a cabo en cuatro pasos: el inicio del procedimiento, la recolección de información para construir el expediente, cierre del procedimiento y finalmente la titulación colectiva. Al concluirse el lapso para la discusión del expediente de demarcación, la Comisión Nacional dentro de los cinco días hábiles siguientes debe pronunciarse mediante un dictamen de demarcación y titulación⁴⁰⁸.

Hay que aclarar que a pesar de que la LOPCI está vigente desde el año 2005; en el año 2011 se promulgó un Decreto Presidencial⁴⁰⁹ que le cedió la competencia de la

⁴⁰⁷ V. Procedimiento preconstitucional de demarcación de tierras en el Decreto número 3.273, del 29 de enero de 1999, que contiene el Reglamento para el reconocimiento de la propiedad sobre tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, en la Gaceta Oficial, número 5.305 extraordinaria del 1 de septiembre de 1999.

⁴⁰⁸ El título de propiedad deberá ser entregado por la Procuraduría General de la República en máximo 30 días hábiles.

⁴⁰⁹ Cfr. Decreto Presidencial Núm. 7.855 del 26/11/2010, Gaceta Oficial Núm. 39.624.

demarcación de los territorios indígenas al MPPPI⁴¹⁰; y, luego a través de una reforma parcial del Decreto⁴¹¹, a la Vicepresidencia de la República. Como consecuencia de ésta contradicción jurídica, no hay hasta el momento una regulación nueva y por tanto el proceso de demarcación se encuentra estancado.

El cuestionamiento importante en este momento debe ser: ¿cuáles son los resultados en materia de demarcación a dieciséis años de aprobada la Constitución Nacional?, ¿cómo es que está paralizado el procedimiento de la LOPCI si dicha ley tiene ya diez años en vigencia?, si la idea era cambiar un proceso por otro, ¿dónde están las orientaciones metodológicas, el reglamento o cualquier otro elemento indicativo para la demarcación por parte de la Vicepresidencia de la República?

El gobierno nacional, con todos los cambios institucionales que ha hecho en el tema de la demarcación, ha intentado hacer entrega de titulaciones sobre tierras para comunidades en un tiempo que no se compagina con la realidad de las comunidades indígenas ni con el desarrollo de la política pública del país. Afirma Aguilar en una publicación electrónica del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, que “la posibilidad de hacer de la demarcación un proceso *sui generis* en el país no está en los objetivos inmediatos que el gobierno tiene con respecto a los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela”. En este sentido “deslindar para fragmentar pareciera ser la consigna del gobierno”⁴¹² ya que ha sido el procedimiento que en la práctica ha intentado llevar a cabo, en vez de demarcar para fortalecer la seguridad territorial de los pueblos y comunidades indígenas y, en consecuencia, de Venezuela.

⁴¹⁰ El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas según sus objetivos estratégicos e institucionales también debe coadyuvar y participar en el proceso de demarcación y titulación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas.

⁴¹¹ V. Reforma Parcial al Decreto Presidencial 7.855.

⁴¹² Pareciera que como ocurrió en Nicaragua, el gobierno venezolano pretende llevar a cabo la demarcación de los territorios, con un mero proceso de deslinde como se hizo en la década de los sesenta con los terrenos que se entregaron a los campesinos a raíz de la reforma agraria del país, cuya metodología era entregar tierras siguiendo criterios de proporcionalidad y rendimiento económico.

La OEA lo ha explicado claramente en el Informe de la CIDH titulado “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, diciendo “la falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales, al impedir o dificultar el acceso de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios y el uso y disfrute de los recursos naturales que en ellos se encuentran, les coloca en una situación de vulnerabilidad extrema que incide directamente sobre sus demás derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, al agua potable y a la salud, entre otros”; además agrega el informe algo que el gobierno venezolano no ha efectuado y es “que **los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que el procedimiento de titulación, demarcación y delimitación de tierras comunales indígenas sea expedito, libre de excesivos rigores legales y de costos elevados, y a que la titulación efectiva de sus tierras se realice sin retardos, para así prevenir conflictos y ataques causados por los procesos de reivindicación territorial**”⁴¹³. Además, como ya se ha dicho antes, la (de) mora que tiene el Estado Venezolano con los pueblos indígenas en cuanto a la demarcación de sus tierras, los pone en situación de riesgo frente a los conflictos violentos, fragmentación comunitaria y posible transculturación con aumento de la subordinación o dependencia que generan entre otros, los megaproyectos de actividad extractiva. Asimismo, es oportuno recordar que la no demarcación de tierras indígenas incurre en violación del contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁴¹⁴.

Sin embargo, no hay que dejar a un lado los avances que se han logrado en la cuestión indígena venezolana. Actualmente existen elementos que permiten entender la dimensión del reconocimiento al derecho sobre el territorio de los pueblos y comunidades

⁴¹³ Resaltado nuestro. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076-1080.

⁴¹⁴ Art. 21:

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

indígenas y que sientan las bases para procesos efectivos de demarcación o autodemarcación.

Venezuela	
Población indígena	724.592 ⁴¹⁵ (2.7%)
Población no indígena	26.425.503 ⁴¹⁶ (97.3%)
Superficie nacional indígena	80% de la Guayana venezolana. Presencia mayoritaria en el Delta del río Orinoco. Presencia importante en el estado Zulia. Comunidades separadas en los estados Anzoátegui, Apure, Monagas y Sucre.
ABRAE	Creación de la Reserva de Biosfera Yanomami a través del Decreto 1.635 del 5 de junio de 1991. Actualmente adscrita a la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Poder Popular para el Medio Ambiente.

Tabla 11. Algunos datos demográficos sobre la población indígena en Venezuela.

Fuente: datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística y en el MPPMA. Tabla de elaboración propia.

Venezuela	
Legislación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenio 169 de la OIT (1989) ▪ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) ▪ CRBV (1999) ▪ Ley Orgánica para la ordenación del territorio (2007) ▪ Ley Orgánica del Ambiente (2007) ▪ LOPCI (2005) ▪ Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005) ▪ Plan Nacional de Ordenación del Territorio
Alcance del derecho reconocido	Derecho a su organización social, política y económica, derecho a sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones; derecho a su hábitat y derecho sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan; derecho sobre los recursos naturales

⁴¹⁵ Datos obtenidos del censo nacional de 2011.

⁴¹⁶ *Ibid.*

	pero no sobre el subsuelo. Derechos colectivos inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Procedimiento seguido	Como no ha habido demarcación de territorios indígenas en Venezuela, los procesos de autodemarcación se han hecho en: Alto Orinoco, Cuenca del Caura, Zona Hõti, Zona del Atabapo, Casiquiare y Río Negro y algunos sectores Uwõtuja en el Guamo. Para presentarlo ante las autoridades, el proceso debe llevar el mapeo y la constitución del expediente, con un documento descriptivo general del grupo, mapa o croquis con linderos, censo, acta de las comunidades avalando el proceso, informe histórico-antropológico, información sobre la presencia de terceros y los conflictos existentes.

Tabla 12. Legislación y alcance del derecho indígena en Venezuela.
Fuente: elaboración propia.

Estos elementos permiten constatar una vez más que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas cuenta con un ordenamiento jurídico favorable y con una institucionalidad creada para materializarlos. En este punto cabe preguntarse ¿podría ser el *res nullius* una de las causas del actual estancamiento en los procesos de demarcación? Desde nuestro análisis se han determinado algunos obstáculos para la materialización del derecho al territorio y la aplicación del principio *res nullius* se encuentra entre ellos; a saber:

- Nacionalismo.
- Temores relativos a la posible fragmentación territorial de la República.
- Creencia de que se atentará contra la soberanía desde los espacios territoriales indígenas.
- Percepción de la cuestión indígena como algo histórico.
- Actuación paternalista del Estado ya que considera que los pueblos indígenas no son capaces de tomar sus propias decisiones ni de autogestionarse.
- Escasa información jurídica en las comunidades indígenas.
- Numerosos trámites burocráticos.
- Arbitrariedad y desconocimiento del capítulo VIII constitucional por parte de los funcionarios públicos.
- Concepción agrarista en los procesos de la titulación.

- Inexistencia de una política pública claramente definida para llevar a cabo la demarcación y posterior titulación de los territorios.
- Finalmente, la aplicación indirecta del principio *res nullius*. ¿Cómo?, el Estado debe internalizar e institucionalizar que los territorios indígenas tienen dimensiones culturales y materiales que sustentan los pueblos indígenas; del territorio depende su supervivencia como pueblos y su identidad cultural; mientras no lo haga, en Venezuela se mantendrá el reconocimiento de los derechos al territorio y a la propiedad colectiva sobre los mismos, pero los pueblos y comunidades indígenas seguirán amenazados ante cualquier invasión de sus territorios ya que en muchos casos están comprometidos en planes económicos de desarrollo del gobierno y sus empresas aliadas (nacionales e internacionales). El Estado no consulta, no informa y actúa dejando claro el resurgimiento del principio *res nullius* sobre los territorios indígenas y por tanto no termina de estructurar una política pública de demarcación. El problema no es ya el reconocimiento del derecho, ni el significado de la lucha reivindicatoria. El problema es que el Estado no termina de entender la urgencia de la demarcación del territorio, no reconoce fácticamente los sistemas de gestión propios de los pueblos indígenas, no hace esfuerzos para asegurar que los pueblos indígenas determinen las actividades que deben y pueden realizarse en sus territorios; al contrario, sigue ocupando los territorios, comprometiéndoles en más en proyectos de desarrollo sin ser cuidadoso en evitar efectos negativos sobre el ambiente y sobre los sitios sagrados y culturales; y, movilizándolo a sus cuerpos armados, como si las tierras fueran susceptibles de ocupación, como si no estuvieran habitadas. Sin demarcación, el Estado sigue estando en mora con los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela y los pueblos indígenas siguen en situación de riesgo.

4.2. Libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Fragmentación del Estado?

4.2.1. La libre determinación y el buen gobierno

Desde una dimensión interna, la libre determinación puede entenderse como el derecho de los pueblos a ser gobernados bajo un sistema democrático⁴¹⁷, no sólo en cuanto a su organización política, económica y social, sino también en lo relativo a su relación con el gobierno del Estado en cuanto que garantista del goce de los derechos fundamentales reconocidos, y las libertades a las que tiene derecho toda la población bajo la estructura de un Estado de Derecho⁴¹⁸. El principio democrático de la libre determinación según Roldán (1994) “se proyecta a situaciones posteriores a la descolonización y sin ningún ligamen con el período colonial” y en virtud de esta renovación se asimila a la democracia política⁴¹⁹. En este sentido, la libre determinación como principio democrático sólo es posible en la existencia administrativa de un buen gobierno.

El Banco Mundial ha definido el *good governance* como el gobierno capaz de llevar a cabo una gestión política transparente y previsible, con administración profesional, que cuente con un Poder Ejecutivo capaz de rendir cuentas claras, en el que haya una sociedad civil fuerte y participativa y en el que reine el imperio de la ley⁴²⁰. Así lo entiende la AGNU al aprobar la Guía General para la aplicación de la Declaración del Milenio en el 2001, en la que reconoce que “los Estados que respetan los derechos de todos sus ciudadanos y permiten que intervengan en la adopción de decisiones que afectan sus vidas es probable que se beneficien de sus energías creativas y establezcan un entorno económico y social que fomente el desarrollo sostenible. Con todo, la solución no estriba únicamente en las elecciones dado que las pequeñas minorías suelen correr

⁴¹⁷ V. KNOP, K. (2004): *Diversity and Self-determination in International Law*, Ed. Cambridge University Press, Cambridge.

⁴¹⁸ Del Estado de Derecho y Estados débiles, véase el Informe elaborado por Kofi Annan para la Cumbre del Milenio, “Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI”, (A/54/2000), específicamente lo relativo a la cooperación para un buen gobierno, pág. 7 y siguientes.

⁴¹⁹ ROLDÁN, J. (1994): *Democracia y Derecho Internacional*, Ed. Civitas, Madrid, pág. 162.

⁴²⁰ Cfr. *Governance by World Bank* (1994).

riesgos en las democracias, razón por la que para que funcionen bien, las democracias han de operar en el contexto de un régimen general de derechos humanos.”⁴²¹

En este sentido, se trata de observar cómo se ha fomentado la soberanía del pueblo mediante sistemas de gobiernos por y para el pueblo. De acuerdo con esto, el Informe de 2001 de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados en su párrafo 2.13 sostiene: “El Secretario General ha replanteado el dilema basándose en dos nociones de soberanía: la del Estado y la del pueblo y los individuos. Este planteamiento refleja la creciente voluntad que se observa en todo el mundo de fomentar el gobierno democrático (de, por y para el pueblo) y mayores libertades populares. En modo alguno debe considerarse que la segunda noción de soberanía supone un desafío al concepto tradicional de soberanía estatal; por el contrario, se trata de dar a entender que en dicha noción más tradicional debería tener cabida el objetivo de que el pueblo obtenga por sí mismo un poder y una libertad mayores, tanto a título individual como colectivo.”⁴²²

En este punto es necesario decir, que fue la Declaración de Derechos Humanos el instrumento jurídico que afirmó por primera vez el principio de legitimidad democrática a través del contenido del artículo 21 en sus numerales 1 y 3: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”, reconociendo que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” En este mismo orden de ideas, el Secretario General de la ONU, realizó una evaluación sobre la Aplicación de la Declaración del Milenio⁴²³ en la que en el párrafo 84 decía: “La democracia y los derechos humanos, aunque son conceptos diferentes, guardan una estrecha relación entre sí. La democracia, como derecho humano por sí misma, está implícita en el artículo 21 de

⁴²¹ Doc. A/56/326.

⁴²² Este párrafo fue debatido en el Consejo de Seguridad de la ONU el 10 y 11 de mayo de 2002.

⁴²³ Doc. A/58/323

la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero sólo funciona plenamente cuando se respetan los demás derechos humanos. Por lo tanto, no cabe sorprenderse de que la aceptación mundial de la democracia como paradigma se haya mantenido más o menos a la par de la aceptación más amplia de las normas universales de derechos humanos durante el decenio siguiente al fin de la guerra fría. En muchos países, sin embargo, la transición a la democracia se ha acompañado de graves problemas sociales y económicos.”

No obstante, Boutros Ghali desde 1995 fue elaborando tres documentos relacionados con la democratización⁴²⁴. En líneas generales Ghali afirmaba que el hecho de que Naciones Unidas aborde temas como la democracia, no significa que se le falte al respeto que la Organización siente por la soberanía de los Estados. En el documento *An Agenda for Democratization* Ghali explica que “*the United Nations does not aim to persuade democratizing States to apply external models or borrow extraneous forms of government. Rather, the United Nations aims to help each State pursue its own particular path. Understanding democratization as a process calling for wide-ranging action, the United Nations aims to support democratizing States in a variety of processes and experiences. Its role in favour of democratization in a particular State is understood and carried out as one of assistance and advice*” y más adelante sugiere “*(...)democratization must begin with an effort to create a culture of democracy — a political culture, which is fundamentally non-violent and in which no one party or group expects to win or lose all the time. Such a culture is built upon a societal consensus not about policy, but about the process and framework of democratic political life: **that the will of the people is the basis of governmental authority; that all individuals have a right to take part in government; that there shall be periodic and genuine elections; that power changes hands through popular suffrage rather than intimidation or force; that political opponents and minorities have a right to express their views; and that there can be loyal and legal opposition to the Government in power.***”⁴²⁵

⁴²⁴ Docs. A/50/332, A/51/512 y A/51/761.

⁴²⁵ Resaltado nuestro. Doc. A/51/761 párrafos 11 y 21.

Considerando los esfuerzos que la comunidad internacional ha hecho por relacionar la libre determinación con el buen gobierno o con democracias fortalecidas, es importante subrayar el papel que tienen todos los individuos en la toma de decisiones del Estado Nación al que pertenecen, en un plano de igualdad ante la ley, considerando las diferencias culturales que pueden existir entre la población. Uno de los asuntos pendientes en Venezuela establecida constitucionalmente como democracia participativa, es el fortalecimiento de la institucionalidad, que no se traduce en la multiplicación de oficinas, entes y órganos para atención de los ciudadanos; las instituciones fuertes significan operatividad, celeridad y eficiencia en la atención de todos los individuos en las distintas áreas del poder público. Si el pueblo es el soberano y por tanto es quien traza la hoja de ruta de su nación, los pueblos indígenas, como parte del soberano, pueden tener una esperanza más en la promesa democrática de América Latina en general, y de Venezuela en particular.

4.2.2. La libre determinación de los pueblos indígenas: un concepto del DI

En el transcurso del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX se empezó a considerar el principio de las nacionalidades, que aunque surgía como una idea interesante, sólo tenía aplicación en Europa⁴²⁶. Sin embargo, la Sociedad de Naciones no lo proclamó y por tanto quedó un poco en el aire. Después de la Segunda Guerra Mundial, es Naciones Unidas a través de su Carta, quien se refiere expresamente al principio de libre determinación de los pueblos⁴²⁷. Sin embargo, la comunidad internacional no tardaría mucho en fortalecer el principio y consagrarlo finalmente como norma positiva del DI, ya que el 14 de diciembre de 1960 la AGNU adoptó la Resolución 1514 (XV) contentiva de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y a los pueblos coloniales, cuyos términos dispositivos son:

⁴²⁶ Uno de los promotores del principio fue el Presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson. Para el Presidente era importante el reconocimiento del derecho de las naciones europeas a la autodeterminación política.

⁴²⁷ Al principio no se creyó que el principio de la libre determinación de los pueblos significaría una norma de DI, se tenía más bien como una simple proposición política. V. JIMENEZ, E. (1980): El Derecho Internacional Contemporáneo, Ed. Tecnos, Madrid, págs. 124 y 125.

1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.
2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
3. La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia.
4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional.
5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo, ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.
6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
7. Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial.

El principio de libre determinación después de esto no se detuvo en su especificación. En este sentido, hubo que esperar hasta hace relativamente poco, la evolución del derecho a la libre determinación –que ya no se relaciona únicamente con el contexto colonial-⁴²⁸ dentro del DI y a su vez la evolución del concepto de soberanía, que como vimos anteriormente, se ha ido acoplando a los valores emergentes. El DI de los

⁴²⁸ Efectivamente, la libre determinación indígena ha sido históricamente un proceso distinto al del periodo de la descolonización, ya que allí la reivindicación máxima que se esperaba era la transformación de la colonia en un nuevo Estado. Sobre la evolución de los derechos colectivos dentro del DI V. MARIÑO, F.: “Derechos colectivos y ordenamiento jurídico internacional” en Una discusión sobre derechos colectivos, ANSUÁTEGUI, F. (ed), Dyckinson, Madrid, 2001, pág. 77 y siguientes.

DDHH tiene dentro de sus categorías normativas el principio de la libre determinación. Ya hemos citado el artículo de la Carta de la ONU y el artículo 1º común a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en los que se enuncia el principio. En suma, el principio ha sido considerado en otros instrumentos internacionales⁴²⁹, así como en sentencias de la Corte Internacional de Justicia⁴³⁰ y en documentos de los distintos Comités de Control de Derechos Humanos⁴³¹, lo que permite entender que el principio de libre determinación ha sido aceptado como una norma de DI. Siguiendo este lineamiento, la AGNU adoptó la “Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas”, en la que se establece: “En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.”⁴³²

El derecho a la libre determinación es una norma de *jus cogens* y en este sentido, tal y como lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su

⁴²⁹ Se pueden mencionar: la Res. 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 en la que se adopta la Declaración sobre el otorgamiento de la independencia a los pueblos y territorios coloniales; la Res. 1803 (XVII) del 14 de diciembre 1962 sobre *Permanent sovereignty over natural resources*; la Res. 2037 (XX) del 7 de diciembre de 1965 sobre *Declaration on the Promotion Among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples*; la Res. 2105 (XX) del 20 de diciembre de 1965 sobre *Implementation of the Declaration on the granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*; y la Res. 2037 (XX) del 7 de diciembre de 1966. Además, se pueden mencionar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de 1976 en la cual, su artículo 5 consagra que: “Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior”; la Declaración de la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos de 1993 que en su párrafo 2º señala: “Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su desarrollo económico, social y cultural” (Puede verse en Doc. A/CONF.157/24).

⁴³⁰ V. el caso de Sahara Occidental de 1975 TJI/12.

⁴³¹ V. Doc. HRI/GEN/1/Rev.3 de 1984.

⁴³² Res. 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970.

conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de DI general que tenga el mismo carácter⁴³³. Expertos como Oliva (2012) afirman que en la actualidad, la libre determinación es uno de los principios esenciales del DI y al mismo tiempo es norma imperativa que genera obligaciones y atribuye derechos *erga omnes*⁴³⁴.

Así, la libre determinación de los pueblos indígenas no puede entenderse hoy como el inicio para la creación de un nuevo Estado independiente, sino debe ser entendida como la obligación que tienen los Estados de proveer en su soberanía interna, las condiciones necesarias para la participación democrática de su población en la toma de decisiones que determinan el futuro del Estado Nación correspondiente. Esto último obligatoriamente nos conduce a afirmar una vez más la importancia del territorio para los pueblos y comunidades indígenas. Es única y exclusivamente en el territorio donde puede materializarse el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, sin la capacidad de organizarse social, económica y políticamente, no existe ninguna garantía sobre los derechos reconocidos; en el caso venezolano, el capítulo VIII de la CRBV (1999) no podría materializarse. Entonces, si un Estado niega el derecho al territorio de los pueblos indígenas, y por consiguiente, la libre determinación, las formas de vida indígena se verían profundamente lesionadas y en riesgo de extinguirse, ya que como lo hemos dicho en distintas oportunidades, es en el territorio donde puede desarrollarse la vida colectiva de los indígenas y es desde allí donde pueden ejercer plenamente su autodeterminación que permite asegurar entre otras cosas, la diversidad cultural que representan como pueblo para el Estado Nación al que pertenecen⁴³⁵.

⁴³³ Cfr. Art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).

⁴³⁴ V. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el asunto de Timor Oriental. Puede leerse completa en: <http://www.icj-cij.org/docket/files/84/6949.pdf>

⁴³⁵ Es necesario recordar el Informe Martínez Cobo mencionado en el capítulo I, ya que allí se mencionaba: “La libre determinación en sus múltiples formas es, consecuentemente, la condición previa fundamental para que las poblaciones indígenas puedan disfrutar de sus derechos fundamentales y determinar su futuro” Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/7/Add.4.

En resumen, podemos afirmar que los pueblos indígenas no han sido considerados ni reconocidos por la comunidad internacional como pueblos coloniales, lo que debería darle tranquilidad a los Estados con respecto invocaciones de derecho de secesión. Efectivamente, la DDPI (2007) ha sido clara en cuanto a los límites de la libre determinación de los pueblos indígenas, prohibiendo que la DPPI sea utilizada como argumento para la invocación de una secesión unilateral⁴³⁶. Sabiendo esto, en ningún momento, ni a través de otro instrumento –independientemente de las denuncias que se hayan hecho con respecto a violaciones de sus derechos fundamentales–, la comunidad internacional ha reconocido a los pueblos indígenas la posibilidad de invocar el derecho de secesión. Por tanto, la calificación que le ha dado la comunidad internacional a los pueblos indígenas está basada en su reconocimiento como sujetos *sui generis* a los que por su especialidad corresponden derechos diferenciados. Sin embargo, el hecho de que la comunidad internacional no iguale a los pueblos indígenas con los Estados en el ámbito internacional, no quiere decir que los pueblos indígenas no tengan derecho a opinar, como un ciudadano más, en las decisiones políticas, sociales y económicas del Estado en el que se desenvuelven; privarlos de este derecho acabaría con la promesa democrática y con los derechos indígenas hasta ahora reconocidos.

4.2.3. La libre determinación de los pueblos indígenas en la DPPI

El trece de septiembre del año 2007 la ONU aprobaba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Contentiva de 46 artículos, abarca todo un catálogo de derechos a favor de los pueblos indígenas, entre los que destaca el reconocimiento a la libre determinación, cuya

⁴³⁶ Art. 46.1: Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.

incorporación en el documento final, fue objeto de controvertidas discusiones en el proceso de negociación⁴³⁷.

A pesar de que el CAUCUS indígena mostró su descontento con el proyecto de Declaración aprobado en el Consejo de Derechos Humanos de 2006, decidió abalar el documento final de Declaración y en vista de esto, algunos sectores hicieron público su descontento al considerar que el derecho a la libre determinación había quedado cercenado⁴³⁸ ya que desde su óptica el artículo 46 de la DPPI limita el mencionado derecho a favor de los Estados Nación⁴³⁹.

El proyecto de DPPI de 1994⁴⁴⁰ adoptó el contenido del artículo 1º común a los Pactos de 1966 para definir el derecho a la libre determinación y así quedó establecido en el documento final aprobado en 2007, lo que deja ver cómo desde el DI se ha relacionado el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a la concepción del derecho de libre determinación como derecho humano.

El derecho a la libre determinación en la DPPI, establecido como la capacidad que tienen los pueblos indígenas para organizarse política, social y económicamente modifica a pequeña y gran escala el reconocimiento que se les da a los pueblos indígenas como sujetos colectivos a nivel nacional e internacional. Álvarez (2009) asegura que el reconocimiento del derecho de autodeterminación “influye y determina cambios relevantes en la manera en la que percibimos al sujeto. De esta forma, la

⁴³⁷ La DPPI (2007) es el resultado de más de 20 años de diálogo y negociación entre gobiernos y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo.

⁴³⁸ V. las consideraciones hechas por el Consejo Internacional de los Tratados Indios -primera organización indígena a tener su estatus consultivo por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas-, el 3 de septiembre de 2007.

⁴³⁹ Efectivamente, el proyecto de Declaración de 1994 consideraba el derecho de libre determinación desde una perspectiva más amplia en el que no se veía limitado por ninguna actuación del Estado. Además, planteaba el proyecto de Declaración que los pueblos indígenas tendrían la libertad de participar o no en las estructuras del Estado y el autogobierno era definido ampliamente considerando territorio, medio ambiente, cultura y religión.

⁴⁴⁰ Disponible en: <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/declrspa.htm>

autodeterminación no es una consecuencia del reconocimiento de la subjetividad indígena, sino que esta subjetividad se forma en la medida en que existe un espacio de autodeterminación”⁴⁴¹.

En nuestra opinión, el derecho a la libre determinación consagrado en la DPPI (2007) debe ser entendido como la capacidad que tienen los pueblos y las comunidades indígenas a decidir su futuro y a ser reconocidos como sujetos jurídicos y políticos aptos para luchar por sus demandas amparados por el derecho consuetudinario indígena, acompañado por el derecho constitucional y demás normas de derecho positivo. Y se materializará en la medida en la que los Estados reconozcan el territorio, pues es desde allí que surge y se fortalece la subjetividad indígena.

En definitiva, la libre determinación de los pueblos indígenas tal y como está establecida en la DPPI (2007) sólo es posible dentro de un modelo democrático que garantice la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en los asuntos que les corresponde como individuos y como pueblos. En consecuencia, la libre determinación a partir de la DPPI considera a los pueblos y comunidades indígenas como legítimos sujetos en el ejercicio de la libre determinación, sin que esa consideración sea equiparable a la personalidad jurídica internacional⁴⁴².

4.2.4. La libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho al autogobierno

Una de las discusiones esenciales en la cuestión indígena actual gira en torno a saber si el desarrollo de los derechos indígenas reconocidos tanto a nivel internacional como nacional seguirán limitados y dependientes de la voluntad política de los gobiernos

⁴⁴¹ ÁLVAREZ, N.: “El sujeto indígena y el derecho de autodeterminación en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: ¿Tienen los pueblos indígenas personalidad jurídica internacional?” en Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural y sostenible, ÁLVAREZ, N., OLIVA, J., ZÚÑIGA, N. (eds.), Catarata, Madrid, 2009, pág. 214.

⁴⁴² A pesar de que pueden presentar demandas y quejas ante ciertos organismos internacionales y participar en los procesos de elaboración de normas internacionales como es el caso de la DPPI (2007).

de los Estados con instituciones que concentran injusta o desproporcionadamente el poder estatal⁴⁴³, o si más bien se permitirá una política desde lo indígena que atienda sus asuntos desde sus propias organizaciones políticas.

Con la libre determinación de los pueblos indígenas, la figura del autogobierno significa la posibilidad de que los propios pueblos y comunidades puedan ejercer el poder de decisión autónomo dentro de sus territorios, como una de las formas de preservar su acervo cultural y así asegurar su supervivencia como pueblos étnicamente diferenciados. El autogobierno constituye la principal dimensión política de la autodeterminación y un elemento a su favor es la mayor aceptación que se está dando a nociones como la del pluralismo cultural. Dentro de los avances que se han dado en las concepciones modernas del Estado Nación, hemos visto cómo la categorización de Estado homogéneo étnico y culturalmente, le ha ido dando paso al Estado pluriétnico y multicultural⁴⁴⁴.

Esta apertura a los Estados pluriétnicos y multiculturales permite la apuesta por las formas de autogobierno de los pueblos indígenas, con la seguridad de que ellos son capaces de trabajar por el presente y futuro de sus pueblos desde una gestión cultural que permite el reconocimiento fáctico de sus instituciones ancestrales por parte de los gobiernos de los distintos Estados Nación. Es oportuno destacar que con autogobierno o sin él, muchas comunidades y pueblos indígenas han mantenido sus propias instituciones ancestrales vinculadas claramente a una raíz histórica de interacción social y política. Estos sistemas tradicionales generalmente están acompañados de normas de derecho consuetudinario indígena y sus propios mecanismos de administración de justicia desarrollados a lo largo de los siglos⁴⁴⁵, hoy reconocidos por varias constituciones de América Latina.

⁴⁴³ ANAYA, J. (2005): Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Ed. Trotta, Madrid, pág. 224.

⁴⁴⁴ Puede verse esta evolución del Estado en las Constituciones de: Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y México.

⁴⁴⁵ V. COLMENARES, R.: “El derecho consuetudinario indígena en Venezuela: Balances y perspectivas” en Revista IIDH, núm. 41, 2005, págs. 83-118.

Por ello, al abordar este tema hay que entender que “los elementos esenciales de una norma en desarrollo sobre un autogobierno *sui generis* en el contexto de los pueblos indígenas se basan en la coyuntura de preceptos ampliamente aceptados sobre la integridad cultural y la democracia, en los que se incluyen preceptos sobre el gobierno local. La norma mantiene la autonomía local gubernamental o administrativa para las comunidades indígenas de acuerdo con sus modelos históricos, políticos o culturales, mientras que, a su vez, defienden su participación efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales del Gobierno.”⁴⁴⁶

Por tanto, debido a que los pueblos indígenas no han tenido una participación amplia en los procesos políticos de los Estados Nación de los que forman parte, el autogobierno puede considerarse como una nueva forma de promocionar el sistema democrático, ya que devolviéndole autoridad a los pueblos indígenas, puede disminuir su vulnerabilidad frente a los intereses de la sociedad criolla en particular y del Estado Nación en general, a la vez que se logra que las instituciones del gobierno sean más sensibles ante la cuestión indígena.

En este sentido, el proyecto de Declaración sobre Pueblos Indígenas de la OEA⁴⁴⁷ reconoce el “derecho a la autonomía o autogobierno” de una forma muy similar a como está reconocido en la DPPI (2007). Lo que nos permite concluir que el derecho al autogobierno como dimensión política de la libre determinación de los pueblos indígenas es hoy un “derecho en proceso”⁴⁴⁸ que debe terminarse a través del diálogo entre los pueblos indígenas y los Estados Nación de una manera favorable para las dos partes involucradas.

⁴⁴⁶ ANAYA, J.: “Los derechos de los pueblos indígenas” en La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, GÓMEZ, F. y PUREZA, J. (coords.), Universidad de Deusto, Bilbao, 2003, págs. 718 y 719.

⁴⁴⁷ Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 1997. Puede leerse completamente el Proyecto de Declaración en: <http://www.cidh.org/Indigenas/Cap.2g.htm>

⁴⁴⁸ Op. cit. pág. 51 .

4.2.5. La libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho al desarrollo propio

Como se ha dicho anteriormente, la limitación al acceso de las tierras y los recursos naturales también limita el goce efectivo de otros derechos reconocidos. Los pueblos indígenas en el transcurso de su historia han tenido el interés de lograr la garantía sobre la posesión de sus territorios, entre otras cosas, para impedir que los gobiernos de los distintos Estados Nación continúen imponiéndoles modelos de desarrollo totalmente alejados de su cultura y que parecieran enfocados en lograr tres cosas: enriquecerse con la extracción de recursos naturales ubicados en los territorios indígenas, empobrecer a los pueblos y comunidades indígenas generando más dependencia y destruir la diversidad cultural.

En el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en el año 2003, se hace referencia expresa a los modelos de desarrollo impuestos y a los megaproyectos que en favor de ese desarrollo se realizan en territorios indígenas. Dice el Relator “los proyectos de desarrollo en gran escala afectarán inevitablemente a las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A veces los efectos serán beneficiosos, muy a menudo devastadores, pero nunca desdeñables. Se dice que los pueblos indígenas soportan de manera desproporcionada los costes impuestos por las industrias extractivas y consumidoras de recursos, las grandes presas y otros proyectos de infraestructura, la tala y las plantaciones, la prospección biológica, la pesca y la agricultura industriales, y también el ecoturismo y los proyectos de conservación impuestos.”⁴⁴⁹ Stavenhagen también incluyó en su informe el papel que le corresponde a los gobiernos y les recomienda un tratamiento más respetuoso hacia la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y a intentar equilibrar los intereses del Estado con los de los pueblos indígenas.

⁴⁴⁹ Doc. E/CN.4/2003/90 del 21 de enero de 2003.

Frente a esta realidad, existe el derecho al desarrollo propio que en relación con los derechos al bienestar social, pudiera encontrar fundamento jurídico en la propia Carta de la ONU específicamente en el capítulo IX cuando establece:

Art. 55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:

- a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
- b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
- c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)⁴⁵⁰, la UNESCO, la AGNU, la OMS, la OIT, PNUD y FAO también han desarrollado otros instrumentos y programas enfocados a mejorar las condiciones para el bienestar social; cabe mencionar el trabajo logrado en la AGNU con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 en la que se define el derecho al desarrollo como: “un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”⁴⁵¹. Además, no se puede dejar de lado que la obligación de los Estados en cuando a la promoción del desarrollo indígena está relacionada a una serie de políticas de cooperación internacional que se ha activado como

⁴⁵⁰ Res. 2200 A(XXI) de 16 de diciembre de 1966.

⁴⁵¹ Sobre estos instrumentos y programas además de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Res. 41/128 de la AGNU del 4 de diciembre de 1986, puede verse: AA.VV.: América Latina y el Caribe: La política social en el nuevo contexto. Enfoques y experiencias, Paz, J. y Espina, M. (Eds.), UNESCO, Montevideo; Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, Res. 2542 (XXIV) del 11 de diciembre de 1969; Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción adoptado por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en 1995 Op. Cit; Declaración del Milenio, Res. 55/2 del 13 de septiembre del año 2000; Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, de 4 de septiembre de 2002.

muestra del interés que desde el DI y la comunidad internacional existe en relación a la cuestión indígena⁴⁵². Ejemplo de ello es que el Fondo Indígena ha surgido como organismo multilateral de cooperación internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas; otro ejemplo de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas es el programa desarrollado por el Banco Mundial: “Programa de Pequeños Subsidios”, en el que se otorgaban ayudas a las organizaciones indígenas con el fin de apoyar sus proyectos de desarrollo⁴⁵³.

No obstante, más allá de los compromisos de los Estados y de la disposición de todos los actores que hacen parte de la cooperación internacional, el derecho al desarrollo propio solo podrá materializarse plenamente desde el control sobre el territorio y los recursos naturales tal y como está establecido en distintos instrumentos internacionales⁴⁵⁴, y esto será posible cuando los Estados entiendan su papel en la promoción del autodesarrollo indígena⁴⁵⁵ cumpliendo entre otras cosas con procesos de

⁴⁵² La DPPI (2007) al respecto establece: “Art. 39: Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.” Y más tarde insiste: “Art. 41: Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.”

⁴⁵³ V. World Bank Grants Facility for Indigenous Peoples Announcement. Estos programas son oportunos debido a que es posible que los pueblos indígenas sean ignorados en cuanto a inversiones públicas y a proyectos de infraestructura del Estado. También puede darse el caso de que empresas contratistas lleguen a acuerdos con un Estado para “proveer” un servicio que realmente no es urgente ni cónsono con las necesidades de la comunidad indígena. En Venezuela, por citar un caso, recuerdo que en la comunidad indígena Coromoto Cuao donde hace vida el Pueblo Uwottuja, hay instalados postes eléctricos en un tramo del espacio de viviendas de la comunidad, lo irónico es que en la comunidad no hay servicio eléctrico; los indígenas que allí viven utilizan plantas generadoras de energía eléctrica y por tanto los postes están allí como el ornamento que un hábil empresario instaló sin consultar y con el fin último de satisfacer su propio interés económico.

⁴⁵⁴ Puede recordarse en este momento el contenido del artículo 32 numeral 1º de la DPPI (2007) que establece: “Art. 32.1: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.”

⁴⁵⁵ El artículo 21 numeral 2º de la DPPI (2007) hace referencia que “2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.”

demarcación adecuados conforme a lo establecido en las normas previamente establecidas. Una vez en el territorio y desde la libre determinación, el desarrollo propio puede establecerse frente a los modelos impuestos por el Estado y así poder asegurar las formas de vida indígena para las generaciones futuras.

4.2.6. La libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la identidad cultural

La norma de no discriminación no puede quedarse en el mero reconocimiento a los pueblos indígenas de todos los derechos civiles y libertades políticas concedidas a todos los demás individuos dentro de un Estado determinado. La norma debe ir más allá y entender que los pueblos indígenas tienen derecho a desarrollar libremente su identidad étnica y cultural como parte importante de la diversidad humana, sin prejuicios y sin imposiciones.

Es históricamente conocido que los pueblos indígenas en el transcurso de su historia han sido víctimas de la intolerancia racial y eso incluye la intolerancia cultural. En un principio fueron sus creencias y sus lenguas, combatidas al punto de que muchos pueblos se han quedado sin ese elemento fundamental de su reconstrucción histórica y cultural. Se ha impuesto a lo largo de la historia una serie de modelos de asimilación e integración mal concebida, con el fin último de homogeneizar las sociedades y culturas. Todavía en la actualidad, desde la estructura de los distintos Estados Nación, no se ha logrado transmitir una imagen clara sobre los pueblos indígenas al resto de la población no indígena. Los libros de historia siguen haciendo énfasis en la esclavitud y en los dolores del proceso colonial, sin decir nada más acerca de lo que los pueblos y comunidades indígenas significan hoy, lo que permite que niños y adolescentes crezcan con el entendimiento de que lo indígena es algo del pasado, un tema histórico y nada más.

Es por ello que los pueblos indígenas han incluido entre sus exigencias el reconocimiento a su derecho colectivo a la identidad diferenciada culturalmente y que por tanto se respete su patrimonio cultural tangible e intangible. Oliva (2012) considera que

“podemos relacionar el derecho a la identidad cultural con la dimensión cultural del derecho general a la libre determinación de los pueblos indígenas, puesto que difícilmente una comunidad indígena podrá tener el control de su propio destino diferenciado en condiciones de igualdad, si no ve asegurada la preservación (en proceso de modificación continua en base a sus propios intereses y objetivos) de su cultura particular, que debe ser el fundamento de su propio desarrollo y autogobierno”⁴⁵⁶. Este reconocimiento se ha ido garantizando a través de distintos instrumentos jurídicos como por ejemplo el ya mencionado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)⁴⁵⁷ debido a que en su artículo 27 señala: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”; este reconocimiento también está desarrollado en la antes mencionada Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas⁴⁵⁸; además la UNESCO ha mostrado su interés en la discusión de este derecho y es por ello que en la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional proclamada por la ONU en 1966⁴⁵⁹ se estableció:

“Artículo primero

1. Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos.

⁴⁵⁶ Op. cit. pág. 51.

⁴⁵⁷ El Pacto ha sido la base sobre la que se han ido consiguiendo decisiones en favor de los pueblos indígenas por parte de organismos como la CIDH que en 1985 invocó el artículo 27 del Pacto para favorecer a los Yanomami en el caso número 7615 y cuyo contenido completo puede verse en la Res. 12/85 o en OEA/Ser.L/V/II.66. Otro organismo que se ha apoyado en el Pacto ha sido el Comité de Derechos Humanos en casos como el de Francis Hopu y Tepoaitu Bessert vs. Francia en el que se concluyó que la República Francesa había vulnerado derechos al permitir el desarrollo hotelero en territorios de los indígenas tahitianos. Puede leerse completo en: Communication N. 549/1993 U.N. Doc. CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1. (1997). Entonces podemos entender que tanto la CIDH como el Comité de Derechos Humanos han establecido que la cultura diferenciada es un elemento clave en la conservación de las formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

⁴⁵⁸ Res. 47/135.

⁴⁵⁹ Disponible en:

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

2. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura.
3. En su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia recíproca que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad.”

Tiempo después la misma UNESCO adoptó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001) ⁴⁶⁰ en la cual el artículo 4 dispone: “La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del resto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas”. Gracias a esto, la identidad cultural puede ser considerada como un derecho humano y por tanto está amparado por el DI.

El derecho a la identidad cultural es un elemento fundamental, un requisito *sine qua non* de la libre determinación de los pueblos indígenas y así lo ha entendido el Convenio 169 (1989) al desarrollar en varios de sus artículos el concepto de identidad cultural de los pueblos indígenas ⁴⁶¹. En esta misma línea, la DPPI (2007) establece normas relativas a este asunto y llama a los Estados a que establezcan medidas eficaces para evitar cualquier tipo de discriminación o invisibilización de la cultura de las comunidades y pueblos indígenas, lo que les obliga también a cesar con las imposiciones de modelos económicos y sociales que pongan en riesgo la identidad étnica y cultural de los indígenas ⁴⁶².

⁴⁶⁰ Disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

⁴⁶¹ Se puede citar el contenido del artículo 5 en el que se establece lo siguiente:
“Art. 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b) deberán respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.”

⁴⁶² Resulta interesante el contenido de los siguientes artículos:
“Art. 8:

En cuanto a las creencias, la religión y los sitios sagrados la DPPI (2007) primeramente señala en su preámbulo que “el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente”. Luego en el artículo 11 considera que “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. 2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.” También es importante el contenido del artículo 12 que señala: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos

1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

- a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;
- b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos;
- c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
- d) Toda forma de asimilación o integración forzada; e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.”

“Art. 15:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.”

que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.”

De igual manera hay que mencionar el artículo 13 de la DPPI (2007) debido a que establece que: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.” En este sentido, puede verse la identidad cultural y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas como un elemento de carácter colectivo, los involucra a todos e incluye también los objetos, lugares, conocimientos, obras artísticas y lingüísticas. Es un derecho fundamental dentro de la libre determinación de los pueblos indígenas y conforma una corresponsabilidad para con la comunidad, el contexto y el medio ambiente.

Por su parte la UNESCO, en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005)⁴⁶³ dispone:

“Las partes procurarán crear en su territorio un entorno que incite a las personas y a los grupos a:

a) crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, comprendidas las personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos;

b) tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio y de los demás países del mundo.

2. Las Partes procurarán también que se reconozca la importante contribución de los artistas, de todas las personas que participan en el

⁴⁶³ Puede leerse completamente el texto en:

<http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/convention-text/#IV>

proceso creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las expresiones culturales.”

En el ámbito regional, la OEA en el anteriormente mencionado proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, establece en su artículo XV:

- “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad y creencias y, en virtud de ello, a practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, y a realizarlas tanto en público como en privado, individual y colectivamente. (Aprobado en la Décima Reunión de Negociación el 24 de abril de 2007).
2. Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o imposiciones, o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten o limiten su derecho a ejercer libremente su espiritualidad y creencias indígenas.
3. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus sitios y objetos sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, restos humanos y reliquias. Los Estados conjuntamente con los pueblos indígenas adoptaran las medidas necesarias para proteger estos derechos.
4. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces tanto para promover el respeto de la sociedad a la espiritualidad y creencias indígenas, como para proteger la integridad de los símbolos, practicas, ceremonias, expresiones y formas espirituales de los pueblos indígenas.”⁴⁶⁴

Para finalizar este punto cabe recordar que la conservación y protección de la identidad cultural con todo lo que ello involucra, sólo es posible si los territorios son titulados a partir de procesos de demarcación o autodemarcación. Lo importante es que los pueblos indígenas tengan sus territorios y a partir de allí poder desarrollar la libre determinación con todos los elementos que hemos visto hasta ahora, incluyendo por supuesto la diferenciación étnica y cultural.

4.2.7. La libre determinación de los pueblos indígenas y su derecho al territorio

⁴⁶⁴ Artículo XV, Espiritualidad indígena y libertad de conciencia (adaptando y ampliando el artículo X, Libertad espiritual y religiosa del proyecto original).

En reiteradas oportunidades hemos afirmado la importante relación que hay entre los pueblos indígenas y sus territorios. La importancia se debe a que esa relación es fundamental para que los pueblos indígenas puedan seguir existiendo como grupos étnica y culturalmente diferenciados, con sus propias cosmovisiones, tradiciones, usos y costumbres.

Decir que se reconoce el derecho al territorio significa también acceso a la territorialidad, que a su vez tiene una necesaria vinculación con el derecho a la autonomía. Resulta evidente que la presencia en el territorio y el control del mismo aumenta las posibilidades para que los planes del buen vivir o del desarrollo social puedan empezar y llegar a buen término. Efectivamente, el control del territorio y el libre acceso a los recursos naturales que allí se encuentran son elementos claves para que la libre determinación de los pueblos indígenas sea una realidad y así pueda ser posible la conservación de todos los aspectos que hasta ahora hemos estado estudiando.

Para la autodeterminación indígena el territorio es el principal medio de subsistencia y aunque el tema es interesantísimo, no profundizaremos mucho en este apartado pues el trabajo trata sobre territorio y los aspectos importantes que vendrían aquí ya los hemos señalado y explicado en el capítulo I.

4.2.8. La libre determinación de los pueblos indígenas y su derecho a ser consultados

Todos los aspectos sobre la libre determinación de los pueblos indígenas que se han ido desarrollando son de vital importancia para que la libre determinación pueda darse. Sin embargo, el tema de la consulta merece atención especial, pues es a través de ella que puede darse la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones no solamente en su jurisdicción sino que también permite que sean escuchados en el sistema político general. Además, este punto tiene una relación directa, intensa y relevante con los temas del derecho al territorio, a la demarcación y a la garantía del hábitat de los pueblos indígenas, no sólo en Venezuela, sino en todo el continente americano.

En este sentido, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación del desarrollo propio, así como los derechos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado son parte de un nuevo ordenamiento jurídico que contempla derechos colectivos en una interacción entre los Estados y los pueblos indígenas. Por tanto, este nuevo ordenamiento jurídico debería romper con el esquema de la tradición tutelar anterior por el cual los Estados consideraban que los territorios donde habitaban los pueblos indígenas estaban absolutamente bajo su dominio y decisión, dando espacio para políticas públicas de asimilación, integración, e incluso, de desaparición física y cultural.

Así, el cuerpo de derechos indígenas se encuentra fundamentado en el derecho inherente de los pueblos a existir de manera específica, de acuerdo a su cultura y tradición. De ese derecho a existir se desprende el derecho al desarrollo propio y frente a él, surgen las obligaciones del Estado de crear procedimientos de consulta y espacios de participación, para que los pueblos puedan tomar sus propias decisiones políticas, económicas, sociales y culturales.

La consulta previa según Bartolomé Clavero es “un derecho de los pueblos indígenas que obliga a los Estados a celebrar consultas con estos pueblos en función de razones especiales que atañe solo a los pueblos indígenas y tribales ya que está vinculada con el derecho a la identidad y la integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y costumbres, el derecho al territorio y los recursos y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, entre otros”⁴⁶⁵.

Consentimiento	Es la manifestación de un acuerdo de manera clara y convincente, según las estructuras de los pueblos indígenas, sus normas y procedimientos propios. El acuerdo debe estar avalado por la participación de los representantes indígenas autorizados por los pueblos.
Libre	Es la ausencia de cualquier tipo de presión, de amenazas o de

⁴⁶⁵ Cfr. Consulta y consentimiento previo libre e informado a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

	represalias.
Previo	Debe ser antes de la realización de cualquier proyecto y debe haber el tiempo suficiente para la recopilación de la información, la reflexión, el análisis, el debate y la construcción de acuerdos.
Informado	Se debe contar con toda la información relevante e importante que muestre de manera clara los impactos positivos y negativos del proyecto. No debe existir ninguna limitación de acceso a la información.

Figura 7. El consentimiento libre, previo e informado.

Fuente: Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). Cumbre Social por la Asamblea Constituyente, Bolivia. Modificaciones propias.

Ahora bien, ¿por qué empezar siempre por la consulta? Pues porque son los pueblos indígenas los que deben decidir si quieren o no la utilización de su tierra y sus recursos para el desarrollo. En atención a esto, volvemos a citar el artículo 6 del Convenio 169 (1989) que dispone:

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

- a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
- b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
- c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

En este sentido el Convenio deja claro que el derecho a la consulta implica que los pueblos indígenas puedan involucrarse en el proceso de toma de decisiones del lugar donde habitan, que su participación sea efectiva e influyente y esté respaldada por mecanismos y procedimientos adecuados, que los pueblos indígenas puedan decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural y que puedan participar en todas las cuestiones cubiertas por el Convenio. De hecho, es necesario decir que ha sido la vía

convencional la que más claramente ha enunciado las obligaciones de los Estados frente al derecho de los pueblos indígenas en cuanto a ser consultados.

Por su parte, la DPPI (2007) incluye indirectamente el derecho a la consulta en el artículo 23 antes mencionado cuando señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.” Más adelante en el artículo 32 numeral segundo establece: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” La misma DPPI (2007) aborda el tema de la consulta en los artículos 10 y 19⁴⁶⁶. De estos artículos puede inferirse que no puede existir la libre determinación indígena si no hay espacios para el consentimiento previo, libre e informado ya que si no hay libertad en el desenvolvimiento indígena por atender intereses económicos del Estado o de empresas privadas, los pueblos indígenas seguirán subordinados, perdiendo el derecho de acceso a sus territorios ancestrales, los recursos y su cultura.

De acuerdo al Convenio 169 de la OIT (1989) y la DPPI (2007), el derecho a la consulta y consentimiento deben ser aplicados en todas las áreas en las que el Estado

⁴⁶⁶ Art. 10:

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 19 Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población a los efectos de:

- a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;
- b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

debe adoptar políticas, tomar decisiones o desarrollar programas que puedan afectar a los distintos pueblos indígenas. Claro, el tema se presenta particularmente intenso cuando se relaciona el derecho de consulta a las actividades extractivas que el Estado quiere desarrollar en territorio indígena. Lo anterior se centra en que de un lado, las necesidades energéticas del modelo de desarrollo del Estado demandan el acceso y explotación de recursos naturales que generalmente se encuentran en territorios indígenas; y del otro, los derechos de los pueblos indígenas y sus modelos de desarrollo enmarcados en la figura “del buen vivir”, entran en conflicto con los intereses del Estado por las distintas actividades extractivas. Por tanto, debe quedar claro que el derecho a la consulta se encuentra fundamentado en el principio de que los pueblos indígenas gozan de la misma dignidad que todos los demás pueblos y culturas y en ese sentido, tienen la capacidad de controlar sus formas de vida y establecer claramente cuál es su modelo de desarrollo.

Ahora bien, ¿qué derechos tienen los pueblos indígenas en las decisiones de asuntos que les afectan? Yrigoyen (2011) plantea que considerando el desarrollo del derecho internacional, son de resaltar al menos cuatro tipo de derechos relativos a las atribuciones de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre temas que les afectan, a saber:

- a. El referido a la atribución para decidir autónomamente o determinar de modo libre su modelo de desarrollo.

Los referidos a las formas de relación entre el Estado y los pueblos indígenas:

- b. Participación en todo el ciclo de las políticas.
- c. Consulta previa a medidas legislativas o administrativas.
- d. Consentimiento, previo libre e informado cuando se pueden poner en riesgo los derechos fundamentales de los pueblos.

Situaciones en las que se exige el consentimiento	Fuentes
1. Traslados poblacionales	Convenio 169 (1989) Art. 16. Solo cabe traslado: a) Con el consentimiento libre, previo e informado, o b) al término de procedimientos legales

	<p>adecuados donde los pueblos estén efectivamente representados.</p> <p>DPPI (2007)</p> <p>Art. 10. Solo cabe traslados voluntarios:</p> <p>a) Con consentimiento previo, libre e informado, y</p> <p>b) acuerdo previo de indemnización justa y equitativa.</p>
2. Medidas especiales de salvaguarda	<p>Convenio 169 (1989)</p> <p>Art. 4. El Estado no puede adoptar medidas especiales (de salvaguarda) contrarias a los deseos libremente expresados por los pueblos.</p>
3. Almacenamiento o deshecho de materiales peligrosos	<p>DPPI (2007)</p> <p>Art. 29. No se almacenarán ni eliminarán materiales peligrosos en territorios indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.</p>
4. Desarrollo de actividades militares	<p>DPPI (2007)</p> <p>Art. 30. No se desarrollarán actividades militares en territorios indígenas, a menos que:</p> <p>a) lo justifique una amenaza importante,</p> <p>b) se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas, y</p> <p>c) estos lo hayan solicitado.</p>
5. Megaproyectos que puedan afectar el modo de vida o subsistencia	<p>Sentencia de la Corte IDH Caso Saramaka vs Surinam (2007)</p> <p>En caso de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no solo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones.</p>

Tabla 13. Cuadro de las situaciones en las que se exige el consentimiento previo libre e informado.

Fuente: Yrigoyen (2011), con modificaciones propias

Anaya (2013) ha planteado una serie de condiciones para llegar correctamente al consentimiento previo, libre e informado; a saber:

1. Debe haber un marco regulatorio estatal. Si ya los derechos están reconocidos constitucionalmente ¿qué pasa en los Estados en los cuales las leyes de minería no están adecuadas en cuanto a la necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas? Los Estados tienen la necesidad y obligación de proteger los DDHH, lo que quiere decir que deben regular las relaciones que los distintos actores tengan con los

pueblos indígenas a fin de protegerlos y en ese sentido los códigos de minería, de hidrocarburos, de petróleo, de gas y de bosques deben estar ya adecuados a la nueva realidad normativa.

2. Debe existir una regulación extra territorial de los Estados de donde provienen las empresas. Un ejemplo sería España con Repsol o Inglaterra con *British Petroleum*. El DI hasta ahora no obliga a los Estados a tener este tipo de normativa, pero si les permite la actividad comercial y por tanto debería haber una regulación.
3. Necesaria participación indígena en la planificación estratégica sobre recursos naturales. Debe haber participación indígena y lo ideal es que sea a través de la representación que tienen a nivel nacional en cada Estado.
4. Presencia de una debida diligencia empresarial. Las empresas cada vez más se involucran en este asunto, aún no están obligadas por el DI claro, pero es posible que eso llegue algún día. El caso es que así una empresa tenga el permiso o la concesión de actuar, deben tener diligencia interna y examinar si cumplirán o no con los DDHH en el desarrollo de sus actividades en territorios indígenas, por tanto, así el Estado haya dado el permiso, la empresa debe estar al tanto de los derechos de los pueblos indígenas y en consecuencia respetarlos.
5. Deben darse procedimientos apropiados de consulta. Para tener un arreglo debe haber un buen procedimiento de consulta, adecuada y conforme a los derechos de los pueblos indígenas; es decir, que tienen que respetar la representación indígena y sus exigencias.
6. Los acuerdos deben ser adecuados y equitativos. El consentimiento no se da por cualquier cosa, se da fundamentado en el respeto por los derechos de los indígenas. Deben ser acuerdos equitativos no en los que se reciben regalías sino beneficios reales; no se trata de caridad, de darles “una escuelita”, se trata de ser socios en la empresa o en la negociación para que realmente salga bien parada y ganando la comunidad indígena respectiva.
7. El planteamiento debe estar integrado con el plan de vida⁴⁶⁷.

⁴⁶⁷ Conferencia del Relator Especial James Anaya en el Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Getafe, 27 de junio de 2013.

En conclusión el Relator Especial tranquilamente ha afirmado que “de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y con el Convenio 169 de la OIT, los Estados tienen el deber de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos especiales y diferenciados sobre los asuntos que les conciernen, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Basado en el entendimiento de la marginación relativa y las condiciones desfavorables de los pueblos indígenas en relación con los procesos democráticos normales, este deber dimana del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios de soberanía popular y de gobierno por consentimiento y es un corolario de los principios conexos de derechos humanos.”⁴⁶⁸

En relación con lo expuesto por el Relator Especial, pienso que es necesario agregar que los Estados deben implementar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a través de las siguientes estrategias: desarrollando normas y políticas públicas que contemplen los derechos de la libre determinación al desarrollo, no sólo la consulta previa, sino todo en un conjunto; adoptando medidas tomadas desde los mismos pueblos indígenas, para fortalecer el conocimiento y materializar el ejercicio de los derechos indígenas reconocidos; asegurar los territorios indígenas a través de procesos de demarcación, garantizando la no presencia de terceros no autorizados; respetando a las autoridades tradicionales y las instituciones de la forma de vida indígena; desarrollando procesos de consulta previa en las distintas etapas de los proyectos de desarrollo, asegurando el proceso de participación; garantizando el consentimiento previo, libre e informado de acuerdo a lo establecido en el derecho internacional y sistematizando experiencias que promuevan el intercambio y construcción de nuevas políticas públicas basadas en buenas prácticas y lecciones aprendidas.

4.2.9. La libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho al propio derecho

⁴⁶⁸ Doc. A/HRC/12/34 del 15 de junio de 2009

Debido a las constantes agresiones externas, la violencia política, la criminalización de las protestas indígenas, el asesinato de caciques y líderes, la explotación de los recursos sin consulta, los desplazamientos y la subordinación como efecto de la transculturación; el derecho indígena y sus sistemas tradicionales se ha ido debilitando. El no entendimiento del derecho indígena por parte de las esferas del Estado ha producido que el mismo se vea todavía subordinado a la jurisdicción ordinaria de los distintos Estados. Para poder hablar de derecho propio, de derecho indígena y de pluralismo jurídico, primero hay que sentar las bases a partir de una conexión democrática entre los preceptos de la jurisdicción ordinaria del Estado y la jurisdicción indígena en los Estados en los que ésta haya sido reconocida.

Para Rodolfo Stavenhagen (1991) el derecho consuetudinario se refiere a “un conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto del derecho positivo vigente en un país determinado.”⁴⁶⁹ Una definición similar es sugerida por Durand (1998) al señalar que el derecho consuetudinario “está integrado por un conjunto de normas jurídicas de tipo costumbrista que regulan las relaciones sociales de los pueblos indios, contando con sus propios órganos reguladores y aplicadores de dicha normatividad.”⁴⁷⁰

Cabedo (2012)⁴⁷¹ tomando como referencia el trabajo previamente realizado por Ambía (1989) caracteriza el derecho consuetudinario indígena diciendo:

1. Constituye un conjunto de normas.
2. La oralidad de dichas normas.
3. Su observancia general (y el elemento de la coacción)
4. La uniformidad y permanencia en el tiempo.

⁴⁶⁹ STAVENHAGEN, R.: “Derecho consuetudinario indígena en América Latina” en Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 17, 1991, pág. 304.

⁴⁷⁰ DURAND, C. (1998): Derecho nacional, derechos indios y derecho consuetudinario indio. Los triquis de Oaxaca, un estudio de caso, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F., pág. 30.

⁴⁷¹ CABEDO, V. (2012): Pluralismo jurídico y pueblos indígenas, Ed. Icaria, Barcelona, pág. 59.

5. La regulación de los intereses públicos y privados de una colectividad.
6. Su transmisión por herencia social.

El problema aparece cuando autores como Yrigoyen (1999)⁴⁷² plantean que el derecho consuetudinario responde a la *veterana consuetudo*⁴⁷³ lo que da una impresión de inmovilidad del derecho. Sobre este punto Sánchez (1999) dice que “el uso del término “Derecho Consuetudinario” no resulta adecuado para calificar los sistemas de derecho propio de los pueblos indígenas, dado que estos últimos no siguen invariablemente una misma pauta secular, sino que son sistemas con gran capacidad de adaptación y cambio.” Sin embargo, nuestra opinión es que el término correcto es derecho consuetudinario indígena, dejando claro que éste derecho no es un derecho inmóvil, puede tener tanto movimiento como los pueblos mismos. En este sentido, el derecho consuetudinario indígena no es uno solo, pueden existir prácticas y costumbres ancestrales como existen pueblos, no es un derecho estandarizado, al contrario, va respondiendo a las propias circunstancias y cosmovisiones de cada pueblo.

El Convenio 169 (1989) dispone en su artículo 8 numeral 1º que “al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario” lo que demuestra la obligación de los Estados a adecuar sus sistemas judiciales de manera que se puedan entender ambas jurisdicciones y hacer trabajos conjunta o separadamente para aplicar el derecho consuetudinario indígena. Esta normativa también deja claro que el derecho indígena y su jurisdicción especial no debe ser criminalizado ni ignorado, al contrario, debe ser tomado en cuenta y así salvaguardar no solamente la cultura de los pueblos indígenas, sino también, los derechos fundamentales de los individuos indígenas que hayan de ser juzgados.

⁴⁷² YRIGOEYEN, R. (1999): Pautas de coordinación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal, Ed., Fundación Mirna Mack, Ciudad de Guatemala, págs. 16-22.

⁴⁷³ Expresión romana que refiere a la repetición secular, inmemorial, de una serie de prácticas, las cuales llegan a ser aceptadas como obligatorias por la colectividad.

Más adelante el mismo Convenio 169 (1989) en el artículo 9 numeral 1º establece los límites al derecho consuetudinario indígena de la siguiente manera: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”, por tanto es indispensable una articulación intercultural entre la jurisdicción ordinaria del Estado y la jurisdicción indígena.

Es importante en este punto hacer referencia a dos asuntos relevantes en el análisis del derecho consuetudinario indígena desde la óptica del DI. Primero, el reconocimiento del derecho propio como dice Oliva (2012) exige no una mera aceptación del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, sino una aceptación de la capacidad jurisdiccional de las autoridades indígenas. Segundo, que como ya lo hemos visto, el derecho propio o derecho consuetudinario indígena, encuentra limitaciones en disposiciones normativas del DI y del derecho interno.

En este sentido, las formas de reconocimiento del derecho consuetudinario indígena abren un abanico de posibilidades muy amplio; es decir, se puede reconocer o no el derecho consuetudinario indígena, en caso de que si, se aceptaría el pluralismo jurídico y el pluralismo es posible si se da un reconocimiento factico desde el derecho consuetudinario hasta la propia jurisdicción indígena. El Informe de la Comisión Australiana para la Reforma del Derecho (1977)⁴⁷⁴ plantea seis formas de reconocimiento que según Cabedo (2013)⁴⁷⁵, son el perfecto ejemplo de lo que NO debe hacerse:

1. Incorporar el derecho indígena al derecho no estatal mediante su codificación. La primera critica es que el derecho indígena es un derecho no escrito, es un derecho basado en la costumbre, dinámico y es precisamente el dinamismo lo que le ha

⁴⁷⁵ Conferencia del Profesor Vicente Cabedo en el Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Getafe, 29 de mayo de 2013

permitido sobrevivir o incluso resurgir. Si se incorpora en códigos se petrifica y al petrificarse desaparece.

2. Incorporar una parte del derecho indígena al derecho estatal.
3. Incorporar el derecho consuetudinario por “remisión”, es decir, el Estado decide cuándo si y cuándo no las cosas han de resolverse por derecho indígena.
4. Reconocimiento como exclusión de derecho estatal.
5. Reconocimiento como traducción.
6. Reconocimiento como acomodación.

Estas formas de reconocimiento australiano como malas prácticas según Vicente Cabedo, merecen algunos comentarios. Debe considerarse que la relación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena es una relación de “derechos en contacto”, hay por supuesto un trasfondo de relaciones de poder por parte del Estado que puede trasladar al derecho consuetudinario indígena a la invisibilidad, lo que se traduciría en etnocidio jurídico⁴⁷⁶. El derecho consuetudinario indígena no puede ser entendido como un sistema jurídico subversivo, al contrario, debe entenderse como un derecho alternativo que no busca acabar con el derecho del Estado. Por eso hemos insistido tanto en los modelos democráticos, pues solo en un Estado democrático pueden convivir perfectamente tanto el sistema jurídico ordinario como el alternativo.

Para finalizar, el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena y de su jurisdicción especial debe ser tomado como un derecho colectivo, en el que hay voluntariedad en su ejercicio y obligatoriedad de sometimiento. El ejercicio de la jurisdicción especial indígena y su aplicabilidad inmediata depende del grado de aculturación o transculturación de la comunidad indígena en cuestión, del grado de eficacia de la justicia estatal y de la capacidad de reformulación de la normatividad indígena.

⁴⁷⁶ V. ORDÓÑEZ, J. (2000) Análisis interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT.

4.2.10. La libre determinación de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico venezolano

Como se planteó al principio de este trabajo, la CRBV (1999) hace referencia expresa a “libre determinación” en temas que no tienen mucho que ver con el objeto de ésta investigación. No obstante, consideramos que en el artículo 119 se ha hecho un reconocimiento indirecto de la libre determinación de los pueblos indígenas, ya que es un artículo que envuelve todo lo dicho hasta ahora sobre libre determinación indígena. En este sentido el artículo señala:

“El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.”⁴⁷⁷

La LOPCI (2005) es bastante más explícita en cuanto al derecho a la libre determinación indígena ya que incluye en varios de sus artículos, preceptos normativos al respecto. De esta forma, la mencionada ley establece que:

“Art. 1: El Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal, así como las demás leyes de la República, para asegurar su participación activa en la vida de la Nación venezolana, la preservación de sus culturas, el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen posibles.”

⁴⁷⁷ Resaltado nuestro.

En este artículo, la LOPCI (2005) reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como los herederos de los derechos originarios sobre la propiedad colectiva de las tierras donde habitan, las cuales son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles; además los reconoce como poseedores del vínculo ancestral con sus tierras, necesario para desarrollar y garantizar sus formas de vida.

Más adelante la LOPCI (2005) establece la norma relativa a la autogestión de los pueblos y comunidades indígenas:

“Art. 5: Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la administración, conservación y utilización del ambiente y de los recursos naturales existentes en su hábitat y tierras.”⁴⁷⁸

En continuidad con lo anterior, la ley establece el derecho a la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de las políticas públicas y el derecho a la personalidad jurídica.

“Art. 6: El Estado promoverá y desarrollará acciones coordinadas y sistemáticas que garanticen la participación efectiva de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos nacionales, regionales y locales. Los pueblos y comunidades indígenas participarán directamente o a través de sus organizaciones de representación, en la formulación de las políticas públicas dirigidas a estos pueblos y comunidades o de cualquier otra política pública que pueda afectarles directa o indirectamente. En todo caso, deberá tomarse en cuenta la organización propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante, como expresión de sus usos y costumbres.

Art. 7: Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas a los fines del ejercicio de los derechos colectivos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República

⁴⁷⁸ Resaltado nuestro.

y demás leyes. Su representación será determinada por los pueblos y comunidades indígenas, según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su organización propia, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.”

El artículo 10 limita el derecho a la libre determinación en cuanto a que sigue siendo considerado un riesgo de secesión de la siguiente manera: “El reconocimiento por parte del Estado de los derechos y garantías contenidas en esta Ley no significa bajo ninguna circunstancia que se autorice o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado venezolano, ni otros principios, derechos y garantías contenidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en las demás leyes de la República.”

Por su parte, el derecho a la consulta está regulado en el artículo 11 de la ley cuando se establece que:

“Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme al procedimiento establecido en esta Ley. Toda actividad de aprovechamiento de recursos naturales y cualquier tipo de proyectos de desarrollo a ejecutarse en hábitat y tierras indígenas, estará sujeta al procedimiento de información y consulta previa, conforme a la presente Ley.”

Además de la LOPCI (2005), la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) hace un reconocimiento muy general sobre la libre determinación indígena a través de su artículo 1 al decir: “Esta Ley tiene por objeto, regular la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes relativos a la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas a los fines de garantizar el derecho a las propiedades colectivas de sus tierras consagrados en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. El hecho de que la ley reconozca la propiedad colectiva de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, significa el primer paso en el reconocimiento y posterior materialización de la libre determinación de los pueblos indígenas.

Queda claro que el elemento jurídico debe ir acompasado con el elemento político para poder lograr una efectiva libre determinación de los pueblos indígenas. Esto se podrá ver con más detalle más adelante.

4.3. La subordinación como efecto de la transculturación en Venezuela

A lo largo de este capítulo hemos venido estudiando una serie de conceptualizaciones y figuras normativas que dan cuenta del deber ser de las cosas en la cuestión indígena en cuanto a soberanía territorial del Estado y libre determinación de los pueblos indígenas desde la óptica del DI. En esta parte final del capítulo procederemos a presentar varios argumentos sobre las repercusiones que ha tenido la aplicación del principio *res nullius* y la falta de procesos de demarcación de territorios indígenas en Venezuela, situaciones claramente contrarias a la libre determinación y a los derechos que exhaustivamente hemos ido exponiendo.

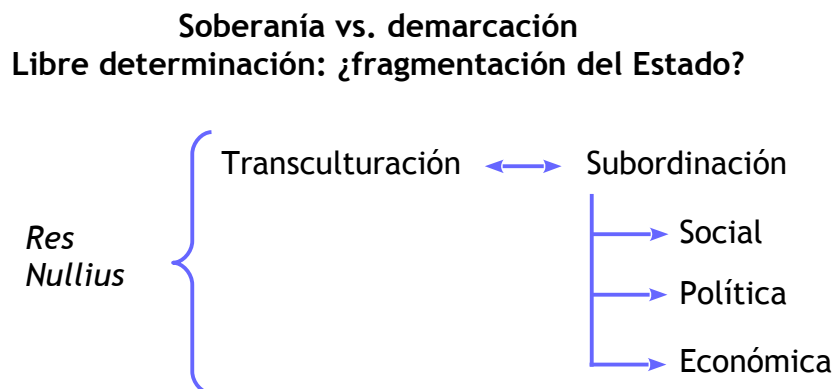


Figura 8. *Res nullius*, soberanía y transculturización.
Fuente: elaboración propia

Hemos visto cómo a nivel internacional y nacional se han establecido históricamente modelos de dominación. En Venezuela, una sociedad potente domina la mayoría de los espacios de actuación del Estado Nación e influencia a los demás ciudadanos en su mentalidad, valores, costumbres, estilos de vida y también (y más importante) sus conciencias.

Los mecanismos de dominación cultural son los *Mass Media*, el sistema de educación, las nuevas tecnologías e incluso la religión entendida en un sentido fatalista⁴⁷⁹. De ahí emerge y se fortalece una situación a la par de la cuestión indígena, caracterizada por cambios bruscos ya que las nuevas tecnologías destruyen la visión del cosmos indígena existente desde años ancestrales y por pérdidas de la identidad étnica y cultural.

Anteriormente se abordó el tema de la interculturalidad y hemos visto cómo se pretende transformar constitucionalmente sociedades mono culturales a sociedades multiculturales, entendiendo que la interculturalidad empezó a usarse como diálogo, como construcción de herramientas o mecanismos para dialogar. Por tanto, no puede haber diálogo entre desiguales, es decir, si una cultura se siente superior a la otra, ¿cómo se puede dialogar? Lo que hay en todo caso es subordinación. En la actualidad es importante hablar de multiculturalidad e interculturalidad pues permite ver quiénes estaban excluidos, para poder ahora involucrarlos en la toma de decisiones, lo que denota que la sociedad está pasando por un modelo de transformación.

Como dijimos en capítulos anteriores son necesarias políticas públicas interculturales, subrayando que ninguna acción intercultural queda solo en fortalecer “al propio”, el fortalecimiento debe ser en conjunto a través de alianzas e incidencias. No es posible cambiar la actitud del otro si no se construyen alianzas, si no se genera un espacio de incidencia para cambiar lo que está mal y empezar a buscar la garantía de la libre

⁴⁷⁹ OLASO, J.: “El bien común universal” en América Latina y África en la perspectiva comunitaria, Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (compilador), Universidad de Los Andes, Mérida, 1988, pág. 76.

determinación indígena. En este sentido si las estructuras son, en palabras de José María Olaso (1988), “el almacén de la convivencia humana, de las relaciones entre las personas y los pueblos, de los seres humanos con los bienes de la tierra y de las organizaciones sociales nacionales e internacionales”⁴⁸⁰, ¿qué sucede en Venezuela cuando con un ordenamiento jurídico óptimo para desarrollar la cuestión indígena favorablemente, se sigue percibiendo una situación de injusticia basada en decisiones aisladas del gobierno o de las empresas públicas o privadas con intereses en los territorios indígenas? La respuesta es clara. Las estructuras del Estado siguen amparando la injusticia negando procesos como la demarcación y generando obstáculos burocráticos que detienen o suspenden la materialización de los derechos reconocidos, fortaleciendo procesos de transculturación y por ende de subordinación entre los pocos que dominan y los muchos que son dominados. Entonces, la incoherencia de la subordinación en el proceso del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel a nacional, se explica en la rigidez de la cultura nacional dominante y su creencia de superioridad con respecto a otras culturas, y, en el temor del Estado y de los ciudadanos no indígenas al reparto de los recursos y oportunidades de una manera más justa.

Con esta práctica de *laissez faire, laissez passer*, se contribuye para que los pueblos indígenas queden más expuestos a violaciones de DDHH. Poner en práctica la interculturalidad como herramienta para acabar con la subordinación y la transculturación de los pueblos indígenas es una necesidad social, debido a que como dice Zúñiga (2009) “la comprensión de la universalidad de las necesidades del ser humano y su vínculo con la vida social es lo que permite entender las similitudes entre una cultura y las demás.”⁴⁸¹ Autores como Gough y Doyal (1994)⁴⁸² “justifican la producción, reproducción, la transmisión cultural y la autoridad política como las actividades estructurales que cualquier forma de vida social mínimamente satisfactoria debe ser capaz de llevar a cabo”. En este sentido, si se observa la realidad de las culturas indígenas en Venezuela, se

⁴⁸⁰ Id.

⁴⁸¹ ZÚÑIGA, N.: “La Declaración como instrumento para la convivencia intercultural y la cohesión social” en Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hacia un mundo intercultural sostenible, +ALVAREZ, N., OLIVA, J., ZÚÑIGA, N. (eds.), Catarata, Madrid, pág. 113.

⁴⁸² V. AA.VV.: La teoría de las necesidades, Gough, I., y Doyal, L., Icaria, Barcelona, 1994.

puede inferir que en pocas ocasiones o en eventos parcializados con alguna de las dos tendencias de la polarización política venezolana, es que tienen oportunidad los pueblos indígenas para mostrar a todos los venezolanos sus aspectos culturales. Así, las culturas indígenas inmersas en el Estado Nación que no reconoce fácticamente con igualdad de importancia su cultura diferenciada, y, donde al mismo tiempo continúan las violaciones de DDHH y la discriminación hacia lo indígena, es requerida urgentemente la reflexión y reparación si realmente se quiere lograr el mínimo bienestar social para el desarrollo digno de la sociedad.

La subordinación indígena en Venezuela también está estrechamente vinculada con los programas y proyectos que en nombre del progreso hay sobre los territorios indígenas. Los Estados deberían entender que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, él debe ser integral, en palabras de Pablo VI “*c’est-à-dire promouvoir tout homme et tout l’homme*”⁴⁸³. Como es sabido, los pueblos y comunidades indígenas viven principalmente en medios rurales y han podido mantener sus formas de vida en la medida en la que “el progreso” no les ha perturbado ni económica ni ecológicamente. Sin embargo, en el caso venezolano tal como se veía en el capítulo anterior, el gobierno y sus empresas aliadas (nacionales e internacionales) han ido mostrando cada vez más interés en las zonas “no desarrolladas del país” que contienen grandes recursos naturales, con el fin de explotarlos, extraerlos y llevar a cabo una serie de acciones económicas que traen consigo efectos negativos como la ocupación, la violencia, el desplazamiento y la fragmentación.

De esta manera, cuando las actividades extractivistas o de desarrollo se realizan en territorios de pueblos indígenas, las comunidades sufren profundos deterioros en sus formas de vida, ya que por un lado, los múltiples cambios sociales y económicos que empiezan a darse en la zona interfieren negativamente hacia dentro de la comunidad, y, por el otro, las autoridades encargadas de la actividad extractiva no son capaces de entender el proceso de la interculturalidad y por tanto se genera un conflicto mayor.

⁴⁸³ Encíclica *Populorum Progressio*

El transcurso del tiempo va fortaleciendo la legitimidad de los acuerdos de desarrollo, y los intereses y derechos de los pueblos indígenas van quedando en un segundo plano frente al interés nacional de crecimiento económico.

4.3.1. La subordinación y el desplazamiento

Cuando se agrede el derecho al territorio y a la libre determinación a través de ocupaciones que producen violencia y violación de DDHH, efectos como el desplazamiento terminan fragmentando comunidades, lo que definitivamente ocasiona un daño profundo en las formas de vida indígena de Venezuela.

Aunque para hablar de desplazamiento habría sido ideal contar con cifras claras sobre cuántos indígenas desplazados hay en Venezuela, no fue posible encontrar información en las instituciones del Estado. En vista de esto, se tocará el tema del desplazamiento como un mal generalizado, sin números exactos, pero sabiendo que son varias las comunidades indígenas de Venezuela que debido a la explotación de los recursos naturales que hay en sus territorios o por conflictos con los cuerpos de seguridad del Estado -como la Guardia Nacional Bolivariana-, y, otros grupos como la guerrilla, los mineros ilegales y los ganaderos, han tenido que dejar sus territorios hacia lugares más distantes o hacia las zonas urbanas.

El crecimiento de los procesos de desplazamiento se ha producido en la medida en la que las acciones han violado derechos constitucionales y DDHH en comunidades o en territorios indígenas. Sobre esto, el Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999), la CIDH explica que “los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho a ser protegidos del desplazamiento forzado de sus territorios por causa de la violencia. En caso de ser desplazados por causa de violencia, tienen derecho a recibir atención especial del Estado. El desplazamiento forzado de aldeas, grupos de familias, comunidades o pueblos indígenas o tribales de sus tierras por causa de la violencia armada, implica que éstos pierdan en muchos casos su integridad

sociocultural y su hábitat”⁴⁸⁴. Por otro lado, la Corte IDH entiende que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad, puede colocarles en una situación de especial vulnerabilidad y que las secuelas que el desplazamiento produce en el componente étnico y cultural, genera un riesgo de extinción cultural o físico de los pueblos indígenas⁴⁸⁵. Es por ello que la obligación de los Estados a proteger los pueblos indígenas merece atención especial por parte de los gobiernos⁴⁸⁶.

En este sentido, el Convenio 169 (1989) establece:

“Art. 16:

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtener su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en

⁴⁸⁴ Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, párr. 37.

⁴⁸⁵ Cfr. Auto 004/009 emitido el 26 de enero de 2009, Corte Constitucional de Colombia, parte 4, pág. 11. Disponible en: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6981.pdf>

⁴⁸⁶ En Venezuela hay un caso que por su gravedad traspasó las fronteras del Estado y consideramos oportuno comentarlo brevemente. En junio y julio de 1993 un grupo de garimpeiros brasileños dieron muerte a un total de 16 indígenas Yanomami e hirieron a otro grupo, en la región de Haximú, Estado de Amazonas, en la frontera con Brasil. El 6 de diciembre de 1996, la CIDH recibió una denuncia presentada por el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y *Human Rights Watch Americas*, en contra de la República -Bolivariana de- Venezuela, por el asesinato de 16 indígenas Yanomami de la región de Haximú, ocurrido entre los meses de junio y julio de 1993; por no haber impedido de modo efectivo la presencia de garimpeiros en el territorio Yanomami por la falta de investigación, procesamiento y sanción de los responsables.

El 1° de octubre de 1999 las partes suscribieron un acuerdo preliminar para llegar a una solución amistosa, la cual fue ratificada el 10 de octubre de 1999. El acuerdo establecía que el Estado se comprometía: a) a promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y minería ilegal en el área Yanomami; b) a hacer seguimiento de la investigación judicial sobre el proceso penal que se adelantaba en Brasil a fin de establecer responsabilidades y sancionar en consecuencia. El caso es que desde el año 2010, el pueblo Yanomami del Alto Orinoco nuevamente ha sido víctima de presencia de mineros ilegales provenientes de Brasil. Líderes Yanomami de distintas comunidades del Alto Orinoco han expresado a las autoridades correspondientes su preocupación frente a la inoperancia del acuerdo firmado ante la CIDH, ya que la zona se encuentra invadida de garimpeiros que tienen su base de operaciones, con una pista aérea, en el lado brasileiro de la frontera. Sobre esto V. WESSENDORF, K. (2011): *El mundo indígena*, Ed. IWGIA, Copenhague, pág. 134

que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. 4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento”.

En concordancia con lo establecido en el Convenio 169, la DPPI (2007) señala en su artículo 10: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.

El ECOSOC también ha abordado el tema de los desplazamientos y el 11 de febrero de 1998 elaboró el documento “Derechos Humanos, Éxodos en Masa y Personas Desplazadas”⁴⁸⁷ en el que se desarrollan una serie de principios rectores para los casos de desplazamiento. El principio 9 establece: “Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella”.

El caso es que no hay medidas preventivas de desplazamientos y cuando ocurren no son atendidos con importancia. Actualmente, como hemos dicho, los territorios indígenas en Venezuela siguen estando amenazados por distintos actores y factores. Ejemplo de ello es que el 25 de septiembre de 2012, el pueblo indígena Yanomami,

⁴⁸⁷ E/CN.4/1998/53/Add.2*.

representado por la organización Yanomami Horonami, realizó un pronunciamiento con respecto a la presencia de la minería ilegal en el Alto Ocamo⁴⁸⁸. El pronunciamiento entre otros aspectos denunciaba lo siguiente: “(...) consideramos que si bien no se pudieron determinar hasta el momento indicios de una masacre en la zona, lo cual para nosotros es motivo de alegría, **queremos dejar saber a la opinión pública que existe una presencia abundante de mineros ilegales acampados desde hace años en la zona del Alto Ocamo, provenientes de Brasil.** A través de los medios se ha dicho que “no hay nada” pasando en el Alto Ocamo, que todo está tranquilo y la gente está feliz. Nosotros, los yanomami de Horonami que estuvimos en la comisión, vimos los campamentos de mineros ilegales, vimos pasar una avioneta, vimos una pista clandestina, vimos algunos garimpeiros huyendo de la comisión que caminaba por la selva. Nosotros tenemos las evidencias de lo que decimos. **Los efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía y el CICPC que venían en la comisión, también fueron testigos de esto (...)** Es sabido también que la presencia de mineros ilegales entre los Yanomami genera serias consecuencias para la salud (focos de transmisión de malaria, enfermedades venéreas, contaminación por mercurio y otras). En la visita a la zona encontramos comunidades con graves problemas de salud que necesitan atención sanitaria urgente. **La degradación del hábitat, del cual dependen los Yanomami para alimentarse, para tomar agua y para vivir, es también consecuencia de la presencia de mineros ilegales, su maquinaria y la contaminación por mercurio**⁴⁸⁹ (...)”

Casos como este confirman la hipótesis de que la aplicación del principio *res nullius* en los territorios indígenas de Venezuela ha provocado desplazamientos y violencia política que afectan principalmente a los Pueblos Indígenas y sus modos de vida. El acuerdo firmado en la CIDH consecuencia de la masacre de Haximu no se ha cumplido, no se ha puesto en marcha un programa efectivo de monitoreo y prevención de la minería ilegal, no se protege a los Yanomami y por tanto no se protege la selva con todos los elementos naturales, étnicos y culturales que hacen vida en ella. Considerando

⁴⁸⁸ El pronunciamiento entero puede leerse en:
<http://www.yanomami-hilfe.de/es/2012/10/02/comunicado-de-la-organizacin-yanomami-horonami/>

⁴⁸⁹ El resaltado es nuestro.

las dimensiones de la minería ilegal, se está percibiendo al Amazonas como una gran extensión de territorio *res nullius*, en la cual no hay supervisión del Estado y como no se han demarcado los territorios, los Yanomami que viven en la selva se han convertido en blanco de violaciones y abusos, lo que ha hecho que abandonen sus comunidades y por tanto sus modos de vida se han visto lesionados profundamente.

4.3.2. Subordinación indígena en la Venezuela del Siglo XXI

La práctica de la subordinación ha resistido distintos procesos históricos y sigue estando presente en el contexto de la Venezuela del siglo XXI. Según la Real Academia Española, la subordinación es la “sujeción a la orden, mando o dominio de alguien”; así, la subordinación es el reflejo de las sociedades divididas en las que hay un dominio por parte de los que poseen los recursos sobre la voluntad, usos y costumbres de grupos menos favorecidos, gracias a medidas y métodos que generan relaciones de dependencia.

En este apartado desarrollaremos una exposición detallada de la subordinación indígena como efecto de la transculturación en la actualidad venezolana.

- El territorio.

Comentario: Oliva (2012) plantea que el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es un aspecto fundamental para la vigencia y vitalidad de las culturas indígenas y a partir de allí se establece una relación de complementariedad entre los derechos culturales y los derechos territoriales, así como entre estos y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, del que, los dos primeros se conformarían como dimensiones de aplicación. Luis Bello (2012) explica que en Venezuela hay grandes derechos frente a instituciones débiles. El desarrollo jurídico ha sido positivo, pero los derechos reconocidos todavía están pendientes de materialización, en parte, porque la cuestión indígena venezolana está secuestrada por el contexto político nacional. Cuando ha habido manifestaciones de descontento, cuando se ha hecho pública la lucha por el territorio ha habido no sólo criminalización de los líderes indígenas sino que además se ha actuado en contra de

su humanidad y la de sus familias (caso del Cacique Yukpa Sabino Romero). Por tanto, lo que hay que seguir alimentando es el trabajo de las organizaciones de base, seguir apoyando desde los escenarios posibles la ruta del trabajo por el territorio⁴⁹⁰.

Subordinación o dependencia: La no demarcación.

Derechos vulnerados: **Convenio 169 (1989):** Art. 14.2: Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. **Declaración de Naciones Unidas (2007):** Art. 27: Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. **CRBV (1999):** Art. 119: (...) Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras (...) **LOPCI (2005):** Art. 23. El Estado reconoce y garantiza el derecho originario de los pueblos y comunidades indígenas a su hábitat y a la propiedad colectiva de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. El Poder Ejecutivo, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, realizará la demarcación de su hábitat y tierras a los fines de su titulación de acuerdo con los principios y al procedimiento establecido en la presente Ley. Para la demarcación y titulación serán de obligatoria observación las realidades culturales, etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponimia indígena, los cuales deberán reflejarse en los documentos correspondientes.

- La organización social.

⁴⁹⁰ Afirmaciones del Profesor Luis Bello en el encuentro de la Red Jurídica Amazónica (RAMA), La Paz, 26 de noviembre de 2012.

Comentario: El tema de la identidad no es sólo un problema de números, es un problema político, se trata de romper con los paradigmas que oprimen. Cunningham (2013) señala que frente al modelo patriarcal y asimilacionista hay que fortalecer el modelo de la autonomía y autogobierno a través del reconocimiento constitucional, de los ordenamientos jurídicos internos, del territorio como elemento protagonista, de las políticas pública –fundamentalmente las de demarcación y de educación intercultural bilingüe– y desde el reconocimiento de las autoridades propias⁴⁹¹. En el DI y en el derecho venezolano se ha reconocido a los pueblos indígenas y sus formas de organización social. Frente a eso el deber del Estado venezolano es proteger el derecho reconocido, para hacer posible la existencia de una interculturalidad articulada en los derechos de igualdad y diferencia explicados previamente. No obstante, en Venezuela desde noviembre de 2009 está en vigencia la Ley Orgánica de los Consejos Comunales⁴⁹² que se ha llevado inclusive hasta territorio indígena. La mencionada ley en su artículo 2 define a los consejos comunales como “instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social”; y, expone sus principios reguladores en el artículo 3 diciendo que “la organización, funcionamiento y acción de los consejos comunales se rige por los principios y valores de participación, corresponsabilidad, democracia, identidad nacional, libre debate de las ideas, celeridad, coordinación, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, bien común, humanismo, territorialidad, colectivismo, eficacia, eficiencia, ética, responsabilidad social, control social, libertad, equidad, justicia, trabajo voluntario, igualdad social y de género, con el fin de establecer la base sociopolítica del socialismo que consolide un nuevo modelo

⁴⁹¹ Conferencia de la experta Mirna Cunningham en el Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Getafe, 20 de junio de 2013.

⁴⁹² El contenido completo de la Ley puede verse en:
<http://www.ucla.edu.ve/viacadem/comunitario/leyes/LeyOrganicaConsejosComunales.pdf>

político, social, cultural y económico”. En este punto preocupan dos cosas. La primera, es la existencia de los consejos comunales en territorio indígena, debido a que es una práctica que no tiene nada que ver con las formas de vida indígena (más allá de que la vida indígena sea colectiva y comunitaria), en el sentido de que es una organización ajena a las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, integrada según el artículo 19 de la ley por una asamblea de ciudadanos, un colectivo de coordinación comunitaria y las unidades: ejecutiva, administrativa y de contraloría social; desplazando al Consejo de Ancianos, a los Caciques, al papel de las mujeres indígenas en la Comunidad, a los artesanos, pescadores, recolectores y sus otras formas de organización tradicional. Además, dependen de los recursos que a nivel nacional o regional se les asignen, lo que por supuesto, genera dependencia social, administrativa y económica. Comunas Socialistas, ¿etnocidio silencioso?. La segunda, es igual de alarmante. En los principios reguladores de los consejos comunales se hace una lista de principios democráticos, pero en ningún momento se menciona interculturalidad o multiétnia, por tanto, se reafirma que es una organización de concepción occidental que pareciera no tener mucho que aportar a la forma de vida indígena, al contrario, se la iguala al resto de la población nacional, lo que se traduce en que el régimen de asimilación sigue en práctica. Por tanto, “el consejo comunal indígena” es una de las formas de dependencia social y transculturación en la Venezuela del siglo XXI⁴⁹³.

Subordinación o dependencia: Consejos Comunales y Comunas Socialistas

Derechos vulnerados: **Convenio 169 (1989):** Art. 5.a): Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente. Art. 8.2: (...) derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias (...) **Declaración**

⁴⁹³ En las respuestas al Cuestionario del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a los Estados: Estrategias de implementación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno venezolano a la pregunta ¿Se han establecido medidas políticas, legales, u otras medidas, especialmente para poner en práctica los derechos de cualquiera o todos los derechos de la Declaración? respondió explicando en el punto 2.15 lo relacionado a Consejos Comunales y Comunas informando que en el país hay una estructuración y registro de 2.100 Consejos Comunales Indígenas, el Financiamiento de 1.072 Proyectos de Consejos Comunales y el Financiamiento de 39 Comunas Socialistas.

de Naciones Unidas (2007): Art. 8.1: Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. **CRBV (1999):** Art. 119: El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social (...)

- Usos y costumbres.

Comentario: Sin la demarcación de los territorios, los usos y costumbres indígenas se encuentran en constante vulnerabilidad con respecto a la cultura dominante del Estado Nación. Es así como el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas ha mantenido la práctica de la Misión Guaicaipuro, que no sería negativa si estuviera dirigida a apoyar los procesos de demarcación y autodemarcación, y, a encaminar las exigencias de los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, la Misión Guaicaipuro además de desplazar los usos y costumbres, en la actualidad está cargada de contenido político al establecer que su misión es “coordinar, promover, articular y viabilizar las políticas, planes, programas y **proyectos del gobierno bolivariano** con la finalidad de operativizar y acelerar **su ejecución en las comunidades, comunas y ciudades conjuntamente con los consejos comunales y organizaciones propias de los indígenas de la patria, que contribuyan a saldar la deuda histórica empeñada en el proceso de construcción revolucionaria de la gran nación libre y soberana**⁴⁹⁴”. Igualmente, indica que su visión es “ser el ente ejecutor de las políticas y proyectos hacia los pueblos indígenas **mediante la inclusión activa y protagónica en el proceso de transformación socialista de la nación y garante del cumplimiento de los derechos que la Constitución Bolivariana y demás leyes que reconocen a los pueblos y comunidades indígenas, al definir a la sociedad venezolana como socialista, pluriétnica y multicultural**”. Y finalmente, la Misión Guaicaipuro plantea que su objetivo es “**promover, desarrollar y ejecutar las políticas bolivarianas dirigidas a saldar, con los entes del gobierno nacional, la deuda histórica a las comunidades organizadas indígenas, haciendo cumplir el Plan Nacional Simón Bolívar, bajo**

⁴⁹⁴ El resaltado es nuestro.

la óptica de un solo proyecto bolivariano, de una sola revolución y de un solo Comandante Presidente generando así la mayor suma de felicidad⁴⁹⁵”. Cada individuo tiene derecho a elegir su opción política, lo que no se corresponde con el deber ser, es el hecho de decidir/imponer desde una política pública del Estado, desde una misión social, la postura política de todos los pueblos y comunidades indígenas que hacen vida en Venezuela. Cualquier concepción política de carácter occidental es ajena a los usos y costumbres de los indígenas y llevarlo a las comunidades indígenas como política pública es una imposición, y el hecho de que el gobierno del Estado se imponga es una forma de transculturizar y por tanto genera dependencia o subordinación.

Subordinación o dependencia: Sin demarcación. Misiones sociales del Estado, MPPPI.

Derechos vulnerados: **Convenio 169 (1989)** Art. 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. **Declaración de Naciones Unidas (2007)**: Art. 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. **CRBV (1999)**: Art. 119: El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política, económica, sus culturas, usos y costumbres (...) **LOPCI (2005)**: Art. 18. Los órganos, entes y demás organismos del Estado, las instituciones privadas o los particulares, no podrán ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, el rango y la función de las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.

⁴⁹⁵ Cfr. <http://www.minpi.gob.ve/minpi/es/mg>

- Religión, sitios sagrados

Comentario: La religión y los sitios sagrados son parte del patrimonio colectivo indígena y por tanto son elementos que determinan su identidad cultural.

Subordinación o dependencia: Sin demarcación, misiones católicas, misiones protestantes, turismo.

Derechos vulnerados: **Convenio 169 (1989)** Art. 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. **Declaración de Naciones Unidas (2007):** Art. 11.1: Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Art. 12.1: Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. **CRBV (1999):** Art. 98: (...) El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia. Art. 119: El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política, económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones (...) Art. 121: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y

desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto (...) Art. 124: Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. **LOPCI (2005):** Art. 87: Las culturas indígenas son raíces de la venezolanidad. El Estado protege y promueve las diferentes expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo sus artes, literatura, música, danzas, arte culinario, armas y todos los demás usos y costumbres que les son propios. Art. 101: El Estado garantiza el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos, tecnologías, innovaciones y prácticas propias de los pueblos y comunidades indígenas. Art. 103: El Estado garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de establecer y proteger de acuerdo con sus usos y costumbres, su patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico y científico, conocimientos sobre la vida animal y vegetal, los diseños, procedimientos tradicionales y, en general, todos los conocimientos ancestrales y tradicionales asociados a los recursos genéticos y a la biodiversidad.

▪ Recursos naturales y consulta previa.

Comentario: Yrigoyen (2011) considera que los derechos indígenas tienen su fundamento en el derecho inherente de los pueblos a existir de determinada manera. Del derecho de existencia es que se desprende su derecho a la libre determinación del desarrollo. Y de los derechos de existencia surgen las obligaciones del Estado de crear espacios de consulta, participación y consentimiento para que los pueblos indígenas puedan ser parte de la toma de decisiones de las políticas de desarrollo nacional o regional que les puedan afectar⁴⁹⁶. El derecho a ser consultados enmarcado en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales dio en un principio tranquilidad a los indígenas en cuanto a que sus recursos no podrían ser explotados por nadie sin su consentimiento. Lamentablemente, los procesos de consulta no han sido tan efectivos como se esperaba y los territorios indígenas, aún sin demarcar, están en riesgo de ser ocupados por personas y organizaciones ajenas a la comunidad

⁴⁹⁶ YRIGOYEN, R.: “El derecho a la libre determinación del desarrollo. Participación, consulta y consentimiento” en Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina, APARICIO, M. (ed.), Icaria, Barcelona, pág. 103

que en su permanencia en el territorio causan un impacto cultural, generando subordinación (trabajos itinerantes, abusos laborales, explotación de la mano de obra).

Subordinación o dependencia: Sin demarcación. Megaproyectos, minería ilegal, militarización, empresas privadas, empresas del Estado.

Derechos vulnerados: **Convenio 169 (1989)**: Art. 15: 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. **Declaración de Naciones Unidas (2007)**: Art. 7.1: Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. 2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. Art. 26.2: Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Art. 30 1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y

en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. **CRBV (1999):** Art. 120: El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas (...) **LOPCI (2005):** Art. 11: Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme al procedimiento establecido en esta Ley. Toda actividad de aprovechamiento de recursos naturales y cualquier tipo de proyectos de desarrollo a ejecutarse en hábitat y tierras indígenas, estará sujeta al procedimiento de información y consulta previa, conforme a la presente Ley.

- Salud

Comentario: En la década de los noventa, los pueblos indígenas de Venezuela, según Silva (2000)⁴⁹⁷, atravesaban una difícil situación económico-social. La salud es un derecho inalienable de toda la población venezolana, y en la actualidad se ve cercenado debido a la grave situación que atraviesa la República. Los pueblos indígenas tienen una situación sanitaria y epidemiológica menos atendida; por tanto, en la cotidianidad se ven gravemente amenazados. En la actualidad, Venezuela cuenta con un amplio marco jurídico, nacional e internacional, que consagra los derechos de los pueblos indígenas y particularmente el derecho colectivo que éstos tienen a la salud considerando sus particularidades culturales y el respeto a su propia medicina ancestral. No se pueden desestimar los planes que el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha diseñado para implementarlos mediante la transversalización de las políticas públicas de la salud; en este sentido, la creación de

⁴⁹⁷ SILVA, N.: “La situación de la salud entre las poblaciones indígenas del Estado Bolívar (1996) en El discurso de la salud y la enfermedad en la Venezuela de fin de siglo, Clarac, J., Rojas, B. y González, O. (compiladores), Universidad de Los Andes, Mérida, 2000, pág. 127

la Dirección de Salud Indígena para la implementación de planes y programas, representa un avance importante en la extensión de los servicios de salud en las circunstancias particulares de los territorios indígenas. Todas estas actividades las ha realizado el Estado en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la DPPI (2007) y en los artículos 24 y 25 del Convenio 169 de la OIT (1989). Ahora bien, hasta ahora no hay lineamientos claros con respecto al tratamiento intercultural de la salud de los pueblos y comunidades indígenas, tal y como está dispuesto en el marco jurídico que envuelve la cuestión indígena en el país. Una cosa es proveer y otra imponer, que los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela cuenten con políticas públicas del Ministerio de Salud para atenderlos es positivo, pues es su derecho como venezolanos; sin embargo, aquí lo que se discute es el hecho de la transculturación. Si la Constitución y las leyes haciéndose eco de los instrumentos jurídicos internacionales, han resguardado el derecho a la salud indígena tradicional y sus terapias complementarias, debería el Estado darle al indígena la posibilidad de elegir entre un método y el otro, o, terminar de configurar un método mixto de atención para los pueblos y comunidades indígenas. Las maneras en las que se ejerce la salud occidental son ajenas al modo de vida indígena, se corre el riesgo de que el médico de Barrio Adentro I (por poner un ejemplo) desplace totalmente la figura del chaman o curandero, ocasionándose subordinación y dependencia.

Subordinación o dependencia: Misión Barrio Adentro I, Batallón 51, Misión Milagro, Plan de salud para los pueblos indígenas, Plan de salud Yanomami, Plan de salud Apure, Plan Delta.

Derechos vulnerados: **Declaración de Naciones Unidas (2007):** Art. 24.1: Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. **CRBV (1999):** Art. 122: Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos. **LOPCI (2005):** Art.111: Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso de su medicina

tradicional y de sus prácticas terapéuticas para la protección, el fomento, la prevención y la restitución de su salud integral. Este reconocimiento no limita el derecho de acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los demás servicios y programas del Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social, los cuales deberán prestarse en un plano de igualdad de oportunidades, equidad y calidad de servicio respecto al resto de la población nacional. Art. 112: El Estado, a través de los órganos, entes y demás organismos competentes y en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas, creará las condiciones necesarias para la incorporación de la medicina tradicional y las prácticas terapéuticas de los pueblos y comunidades indígenas, a los servicios del Sistema Nacional de Salud dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas. Los indígenas especialistas en su medicina tradicional podrán utilizar sus conocimientos y procedimientos con fines preventivos y curativos, siempre que cuenten con el consentimiento de los pacientes, indígenas o no-indígenas, y se realicen en los lugares destinados para tales fines. Estas prácticas serán respetadas por todas las instituciones públicas de salud.

▪ Educación

Comentario: En América Latina se ha empezado a hablar de multiculturalidad; Jesús (2013) considera que la multiculturalidad es el legado del Siglo XX y el desafío del Siglo XXI que debe tener su propia agenda pública y compartida para que sirva de referencia a todos y pueda ser fuente de acentuación de diálogos⁴⁹⁸. Sobre esto Morín (1999)⁴⁹⁹ decía que era necesaria la dinámica dialéctica para la profundización democrática a partir de la educación intercultural y equitativa. En este sentido, el saber que vamos teniendo solos los vamos haciendo colectivo, en ese lugar público donde la educación pública tiene el papel protagónico para lograr una sociedad intercultural. Así, la educación intercultural debe abrirse nuevos espacios tratando de generar propuestas donde nos veamos juntos, tomando en cuenta los contextos

⁴⁹⁸ Ponencia de María Jesús en el Congreso Internacional. Los pueblos indígenas en el retorno del Estado ¿una mayor autonomía o un protagonismo mejor?, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, 10 de mayo de 2013.

⁴⁹⁹ V, MORIN, E. (1999): Los siete saberes necesarios a la educación del futuro, Ed. UNESCO, Paris.

políticos e históricos que nos invitan a hacer una vida en común, y por tanto sentir que todos somos parte del mismo proceso.

a) Subordinación o dependencia: Programas educativos que no terminan de configurar la educación intercultural bilingüe.

b) Derechos vulnerados: **Convenio 169 (1989)**: Art. 27: 1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales económicas y culturales. 2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas cuando haya lugar. 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. Art. 28: 1. Siempre que sea viable deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. **Declaración de Naciones Unidas (2007)**: Artículo 14: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los

pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. **LOPCI (2005):** Art. 74: El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a su educación propia como proceso de socialización y a un régimen educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores, tradiciones y necesidades. Art. 75: La educación propia de los pueblos y comunidades indígenas está basada en los sistemas de socialización de cada pueblo y comunidad indígena, mediante los cuales se transmiten y renuevan los elementos constitutivos de su cultura.

- **Jurisdicción especial indígena**

Comentario: La jurisdicción especial indígena tal y como está concebida en el ordenamiento jurídico venezolano, todavía no ha sido reconocida plenamente. El Estado Nación no reconocerá la competencia territorial pues todavía no hay demarcación de territorios, tampoco la competencia extraterritorial pues allí conoce siempre la jurisdicción ordinaria, y, sobre la competencia material hay que resaltar que la LOPCI (2005) la limita al establecer que no podrá conocer delitos contra la seguridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico ilícito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia de manera organizada de varias personas y los crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Por tanto, la cultura jurídica sigue siendo la misma que antes de 1999, el conocimiento, juicio y ejecución de una causa, indígena o no, sigue estando encargada al Poder Judicial en su jurisdicción ordinaria. La creación de figuras como la defensa pública indígena colabora en el proceso de transculturación pues indirectamente se está estableciendo el derecho positivo por encima del derecho consuetudinario indígena.

Subordinación o dependencia: sin demarcación ¿pluralismo jurídico?

Derechos vulnerados: Convenio **169 (1989)**: Art. 9: 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Art. 10: 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. **Declaración de Naciones Unidas (2007)**: Art. 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Art. 34: Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. **CRBV (1999)**: Art. 260: Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. **LOPCI (2005)**: Art. 130: El Estado reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, en virtud de lo cual tienen la potestad de aplicar instancias de justicia dentro de su hábitat y tierras por sus autoridades legítimas y que sólo afecten a sus integrantes, de acuerdo con su cultura y necesidades sociales, siempre que no sea incompatible con los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República, interculturalmente interpretados y con lo previsto en la presente Ley.

4.4. Conclusiones

En Venezuela, desde la ANC de 1999, se ha percibido cierto temor frente a los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas pues existe la creencia de que con la demarcación indígena el Estado venezolano perdería soberanía territorial. Lo que no se ha profundizado es que con procesos efectivos de demarcación y titulación indígena no solamente se fortalece la cultura y la etnicidad indígena, sino que además se resguarda la soberanía nacional frente a amenazas como la minería ilegal, la tala indiscriminada y no autorizada, la penetración fronteriza de grupos armados y el contrabando.

El sistema democrático venezolano no debe pertenecer a ningún partido político; no es un modelo que se imponga, al contrario, es un objetivo a lograr a través de la institucionalidad fortalecida que cumple y trabaja por y para el pueblo. La democratización venezolana no puede evolucionar si no se abren espacios reales de participación ciudadana.

La autoridad política, haciendo uso de la *summa potestas*, no puede actuar impunemente contra los derechos humanos de los venezolanos y mucho menos contra los grupos que tienen una protección especial, como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas que hacen vida en el país. El abuso de la autoridad se convierte muchas veces en violencia política, y la violencia política está muy lejos de los pilares de la democracia.

En este sentido, la democracia, “bolivariana” o no, no es una afirmación de los derechos reconocidos en la Constitución, sino que debe ser a través de la democracia que los derechos de las personas y los colectivos de pueblos puedan encontrarse en un ambiente de interculturalidad lleno de contenido y práctica. Los derechos reconocidos a todos los venezolanos, especialmente a los pueblos y comunidades indígenas, deben trascender del reconocimiento constitucional y legislativo para convertirse en la praxis de la cotidianidad.

Es cierto que las elecciones son parte fundamental de un sistema democrático y, sin duda, fundamento de la autoridad gubernamental. Sin embargo, el proceso electoral no basta para garantizar la efectividad de una democracia, pues una mayoría dominante que no respete los DDHH en general y de los pueblos en particular puede convertirse en un régimen autoritario que omite sus obligaciones nacionales e internacionales, como es en nuestro caso de estudio la demarcación territorial de los pueblos y comunidades indígenas.

La no demarcación indígena incumple con el derecho al desarrollo sostenible o buen vivir y el derecho a una paz duradera para los pueblos indígenas. En este sentido, la no demarcación rompe con la promesa democrática y con el respeto a los DDHH reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas del país. La demarcación indígena es una obligación impostergable del Estado Nación Venezuela.

El desbalance histórico, en cuanto a los territorios indígenas fragmentados y el Estado Nación Venezuela, se ve reflejado en la concepción que se tiene de que la libre determinación de los pueblos indígenas produce fragmentación del Estado. La libre determinación es un principio que se encuentra reconocido en diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales cuya aplicabilidad en el ámbito nacional podría colaborar en el resguardo fáctico de la identidad étnica y cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

En Venezuela, la posibilidad más cercana de lograr la aplicación de la libre determinación indígena está en la demarcación de los territorios, ya que sólo allí podría darse la transversalización de las políticas públicas como forma de reivindicar la autonomía indígena sobre sus territorios.

Hemos dicho a lo largo de esta investigación que la tierra representa un valor importante para los pueblos indígenas en cuanto a su cultura, ya que es en la tierra donde es posible el desarrollo propio, la identidad cultural, la jurisdicción especial indígena, el

derecho consuetudinario indígena, y es justo en la tierra indígena donde deben ser consultados e informados sobre los planes de “desarrollo” que tiene el Estado Nación en los que sus tierras se encuentran comprometidas.

Lo anterior también está determinado por los intereses del Estado y en su negación a perder sus ambiciones económicas. Ejemplo de esto es la construcción del tendido eléctrico entre Venezuela y Brasil, el gasoducto en la Gran Sabana y el arco minero a desarrollarse en el Amazonas.

El Estado Nación Venezuela, a pesar de la normativa internacional y nacional, no ha demarcado sino más bien ha deslindado, como se hizo en la reforma agraria de la década de 1960, entregando títulos de propiedad que no atienden a la realidad indígena ni a la propiedad colectiva de las tierras.

Por tanto, quedan evidenciadas en este capítulo las repercusiones que ha tenido la aplicación del principio *res nullius* y las faltas de procesos de demarcación en las formas de vida indígena, produciendo desplazamiento por violencia y subordinación por transculturación.

Capítulo V

El Régimen Especial de Protección para el Pueblo Uwöttuja: valoración de una propuesta

A lo largo de todo nuestro trabajo hemos venido exponiendo los problemas de los territorios indígenas en el Estado Nación Venezuela como resultado del desbalance histórico del conflicto, fundamentalmente con la aplicación inicial del principio romano *res nullius* y con la aplicación posterior de un principio *res nullius* “reconfigurado” y adaptado a la realidad del momento. En ese sentido, hemos podido observar cómo el principio *res nullius* ha estado presente en Venezuela desde el momento de la organización territorial de la colonia hasta nuestros días con el nuevo Estado desde 1999, y con los megaproyectos de desarrollo de integración latinoamericana, minería legal e ilegal, e invasiones de distintos tipos. Con la CRBV (1999) y la promesa democrática a todos los venezolanos, se atendió de manera especial a los pueblos y comunidades indígenas del país, concediéndoles un catálogo de derechos diferenciados y obligándose el Estado a garantizarlos con la materialización de los mismos a corto y mediano plazo. Dieciséis años más tarde la demarcación de territorios indígenas todavía está pendiente, se han entregado títulos parecidos a cartas agrarias de deslinde, que no pueden ser considerados títulos territoriales indígenas, pues no comprenden el significado etnocultural y ambiental del territorio, ni están basados en la cosmovisión de los pueblos, ni en el conocimiento que éstos tienen sobre las dimensiones del territorio.

Somos de la opinión de que la demarcación no se ha hecho posible por varias razones que si bien ya hemos expuesto en las páginas anteriores, podemos repetirlas ahora. La primera, es que ni el Estado ni su institucionalidad han entendido la importancia de la demarcación territorial para los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela; la segunda, que el Estado no sabe cómo solucionar los problemas con los terceros y parece que no le interesa hacerlo; la tercera, es la creencia de que con los

procesos de demarcación se atentaría contra la soberanía nacional; la cuarta, se basa en que la demarcación significaría que los procesos de consulta tendrían que realizarse continuamente y con toda la formalidad establecida, pues la mayoría de los recursos de la actividad extractiva están precisamente en territorio indígena; la quinta, con la demarcación se daría paso a la libre determinación de los pueblos, lo que para muchos significa una posibilidad para la fragmentación territorial del Estado.

En vista de lo anterior, Vladimir Aguilar Castro, miembro del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina de la Universidad de Los Andes, ha presentado una propuesta territorial titulada “Régimen Especial de Protección del Hábitat Indígena de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Sipapo y Orinoco Medio Estado Amazonas” con la que se tienen varios propósitos; uno nacional, que implica desarrollar a nivel local principios de carácter constitucional que están contenidos en el capítulo VIII y en los artículos 127 y 128 de la carta magna; y otro más específico, que intenta materializar los procesos de autodemarcación que los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo han venido adelantando y que están pendientes de validación por parte del Estado venezolano⁵⁰⁰.

En vista de lo anterior, el Régimen Especial de Protección se fundamenta en los planes de vida de los pueblos de la zona que armonizan el mantenimiento de la cultura con la conservación de los recursos naturales, por tanto, busca también ampliar y desarrollar figuras de protección del ambiente ya existentes. De igual manera, el Régimen Especial de Protección intenta concretar mecanismos jurídicos de protección de los ecosistemas asociados al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas de la zona.

En este último capítulo haremos una descripción analítica de la propuesta, considerando los elementos fundamentales del proceso y el contexto en el que se desarrollaría la misma.

⁵⁰⁰ Véase en el apéndice el borrador de la propuesta.

5.1. Testimonios previos

Antes de proceder al análisis de la propuesta, hemos considerado importante destacar algunos testimonios recogidos en nuestro trabajo de campo que sustentan los argumentos que podrían llevar a pensar en la posibilidad de un Régimen Especial de Protección para los territorios indígenas en respuesta a los problemas de demarcación territorial. En junio de 2012 estuvimos en la comunidad Wayuuma'ana del pueblo Wayuu. Entre otras cosas el trabajo estuvo enfocado en levantar planes de vida⁵⁰¹ y construir la etnocartografía o mapas mentales de la comunidad indígena en el contexto de un trabajo de acompañamiento y orientación sobre los derechos indígenas consagrados en la CRBV (1999) y sobre la construcción de matrices para el levantamiento de un plan de vida para la comunidad. Los testimonios que vamos a compartir en este apartado provienen de la Sierra de Perijá, que si bien no se corresponde con las características amazónicas, si tiene en común con los pueblos de la Cuenca del Sipapo los problemas territoriales, la demarcación pendiente y la explotación de los recursos.

Jorge Montiel, uno de los líderes de la comunidad indígena Wayuuma'ana fue el encargado de recibirnos el día que llegamos a la comunidad y entre sus palabras de bienvenida destacan las siguientes: “la lucha se acompaña y se fortalece porque no es una lucha de los indígenas, es la lucha de los que consumen agua y los que también perciben oxígeno, no solamente los indígenas, es una lucha en defensa de la tierra, en defensa del planeta, en defensa del ambiente (...) la visión de nuestra organización es alcanzar la autonomía, vamos a explicar en un breve resumen la autonomía para nosotros, porque la autonomía para otros que entienden la autonomía es separarse, no, la autonomía para nosotros es pensar por nosotros mismos, hacer por nosotros mismos y tener nuestra propia visión y nuestro propio reto y defender nuestra cultura (...) si nosotros no tenemos

⁵⁰¹ Según Aguilar el plan de vida es una política pública intercultural que se construye en los territorios indígenas con el objetivo de fortalecer su dinámica territorial y cultural (...) un instrumento de planificación a futuro, que tiene como objeto resguardar la cultura indígena como poblaciones culturalmente diferenciadas, asimismo, su importancia en la actualidad se contextualiza frente al acecho constante de un proceso de demarcación tardíos que coloca en riesgo la continuidad generacional de estos grupos humanos y por tanto, los ecosistemas que ellos habitan, pues la conservación de los mismos hasta ahora dependen exclusivamente del manejo que los indígenas han realizado sobre sus recursos desde tiempos inmemorables.

autonomía otros van a pensar por nosotros, otros van ejecutar por nosotros, van a hacer por nosotros, pero si nosotros tenemos autonomía (...) tenemos la garantía de una lucha, es la garantía de permanecer o seguir con nuestra cultura, ya que sin eso se desaparece todo (...) entonces es algo grande pues, amplio el territorio, la justicia indígena, cuando haya justicia para los pueblos indígenas se tiene que hablar de territorio y entregar el territorio, reconocer el territorio, porque nosotros sí lo reconocemos, pero otros no lo quieren reconocer porque hay grandes minerales abajo del suelo del territorio donde estamos, entonces por ahí está la justicia indígena para nosotros, no solamente juzgarnos o el modelo cómo nos juzgan sino respetar también, ahí nosotros vamos a decir ahora si hay justicia indígena para nuestros pueblos, pero mientras que eso no suceda todavía no hay justicia indígena”.

José Montiel, un niño wayuu de nueve años nos dijo sobre los recursos “quieren explotar el carbón y si viene el carbonero va a explotar el carbón y nosotros no queremos el carbón”.

Lusbi Portillo de Sociedad Homo et Natura habló con nosotros sobre la violencia y explicó: “aquí funciona el Ejército de Liberación Nacional, ELN, funciona las FARC, fuerzas revolucionarias colombianas, aquí tienen su gente, la autonomía es de ellos, ellos se creen el gobierno de aquí, ellos ordenan que se va a hacer, (...) eso es todos los días un proceso, eso es todos los días, eso no es que un acuerdo y ya, más a ellos que los rotan, hoy están unos y dentro de dos años están otros entonces hay que volver a hablar, y de acuerdo a sus problemas ellos actúan, si están acosados por allá y están matándolos, porque han tenido muchas bajas, han matado a muchos jefes (...) entonces eso influye aquí también, o sea lo que pasa en ellos influye aquí, lo que le pasa al Estado influye aquí, (...) no es fácil pues, entonces aquí es una autonomía política, aquí la alcaldía no hace lo que quiera, no, es más aquí no entra el censo ni nada de eso, tienen que pedir permiso, es un respeto político pero hay un respeto educativo, aquí los niños ellos mismos los educan pues, por el río habían dos espacios educativos, uno donde está Diego, Diego lo que tiene es sexto grado, o sea a partir de lo que él sabe enseña a los niños, si él no sabe dividir no le enseña a los niños a dividir, si no sabe francés no le

puede enseñar francés a los niños, entonces esto es una limitante, entonces hay compañeros que a veces vienen y les enseñan matemáticas, a escribir pero escribir en otro idioma no es fácil y más el castellano que es tan enredada su gramática (...) entonces hay unas personas que vienen a veces que se han graduado de sexto grado y se les enseña un poquito más (...) la idea es una escuela autónoma para la autonomía”.

Luego en una entrevista que le hicimos exclusivamente para este trabajo Lusbi Portillo expuso con más detalle el problema territorial de la Sierra de Perijá y de la explotación de sus recursos diciendo: “estamos aquí en el Socuy, en la Sierra de Perijá ya hacia el norte, noreste del estado Zulia, Municipio Mara, Parroquia Marcos Pérez Godoy, toda la frontera con Colombia está bajo el Plan Colombia y bajo un proyecto de infraestructura de todos los países de América del Sur (...) donde esta región del Zulia está dentro del eje de desarrollo andino, (...) esta es una zona de sacrificios, esta es una zona de un enclave minero exportador pues, estas tierras son tierras de los Barí, son tierras de los Yukpa, y aquí donde estamos en el Socuy son tierras de los Wayuu, los indígenas se han organizado conjuntamente con los ecologistas y otros luchadores sociales de América para detener estos planes de infraestructura mineros. El gobierno presenta ahora un plan de generar energía a partir del carbón a través de una carboeléctrica que quieren construir en la mina “paso diablo” (...) nosotros decimos que no pues, primero porque la energía del carbón es la energía más contaminante de la energía fósil mucho más que el gas y que el petróleo, Venezuela entonces va a ser exportadora y generadora de dióxido de carbono (...) Venezuela es el país que tiene más petróleo del mundo, si sumamos el petróleo de la Faja del Orinoco, es el quinto país que tiene más gas, no hace falta generar electricidad a través del carbón (...) esto es un engaño que se está planteando desde Carbones de Guasare al país de construir una planta carboeléctrica si aquí no hace falta energía a base de carbón (...) y también lo que está detrás de todo eso es abrir todas las minas de carbón que vienen desde Colombia y atraviesa el oeste de Venezuela, del Zulia y llega a Lobatera en Táchira”.

José Diego Fuenmayor, indígena Wayuu nos explicó: “nosotros estamos resistiendo aquí por nuestras comunidades porque aquí hay una lucha (...) contra las

transnacionales como decir la minería, la explotación del carbón. Como indígenas Wayuu que somos nosotros tenemos alrededor de diez años como luchadores de comunidades indígenas y todos estamos luchando por nuestro territorio, nuestro bosque, nuestra diversidad y nuestro río (...) el río Socuy ahorita en el año 2005 nos iban a explotar porque aquí en el suelo donde estamos en el suelo hay carbón y por eso aquí estamos resistiendo por nuestro territorio y un indígena que no resiste por territorio no es indígena y un indígena que no hable su idioma es un indio muerto como decimos nosotros, pero, la lucha es aquí y contra la minería, por nuestro río, por nuestro bosque, por nuestra diversidad y nosotros tenemos una organización indígena formada que se llama Maikiralaasalii significa que no se vende esta organización, nosotros estamos (...) formados con la autonomía, tenemos nuestras escuelas, nuestros saberes (...) y nosotros también pensamos en nuestro futuro que viene, nuestros hijos, nuestros nietos, para dejarles todo como lo puso Dios acá en nuestro territorio, nosotros pensamos en los que vienen por un futuro para nosotros como comunidades indígenas estamos resistiendo (...) estamos al margen de la explotación del carbón y porque ya el carbón no es un desarrollo para las comunidades, es una muerte, es minería y miseria (...) hay dos minas abiertas, es un ejemplo, las abrieron en 1980 y desde allá para acá se vio como comunidades indígenas fueron desplazadas y llegaron aquí (...) nosotros las comunidades indígenas del Zulia hemos resistido como Wayuu que somos y también como los hermanos Barí y los hermanos Yukpa que también luchan por el territorio”.

Igual que los Wayuu, los Uwöttuja se enfrentan a una serie de inconvenientes para poder ejercer su derecho al territorio. El primer inconveniente por supuesto es la demarcación pendiente, pero de él se desprenden otros que pretenden subsanarse con la propuesta que analizaremos a continuación.

5.1 Identificación de la propuesta

La estructura y contenido de este trabajo de investigación doctoral ha permitido exponer y determinar cuál es el problema que se quiere resolver —el desbalance histórico del conflicto por la tierra a propósito del *res nullius*— y a quiénes afecta ese problema—pueblos indígenas de Venezuela—, pero es en este capítulo que presentaremos la nueva

situación que se pretende alcanzar a partir de una actuación determinada en una propuesta de Régimen Especial de Protección, concretando el modo en que se va a hacer y valorando las posibilidades de lograrlo.

El correcto diagnóstico y definición de partida que ha hecho el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, permite poder plantear de manera coherente la situación a la que se quiere llegar, las posibilidades de alcanzarla y los medios y herramientas que deben utilizarse. Para poder identificar la propuesta, se ha hecho rigurosa y sistemáticamente la compilación de la información necesaria para con mayor precisión categorizar el problema que se quiere resolver. En este sentido, el Informe Preliminar de las Actividades de Trabajo y Avances del Proceso de Gestión Territorial y Plan de Vida del Pueblo Uwöttuja del Sipapo (2012) permite observar por un lado, el avance del proceso de gestión territorial, y por el otro, el estado de avance del plan de vida.

De esta manera, Pinilla (2012) señala que el trabajo territorial en la Cuenca del Sipapo “constituye una herramienta fundamental para la consolidación del territorio tradicional Uwöttuja, el fortalecimiento cultural y la reedificación de la gobernabilidad propia. A partir de una serie de saberes, pensamientos, sueños, aspiraciones y esperanzas se ha avanzado y trabajado con mucho esfuerzo en el proceso de lograr la titulación del territorio, a través de la autodemarcación”.

5.1.1. Exposición de motivos

Los pueblos indígenas como sujetos de derechos están en capacidad de ser garantes de la vasta diversidad biológica y cultural que forma parte de su haber natural, patrimonial e histórico, como una de las condiciones necesarias para el logro de un desarrollo sostenible así como para la protección de un ambiente sano, desde la cultura y desde el resguardo de los territorios que de manera ancestral o tradicional han venido ocupando y utilizando los pueblos y comunidades indígenas allí asentados. Lo anterior reafirmaría el carácter emergente de la normativa fundamental indígena y ambiental ampliando la competencia en el ámbito ecológico y cultural siendo las organizaciones

indígenas custodias y garantes de la riqueza y diversidad biológica existente en su entorno, de conformidad con los derechos indígenas y ambientales establecidos en la CRBV (1999).

Con respecto a los alcances de la propuesta, hay que decir que el Régimen Especial de Protección sería aplicable a todo lo relacionado con los derechos individuales y colectivos de estos pueblos indígenas, especialmente en aquellos aspectos que puedan poner en situación de vulnerabilidad su existencia e integridad.

5.1.2. Antecedentes históricos

El Informe antes mencionado indica que en cumplimiento de las formalidades establecidas para presentar la solicitud de demarcación del territorio, la OIPUS con el apoyo de la Universidad de Guayana y con la asesoría técnica de Alexander Manzutti (antropólogo) y Erik Lares (cartógrafo), realizó el trabajo de georreferenciación del territorio; se elaboró el mapa digital con 1.043 puntos y la definición de 39 categorías de manejo. Es importante resaltar que el trabajo de campo de la toma de los puntos con el GPS, fue realizado por un grupo de jóvenes Uwöttuja de la Cuenca del Sipapo y el Orinoco Medio, y el resultado alcanzado en la medición arrojó un área a demarcar de aproximadamente 1.450.000 hectáreas, así el territorio corresponde geográficamente a dos cuencas completas de los ríos Sipapo y Samariapo y parte de la cuenca del Orinoco Medio alcanzando la zona fronteriza con Colombia.

Posteriormente se inició un nuevo proceso territorial con la OIPUS, contando con el apoyo de la asociación Wataniba y la asesoría técnica de Nelson Pinilla (etnobiología) y Melgris Becerra (cartógrafo). Según el Informe preliminar, se realizó una Asamblea General de OIPUS para presentar las propuestas de trabajo y las metodologías en el tema de gestión territorial, para la identificación de diferentes áreas de manejo dentro del territorio, estableciendo nueve grandes categorías de manejo y doce zonas de vida o ecosistemas.

5.1.3. Experiencias referenciales

La propuesta de Régimen Especial de Protección del Hábitat Indígena de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Sipapo, está basado en experiencias referenciales de América Latina, específicamente de Bolivia y Perú, en las que se protegen derechos territoriales indígenas con la conservación ambiental. Dichas experiencias son:

- En Bolivia el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
- En Perú la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, creada por Decreto Supremo Número 028-2003-AG.
- La Reserva Territorial del Estado a favor de pueblos indígenas en aislamiento ubicados en el Departamento de Madre de Dios, creada por Resolución Ministerial Número 427-2002-AG.
- La Reserva Territorial “Mashco-Piro”, creada por Resolución Directoral Regional Número 19097-CTARU/DRA.
- La Reserva Territorial a favor del Grupo Étnico Murunahua, creada por Resolución de la Dirección Regional Agraria Número 189-97CTARU.
- La Reserva Territorial a favor del Grupo Étnico Ishconahua, creada por Resolución Directoral Regional Número 201-98-CTARU/DRA-OAJ-T.

5.1.4. Protagonistas de la propuesta

Es evidente que hay distintas maneras de interpretar y valorar la realidad en la que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. Como consecuencia, la actuación que se propone desde el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes ante esa realidad, responde a las diferentes exigencias del pueblo Uwöttuja desde un intercambio directo, sin intermediarios. De hecho, el primer elemento que hay que tomar en cuenta para la valoración de la propuesta es precisamente el pueblo Uwöttuja y a partir de él se puede dar inicio a lo demás.

Así vemos como en la propuesta convergen distintos tipos de protagonistas:

- Pueblos Indígenas del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo: es decir, los descendientes de los pueblos originarios que habitan en este territorio de la República el cual se encuentra ubicado en el estado Amazonas, Municipio Autana, y tienen derechos anteriores a la formación del Estado Nación Venezuela, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autoreconocen como tales. En estos se incluye a los pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. El Estado garantiza el derecho a la libre decisión de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial para mantener tales condiciones.
- Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento Voluntario de la Cuenca del Sipapo: todos aquellos grupos poblacionales indígenas, independientemente de su volumen demográfico, que han optado por no desarrollar relaciones sociales sostenidas con instituciones o poblaciones indígenas y no indígenas que ellos consideren externas a su grupo, o que habiéndolas mantenido, han decidido no continuarlas.
- Pueblos Indígenas en Contacto Inicial de la Cuenca del Sipapo: todos aquellos grupos poblacionales indígenas que habiendo estado en situación de aislamiento voluntario, han optado por mantener relaciones sociales continuas o limitadas con instituciones o poblaciones indígenas y no indígenas que ellos consideren externas a su grupo.

Las distintas circunstancias en las que estos pueblos se encuentran, su cosmovisión y sus rasgos socioculturales, son ya elementos suficientes para ir determinando una perspectiva de protección especial en la que se interpreten sus necesidades, las posibles soluciones a sus problemas territoriales y sus prioridades de manera diferente. El Régimen Especial de Protección propuesto por Vladimir Aguilar como miembro del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, está fundamentado en la identificación de los protagonistas, el grado de complejidad de sus distintas circunstancias, sus necesidades, intereses y disponibilidades. Es decir, que se ha logrado obtener un consenso básico sobre en qué consiste la necesidad de llevar a cabo esta protección especial, cuál es la situación a la que hay que llegar para resolverla y qué modos de actuación y niveles de responsabilidad son necesarios para organizar las actividades previas a su materialización.

Un asunto positivo de la propuesta es que permite obtener suficiente conocimiento de los protagonistas de la misma. En ese sentido, el documento de la propuesta nos permite conocer los siguientes aspectos:

- a) Del régimen especial de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial: por régimen especial de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, entiéndase “el conjunto de responsabilidades y limitaciones establecidas en el presente ordenamiento y las disposiciones complementarias que la reglamenten y desarrollen, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas y privadas”.
- b) De la implementación del Régimen Especial de Protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial: el Régimen Especial de Protección debe ser entendido como “parte integrante de la política nacional sobre pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, que debe ser diseñada por el Estado venezolano”. Algunas de ellas consistirían en:
- Formular y aprobar las políticas y acciones de protección, promoción y respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial.
 - Planificar, programar y coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación del presente régimen.
 - Elaborar un registro de los pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial y de la documentación relacionada con el Hábitat Indígena de estos pueblos.
 - Desarrollar en coordinación con los sectores competentes planes de contingencia para los casos de contacto no voluntario entre pueblos indígenas en situación de aislamiento y agentes externos: con particular énfasis en los riesgos de salud.
 - Desarrollar estudios específicos sobre las causas y factores externos que constituyen amenazas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial,

que permitan formular medidas legales y administrativas de protección, prevención e interdicción.

- Otorgar y controlar las autorizaciones extraordinarias para el ingreso al Hábitat Indígena.

c) Participación de las Organizaciones Indígenas: las organizaciones indígenas de la zona coadyuvarán al control y vigilancia del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo.

d) Del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo.

- Naturaleza jurídica del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo: es un área territorial establecida por el Estado venezolano, para garantizar la existencia y los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que la habitan, permitiéndoles el aprovechamiento de sus recursos naturales para fines de subsistencia conforme a sus tradiciones y costumbres.
- Carácter intangible del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo: es intangible porque en ella se mantienen usos, costumbres y tradiciones indígenas que desde el derecho consuetudinario garantizan y desarrollan formas de vida.
- Características y condiciones del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo: el Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo garantiza la integridad territorial, cultural, ecológica y económica de los pueblos indígenas allí existentes incluyendo aquellos en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial, en tal sentido:
 - Quedan restringidos los asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que habitan en su interior.
 - Se restringe la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres de sus habitantes.
 - Se restringe el otorgamiento de derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el aprovechamiento con fines de subsistencia por parte de dichos pueblos.
 - La totalidad de los pueblos indígenas al interior del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo concurrirán como beneficiarios mancomunados de la misma.

5.1.5. Usos y estrategias de acuerdo al derecho consuetudinario

Antes de presentar esta propuesta en nuestro trabajo, revisamos primero las relaciones causa-efecto entre el problema de la territorialidad indígena y sus consecuencias sobre los pueblos indígenas de Venezuela. A partir de ese diagnóstico previo, se puede determinar a través de la propuesta de Régimen Especial de Protección, las modificaciones necesarias para actuar con usos y estrategias determinadas sobre el problema de demarcación, para resolverlo y convertir esa situación negativa en una positiva. A continuación se presentan las relaciones medios-fines que hacen posible que la propuesta de Régimen Especial de Protección resulte idónea para “destrabar” la demarcación a través de usos y estrategias adecuados a la realidad estudiada y de acuerdo al derecho consuetudinario. En este sentido la propuesta ha tenido en cuenta lo siguiente:

- Plan de vida: se sostiene en los fundamentos jurídicos nacionales e internacionales que disponen de la necesidad del territorio para garantizar y desarrollar las formas de vida. El plan de vida está fundamentado en la gestión territorial ya que del plan de vida emerge la importancia de la demarcación y titulación del territorio. La gestión territorial se basa en:
 - a. El Ordenamiento Consuetudinario Territorial Indígena (OCTI).
 - b. Zonificación de acuerdo a los usos y costumbres (ZUC) la cual se puede sostener en:
 - Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE): de ser el caso, el Hábitat Indígena puede adquirir la connotación ABRAE co-administrado por los pueblos indígenas de acuerdo a sus usos y costumbres.
 - Áreas Regionales Bajo Régimen de Administración Especial (ARBRAE) o Áreas Locales Bajo Régimen de Administración Especial (ALBRAE): se trata de áreas concurrentes de protección de territorios indígenas. La concurrencia estaría determinada por el desarrollo de un dispositivo de carácter constitucional el cual

no sólo reconoce sino que implementa un derecho constitucional, humano e indígena reconocido en la CRBV (1999)⁵⁰².

Las interfaces con las otras figuras de protección serían:

- Uso extensivo de carácter no extractivo o consuntivo: sólo se permitirán actividades de educación ambiental.
 - Uso extensivo de carácter extractivo o consuntivo: estaría permitida la forestería comunitaria y cacería de subsistencia, proyectos de manejo sostenible de los recursos naturales bajo consulta y participación de los pueblos indígenas, de acuerdo a usos y costumbres.
- Autorizaciones excepcionales de ingreso al Hábitat Indígena: no se permitirá el ingreso de agentes externos al Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo a fin de preservar la salud de las poblaciones sobre todo de aquellas en aislamiento voluntario o contacto inicial. No obstante, las autorizaciones se otorgarían cuando se den las siguientes circunstancias:
- a. Cuando se hayan producido situaciones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, que signifiquen amenaza de epidemia para todos los pueblos indígenas en especial aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial.
 - b. Cuando se identifiquen o denuncien actividades ilegales o ingresos no autorizados al interior del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo.
 - c. Cuando se constate la contaminación de los recursos hídricos o alimenticios, entre otros.
- Control y rutas de ingreso: se propone que OIPUS con el Ministerio para el Poder Popular del Ambiente y demás entes competentes, en coordinación con el resto de las organizaciones de los pueblos indígenas de la región mediante procesos participativos, consultados y concertados, establecerán los planes de control sobre las rutas de acceso al Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo.
- Cautela de derechos: corresponderá a OIPUS junto al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y demás instituciones competentes conducir, implementar y supervisar el Régimen Especial, instituido por el presente ordenamiento jurídico, el cual es parte de la política pública nacional sobre pueblos indígenas.

⁵⁰² En este punto la propuesta habla específicamente de los artículos 119, 127 y 128 de la CRBV (1999)

- Derechos de los miembros de los pueblos y comunidades del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo: por supuesto que todos los pueblos indígenas del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo, incluidos los que están en situación de aislamiento y en contacto inicial, se benefician de todos los derechos reconocidos en la CRBV (1999) y demás leyes de la República.

Contando con todo lo anterior, se estaría en mejores condiciones para enfrentar de una manera distinta el asunto de la demarcación de territorios indígenas, se puede elegir la estrategia más adecuada y con ella los elementos que garanticen el funcionamiento del Régimen Especial. Para hacer esta valoración, partimos de la premisa de que en la propuesta confluyen elementos de distinta naturaleza de acuerdo a las necesidades y recomendaciones del pueblo Uwöttuja, de los expertos del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, de los técnicos que han hecho el trabajo de acompañamiento, de las experiencias referenciales en otras realidades de América Latina, y las aspiraciones individuales y colectivas de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. Sin embargo, consideramos que la propuesta debería añadir los siguientes elementos:

- Los megaproyectos del Estado o planes de desarrollo nacionales, regionales y locales; para exponer de forma detallada al organismo encargado de tramitar el Régimen Especial de Protección, cuáles son las amenazas más poderosas al territorio indígena.
- Informes o estudios que ya se hayan hecho sobre el mismo territorio y las posibilidades, alternativas o recomendaciones que han surgido de ellos, pues podrían ser de interés.
- El estado del arte de las políticas públicas interculturales en Venezuela para permitir proyectar las posibilidades de la propuesta atendiendo a la voluntad política del Estado.
- Explicar un poco más el proceso organizativo de OIPUS y otras organizaciones indígenas, las dinámicas que generan y las expectativas que tienen con respecto al territorio y los demás derechos reconocidos.

5.2. Los beneficiarios del Régimen Especial de Protección

Los beneficiarios del Régimen Especial de Protección son los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo y Orinoco Medio del Estado Amazonas, fundamentalmente el pueblo Uwöttuja con una presencia menor del pueblo Jivi y de pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Ahora bien, como es sabido cualquier intervención sobre una realidad concreta genera diversos resultados. En este sentido, hay que distinguir quiénes pueden resultar como beneficiarios indirectos, qué grupo puede quedar al margen y quiénes pueden salir perjudicados y por tanto oponerse al Régimen Especial de Protección.

a. Beneficiarios directos:

- Pueblo Uwöttuja. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2011, 15.591 personas en el estado Amazonas dicen ser pertenecientes al pueblo Uwöttuja o Piaroa, siendo 7.944 hombres y 7.647 mujeres⁵⁰³. Socialmente los Uwöttuja están organizados según sus usos y costumbres, con un consejo de ancianos, los chamanes y con los líderes de las organizaciones de base. Son un pueblo participativo y dinámico, tienen muy claros sus objetivos y saben cómo exponerlos. Las decisiones se toman en asambleas organizadas por las comunidades y antes de decidir cualquier cosa todos participan, lo que es positivo para la propuesta de un Régimen Especial de Protección debido a que han demostrado tener una vinculación real con la exigencia de demarcación y capacidad operacional para el futuro.
- Pueblo Hiwi o Jivi. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2011, 20.020 personas en el estado Amazonas dicen ser pertenecientes al pueblo Jivi o Amorúa, siendo 10.008 hombres y 10.012 mujeres⁵⁰⁴. Los Jivi tienen una organización social muy parecida a la del pueblo Uwöttuja aunque que según Unicef Venezuela “algunos elementos culturales criollos ha sido integrados a la vida cotidiana de las

⁵⁰³ Cfr. Así lo explica la página web del Instituto Nacional de Estadística:

http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=26#

⁵⁰⁴ Id.

comunidades y familias”⁵⁰⁵ En cuanto al problema de los territorios y la demarcación pendiente, los Jivi han participado en las reuniones convocadas por las comunidades Uwöttuja con la disposición de presentar propuestas y así ayudar a buscar una solución. En este sentido, el pueblo Jivi también está involucrado con la problemática lo que sería una oportunidad para el Régimen Especial de Protección.

- Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario de la Cuenca del Sipapo.
- Pueblos Indígenas en Contacto Inicial de la Cuenca del Sipapo.

b. Beneficiarios indirectos:

- Los demás pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.
- El Estado Venezolano debido a que con un Régimen Especial de Protección sobre los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo, no sólo protegería la diversidad cultural y ambiental, sino también protegería especialmente toda la zona fronteriza con Colombia ubicada en el estado Amazonas.
- La población no indígena de Venezuela también sería beneficiaria indirecta debido a que con la materialización de los derechos de los pueblos indígenas, se fortalecería el hilo constitucional y por tanto el sistema jurídico-político del país. Sería ganancia para todos que se pudiera pronunciar la palabra democracia desde lo indígena.

c. Perjudicados y posibles oponentes:

- El Estado venezolano debido a que el Régimen Especial de Protección establecería unas normas determinadas para la presencia de terceros en los territorios y eso podría oponerse a los megaproyectos de integración latinoamericana en los que Venezuela se ha comprometido. A pesar de que el Estado estaría representado por el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda⁵⁰⁶ llegar a sentirse amenazado o perjudicado lo que ocasionaría un problema para el establecimiento pleno de la propuesta.
- Empresas Multinacionales.
- Actividades Extractivas (legales e ilegales).

⁵⁰⁵ Cfr. “Las pautas de crianza del pueblo Jivi en Venezuela”

Disponible en: http://www.unicef.org/venezuela/spanish/pautas_jivi.pdf

⁵⁰⁶ Antiguo Ministerio del Ambiente.

- Turismo y pesca deportiva.

El sentido del Régimen Especial de Protección es que significa una vía o un mecanismo para conciliar protección con demarcación de territorios indígenas, definitivamente sería una forma de destrabar la demarcación inconclusa.

5.3. Fundamentación de la propuesta: el plan de vida del Pueblo Uwöttuja

De acuerdo al Informe Final del Plan de Vida como expresión de los derechos territoriales del pueblo indígena Uwöttuja de la Cuenca del Sipapo⁵⁰⁷, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes realizó un trabajo de campo donde se explicó la importancia de sistematizar los usos territoriales a través de la etn-cartografía, las potencialidades del espacio territorial y sus limitaciones, así como un inventario de los servicios que tienen y los que quisieran poseer en un futuro.

Luego de dar la información correspondiente se levantaron las respectivas matrices, utilizadas para la construcción de políticas interculturales propias para las realidades de esas comunidades y que permitirán mejorar sus condiciones de vida a futuro. La base fundamental para la construcción de estos planes de vida se enmarca en la etn-cartografía territorial, en la que estas comunidades indígenas realizan la representación espacial de su territorio y de los usos que estas poblaciones le han imprimido a su entorno a partir de sus conocimientos ancestrales.

Estamos de acuerdo con que la fundamentación del Régimen Especial de Protección sea el plan de vida pues consideramos que la descolonización del pensamiento surge de la aceptación de la identidad y de la toma de decisiones propias, por tanto, sin identidad no es posible la materialización de derechos, el territorio es el elemento clave de la identidad. A través de las matrices que se construyen para exponer un plan de vida se busca garantizar la existencia de los consejos de ancianos, la salud tradicional indígena, el derecho al desarrollo propio a través de propuestas contextualizadas en el buen vivir, la justicia indígena que da la posibilidad de que los propios pueblos indígenas

⁵⁰⁷ Ver en los anexos.

sean los guardianes de sus territorios, el rol de la mujer indígena en las comunidades, la educación intercultural bilingüe, las manifestaciones culturales y los sitios sagrados.

Una de las características del territorio Uwöttuja es la abundancia de recursos que presenta la tierra y el hábitat de esta población, los cuales deben ser administrados de acuerdo a sus usos y costumbres puesto que su dinámica territorial depende del equilibrio de éste ecosistema. Con respecto a las limitaciones que ha descrito el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, la mayoría son por actividades humanas que pueden revertirse en la actualidad siempre y cuando el Estado de validez al proceso de autodemarcación levantado por el pueblo Uwöttuja y la posterior titulación colectiva de sus tierras⁵⁰⁸.

5.4. Bases jurídicas para un Régimen Especial de Protección en Venezuela

La idea de un Régimen Especial de Protección es posible en Venezuela de acuerdo a lo previsto en la CRBV (1999) en los artículos 119, 127 y 128.

- Artículo 119: El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.
- Artículo 127: Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y

⁵⁰⁸ Las matrices construidas para el plan de vida del pueblo Uwöttuja pueden verse detalladamente en los anexos de este trabajo.

ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

- Artículo 128: El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

5.4. Valoración de la propuesta

¿Por qué dar cuenta del Régimen Especial de Protección en nuestro trabajo?, Lo interesante de plantear esta propuesta en este trabajo de investigación es observar cómo esta opción se convierte en un mecanismo de superación de la fragmentación del territorio, en este sentido, el Régimen podría resultar siendo una solución factible al estancamiento del proceso de demarcación en Venezuela. Efectivamente, de acuerdo a lo analizado en el transcurso de la investigación y los elementos positivos y negativos que intervienen en la dinámica territorial indígena de Venezuela, un Régimen Especial de Protección podría responder favorablemente a las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas de la Cuenca del Sipapo, protegiendo su acervo cultural y sus recursos. Expondremos a continuación los puntos de la valoración de la propuesta:

- La propuesta responde a las prioridades que tiene el pueblo Uwottuja en cuanto a sus problemas de demarcación y fragmentación del territorio.
- Se encuentran claramente definidos los beneficiarios directos a los que se dirige el régimen especial de protección, dando seguridad de la protección de su territorio, cultura y organización social.
- Es posible identificar los demás actores sociales afectados positiva y negativamente por la ejecución del régimen.
- Se ha elaborado un diagnóstico de los problemas que describen la situación específica del pueblo Uwottuja, las causas de los mismos y las matrices que permiten orientar en el plan de vida soluciones efectivas y prácticas a los distintos problemas.
- La propuesta tiene una justificación adecuada y oportuna.
- Los objetivos están bien definidos y son suficientemente significativos como para justificar la implementación de la propuesta.
- El régimen especial de protección aportaría resultados concretos y verificables que se pueden alcanzar con el ordenamiento jurídico vigente y con voluntad política por parte del Estado Nación.
- Por todo lo anterior podemos afirmar que el Régimen Especial de Protección propuesto por Vladimir Aguilar en nombre del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, está adecuado a las prioridades de los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo. Valoramos la pertinencia de una iniciativa como ésta en la utilidad que la misma presenta en términos de materialización y ejercicio de derechos, teniendo en cuenta los diversos fines que pueden confluir en torno a ella. Ahora corresponde a las autoridades del Estado determinar si el Régimen Especial enmarca dentro de sus propias estrategias y aceptar o no su implementación.
- Con respecto a la eficacia, consideramos que el Régimen Especial propuesto podría cumplir con los objetivos propuestos ante la problemática de la demarcación territorial indígena, sería un mecanismo para frenar la fragmentación territorial indígena. La propuesta es muy clara en cuanto a los objetivos y alcances del Régimen Especial, no exagera en cuanto a los resultados esperados. Al contrario se fundamenta en planes de vida del pueblo Uwöttuja y más eficacia que esa no se ha visto en ninguna política pública del Estado con relación a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.

- Aunque la eficacia siempre va acompañada de la eficiencia, en este caso todavía no se puede hablar de tiempos, ni de lapsos, pues no depende de nuestra investigación ni de la propuesta analizada. En todo caso, somos de la idea de que establecer un Régimen Especial de Protección que ya cuenta con una autodemarcación, con planes de vida, con todos los estudios de gestión territorial y levantamientos de etnografía, no debería tomar más tiempo que el requerido para llevar un proceso de demarcación.
- Hemos estudiado detenidamente el tema de la viabilidad sabiendo que ella constituye el criterio esencial que distingue los proyectos exitosos de los no exitosos. El análisis de la viabilidad en el Régimen Especial propuesto se ha centrado esencialmente en la valoración del proceso que puede desencadenarse a partir de su aplicación y en sus posibilidades de continuidad una vez que se haya logrado establecer. Así, atendiendo a todos los elementos expuestos en nuestro trabajo de investigación y entendiendo el planteamiento del Régimen Especial de Protección, sus objetivos y alcances, creemos que puede ser viable y llegar a ser considerado una buena práctica con réplicas para otros pueblos indígenas del país. Sin embargo, la viabilidad sólo puede comprobarse plenamente cuando ya la propuesta se aplique a la realidad concreta, por tanto este análisis de viabilidad que hacemos ahora es meramente orientativo. Así, una vez establecido el Régimen Especial de Protección podría verificarse las posibilidades de permanencia en el tiempo de los objetivos y de los efectos del mismo. Esto último dependerá de lo siguiente:
 - Del apoyo político que se haya prestado a la propuesta.
 - De las organizaciones de base involucradas en gestionar y llevar a cabo el desarrollo del régimen de protección.
 - De la integración y participación que los beneficiarios tengan con el régimen especial de protección, es decir, de la demostración de que la propuesta constituye una prioridad para ellos.
 - De la contribución de la propuesta en la promoción de la igualdad en el acceso a los recursos y en la toma de decisiones.
 - De la sostenibilidad de los recursos naturales.

- De los recursos que se puedan desarrollar desde el territorio –económico, social y cultural- en el marco del buen vivir indígena, conservación de los derechos de la Tierra y fomentación de las formas de vida indígena.
- En relación con lo anterior hemos analizado y previsto los posibles efectos positivos de la propuesta pero también los efectos negativos que pueden provocarse con el establecimiento del Régimen Especial. Entre los efectos negativos se encuentra el riesgo de que una vez establecida la propuesta las empresas multinacionales o la presencia extranjera resultado de los Convenios Internacionales que ha firmado Venezuela, omitan el Régimen Especial de Protección y pretendan seguir actuando como hasta ahora. Otro riesgo es una respuesta violenta por parte de las fuerzas del Estado que motivados por la frustración de no poder seguir ejerciendo su dominio en las áreas cercanas a los pueblos indígenas reaccionen negativamente. Lo mismo aplica para los mineros ilegales.
- Sobre el impacto es necesario decir que el Régimen Especial de Protección contribuiría significativamente como respuesta positiva a las demandas territoriales indígenas, además de que estimularía la autogestión de los pueblos indígenas de Venezuela.
- Podemos observar que los beneficiarios de la propuesta están implicados y comprometidos con el logro de la misma.
- El Régimen Especial de Protección contribuye con la promoción de la igualdad de oportunidades para todos los venezolanos en un marco de derechos diferenciados. Por tanto, es una propuesta justa.
- Finalmente, valoramos esta propuesta como oportuna, pertinente y coherente con la realidad de los pueblos indígenas de Venezuela frente a un gobierno centralizado y totalmente burocrático que ha dificultado la materialización de los derechos indígenas reconocidos.

5.5. Conclusiones

El análisis de una propuesta como la explicada en este capítulo da cuenta de que lo logrado en el ordenamiento jurídico venezolano no es aún lo definitivo. Queda mucho por hacer en Venezuela para poder cumplir cabalmente con los derechos que la

Constitución de 1999 reconoció a los pueblos y comunidades indígenas del país. Los cambios normativos han mejorado las condiciones de los derechos que favorecen a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, pero han surgido en medio de una parálisis de lo político. El régimen especial de protección es sin duda, un mecanismo eficiente para hacer frente a esta situación, colaborando en el destrabe de la demarcación y evitando que continúe la fragmentación territorial indígena, protegiendo a los indígenas como individuos y como pueblos.

A pesar de la omisión del gobierno venezolano en cuanto a la demarcación indígena y de la presión de las empresas públicas y privadas, deben intentarse nuevas estrategias enfocadas en conseguir bienestar para los pueblos indígenas. Esta propuesta de Régimen Especial de Protección no está amparada en debates políticos, sino en argumentos jurídicos, lo que quiere decir que de instaurarse no sólo sería positivo sino también de largo alcance.

Debido a que en Venezuela hay grandes derechos frente a instituciones débiles, un Régimen Especial de Protección como desarrollo jurídico, sería la respuesta esperada por los pueblos indígenas que han adelantado sus procesos de autodemarcación, para seguir luchando desde todos los escenarios posibles por la ruta para la titulación definitiva de sus territorios. La aprobación de un Régimen Especial de Protección modificaría, aunque sea un poco, la situación que tiene Venezuela con los pueblos indígenas ante el Convenio 169 (1989), la DPPI (2007) y la CRBV (1999). El Régimen Especial de Protección al tener sus reglas plenamente establecidas, dejaría al margen situaciones de riesgo. Este asunto es importante porque con los resultados que ha dejado la criminalización de la protesta indígena en Venezuela, es necesario proteger a los líderes indígenas y a sus familias.

El Régimen Especial de Protección pondría un límite a los abusos efectuados por las fuerzas armadas que actúan en los territorios, fundamentalmente en lo relacionado al combustible y al continuo hostigamiento del cual son víctimas los pueblos indígenas. Asimismo, con el Régimen Especial de Protección se podría evitar la minería ilegal, pues

al existir una figura jurídica establecida, no puede seguirse considerando al territorio indígena como *res nullius* y por tanto ocuparlo. El Régimen Especial otorgaría seguridad jurídica a los territorios indígenas de la Cuenca del Sipapo. Un Régimen Especial de Protección además de evitar la explotación ilegal de los recursos por parte de terceros, generaría procesos de consulta adecuados a la normativa jurídica internacional y nacional lo que por un lado, daría tranquilidad a los pueblos indígenas de acuerdo al uso y explotación de sus recursos; y por el otro, colaboraría con el mantenimiento del ecosistema en el que está asentado el pueblo Uwöttuja.

El pueblo Uwöttuja tendría la posibilidad de organizarse de acuerdo a sus usos y costumbres sin injerencias externas de ningún tipo. Se promovería el desarrollo propio del pueblo lo que rompería con el esquema de subordinación y dependencia que por años ha estado establecido a través de las políticas públicas asistencialistas del Estado. El Régimen Especial de Protección se muestra como una figura jurídica incluyente ya que toma en cuenta a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y a los pueblos indígenas en contacto inicial. Por tanto está sentando las bases para una serie de políticas interculturales para atender de manera adecuada a estos pueblos dentro de un contexto que les garantice sus derechos más fundamentales como son la vida, el territorio y sus recursos.

Conclusiones

Abordar el tema de los territorios indígenas en Venezuela ha requerido la formulación de varias preguntas a partir de las cuales pudimos plantear nuestra hipótesis principal y las dos hipótesis accesorias. Las preguntas de partida fueron: ¿Fue la aplicación del principio *res nullius* determinante en la fragmentación de los territorios indígenas y de la expansión del Estado Nación en Venezuela?; ¿Es el principio *res nullius* aplicado históricamente a los territorios indígenas en Venezuela, el origen del lento reconocimiento de los derechos territoriales?; ¿Cuáles son los elementos recurrentes de la aplicación histórica del principio *res nullius*?; ¿Es el desmembramiento de los territorios indígenas producto del resurgimiento del principio *res nullius* en el actual Estado-Nación Venezuela?; ¿Cuáles son los elementos comunes entre la configuración inicial del Estado-Nación Venezuela y su configuración actual que demuestran que los territorios indígenas siguen siendo *res nullius*?; ¿La aplicación de la *res nullius* es lo que no permite que haya demarcación en Venezuela?; ¿Cuáles son los motivos por los cuales la demarcación sigue siendo un asunto pendiente?; Frente a los avances jurídicos y letargos políticos: ¿un régimen especial de protección podría coadyuvar a resolver el problema de la demarcación y estimular así la autogestión de los pueblos indígenas?.

Sobre estos cuestionamientos, planteamos en primer lugar que, si la ocupación y fragmentación de los territorios indígenas en Venezuela son producto del desbalance histórico generado por la aplicación del principio *res nullius* como modo de adquirir la propiedad en la configuración del Estado Nación, entonces es posible identificar al mencionado principio como el elemento jurídico principal que en la actualidad ha permitido los procesos de ocupación, desplazamiento y violencia política en los territorios indígenas. En segundo lugar, las hipótesis accesorias planteadas sostienen por un lado, que la aplicación del principio *res nullius* en los territorios indígenas de Venezuela ha provocado desplazamientos y violencia política que afectan principalmente a los pueblos indígenas y sus modos de vida; y por el otro, que la planificación y

posterior emprendimiento de un régimen especial de protección significaría un mejoramiento en el problema de la demarcación, tomando como ejemplo el Pueblo *Uwöttuja* de la Cuenca del Sipapo en el Estado Amazonas.

El trabajo de investigación que hemos realizado desde el año 2011 hasta el año 2015 da por ciertas las hipótesis planteadas a través del cuerpo de conclusiones que nos disponemos a exponer.

1. El movimiento social indígena ha logrado insertarse en el discurso de los DDHH, propiciando la regeneración de la democracia a partir de países constitucionalmente pluriétnicos y multiculturales, utilizando los sistemas internacionales en favor de sus derechos, consiguiendo tener presencia en Naciones Unidas y otros organismos de carácter regional, teniendo influencia en los debates internacionales vinculados a la globalización, el medio ambiente y la diversidad cultural y buscando superar el individualismo extremo propio de la cultura social occidental, promocionando la reciprocidad y la ayuda. Por tanto, frente al modelo paternalista instaurado en los países latinoamericanos, el movimiento social indígena ha hecho posible el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el desarrollo de un ordenamiento jurídico especial, el reconocimiento de los derechos fundamentales entre los que se encuentra el territorio y la construcción de algunas políticas públicas distintas al asistencialismo histórico.
2. Los derechos de los pueblos indígenas se han incluido en la dinámica nacional e internacional en torno a la práctica e institucionalidad relacionada con los DDHH. El DI ha creado y adoptado instrumentos normativos de distinto valor para que los Estados procuren la no discriminación, en un contexto de respeto a la igualdad y la diferencia, partiendo del desbalance histórico del conflicto, que ha producido espoliación, pobreza y subordinación en los pueblos indígenas del mundo. De igual manera, el DI ha promovido la creación de políticas públicas encaminadas a erradicar la desigualdad y lograr la materialización de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.

3. Así como hemos observado la incorporación de los preceptos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano desde 1999 y sus resultados exitosos con algunas políticas públicas dictadas en favor de los pueblos y comunidades indígenas del país, no se puede afirmar que se haya avanzado en la erradicación de la desigualdad que más gravemente les afecta: el despojo de sus territorios. La aplicación del principio *res nullius* desde la conquista y la colonización, determinó la fragmentación de los territorios indígenas favoreciendo la expansión de lo que luego sería el Estado Nación Venezuela.
4. La aplicación histórica del principio *res nullius* a los territorios indígenas en Venezuela, es el origen del lento reconocimiento de los derechos territoriales, en un principio, porque los indígenas no eran sujetos de derecho, y posteriormente, con el crecimiento de un Estado tan rico en recursos como el venezolano, reconocer derechos a los pueblos indígenas obligaba al Estado a reconocer el derecho al territorio, lo que implicaba convertir a los pueblos indígenas en sujetos de derecho público y esto no estaba entre las prioridades del aparato político y jurídico del país. En cambio, se dictaron medidas integracionistas y asimilacionistas que “igualaban” en mal sentido a los indígenas con el resto de la población nacional. En otras palabras, el conflicto de los territorios indígenas frente al Estado Nación Venezuela ha estado determinado por la aplicación histórica del principio *res nullius* a través de políticas y dictámenes del Estado, valiéndose de los elementos comunes que tiene desde su configuración inicial hasta la actualidad como lo es el hecho de que el Estado sea dueño de las tierras de nadie, sobre las cuales ejerce un dominio directo y cuyos recursos pueden ser explotados por él o por empresas que ofrezcan mejores condiciones de inversión. Así, cuando se ha logrado reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en el mundo en general y en Venezuela en particular, hay una brecha enorme aún en lo que respecta a la protección y materialización del derecho al territorio, entendiendo éste como el elemento central de la lucha reivindicatoria indígena.
5. Venezuela desde 1999 atraviesa la disyuntiva entre el reconocimiento del derecho y su materialización. Con la nueva Constitución se reconocieron grandes derechos pero frente a ellos hay instituciones débiles incapaces de responder positivamente al desarrollo jurídico. El territorio como elemento fundamental para la existencia de los

pueblos indígenas y sus formas de vida debe gozar de una protección plena frente a la vulneración de derechos. La protección y las garantías deben trascender del reconocimiento normativo para convertirse en algo real en lo cotidiano. Mientras más demore el ejercicio del derecho al territorio; la ocupación, el desplazamiento y la violencia seguirán presentes en los territorios indígenas causando estragos para los indígenas como individuos y como pueblos. El estancamiento en Venezuela se debe en gran medida a que la cuestión indígena está secuestrada por el contexto político nacional y cuando ha habido manifestaciones de descontento, cuando se ha hecho pública la lucha por el territorio, ha habido criminalización de los líderes indígenas, actuando en contra de su humanidad y de la de sus familias.

La Constitución venezolana de 1999 ha integrado unos principios inspiradores para guiar el funcionamiento del ordenamiento jurídico del país, que respondieron –y responden- a una serie de valores y demandas que la sociedad venezolana tiene. Por supuesto que en cumplimiento con lo dispuesto en el DI, la norma venezolana ha buscado también ser más humana reconociendo derechos fundamentales como la igualdad y la diferencia, haciendo del país uno pluriétnico y multicultural, en la aspiración de la refundación democrática de Venezuela. Sin embargo, es tiempo de que se deje de hablar de interculturalidad y pasar a replantearse lo que de verdad está en juego en relación al compromiso social profundo que tiene el Estado venezolano con la sociedad en general y con los pueblos indígenas en particular. Hay que buscar un diálogo serio sobre la reconstrucción del Estado, pensando en un Estado pluricultural en el cual se hace necesario que el concepto de interculturalidad este lleno de contenido y total sentido. Es importante que recuperemos la flexibilidad de la crítica y la autocrítica para hacer de la interculturalidad una nueva práctica para iniciar la formación de los ciudadanos y empezar ciertamente a cambiar las palabras, los discursos y el contexto político y social, para finalmente cambiar el conocimiento sociocultural de la ciudadanía venezolana.

6. El contenido, el significado y el alcance del derecho al territorio de los diferentes pueblos indígenas de Venezuela, es sin duda el derecho madre del cual se desprende la materialización plena de los demás derechos reconocidos en la Constitución de la República. Es injusto que el Estado actúe a partir de la invisibilización del derecho o

visibilizándolo desde un discurso político manipulador que intenta igualar al indígena con el partidario de la Venezuela del siglo XXI, causando división y grandes dificultades para el ejercicio de los derechos reconocidos.

El derecho al territorio está reconocido en la DPPI (2007), en el Convenio 169 (1989), en jurisprudencia de la OEA, en dictámenes de Naciones Unidas, en el ordenamiento nacional venezolano y en el derecho consuetudinario indígena. La preocupación que ha mostrado el DI por los pueblos indígenas, ha influido en el reconocimiento constitucional que Venezuela ha hecho a los pueblos indígenas, reconociendo la diversidad étnica y cultural del país, aceptando a los pueblos indígenas y su propia identidad. Decir que se reconoce el derecho al territorio debe significar el acceso a la territorialidad, lo que a su vez tiene una vinculación directa con el derecho a la autonomía y libre determinación. No obstante, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en Venezuela está limitado por la no demarcación de los territorios, en parte porque la libre determinación no encaja con la estructura política del país y se le ha intentado suplantar con espacios de “participación ciudadana” como los consejos comunales para organizarse y administrar recursos, lo que ha contribuido a que los pueblos indígenas en vez de buscar una autogestión desde sus propios territorios, estén destinados a esperar indefinidamente por el proceso de demarcación estatal y por tanto mantenerse con ayudas, subsidios y misiones sociales asistencialistas, que los conserva en una relación de subordinación directa con el Estado.

7. La protesta indígena es motivada por la falta de demarcación de sus territorios por la (de) mora en el cumplimiento constitucional. La demarcación es una tarea impostergable, en este sentido, si el gobierno de Venezuela estuviera dispuesto a cumplir con los preceptos constitucionales y con los instrumentos normativos creados en el DI, uno de sus objetivos primordiales debería ser la demarcación de los territorios de los pueblos indígenas, entendiendo la demarcación como la materialización del reconocimiento de la multiculturalidad y pluriétnia venezolana. Como se ha visto en nuestra investigación, la aplicación del *res nullius* es una de las causas principales de que la demarcación en Venezuela sea un proceso lento, engorroso, accidentado e incompleto. Mientras tanto, el Estado sigue llevando a cabo

sus actividades extractivas en los territorios indígenas a partir de la invisibilización del derecho, en un contexto de desamortización y mercantilización, lo que en el pasado era *res nullius*, hoy sigue siendo *res nullius*, lo demás simplemente cambió de titular. En este sentido podemos afirmar que los elementos del discurso sobre los indígenas de los siglos XIX y XX siguen presentes hoy casi intactos.

8. La existencia de un Ministerio para Pueblos Indígenas en Venezuela, debería significar la gran oportunidad para el desarrollo de políticas públicas coherentes con la realidad indígena venezolana, atendiendo de forma urgente entre otras cosas, la demarcación. En cambio, el Ministerio ha jugado un rol perverso interfiriendo en la materialización de los derechos reconocidos, apostando por dividir a las comunidades indígenas del país para entorpecer la demarcación. Si el Ministerio como órgano del Estado no está dispuesto a dialogar en busca de un pronto entendimiento, los más ignorados seguirán siendo los pueblos indígenas y sus sectores más críticos. Con respecto a la división de los indígenas hay que decir que se ha generado precisamente de las molestias por no poder materializar el derecho reconocido, ya que frente a ese problema hay indígenas que han decidido luchar, pero hay otros indígenas que se han dedicado a trabajar en la explotación de los recursos, a formar parte de la política del país ocupando espacios funcionariales, defendiendo derechos del Estado y no de los pueblos indígenas.
9. Si el gobierno venezolano procurara el mantenimiento de la paz y la democracia, el Estado estuviera involucrándose a través de su institucionalidad con la materialización de los derechos indígenas. Hay una desarticulación de acciones que ha llevado al desgaste de las propias organizaciones de base. El Estado debe hacer un esfuerzo de engranaje desde los planteamientos de las organizaciones indígenas hasta las políticas públicas propias de su proceder. No puede haber satisfacción en el derecho cuando las instituciones de siempre no actúan para hacer los cambios. Los desplazamientos, la violencia y la muerte seguirán presentes hasta que los DDHH se formulen localmente, dentro del contexto venezolano, atendiendo a todas sus complejidades actuales, buscando preservar los pueblos y sus culturas a través de la tenencia de la tierra.
10. Los DDHH no pueden estar divorciados de las ideas económicas de las comunidades y pueblos indígenas, por tanto, formas de desarrollo propio como el buen vivir y la propia administración de recursos, son definitivamente espacios reales de

participación ciudadana igual y diferenciada que el Estado en cumplimiento de su legislación debería permitir y fomentar. No obstante, mientras en los territorios indígenas el Estado siga promocionando modelos que colaboran con etnocidios silenciosos, continúe llevando a cabo megaproyectos extractivos como el arco minero propuesto por el Presidente Chávez en el segundo plan socialista de la nación, no se detenga a elaborar procesos de consulta previa, libre e informada; las relaciones entre las organizaciones indígenas y el aparato político venezolano seguirán distanciadas y no se podrá materializar el texto constitucional.

11. En medio de las dificultades jurídicas y sobretodo políticas que presenta el proceso de la autodemarcación por un lado, y la inacción estatal en lo que respecta a la demarcación por el otro; la implementación de un régimen especial de protección como el propuesto por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, basado en la cosmovisión del pueblo Uwöttuja, sus usos y costumbres, mapas mentales y plan de vida, puede convertirse en una buena práctica que cubra la distancia que hay entre lo que el Estado hace otorgando títulos de deslinde y lo que verdaderamente significa la autodemarcación desde abajo. El régimen especial de protección es una figura jurídica que encaja consistentemente en atención a los conflictos y tensiones que hay alrededor del territorio indígena en Venezuela. Si se llevara a cabo con el pueblo Piaroa, no hay razones para suponer que no sería exitoso con otros pueblos, tomando en cuenta que todos los pueblos indígenas de Venezuela tienen la misma situación con el aparato del Estado por el desbalance histórico del conflicto por la tierra. Con el régimen especial de protección se hace factible la descolonización, la aceptación plena de la identidad y la iniciación en las decisiones propias. Debemos repetir en este punto que sin identidad no es posible la materialización de derechos, el territorio es el elemento clave de la identidad. El régimen especial de protección garantizaría la vigencia del modelo de país pluriétnico y multicultural planteado desde 1999 lo que sería un aporte importante para un país que busca justicia y paz.
12. En caso de que el régimen especial de protección dejara de ser una propuesta para convertirse en una política pública, resulta necesario que el Estado Nación Venezuela exija la colaboración de los expertos del área para la viabilidad y vitalidad del mismo.

¿Cómo empezar?, ¿cómo colaborar?, ¿qué aportar?, ¿cuáles son los tiempos?, ¿qué entes del Estado deben participar?, ¿cuáles representantes indígenas pueden y deben acompañar el proceso?, son preguntas que pueden dar pie a nuevas investigaciones y propuestas. Queda en pie nuestra invitación constante y comprometida a que alternativas como estas puedan ser tomadas como políticas públicas en nuestro país, que se puedan hacer realidad en un corto plazo y que perduren en el tiempo.

“La nación no quiere sangre ni turbulencia, ni desmedros ni menoscabos. Quiere realizarse en el ejercicio de todos los derechos humanos tan justamente conquistados. Quiere vivir la vida de la solidaridad nacional y de la fraternidad universal a la que ha contribuido en horas supremas para implantar, por fin, después de tantos sacrificios, la regularización de su vida por los principios de las leyes inmanentes y las reglas más conducentes a esa finalidad.”

– Hipólito Yrigoyen

Apéndice

1. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

LEY ORGÁNICA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Capítulo I: Del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas

Del reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos originarios

Artículo 1. El Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal, así como las demás leyes de la República, para asegurar su participación activa en la vida de la Nación venezolana, la preservación de sus culturas, el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen posibles.

De las normas aplicables

Artículo 2. Lo relacionado con los pueblos y comunidades indígenas se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados, pactos y convenciones internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República, así como por lo establecido en la presente Ley, cuya aplicación no limitará otros derechos garantizados a estos pueblos y comunidades, en normas diferentes a éstas. Serán de aplicación preferente aquellas normas que sean más favorables a los pueblos y comunidades indígenas.

De los conceptos

Artículo 3. A los efectos legales correspondientes se entiende por:

1. Pueblos Indígenas: Son grupos humanos descendientes de los pueblos originarios que habitan en el espacio geográfico que corresponde al territorio nacional, de conformidad con la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, que se reconocen a sí mismos como tales, por tener uno o algunos de los siguientes elementos: identidades étnicas, tierras, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y, sistemas de justicia propios, que los distinguen de otros sectores de la sociedad nacional y que están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras.

2. Comunidades Indígenas: Son grupos humanos formados por familias indígenas asociadas entre sí, pertenecientes a uno o más pueblos indígenas, que están ubicadas en un determinado espacio geográfico y organizados según las pautas culturales propias de cada pueblo, con o sin modificaciones provenientes de otras culturas.

3. Indígena: Es toda persona descendiente de un pueblo indígena, que habita en el espacio geográfico señalado en el numeral 1 del presente artículo, y que mantiene la identidad cultural, social y económica de su pueblo o comunidad, se reconoce a sí misma como tal y es reconocida por su pueblo y comunidad, aunque adopte elementos de otras culturas.

4. Tierras Indígenas: Son aquellas en las cuales los pueblos y comunidades indígenas de manera individual o colectiva ejercen sus derechos originarios y han desarrollado tradicional y ancestralmente su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política. Comprenden los espacios terrestres, las áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, asentamientos, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos

y otras áreas que hayan ocupado ancestral o tradicionalmente y que son necesarias para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida.

5. Hábitat indígena: Es el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y socioculturales, que constituyen el entorno en el cual los pueblos y comunidades indígenas se desenvuelven y permiten el desarrollo de sus formas tradicionales de vida. Comprende el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna y en general todos aquellos recursos materiales e inmateriales necesarios para garantizar la vida y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

6. Organización propia: Consiste en la forma de organización y estructura político-social que cada pueblo y comunidad indígena se da a sí misma, de acuerdo con sus necesidades y expectativas y según sus tradiciones y costumbres.

7. Instituciones propias: Son aquellas instancias que forman parte de la organización propia de los pueblos y comunidades indígenas, las cuales por su carácter tradicional dentro de estos pueblos y comunidades, son representativas del colectivo como por ejemplo la familia, la forma tradicional de gobierno y el consejo de ancianos.

8. Autoridades legítimas: Se consideran autoridades legítimas a las personas o instancias colectivas que uno o varios pueblos o comunidades indígenas designen o establezcan de acuerdo con su organización social y política, y para las funciones que dichos pueblos o comunidades definan de acuerdo con sus costumbres y tradiciones.

9. Ancestralidad: Es el vínculo cultural que por derecho de los antepasados equivale a la herencia histórica que se transfiere de generación en generación en los pueblos y comunidades indígenas.

10. Tradicionalidad: Consiste en las formas o prácticas de usos y ocupación de tierras, que corresponde a los patrones culturales propios de cada pueblo y comunidad indígena, sin que se requiera una continuidad en el tiempo o en el espacio y respeto a sus posibilidades innovadoras.

11. Integridad Cultural: Es el conjunto armónico de todas las creencias, costumbres, modos de conducta, valores y toda manifestación social, familiar, espiritual, económica y política de los pueblos y comunidades indígenas, que le permiten identificarse a sí mismos y diferenciarse entre sí y de los demás. Todos estos elementos son transmitidos de generación en generación y poseen un carácter colectivo.

12. Propiedad colectiva indígena: Es el derecho de cada pueblo y comunidad indígena de usar, gozar, disfrutar y administrar un bien material o inmaterial, cuya titularidad pertenece de forma absoluta e indivisible a todos y cada uno de sus miembros, a los fines de preservar y desarrollarla integridad física y cultural de las presentes y futuras generaciones.

13. Medicina tradicional indígena: Comprende el conjunto de conocimientos de biodiversidad, así como las prácticas, ideas, creencias y procedimientos relativos a las enfermedades físicas, mentales o desequilibrios sociales de un pueblo y comunidad indígena determinado. Este conjunto de conocimientos explican la etiología y los procedimientos de diagnóstico, pronóstico, curación, prevención de las enfermedades y promoción de la salud. Éstos se transmiten por la tradición de generación en generación dentro de los pueblos y comunidades indígenas.

14. Prácticas económicas tradicionales: Se consideran prácticas económicas tradicionales aquellas realizadas por los pueblos y comunidades indígenas dentro de su hábitat y tierras, de acuerdo con sus necesidades y sus patrones culturales propios, que comprenden sus técnicas y procedimientos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, sus formas de cultivo, cría, caza, pesca, elaboración de productos, aprovechamiento de recursos naturales y productos forestales con fines alimentarios, farmacológicos y como materia prima para la fabricación de viviendas, embarcaciones, implementos, enseres utilitarios, ornamentales y rituales, así como sus formas tradicionales e intercambio intra e intercomunitario de bienes y servicios. La innovación en las prácticas económicas en los pueblos y comunidades indígenas no afectan el carácter tradicional de las mismas.

Del objeto de la ley

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases para:

1. Promover los principios de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe, en un Estado de justicia, federal y descentralizado.
2. Desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes, convenios, pactos y tratados válidamente suscritos y ratificados por la República.

3. Proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, con fundamento en sus culturas e idiomas.
4. Establecer los mecanismos de relación entre los pueblos y comunidades indígenas con los órganos del Poder Público y con otros sectores de la colectividad nacional.
5. Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, comunidades indígenas y de sus miembros.

Autogestión de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 5. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la administración, conservación y utilización del ambiente y de los recursos naturales existentes en su hábitat y tierras.

De la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de las políticas públicas

Artículo 6. El Estado promoverá y desarrollará acciones coordinadas y sistemáticas que garanticen la participación efectiva de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos nacionales, regionales y locales. Los pueblos y comunidades indígenas participarán directamente o a través de sus organizaciones de representación, en la formulación de las políticas públicas dirigidas a estos pueblos y comunidades o de cualquier otra política pública que pueda afectarles directa o indirectamente. En todo caso, deberá tomarse en cuenta la organización propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante, como expresión de sus usos y costumbres.

De la personalidad jurídica

Artículo 7. Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas a los fines del ejercicio de los derechos colectivos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República y demás leyes. Su representación será

determinada por los pueblos y comunidades indígenas, según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su organización propia, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.

Los indígenas en zonas urbanas

Artículo 8. Los ciudadanos o ciudadanas indígenas que habitan en zonas urbanas tienen los mismos derechos que los indígenas que habitan en su hábitat y tierras, en tanto correspondan. Los indígenas podrán solicitar ante las autoridades competentes atención para recibir educación intercultural bilingüe, servicios de salud adecuados, créditos, constitución de cooperativas y empresas, y el acceso a actividades de promoción cultural, debiendo el Estado brindar el apoyo necesario y suficiente para garantizar estos derechos.

De la formación y capacitación de los funcionarios públicos

Artículo 9. Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en esta Ley, el Estado implementará programas de formación y capacitación de los funcionarios públicos civiles o militares que laboren en hábitat y tierras indígenas, en actividades o instituciones relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, para el conocimiento y respeto de sus derechos, culturas, usos y costumbres.

Toda persona natural o jurídica de carácter privado que desarrolle o pretenda desarrollar su actividad en hábitat y tierras indígenas estará sujeta a la obligación de formación y capacitación de sus trabajadores en materia indígena.

De la integridad territorial

Artículo 10. El reconocimiento por parte del Estado de los derechos y garantías contenidas en esta

Ley no significa bajo ninguna circunstancia que se autorice o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado venezolano, ni otros principios, derechos y garantías contenidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en las demás leyes de la República.

Capítulo II: De la consulta previa e informada

De la consulta

Artículo 11. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

Toda actividad de aprovechamiento de recursos naturales y cualquier tipo de proyectos de desarrollo a ejecutarse en hábitat y tierras indígenas, estará sujeta al procedimiento de información y consulta previa, conforme a la presente Ley.

De las prohibiciones

Artículo 12. Se prohíbe la ejecución de actividades en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas que afecten grave o irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pueblos o comunidades.

De la aprobación en asamblea

Artículo 13. Toda actividad o proyecto que se pretenda desarrollar o ejecutar dentro del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas deberá presentarse mediante un proyecto a los pueblos o comunidades indígenas involucrados, para que reunidos en asamblea decidan en qué medida sus intereses puedan ser perjudicados y los mecanismos necesarios que deben adoptarse para garantizar su protección. La decisión se tomará conforme a sus usos y costumbres. En los casos que se pretenda iniciar una nueva fase del proyecto o extender el ámbito del mismo a nuevas áreas, la propuesta deberá ser sometida a los pueblos y comunidades involucrados, cumpliendo nuevamente con el procedimiento establecido en el presente capítulo.

De la presentación

Artículo 14. Los proyectos serán presentados con no menos de noventa días de anticipación a su consideración por parte de los pueblos y comunidades indígenas respectivos, reunidos en asamblea.

Éstos deberán contener toda la información necesaria sobre la naturaleza, objetivos y alcance de los mismos, así como los beneficios que percibirán los pueblos y comunidades indígenas involucrados y los posibles daños ambientales, sociales, culturales o de cualquier índole y sus condiciones de reparación, a los fines de que puedan ser evaluados y analizados previamente por el pueblo o la comunidad respectiva. Así mismo, los pueblos y comunidades indígenas involucrados contarán con el apoyo técnico del ente ejecutor de la política indígena del país y demás instituciones del Estado al igual que de las organizaciones indígenas nacionales, regionales o locales.

De las reuniones previas

Artículo 15. Los pueblos y comunidades indígenas involucrados deberán fijar reuniones con los proponentes del proyecto, a los fines de aclarar dudas sobre el contenido o alcance del mismo o de las actividades propuestas, así como para presentar las observaciones y modificaciones correspondientes. Estas reuniones deberán ser anteriores a la asamblea a la que se refiere el artículo

13 de esta Ley, y podrán ser asistidos técnica y jurídicamente por representantes del ente rector de la política indígena del país u otro órgano del Estado, de igual manera que por las organizaciones indígenas locales, regionales o nacionales. En las reuniones previas podrán participar libremente los miembros del pueblo o comunidad indígena involucrado.

De las asambleas

Artículo 16. Las asambleas a que se refiere el artículo 13 de esta Ley deberán efectuarse conforme a los usos y costumbres de cada uno de los pueblos o comunidades indígenas involucrados. En aquellos casos en que el proyecto deba ser aprobado por dos o más comunidades indígenas, éstas podrán tomar la decisión conjunta o separadamente, no pudiéndose en ningún caso obligar a los pueblos o comunidades indígenas a implementar mecanismos de toma de decisiones distintas a los propios.

Los representantes del ente rector de la política indígena del país, así como de las organizaciones indígenas locales, regionales o nacionales, a solicitud de la comunidad indígena involucrada, podrán apoyar logísticamente la realización de estas asambleas, pero en ningún caso podrán tener injerencia en la toma de decisiones.

Los proponentes del proyecto sólo podrán estar presentes en las asambleas si así lo acordare previamente la comunidad indígena respectiva.

De los acuerdos

Artículo 17. Los proyectos que sean sometidos a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, se establecerán por escrito de mutuo acuerdo entre éstos y los proponentes, las condiciones de su ejecución según el proyecto presentado. En caso de incumplimiento los pueblos y comunidades indígenas podrán ejercer las acciones legales a que haya lugar por ante los tribunales competentes.

En caso de que los pueblos y comunidades indígenas involucrados expresen su oposición al proyecto referido, los proponentes podrán presentar las alternativas que consideren necesarias, continuando así el proceso de discusión para lograr acuerdos justos que satisfagan a las partes.

Queda prohibida la ejecución de cualquier tipo de proyecto en el hábitat y tierras indígenas por persona natural o jurídica de carácter público o privado que no hayan sido previamente aprobados por los pueblos o comunidades indígenas involucrados.

Del respeto a las autoridades legítimas indígenas

Artículo 18. Los órganos, entes y demás organismos del Estado, las instituciones privadas o los particulares, no podrán ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, el rango y la función de las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.

De la acción de amparo

Artículo 19. Los pueblos y comunidades indígenas podrán intentar la acción de amparo constitucional contra la actuación de cualquier institución pública, privada o de particulares, que inicien o ejecuten cualquier proyecto dentro del hábitat y tierras indígenas sin cumplir con el procedimiento establecido en el presente Capítulo. Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar la nulidad de las concesiones o autorizaciones otorgadas por el Estado cuando los proponentes o encargados de la ejecución del proyecto, violen lo acordado con los pueblos y comunidades indígenas involucrados.

TÍTULO II: DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Capítulo I: Disposiciones generales

Del derecho al hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 20. El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

Capítulo II: Del hábitat y las tierras indígenas en espacios geográficos fronterizos

De la protección ante los conflictos en zonas fronterizas

Artículo 21. El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la protección y seguridad debida en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas en los espacios fronterizos, preservando la integridad del territorio, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social e integral.

Del intercambio entre pueblos indígenas de países limítrofes y los acuerdos internacionales

Artículo 22. Los pueblos y comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas tienen el derecho de mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con los pueblos y comunidades indígenas de países limítrofes, en actividades de carácter social, económico, cultural, espiritual ambiental y científico. El Estado, con la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas, debe adoptar las medidas apropiadas, mediante tratados, acuerdos o convenios internacionales, dirigidas a fomentar y facilitar la cooperación, integración, intercambio, tránsito, desarrollo económico y prestación de servicios públicos para estos pueblos o comunidades.

Capítulo III: De la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

De la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 23. El Estado reconoce y garantiza el derecho originario de los pueblos y comunidades indígenas a su hábitat y a la propiedad colectiva de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. El Poder Ejecutivo, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, realizará la demarcación de su hábitat y tierras a los fines de su titulación de acuerdo con los principios y al procedimiento establecido en la presente Ley. Para la demarcación y titulación serán de obligatoria observación las realidades culturales, etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponimia indígena, los cuales deberán reflejarse en los documentos correspondientes.

De los desplazados

Artículo 24. Los pueblos y comunidades indígenas que por medios violentos o vías de hecho hayan sido desplazados de su hábitat y tierras, o por razones de seguridad se hayan visto forzados a ocupar otras, tienen derecho a la restitución de su hábitat y tierras originarios o, en su defecto, a la demarcación y titulación de aquellos que actualmente ocupan, preferiblemente en áreas aledañas al hábitat y tierras indígenas originarias.

Cuando no proceda la restitución o la demarcación a que se contrae el presente artículo, el Estado garantizará a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a tierras de similares condiciones a las del hábitat y tierras originarias y que atiendan a las necesidades y expectativas de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme a las leyes que rigen la materia.

Estas tierras serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

De los títulos anteriores

Artículo 25. Los pueblos y comunidades indígenas que cuenten con documentos definitivos o provisionales, que acrediten su propiedad o posesión colectiva sobre sus tierras, otorgados sobre la base de diferentes dispositivos de la legislación agraria o según el derecho común, incluso títulos coloniales registrados o no, podrán presentarlos a los fines de la demarcación y titulación de conformidad con la ley que rige la materia y con

la presente Ley. Adicionalmente deben incluirse como parte del hábitat y tierras indígenas, aquellos espacios geográficos a los que estos pueblos y comunidades han tenido acceso ancestral y tradicionalmente, aunque dichos títulos no versaren sobre ellos.

De la inafectabilidad del hábitat y tierras indígenas

Artículo 26. El hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ningún caso pueden ser calificados como baldías, ociosas o incultas a los fines de su afectación o adjudicación a terceros en el marco de la legislación agraria nacional, ni consideradas como áreas de expansión de las ciudades para su conversión en ejidos.

Del uso y la sucesión del hábitat y tierras indígenas

Artículo 27. Los pueblos y comunidades indígenas determinarán, de común acuerdo y según sus usos y costumbres, las formas, uso y sucesión de su hábitat y tierras. Las controversias que puedan surgir al respecto serán resueltas en base a su derecho propio y en su jurisdicción.

Del uso, goce, aprovechamiento y administración del hábitat y tierras indígenas

Artículo 28. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso, goce, aprovechamiento y a participar en la administración de su hábitat y tierras, a los fines de mantener sus formas de vida, promover sus prácticas económicas y definir su participación en la economía nacional. Sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen la materia.

De las formas de propiedad colectiva

Artículo 29. La propiedad colectiva del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas podrá ser de uno o más pueblos y de una o más comunidades indígenas según las condiciones, características y exigencias de los mismos.

Del registro de los títulos de propiedad colectiva

Artículo 30. Los títulos de propiedad colectiva sobre el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, otorgados con las formalidades de la presente Ley, deben ser registrados ante la oficina municipal de catastro y ante el registro especial que al efecto creará el Ejecutivo Nacional. Los títulos de propiedad colectiva están exentos del pago de derechos de registro y de cualquier otra tasa o arancel, que se establezca por la prestación de este servicio. En los municipios que corresponda conforme a la ley que regula la

materia, se creará el catastro del hábitat y tierras indígenas y dispondrá lo necesario para la inserción de los títulos de propiedad colectiva indígena.

De la improcedencia de ejidos en hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 31. Las tierras correspondientes a los pueblos y comunidades indígenas no podrán constituirse en ejidos. Las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos y comunidades indígenas que hayan sido declaradas como ejidos, serán transferidas a estos pueblos y comunidades previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas municipales, a los fines de su demarcación y titulación conforme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la presente Ley, sin menoscabo de los derechos de terceros.

De las áreas naturales protegidas en hábitat y tierras indígenas

Artículo 32. El hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas sobre los cuales se han establecido áreas naturales protegidas, deben ser incluidos en la demarcación y titulación del hábitat y tierras conforme a la presente Ley y demás disposiciones legales que rigen la materia.

Capítulo IV: Del procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas

De la participación de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas

Artículo 33. Las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas y las organizaciones indígenas participarán en la planificación y ejecución de las actividades de demarcación a los fines de facilitar entre otros aspectos, el levantamiento topográfico y cartográfico del hábitat y tierras indígenas a demarcar. En el proceso de demarcación se le dará especial importancia a los conocimientos ancestrales y tradicionales aportados por los ancianos y ancianas indígenas sobre la ocupación del hábitat y tierras.

De las instancias de demarcación

Artículo 34. El procedimiento de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas estará a cargo del Ejecutivo Nacional por órgano del ministerio competente según lo previsto en la ley que rige la materia. La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas y las

comisiones regionales de demarcación o, los entes que a tales fines sean creados, actuarán por órgano del ministerio con competencia en esta materia, de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias.

De los recursos

Artículo 35. El Ejecutivo Nacional, a través de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dispondrá de los recursos humanos, económicos, científicos y tecnológicos necesarios para la demarcación del hábitat y tierras indígenas. El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar debe prestar todo su apoyo científico, tecnológico y logístico en el proceso de demarcación del hábitat y tierras indígenas.

De la información

Artículo 36. La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas y las comisiones regionales, requerirán de los órganos del Poder Público Nacional, estatal y municipal, toda la información que dispongan sobre los pueblos y comunidades indígenas que guarden relación con el proceso de demarcación.

De la subsanación

Artículo 37. La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas y las comisiones regionales, podrán en cualquier momento subsanar las faltas o vicios de índole administrativo que puedan surgir durante el procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas, de lo que deberán ser notificados los interesados.

Del inicio del procedimiento

Artículo 38. El procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas se iniciará de oficio o a solicitud del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas, directamente o a través de sus organizaciones indígenas previstas en esta Ley. Corresponde a las comisiones regionales de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas el inicio del procedimiento, la apertura y sustanciación del respectivo expediente.

Cuando el procedimiento de demarcación se inicie a solicitud de parte interesada, en forma oral o escrita, se requerirá la siguiente información:

1. Identificación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas de pertenencia.
2. Identificación de las autoridades legítimas o representantes del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas o de sus organizaciones indígenas.
3. Población estimada.
4. Ubicación geográfica, indicando en forma práctica los linderos aproximados del hábitat y tierras solicitadas, así como otra información geográfica, expresando si son compartidos con otros pueblos y comunidades indígenas.
5. Documentos de cualquier naturaleza sobre el hábitat y tierras indígenas a demarcar, si los hubiere.
6. Proyecto de demarcación o autodemarcación del hábitat y tierras indígenas, si lo hubiere.
7. Existencia de terceros no indígenas dentro del hábitat y tierras indígenas.
8. La dirección donde se harán las notificaciones y la firma del o los solicitantes.
9. Cualquiera otra información necesaria para la demarcación.

Si la solicitud es presentada en forma oral, se levantará un acta al efecto. En cualquiera de los casos, se dará constancia del recibo de la petición.

Cuando el procedimiento se inicia de oficio, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas ordenará la apertura del expediente y librará las boletas de notificación correspondiente. En todo lo demás se regirá conforme al procedimiento de solicitud de parte.

De la acumulación

Artículo 39. Las solicitudes de demarcación del hábitat y tierras indígenas se tramitarán por orden cronológico y cuando existan varias peticiones de una misma comunidad, grupo de comunidades o pueblos indígenas, sobre un mismo espacio geográfico se acumularán en un solo expediente.

Del auto de apertura

Artículo 40. Recibida la solicitud o iniciada de oficio, la Comisión Regional de Demarcación del

Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro de los tres días hábiles siguientes, dictará el auto de apertura del expediente de demarcación del hábitat y tierras indígenas.

Si la solicitud es presentada ante la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ésta la remitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas correspondiente, para la apertura y sustanciación del expediente.

De las notificaciones y del cartel

Artículo 41. Dictado el auto de apertura del procedimiento, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro de los tres días hábiles siguientes, librará las boletas de notificación a los órganos, entes competentes del Estado, a las autoridades legítimas o representantes del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas y demás interesados.

Dentro del mismo lapso, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas ordenará la publicación de un cartel en dos diarios, uno de circulación nacional y otro de circulación regional, en el cual se colocará un ejemplar en un sitio visible en la sede de la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, a los fines de notificar a toda persona cuyos derechos e intereses puedan verse afectados en el procedimiento de demarcación. El cartel contendrá la identificación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas involucrados, ubicación del hábitat y tierras objeto del procedimiento, y cualquier otra información que se estime necesaria, para que dentro de los quince días hábiles en que conste en el expediente, dicho cartel publicado y las notificaciones correspondientes, presenten sus alegatos y defensas. En el procedimiento de demarcación no opera la perención.

En los procedimientos judiciales o administrativos que pretendan el desalojo de pueblos y comunidades indígenas, el juez o la autoridad competente deberá, desde la declaratoria del inicio del procedimiento de demarcación, hasta el acto definitivo de demarcación, paralizar el procedimiento y abstenerse de decretar y ejecutar medidas de desalojo en contra de estos pueblos y comunidades que, ancestral y tradicionalmente se encuentren

dentro de los espacios geográficos sujetos al procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas.

Dictado el acto definitivo de demarcación, el juez o la autoridad competente adecuara su decisión a lo resuelto en dicho acto.

De los estudios e informe de demarcación

Artículo 42. Vencido el lapso de la presentación de los alegatos y defensas, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, conjuntamente con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas involucrados, realizarán los estudios técnicos, socioculturales, físicos, jurídicos, y elaborará el informe de demarcación en un lapso de sesenta días continuos prorrogable por el mismo lapso, el cual contendrá los siguientes aspectos:

1. Situación cultural de los pueblos y comunidades indígenas: información detallada relativa al pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas de pertenencia; identificación, datos históricos, lingüísticos, socio-antropológicos, mapa mental y censo poblacional de la comunidad o grupo de comunidades indígenas involucrados.
2. Situación física de los pueblos y comunidades indígenas involucrados: ubicación geográfica, extensión, levantamiento cartográfico y topográfico, toponimia, características, elementos propios y demás datos necesarios para la delimitación del hábitat y tierras indígenas.
3. Situación jurídica del hábitat y tierras: exposición motivada de los aspectos legales y jurídicos, indicando si existe algún proyecto de autodemarcación y títulos de cualquier naturaleza que otorguen derechos a los pueblos y comunidades indígenas sobre el hábitat y tierras.
4. Situación de terceros no indígenas: información en caso de existencia de terceros ocupantes, personas naturales o jurídicas, bien sean públicas o privadas o mixtas, nacionales o extranjeros dentro del hábitat y tierras indígenas en demarcación, con indicación de los instrumentos que prueben la posesión o propiedad que éstos tengan, los cuales serán verificados conforme a las leyes que rigen la materia; actividades ejecutadas por el Estado o los particulares en hábitat y tierras indígenas.
5. Posibles conflictos que pudieren surgir como consecuencia de la demarcación.

Del análisis

Artículo 43. Dentro del lapso previsto para elaboración del informe de demarcación, serán analizados los alegatos, defensas y pruebas presentadas por los interesados. En caso de conflictos, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas propondrá los medios alternativos de solución de conflictos, sin menoscabo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Del trámite ante la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas

Artículo 44. Elaborado el informe de demarcación, éste será distribuido entre los miembros de la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro de los quince días continuos al vencimiento del lapso anterior para su discusión. En el mismo lapso, el informe será remitido a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas involucrados, quienes podrán presentar las propuestas u observaciones que consideren pertinentes.

Vencido el lapso, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, tendrá quince días hábiles para la discusión del informe de demarcación, el cual requerirá para su aprobación, el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de esta Comisión. Aprobado el informe de demarcación, se remitirá con el expediente a la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas para su revisión, discusión y dictamen.

Del trámite ante la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas

Artículo 45. Recibido el informe con el expediente por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, lo distribuirá entre sus miembros dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción y fijará su discusión para el quinto día hábil siguiente a la fecha de su distribución. Agotado el término, tendrá un lapso de quince días hábiles para su discusión. Si de la revisión se evidencia la falta de alguno de los elementos que debe contener el informe de demarcación o el expediente, solicitará a la Comisión Regional de

Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas respectiva, remitir la información faltante en un lapso de cinco días hábiles. Recibida la información o vencido este lapso, continuará la discusión del informe de demarcación, la cual no excederá de un lapso de quince días hábiles.

De los conflictos y los acuerdos

Artículo 46. Los conflictos inherentes al procedimiento de demarcación, que se presenten entre el pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas con cualquier persona natural o jurídica, sea de carácter público, privado o mixto, podrán ser resueltos por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro del lapso de discusión del informe de demarcación, a través de acuerdos empleando medios alternativos de solución de conflictos.

De los acuerdos alcanzados se dejará expresa constancia por escrito en el expediente firmado por las partes, sus representantes y los funcionarios que intervienen en el acto. Si se acuerda el pago de cantidades de dinero por derechos de terceros, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas queda encargada de realizar el pago directamente.

Si agotados los medios alternativos de solución de conflictos no se hubiere llegado a un acuerdo, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas continuará con el procedimiento y, en caso de que los terceros no estén conformes podrán ejercer la acción que corresponda, una vez protocolizado y registrado el título de propiedad colectiva del hábitat y tierras indígenas por ante el registro especial correspondiente.

Del dictamen

Artículo 47. Concluido el lapso de discusión del informe de demarcación, revisadas y analizadas todas las actuaciones que contiene el expediente, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro de los cinco días hábiles siguientes, se pronunciará mediante dictamen motivado sobre la demarcación y titulación del hábitat y tierras indígenas, el cual contendrá:

1. Identificación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas involucrados.
2. Indicación de los linderos y medidas del hábitat y tierras indígenas reconocidos como propiedad colectiva indígena.
3. Indicación de los espacios o áreas ocupados por terceros y su identificación, si los hubiere.

4. Indicación de los espacios geográficos correspondientes a áreas naturales protegidas, si los hubiere.
5. Indicación de terrenos declarados como ejidos, si los hubiere.
6. Indicación de los espacios geográficos donde se estén ejecutando proyectos, concesiones o actividades de carácter público, privado o mixto de desarrollo o aprovechamiento de recursos naturales, acompañándose los mapas y demás documentos correspondientes.
7. Exposición motivada de los aspectos legales y jurídicos.

Aprobado el dictamen, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro de los cinco días hábiles siguientes, lo remitirá mediante oficio con el expediente de demarcación en su forma original, a la Procuraduría General de la República a los fines de que sea expedido el título de propiedad colectiva del hábitat y tierras indígenas respectivo, reservándose copia certificada del expediente y del dictamen de demarcación.

La Procuraduría General de la República, en un lapso de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del dictamen con el expediente de demarcación, expedirá el título de propiedad colectiva del hábitat y tierras indígenas. Dentro del mismo lapso, la Procuraduría General de la República podrá solicitar por ante la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas información concerniente al dictamen de demarcación. Se establece un lapso de quince días hábiles para la protocolización y registro del título de propiedad colectiva del hábitat y tierras indígenas por ante el registro especial correspondiente. Este acto agota la vía administrativa, y contra él se podrá ejercer el recurso de nulidad conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por ante la Sala Político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los sesenta días siguientes a su registro y protocolización en el registro especial respectivo.

Capítulo V: Del ambiente y recursos naturales

Del derecho a un ambiente sano

Artículo 48. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado y coadyuvarán en la protección del ambiente y de los recursos naturales, en especial los parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, reservas de biosfera, reservas de agua y demás áreas de importancia ecológica. En ningún caso se permitirán actividades que desnaturalicen o produzcan daños irreversibles a estas áreas especialmente protegidas.

De la prohibición de sustancias tóxicas y peligrosas

Artículo 49. El hábitat y tierras indígenas no podrán ser utilizados para la disposición de desechos

o para el almacenamiento o destrucción de sustancias tóxicas y peligrosas provenientes de procesos industriales y no industriales, así como de ninguna otra índole.

De la corresponsabilidad entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 50. El Estado, en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, garantizará y velará por la conservación e integridad del hábitat y tierras indígenas, la riqueza de la biodiversidad, el manejo adecuado de los recursos genéticos, la preservación de las cuencas y la armonía del paisaje, para lo cual adoptará las medidas necesarias de protección y manejo sostenible de las mismas, tomando en cuenta los criterios y conocimientos tradicionales de manejo ambiental de los pueblos y comunidades indígenas.

De las zonas de interés turístico

Artículo 51. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso, goce, aprovechamiento y administración de las zonas de interés turístico, vocación turística y geográficas turísticas que se encuentran en su hábitat y tierras.

De la educación ambiental

Artículo 52. El Estado, en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, promoverá y desarrollará programas de educación ambiental, para el manejo, uso y conservación sustentable de los recursos naturales, con criterios técnicos

adecuados y en concordancia con los conocimientos indígenas en materia ambiental, de manejo, uso y conservación de su hábitat y tierras.

Capítulo VI: Del aprovechamiento de los recursos naturales el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

Del uso de los recursos naturales existentes en el hábitat y tierras indígenas

Artículo 53. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho al uso y aprovechamiento sustentable y a la administración, conservación, preservación del ambiente y de la biodiversidad.

Las aguas, la flora, la fauna y todos los recursos naturales que se encuentran en su hábitat y tierras, podrán ser aprovechados por los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo y actividades tradicionales.

De los recursos naturales propiedad de la Nación en hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 54. El aprovechamiento por parte del Estado de los recursos naturales propiedad de la Nación en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, está sujeto a la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas involucrados, la cual debe ser suficientemente informada, fundamentada y libremente expresada por dichos pueblos y comunidades indígenas, conforme al procedimiento de consulta establecido en la presente Ley.

En la ejecución de estas actividades deberán establecerse las medidas necesarias para evitar su impacto sociocultural y ambiental, así como garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y el bienestar sobre los pueblos y comunidades indígenas y sus tierras.

Del estudio de impacto ambiental y sociocultural

Artículo 55. Todo proyecto de desarrollo público, privado o mixto en hábitat y tierras indígenas, debe contar, previo a su aprobación y ejecución por el órgano competente, con un estudio de impacto ambiental y sociocultural. Los pueblos y comunidades indígenas serán consultados en la etapa de elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, pudiendo objetarlos cuando éstos afecten la integridad sociocultural y ambiental. Las observaciones serán incorporadas en la reformulación del

estudio, previo al análisis respectivo. Para garantizar este derecho, los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar asistencia técnica y jurídica al ente rector de la política indígena del país, a las organizaciones indígenas o a cualquier otro órgano o ente del estado o privado con competencia en la materia.

Del saneamiento del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 56. Los pasivos ambientales que generen las actividades de aprovechamiento de recursos naturales y los proyectos de desarrollo en el hábitat y tierras indígenas, serán responsabilidad de los órganos, entes u organismos del Estado, empresas promotoras, concesionarios, contratistas o responsables de las actividades de aprovechamiento o de proyectos de desarrollo que se hayan ejecutado, sean éstos de carácter público, privado o mixto, tendrán la obligación del saneamiento ambiental, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el incumplimiento de esta obligación de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presente Ley y demás disposiciones legales.

De los beneficios

Artículo 57. Los pueblos y comunidades indígenas, en cuyo hábitat y tierras se ejecuten actividades de aprovechamiento de recursos naturales o proyectos de desarrollo por parte del

Estado o particulares, directa o indirectamente, tienen derecho a percibir beneficios de carácter económico y social para el desarrollo de sus formas de vida, los cuales serán establecidos conforme al mecanismo de consulta previsto en la presente Ley.

De las indemnizaciones y reparaciones

Artículo 58. Los pueblos y comunidades indígenas o sus miembros, que sean lesionados directa o indirectamente en su integridad cultural, social y económica por la ejecución de las actividades de aprovechamiento de recursos naturales o por cualquier proyecto de desarrollo u obra ejecutados dentro de su hábitat y tierras, tienen derecho al pago de las indemnizaciones o reparaciones de los daños generados por tales actividades.

Del incumplimiento de las condiciones de consulta y participación

Artículo 59. La consulta previa e informada para los pueblos y comunidades indígenas en los casos de exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, es

obligatorio, so pena de nulidad del acto que otorgue la concesión. El contrato de concesión respectivo deberá incluir las condiciones en que debe realizarse dicha exploración, explotación y aprovechamiento.

En caso de incumplimiento de las condiciones de consulta y participación en la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales y en la ejecución de los proyectos de desarrollo, o de ocurrir cambios no previstos en el diseño del proyecto original conocido, hará nulo el contrato de concesión y sin lugar a indemnización.

Los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones podrán ejercer las acciones judiciales y administrativas que correspondan para garantizar el respeto de este derecho.

Capítulo VII: De los traslados

De los traslados de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 60. Cuando por razones de catástrofe natural o emergencia de salud uno o varios pueblos y comunidades indígenas, o uno o varios de sus integrantes deban ser trasladados de un área a otra, siempre dentro de su hábitat y tierras, se requerirá el consentimiento de las comunidades o personas afectadas. En estos casos y por vía de excepción, el consentimiento podrá ser otorgado sin necesidad de cumplir con el procedimiento de consulta previsto en la presente Ley.

En todo caso la reubicación se hará en áreas de similares condiciones a la de origen, que atiendan a las necesidades y expectativas de los afectados, siempre mediante procedimientos que garanticen el respeto de sus derechos colectivos e individuales. Queda a salvo el derecho a los afectados y las afectadas a regresar a los lugares de origen una vez que hayan cesado las causas que motivaron su traslado.

De las invasiones o perturbaciones en el hábitat y tierras indígenas

Artículo 61. En casos de invasión, ocupación ilegal o perturbaciones del hábitat y tierras indígenas por terceros, los pueblos y comunidades indígenas ejercerán las acciones que consagran las leyes sobre la materia, a los fines de la restitución de sus tierras y el cese inmediato de la perturbación. El Estado, a través del ente executor, velará y garantizará la

protección y resguardo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre su hábitat y tierras.

TÍTULO III: DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Capítulo I: De los derechos civiles

De la identificación de los indígenas

Artículo 62. Todo indígena tiene derecho a la identificación a través del otorgamiento de los medios o documentos de identificación idóneos, desde el momento de su nacimiento, los cuales serán expedidos por el órgano competente en la materia, mediante el procedimiento respectivo, el cual atenderá a la organización social, cultural, usos y costumbres, idiomas y ubicación geográfica de los pueblos y comunidades indígenas. El procedimiento se regirá por los principios de gratuidad, transparencia, igualdad, celeridad, responsabilidad social, no discriminación y eficacia. Se garantiza a los indígenas el pleno derecho a inscribir en el registro civil sus nombres y apellidos de origen indígena.

Capítulo II: De los derechos políticos

De la participación política y el protagonismo

Artículo 63. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la participación y al protagonismo político. Para el ejercicio de este derecho se garantiza la representación indígena en los cargos de elección popular, en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos, concejos municipales y juntas parroquiales en los estados con población indígena, o en cualquier otra instancia tanto en el ámbito nacional, estatal y parroquial, de conformidad con las leyes respectivas.

De los representantes a la Asamblea Nacional

Artículo 64. En la Asamblea Nacional los pueblos indígenas serán representados por tres (3) diputados o diputadas conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, los cuales serán elegidos de acuerdo con la ley que regula la materia electoral.

De la participación y representación en los órganos parlamentarios internacionales de los pueblos

y comunidades indígenas

Artículo 65. Se garantiza el derecho a la participación, protagonismo político y representación de los pueblos y comunidades indígenas en el Parlamento Andino y Parlamento Latinoamericano, los cuales serán elegidos de acuerdo con las leyes electorales que rigen la materia.

De los representantes indígenas ante los consejos legislativos y concejos municipales

Artículo 66. En los estados, municipios y parroquias con población indígena, se elegirán representantes indígenas para los consejos legislativos, concejos municipales y juntas parroquiales de dichas entidades, conforme al procedimiento establecido en la ley electoral en materia indígena.

A los efectos de determinar los estados, municipios y parroquias con población indígena se tomarán en cuenta los datos del último censo oficial, las fuentes etno-históricas y demás datos estadísticos y otras fuentes de información.

De las normas sobre participación política indígena

Artículo 67. Las normas, procedimientos y en general todo lo relacionado con el ejercicio del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la participación política, serán desarrolladas en las leyes que regulen la materia, tomando en cuenta sus usos y costumbres, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De la Defensoría del Pueblo y la defensa de los derechos indígenas

Artículo 68. Corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, difusión, defensa y vigilancia de los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, y demás disposiciones legales. Promover su defensa integral y ejercer las acciones administrativas y judiciales necesarias para su garantía y efectiva protección.

Capítulo III: De las organizaciones de los pueblos y comunidades indígenas

Del reconocimiento de la organización propia

Artículo 69. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a conservar, desarrollar y actualizar su organización social y política propia, sea ésta comunal, municipal, estatal, regional o nacional, basada en sus tradiciones, usos y costumbres.

De las organizaciones indígenas

Artículo 70. Los indígenas tienen derecho a asociarse libremente en organizaciones de cualquier naturaleza para la representación y defensa de sus derechos e intereses, promover el ejercicio pleno de estos derechos y las relaciones justas, equitativas y efectivas entre los pueblos y comunidades indígenas y demás sectores de la sociedad. Corresponderá a los pueblos y comunidades indígenas determinar la representatividad de estas organizaciones.

De la exención de impuestos en los registros

Artículo 71. Los pueblos, comunidades indígenas y sus organizaciones estarán exentas del pago de impuesto, tasa o arancel relativo a derechos de registro o de notaría de sus documentos constitutivos, y de las certificaciones de los documentos otorgados por los mismos. Quedan también exentos de los pagos antes señalados, los registros de microempresas de carácter comunitario pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas.

Capítulo IV: De los municipios indígenas

De los municipios indígenas

Artículo 72. La forma de gobierno y de administración de los municipios indígenas responderá a las características socioculturales, políticas, económicas y al derecho y costumbres propias de estos pueblos y comunidades.

De igual manera, en los municipios y parroquias con población indígena se garantizará la participación política de los pueblos y comunidades indígenas allí existentes.

De las autoridades municipales

Artículo 73. Los requisitos de postulación, así como el procedimiento de elección de las autoridades municipales indígenas, se regirá por ley que a tal efecto se dicte y por las normas que dicte el Consejo Nacional Electoral, basadas en los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.

TÍTULO IV: DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

Capítulo I: De la educación propia y el régimen de educación intercultural bilingüe

Del derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 74. El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a su educación propia como proceso de socialización y a un régimen educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores, tradiciones y necesidades.

Educación propia de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 75. La educación propia de los pueblos y comunidades indígenas está basada en los sistemas de socialización de cada pueblo y comunidad indígena, mediante los cuales se transmiten y renuevan los elementos constitutivos de su cultura.

Del régimen de educación intercultural bilingüe

Artículo 76. La educación intercultural bilingüe es un régimen educativo específico que se implantará en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para los pueblos indígenas, y estará orientado a favorecer la interculturalidad y a satisfacer las necesidades

individuales y colectivas de los pueblos y comunidades indígenas. Este régimen está fundamentado en la cultura, valores, normas, idiomas, tradiciones, realidad propia de cada pueblo y comunidad y en la enseñanza del castellano, los aportes científicos, tecnológicos y humanísticos procedentes del acervo cultural de la Nación venezolana y de la humanidad. Todo ello estará desarrollado en los programas de estudio.

De las obligaciones del Estado

Artículo 77. A los efectos de la implantación del régimen de educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas, los órganos competentes del Estado, con participación de los pueblos y comunidades indígenas, desarrollarán:

1. Los planes y programas educativos para cada pueblo o comunidad indígena basados en sus particularidades socio-culturales, valores y tradiciones.
2. La uniformidad gramatical de la escritura del idioma de cada pueblo indígena.
3. La revitalización sistemática de los idiomas indígenas que se creían extinguidos o que están en riesgo de extinción, mediante la creación de nichos lingüísticos u otros mecanismos idóneos.
4. La formación integral de docentes indígenas expertos en educación intercultural bilingüe.
5. El ajuste del calendario escolar a los ritmos de vida y tiempos propios de cada pueblo o comunidad indígena, sin perjuicio del cumplimiento de los programas respectivos.
6. La adecuación de la infraestructura de los planteles educativos a las condiciones ecológicas, las exigencias pedagógicas y los diseños arquitectónicos propios de los pueblos y comunidades indígenas.
7. La creación de bibliotecas escolares y de aulas que incluyan materiales relacionados con los pueblos indígenas de la región y del país.
8. La producción y distribución de materiales didácticos y de lectura elaborados en los idiomas indígenas.
9. Las demás actividades que se consideren convenientes para la educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas.

Principio de gratuidad de la educación

Artículo 78. La educación intercultural bilingüe es gratuita en todos sus niveles y modalidades y es obligación del Estado la creación y sostenimiento de instituciones y servicios que garanticen este derecho.

Enseñanza del idioma indígena y del castellano

Artículo 79. En el régimen de educación intercultural bilingüe los idiomas indígenas se enseñan y emplean a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza del idioma castellano será paulatina y teniendo en cuenta criterios pedagógicos adecuados. Los órganos del

Ejecutivo Nacional con competencia en educación establecerán conjuntamente con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, alternativas para la enseñanza de los idiomas indígenas en el sistema de educación nacional, incluyendo a las universidades públicas y privadas del país.

De las instituciones educativas en comunidades indígenas

Artículo 80. Las instituciones educativas presentes en las comunidades indígenas deben adoptar el régimen de educación intercultural bilingüe, además de cumplir con las normas legales vigentes que regulen la materia educativa y la presente Ley.

De los docentes de educación intercultural bilingüe

Artículo 81. En el régimen de educación intercultural bilingüe, los docentes deben ser hablantes del idioma o idiomas indígenas de los educandos, conocedores de su cultura y formados como educadores interculturales bilingües. La designación de estos docentes será previa postulación de los pueblos y comunidades indígenas interesados, y preferiblemente deberán ser pertenecientes al mismo pueblo o comunidad de los educandos.

El Estado proveerá los medios y facilidades para la formación de los docentes en educación intercultural bilingüe.

De la población indígena con asentamiento disperso

Artículo 82. Para el funcionamiento del régimen de educación intercultural bilingüe no se obligará, ni se inducirá a la población indígena con patrón de asentamiento disperso a concentrarse alrededor de los centros educativos. El Estado proveerá el transporte de los

educandos a los centros educativos respectivos. En los casos de comunidades indígenas apartadas, la matrícula de estudiantes atenderá a la población de estas comunidades, y el Estado deberá establecer los medios adecuados para garantizarle el acceso a la educación.

De la alfabetización intercultural bilingüe

Artículo 83. El Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, diseñará y ejecutará programas de alfabetización intercultural bilingüe para indígenas y deberá proveer los recursos necesarios para tal fin.

Del acceso a la educación superior

Artículo 84. El Estado garantiza, en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones representativas, el acceso a la educación superior.

Artes, juegos y deportes indígenas

Artículo 85. En los planes y programas de estudio de todos los niveles y modalidades del régimen de educación intercultural bilingüe, se fomentarán las expresiones artísticas, artesanales, lúdicas y deportivas propias de los pueblos y comunidades indígenas, así como otras disciplinas afines.

Capítulo II: De la cultura

Del derecho a la cultura propia

Artículo 86. El Estado reconoce y garantiza el derecho que cada pueblo y comunidad indígena tiene al ejercicio de su cultura propia, expresando, practicando y desarrollando libremente sus formas de vida y manifestaciones culturales, fortaleciendo su identidad propia, promoviendo la vitalidad lingüística de su idioma, preservando su propia visión del mundo, profesando sus religiones, creencias y cultos, así como conservando y protegiendo sus lugares sagrados y de culto.

Las culturas indígenas como culturas originarias

Artículo 87. Las culturas indígenas son raíces de la venezolanidad. El Estado protege y promueve las diferentes expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo sus artes, literatura, música, danzas, arte culinario, armas y todos los demás usos y costumbres que les son propios.

De la preservación, fortalecimiento y difusión de las culturas

Artículo 88. A fin de preservar, fortalecer y promover en el ámbito nacional e internacional las culturas de los pueblos y comunidades indígenas, el Estado crea los espacios para el desarrollo artístico, fomenta la investigación y el intercambio entre los creadores o artistas indígenas y el resto de la sociedad venezolana e impulsa la difusión y promoción de estas culturas a nivel nacional e internacional.

De la alteración o movilización de bienes materiales del patrimonio cultural indígena

Artículo 89. Para el traslado de bienes materiales del patrimonio cultural indígena deberá contarse con la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a lo previsto en esta Ley. Cuando estos bienes materiales sean alterados o trasladados fuera de su hábitat y tierras indígenas en violación de la ley, el Estado garantiza la restitución del bien y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

El Estado cooperará con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación, restauración y protección de los bienes materiales del patrimonio cultural indígena.

Del derecho al uso de trajes, atuendos y adornos tradicionales

Artículo 90. Los indígenas tienen derecho a usar sus trajes, atuendos y adornos tradicionales en todos los ámbitos de la vida nacional.

De la vivienda indígena

Artículo 91. El Estado, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, elaborará y ejecutará los planes de vivienda indígena en su hábitat y tierras, a fin de preservar los elementos de diseño, distribución del espacio y materiales de construcción de la vivienda indígena, considerándola como parte de su patrimonio cultural.

De la identidad cultural y el libre desarrollo de la personalidad

Artículo 92. Los indígenas tienen derecho al fortalecimiento de su identidad cultural, desarrollo de su autoestima y libre desenvolvimiento de su personalidad en el marco de sus propios patrones culturales. El Estado apoya los procesos de revitalización de su memoria histórica y cultural como pueblo.

Del patrimonio arqueológico e histórico de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 93. El Estado, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, protegerá y conservará los sitios arqueológicos ubicados en su hábitat y tierras,

fomentando su conocimiento como patrimonio cultural de los pueblos indígenas y de la Nación.

Capítulo III: De los idiomas indígenas

Los idiomas indígenas como idiomas oficiales

Artículo 94. Los idiomas indígenas son de uso oficial para los pueblos indígenas y constituyen patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad, de conformidad con la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela y la presente Ley.

Ámbito de aplicación de los idiomas indígenas

Artículo 95. El Estado garantizará el uso de los idiomas indígenas en:

1. La traducción de los principales textos legislativos y cualquier otro documento oficial que afecte a los pueblos y comunidades indígenas, especialmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las constituciones de los estados con presencia indígena y la presente Ley.
2. Los procesos judiciales y administrativos en los cuales sean parte ciudadanos indígenas con la presencia de intérpretes bilingües.
3. El uso en actos públicos y oficiales de los estados con población indígena.
4. La utilización y el registro de la toponimia usada por los pueblos y comunidades indígenas en la cartografía y los documentos del Estado.
5. La publicación de textos escolares y otros materiales didácticos para fortalecer los diferentes niveles del régimen de educación intercultural bilingüe.
6. La edición y publicación de materiales bibliográficos y audiovisuales en cada uno de los idiomas indígenas dirigidos al conocimiento, esparcimiento y disfrute de los indígenas.
7. Los procedimientos de información y consulta a los pueblos y comunidades indígenas, incluida la traducción y reproducción de textos y otros documentos.
8. Los servicios y programas del sistema nacional de salud dirigidos a los pueblos indígenas.

9. Todos los casos en los que se considere necesario.

De los medios de comunicación social indígena

Artículo 96. El Estado, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, tomará las medidas efectivas necesarias para propiciar las transmisiones y publicaciones en idiomas indígenas, por los diferentes medios de comunicación social en las regiones con presencia indígena, y apoyará la creación de medios comunitarios administrados por indígenas, los cuales están exentos del pago de impuestos.

Capítulo IV: De la espiritualidad

De la religión y libertad de culto

Artículo 97. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libertad de religión y de culto. La espiritualidad y las creencias de los pueblos y comunidades indígenas, como componentes fundamentales de su cosmovisión y reguladoras de sus específicas formas de vida, son reconocidas por el Estado y respetadas en todo el territorio nacional.

De la consulta y aprobación

Artículo 98. Las instituciones religiosas que actúen o pretendan actuar en los pueblos y comunidades indígenas, deben cumplir con el proceso de información y consulta establecido en la presente Ley y, en ningún caso, podrán imponer sus cultos o disciplinas religiosas a los pueblos y comunidades indígenas, ni negar sus prácticas y creencias religiosas propias.

De la protección de los lugares sagrados y de culto

Artículo 99. El Estado protege los lugares sagrados y de culto de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas determinarán aquellos lugares que, por su significado cultural, espiritual e histórico, no pueden ser objeto de prácticas que profanen o alteren negativamente los referidos lugares.

De la formación religiosa y espiritual de los niños, niñas y adolescentes indígenas

Artículo 100. La formación religiosa y espiritual de los niños, niñas y adolescentes indígenas es responsabilidad de sus padres, familiares y otros miembros de sus respectivos pueblos o comunidades, de conformidad con sus tradiciones, usos y costumbres.

Capítulo V: De los Conocimientos y la Propiedad Intelectual Colectiva de los
Pueblos Indígenas

Del derecho a la propiedad colectiva

Artículo 101. El Estado garantiza el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos, tecnologías, innovaciones y prácticas propias de los pueblos y comunidades indígenas.

Del uso de los recursos genéticos

Artículo 102. Los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus usos y costumbres y conforme a las leyes que rigen la materia, deberán proteger, desarrollar y usar sustentablemente los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos.

De la protección y defensa de la propiedad intelectual indígena

Artículo 103. El Estado garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de establecer y proteger de acuerdo con sus usos y costumbres, su patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico y científico, conocimientos sobre la vida animal y vegetal, los diseños, procedimientos tradicionales y, en general, todos los conocimientos ancestrales y tradicionales asociados a los recursos genéticos y a la biodiversidad.

De las acciones legales

Artículo 104. Los pueblos y comunidades indígenas podrán ejercer directamente o por intermedio de las organizaciones indígenas, las acciones civiles, penales y administrativas necesarias, a fin de determinar las responsabilidades y las reparaciones a que haya lugar, contra toda persona que haya participado directa o indirectamente en el aprovechamiento ilícito de sus conocimientos, tecnologías, innovaciones y prácticas en violación de sus derechos de propiedad colectiva.

El Estado, a través de los órganos competentes y a solicitud de los pueblos y comunidades indígenas, apoyará jurídica y técnicamente a estos pueblos y comunidades en el ejercicio de dichas acciones, en el ámbito nacional e internacional.

TÍTULO V: DE LOS DERECHOS SOCIALES

Capítulo I: De la familia indígena

De la familia y la cultura

Artículo 105. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a constituir sus familias, atendiendo a los diferentes sistemas de parentesco correspondientes a su cultura. La familia y el hogar indígena, y sus diversas modalidades socio-culturales están protegidas por esta Ley.

De la protección a la familia indígena

Artículo 106. Las familias indígenas tienen derecho al respeto de su vida privada, honor e intimidad, atendiendo a sus usos y costumbres, conforme a la ley.

De la protección integral al indígena

Artículo 107. El Estado velará por la protección integral del indígena, especialmente de los niños, niñas y adolescentes contra el fanatismo político, religioso y de culto; la explotación económica, la violencia física o moral, el uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el abuso sexual, la mala praxis médica y paramédica, la experimentación humana, la discriminación de cualquier índole, y contra cualquier actividad que viole o menoscabe los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.

De los ancianos y ancianas indígenas

Artículo 108. El Estado, en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas, protegerá a los ancianos y ancianas indígenas por constituir el eje fundamental de la familia, sociedad y cultura indígena e instrumentará todo lo necesario para garantizarles condiciones de vida digna, conforme a sus usos y costumbres. Los indígenas y las indígenas gozarán de una pensión de vejez o ayuda económica a partir de los cincuenta años de edad, a cargo del órgano o ente encargado del sistema de seguridad social del

país, de conformidad con las normas previstas en la ley que rige la materia y la presente Ley.

De las mujeres indígenas

Artículo 109. Las mujeres indígenas son portadoras de los valores esenciales de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. El Estado, a través de sus órganos constituidos, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, garantizan las condiciones requeridas para su desarrollo integral, propiciando la participación plena de las mujeres indígenas en la vida política, económica, social y cultural de la Nación.

De las políticas integrales para niños, niñas y adolescentes indígenas

Artículo 110. El Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas

y sus organizaciones, desarrollará políticas integrales especialmente en las áreas de salud, educación y alimentación, destinadas a elevar la calidad de vida y garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas, difundiéndolas a través de campañas informativas, educativas y de prevención en estas áreas.

Capítulo II: De la salud y la medicina indígena

Del derecho a la medicina indígena

Artículo 111. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso de su medicina tradicional y de sus prácticas terapéuticas para la protección, el fomento, la prevención y la restitución de su salud integral. Este reconocimiento no limita el derecho de acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los demás servicios y programas del Sistema Nacional de Salud y

Seguridad Social, los cuales deberán prestarse en un plano de igualdad de oportunidades, equidad y calidad de servicio respecto al resto de la población nacional.

De la incorporación de la medicina tradicional indígena al Sistema Nacional de Salud

Artículo 112. El Estado, a través de los órganos, entes y demás organismos competentes y en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas, creará las condiciones necesarias para la incorporación de la medicina tradicional y las prácticas terapéuticas de

los pueblos y comunidades indígenas, a los servicios del Sistema Nacional de Salud dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas. Los indígenas especialistas en su medicina tradicional podrán utilizar sus conocimientos y procedimientos con fines preventivos y curativos, siempre que cuenten con el consentimiento de los pacientes, indígenas o no-indígenas, y se realicen en los lugares destinados para tales fines.

Estas prácticas serán respetadas por todas las instituciones públicas de salud.

De la participación indígena en los programas y servicios de salud

Artículo 113. Los servicios de salud se organizan, planifican y controlan con la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones. La atención integral en salud se adecuará a las condiciones geográficas, económicas, sociales y culturales y a los usos y costumbres de estos pueblos y comunidades.

Los idiomas indígenas en la atención en salud

Artículo 114. Los servicios del Sistema Nacional de Salud dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas deben incorporar los idiomas indígenas a este sistema, mediante la designación del personal idóneo e intérpretes necesarios para la atención de los indígenas y facilitar la comunicación con las personas, las familias, los pueblos y comunidades indígenas.

De la capacitación y formación del personal de salud

Artículo 115. El Estado, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, garantizará la capacitación del personal a cargo de la atención en salud de los pueblos y comunidades indígenas, y promoverá que en los programas de estudios de las universidades e institutos de formación de profesionales de la salud se incorporen contenidos relacionados con la medicina indígena, respetando la cosmovisión, conocimientos, prácticas, usos, costumbres y tradiciones indígenas.

De la definición y coordinación de las políticas de salud

Artículo 116. El ministerio competente en materia de salud, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, definirá las políticas de salud destinadas a los pueblos y comunidades indígenas.

La ejecución de los planes y programas de salud se hará de manera coordinada con el ente ejecutor de la política indígena del país, con los gobiernos regionales y municipales de entidades con población indígena, y con los pueblos y comunidades indígenas.

Del nombramiento de funcionarios regionales

Artículo 117. Las direcciones de salud dependientes del Ejecutivo Nacional, estatal o municipal, de los estados y municipios con población indígena, designarán en coordinación con el ente ejecutor de la política indígena del país y las organizaciones indígenas, un funcionario o grupo de funcionarios para que garanticen la ejecución de las políticas generales en la prestación de servicios de salud a los pueblos y comunidades indígenas.

Capítulo III: De los derechos laborales y del empleo

Del derecho al trabajo y del ejercicio pleno de los derechos laborales

Artículo 118. Los indígenas tienen el derecho y el deber al trabajo. El Estado garantiza a los trabajadores y trabajadoras indígenas, el goce y ejercicio pleno de todos los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral nacional e internacional. El Estado establecerá mecanismos idóneos a fin de informar a los trabajadores y trabajadoras indígenas sobre sus derechos laborales.

De las condiciones prohibidas

Artículo 119. Los indígenas que presten servicios mediante una relación de trabajo no podrán ser sometidos a ninguna forma de discriminación o a condiciones de trabajo peligrosas a su salud, tales como, exposiciones a sustancias tóxicas o peligrosas cuando no se cumpla con la legislación, las normas y reglamentaciones técnicas específicas que existen sobre la materia. No laborarán en condiciones denigrantes a su dignidad humana y a su identidad cultural ni estarán sujetos a sistemas de contratación coercitiva o cualquier forma de servidumbre, incluida la servidumbre por deudas. Se prohíbe cualquier forma de hostigamiento sexual en contra de los trabajadores y trabajadoras indígenas, la explotación de niños, niñas y adolescentes indígenas en el servicio doméstico o como peones y personal obrero en empresas industriales, agroindustriales o comerciales y, en general, en cualquier tipo de actividad, sin perjuicio de las regulaciones establecidas en las leyes que rigen la materia.

Del contrato de trabajo

Artículo 120. Los contratos de trabajo entre el trabajador o trabajadora indígena y el patrono deberán hacerse preferentemente por escrito, en idioma castellano, y en caso de ser requerido por el trabajador o trabajadora, en el idioma del pueblo indígena al cual pertenezca. Lo dispuesto en este artículo no excluye la posibilidad de probar la existencia de la relación laboral por otros medios, cuando el contrato se haya realizado en forma oral.

De la participación laboral

Artículo 121. Los pueblos y comunidades indígenas en cuyo hábitat y tierras se ejecuten actividades de aprovechamiento de recursos naturales o proyecto de desarrollo económico, sean de carácter público, privado o mixto, tienen derecho de preferencia en la participación laboral.

TÍTULO VI: DE LA ECONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Capítulo I: Disposiciones Generales

Del modelo económico propio

Artículo 122. El Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir libremente el desarrollo de sus prácticas económicas propias, a ejercer sus actividades productivas tradicionales, a participar en la economía nacional y a definir su modelo económico en el marco del desarrollo local sustentable.

De las prácticas económicas tradicionales

Artículo 123. El Estado venezolano garantiza el libre ejercicio de las prácticas económicas tradicionales en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas y apoyará su desarrollo conforme a las necesidades actuales de los pueblos y comunidades indígenas.

Capítulo II: Del desarrollo económico en hábitat y tierras indígenas

De los planes de desarrollo en tierras indígenas

Artículo 124. Los planes de desarrollo económico de carácter nacional, estatal o municipal, que afecten de cualquier forma el hábitat y tierras de los pueblos o comunidades indígenas, deben ser elaborados y desarrollados con la participación directa y efectiva de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones.

Del financiamiento de proyectos y programas de desarrollo económico en hábitat y tierras indígenas

Artículo 125. Los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones podrán presentar ante personas jurídicas, de carácter público, privado o mixto, nacional o internacional, proyectos y programas de desarrollo económico que requieran financiamiento para su ejecución en su hábitat y tierras.

Los proyectos y programas de desarrollo económico presentados para su financiamiento ante órganos o entes de carácter público o privado internacionales, serán coordinados con los órganos competentes del Ejecutivo Nacional, de conformidad con la ley que rige la materia.

Del fomento de la economía de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 126. El Estado, en garantía del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en la economía nacional, fomentará:

1. La creación de fondos nacionales o regionales de financiamiento de actividades productivas para el desarrollo socioeconómico.
2. La colocación de los productos indígenas en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
3. El establecimiento de mercados y centros de acopios promovidos por los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, a fin de acercar productores y consumidores.
4. El intercambio comercial entre pueblos y comunidades indígenas ubicados en espacios fronterizos, mediante un régimen aduanero preferencial.
5. Mecanismos y facilidades para el procesamiento, transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de los productos.

6. Facilidades para la constitución de empresas comunitarias y familiares.
7. La creación de programas crediticios especiales dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, a cargo de las instituciones crediticias del sistema de financiamiento nacional.
8. La capacitación y asistencia técnica para la formulación, ejecución, control y evaluación de sus proyectos.
9. La permuta o trueque y otras formas de intercambio tradicional.
10. La construcción de redes productivas.
11. Cualquier otra actividad que permita la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la economía nacional.

De la capacitación y asistencia técnica y financiera

Artículo 127. El Estado, mediante los órganos, entes y demás organismos competentes, garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a programas especiales de capacitación y asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de sus actividades económicas, tomando en cuenta sus usos, costumbres y tecnologías propias.

De los sistemas crediticios

Artículo 128. El Estado garantiza a las comunidades indígenas y sus organizaciones el acceso a los sistemas de financiamiento crediticio en condiciones favorables en cuanto a plazos e intereses, y simplificará los requisitos y trámites relativos a la aprobación de los mismos. No será requisito la exigencia de documentos de propiedad colectiva sobre su hábitat y tierras indígenas.

De la actividad turística

Artículo 129. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a desarrollar y administrar la actividad turística en todas sus fases dentro de su hábitat y tierras, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

TÍTULO VII: DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo I: De la Jurisdicción Especial Indígena

Del derecho propio

Artículo 130. El Estado reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, en virtud de lo cual tienen la potestad de aplicar instancias de justicia dentro de su hábitat y tierras por sus autoridades legítimas y que sólo afecten a sus integrantes, de acuerdo con su cultura y necesidades sociales, siempre que no sea incompatible con los derechos humanos establecidos en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República, interculturalmente interpretados y con lo previsto en la presente Ley.

Del derecho indígena

Artículo 131. El derecho indígena está constituido por el conjunto de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio, que les permite regular la vida social y política, autogobernarse, organizar, garantizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno.

De la jurisdicción especial indígena

Artículo 132. La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras.

La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. Las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la medición, la compensación y la reparación del daño, con la finalidad de reestablecer la armonía y la paz social. En los procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima, la familia y la comunidad. Las decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional; en consecuencia, las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetarlas y acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y

convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República y de conformidad con la presente Ley.

Parágrafo Único: A los efectos de este Capítulo, se entenderá por integrante toda persona indígena que forme parte de una comunidad indígena. También se considera como integrante toda persona no indígena integrada por vínculos familiares o por cualquier otro nexo a la comunidad indígena, siempre que resida en la misma.

De la competencia de la jurisdicción especial indígena

Artículo 133. La competencia de la jurisdicción especial indígena estará determinada por los siguientes criterios:

1. Competencia Territorial: Las autoridades legítimas tendrán competencia para conocer de cualquier incidencia o conflicto surgido dentro del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas respectivos.
2. Competencia Extraterritorial: Las autoridades legítimas tendrán competencia extraterritorial respecto de controversias sometidas a su conocimiento, surgidas fuera del hábitat y tierras indígenas, cuando las mismas sean entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros no indígenas. En este caso, la autoridad legítima decidirá según las normas, usos y costumbres del pueblo o comunidad indígena y lo dispuesto en el presente artículo, si conoce o no de la controversia y, en caso negativo, informará a los solicitantes y remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria cuando corresponda.
3. Competencia Material: Las autoridades legítimas tendrán competencia para conocer y decidir sobre cualquier conflicto o solicitud, independientemente de la materia de que se trate. Se exceptúan de esta competencia material, los delitos contra la seguridad e integridad de la

Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico ilícito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia de manera organizada de varias personas y los crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

4. Competencia Personal: La jurisdicción especial indígena tendrá competencia para conocer de solicitudes o conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo o comunidad indígena.

Las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero que encontrándose dentro del hábitat y tierras indígenas cometan algún delito previsto en la legislación ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las autoridades legítimas, las cuales deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

De la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria

Artículo 134. Las relaciones entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria se rigen por las siguientes reglas:

1. Reserva de la jurisdicción especial indígena: las decisiones tomadas por las autoridades indígenas legítimas sólo serán revisadas por la jurisdicción ordinaria cuando sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República.
2. Relaciones de coordinación: La jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordinación y colaboración, a los fines de prestarse el apoyo requerido para la investigación, juzgamiento o ejecución de sus decisiones.
3. Conflicto de jurisdicción: De los conflictos entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria conocerá el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el procedimiento respectivo establecido en la ley que regula la materia.
4. Protección del derecho a la jurisdicción especial indígena: Cuando la jurisdicción ordinaria conozca de casos que correspondan a la jurisdicción especial indígena, debe remitir las actuaciones a esta última.

De los procedimientos para resolver conflictos de derechos humanos

Artículo 135. Contra toda decisión emanada de la jurisdicción especial indígena, violatoria de derechos fundamentales, se podrá interponer la acción de Amparo Constitucional ante la Sala

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se tramitará conforme al procedimiento previsto en la ley respectiva y estará orientada según las reglas de equidad,

garantizando la interpretación intercultural de los hechos y el derecho, tomando en cuenta el derecho propio de los pueblos y comunidades indígenas involucrados.

Del fortalecimiento del derecho indígena y jurisdicción especial indígena

Artículo 136. El Estado garantiza, entre otros, los siguientes mecanismos para facilitar la aplicación del derecho indígena y el desarrollo de la jurisdicción especial indígena:

1. Promoción y difusión: El ente ejecutor de la política indígena del país creará una instancia mixta interinstitucional con participación de representantes de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, para el diseño y ejecución de políticas públicas que promuevan la difusión y el respeto del derecho indígena y la jurisdicción especial indígena.
2. Programas: El ente ejecutor de la política indígena del país o los pueblos, comunidades y sus organizaciones indígenas, podrán diseñar y ejecutar, conjunta o separadamente, programas o proyectos de capacitación y formación en el pluralismo legal, dirigidos a las autoridades indígenas y a los operadores de justicia, para facilitar la aplicación del derecho indígena y la coordinación con la jurisdicción ordinaria.
3. De la enseñanza del derecho indígena: En la enseñanza del derecho y carreras afines, las instituciones educativas y de formación judicial, de conformidad con las normas aplicables, incorporarán materias referidas a la multiculturalidad, pluralismo legal y el derecho indígena, el Estado proveerá los medios necesarios para la capacitación en materia indígena a los operadores de justicia, abogados y funcionarios encargados de aplicar la ley en zonas con predominancia indígena.

Capítulo II: De los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes
ante la jurisdicción ordinaria

De los derechos en la jurisdicción ordinaria

Artículo 137. Los pueblos y comunidades indígenas, y cualquier persona indígena que sea parte en procesos judiciales, tendrán derecho a conocer su contenido, efectos y recursos, contar con defensa profesional idónea, el uso de su propio idioma y el respeto de su cultura durante todas las fases del proceso.

El Estado establecerá los mecanismos que permitan superar las dificultades inherentes a las diferencias culturales y lingüísticas para facilitar a los indígenas la plena comprensión de estos procesos.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los indígenas que estén sometidos o participen en procedimientos administrativos o especiales, en tanto sean aplicables.

Del derecho a la defensa

Artículo 138. A los fines de garantizar el derecho a la defensa de los indígenas, se crea la Defensa

Pública Indígena, dentro del sistema de Defensa Pública del Tribunal Supremo de Justicia. Para el nombramiento de defensores públicos de indígenas se exigirá que los mismos sean abogados y conozcan la cultura y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Los defensores públicos de indígenas son competentes para ejercer la representación y defensa de los indígenas en toda materia y ante toda instancia administrativa y judicial, nacional e internacional.

Del derecho a intérprete público

Artículo 139. El Estado garantiza a los indígenas el uso de sus idiomas originarios en todo proceso administrativo o judicial. Se requerirá del nombramiento de un intérprete, a los fines de prestar testimonios, declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos que hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos.

De los informes periciales

Artículo 140. En los procesos judiciales en que sean parte los pueblos y comunidades indígenas o sus miembros, el órgano judicial respectivo deberá contar con un informe socio-antropológico y un informe de la autoridad indígena o la organización indígena representativa, que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El informe socio-antropológico estará a cargo del ente ejecutor de la política indígena del país o profesional idóneo.

Del juzgamiento penal

Artículo 141. En los procesos penales que involucren indígenas se respetarán las siguientes reglas:

1. No se perseguirá penalmente a indígenas por hechos tipificados como delitos, cuando en su cultura y derecho estos actos sean permitidos, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República.
2. Los jueces, al momento de dictar sentencia definitiva o cualquier medida preventiva, deberán considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas, y decidir conforme a los principios de justicia y equidad. En todo caso, éstos procurarán establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural.
3. El Estado dispondrá en los establecimientos penales en los estados con población indígena, de espacios especiales de reclusión para los indígenas, así como del personal con conocimientos en materia indígena para su atención.

TÍTULO VIII: DEL ENTE EJECUTOR DE LA POLÍTICA INDÍGENA DEL PAÍS

Capítulo I: Del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

De la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)

Artículo 142. Se crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), como ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente del Tesoro Nacional, autonomía financiera, funcional, organizativa y técnica, el cual gozará de los privilegios y prerrogativas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes le acuerden a la República.

Del órgano de adscripción

Artículo 143. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas estará adscrito al ministerio con competencia en materia indígena, de quien dependerá presupuestariamente.

De la sede y ámbito de competencia del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)

Artículo 144. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), tendrá su sede principal en la ciudad de Caracas, y contará con oficinas en los estados con pueblos y comunidades indígenas. En la materia de su competencia el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas desarrollará su acción en todo el territorio nacional, debiendo las demás instituciones públicas y privadas prestarle la colaboración institucional a los fines del cumplimiento de sus funciones.

De la Finalidad del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)

Artículo 145. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), es el ente encargado de la ejecución y coordinación de las políticas públicas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas.

De las Competencias del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)

Artículo 146. Son competencias del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI):

1. Promover y velar por el respeto y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, tratados, convenios, pactos y acuerdos internacionales, en la presente Ley y en otras normas.
2. Asesorar al órgano rector de la política indígena del país en la elaboración de políticas públicas en materia indígena.
3. Ejecutar y dar seguimiento a las políticas públicas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas.
4. Diseñar, en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones y, con los órganos, entes y demás instituciones del Poder Público Nacional, estatal y municipal, los planes y programas necesarios para la ejecución de las políticas públicas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas.
5. Fortalecer y promover la identidad cultural y desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
6. Elaborar un registro de pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, y documentar información pertinente sobre los mismos.
7. Participar en el diseño, programación, ejecución y cómputo del Censo Nacional Indígena, de conformidad con la ley que rige la materia.

8. Promover el ejercicio del derecho de consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, en los asuntos locales, municipales, estatales y nacionales que puedan afectarles directa o indirectamente.
9. Fomentar el ejercicio de la corresponsabilidad entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas en los ámbitos que concierne a la conservación y manejo del ambiente y los recursos naturales, parques nacionales y áreas protegidas, así como el desarrollo sustentable en el hábitat y tierras indígenas previsto en la presente Ley y demás leyes.
10. Velar por el cumplimiento del procedimiento de información y consulta previo establecido en la presente Ley.
11. Asesorar a los pueblos y comunidades indígenas y a sus organizaciones, en el control de las actividades que realicen personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, nacionales o extranjeras en el hábitat y tierras indígenas.
12. Velar por el acceso oportuno y equitativo de los indígenas a las políticas sociales del Estado, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, oportunidades laborales, así como el goce de sus derechos sin discriminación alguna.
13. Incentivar la participación de las mujeres indígenas en sus pueblos y comunidades indígenas y en la vida pública nacional e internacional.
14. Promover el fortalecimiento de las autoridades legítimas y el respeto a los ancianos y ancianas indígenas como fuente de sabiduría y reserva moral de los pueblos y comunidades indígenas.
15. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que se consideren atentatorios contra el respeto y la dignidad de los indígenas, y velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas derivadas de tales hechos.
16. Otorgar los permisos a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que tengan interés en ingresar al hábitat y tierras indígenas, a fin de consultar a estos pueblos y comunidades sobre el desarrollo de actividades o proyectos de cualquier naturaleza a realizarse en los mismos, de conformidad con el procedimiento previsto en la presente Ley. Estos permisos estarán sujetos a conformación por parte de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones.

17. Velar por el cumplimiento de los acuerdos por parte de las entidades públicas y privadas, especialmente aquellos referidos a la exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales o a la ejecución de proyectos de desarrollo en el hábitat y tierras indígenas.

18. Velar y garantizar el respeto e integridad del hábitat y tierras indígenas, y ejercer la protección necesaria para obtener la desocupación inmediata del hábitat y tierras indígenas invadidos, con apoyo de las fuerzas públicas si fuere necesario.

19. Establecer, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, las normas relativas a la conducta ética en investigaciones y prácticas científicas, sanitarias, medicinales, sociales, económicas y ambientales, a desarrollarse en el hábitat de tierras indígenas, conforme a las leyes que rigen la materia y la presente Ley.

20. Establecer con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, un Comité de Ética especializado para la investigación, evaluación y arbitración de casos de disputas con respecto a la violación de las normas de conducta ética por parte de investigadores y científicos.

21. Elaborar los informes periciales, socio-antropológicos para los procesos judiciales y administrativos en los que intervengan indígenas y otros estudios técnicos que sean solicitados por entes públicos o privados en razón de sus competencias.

22. Crear direcciones regionales en los estados con pueblos y comunidades indígenas previstas en esta Ley.

23. Las demás que le atribuya esta Ley y su Reglamento.

Del Patrimonio y Fuentes de Ingresos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)

Artículo 147. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), tendrá patrimonio propio, distinto e independiente del Tesoro Nacional, el cual estará constituido por:

1. Las asignaciones presupuestarias previstas en la Ley de Presupuesto anual correspondiente y de los recursos extraordinarios que se le asignen.

2. Los ingresos provenientes de su administración o de su actividad.

3. Las inversiones, aportes, donaciones, legados que reciba de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales, conforme a la ley.

4. Los bienes e instalaciones que se le transfieran, los que le adjudique el Ejecutivo Nacional, y los que adquiera para el cumplimiento de sus fines.

5. Los aportes que le asignen los ejecutivos estatales o municipales.
6. Los recursos obtenidos mediante convenios, negocios u operaciones con personas naturales o jurídicas, gobierno, organismo, instituciones nacionales e internacionales, previa autorización del ministerio de adscripción.
7. Todos los bienes y rentas adquiridos por cualquier título lícito.
8. Cualquier otro ingreso que obtenga o se le atribuya de conformidad con la ley.

Capítulo II: De la conformación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

De la conformación

Artículo 148. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), está conformado por una junta directiva, como máxima instancia de dirección y administración, las direcciones de línea y las direcciones estatales.

De la Junta Directiva

Artículo 149. La Junta Directiva será la máxima autoridad ejecutiva, administrativa del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y estará conformada por un Presidente o Presidenta, un Vicepresidente o Vicepresidenta y por los Directores o Directoras de línea.

Atribuciones de la Junta Directiva

Artículo 150. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

1. Establecer la política del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), de acuerdo con los lineamientos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, demás leyes y reglamentos.
2. Fijar los mecanismos para la instrumentación y seguimiento de las políticas públicas indígenas.
3. Examinar y aprobar los planes generales y programas anuales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), dándole prioridad a las propuestas de las instancias de participación y consulta de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones.
4. Crear, ampliar, reducir y suspender servicios y dependencias del Instituto Nacional de Pueblos

Indígenas (INPI), así como fijarles sus competencias.

5. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

6. Supervisar las actividades administrativas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

7. Elaborar y aprobar el reglamento interno que contenga la estructura, normas y procedimientos de funcionamiento del Instituto y de sus oficinas estatales, municipales, y modificarlo cuando sea necesario.

8. Examinar y aprobar el informe anual y el balance general.

9. Decidir sobre los asuntos, problemas y/o denuncias atinentes a los pueblos y comunidades indígenas.

10. Resolver los asuntos presentados por el Presidente o Presidenta.

De la designación de la Junta Directiva

Artículo 151. El Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o Vicepresidenta del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), serán designados o removidos por el Presidente de la República, previa postulación de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones.

El Secretario o Secretaria del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), así como los Directores de línea, serán de libre nombramiento y remoción por el Presidente o Presidenta,

Vicepresidente o Vicepresidenta del Instituto en forma conjunta, manteniendo la diversidad y la alternabilidad de los pueblos indígenas.

De los requisitos

Artículos 152. Los miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), deben ser indígenas, venezolanos, mayores de 30 años, de reconocida solvencia moral, trayectoria y experiencia en materia indígena.

De las reuniones de la Junta Directiva

Artículo 153. La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria una vez cada quince días, y en forma extraordinaria, en toda oportunidad que sea convocada por el Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), o cuando dos o más de sus miembros así lo solicitaren.

Para que la Junta Directiva pueda reunirse válidamente se requerirá de la presencia de la mitad más uno de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Presidente o el Vicepresidente cuando está encargado. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por consenso y, en su defecto, con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

De las atribuciones del Presidente o Presidenta

Artículo 154. Son atribuciones del Presidente o Presidenta:

1. Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva.
2. Convocar y coordinar con los distintos órganos, entes y demás organismos del Estado encargados de ejecutar planes y proyectos dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, a fin de implementar la política indígena integral.
3. Administrar el patrimonio e ingresos del instituto, de conformidad con las normas que rigen la materia y con el Reglamento Interno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); el Presidente es el cuentadante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
4. Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual del instituto y presentarlo a la consideración de la Junta Directiva.
5. Ejecutar el Presupuesto Anual.
6. Presentar a la consideración del Ejecutivo Nacional, por órgano del ministerio del ramo, el proyecto de presupuesto del instituto, su memoria y cuenta anual.
7. Ejercer la representación judicial y extrajudicial del instituto, pudiendo constituir apoderados generales o especiales, previa autorización de la Junta Directiva.
8. Otorgar y firmar los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines del instituto, hasta por los montos establecidos por la Junta Directiva.
9. Certificar los documentos que cursen en los archivos del instituto.
10. Ejercer la suprema dirección de las oficinas y dependencias del instituto.
11. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva del instituto.
12. Nombrar y remover al personal del instituto, debiendo informar a la Junta Directiva.
13. Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios.
14. Las demás que le atribuyan la Ley y demás normas reglamentarias.

De las atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta

Artículo 155. Son atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta:

1. Suplir las faltas temporales y absolutas del Presidente o Presidenta.
2. Desempeñar las labores encomendadas por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
3. Coordinar las Direcciones de línea.
4. Coordinar con el Presidente o Presidenta las actividades, y presentar un punto de cuenta semanal.
5. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva.
6. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.

De las atribuciones del Secretario o Secretaria

Artículo 156. Son atribuciones del Secretario o Secretaria:

1. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva.
2. Llevar las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva.
3. Llevar el control riguroso de la correspondencia enviada y recibida por la presidencia del instituto.
4. Diligenciar los documentos necesarios para las reuniones de la Junta Directiva o cualquier otro evento que precise la Presidencia.
5. Las demás inherentes a su cargo.

De las Direcciones de línea

Artículo 157. Las Direcciones de línea ajustan las políticas institucionales y garantizan el cumplimiento de las mismas de acuerdo con las áreas especializadas, según establezca el Reglamento Interno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

De los Directores o Directoras de línea

Artículo 158. La Junta Directiva del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), contará con las siguientes Direcciones de línea:

- Dirección de Coordinación Regional
- Dirección de Hábitat y Tierra, Catastro y Cartografía Indígena
- Dirección de Ambiente y Desarrollo Indígena
- Dirección de Salud y Desarrollo Social
- Dirección de Cultura, Familia, Educación y Deporte Indígena

- Dirección de Fortalecimiento Indígena
- Dirección de Asuntos Legales y Derechos Humanos
- Dirección de Relaciones Públicas y Asuntos Internacionales
- Dirección de Administración, Planificación y Presupuesto
- Dirección de Recursos Humanos.

Las Direcciones de líneas previstas en el presente artículo estarán a cargo de los Directores, quienes estarán asistidos o asistidas por los Subdirectores.

De las oficinas administrativas

Artículo 159. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), contará con las oficinas de:

Asesoría Técnica y Jurídica, Contraloría Interna, y otras que sean necesarias para el efectivo funcionamiento de la institución, las cuales serán creadas en el Reglamento Interno y Orgánico.

De la coordinación interinstitucional de políticas públicas

Artículo 160. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), coordinará sus actividades con los demás órganos, entes y demás instituciones de la administración central y descentralizada, cuyas competencias estén relacionadas con los pueblos indígenas, a los fines de concertar las políticas públicas referidas a estos pueblos.

De la Coordinación entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Consejo Federal de Gobierno y los consejos estatales y locales de planificación

Artículo 161. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en el proceso de formulación de políticas públicas relativas a los pueblos indígenas, se coordinará con el Consejo Federal de

Gobierno y con los consejos estatales y locales de planificación en aquellos estados o localidades donde existan pueblos indígenas.

Del personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

Artículo 162. El personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), será seleccionado de acuerdo con sus competencias e idoneidad profesional, conocimientos y compromisos con los pueblos indígenas. El Reglamento establecerá las competencias y responsabilidades de cada cargo.

Del reglamento interno

Artículo 163. La forma de funcionamiento, su estructura organizativa, el perfil de cargo, las demás atribuciones y competencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), serán definidos en el Reglamento Interno.

Capítulo III: Del Fondo para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Creación del Fondo para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo 164. Se crea el Fondo para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual tendrá por objeto promover, fomentar y garantizar las condiciones para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo a sus prioridades, mediante una justa y equitativa distribución de los recursos.

Del ente de adscripción

Artículo 165. El Fondo para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas estará adscrito al Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas (INPI).

De los recursos del Fondo para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo 166. El Fondo para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas estará constituido por los recursos siguientes:

1. Los aportes ordinarios y extraordinarios que le asigne el Ejecutivo Nacional, estatal o municipal.
2. Las donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades que reciba de personas naturales o jurídicas nacionales, estatales y municipales, públicas o privadas.
3. Todos los bienes y rentas adquiridos por cualquier título lícito.

TÍTULO IX: DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

Disposiciones Transitorias

Primera: Mientras se dicta la ley para la escogencia a los cargos de elección popular de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional, órganos parlamentarios internacionales, consejos legislativos, concejos municipales y juntas parroquiales, se regirá de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normas que rigen la materia.

Segunda: Toda persona o entidad de carácter público o privado que realice cualquier clase de actividad, obra, proyecto de investigación o ejecute actividades de aprovechamiento de recursos naturales propiedad de la Nación en hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, deberá adecuar su actividad a las disposiciones de la presente Ley, en un lapso no mayor de dos (2) años contado a partir de la entrada en vigencia de la misma. En el mismo lapso, las personas y entidades mencionadas en la presente Disposición, deberán someterse al procedimiento de información y consulta previsto en el Capítulo II del Título I de la presente Ley.

Tercera: Toda concesión, contrato o convenio celebrado con anterioridad a la presente Ley, que conlleve al deterioro socio-cultural de los pueblos y comunidades indígenas o lesione el ambiente en el hábitat y tierras de estos pueblos y comunidades, debe ser revisado y adaptado de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la presente Ley.

Cuarta: A partir de la publicación de la presente Ley, queda prohibido a los órganos y entes del

Estado, cualquiera sea su competencia, realizar cualquier tipo de acto contrato o convenio de cualquier naturaleza que desconozca o menoscabe los derechos originarios sobre el hábitat o el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas.

Quinta: Hasta tanto no sea creada la oficina especial de registro de títulos de propiedad colectiva del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, los títulos otorgados conforme a esta

Ley y la ley que rige la materia serán asentados por ante la oficina de registro inmobiliario correspondiente según la ley respectiva.

Sexta: El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), entrará en funcionamiento dentro de un lapso de diez meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Disposiciones Derogatorias

Única. Quedan derogadas la Ley de Misiones publicada en *Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela* N° 12.562 del 16 de junio de 1915 y sus Reglamentos; el Decreto 250 sobre

Expedición a Zonas Indígenas del 27 de julio de 1951, publicado en la *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* N° 23.594 del 02-08-1951; la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, publicada en la *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* N° 46.233 Extraordinario del 03 de octubre de 1993, en cuanto contradiga la presente Ley; y, en general, todas las disposiciones contenidas en otras normas legales o sub-legales que sean contrarias a la presente Ley.

Disposiciones Finales

Primera: La presente Ley entrará en vigencia el día de su publicación en la *Gaceta Oficial* de la

República Bolivariana de Venezuela.

Segunda: Los Pueblos Indígenas existentes e identificados son: baniva, baré, cubeo, jivi (guajibo), hoti (hodi), kurripaco, piapoco, puinave, sáliva, sanemá, wotjuja (piaroa), yanomami, warekena, yabarana, yekuana, mako, ñengatú (yeral), kari'ña, cumanagoto, pumé (yaruro), kuiba, uruak (arutani), akawayo, arawako, eñepá (panare), pemón, sape, wanai (mapoyo), warao, chaima, wayuu, añú (paraujano), barí, yukpa, japréria, ayaman, inga, amorua, timoto-cuicas (timotes) y guanono.

La enunciación de los pueblos indígenas señalados no implica la negación de los derechos y garantías, ni menoscabo de los derechos que tengan otros pueblos indígenas no identificados en la presente Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil cinco. Año 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente

RICARDO GUTIÉRREZ

Primer Vicepresidente

PEDRO CARREÑO

Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

JOSÉ GREGORIO VIANA

Subsecretario

2. Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ASAMBLEA NACIONAL

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

la siguiente,

LEY DE DEMARCACION Y GARANTIA DEL HABITAT Y TIERRAS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS

Capítulo I Disposiciones Fundamentales

Artículo 1.- El objeto de la presente Ley es regular el plan nacional de demarcación y garantía del hábitat y tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos y comunidades indígenas, establecido en el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 2.- A los fines de la presente Ley se entiende por:

- a) Hábitat Indígena: La totalidad del espacio ocupado y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política; que comprende las áreas de cultivo, caza, pesca fluvial y marítima, recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales, caños y vías fluviales, lugares sagrados e históricos y otras necesarias para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida.
- b) Tierras Indígenas: Aquellos espacios físicos y geográficos determinados, ocupados tradicional y ancestralmente de manera compartida por una o más comunidades indígenas de uno o más pueblos indígenas.
- c) Pueblos Indígenas: Son los habitantes originarios del país, los cuales conservan sus identidades culturales específicas, idiomas, territorios, sus propias instituciones y organizaciones sociales, económicas y políticas, que les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional.
- d) Comunidades Indígenas: Son aquellos asentamientos cuya población en su mayoría pertenece a uno o más pueblos indígenas y posee, en consecuencia, formas de vida, organización y expresiones culturales propias.
- e) Indígenas: Son aquellas personas que se reconocen a sí mismas y son reconocidas como tales, originarias y pertenecientes a un pueblo con características lingüísticas, sociales, culturales y económicas propias, ubicadas en una región determinada o pertenecientes a una comunidad indígena.

Artículo 3.- El proceso de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas será realizado por el órgano del Ejecutivo Nacional que establece la presente Ley, con la participación plena y directa de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas legalmente constituidas.

Artículo 4.- Para la determinación de los pueblos y comunidades Indígenas sujetos al proceso nacional de demarcación, se tomarán los datos del último Censo Indígena de Venezuela y otras fuentes que los identifiquen como tales.

Capítulo II

Del ente rector de la demarcación

Artículo 5.- Se crea la Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas adscrita al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la cual tiene a su cargo la coordinación, planificación, ejecución y supervisión de todo el proceso nacional de demarcación regulado por la presente ley.

Artículo 6.- La Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas estará conformada por un Director o una Directora General de libre nombramiento y remoción, quien será designado por la Ministra o el Ministro respectivo, y una Directora o Director Adjunto indígena, quien se elegirá en una Asamblea Nacional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas; dicho cargo tendrá una duración de tres años, pudiéndose reelegir por un período igual, y la persona que lo desempeñe debe reunir los requisitos establecidos en el manual elaborado especialmente para ello por los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, el cual deberá establecer el mecanismo de selección, perfil y conocimientos necesarios del o la aspirante, así como, los criterios generales para su evaluación. La Asamblea de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, podrá solicitar la separación del cargo de la Directora o el Director Adjunto en caso de que así lo amerite.

La Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, contará además, con un grupo interdisciplinario de especialistas, que serán nombrados por esta Dirección, previa opinión favorable de la Asamblea de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas.

Artículo 7.- La Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos indígenas elaborará, administrará y ejecutará el presupuesto asignado para el

proceso de demarcación nacional en todas sus fases. Será obligación del Estado venezolano el financiamiento del proceso nacional de demarcación a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de otras fuentes de financiamiento.

Capítulo III

Del procedimiento, participación y consulta para la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 8.- Los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas participarán activamente en la planificación, coordinación y ejecución del Plan Nacional de Demarcación conjuntamente con la Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas.

Artículo 9.- El Plan Nacional de Demarcación se organizará y desarrollará tomando en cuenta las realidades antropológicas, ecológicas, geográficas, toponímicas, poblacionales, sociales, culturales, religiosas, políticas e históricas de los pueblos indígenas.

Artículo 10.- La realización de nuevos proyectos de desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales, en los hábitats y tierras de los pueblos indígenas, deberá estar sujeto a un amplio proceso de información y consulta con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 11.- Para garantizar los derechos originarios de los pueblos indígenas sobre sus hábitats y tierras el Plan Nacional de Demarcación tomarán en cuenta:

- a) Los hábitats y tierras identificados y habitados únicamente por un solo pueblo indígena.
- b) Los hábitats y tierras compartidos por dos ó más pueblos indígenas.

- c) Los hábitats y tierras compartidos por pueblos indígenas y no indígenas.
- d) Los hábitats y tierras que están en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial.
- e) Los hábitats y tierras en las cuales el Estado u organismos privados hayan decidido implementar proyectos de desarrollo económico y/o de seguridad fronteriza.

Artículo 12.- Los pueblos y comunidades indígenas que ya posean distintos títulos de propiedad colectiva sobre las tierras que ocupan o proyectos de autodemarcación adelantados, podrán solicitar la revisión y consideración de sus títulos y proyectos para los efectos de la presente Ley.

Aquellos pueblos y comunidades indígenas que han sido desplazados de sus tierras y se hayan visto obligados a ocupar otras, tendrán derecho a ser considerados en los nuevos procesos de demarcación.

Artículo 13.- En el caso de hábitats y tierras indígenas ocupados por personas naturales o jurídicas no indígenas, el Estado venezolano tomará las medidas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas afectados, conforme a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 14.- La Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas convocará a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas respectivos para iniciar el proceso de demarcación de sus hábitats y tierras.

Artículo 15.- El proyecto de demarcación deberá realizarse según los usos y costumbres indígenas, en consulta amplia con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas respectivas, especialmente con la participación de los ancianos o ancianas, sabios o sabias y autoridades tradicionales.

Los pueblos y comunidades indígenas que ocupen el mismo hábitat, decidirán si efectúan la demarcación conjunta o para cada pueblo. La demarcación se realizará tomando en cuenta los acuerdos a los cuales hayan llegado en la discusión.

Con las autoridades Regionales y Locales se iniciará un proceso de diálogo para que contribuyan y colaboren en la demarcación del hábitat indígena.

Artículo 16.- Elaborado el proyecto de demarcación respectivo, este se ejecutará conforme al procedimiento técnico definido por la Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. En la ejecución del proyecto, los pueblos y comunidades indígenas involucradas definirán sus linderos de acuerdo a la ocupación y uso ancestral y tradicional de sus hábitats y tierras.

Artículo 17.- Concluido el procedimiento de demarcación, la Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas, enviará el expediente respectivo con sus resultados a la Procuraduría General de la República para que proceda a su legalización y registro en un lapso de noventa (90) días continuos.

Capítulo IV Ámbito de Aplicación

Artículo 18.- La presente Ley tendrá su aplicación en las regiones identificadas como indígenas en todo el ámbito nacional, de acuerdo al último censo nacional indígena.

Artículo 19.- El Plan Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas abarca los pueblos y comunidades hasta ahora identificados: Amazonas: baniva, baré, cubeo, jivi (guajibo), hoti, kurripaco, piapoco, puinave, sáliva, sánema, wotjuja (piaroa), yanomami, warekena, yabarana, yekuana, mako, ñengatú (geral). Anzoátegui: kariña y cumanaquito. Apure: jibi (guajibo), pumé (yaruro), kuiba. Bolívar: uruak (arutani), akawaio, arawaco, eñepá, (panare), hoti, kariña, pemón, sape, wotjuja (piaroa), wanai (mapoyo), yekuana, sánema. Delta Amacuro: warao, aruaco. Monagas: kariña, warao, chaima. Sucre: chaima, warao, kariña. Trujillo: wayuu. Zulia: añú (paraujano), barí, wayuu (guajiro), yukpa, japreria. Este proceso también incluye los espacios insulares, lacustres, costaneros y cualesquiera otros que los pueblos y

comunidades indígenas ocupen ancestral y tradicionalmente, con sujeción a la legislación que regula dichos espacios.

La enunciación de los pueblos y comunidades señalados no implica la negación de los derechos que tengan a demarcar sus tierras otros pueblos o comunidades que por razones de desconocimiento no estén identificados en esta ley.

Capítulo V Disposiciones Finales

Artículo 20.- Las denuncias relativas a las violaciones de esta Ley podrán canalizarse ante los organismos competentes y ante las instancias respectivas.

Artículo 21.- Los funcionarios y organismos de la administración pública colaborarán para el cabal cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Artículo 22.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil. Año 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

WILLIAM LARA

Presidente

LEOPOLDO PUCHI

Primer Vicepresidente

GERARDO SAER PEREZ

Segundo Vicepresidente

EUSTOQUIO CONTRERAS

Secretario

VLADIMIR VILLEGAS

Subsecretario

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los doce días del mes de enero de dos mil. Año 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

Cúmplase

(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado:

La Vicepresidenta Ejecutiva, ADINA MERCEDES BASTIDAS CASTILLO

El Ministro del Interior y Justicia, LUIS ALFONSO DAVILA GARCIA

El Ministro de Relaciones Exteriores, JOSE VICENTE RANGEL

El Ministro de Finanzas, JOSE ALEJANDRO ROJAS

El Ministro de la Defensa, ISMAEL ELIEZER HURTADO SOUCRE

3. Propuesta de Régimen Especial de Administración

RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL HABITAT INDIGENA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA CUENCA DEL SIPAPO, ESTADO AMAZONAS

(Borrador Presentado por Vladimir Aguilar Castro miembro del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes a OIPUS y Wataniba el 2 de septiembre de 2012)

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los pueblos indígenas como sujetos de derechos están en capacidad de ser garantes de la vasta diversidad biológica y cultural que forma parte de su haber natural, patrimonial e histórico, como una de las condiciones necesarias para el logro de un desarrollo sostenible así como para la protección de un ambiente sano, desde la cultura y desde el resguardo de los territorios que de manera ancestral o tradicional han venido ocupando y utilizando los pueblos y comunidades indígenas allí asentados.

Lo anterior reafirmaría el carácter emergente de la normativa fundamental indígena y ambiental ampliando la competencia en el ámbito ecológico y cultural siendo las organizaciones indígenas custodias y garantes de la riqueza y diversidad biológica existente en su entorno, de conformidad con los derechos indígenas y ambientales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

1. La realización de los derechos territoriales indígenas y la preservación del ambiente puede darse desde regímenes especiales de protección

Al examinar y analizar el texto constitucional vigente, se puede entender que el carácter real de las transformaciones que este nuevo orden trae consigo está en los cambios de paradigmas para disponer ahora, tanto el país como las unidades de organización social

primarias, de la suficiente capacidad para convertir las tendencias de la realidad que nos ha impedido un desarrollo más humano por otra más conciliada con el ambiente que nos permita un desarrollo sustentable.

De manera que, si entendemos el nuevo orden jurídico de la CRBV y las grandes exigencias que significa el cumplir y hacer cumplir sus mandatos, tendremos que aceptar que realmente estamos frente a un proceso de cambios sin precedente alguno, cuyo carácter se desprende de su identificación con la denominación de la constitución política que le da origen y con la República ante la cual se justifica. Así, junto al valor normativo que ahora se reconoce en las previsiones constitucionales para la aplicación directa de éstas en la transformación de la estructura y funcionamiento institucional del Estado, y en el cumplimiento de los mandatos que privilegian la participación protagónica del pueblo, y, específicamente, en el desarrollo de los principios y disposiciones que tratan sobre los derechos y deberes indígenas y ambientales, pudiéramos también considerar que los cambios jurídicos y políticos implícitos en el referido texto constitucional incluyen también la transformación en la gestión cultural y ambiental que necesariamente comprende la reconfiguración del ordenamiento de rango legal aún existente, para desarrollarlo y aplicarlo conforme a la normativa constitucional vigente.

Sin embargo, todo hace pensar que no es suficiente el nuevo ordenamiento constitucional si no se impulsa, desde el poder popular y de la misma sociedad civil organizada, la inducción necesaria para activar esa requerida transformación cultural y ecológica a través de las iniciativas de sus actuales gobernantes y la participación activa del poder popular que ahora se reconoce en nuestro texto constitucional.

2. Es posible el impulso de un régimen especial de protección cultural y ambiental desde el desarrollo de la noción de Hábitat Indígena

Esta régimen especial tiene varios propósitos: uno nacional, que implica desarrollar a nivel local principios de carácter constitucional que están contenidos en el capítulo VIII y en los artículos 127 y 128 de la carta magna; y otra más específica, que intenta materializar los procesos de autodemarcación que los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo han venido adelantando y que están pendientes de validación por parte del Estado

venezolano.

En efecto, a partir de lo anterior, se intenta mediante este régimen especial de protección adaptar normas, algunas de ellas de carácter preconstitucional, a los principios estipulados en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV). Estos estarían determinados por la supremacía de las variables ecológicas, culturales y sociales por sobre otras, en este caso, de menor aplicación en la ordenación del territorio (art. 128); por el derecho a un ambiente sano (art.127); por el principio de la igualdad (art. 21), así como todas aquellas de orden cultural contenidas en el Capítulo VIII de la CRBV, en los artículos 119 al 126.

En definitiva, el régimen especial ampliaría y desarrollaría figuras de protección del ambiente ya existentes, bien en el ámbito municipal, regional o nacional. El régimen especial de protección permitirá la armonización del conjunto de normas ambientales que puedan ser anteriores a la CRBV del año 1999, pues es importante hacer notar que más de la mitad de la legislación ambiental de Venezuela es anterior a la actual Constitución.

El régimen especial de protección de los derechos de los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo tiene como fundamento los Planes de Vida de los pueblos de la zona los cuales armonizan el mantenimiento de la cultura con la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, el régimen especial de protección intenta la búsqueda de mecanismos (jurídicos) de protección de los ecosistemas asociados a un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. En virtud de lo anterior se persigue: vincular aspectos socio- económicos con el manejo adecuado del ambiente y sus recursos; materializar jurídicamente una base cartográfica que sirva como herramienta para la zonificación ambiental y cultural; identificar prioridades de conservación de la diversidad biológica y cultural; articular información técnica y saberes tradicionales de las comunidades indígenas a partir de un proceso de zonificación ambiental y cultural, sugerir los usos más adecuados de los diversos espacios del territorio y de sus recursos naturales desde los Planes de Vida de los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo; proponer los usos más adecuados de los diversos espacios del territorio y de sus recursos naturales.

CUESTIONES GENERALES

El presente Régimen Especial de Protección del Hábitat Indígena de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Sipapo tiene como base varias experiencias existentes en América Latina (Bolivia y Perú), donde se protegen los derechos territoriales indígenas con la conservación ambiental.

Tales experiencias son:

- a) En Bolivia el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
- b) En Perú la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, creada por Decreto Supremo No 028-2003-AG.
- c) La Reserva Territorial del Estado a favor pueblos indígenas en aislamiento ubicados en el Departamento de Madre de Dios, creada por Resolución Ministerial No 427-2002-AG.
- d) La Reserva Territorial “Mashco-Piro”, creada por Resolución Directoral Regional No 19097-CTARU/DRA.
- e) La Reserva Territorial a favor del Grupo Étnico Murunahua, creada por Resolución de la Dirección Regional Agraria No 189-97CTARU.
- f) La Reserva Territorial a favor del Grupo Étnico Ishconahua, creada por Resolución Directoral Regional No 201-98-CTARU/DRA-OAJ-T.

También el Régimen Especial busca articular e incorporar en el esquema de protección a los pueblos indígenas en contacto inicial o en aislamiento voluntario, como punto de partida del desarrollo de ordenamiento normativo que proteja a estos pueblos.

Del Objeto y la Finalidad

La presente propuesta tiene por objeto la creación de un Régimen Especial de Protección del Hábitat Indígena de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Sipapo del Estado

Amazonas, incluyendo aquellos que pudieran encontrarse en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial.

Así mismo, el presente Régimen Especial de Protección busca desarrollar bajo esta figura el proceso de autodemarcación llevado a cabo por los pueblos indígenas de este lugar, implementando la noción de hábitat indígena como mecanismo jurídico de protección y desarrollo de los derechos territoriales indígenas para garantizar y desarrollar sus formas de vida.

Alcances del Régimen Especial de Protección

Este Régimen Especial de Protección, de ser el caso, en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, establecido por el presente ordenamiento, sería aplicable a todo lo relacionado con los derechos individuales y colectivos de estos pueblos indígenas, especialmente en aquellos aspectos que puedan poner en situación de vulnerabilidad su existencia e integridad.

Definiciones

Para lo regulado en este Régimen Especial de Protección se entiende por:

Pueblos Indígenas del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo: a los descendientes de los pueblos originarios que habitan en este territorio de la República el cual se encuentra ubicado en el Estado Amazonas, Municipio Autana, y tienen derechos anteriores a la formación del Estado venezolano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autoreconocen como tales. En estos se incluye a los pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. El Estado garantiza el derecho a la libre decisión de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial para mantener tales condiciones.

Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario de la Cuenca del Sipapo: todos aquellos grupos poblacionales indígenas, independientemente de su volumen demográfico, que han optado por no desarrollar relaciones sociales sostenidas con instituciones o poblaciones indígenas y no indígenas que ellos consideren externas a su

grupo, o que habiéndolas mantenido, han decidido no continuarlas.

Pueblos Indígenas en Contacto Inicial de la Cuenca del Sipapo: todos aquellos grupos poblacionales indígenas que habiendo estado en situación de aislamiento voluntario, han optado por mantener relaciones sociales continuas o limitadas con instituciones o poblaciones indígenas y no indígenas que ellos consideren externas a su grupo.

Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo: son territorios indígenas de ocupación ancestral o tradicional delimitados por el Estado venezolano mediante procesos de demarcación o autodemarcación, bajo las figuras legales más adecuadas al ordenamiento jurídico nacional e internacional suscrito por la República, en favor de los pueblos indígenas de este lugar para proteger su hábitat y las condiciones que aseguren su existencia e integridad como pueblos.

Plan de Vida: se basa en un ordenamiento consuetudinario territorial que se fundamenta en lo estatuido en el artículo 119 de la CRBV.

Gestión Territorial: se trata de la administración de los recursos de acuerdo a usos y zonificaciones. Esta constituye la forma en que se va a implementar el Plan de Vida en el territorio reconocido.

Derechos Protegidos: el Estado garantiza la totalidad de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas de la Cuenca del Sipapo, con énfasis en aquellos en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial, garantizados en las normas nacionales y los acuerdos internacionales suscritos por el Venezuela, asumiendo de modo prioritario las siguientes obligaciones específicas para con ellos: a) Respetar su decisión colectiva en torno a la forma de interrelacionarse con el resto de la sociedad nacional. Ninguna decisión política o administrativa, proyecto de desarrollo o de investigación, deberá forzarlos a establecer contactos con agentes externos a su cultura, sean estos públicos o privados. b) Proteger especialmente su vida y su salud dada su vulnerabilidad frente a posibles enfermedades transmisibles. c) Proteger su cultura y sus modos tradicionales de vida reconociendo la particular relación espiritual de estos pueblos con su hábitat, como elemento constitutivo de su identidad. d) Salvaguardar sus derechos sobre los territorios que ocupan y sobre los que tienen acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. e) Garantizar su permanencia voluntaria en los territorios

que ocupan e impedir el ingreso de cualquier agente externo dentro de los mismos.

DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO VOLUNTARIO O CONTACTO INICIAL

Por régimen especial de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, entiéndase el conjunto de responsabilidades y limitaciones establecidas en el presente ordenamiento y las disposiciones complementarias que la reglamenten y desarrollen, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas y privadas.

De la Implementación del Régimen Especial de Protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial

El Régimen Especial contemplado en la presente figura debe ser entendido como parte integrante de la política nacional sobre pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, que debe ser diseñada por el Estado venezolano.

Algunas de ellas consistirán en:

- a) Formular y aprobar las políticas y acciones de protección, promoción y respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial;
- b) Planificar, programar y coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación del presente régimen;
- c) Elaborar un registro de los pueblos en situación aislamiento voluntario y contacto inicial y de la documentación relacionada con el Hábitat Indígena de estos pueblos;
- d) Desarrollar en coordinación con los sectores competentes planes de contingencia para los casos de contacto no voluntario entre pueblos indígenas en situación de aislamiento y agentes externos; con particular énfasis en los riesgos de salud.
- e) Desarrollar en coordinación con los sectores competentes protocolos para los casos de

contacto voluntario entre pueblos indígenas en situación de aislamiento y agentes externos;

- f) Desarrollar estudios específicos sobre las causas y factores externos que constituyen amenazas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, que permitan formular medidas legales y administrativas de protección, prevención e interdicción;
- g) Otorgar y controlar las autorizaciones extraordinarias para el ingreso al Hábitat Indígena;

Participación de las Organizaciones Indígenas

Las organizaciones indígenas de la zona coadyugarán al control y vigilancia del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo.

DEL HABITAT INDÍGENA DE LA CUENCA DEL SIPAPO

Naturaleza Jurídica del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo

El Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo es un área territoriales establecidas por el Estado venezolano, ubicada en...para garantizar la existencia y los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que las habitan y les permiten el aprovechamiento de sus recursos naturales para fines de subsistencia conforme a sus tradiciones y costumbres.

Carácter intangible del Hábitat Indígena de la Cuenca Sipapo

El Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo es intangible porque en ella se mantienen usos, costumbres y tradiciones indígenas que desde el derecho consuetudinario garantizan y desarrollan formas de vida.

Características y condiciones del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo

El Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo garantiza la integridad territorial, cultural, ecológica y económica de los pueblos indígenas allí existentes incluyendo aquellos en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial, en tal sentido:

- a) Quedan restringidos los asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que habitan en su interior.
- b) Se restringe la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres de sus habitantes.
- c) Se restringe el otorgamiento de derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el aprovechamiento con fines de subsistencia por parte de dichos pueblos.
- d) La totalidad de los pueblos indígenas al interior del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo concurrirán como beneficiarios mancomunados de la misma.

A tal efecto, se sugieren los siguientes usos de acuerdo al derecho consuetudinario:

Plan de Vida

Se sostiene en los fundamentos jurídicos nacionales e internacionales que disponen de la necesidad del territorio para garantizar y desarrollar las formas de vida. El Plan de Vida se fundamenta en:

Gestión Territorial

A partir del Plan de Vida emerge la importancia de la demarcación y titulación del territorio cuya gestión se basa en:

- A. El Ordenamiento Consuetudinario Territorial Indígena (OCTI).
- B. Zonificación de acuerdo a los usos y costumbres (ZUC) la cual se puede sostener en:

- Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).

De ser el caso, el Hábitat Indígena puede adquirir la connotación de ABRAE co-

administrado por los pueblos indígenas, de acuerdo a sus y costumbres.

- Áreas Regionales Bajo Régimen de Administración Especial (ARBRAE) o Áreas Locales Bajo Régimen de Administración Especial (ALBRAE).

Se trata de áreas concurrentes de protección de territorios indígenas. La concurrencia (en consecuencia la competencia) estaría determinada por el desarrollo de un dispositivo de carácter constitucional el cual no sólo reconoce sino que implementa un derecho constitucional, humano e indígena reconocido en la Carta Magna (artículos 119, 127 y 128).

Las interfaces con las otras figuras de protección existentes serían:

- Uso extensivo de carácter no extractivo o consuntivo: sólo se permiten actividades de educación ambiental.
- Uso extensivo de carácter extractivo o consuntivo: forestería comunitaria y cacería de subsistencia, proyectos de manejo sostenible de los recursos naturales bajo consulta y participación de los pueblos indígenas, de acuerdo a usos y costumbres.
- Caracterización por sectores zonas de altos conflictos; zonas de uso compartido; zonas mitológicas y sagradas de los pueblos indígenas; zonas de pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial en las cabeceras de los ríos.

Autorizaciones excepcionales de ingreso al Hábitat Indígena

No se permite el ingreso de agentes externos al Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo a fin de preservar la salud de las poblaciones sobre todo de aquellas en aislamiento voluntario o contacto inicial.

Las autorizaciones se otorgarán cuando se den las siguientes circunstancias:

- a) Cuando se hayan producido situaciones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, que signifiquen amenaza de epidemia para todos los pueblos indígenas en especial aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial.
- b) Cuando se identifiquen o denuncien actividades ilegales o ingresos no autorizados al

interior del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo.

- c) Cuando se constate la contaminación de los recursos hídricos o alimenticios, entre otros.

Control y rutas de ingreso

OIPUS junto al Ministerio para el Poder Popular del Ambiente y demás entes competentes, en coordinación con el resto de las organizaciones de los pueblos indígenas de la región mediante procesos participativos, consultados y concertados, establecerán los planes de control sobre las rutas de acceso al Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo.

Cautela de derechos

Corresponde a OIPUS junto al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y demás instituciones competentes conducir, implementar y supervisar el régimen especial instituido por el presente ordenamiento, el cual es parte de la política pública nacional sobre pueblos indígenas.

Derechos de los miembros de los pueblos y comunidades del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo

Los pueblos indígenas del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo, incluidos los que estén en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, se benefician de todos los derechos que la Constitución y la ley establecen a su favor.

Propuesta de creación del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo

Para la creación de la figura y Régimen Especial de Protección del Hábitat Indígena de la Cuenca del Sipapo deberá de tenerse en cuenta los procedimientos para el ingreso al hábitat indígena así como los protocolos de relacionamiento con las poblaciones en contacto inicial o aislamiento voluntario que allí existan. También deberá tenerse en cuenta las relaciones entre los hábitats indígenas y las áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE).

4. Características Antropológicas y Lingüísticas de los Pueblos Indígenas de Venezuela



Figura 9. Distribución de los pueblos indígenas en el territorio venezolano, de acuerdo al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

La población indígena representa alrededor del 2% de la población total de la República Bolivariana de Venezuela. Estimada para el año 2.000 en 511.784 personas, de una población total de alrededor de 25 millones de habitantes. Este porcentaje varía significativamente al considerar las entidades federales donde se ubica mayoritariamente la población indígena:

Entidad federal	Porcentaje sobre la población total
Zulia	10.6%
Amazonas	61.4%
Bolívar	3.5%
Delta Amacuro	26.6%
Apure	2.2%
Anzoátegui	0.7%
Monagas	0.6%
Sucre	0.2% ⁵⁰⁹

En un 84% se trata de hablantes de su lengua indígena y al menos 50% hablantes también del castellano. La población indígena en Venezuela proviene de las familias lingüísticas caribe, arawaka, chibcha, tupí-guaraní y otras, que llamaremos independientes pues no aparecen clasificadas lingüísticamente.

- Familia Lingüística Caribe: formada por las etnias siguientes: kariña, panare, mapoyo, yabarana, yekuana, pemón (akawai, patamona y macushi), yukpa (macoíta, irapa y japreria).
- Familia Lingüística Arawaka: constituida por las etnias: baré, yavitero, warekena, baniva, kurripako, piapoko, wayuú, paraujano y arauco.
- Familia Lingüística Tupí – Guaraní: integrada por la etnia yeral-ñengatú = tochipa.

⁵⁰⁹ Cfr. Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela. www.sisov.mpd.gov.ve

- Familia Lingüística Chibcha: formada por las etnias barí, tunebo=üwa y timotocuica.
- Etnias sin Filiación Lingüística: (Independientes)- jiwi (kuiva, amorua, sikuani y chiricoín), yaruro, pumé, huattuja-piaroa, puinave, joti o yuana, sapé, arutuní, o uruak, yanomami (yanoamo, sanemá, shamatare, shirishana o casapareniman) y warao.

Caracterización de los Pueblos Indígenas en Venezuela

1. Familia Caribe

- a. Kariña, galibi, kari`ña = gentilicio propio = Kariña

Ubicación Geográfica. Dispersa en el centro –sur del Estado Anzoátegui, norte del Estado Bolívar, en las riberas del río Orinoco (estados Bolívar, Apure y Delta Amacuro) y en el Estado Monagas, también se ubican en la zona de la Guayana Francesa, área costera de Guyana y Surinam donde son llamadas Galibi. Población según el Censo Indígena Nacional Año 2002: 16.686 personas.



**Indígena en el Akaatempo fiesta del Pueblo Kariña.
Fuente: Venezolana de Televisión**

Forma de vida, familia-matrimonio y organización social. Son sedentarios, practican la monogamia y la poliginia con familias extensivas.

Vestimenta, vivienda y grado de aculturación. Presentan un alto nivel de aculturación que influye en su pensar, sentir y actuar, por eso combinan los elementos

socioculturales, religiosos y lingüísticos autóctonos con lo criollo occidental, la falda típica y la vestimenta occidental, la choza de palma y la vivienda rural o casa típica del campesinado de Venezuela de dos aguas hecha de bahareque, madera techo de zinc o palma. Los ancianos siguen practicando y transmitiendo su lengua, creencias religiosas ancestrales, costumbres, tradiciones y otros elementos culturales, los niños y jóvenes

estudian y se preparan para guiar los destinos de los pueblos en pro de la defensa de sus derechos y valores.

Economía. Basada en el cultivo de conuco, como medio de subsistencia. También cultivan el maíz y el sorgo en mayor proporción, en la recolección de frutos silvestres y otros elementos naturales, cazan, pescan en los ríos, Mar Caribe y Océano Atlántico. Practican la ganadería vacuna y porcina, la avicultura, cestería, cerámica y los excedentes se comercializan de manera normal porque conocen y practican el sistema monetario nacional. La 36 división del trabajo depende del grado de aculturación: los preparados se incorporaron al aparato productivo a nivel manual, técnico, universitario, doméstico y otros con la remuneración y los beneficios contemplados en la ley, los que viven en sus comunidades autóctonas siguen trabajando de forma tradicional regidos por sus creencias religiosas, cultura y realidad, tomando en cuenta la edad y el sexo. Es importante mencionar que misioneros católicos, instituciones universitarias y culturales, así como los profesionales descendientes han trabajado de manera conjunta en la revitalización del idioma y la cultura con un haber de varios libros de texto, informativos, de referencia, diccionarios y otros, como apoyo a la educación intercultural bilingüe, en defensa de los derechos y valores de la población indígena en Venezuela. El sociólogo kariña- chaima Rómulo Isaiás Brito es uno de esos apóstoles que han trabajado incansablemente y actualmente disfruta complacido los logros obtenidos a través del esfuerzo conjunto, constancia y talento.

- b. Panare, E'ñiapá = gentilicio propio = Eñepá.

Ubicación geográfica y población. Habitan en la región del extremo occidental del Estado Bolívar entre los ríos Cuchivero y Guaniapo. Debido a la penetración económica foránea han sido despojados de sus territorios ancestrales, obligándolos a dispersarse a lugares lejanos y de difícil acceso como las selvas y llanuras adyacentes: norte del Estado Amazonas en el Municipio Manapiare y oeste del Estado Apure, estableciendo intercambios y comunicación con las etnias yekuana, jiwi, joti, yabarana, piaroa, yaruro-pumé y otras. Presenta una población aproximada de 4.207 personas (censo 2.000) Forma



**Comunidad E'ñepá de Coroza, Estado Bolívar
Venezuela**

de Vida, Familia- Matrimonio y Organización Social. Son sedentarios y seminómadas, su estadía depende de los recursos naturales y económicos que les brinda cada lugar. Son monogámicos y poligínicos con familias extensivas, en proceso de aculturación debido al contacto con la sociedad criolla en el trabajo, intercambio comercial de sus

productos del conuco, recolección silvestre, cestería y otros.

Vestimentas y Viviendas. Combinan la vivienda y la vestimenta de acuerdo al grado de aculturación.

- Vivienda autóctona: churuata grande y multifamiliar en la selva, churuata pequeña y unifamiliar en la sabana y otra choza provisional selvática de dos aguas y palma.
- Vivienda criolla: casa rural, típica del campesinado: de dos aguas, bahareque, madera techo de palma o zinc, pero de inmediato construyen al lado la típica churuata circular, espaciosa y como centro de socialización familiar.

Usan el guayuco o taparrabo combinándola con la vestimenta criolla, por eso es frecuente observar a los panare en guayuco o con vestimenta occidental manejando motos, bicicletas y bongos con motores fuera de borda, aunque en sus actividades la tradicional curiara y las largas caminatas son típicas en sus trabajos diarios. Debido al contacto con las etnias vecinas y criollas practican el bilingüismo y multilingüismo (panare-español, panare-joti, panare-pairoa, panare jiwi y otros). Están en proceso de aculturación absorbidos por la cultura occidental y etnias vecinas mestizaje: préstamos culturales, lingüísticos y religiosos.

Economía. Depende del grado de aculturación, en las comunidades el trabajo se organiza de acuerdo a la edad y el sexo, cultivan el conuco, cazan, pescan, recolectan frutos

silvestres y otros elementos naturales, trabajan muy bien la cestería ofreciendo sus hermosas y vistosas wapas (cestas), tallan la madera, practican la hilandería, también participan temporalmente en los cultivos de algodón, patillas y otros. Su trabajo, vida y realidad siguen regidos por sus creencias ancestrales que continúan transmitiendo los adultos y ancianos gradualmente. El excedente de su esfuerzo y trabajo (producto de la pesca, caza, conuco, recolección y otros), lo intercambian a través de trueque o comercio normal porque conocen y practican el sistema monetario nacional.

c. Mapoyo, wanay, = gentilicio propio= Mapoyo.

Ubicación Geográfica y Población Censo I.N.V año 2000. Pueblo ubicado en el Municipio Cedeño y en la población La Urbana en el Estado Bolívar, con una población aproximada 365 personas.

Forma de Vida, Familia-Matrimonio y Organización Social. Son sedentarios, monogámicos y exógamos, con un alto grado de aculturación.



Ángela Maritza García Reyes
Maestra artesana Mapoyo
Fuente: <http://www.correodelorinoco.gob.ve>

Vestimenta y Vivienda.
Visten como cualquier criollo, combinando lo autóctono con la innovación occidental, viven en casas rectangulares y techo de dos aguas, con paredes de bahareque y techo de palma o zinc. Presentan un alto grado de aculturación, comparten con las etnias vecinas de los Estados de

Apure y Amazonas, de ahí se deriva la influencia multiétnica, religiosa, lingüística y cultural, porque además de la cultura occidental y el idioma español reciben el cúmulo cultural mencionado de los pueblos vecinos, absorbiéndolos gradualmente porque son

minoría. Sin una revitalización lingüística y recuperación cultural se corre el riesgo de su total extinción como pueblo.

Economía. Trabajan el conuco, cazan, pescan, recolectan frutos silvestres y otros elementos naturales, practican la cerámica, cestería, cría de aves y animales domésticos en pequeña escala, dividen el trabajo de acuerdo a la edad y sexo, los excedentes los intercambian a través del trueque y comercio normal. Los más aculturados que han estudiado, trabajan de acuerdo a la profesión manual, técnica y universitaria en las instituciones, estos en su mayoría emigraron hacia las ciudades y otros estados del país.

d. Yabarana, guiquiro, yawahana= gentilicio propio =Yawarana.

Ubicación Geográfica y Población. Pueblo asentado en los Municipios de Manapiare (San Juan de Manapiare) y Atures del Estado Amazonas de Venezuela. Presenta una población aproximada de 292 personas (Censo I.N en Venezuela año 2000).

Forma de Vida, Familia-Matrimonio y

Organización Social. Son sedentarios y seminómadas, con un alto grado de aculturación, monogámicos, poligínicos (endogamia), con familia extendida, residencia patrilocal. Combinan los elementos religiosos, culturales y lingüísticos autóctonos con la innovación criolla y la influencia de etnias vecinas



Niña Yabarana.
Foto de Alfredo Cedeño

especialmente con los piaroa. Practican el bilingüismo y multilinguismo: yabarana, español-yabarana-piaroa y otros). El idioma yabarana presenta dos variedades dialectales divergentes: el orechicano y el guaiquiare.

Vestimenta y Vivienda. Visten como los criollos, habitan en churuatas construidas con madera y palma, también en vivienda rural y casa tradicional campesina de dos aguas con techo de palma o zinc, paredes de bahareque, bloques y cemento, esto varía de acuerdo al grado de aculturación.

Economía. Cazan, pescan, cultivan el conuco, practican la cestería, el tallado de madera, recolectan frutos y elementos naturales, participan en la explotación de los recursos forestales de la región como: fibra de cumare, chiquichiqui, palmas, bejucos, madera, caucho, pendare, balatá y otros. Crían aves y animales domésticos en menor escala; el trabajo en las comunidades es dividido de acuerdo a la edad y el sexo y la vida está impregnada de sus creencias ancestrales, pero los que han emigrado y estudiado desempeñan cargos en las diversas instituciones a nivel manual, técnico o profesionales de nivel superior.

e. Makiritare, Yekwana = gentilicio propio = Yekuana.

Ubicación Geográfica y Población. Etnia ubicada en los Estados Amazonas y Bolívar, en el norte de la Serranía Paríma, Alto Ventuari y sus afluentes, hoya del río Cunucunuma, Padamo, Contínamo, cuenca de los ríos Caura, Erebató y Paragua. Presentan una población aproximada de 6.523 personas (Censo I.N.V año 2000).

Forma de Vida, Familia-Matrimonio y Organización Social. Son sedentarios, seminómadas, con una organización social de familias extensivas, siendo la familia nuclear la base social, con residencia patrilocal, con matrimonios monogámico y poligínico (exogamia).

Presentan un alto nivel de aculturación debido al contacto con la sociedad criolla (misioneros, profesionales, colombianos, brasileños, guyaneses, etc), también con las etnias vecinas: yanomami, joti y otras.



**Pensador Yekwana
Artesanía**

Vestimenta y Vivienda. Esto depende del grado de aculturación por eso combinan el vestuario, la vivienda rural, la típica campesina, con el guayuco, la churuata circular unifamiliar y la comunal. Practican el bilingüismo: yekuana-español, yekuana-inglés, yekuana joti, yekuana- yanomami y otros.

Economía. Cultivan el conuco, recolectan frutos silvestres y elementos naturales, participan en la explotación de los recursos forestales de la región, en las excursiones científicas y limítrofes, cazan, pescan, tallan la madera, construyen de troncos de árboles los famosos bongos (canoas) makiritare, practican las cesterías elaborando las wapas y otras cestas. Incursionan en la cría del ganado (búfalos), abejas de donde obtienen la miel permitiéndolos organizar pequeñas empresas. Los adultos y ancianos son los encargados de seguir transmitiendo sus creencias ancestrales, lengua, costumbres, tradiciones y otros elementos culturales que impregnan el sentir, pensar y actuaciones de los yekuana. Son de contextura fuertes, activos, capaces de realizar grandes esfuerzos físicos como trasladar pesadas rocas y cargas en largas caminatas por las selvas y ríos porque son buenos navegantes y caminantes, viajeros incansables que llegan hasta Brasil y las Guayanas, por eso son llamados los “fenicios de la selva”. Los descendientes están en un proceso de preparación y transición, los que han estudiado se incorporan al aparato productivo, pero siguen en contacto con sus comunidades y raíces, erradicando gradualmente la vergüenza étnica y logrando gradualmente el pluralismo cultural, lingüístico, religiosos y social ya que es una numerosa población con una tendencia poblacional ascendente.

- f. Acawai, akawai, acaguayo = gentilicio propio=Arawako. Patamona y macushi-makuchi.

Ubicación Geográfica y Población según Censo año 2000. Etnias poco estudiadas y casi extintas de origen caribe, ubicadas en el Estado Bolívar territorio fronterizo entre Venezuela, Guyana y Brasil, también en la parte oriental de la zona habitada por los pemones en el Río Cuyuní, Branco y Rupununi. Presenta una población aproximada de:

Akawayos: 218 personas.

Macuchi: 83 personas.

g. Motilón. Gentilicio propio: Yukpa.

Presentan las variedades dialectales siguientes: macoíta, irapa y japrería

Ubicación Geográfica y Población. Etnia ubicada en el norte de la Sierra de Perijá del Estado Zulia de Venezuela, entre la zona limítrofe de Venezuela y Colombia. También en 41 los ríos Palmar en el norte y Tucuco al sur. Presenta una población aproximada de 7.522 personas (según Censo I.N.V. año 2000).

Forma de Vida, Familia-Matrimonio y Organización Social. Son sedentarios, seminómadas, con matrimonios monogámicos y poligínicos, presentan familias extensivas y un alto nivel de aculturación.

Vestimenta y Vivienda. La vestimenta y vivienda dependen el grado de aculturación aunque combinan lo autóctono con la innovación criolla, como el guayuco con el vestuario occidental, la choza de dos aguas hecha de palma, con la vivienda rural.



Sabino Romero Cacique Yukpa Asesinado.
Fuente: <http://cosecharoja.org/asesinan-a-sabino-romero-lider-indigena-venezolano/>

Economía. Cultivan el conuco, la pesca, caza, recolección de frutas silvestres y otros elementos naturales, tallan la madera, practican la cestería, hilandería, cría de aves, animales domésticos, ganado y caballos en menor escala. En las comunidades la vida se rige por las creencias religiosas y culturales ancestrales,

administrando el trabajo de acuerdo a la edad y el sexo, los que han estudiado se van incorporando gradualmente en el aparato productivo.

Los excedentes del trabajo los intercambian a través de trueque y comercio normal porque conocen y practican los sistemas monetarios de Venezuela y Colombia. El idioma Yukpa presenta las variedades dialectales siguientes: japreria, irapa y macoíta. Debido al despojo de sus tierras ancestrales por las compañías petroleras, forestales, ganaderas, agrícolas y eléctricas (Represa el Diluvio en la Sierra de Perijá) los yukpa, japrerías y demás etnias han emigrado a otros lugares lejanos como el caso específico de los japrerías ubicado en los pastizales de la hacienda el Totumo. Las etnias ubicadas en la línea fronteriza de Colombia, Venezuela, Brasil y Guyana enfrentan graves problemas tales como: la guerrilla, el narcotráfico, el contrabando, minería ilegal, hampa común y otros.

2. Familia Chibcha.

Esta numerosa familia lingüística habitaba la zona septentrional de Sudamérica, Andes de Colombia, Centro América, Andes Ecuatorianos, norte y este de Colombia, extremo occidental de Apure y en la Sierra de Perijá del estado Zulia de Venezuela.

a. Tunebo = üwa

Ubicación Geográfica y Población. Etnia ubicada en la vertiente oriental andina colombiana en los ríos Casanare y Arauca, occidente del Estado Apure y en el río Arauca (parte venezolana). Presentan una población aproximada de 11 personas (Censo I.N.V. año 2000). Es una etnia e idioma casi extintos, se están investigando, estudiando con miras a revitalizarlos.

b. Barí, Dobokubi, Motilón.

Ubicación Geográfica y Población. Etnia asentada en la zona meridional de la Sierra de Perijá, en contacto al norte con los yukpa y al sur con el río Catatumbo, región fronteriza de Colombia y Venezuela, por eso se desplazan por el río Oro, sur- este del lago de Maracaibo siendo un cauce natural que separa a ambos países. Es un idioma poco



Los mutilones

Fuente:

<http://www.venezuelamisionera.com.ve/>

estudiado debido a su lejana ubicación geográfica y de difícil acceso. Viven de manera aislada habitan en chozas de forma piramidal en cumbre rectangular cubierta de palma, usan guayuco y traje criollo. Según el censo I.N.V año 2000 presentan población aproximada de 2.200 personas.

Forma de Vida, Familia-Matrimonio y Organización Social.

Son selváticos, seminómadas, con matrimonios monogámicos y poligínicos (endogamia), con familias extensivas, administran el trabajo de acuerdo a la edad, el sexo, grado de aculturación y preparación profesional (manual, técnico o superior). Se encuentran en proceso de aculturación y extinción.

Economía. El medio de subsistencia se centra en el cultivo de conuco, la pesca, caza, recolección de elementos naturales, tallan la madera, practican la hilandería, cestería, cría de aves y animales domésticos en menor escala. Intercambian los excedentes de trabajo a través del trueque y de manera comercial normal. Los ancianos y adultos siguen transmitiendo los elementos culturales, creencias religiosas ancestrales y lengua.

3. Familia Lingüística Arawaka.

- a. Guajiro =Gentilicio Propio = Wayuú.

Ubicación Geográfica, Población según Censo I.N.V año 2000, Forma de Vida, Vivienda y Vestimenta.

Es el pueblo indígena más numeroso de Venezuela con una población aproximada de 293.777 personas, ubicado entre Venezuela y Colombia. En Venezuela se ubican en el Estado Zulia en los municipios Mara, Colón y Páez también en las poblaciones de



Niña Wayuu
Elaboración propia

Paraguaipoa, Sinamaica, barrios de la Ciudad de Maracaibo y costa occidental del Lago de Maracaibo.

Son sedentarios y seminómadas, presentan un alto grado de aculturación debido al contacto con las etnias vecinas, criollos venezolanos, colombianos y otros extranjeros (misioneros, investigadores, personal de las industrias petroleras, madereras, ganaderas y otras asentadas en la región). Por eso combinan los elementos de la religión, cultura y lengua con lo criollo, vistiendo el guayuco, la manta y otros atuendos Wayuú con el vestuario occidental, también la vivienda varía de acuerdo a ese nivel de aculturación y ubicación geográfica como en el caso de la baja Guajira donde las construyen con palmas de cocoteros y madera, pero en la alta y desértica Guajira la hacen con barro mezclado con pasto y el

techo con corazón de cardones (yoto' ojolo) y los que emigraron a las ciudades habitan en viviendas normales criollas (rural, del típico campesinado rectangular de dos aguas, unifamiliar, y multifamiliar, también de bloques, zinc, cementos y otros elementos criollos actuales). Otros se ubican en apartamentos y quintas.

Matrimonio, Familia y Organización Social. Son monogámicos, poligínicos prevaleciendo el matriarcado, la organización social está formada por clanes matrilocales constituido por varias familias nucleares.

Los ancianos y adultos en las comunidades siguen practicando y transmitiendo su lengua, creencias religiosas, tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones, gracias a ellos, a los profesionales descendientes, misioneros e investigadores se han podido elaborar libros de texto, recreativos, informativos, de referencia y la versión al idioma Wayunaiki de la Constitución Nacional de Venezuela del año 1999, publicada en el año 2000, siendo la primera en el mundo en ser traducida totalmente a un idioma indígena.

Los Wayuú no conocen fronteras por eso conviven en Colombia y Venezuela, cruzando los límites en la Guajira, por la Sierra de Perijá y otros lugares del Estado Zulia, han sufrido las desalojos de sus tierras ancestrales a consecuencia de la penetración de industrias como las petroleras, petroquímicas, madereras, ganaderas, agrícolas etc., también las delimitaciones fronterizas han sido otro elemento de confusión para el valiente wayuú. Es frecuente el bilingüismo y multilinguismo en esta etnia a consecuencia del contacto con las otras poblaciones indígenas vecinas como los yukpa, japreria, macoíta y barí, con el criollo y extranjeros.

Economía. Está centrada en la cría del ganado porcino, vacuno, ovino, en el trabajo de la cerámica, cestería, hilado, tejidos de tapices, chinchorros, hamacas, alpargatas, en el comercio informal, la agricultura en la región del sur en menor escala, trabajan en las haciendas esporádicamente. Los descendientes que han estudiado laboran en las instituciones privadas y oficiales de acuerdo a su especialidad (manual, técnica, y universitaria).

El Wayuú defiende sus valores y derechos resistiendo gradualmente el etnocida proceso de poblamiento, progreso y evolución de Venezuela, combinando lo original con la innovación occidental, pero están revitalizando el idioma y recuperando sus creencias religiosas y cultura a pesar del intenso mestizaje sufrido.

Intercambian sus excedentes a través del trueque y comercio directo normal porque conocen y practican los sistemas monetarios de Venezuela y Colombia, donde transitan y viven.

b. Paraujano. Gentilicio propio = Añú.

Ubicación Geográfica, Población, Forma de Vida, Grado de Aculturación, Vivienda y Vestimenta. Pueblo emparentado con el wayuú- guajiro, ubicado en el Estado Zulia, en la laguna de Sinamaica, en la región norte, islas de Toas, y San Carlos. Presentan un alto grado de aculturación debido al contacto con las etnias vecinas y población criolla.

Son sedentarios, combinan los elementos autóctonos con lo criollo, visten de manera normal con trajes occidentales, habitan los palafitos rectangulares con techos de dos aguas, utilizan el bahareque, madera, bejucos, palmas, tallos largos como horcones básicos en el agua, esos materiales originales han sido reemplazados gradualmente por estructuras de hierro, cemento, zinc y otros.

Matrimonio, Familia y Organización Social.

La pesca es una de las actividades básicas que realizan en la laguna de Sinamaica, el excedente lo venden en los puertos de Cuervito y otros lugares, también extraen y comercian el aceite de coco, la enea a los ganaderos y tubérculos, aprovechando el beneficio turístico de la laguna y zona. Practican la cerámica, cestería y tapicería.

Es una etnia poco investigada y estudiada a pesar del esfuerzo de los descendientes, investigadores, especialmente el proyecto revitalizador presentado por el Dr. Esteban Emilio Monsoyi y la Licenciada

Arelis Barbella en la Dirección de Literatura del CONAC, cuya ejecución sería provechosa porque se recuperaría un cúmulo valioso de los elementos culturales, las creencias ancestrales y se revitalizaría el idioma añú, un gran aporte para la educación intercultural bilingüe. Presentan una población aproximada de 11.205 personas.



Indígena Añu
Fuente: Fondo de Turismo del Zulia

c. Piapaco, enagua, dzáze, tsáse. Gentilicio propio = Piapako.

Ubicación Geográfica, Población, Forma de Vida, Vivienda y Vestimenta. Etnia dispersa en la zona de los municipios Atures, y Atabapo del Estado Amazonas de Venezuela, también en los llanos orientales colombianos entre los ríos Vichada y Guaviare. En la región colombiana habita el mayor número de hablantes. 47 Presentan una población aproximada de 1.939 personas y un alto grado de aculturación por eso combinan lo autóctono con lo criollo.



Indígena Piapoco

Fuente:

<http://esteticapueblosoriginariosvenezuela.blogspot.com/2011/06/pueblos-originaarios-piapoco.html>

Son sedentarios y seminómadas, viven en churuatas (chozas) circular construidas con palmas, bejucos y madera, también en viviendas rurales, casas típicas del campesinado con base rectangular, techo de dos aguas, paredes bahareques, bloques etc. Visten similar al criollo.

Matrimonio, Familia y Organización Social. La familia

nuclear es la base social, practican monogamia (exogamia), la organización social está organizada por familias extensas, con residencia patrilocal, el trabajo se divide de acuerdo a la edad, sexo y el grado de preparación profesional (manual, técnico y superior).

Economía. Cultivan el conuco, participan en la explotación de los recursos forestales de la región como: fibras de cumare, chiquichiqui, también bejucos, palmas, maderas, caucho, balatá y otros. Trabajan la cestería tallada en madera, la cerámica, recolectan frutos silvestres y otros elementos naturales, crían aves y animales domésticos en pequeña escala.

Intercambian los excedentes del trabajo a través del trueque con las etnias vecinas y de manera comercial directa con los criollos. Los investigadores, misioneros y descendientes han logrado elaborar libros de textos, glosarios, informativos y religiosos.

c. Baniva, bani' iwa, baníwa. Gentilicio propio = Baniva.

Ubicación Geográfica, Población, Forma de Vida, Vivienda y Vestimenta. Etnia ubicada en el Estado Amazonas de Venezuela, en las poblaciones de Maroa, Guainía, Casiquiare, Atabapo y pequeños núcleos en el Estado Bolívar. También en las márgenes de los ríos

Xie, Isana y Akí en Brasil. Presentan una población aproximada de 2.408 personas, un alto grado de aculturación y en peligro de extinción, debido al contacto con los criollos y otras etnias vecinas, por eso combinan los elementos autóctonos con la innovación occidental. Son sedentarios, seminómadas, visten como los criollos, viven en churuatas (chozas) circulares, también en viviendas rurales y casas normales como los occidentales.



Mujer Baniva
Foto de Alfredo Cedeño

Matrimonio, Familia y Organización Social.

Practican la monogamia (exogamia local) patrilocal, con familias extendidas y residencia patrilocal.

Economía. La economía está basada en la práctica del conuco, la pesca, la caza, recolección de frutos silvestres y otros elementos naturales, participan en la extracción de los recursos forestales de la región como: fibras, bejucos, maderas, palmas, caucho, pendare y otros. Trabajan la cestería, tallado en madera, elaboran armas como arcos, cerbatanas y flechas. Crían aves y animales domésticos en menor

escala, los excedentes del trabajo los venden de manera directa. Los misioneros, investigadores y

población baniva han logrado realizar textos, glosarios y otros materiales instruccionales como apoyo a la educación intercultural bilingüe y revitalización del idioma baniva.

d. Warekena, warekjena, guarequena, walekena. Gentilicio propio = Warekena.



Niño Warekena
Foto de Alfredo Cedeño

Ubicación Geográfica, Población según Censo I.N.V año 2000, Forma de Vida, Grado de Aculturación, Vivienda y Vestimenta. Etnia que habita en las regiones del Río Negro, Atabapo, Orinoco, Casiquiare, Guainía, en las poblaciones de San Miguel, Guzmán Blanco, las Isletas, Moroa y otras del Estado Amazonas de Venezuela. Presentan una población aproximada de 513 personas y un alto grado de aculturación por eso combinan los elementos autóctonos con los criollos. Son sedentarios y seminómadas, visten como los criollos, viven en churuatas circulares con techo de palmas, en viviendas rurales y casas normales criollas.

Matrimonio, Familia y Organización Social. Practican la unión monogámica (exogamia), con familias extendidas y la familia nuclear es la base social.

Economía. Basada en la pesca, caza, recolección de frutos silvestres y elementos naturales, cultivo del conuco, participan en la extracción de los recursos forestales de la región, trabajan la cestería, crían aves y animales 49 domésticos en menor escala, los excedentes del trabajo los comercian con los demás etnia y con los criollos. Practican el bilingüismo y multilingüismo (warekena, español y otras lenguas indígenas vecinas). Se han elaborado glosarios, libros de texto, informativos y de referencias gracias al esfuerzo y constancia de los investigadores, misioneros y población warekena.

e. Baré, balé, baale. Gentilicio propio = Baré

Ubicación Geográfica, Población según Censo I.N.V año 2000, Forma de Vida, Grado de Aculturación, Vivienda y Vestimenta. Etnia ubicada en las cuencas hidrográficas de los ríos de Amazonas, Negro, Guainía y Casiquiare, entre los países Brasil, Venezuela y

Colombia, especialmente en los pueblos de San Carlos de río Negro, Santa Rosa de Amanadona, Santa Lucía y otros. Presentan un alto grado de aculturación y una población aproximada de 2.815 personas, son sedentarios seminómadas, visten similar al criollo, viven en churuatas (chozas) circulares viven con techo de dos aguas construidas con palmas, bahareque, maderas y otros elementos. También en vivienda rural y normal criolla.

Economía Basada en el cultivo del conuco, la pesca, caza, recolección de frutos silvestres y otros elementos naturales, participan en la extracción de los recursos forestales de la región, empluman wapas (cestas), tejen chinchorros de cumare, realizan las flautas y tambores sus instrumentos musicales, tallan la madera, elaboran cestas, esteras, sebucanes, mapires, y catumares. Crían animales domésticos y aves en menor escala, los excedentes los venden directamente. La emigración de las etnias arawakas hacia Puerto Ayacucho y otros estados del país ha sido masiva, dejando la fronteras desprotegidas y sus zonas ancestrales abandonadas en busca de oportunidades de trabajo, estudios, asistencia médica y mejor vida Los descendientes que han estudiado se han incorporado al aparato productivo en todo el país, inclusive en el exterior.



Indígena Bare
Foto de Alfredo Cedeño

f. Kurripako, Curripaco. Gentilicio propio= Kurripako.

Ubicación Geográfica, Población según Censo I.N.V año 2000, Forma de Vida, Grado de Aculturación, Vivienda y Vestimenta. Étnia asentada entre los ríos Negro, Guainía, Atabapo y Orinoco de los países Venezuela y Colombia. Presentan un alto grado de aculturación y una población aproximada de 4.925 personas. Son sedentarios y seminómadas, viven en churuatas (chozas), en vivienda rural y normal criolla, visten, actúan y piensan como un criollo. Combinan los elementos autóctonos con la innovación

occidental, se ha producido un intenso mestizaje entre las etnias kurripako, yeral, puinave y baniva, más influencia criolla.

Matrimonio, Familia y Organización Social. Practican la monogamia y poliginia (exogamia), la organización social está formada por familias extensivas y la familia nuclear es la base de la sociedad, practican el bilingüismo y multilingüismo (kurripako, español, kurripako- baniva, kurripako- puinave, kuripako- yeral etc). El éxodo kurripako también ha sido significativo, por eso los descendientes que viven en las ciudades se han preparado e incorporados al aparato productivo y sociedad criolla, en cambio los pocos que se quedaron en las comunidades originales siguen practicando y transmitiendo sus creencias religiosas, lengua y cultura, colaborando con los docentes kurripako, misioneros e investigadores permitiendo la revitalización del idioma a través de libros de textos , informativos, de referencias, glosarios y religiosos.

Economía. Los jóvenes que estudian y regresan a las comunidades desempeñan cargos de docentes, enfermeros y otros, los demás trabajan de manera tradicional dividiendo el trabajo de acuerdo a la edad y el sexo. Cultivan el conuco, recolectan elementos naturales, participan en la explotación de los recursos forestales de la región, cazan, pescan, practican la cerámica y la cestería, crían aves y animales domésticos en menor escala e intercambian los productos a través del comercio normal directo.

4. Familia Tupi-Guaraní.

- a. Yeral, Tochipa, Ñengatú. Gentilicio propio Yeral.

Ubicación Geográfica, Población y Forma de Vida. Fue una familia lingüística numerosa dispersa anteriormente desde Brasil, Bolivia, Paraguay, río de la Plata, las Guayanas y el sur de Venezuela. El idioma yeral es proveniente del norte de Brasil y de la familia lingüística tupí- guaraní con el cual se evangelizó y educó la población indígena de esa zona. Ese idioma recibió influencias de otros idiomas indígenas como: kurripako, baré, baniva, warekena y del portugués. En los Yeral es frecuente el bilingüismo y

multilingüismo por los contactos con las etnias vecinas y criollos de los países mencionados. Según el censo I.N.V del año 2000 presentan una población aproximada de 1.294 personas. Etnia e idioma en proceso de extinción, aunque en Brasil se conserva un importante cúmulo lingüístico y cultural yeral en los libros y material instruccional utilizados en la educación y evangelización indígena en la extensa zona mencionada. Son sedentarios, seminómadas, con matrimonios monogámicos y poligínicos (exogamia), con familias extensiva pero la nuclear es la base de la sociedad, el trabajo se divide de acuerdo a la edad, el sexo, nivel de aculturación y preparación intelectual (manual, técnico, administrativo, y superior). Habitan en viviendas como los criollos con techos de palma y zinc, paredes de bahareque o bloque.

Economía. Cultivan el conuco, pescan, cazan, recolectan elementos naturales, participan en la explotación forestal de la región como: fibras de chiquichiqui, cumare, madera, bejucos, palmas, caucho, pendare etc. También tallan la madera, practican la cestería, anteriormente emplumaban muy bien las wapas (cestas con plumas de aves) y tejían chinchorros de cumare similar a los arawaco.

5. Etnias y Lenguas no Clasificadas: Jiwi (cuiva, amorua, sicuani y chiricoín), yaruro-pumé, yanomami, huattujja-piaroa, puinava, arutuní o uruak, yanomami y warao.

a. Jiwi, Guahibo, Guajbo, Guácharo = gentilicio propio = Jiwi.

Ubicación Geográfica y Población según Censo I.N.V. año 2000. Presentan 4 subgrupos: kuiva, amorua, sicuani, y chirimoya. Pueblo que habita la amplia zona de los llanos y bosque de Venezuela y Colombia, sur del Estado Apure, nor-occidente del Estado Amazonas, alrededor de San Juan de Manapire, en los ríos Vichada, Tuparro, Tomo, Meta, Capanaparo y curso del río Orinoco.

Forma de Vida, Familia-Matrimonio y Organización Social. Son seminómadas y sedentarios con matrimonio monogámico y poligínico (exogamia local), con familia extensiva dividiendo el trabajo de acuerdo al nivel de aculturación y preparación profesional (manual, técnico, administrativo, comercial y superior).



Indígena Jivi
Autor desconocido

Vestimenta y Vivienda. Presentan un alto grado de aculturación debido al contacto con las etnias adyacentes, países vecinos, población criolla nacional e internacional. Combinan lo autóctono con lo criollo por eso visten como criollos, habitan las chozas tradicionales, la vivienda rural y criolla.

Economía. La economía se centra en el cultivo del conuco, cazan, pescan, recolectan frutos silvestres y otros elementos naturales, tallan la madera, practican la cerámica, cestería, cría de aves, animales domésticos y ganadería en menor escala, participan en la explotación de los recursos forestales de la región en

el turismo y otras actividades. Los excedentes del trabajo lo intercambian a través del trueque y el comercio normal. Los descendientes Jiwi estudian, se preparan e incorporan a las diversas instituciones del país, los adultos y ancianos siguen transmitiendo el cúmulo cultural y lingüístico, gracias a ese empeño y a que los especialistas y misioneros han elaborado libros de texto, recreativos, de información, y diccionarios que apoyan la revitalización lingüística de esa etnia.

b. Yanomami, Guaica, Guajaripo = gentilicio propio Yanomami.

Ubicación Geográfica y Población. Presentan 4 subgrupos = yanoama, sanemá, shamataré y casapare-niman. Etnia dispersa en la extensa zona entre Venezuela, Brasil y Guyana, en los ríos Orinoco, Ocamo, Padamo, Matacuni, Mavaca, Siapa en el Estado Amazonas, Ríos Caura y Paragua en el Estado Bolívar también en los Ríos Parima, Uraricuera, Catrimani, Demeni, Padawiri y otros en territorio Brasileño. Población aproximada de 12.324 personas (según Censo I.N.V. año 2000).

Forma de Vida, Familia-Matrimonio y Organización Social. Son seminómadas y sedentarios con matrimonio monogámico y poligínico (exogamia local), con familia extensiva y residencia patrilocal.

Vestimenta Vivienda y Nivel de Aculturación. Viven aislados, selváticos en lento proceso de aculturación debido al contacto con otras etnias vecinas como la yekuana, jotí, y otras, también con

los occidentales (misioneros europeos, norteamericanos, brasileños, guayaneses etc).

Visten el guayuco y el traje criollo eso depende el grado de aculturación. Viven

en chozas (shabono) construidas de palma y

madera con techo de una agua, también construyen pequeñas chozas en la selva cuando se alejan a realizar trabajos (caza, pesca, recolección y otros).



Niños Yanomami

Fuente: <http://www.yanomami-hilfe.de/es/los-yanomami/>

Economía. El trabajo se realiza de acuerdo al nivel de aculturación, los que viven tradicionalmente en las comunidades clasifican el trabajo tomando en cuenta la edad y el sexo, cultivan el tradicional conuco, cazan, pescan, recolectan frutos silvestres y otros elementos naturales, practican la cestería de manera rudimentaria, intercambian los excedentes de trabajo con las etnias vecinas y criollos a través de trueque también de manera normal directa. Existen 4 subgrupos yanomami: yanoama, senemá, shamataré y casapareniman. Los Yanomami más aculturados trabajan según el nivel de preparación manual, técnica, docente, enfermería y otros, combinando gradualmente lo autóctono con lo criollo. Su lejana y poco accesible ubicación geográfica, más su ferocidad anterior favoreció la conservación de sus costumbres creencias ancestrales, lengua, tradiciones y

otros elementos cultural y lingüístico. Gracias al esfuerzo y dedicación de los misioneros, profesionales y a los descendientes se han elaborado libros de textos, religiosos, informativos, de referencia e importantes glosarios, es una de las etnias más investigadas a pesar de su ubicación geográfica. Practican el bilingüismo y multilingüismo debido al contacto con las otras etnias vecinas, países limítrofes, criollos nacionales y extranjeros. A pesar de esa influencia siguen conservando todos sus elementos culturales, religiosos lingüísticos, por eso la vida y el trabajo yanomami giran alrededor de sus creencias ancestrales. Senemá población aproximada Censo I.N.V año 2000 es de 3.035 personas.

c. Piaroa, Dearuwa, Wu'tjuja = gentilicio propio = Huattuja.

Ubicación Geográfica, Grado de Aculturación, Población y Forma de Vida. Etnia ubicada en el nor-occidente del Estado Amazonas en los ríos Orinoco, Manapiare, Suapure, Ventuari y en el Distrito Cedeño del Estado Bolívar en Venezuela. Población aproximada es de 14.494 personas. Son selváticos, viven aislados, sedentarios, seminómadas, están en un lento proceso de aculturación, debido a su temperamento introvertido, egocéntrico y cerrado.

Matrimonio, Familia, Organización Social, Vivienda y Vestimenta. Practican la unión monogámica y poligínica (exogamia local), con familias extensivas residencia patrilocal, visten con guayuco y ropa criolla, habitan en churuata comunal circular con una sola puerta, una apertura en el techo de madera y cubierta de palma totalmente, la vivienda piaroa es similar a su temperamento cerrado e introvertido y conservador cuidadoso de lo suyo. Combinan la tradicional churuata con la vivienda rural y casa campesina. Su vida y realidad están influenciadas por sus creencias ancestrales, la lejana y poco accesible ubicación geográfica más su temperamento introvertido les han permitido conservar su lengua, cultura y creencias ancestrales.

Economía. La economía en las comunidades Piaroa se sustenta en el cultivo del conuco, recolección de frutos silvestres y otros elementos naturales, participan en la explotación de los recursos forestales de la región como: fibras de chiquichiqui, cumare y otros, también madera bejucos, palmas etc. Cazan, pescan, practican la cestería, hilandería, cerámica, tallan la madera, la ganadería, cría de aves y animales domésticos en pequeña escala, los excedentes lo intercambiaban a través del trueque y de manera comercial directa. Dividen esos trabajos de acuerdo a la edad y el sexo, los descendientes Piaroa se han venido preparando por eso hoy cuentan con docentes, enfermeros, motoristas y otras profesiones que combinan con sus roles tradicionales. Practican el bilingüismo y multilingüismo como consecuencia del contacto con las etnias adyacentes, países vecinos y cultura occidental como: piaroa- español, piaroa yabarana, piaroa- mako y otras. Es una etnia poco estudiada e investigada de ahí deriva la escasa información bibliográfica al respecto.



**Piaroas en traje tradicional
Elaboración propia**

Gracias al esfuerzo de los misioneros, especialistas, investigadores y descendencia piaroa se ha logrado realizar libros religiosos, de texto, informativos y glosarios monolingües y bilingüespiaroa- español. Los Piaroa comparten un inmenso mestizaje con los mako y yabarana.

d. Puinave.

Ubicación Geográfica, Población y Forma de Vida. Etnia situada entre Colombia y Venezuela en las cuencas de los ríos Inirida y Guaviare, alrededor de San Fernando de Atabapo. Presentan una población aproximada de 1.307 personas, son sedentarios y

seminómadas, su estada depende de los recursos que bien les brinda la naturaleza y las oportunidades de trabajo.

Matrimonio, Familia, Organización Social, Vivienda, Vestimenta y Nivel de Aculturación. La familia nuclear es la base social, practican la unión monogámica y poligínica (exogamia), la organización social está constituida por familias extensivas y con residencia patrilocal. Combinan el guayuco con el traje criollo, viven en casa tradicionales con techos de dos aguas hechas de palma. Se encuentran en un intenso



Mujer Puinave preparando casabe

Fuente: <http://etniapuiave-1103.blogspot.com/>

proceso de aculturación y en peligro de extinción, a causa del contacto con las demás etnias de la región, criollos colombianos, venezolanos y otros, eso ocasiona el mestizaje, bilingüismo y multilingüismo.

Economía. Basada en el cultivo del conuco, recolección de frutos silvestres y otros elementos naturales, participan en la explotación de los recursos forestales de la región como: la manaca, el ceje, palmas, bejucos, madera y otros, también cazan, pescan, practican el hilado, la cestería, el tallado de madera, crían aves y animales domésticos en menor escala, intercambian los productos a través del trueque y comercio directo.

e. Yuana, hodi, Joti, Gentilicio propio=Yuana.

Ubicación Geográfica, Población y Forma de Vida. Pueblo ubicado en los Estados Bolívar, y Amazonas, en la zona selvática de los ríos Kaima, Cuchivero, Parucito y Asita. 56 Las características básicas y el sistema sonoro del idioma yuana son similares al yanomami, pero aún no se ha aprobado el parentesco y filiación. Viven aislados, son seminómadas y selváticos.

Matrimonio, Familia, Organización Social, Vivienda y Vestimenta. Practican las uniones



Jotis

Fuente: <http://www.ivic.gob.ve/>

monogámicas y poligínicas (exogamia local), con familias extensivas, residencia patrilocal, organizados en bandas. Visten rudimentarios guayucos, habitan de manera temporal en chozas hechas de palmas, madera y bejucos de forma oblinga. Tienen contacto con los yekuana, yanomami, y panare que son etnias más numerosas y mejor organizadas por eso los están absorbiendo gradualmente. Étnia aislada, selvática y original en un intenso

proceso de absorción por las tres etnias mencionadas y en extinción.

Economía. El trabajo es dividido de acuerdo a la edad y el sexo, la débil economía se sustenta en el cultivo tradicional del conuco, la recolección de frutos silvestres y otros elementos naturales, cazan pescan, hacen rusticas cestas, hilan el algodón silvestre, intercambian sus productos a través del trueque con los yekuana, panare y yanomami.

- f. Warao, warraus, warras, waraus, ligüitique, tibibis, chaguan, faraute, palomo, mariusa, guaraúno y guaraoto.

Ubicación Geográfica, Población y Forma de Vida. Pueblo numeroso que habita en el oriente venezolano en los Estados Delta Amacuro, Sucre, Monagas, especialmente en los caños afluentes del río Orinoco en el Delta y Guayana. Presenta una población aproximada de 36.028 personas, con un alto grado de aculturación debido al contacto con las etnias vecinas, misioneros, investigadores y demás criollos venezolanos y extranjeros, también a su importante y estratégica ubicación geográfica, salida al mundo a través del Delta del Orinoco hacia el Océano Atlántico. Siendo sedentarios y se seminómadas. Los ancianos y adultos siguen practicando en su hábitat sus creencias ancestrales, costumbres, tradiciones, lengua y demás elementos culturales, aunque debido al despojo y contaminación de sus lugares originales por las compañías petroleras, madereras,

arroceras, del cogollo de palmas y otros han ocasionado el éxodo Warao hacia las ciudades donde practican la mendicidad y a otros lugares de la misma región.

Matrimonio, Familia, Organización Social, Vivienda y Vestimenta. Presentan uniones monogámicas y poligínicas (exogamia), con familias extensivas, visten guayucos y traje normal criollo, viven en palafitos, vivienda rural y la típica casa del campesinado venezolano, combinan los elementos autóctonos con lo criollo-occidental y eso depende del grado de aculturación.



Niña Warao

Fuente: <http://orinoco.travel/es/waraos>

Economía. El trabajo se divide de acuerdo al grado de aculturación, los que viven en sus comunidades lo administran tomando en consideración la edad, el sexo y nivel de estudio, manual, técnico-profesional superior. Practican el conuco, recolección de frutos silvestres y otros elementos naturales, pescan, cazan, tallan la madera, practican la cestería, cultivan el arroz, crían ganado porcino, vacuno, animales domésticos y aves todo en pequeña escala, intercambian sus productos con las otras etnias y criollos a través del comercio directo. Gracias al esfuerzo de los misioneros, investigadores y descendientes se han elaborado libros de texto, diccionarios, informativos y otros.

g. Yaruro, capuruchano, chiricoa. Gentilicio propio= Pumé.

Ubicación Geográfica, Población según y Forma de Vida. Pueblo radicado en el Estado Apure entre los ríos Cunaviche, Guachara, Capanaparo, Cinaruco y Reicito. Presentan un alto grado de aculturación, con una población aproximada de 8.222 personas (Censo I.N.V. año 2000), siendo sedentarios y seminómadas.

Matrimonio, Familia, Organización Social, Vivienda y Vestimenta. Practican la monogamia, poliginia, con familia extensiva, la familia nuclear es la base de la sociedad, el trabajo se comparte de acuerdo a la edad, el sexo, grado de aculturación y preparación manual, técnica y profesional superior o medio. Anteriormente usaban guayuco ahora visten con el traje criollo femenino y masculino. Viven en chozas provisionales, vivienda rural y casa criolla de dos aguas. Combinan los elementos autóctonos con lo criollo.

Economía. Cultivan el conuco, practican el hilado de algodón, la cestería, cerámica, recolectan frutos silvestres y otros elementos naturales, crían animales domésticos, aves, ganado equino y vacuno en pequeña escala, los 58 excedentes los intercambian de manera comercial directa con los criollos y otras etnias. Gracias al esfuerzo de los misioneros, investigadores y descendientes se han elaborado libros de textos, informativos, glosarios y otros materiales instruccionales revitalizadores de la cultura, creencias ancestrales y lengua. Los adultos y ancianos hacen el papel de multiplicadores porque siguen transmitiendo el cúmulo lingüístico, cultural y religioso a través del tiempo y el espacio.

Bibliografía

Libros

Abad, L. (2003): Etnocidio y Resistencia en la Amazonía Peruana, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.

Aguilar, V. y Bustillos, L. (2007): Transversalización de la política (pública) para pueblos indígenas. Hacia una definición del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, Ed. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida.

Aguilar, V. y Bustillos, L. (2011): Plan de vida de la comunidad indígena Yukpa de Chaktapa en la Sierra de Perijá de Venezuela, Ed. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida.

Aguilar, V. (2012): Venezuela: diálogos entre el derecho consuetudinario indígena y el derecho positivo, Ed. GTAI, Mérida.

Alonso, M. (1999): Voces Indígenas en Foros Internacionales, Ed. Plaza y Valdés Editores, México D.F.

Álvarez, N., Oliva, J. y Zúñiga, N. (2009): Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural sostenible, Ed. Catarata, Madrid.

Anaya, J. (2005): Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Ed. Trotta, Madrid.

Aparicio, M. (2005): Caminos hacia el reconocimiento. Pueblos indígenas, derechos y pluralismo, Ed. *Universitat* de Girona, Girona.

Aparicio, M. (2011): Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina, Ed. Icaria, Barcelona.

Ariza, L. (2009): Derecho, saber e identidad indígena, Ed. Siglo del hombre, Bogotá.

Arpini, A. y Jalif, C. (2010): Diversidad e Integración en Nuestra América. Independencia, Estados Nacionales e integración continental (1804-1880), Ed. Biblos, Buenos Aires.

Auat, L. (2003): Crítica de la razón conquistadora: Vitoria y la transmodernidad, Ed. ICALA, Río Cuarto.

Bello, L. (2005): Derechos de los pueblos indígenas en el nuevo ordenamiento jurídico venezolano, Ed. IGWIA, Copenhagen.

Bello, L. (2011): El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural. Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas de Venezuela (1999-2010), Ed. IGWIA, Copenhagen.

Beltrán, E. (2009): Derechos torcidos. Tópicos, medias verdades y mentiras sobre pobreza, política y derechos humanos, Ed. Debate, Barcelona.

Bodin, J. (1590): Los seis libros de la República, Ed. TECNOS, (2006).

Bonfante, P. (1965): Instituciones de Derecho Romano, Ed. Instituto Editorial Reus, Madrid.

Baudrillard, J. y Morin, E. (2003): La violencia en el mundo. Ed. Libros del Zorzal, Buenos Aires.

Buerghenthal, T. y Shelton, D. (1995): *Protecting Human Rights in the Americas. Cases and Materials*, Ed. N. P. Engel, Publisher, Strasbourg.

Carrillo, J. (1976): Soberanía del Estado y Derecho Internacional, Ed. Tecnos, Madrid.

Cabedo, Vicente (2012): Pluralismo jurídico y pueblos indígenas, Ed. Icaria, Barcelona.

Casal, J., Arismendi, A. y Carrillo, C. (2007): Tendencias actuales del Derecho Constitucional: Homenaje a Jesús María Casal Montbrun, Ed. Texto C.A., Caracas.

CEJIL (2012): Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos, Ed. CEJIL, Buenos Aires.

Centro de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (1987): América Latina y África en la perspectiva comunitaria, Ed. Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes, Mérida.

Chirif, A. y García, P. (2007): Marcando Territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía, Ed. IWGIA, Copenhague.

Clarac, J., Rojas, B. y González, O. (2000): La situación de la salud entre las poblaciones indígenas del Estado Bolívar (1996) en El discurso de la salud y la enfermedad en la Venezuela de fin de siglo, Ed. Universidad de Los Andes, Mérida.

Clavero, B. (1974): Mayorazgo y propiedad feudal en Castilla 1369-1836, Ed. Siglo XXI, Madrid.

Clavero, B. (1994): Derecho indígena y cultura constitucional en América, Ed. Siglo XXI, México D.F.

Clavero, B. (2012): ¿Globalización del Constitucionalismo? Transnacionalidad de empresas entre poderes y derechos por tiempos postcoloniales (1974-2011), Ed. Milano-Dott. A. Giuffrè Editore, Roma.

Coloma, J. (1976): Léxico de política, Ed. Laia, Barcelona.

Coppens, W. (1981): Del canaleta al motor fuera de borda, Ed. Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Caracas.

De Capdequi, J. (1946): El régimen de la tierra en la América Española durante el periodo colonial, Ed- Montalvo, Ciudad Trujillo.

De Ferdinandy, M. (2008): Carlos V, su alma y su política, Ed. Áltera, Barcelona.

De las Casas, B. (1552): Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Ed. Orbis, S.A. (1986), Barcelona.

De Vitoria, F. (1529): *Relectio de Indis*. Edición crítica bilingüe por L. Pereña y J.M. Pérez Préndes, CHP-CSIC, Madrid. (1967).

De Vitoria, F. (1529): (*Relectio de Indis*) Relecciones sobre los Indios y el Derecho de Guerra. Ed. Colección Austral, Madrid, pág. 54. (1978)

Domínguez, J. (1996): Derecho civil. Parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez. Ed. Porrúa, México D.F.

Donís, M. (2001): El territorio de Venezuela. Documentos para su estudio, Ed. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

Douzinas, C. (2008): El fin de los derechos humanos, Ed. Legis, Antioquia.

Duran, J. (2000): Estrategia y economía de la empresa multinacional, Ed. Pirámide, Madrid.

Durand, C. (1998): Derecho nacional, derechos indios y derecho consuetudinario indio. Los triquis de Oaxaca, un estudio de caso, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.

Dussel, E. (2001): La otra modernidad. Hacia una Filosofía Política Crítica, Ed. Desclée de Brower, Bilbao.

Eco, U. (1997): Cómo se hace una Tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, Ed. Gedisa, Barcelona.

Eroles, C., Fazzio, A. y Scandizzo, G. (2008): Políticas Públicas de Infancia. Una mirada desde los derechos, Ed. Espacio, Buenos Aires.

Ferrajoli, L. (1999): Derechos y garantías. La ley del más débil, Ed. Trotta, Madrid.

Ferrer, J. y Sanz, S. (2008): Protección de personas y grupos vulnerables. Especial referencia al derecho internacional y europeo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.

Fonseca, G. y López, E. (2003): Pueblos y lenguas de fronteras, Ed. Fondo Editorial de la UNMSM, Lima.

Fundación Venezuela Positiva (2004): Lesa Humanidad, Ed. Fundación Venezuela Positiva, Caracas.

García, A. (2001): Materiales para una reflexión sobre los derechos colectivos, Dykinson, Madrid.

García-Gallo, A. (1987): Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho Indiano. Ed. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid.

Girardi, G. (1998): Desde su propia palabra. Los indígenas, sujetos de un pensamiento emergente, Ed. Abya Yala, Quito.

Gómez, F. y Pureza, J. (2003): Los derechos de los pueblos indígenas” en La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao.

Gómez, M. y Sainz, H. (2008): El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo. El marco lógico en programas y proyectos: de la identificación a la evaluación, Ed. Cideal, Madrid.

Gough, I., y Doyal, L. (1994): La teoría de las necesidades, Ed. Icaria, Barcelona.

Grey, N. y Zamosc, L. (2005): La lucha por los derechos indígenas en América Latina, Ed. Abya-Yala, Quito.

Gutiérrez, E. (2006): Inseguridad Territorial Indígena, Fundación Escuela de Gerencia Social, Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Caracas.

Harvey, D. (2004): El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, Ed. Clacso, Buenos Aires.

Herrera, F. (1969): Viajeros de Indias, Ed. Santillana S.A., Caracas

Hobbes, T. (1651): *Leviathan*. Ed. SHAPIRO, I. *Yale University Press*, (2010).

Jaramillo, J. (1997): Travesías por la Historia, Ed. Imprenta Nacional, Bogotá.

Jiménez, E. (1980): El Derecho Internacional Contemporáneo, Ed. Tecnos, Madrid.

Knop, K. (2004): *Diversity and Self-determination in International Law*, Ed. Cambridge University Press, Cambridge.

Lievano, I. (1966): Grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia, Ed. Tercer Mundo, Bogotá.

Lopez, S. (2012): Derecho Romano I. Ed. Red Tercer Milenio, Tlalneplantla.

Mariño, F. (2002): El Derecho Internacional en los albores del siglo XXI. Homenaje al profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa, Ed. Trotta, Madrid.

Martínez, E., Giménez, E., Armillas, J. y Maqueda, C. (2000): Introducción a la historia moderna, Ed. ITSMO, Madrid.

Martínez, J. (1998): “Historia del Derecho Indiano. Las Fuentes y las Instituciones políticoadministrativas”, Ed. Zigurat, Cáceres.

Marzal, M. y Negro, S. (2000): Un reino en la frontera: las misiones Jesuitas en la América Colonial., Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Matos, M. (1956): Perijá: Fundación e Historia, Ed. Tipografía Matheus, Caracas.

Montobbio, M. (2008): Salir del callejón del gato. La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza mundial, Ed. Icaria, Barcelona.

Morin, E. (1999): Los siete saberes necesarios a la educación del futuro, Ed. UNESCO, Paris.

Morin, E. (2001): *La méthode: L'humanité de l'humanité. L'identité humaine*, Ed. Du Seuil, París.

Nikken, P. (2007): La Garantía Internacional de los Derechos Humanos, Ed. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas.

Oliva, J. (2005): La cooperación internacional con los pueblos indígenas: desarrollo y derechos humanos, Ed. Cideal, Madrid.

Oliva, J. (2012): Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos. Fundamentos, contextos formativos y normas de Derecho Internacional, Ed. Universidad Carlos III de Madrid y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid.

Pastor, J. (2008): Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Ed. Tecnos, Madrid.

Paz, C., Valbuena, C., Leal, M. y Alarcón, J. (2007): Pueblos Indígenas, Territorios y Demarcación, 1ª ed., (Dirs.) Ed. CENDIC, Maracaibo.

Perera, M. (2000): Oro y hambre Guayana siglo XVI. Antropología Histórica y cronología cultural de un malentendido 1498-1597, Ed. Soc. Eclayre Rodríguez, Caracas.

Pérez, A. (1992): La polémica sobre el Nuevo Mundo. Los clásicos españoles de la Filosofía del Derecho, Ed. Trotta, Madrid.

Pino, E. (2009): Las ideas de los primeros venezolanos, Ed. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

Porras, B., Duque, A., Suárez, N. y Morales, R. (2006): El patrimonio eclesiástico venezolano. Pasado y futuro Tomo III, Ed. Publicaciones UCAB, Caracas.

Quivy, R. y Van Campenhoudt, L. (1995): *Manuel de Recherche en Sciences Sociales*, Ed. Dunod, Paris.

Raz, J. (1986): *The morality of freedom*, Ed. Clarendon Press, Oxford.

Remiro, A. (2007): Derecho Internacional, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.

Riquelme, R. (2005): Derecho Internacional. Entre un orden global y fragmentado, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid.

Reyes, A. (2009): Caciques aborígenes venezolanos, Ed. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

Rodríguez, E. (1971): Los Dominicos y las encomiendas de Indios de la Isla Española, Ed. Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo.

Rojas, A. (2005): Orígenes Venezolanos, Ed. Los libros de El Nacional, Caracas.

Roldan, J. (1994): Democracia y Derecho Internacional, Ed. Civitas, Madrid.

Rondón, J. y Sandía, A. (2007): La lección aprendida vigencia del Derecho. XL Aniversario de la Promoción “Pedro Pineda León”, Ed. Vicerrectorado Académico, Mérida.

Rouland, N. (1991): *Aux confins du droit*, Ed. Odile Jacob, Paris.

- Rousseau, C. (1966): Derecho Internacional Público, Ed. Ariel, Barcelona.
- Rovetta, F. (2009): El descubrimiento de los derechos humanos, Ed. IEPALA, Madrid.
- Ruiz, S. (1998): La teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos. Ed. CEP, Madrid
- Sarasa, E. y Serrano, E. (2010): Estudios sobre señorío y feudalismo. Homenaje a Julio Valderón, Ed. Institución Fernando el Católico, Zaragoza.
- Schmidt, B. y Schröder, I. (2001): *Antropology of violence and conflict*, Ed. Routledge, Londres.
- Segovia, Y. y Nates, B. (2011): Territorios, identidades y violencias, Ed. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida.
- Sierra, R. (2007): Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica, Ed. Thomson, Madrid.
- Suárez, L. (1981): Los Trastámara y la Unidad Española, 1369-1517. Vol. 5. Ediciones Rialp SA.
- Tilly, C. (2007): Violencia colectiva, Ed. Hacer, Barcelona.
- Toro, F. (2004): Derecho Internacional Público, Ed. Universidad Andrés Bello, Caracas.
- Torrecuadrada, S. (2001): Los pueblos indígenas en el orden internacional, Ed. Dykinson, Madrid.
- Torrecuadrada, S. (2010): Los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid.
- Ugalde, L. (2000): El tesoro de los indios, Ed. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

Velasco, S. (2003): El movimiento indígena y la autonomía en México, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.

Velázquez, E. (2006): Territorios fragmentados. Estado y comunidad indígena en el Istmo veracruzano. Ed. CIESAS. México D.F.

Verlinden, C. y Pérez-Embid, F. (2006): Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América, Ed. RIALP, Alcalá.

Villa, W. (2004): Violencia Política contra los Pueblos Indígenas en Colombia (1974-2004), Ed. IWGIA, Bogotá.

Wessendorft, K. (2011): El Mundo Indígena, Ed. IGWIA, Copenhague.

Yrigoyen, R. (1999): Pautas de coordinación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal, Ed., Fundación Mirna Mack, Ciudad de Guatemala.

Zucchi, A. y Vidal, S. (2000): Historia y Etnicidad en el Noroeste Amazónico, Ed. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida.

Artículos de revistas

Abdo, C.: “La Cuestión de la Jurisdicción en la Teoría Política de la Modernidad Temprana” en *Direito, Estado e Sociedade*, núm. 44, 2014, pág. 18.

Agredo, G.: “El Territorio y su significado para los Pueblos Indígenas” en *Revista Luna Azul*, núm. 23, 2006, págs. 28-32

Aguilar, V. y Bustillos, L.: “Caso Venezuela” en *El Derecho al Territorio y al Autogobierno Territorial de los Pueblos Indígenas de la Región Amazónica de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (RAMA)*, Ed. 1ª, 2012, págs. 138-169.

Aldunate, E. y Cordero, E.: “Historia del pensamiento jurídico” en *Revista de estudios histórico-jurídicos*, núm. 30, 2008, págs. 345-385.

Andrés, P.: “La libre determinación de los pueblos en la nueva sociedad internacional” en Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, Aranzadi, Pamplona, vol. I, 1998, pp. 113 y ss.

Añaños, M.: “La doctrina de los bienes comunes de Francisco de Vitoria como fundamentación del dominio en el Nuevo Mundo”, en Persona y Derecho, vol. 68, 2013, págs. 103-137

Bohórquez, C.: “Resguardos Indígenas y Derechos Humanos” en Nuestro Sur. Historia, Memoria y Patrimonio, núm. 2, 2011, pág. 11.

Brewer, A.: “América Latina: retos para la Constitución del siglo XXI” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2000, Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer, 2000, p. 14.

Burgos, J.: “Estudio Jurídico sobre Comunidades Indígenas” en Boletín de la Biblioteca de los Tribunales del Distrito Federal, núm. 16, 1966, pág. 7.

Bustamante, J.: “La Sociedad de la Información. Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica”, en Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, núm. 1, 2001.

Caballero, H.: “La demarcación de tierras indígenas en Venezuela” en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, núm. 3, 2007, págs. 189-208.

Cerrón-Palomino, R.: “Para qué sirve la lingüística histórica al hablante de una lengua oprimida” en Pueblos Indígenas y Educación, núm. 59, 2006, pág. 23.

Colmenares, R.: “El derecho consuetudinario indígena en Venezuela: Balances y perspectivas” en Revista IIDH, núm. 41, versión electrónica, págs. 83-118.

Desantes-Guanter, J.: “Los mensajes simples en el “ius communicationis” de Francisco de Vitoria” en Persona y Derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, núm. 20, 1989, págs. 191-209.

Elliot, J.: “Europa después de la Paz de Westfalia” en Revista Pedralbes, núm. 19, 1999, pág. 131.

Estepa, C.: “Poder y propiedad feudales en el período astur. Las mandaciones de los Flaínez en la Montaña leonesa”, en *Miscel·lània en Homenatge* al P. Agustí Altisent, 1991, págs.285-327.

Friede, J.: “De la encomienda indiana a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje” en *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, núm. 4, págs. 35-61.

García-Gallo, A.: “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias” en *Anuario de Historia del Derecho Español*, núm. 27-28, 1957-1958, págs. 461-830.

García, J.: “Los Pueblos Indígenas y la Constituyente” en *SIC*, núm. 619, 1999, pág. 392.

González, M.: “Del señorío del rey a la propiedad originaria de la nación” en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, núm. 5, 1993, págs. 129-150.

Izko, X.: “Etnopolítica y costumbre en los Andes bolivianos” en *Derecho, pueblos indígenas y reforma del Estado*, Abya Yala, 1993, págs. 183-206.

Keohane, R.: “*The Demand for International Regimes*” en *International Organization*, Vol. 36, núm. 2, Spring 1982, págs. 325-355.

Mandelli, H.: “Valor de las bulas papales como título justificativo del dominio de las Indias” en *Revista Jurídica Dominicana*, núm-44-45, 1953, págs. 145-154.

Martin, I.: “Territorios, poder feudal y comunidades en la Castilla septentrional (siglos XI-XIV)” en *Edad Media, Revista de Historia*, núm. 5, 2002, págs. 217-263.

Osuna, A.: “Ética y política en las Leyes de Indias del siglo XVI” en *Anuario de Filosofía del Derecho*, VIII, 1991, págs. 77-102.

Rangel, E.: “El mayorazgo de Sartenejas en la Venezuela colonial 1740-1858” en *Historia y Memoria*, núm. 6, 2013. pp. 17-39.

Remeseiro, A.: “Bula Inter-Caetera de Alejandro VI (1493) y las consecuencias político administrativas del descubrimiento de América por parte de Colón en 1492”.En: *Colección Galeatus. Archivo de la Frontera*, 2004.

- Remiro, A.: “Desvertebración del Derecho Internacional en la sociedad internacional globalizada” en Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional (CEBDI), vol. V, 2001, pp. 45-381
- Roca, C. (1993): “De las bulas alejandrinas al nuevo orden político americano” en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. 5, 1993, págs. 329-369.
- Rodríguez, M.: “La doctrina colonial de Francisco de Vitoria, legado permanente de la Escuela de Salamanca”, en Anuario de Filosofía del Derecho VIII, 1991, págs. 43-75.
- Rodríguez-Larralde, A.: “Frecuencia génica y porcentaje de mezcla en diferentes áreas geográficas de Venezuela, de acuerdo a los grupos Rh y ABO” en Interciencia, vol. 26, núm. 1, 2001, págs. 8-12.
- Roulet, F. y Navarro, P.: “La deshumanización por la palabra, el sometimiento por la ley. Paralelismos discursivos sobre la cuestión indígena en los Estados Unidos y el cono sur, siglos XVIII-XIX”, en Cuicuilco, núm. 34, 2005.
- Rovetta, F.: “Personalismo comunicativo y bien común”, en Polis, Revista Bolivariana, vol. 4, núm. 12, 2005.
- Ruggie, J.: “*Business and Human Rights: The Evolving International Agenda*” en *American Journal of International Law*, núm. 101-4, págs. 819-840.
- Sánchez, R.: “Las Leyes de Burgos de 1512 y la Doctrina Jurídica de la Conquista” en Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 28, 2012, pág. 13.
- Stavenhagen, R.: “Derecho consuetudinario indígena en América Latina” en Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 17, 1991, pág. 304.
- Talegón, C.: “Derecho natural y teoría de la propiedad en el medioevo” en Omnia Año 3, núm. 2, 1997, págs. 47-75.
- Uzcátegui, F.: “Análisis de la evolución de las políticas públicas en comunidades indígenas venezolanas”, en Revista Venezolana de Ciencia Política, núm. 30, 2007, págs. 121-142.

Zusman, P.: “¿Terra Australis-“Res Nullius”? El avance de la frontera colonial hispánica en la Patagonia (1778-1784)” en Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 45 (34), 1999.

Documentos y Resoluciones de las Naciones Unidas

Documento E/CN.4/Sub.2/1986/7

Documento E/CN.4/Sub.2/1987/7/Add.4

Documento E/CN.4/1998/53/Add.2

Documento E/CN.4/Sub.2/2001/21

Documento E/CN.4/2003/90

Documento E/CN.4/Sub.2/2004/30

Documento A/CONF.166/9

Documento A/52/18

Documento A/56/326

Documento A/58/323

Documento A/50/332

Documento A/51/512

Documento A/51/761

Documento A/HRC/12/34

Documento HRI/GEN/1/Rev.3

Documento HRI/GEN/1/Rev.7

Resolución 2200 A (XXI)

Resolución 41/128

Resolución A/RES/48/141

Resolución A/RES/2625 (XXV)

Resolución A/RES/50/6

Resolución A/RES/69/2

Documentos de la Organización de Estados Americanos

Documento OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1.

Documento OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1

Documento OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54.

Documento OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09.

Opinión Consultiva OC-10/89.

Resolución 12/85

Instrumentos Internacionales

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, Parte XIII del Tratado de Paz entre las Potencias Aliadas y las Potencias Asociadas, Versalles, 28 de junio de 1919.

Convenio 29 de la OIT relativo al Trabajo Forzoso y Obligatorio 1930.

Carta de Naciones Unidas 1945.

Declaración Universal de Derechos Humanos 1948.

Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 1957.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 1965.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966.

Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional 1966.

Convención Americana sobre Derechos Humanos 1969.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 1969.

Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales 1977.

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989.

Declaración de derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas 1992.

Vienna Declaration and Programme of Action 1993.

Diez Principios del Pacto Mundial 2000.

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 2001.

Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 2002.

Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos 2003.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007.

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa 2008.

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 2011.

Observaciones finales sobre los informes periódicos 19° a 21° de la República Bolivariana de Venezuela, aprobadas por el Comité en su 83° período de sesiones.

Sentencias

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.

Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, Serie C. No. 212.

Corte IDH. Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C Número 172.

Sentencia de la Corte Suprema de Chile en el caso de la Machi Francisca Linconao, 2009.

Sentencia con en el caso Awas Tingni vs. Nicaragua del 2001.

Normativa venezolana

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999.

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio 1983.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 2005.

Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas 2001.

Decreto número 3.273, Gaceta Oficial Núm. 5.305.

Decreto Presidencial Núm. 7.855, Gaceta Oficial Núm. 39.624.

Reforma Parcial al Decreto Presidencial 7.855.

Prensa

Diario de circulación nacional “El Universal” del primero de noviembre de 1999

Diario de circulación nacional “El Nacional” del 5 de abril del año 2000

Boletín No 78: Semana del 18 al 31 de agosto de 2001 de PROVEA

Diario de circulación nacional “El Nacional” del 13 de octubre del año 2008

Fuentes electrónicas

<http://www.abc.es/internacional/20130914/abci-tratado-tordesillas-201309132226.html>

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Los_indigenas_y_el_desplazamiento_forzoso_en_Colombia.pdf?view=1

<http://www.asambleanacional.gob.ve/comision/id/10#diputados>.

<http://www.avn.info.ve/print/14759>

<http://www.cidh.org/Indigenas/Cap.2g.htm>

<http://www.coica.org>

<http://www.conive.org/>

<http://www.comunidadandina.org>

<http://ddhhamazonas.blogspot.com/>

<http://www.defensapublica.gob.ve/>

<http://www.defensoria.gob.ve/dp>

<http://www.derechoromano.es/2012/02/concepto-de-ocupacion.html>

http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2001/2001_1.pdf

<http://www.elpueblosoberano.net/2011/01/informe-socio-antropologico-del-pueblo-yukpa-para-el-caso-de-sabino-alexander-olegario/>

<http://www.hispanidad.info/torde.htm>

<http://www.iciss.gc.ca/pdf/Rapport-de-la-Comision.pdf>

<http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf>

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=9

<http://www.minpi.gob.ve/minpi/es/quienes-somos/mision-y-vision>

<http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm>

<http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/2619/193.PDF>

<http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/Rusia-y-Venezuela-sellan-pacto-para-explotacion-de-la-Faja-Petrolifera-del-Orinoco/>

<http://www.survival.es>

<http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/cronologia-violenta-del-caso-sabino-romero.aspx>

http://www.unicef.org/lac/pueblos_indigenas.pdf

Otras fuentes

Aguilar, V. (2003): Entre resistencia y disidencia. La cuestión indígena como desafío de las relaciones internacionales actuales, tensiones y conflictos en Venezuela, Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Ginebra, Tesis Doctoral, Ginebra.

Aguilar, V.: Ponencia: La configuración de la cuestión indígena en el marco de la agenda global. Los pueblos indígenas y las relaciones internacionales de hoy, presentada en el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, Universidad de Los Andes, Mérida, 2004.

Anaya, J.: Conferencia del Relator Especial en el Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Getafe, 27 de junio de 2013.

Auat, A. (2005): Soberanía y comunicación. El poder en el pensamiento de Francisco de Vitoria, Universidad Católica de Santa Fé, Tesis Doctoral, Santa Fé.

Cabedo, V.: Conferencia en el Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Getafe, 29 de mayo de 2013.

Clavero, B.: Conferencia en el Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Sevilla, 14 de junio de 2013.

Cunningham, M.: Conferencia en el Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Getafe, 20 de junio de 2013.

Harguindeguy, J. (2010): Un largo camino hacia el reconocimiento de derechos indígenas. Tesis elaborada en el Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas, *Universitat Pompeu Fabra*. Barcelona.

Jesús, M.: Ponencia en el Congreso Internacional. Los pueblos indígenas en el retorno del Estado ¿una mayor autonomía o un protagonismo mejor?, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, 10 de mayo de 2013.

Little, P.: Ponencia en una Reunión de la Red Jurídica Amazónica, RAMA, La Paz, 28 de noviembre de 2012.

Oliva, J.: Conferencia en la Universidad Carlos III de Madrid en el contexto del Curso Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, UC3M, Getafe, mayo de 2013.

Pérez-Prat, L.: Clase dictada en el Programa de DEA y Doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, diciembre de 2007.

Rivero, J.: Ponencia en el Simposio Internacional por la Demarcación de Territorios Indígenas y su relación con la adopción del Convenio 169 de la OIT. Experiencias Internacionales, Estrategias Nacionales y mecanismos para su puesta en práctica, diciembre 2013.